

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PROGRAMA DE POSGRADO:

HISTORIA DE AMÉRICA LATINA. MUNDOS INDÍGENAS



ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA:

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ECLESIAÍSTICOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DURANTE LA PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL 1824-1835

TESIS DE DOCTORADO

Presentada por
NELY NOEMÍ GARCÍA CORONA

Directora:
DRA. IVANA FRASQUET MIGUEL

Tutor:
DR. FRANCISCO ANTONIO RUBIO DURÁN

Sevilla, España, 2017

ABREVIATURAS

Archivo General de la Nación de México	AGNM
Archivo General e Histórico de Notarias	AGHNM
Archivo Histórico Casa de Morelos	AHCM
Archivo Histórico del Cabildo Catedral de Morelia	AHCCM
Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	AHCEMO
Archivo Histórico de Poder Judicial del Estado de Michoacán	AHPJEM

ÍNDICE

	Pág.
AGRADECIMIENTOS	5
INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO I	
LOS ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE LA PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL, DE 1808 A 1824	
1.1 1808-1814. Entre la península y la Nueva España	11
1.2 El camino de la Insurgencia 1810-1820	26
1.3 Entre el olvido y el resurgimiento. Dos movimientos hacia un mismo camino, 1820-1824	36
1.4 Los eclesiásticos en los órganos de representación	50
CAPÍTULO II	
ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1824-1835	
2.1 Las reglas del juego. Las convocatorias para los congresos michoacanos de 1824 a 1834	67
2.2 La Constitución de Michoacán de 1825 y la división de poderes	89
2.2.1 El poder legislativo	93
2.2.2 El poder ejecutivo	103
2.2.3 El poder judicial	112
2.3 La reglamentación del legislativo michoacano	116
CAPÍTULO III	
LOS ECLESIÁSTICOS EN EL LEGISLATIVO MICHOACANO, 1824-1835	
3.1 La presencia de los eclesiásticos en el Congreso de 1824 a 1835.	134
3.2 Semblanzas biográficas de los diputados eclesiásticos	144
CAPÍTULO IV	
EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE MICHOACANO 1824-1825	

4.1 El papel de los eclesiásticos: José María Rayón, Juan José Pastor Morales y Manuel de la Torre Lloreda como legisladores	174
4.2 El proyecto constitucional	183
4.3 Privatizando lo común: el debate de los bienes comunales	193
4.4 ¿Qué hacer con la religión en la Constitución?	196
4.5 Legitimar festejando: poder civil <i>versus</i> cabildo eclesiástico	202
4.6 El precio de la soberanía: Patronato y rentas decimales	208

CAPÍTULO V

LA ESTABILIDAD DEL PODER LEGISLATIVO DE MICHOACÁN. LA PRIMERA Y SEGUNDA LEGISLATURA, 1825-1829

5.1 La primera legislatura 1825-1827	
5.1.1 Ignacio Ocampo y Pablo José Peguero diputados del primer Congreso, 1825-1827 y su contexto	219
5.1.2 Lo popular entre la costumbre y el derecho: toros y Regatones	223
5.1.3 Del dominio a la propiedad privada. Los bienes de comunidad... una vez más.	229
5.1.4 La causa contra el gobernador Antonio de Castro	240
5.1.5 La exclusiva, anualidades eclesiásticas y contaduría de diezmos	250
5.2 Segunda legislatura 1827-1829	
5.2.1 Pablo José Peguero, Ignacio Villavicencio y Juan Nepomuceno Sierra en el segundo Congreso de Michoacán	262
5.2.2 La estabilidad se quiebra: conflictos, expulsiones y acusaciones de traición.	265
5.2.3 ¿Asuntos eclesiásticos o económicos? La exclusiva, el Tribunal de Haceduría, anualidades eclesiásticas y los diezmos.	280

CAPÍTULO VI

LA INESTABILIDAD DEL PODER LEGISLATIVO EN MICHOACÁN. EL TERCER CONGRESO, UN BIENIO: DOS LEGISLATURAS, 1829-1831

6.1 La tercera legislatura en su primer año de sesiones, 1829-1830	
6.1.1 Felipe Carvajal, Luciano Farías, Martín García de Carrasquedo, Joaquín Ladrón de Guevara y Tomás Arriaga en la tercera legislatura	294
6.1.2 La propuesta de reforma constitucional y la crisis política en Michoacán	302

6.2 La tercera legislatura en su segundo año de sesiones, 1830-1831	
6.2.1 Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Lorenzo Auriolés, Manuel Tiburcio Orozco y José María Cavadas en la tercera legislatura	311
6.2.2 Las reformas constitucionales	
6.2.2.1 <i>La Constitución de 1824.</i>	318
6.2.2.2 <i>La Constitución de Michoacán de 1825.</i>	327
6.2.3 Educación	334
6.2.4 Juramento de Cayetano Gómez de Portugal	340

CAPÍTULO VII

LA CUARTA LEGISLATURA DE MICHOACÁN, 1831-1833

7.1 Mariano Rivas, Pablo José Peguero, Lorenzo Auriolés y Manuel de Leyva en el cuarto Congreso	344
7.2 Los debates sobre la reforma a la Constitución de Michoacán de 1825	349
7.3 Los asuntos eclesiásticos: La canonjía lectoral, el deanato de Martín Gil y Garcés y la reapertura del Colegio de San Nicolás	371

CAPÍTULO VIII

HACIA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE GOBIERNO: LA QUINTA Y SEXTA LEGISLATURA MICHOACANA

8.1 Joaquín Ladrón de Guevara en el quinto Congreso de Michoacán	
8.1.1 Michoacán y la defensa del sistema federal	285
8.1.2 El fin de una discordia: el diezmo de conciencia	397
8.1.3 Provisión de curatos vacantes, fuero y religión	404
8.2 El Sexto Congreso de Michoacán. José Antonio de la Peña y Rafael Guedea en el proceso de variación del sistema de gobierno, 1835	411

CONCLUSIONES	437
---------------------	-----

FUENTES DE INFORMACIÓN	441
-------------------------------	-----

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS	443
-------------------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	444
-----------------------------	-----

ANEXOS	461
---------------	-----

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es producto de múltiples esfuerzos:

En primer lugar, agradezco al Director del Programa Dr. Juan Marchena por todo el apoyo brindado durante este proceso, continuo con el Dr. Manuel Chust Calero que creyó en “nosotros” aún sin conocernos; a la Dra. Teresa Cortés Zavala y al Dr. José Alfredo Uribe Salas por “ayudarnos” a construir puentes. Externo mi gratitud al Dr. Justo Cuño por todas las atenciones brindadas, a mi querido Dr. Francisco Antonio Rubio Durán, no sólo profesor y gran ser humano, también tutor de esta tesis, gracias por todo el respaldo y la disponibilidad.

Profundamente agradecida con el Dr. José Antonio Serrano Ortega por emplearme y con ello poder financiar parte de esta investigación haciendo más llevadera la situación. En este apartado también es preciso reconocer el respaldo brindado por el Dr. Moisés Guzmán Pérez.

Agradezco al Dr. Jaime Hernández Díaz por su tiempo, su orientación, su paciencia y su vasta biblioteca. La más profunda de las gratitudes al Dr. Carlos Juárez por estar siempre pendiente y escucharme. Agradecida con Elda Beiza Granados, Marcela Vilchis, Guillermo López Contreras, Ana Torres López, María José Martínez Semanate y Rosalba Ríos Galindo.

Eternamente agradecida con la señora María Guadalupe Corona Guzmán por todo el apoyo que me dio para que yo pudiera cumplir mi sueño más anhelado. Alicia Hortensia García Corona gracias por ser un sustento cuando los tiempos eran muy difíciles y a Vicci, fiel compañera; a Trufa, quien llegó durante el proceso. Edgar Zuno Rodiles gracias por el camino recorrido, por las enseñanzas y la paciencia. Por último, externo mi más profunda gratitud y respeto a un extraordinario ser humano y gran historiadora: Dra. Ivana Frasquet, directora de este trabajo, eternamente agradecida por todo su apoyo, comprensión y esfuerzo.

INTRODUCCIÓN

Las abdicaciones de Bayona inauguraron un proceso: la creación de una nueva cultura política que impactó de diversas formas en los territorios iberoamericanos, cargada de prácticas y discursos que transformaron los mecanismos de ascenso y ejercicio del poder en todas las latitudes del imperio español. Entonces, la soberanía, la nación, el pueblo, la representación política, la vecindad, la ciudadanía, el autonomismo, el federalismo, la monarquía constitucional y la independencia se convirtieron en los principales debates de esa revolución política, que llevó a la sustitución paulatina del Antiguo Régimen y sus prácticas. Resultado de ese proceso revolucionario fue la Constitución de Cádiz y sus preceptos que materializaban esa nueva cultura política, la que impactó en la península, pero principalmente en sus territorios americanos entre los que se incluía la Nueva España.

El diputado, en calidad de legislador, aparece con los decretos de la Regencia a principios de 1810, en los que se convocaba a elecciones de representantes para las Cortes, varios de los electos fueron eclesiásticos. Más tarde, la Constitución de Cádiz respaldó esta práctica. Ello significó un importante empuje, que permitiría a estos hombres una amplia participación en los procesos electorales en sus tres niveles de elección hasta su incorporación a los cuerpos legislativos, como lo fueron las propias Cortes de Cádiz y las de Madrid.

Cuando la Nueva España logra su independencia, definir y consolidar un sistema de gobierno será la prioridad, ya fuera una monarquía, un imperio o una república federal. Estas formas de organización tendrían como base una Constitución y con ello se hacía imprescindible la elección de un Congreso para que la redactara. Desde 1822 México tuvo su primer Congreso al que se integraron varios eclesiásticos, pero cuando se adopta la República federal a finales de 1823 y se emite *El Acta Constitutiva de la Federación* en enero de 1824, Michoacán surge formalmente como estado y tendrá que articular su propio Congreso.

Durante la primera República Federal, de 1824 a 1835, el estado de Michoacán tuvo una legislatura constituyente y seis ordinarias, de las cuales la tercera que comprende 1829 a 1831 albergó dos elecciones. En ese periodo fueron electos diputados los eclesiásticos: Juan José Pastor Morales, José María Rayón, Manuel de la Torre Llorera, Ignacio Ocampo, Pablo José Peguero,

Ignacio Villavicencio, Juan Nepomuceno Sierra, Luciano Farías, Joaquín Ladrón de Guevara, Martín García de Carrasquedo, Felipe Carvajal, Tomas Arriaga, Luis Soria, Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Lorenzo Aurioles, José Ma. Cavadas, Manuel Tiburcio Orozco, Antonio de la Peña, Rafael Guedea y Manuel de Leyva. Algunos de ellos fueron electos en más de una ocasión, por ejemplo, Pablo José Peguero ocupó un escaño en tres ocasiones, Joaquín Ladrón de Guevara en dos, al igual que Mariano Rivas, Lorenzo Aurioles y Manuel de Leyva. Aunque es de señalar que no todos asumieron el cargo como ocurrió con Manuel Tiburcio Orozco, Luis Soria y Manuel de Leyva.

Se debe tener presente que, aunque estos eclesiásticos eran miembros de una misma institución, tenían condiciones de vida, formación y experiencias diferentes que iban desde la situación familiar, las condiciones de ordenación y el éxito fincado dentro de la propia Iglesia, lo que en ocasiones se verá reflejado en sus intervenciones. Es preciso señalar que se omite el balance historiográfico en estas líneas porque será presentado junto con el contexto de la época en el primer capítulo. Dicho esto, es necesario dar a conocer los ejes nodales que guiaron este trabajo.

La presente investigación pretende analizar la participación de los diputados eclesiásticos a través los debates y posturas políticas que asumieron al interior del Congreso del estado de Michoacán de 1824 a 1835 y con ello determinar su participación en la creación y sustento del andamiaje federal. De igual manera, se intenta caracterizar a este grupo de diputados, quienes están actuando legislativamente, al tiempo que se va construyendo un nuevo escenario político frente a la Iglesia.

Para lograr lo anterior será necesario:

- a) Conocer la formación y trayectoria de estos eclesiásticos dentro y fuera de la Iglesia.
- b) Identificar los procedimientos que permiten que los eclesiásticos sean electos diputados al Congreso del estado de Michoacán.
- c) Reflexionar sobre la actuación de los diputados eclesiásticos en el Congreso del estado de Michoacán a través del análisis de los debates, para determinar su participación en la creación y sustento del andamiaje federal.

- d) Analizar la opinión y acciones emitidas por estos diputados ante la construcción de un nuevo escenario ante la Iglesia.

A su vez, la presente investigación sostiene como hipótesis que la Iglesia no era una institución monolítica ni homogénea, por tanto, los posicionamientos y las argumentaciones de sus miembros no eran iguales, esa diferencia traspasó las fronteras de la Iglesia y se reflejó en diferentes espacios de la sociedad. Bajo esa premisa la actuación de los eclesiásticos no será compacta, unánime y consensuada al interior del Congreso de Michoacán, su actitud y visión de los asuntos serán diversas a partir de sus intereses personales y los vinculados a su profesión, por lo que no siempre actuarán en grupo ni a favor de su corporación.

Para dar respuesta a las inquietudes que presenta la investigación se realizó la búsqueda de información en fuentes bibliográficas, hemerográficas y de archivo. En el caso de las primeras se consultaron bibliotecas del Colegio de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de esta última destaca la de la Facultad de Historia y la del Instituto de Investigaciones Históricas. Asimismo, en la Hemeroteca Pública Universitaria “Mariano de Jesús Torres” se consultaron los periódicos históricos del *Astro Moreliano* y *El Michoacano Libre*.

En cuanto a las fuentes primarias, lo primero que se hizo fue revisar el Archivo Casa de Morelos, los ramos de Ordenaciones y Oposiciones de 1806 a 1832 con el objetivo de encontrar datos biográficos y de actividad pastoral de los eclesiásticos. Esta información se complementó con la consulta de los Protocolos de Escribanos de 1824 a 1840 que alberga el Archivo General e Histórico de Notarías de Morelia. Posterior a ello fue necesario hacer la consulta de las actas públicas y secretas del Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán de 1824 a 1835. Es necesario apuntar que las actas públicas de agosto a diciembre de 1825 se encuentran incompletas, revueltas y en borrador, también existen algunos vacíos de diciembre de 1829 a septiembre de 1830, de abril a junio de 1833 y de diciembre de 1823 a febrero de 1834. Por su parte, las actas secretas están incompletas y en borrador. En este archivo también se consultó el ramo de “Varios” que complementa los debates. Otro acervo

complementario en lo tocante a la información sobre los eclesiásticos y los diezmos fue el Archivo del Cabildo Catedral de Morelia.

La presente investigación se enmarca dentro del estudio de la historia política, partiendo de la articulación y del funcionamiento de un nuevo sistema de gobierno legitimado por las prácticas de una nueva cultura política. En ese escenario se desarrolla un proceso de transición del Antiguo Régimen hacia una nueva forma de organización política, institucional y de concepción, obtención y ejercicio del poder. Dentro de la nueva realidad jurídica mexicana se deberán construir nuevos escenarios desde el poder civil frente a la Iglesia en la que algunos eclesiásticos participarán activamente, en este caso desde el interior del legislativo michoacano frente a jerarquía eclesiástica del Obispado de Michoacán.

Es de señalar, como una aclaración para el lector, que dentro del texto se hace alusión a Estado (en mayúsculas) como una comunidad política con un determinado sistema de gobierno y estado (en minúsculas) para referirse al territorio michoacano.

Como resultado del análisis de las fuentes tanto primarias como secundarias, el trabajo *Entre el cielo y la tierra: la participación de los eclesiásticos en el Congreso del estado de Michoacán durante la Primera República Federal. 1824-1835*, quedó articulado en 8 capítulos. En el primero titulado *Los antecedentes de la creación de la primera República federal de 1808 a 1824* trata de las transformaciones políticas del periodo visibilizando la participación de los eclesiásticos en las nuevas instituciones políticas, al tiempo que se integra la producción historiográfica más significativa para el periodo.

El capítulo segundo lleva por nombre *Estructura y funcionamiento del gobierno del estado de Michoacán, 1824-1835*, en él se aborda el nacimiento del estado de Michoacán y la organización de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a partir de lo que estableció la Constitución de 1825 y su articulación en la práctica, poniendo especial énfasis en el michoacano.

El capítulo tercero llamado *Los eclesiásticos en el legislativo de Michoacán, 1824-1835* aborda la presencia de estos hombres en la asamblea legislativa y presenta breves semblanzas biográficas. A su vez, el capítulo IV intitulado *El primer Congreso Constituyente michoacano, 1824-1825* analiza el trabajo de los eclesiásticos José María Rayón, Juan José Pastor Morales y

Manuel de la Torre Lloreda en medio del proceso de redacción de la primera Constitución del estado.

El quinto capítulo bajo el nombre de *La estabilidad del poder legislativo de Michoacán. La primera y segunda legislatura, 1825-1829* recoge las participaciones de Ignacio Ocampo, Pablo José Peguero, Ignacio Villavicencio y Juan Nepomuceno Sierra. El sexto capítulo con el título *La inestabilidad del poder legislativo en Michoacán. El tercer Congreso, un bienio: dos legislaturas, 1829-1831* revisa la labor legislativa de Felipe Carbajal, Luciano Farías, el prebendado Martín García de Carrasquedo, Joaquín Ladrón de Guevara, Tomás Arriaga, Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Lorenzo Auriolés y José María Cavadas.

El séptimo capítulo denominado *El cuarto Congreso de Michoacán 1831-1833* aborda la labor legislativa de los eclesiásticos Mariano Rivas, Pablo José Peguero, Lorenzo Auriolés y Manuel de Leyva. Mientras que el último capítulo *Hacia el cambio del sistema de gobierno: el quinto y sexto Congreso michoacano, 1833-1835* recoge las participaciones de Ladrón de Guevara, José Antonio de la Peña y Rafael Guedea. Con dicha sistematización se pretende presentar un panorama general no solo de la participación de los eclesiásticos en la asamblea michoacana sino de dibujar la historia del legislativo michoacano de 1824 a 1835.

CAPÍTULO I

LOS ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL, DE 1808 A 1824

1.1. 1808-1814. Entre la península y la Nueva España

Las propuestas historiográficas más relevantes de los últimos años para el periodo de estudio de 1808 a 1824 comienzan con lo planteado por François-Xavier Guerra en la compilación de ensayos titulados *Modernidad e independencias*, porque se preocupó por mostrar la política de la corona de España con sus territorios de ultramar en el proceso de la irrupción de la modernidad en una monarquía del antiguo régimen vinculando los sucesos al papel que jugaron las nuevas formas de sociabilidad que pasaron de lo privado a la escena pública a través de la opinión pública.¹

Otras interpretaciones suelen ser por lo general divergentes en varios aspectos y confluir en otros, esto es lo que ocurre entre lo que establece Jaime Rodríguez por un lado y por el otro Manuel Chust e Ivana Frasquet. El primero de ellos, enmarca el proceso de independencia de México como consecuencia de una revolución política que llevó al territorio a transitar del antiguo régimen a la creación de un Estado nacional moderno y liberal, en el cual las transformaciones de las ideas, las estructuras y las prácticas políticas sucedieron con gran rapidez no así, la naturaleza de las relaciones sociales, económicas e institucionales. El punto de partida es 1808, cuando los territorios americanos de la monarquía española, entre ellos la Nueva España, se asimilaron y reclamaron derechos en calidad de reinos. Es una propuesta historiográfica que aborda tanto

¹ François-Xavier GUERRA, *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, México, Editorial Mapfre, Fondo de Cultura Económica, 1992. A este trabajo que fue un parte aguas en el trabajo de Guerra le siguieron otros textos como "Identidad y soberanía: una relación compleja" en François-Xavier GUERRA (Dir.), *Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, Editorial Complutense, 1995. "El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina" en Hilda SÁBATO (Coord.), *Ciudadanía Política y formación de las naciones: Perspectivas históricas de América Latina*, México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1999. "Las mutaciones de la identidad en la América Hispánica", en Antonio ANNINO, François Xavier GUERRA (Coords.), *Inventado la nación, Iberoamérica siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. "El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina" en Hilda SÁBATO (Coord.), *Ciudadanía Política y formación de las naciones: Perspectivas históricas de América Latina*, México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1999.

el proceso gaditano e insurgente novohispano, las Cortes de Madrid y el Plan de Iguala y no para en la independencia de México, sino que continúa con las primeras formas de organización política hasta la creación de la primera República federal.²

Por su parte, Manuel Chust e Ivana Frasset trazan una línea desde 1808 hasta 1824 en el que se remarca el status de colonia que tenían los territorios americanos y por tanto la Nueva España a la hora de enfrentar la crisis política de las abdicaciones de Bayona, las transformaciones y repercusiones que la revolución política trajo a la sociedad española y americana a través de la constitución de Cádiz. En esta propuesta los principales puntos de análisis son el tránsito de la soberanía del rey a la soberanía nacional, la representación, el federalismo y la autonomía, explicando la relación entre lo acaecido en las Cortes de Madrid y la declaración de independencia de México, para finalmente concentrarse en los dilemas de la búsqueda de un gobierno para nación mexicana.³

Desde la historia del derecho, Antonio Annino por su parte señala el carácter de colonia de la Nueva España previo a la crisis política de 1808 en la

² La propuesta de Jaime RODRÍGUEZ cuya vasta producción historiográfica abarca no sólo el proceso novohispano sino incluso todo el proceso hispano se aglutina en dos obras de reciente edición, para el primer caso, y que es la que más interesa se encuentra en *Nosotros somos ahora los verdaderos españoles: la transición de la Nueva España de un reino de la Monarquía Española a la República Federal Mexicana, 1808-1824*, Tomo I y II, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, 2012. Y para el segundo, *“Lo político” en el mundo hispánico*, Tomo I y II, México, El Colegio de Michoacán-Universidad de California-Irvine, 2015.

³ Manuel CHUST, *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED/UNAM 1999; “Federalismo *Avant la Lettre* en las Cortes Hispanas, 1810-1821”, en Josefina Zoraida VÁZQUEZ (Coord.), *El establecimiento del Federalismo en México (1821-18127)*, México, El Colegio de México, 2003. Manuel CHUST, Ivana FRASQUET, “Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810-1824”, en Manuel CHUST (Coord.), *Doceañismos, Constituciones e Independencias. La Constitución de 1812 y América*, Madrid, España, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2006. Manuel CHUST, “Un bienio trascendental: 1808-1810”, en Manuel CHUST (Coord.), *1808 La eclosión juntera en el mundo hispano*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas serie Estudios, 2008. Ivana FRASQUET, “‘Ciudadanos: ya tenéis Cortes.’ La convocatoria de 1820 y la representación americana”, en Jaime E. RODRÍGUEZ O., (Coord.), *Las nuevas naciones España y México 1800-1850*, Madrid, España, Fundación Mapfre-Instituto de Cultura, 2008. Ivana FRASQUET, “La Construcción de la Representación: Los Diputados Suplentes Americanos en las Cortes de Cádiz”, en Carmen CORONA, Ivana FRASQUET y Carmen María FERNÁNDEZ, (editoras), *Legitimidad, soberanías, representación: independencias y naciones en Iberoamérica*, Castellón, Universidad Jaume I, 2009. Manuel CHUST, Ivana FRASQUET, “Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810-1824”, en Mariana TERÁN FUENTES, Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ, *Federalismo, Ciudadanía y representación en Zacatecas*, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010.

que se desarrolló un Estado Mixto a partir de amplias soberanías territoriales y corporativas con una soberanía repartida entre la corona y los cuerpos intermedios como los ayuntamientos y corporaciones, lo que influyó para la cimentación de la idea del contractualismo hispánico. Por tanto, el autor ve en la constitución de las juntas en América el reconocimiento de que el imperio español no tenía una sola soberanía, todo lo anterior lo vincula a la identificación de *política* y *justicia*, en el que jugaron un papel muy importante los ayuntamientos que emanaron del texto constitucional de 1812.⁴

Hasta aquí la interpretación del proceso de independencia novohispano desde miradas no mexicanas. Dentro los académicos nacionales destacan las obras de Virginia Guedea buena parte de su producción se circunscribe de 1808 a 1814 partiendo de la reacción que generaron en la ciudad de México las noticias de las abdicaciones de Bayona para poder contextualizar el origen de la insurgencia novohispana y los apoyos con que ésta contó secretamente. Asimismo, aborda el tema electoral en la ciudad de México como parte del entramado gaditano.⁵ Otro autor que se ha concentrado en el periodo en los últimos años es Roberto Breña que ha planteado el tema gaditano y su impacto en la América española.⁶ Por su parte, Alfredo Ávila toma el camino de la

⁴ Antonio ANNINO, "Soberanías en lucha" en Antonio ANNINO, François Xavier GUERRA (Coords.), *Inventando la Nación. Iberoamérica. Siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003., "Pueblos, Liberalismo y nación en México", en *Inventando la nación, Iberoamérica siglo XIX*, Antonio ANNINO, François Xavier Guerra (Coords.), México, Fondo de Cultura Económica, 2003. "México: ¿soberanía de los pueblos o de la nación?", en Manuel SUAREZ CORTINA, Tomás PÉREZ VEJO, *Los caminos de la ciudadanía México y España en perspectiva comparada*, Madrid, Biblioteca Nueva, PUBLICAN-Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2010. "Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema", en *Ciudadanía Política y formación de naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, Sabato, Hilda (Coord.), México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Además, se debe señalar la obra coordinada cuyo eje central es la modernidad alcanzada dentro del periodo de 1808 a 1821 desde la óptica jurídica *La revolución novohispana, 1808-1821*, México, CIDE, Fondo de Cultura Económica, CONACULTA, INEHRM, Fundación cultural de la ciudad de México, 2010.

⁵ Sin la intención de agotar toda su producción algunos textos que son de consulta obligada Virginia GUEDEA, *En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupe*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 1992. A su vez destaca la obra coordinada de *La independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2001. "La Nueva España", en Manuel CHUST (Coord.), *1808 La eclosión juntera en el mundo hispano*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas serie Estudios, 2008.

⁶ Roberto BREÑA, *El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824: una revisión historiográfica del liberalismo hispánico*, México, El Colegio de México, 2006. Un texto en el que es editor, *En el umbral de las revoluciones hispánicas: el bienio 1808-1810*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. También destaca *El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española*, Madrid, El Colegio de México-Marcial Pons, 2012. Finalmente, *Cádiz a debate*:

transformación de la cultura política entendida como conjunto de prácticas y creencias que afectan las relaciones de poder de una sociedad para centrarse en la soberanía nacional y sus representantes en una obra que abarca de 1808 a 1824.⁷

No son todos los autores, no son todas las obras pero si las necesarias para ceñir el contexto de este trabajo partiendo de lo que establece Manuel Chust, quien dice que 1808 y sus consecuencias no se pueden explicar solamente con la conspiración de El Escorial, el motín de Aranjuez y los secuestros de Bayona, se hace preciso partir de 1799, con el golpe de estado que encabezó Napoleón contra el Directorio, lo que condujo a la reordenación territorial, modificando las relaciones internacionales, en las que Carlos IV reafirmó su alianza con Francia con el objeto de acabar con el poderío británico amenazante de sus posesiones americanas al tiempo que intentaba frenar las pretensiones napoleónicas sobre esos mismos territorios.

Bajo este contexto, la corona española se enfrascó en una serie de guerras contra Gran Bretaña y Portugal que la dejaron sin armada, sin caudales y a la larga, a través del tratado Fontainebleau, a la vera de Francia. La entrada de un importante número de soldados franceses a la península, la conspiración de El Escorial fraguada por Fernando para arrebatarse la corona a su padre Carlos IV y el motín de Aranjuez aportaban todos los elementos para las abdicaciones de Bayona.⁸

El 5 de mayo de 1808, Fernando VII emitió dos decretos en los que otorgaba a la Junta de Gobierno facultades para declarar la guerra a Francia e instruía al Consejo Real, la Chancillería o a las Audiencias para que convocaran a Cortes, el objetivo: reunir fondos para hacer frente al invasor que pasó de aliado a traidor, al mismo tiempo que el enemigo inglés se convertía en el necesario aliado.⁹

Todos estos acontecimientos suscitaron incertidumbre en la población de la península, que para hacer frente a la ausencia del rey, detentor de la

actualidad, contexto y debate, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2014.

⁷ Alfredo ÁVILA, *En nombre de la nación: la formación del gobierno representativo en México. 1808-1824*, México, CIDE-Taurus, 2002.

⁸ Manuel CHUST, "Un bienio trascendental", 11-21.

⁹ Manuel CHUST, *La cuestión nacional*, p. 22.

soberanía, implementaron la creación de juntas. El movimiento juntero se extendió rápidamente por el territorio peninsular e insular entre mayo y junio de 1808. El resultado fue la integración de Juntas de gobierno en Oviedo, Sevilla, Granada, Jaén, Badajoz, Zaragoza, Gerona, Mallorca, Valencia, Alicante, entre otras, quienes proclamaron rey a Fernando VII. Las juntas articularon la defensa del territorio, con ello sobrevino la propuesta de la junta de Murcia para efectuar la creación de una Junta Central. La iniciativa pronto cobró adeptos, entre ellos la junta de Valencia que agregó el convocar una representación nacional, en la que era necesaria la unión, pero renunciando a una parte de la soberanía asumida en cada provincia para conformar un único cuerpo legítimo y soberano que tomaría las decisiones en nombre de Fernando VII.¹⁰

Estas juntas, de acuerdo con la doctrina pactista, eran las depositarias de la soberanía, al hacerlo se convirtieron en “poderes revolucionarios” por la potestad que habían recibido del pueblo justificando sus acciones en nombre del rey Fernando VII e invalidando las abdicaciones de Bayona. Su objetivo: organizar la defensa del territorio y conservar la independencia de la nación.¹¹

Las juntas albergaron diferencias entre sí, en principio de cuentas, el número de vocales y su funcionamiento se supeditó al reglamento que cada una de ellas expidió para mediar su desempeño. Asimismo, la profesión e ideología de los miembros fue muy variada, pues al ser órganos que asumían la soberanía, éstas se convirtieron en atractivos espacios de poder por lo que fue común que figuraran entre sus miembros: autoridades provinciales, regidores, militares, servidores públicos, obispos, canónigos, eclesiásticos, nobles, burgueses y hasta oportunistas.¹²

Mientras esto ocurría en la península entre julio y septiembre llegaron a territorios americanos las nuevas noticias. En el caso concreto de la Nueva España, el 16 de julio de 1808 las autoridades declararon nulas las abdicaciones de Bayona, advirtiendo que el territorio debía mantenerse alerta ante los acontecimientos de la península.¹³ No obstante, el Ayuntamiento de la ciudad de

¹⁰ Ivana FRASQUET, “La Construcción de la Representación”, p. 100.

¹¹ Antonio MOLINER PRADA, “El Movimiento juntero en la España de 1808”, en Manuel CHUST (Coord.), *1808 La eclosión juntera en el mundo hispano*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas serie Estudios, 2008, pp. 59-60.

¹² *Ibíd.*, p. 61.

¹³ Visto el momento desde una visión del derecho, José HERRERA PEÑA, *Soberanía Representación Nacional e independencia en 1808*, México, Centro de Investigaciones Jurídicas,

México optó por articular un plan autonomista en el que hacía partícipe al virrey José de Iturrigaray. Este órgano de gobierno haciendo uso de la legalidad manifestó su deseo de mantener las prerrogativas de Fernando VII al declarar nulas las abdicaciones, argumentando que “los reyes no tenían derecho de enajenar la Nueva España”; para el Ayuntamiento la soberanía se encontraba representada en todo el reino y en concreto en los Tribunales superiores y cuerpos que llevaban la voz pública, quienes debían preservarla para devolverla posteriormente al monarca. El punto era que el Ayuntamiento se consideraba representante del reino, por lo que éste dejó al virrey en calidad de encargado provisional solicitando su juramento, lo mismo que a las autoridades y cuerpos de la ciudad de México. Lo anterior discrepaba con el posicionamiento de inicio.¹⁴

Pero las cosas no pararon ahí, sobre todo al tener las noticias del movimiento juntero en la península, por la llegada del representante de la Junta de Sevilla y una carta de la de Asturias, todo ello detonó un ambiente de agitado cabildeo entre las principales autoridades de la ciudad de México: la Real Audiencia, el Virrey y el Ayuntamiento, lo que permitió que este último volviera al ataque, argumentando que la Nueva España era un reino incorporado por conquista a la corona de Castilla, semejante en todo a los peninsulares y por tanto con derecho de establecer una junta a cargo de su gobierno. El planteamiento condujo a la deposición del virrey Iturrigaray, quien apoyaba la propuesta y que fue sustituido por Pedro Garibay, asimismo se ordenó el encarcelamiento para varios miembros del Ayuntamiento entre ellos a Primo de Verdad y Azcárate, esto último liderado por el Real Audiencia.¹⁵

Mientras tanto en la península, atendiendo a las demandas de algunas juntas, éstas deciden unificarse a través de la Junta Central el 25 de septiembre de 1808 con ello aunarían esfuerzos para ganar la guerra y organizarían un poder que fuera referente de legitimidad y soberanía para las colonias americanas.¹⁶ El hecho planteaba la total incapacidad de encabezar el movimiento juntero por parte de las instituciones monárquicas como la Junta de Gobierno convocada por Fernando VII o el Consejo de Castilla, las Audiencias y

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009.

¹⁴ Virginia GUEDEA, “La Nueva España”, pp. 85-87.

¹⁵ *Ibíd.*, pp. 96-100.

¹⁶ Manuel CHUST, *La cuestión nacional*, p. 31.

los Tribunales que al no actuar con firmeza no fueron vistas como las autoridades en donde residía el poder y por ello lo primero que hicieron las juntas provinciales fue asumir la soberanía en nombre de Fernando VII. En esa situación, lo normal hubiese sido el nombramiento de una regencia para asumir los poderes del rey, lo que no ocurrió.¹⁷

La Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias se instaló el 25 de septiembre de 1808 fue vista como un centro de poder temporal a la espera del regreso de Fernando VII. En los territorios americanos, la Junta Central fue reconocida por la mayor parte de los centros de poder como figura legítima de soberanía, esto porque se percibió como un espacio para reivindicar sus aspiraciones autonomistas, por ello cuando la Junta se disolvió la desconfianza se hizo latente ante cualquier institución peninsular. A consecuencia de ello, los territorios hispanoamericanos optaron por dotarse de aparatos de poder, proclamando el autonomismo en nombre del rey.¹⁸

Al interior de la Junta se ventilaron varios asuntos, entre ellos el tema de la soberanía su posesión y ejercicio. Al respecto, es de destacar las propuestas del 7 de octubre de Gaspar Melchor de Jovellanos, vocal asturiano, quien dio su opinión sobre la formación de Cortes y del gobierno. Pedía el nombramiento de un Consejo de Regencia que debería asumir toda la soberanía de la Junta, la cual, tras su instalación quedaría reducida a junta de correspondencia y consulta con la mitad de sus vocales. Por su parte el Consejo de Castilla -más tarde de España e Indias- envió una exposición a la Junta en la que indicaba la necesidad de reducir el número de vocales de la misma, porque contradecía lo prevenido en la ley de partida, además de tener diferencias de lo que era el gobierno monárquico, para este órgano la Junta Central no revestía el carácter de una verdadera institución monárquica, además éste insistía en la disolución de las juntas provinciales una vez reunida la central, pues no era permisible que la soberanía se hallase dividida de tal manera.¹⁹

Si bien, el Ayuntamiento de la Nueva España vio coartadas sus aspiraciones autonomistas inspiradas en el movimiento juntero, en la península, la Suprema Junta Central Gubernativa revivía las esperanzas al reconocer a los

¹⁷ Ivana FRASQUET, "La Construcción de la Representación", pp. 101-102.

¹⁸ Manuel CHUST, "Un bienio trascendental", pp. 32-33, 36.

¹⁹ Ivana FRASQUET, "La Construcción de la Representación", pp. 103-104.

territorios americanos como parte de la monarquía y otorgarles representación dentro de la misma.

La resolución no fue fácil de llevar, el tema comenzó a discutirse desde octubre de 1808, pero no fue hasta el 22 de enero de 1809 que la Junta Central convocó, a través de un decreto, a los americanos a la elección de diputados. El comunicado arribó entre mayo y junio de 1809 a los territorios del otro lado del Atlántico. En él se pedía un representante por cada uno de los cuatro virreinos -Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata- y de las seis Capitanías Generales -Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas-, es decir, los territorios americanos tendrían 10 delegados. La incorporación de representantes de las colonias a la Junta Central comenzaba a lastrar uno de los problemas más grandes que se manifestarán tanto en las Cortes de Cádiz como en las de Madrid y es la proporción, una igualdad no tan igual; pues mientras eran 10 los representantes transoceánicos, la metrópoli tendría 36 delegados, dos por cada una de las 18 juntas.²⁰

De acuerdo con Virginia Guedea, para el caso novohispano, la acción reivindicaba las pretensiones de igualdad manifestadas por el Ayuntamiento de la ciudad de México, al tiempo que permitía la participación en el máximo órgano de gobierno de la monarquía, a través de un proceso electoral que les dio poder a los ayuntamientos como representantes de sus provincias. Con todo y que los participantes fueron hombres nacidos en península, la experiencia sería un referente importante en el futuro cercano.²¹

Por otra parte, advierte Manuel Chust que la Junta Central promovió la idea provincial de la representación por lo que las demarcaciones administrativas del otro lado del océano obtuvieron soberanía parcial otorgada por el conjunto de la representación que se suponía nacional, poniendo en la mesa la monarquía federada y el sentimiento de pertenencia a un determinado territorio y su respectiva representación.²²

Aunque la elección de diputados a la Junta Central fue un evento sin precedentes que denotaba “igualdad”, no fue suficiente para acallar las propuestas autonomistas dentro del territorio novohispano. Pues en febrero de

²⁰ Manuel CHUST, “Un bienio trascendental”, p.33.

²¹ Virginia GUEDEA, “La Nueva España”, p. 101.

²² Manuel CHUST, “Un bienio trascendental”, p.34.

1809 circuló una proclama sobre declarar la independencia de la Nueva España con el objeto de conservarla para Fernando VII, apelando a que la soberanía residía en los pueblos, por tanto, solicitaba se convocara a una junta que representara a la nación y al rey. A finales de ese mismo año, la Conspiración de Valladolid de Michoacán también proponía la instalación de una Junta Suprema del reino y varias subalternas que guardarían la soberanía para los reyes mientras se restablecía la monarquía en la península y la legitimidad de su gobierno en el virreinato.²³

Queda claro que desde las abdicaciones una de las preocupaciones será la dispersión de la soberanía, concebida como única e indivisible por el sistema monárquico vigente, diáspora patentada por el movimiento juntero y la Junta Central. Hasta aquí, si bien con cuestionamientos, la Junta se había convertido en un órgano de poder legítimo ante las circunstancias tanto en la península como en buena parte de las colonias americanas.

De entre los dilemas que enfrentó en su interior la Junta Central lo fue si era necesario convocar a Cortes, hecho que algunos representantes consideraban necesario para unificar la nación, otros temían que con ello se originara una revuelta, lo cual fue resuelto por medio de una *Consulta a la Nación* que fue emitida por las juntas provinciales, ayuntamientos, tribunales, obispos y hombres distinguidos. Con una respuesta en las manos, el punto ahora sería determinar si las Cortes funcionarían como una legislatura, o un Congreso integrado por el clero, la nobleza y las ciudades o si éste debía transformarse en una asamblea nacional moderna.²⁴

El 1º de enero de 1810, este órgano convocó a Cortes, pero ante lo complicado que resultaba que los representantes americanos llegaran a tiempo, se determinó la elección de representantes suplentes. Por otra parte, el asedio francés, que se traduce en la derrota de Ocaña para la Junta, derivó en el disenter de la Junta de Sevilla quien reclamó para sí misma la soberanía. Bajo dicho escenario, la Junta Central se traslada a Cádiz con un prestigio en decadencia y disolviéndose antes de la incorporación de los representantes americanos, a excepción de Miguel del Lardizábal, novohispano que al tiempo de la elección residía en la metrópoli. Se crea la Regencia, que recibe los poderes de la Junta,

²³ Virginia GUEDEA, "La Nueva España", pp. 100-102.

²⁴ Jaime E. RODRÍGUEZ O., *Nosotros somos*, Tomo I, p. 200.

las instrucciones para la convocatoria y celebración de Cortes, todo ello el 29 de enero de 1810.²⁵

La disolución de la Junta representó un freno a las aspiraciones autonomistas de las colonias de la monarquía, detrás de la integración de delegados americanos quedaba un proceso de elección que movilizó y politizó a importantes sectores de la población, entonces, la desilusión y desconfianza aparecieron de uno y otro lado del Atlántico, por lo que muchos criollos optaron por crear nuevos órganos de poder proclamando la autonomía en nombre del rey. Manuel Chust establece que, a diferencia de la Junta Central, la Regencia no logró afianzar su legitimidad, al no ser un órgano con la suficiente credibilidad se derivó en la disgregación del imperio de la monarquía española, es en ese momento donde la América continental se pierde.²⁶

Los regentes designados fueron Francisco Javier Castaños, Francisco Saavedra, Pedro Quevedo y Quintana, obispo de Orense, Francisco Escaño y Esteban Fernández de León quien fue sustituido por el novohispano Miguel Lardizábal. Diez días después de su creación, el 14 de febrero de 1810, la Regencia situada en Cádiz convocó a reunión de Cortes, a pesar de que el decreto hablaba de equidad en la representación, la realidad era otra, se estipuló la elección de 28 suplentes, mientras que se nombrarían en calidad de propietarios “la misma proporción anterior de las capitanías generales y de los virreinos.” Esto causó el desencanto en algunos territorios americanos que no veían la igualdad de la representación en dicha convocatoria negándose a ser partícipes y cumplir con la norma.²⁷

Otra característica del decreto fue que las elecciones para diputados se realizarían en los ayuntamientos de cada capital, nombrándose tres individuos de cada provincia “dotados de probidad, talento e instrucción y exentos de toda nota” a través del sistema de insaculación, el que saliera por suerte en primer lugar obtenía el nombramiento.²⁸

Al tomar las riendas la Regencia, ésta elaboró una convocatoria a Cortes estamentales, en la que se establecieron parámetros para las provincias de

²⁵ Manuel CHUST, *La cuestión nacional*, pp. 36-37.

²⁶ Manuel CHUST, “Un bienio trascendental”, pp. 35-36.

²⁷ Manuel CHUST, *La cuestión nacional*, p. 38.

²⁸ *Ibíd.*, pp. 38-39.

América y Asia que no pudieran nombrar diputados en tiempo y forma, autorizando a la Regencia para que integrara una junta electoral y designara a los representantes de entre los residentes en España, pero el documento nunca fue promulgado, por lo que la propuesta no se concretó. Pasado un tiempo, en el mes de agosto el Consejo de Estado determinó convocar a Cortes no estamentales, pero ante el escenario de guerra y sublevaciones de uno y otro lado del Atlántico se retomó el decreto del 1º de enero que abogaba por el nombramiento de diputados suplentes. El 8 de septiembre se fijaron los parámetros de la elección.²⁹ Desde aquí se comenzó a dibujar el escenario electoral que sería perfeccionado y consignado en la Constitución de Cádiz y que a su vez se retomaría en los procesos electorales michoacanos.

Los elementos que consideró la Regencia fueron la edad de 25 años del vecindado, siendo excluidos los eclesiásticos regulares, los condenados por la justicia, los asalariados o criados y los deudores de los fondos públicos y para ser votado como diputado, los electores debían tener presente que el candidato hubiera nacido en la provincia que lo representaba o bien estar domiciliado en la región. Son notables las restricciones, pero queda claro que éstas se pueden concebir como parte de los procesos electorales que se empiezan a desarrollar desde finales del siglo XVIII. Ejemplo de ello era la asamblea constituyente francesa, quien en su momento puso señalamientos para determinar a los participantes de los procesos electorales en los que algunos pueden ser similares y otros diferir a los que se dibujaran y operaran para las Cortes de Cádiz y de Madrid. En concreto la asamblea constituyente francesa estableció que no podían votar las mujeres, los sirvientes, los pobres de solemnidad, los carentes de domicilio fijo y los monjes no tenían derecho al voto dado que su posición los hacía demasiado dependientes de otros para tener voluntad política propia.³⁰

El decreto llegó a la Nueva España el 16 de mayo de 1810.³¹ Este dio como resultado 21 diputados para el periodo 1810-1813, tal como se puede observar en el cuadro No. 1.

²⁹ *Ibíd.*, pp. 40-41.

³⁰ *Ibíd.*, p. 42. Bernard MANIN, *Los principios del gobierno representativo*, Madrid, Editorial Alianza, 1998, p. 125.

³¹ Nettie LEE BENSON, *La diputación provincial y el federalismo mexicano*, México, UNAM-El Colegio de México, 1994, p. 16.

Cuadro No. 1

Diputados Novohispanos a las Cortes 1810-1813.

Lugar	Diputado
Puebla	Antonio José Pérez
Valladolid	José Cayetano Foncerrada y Ulibarri
Durango	Juan José Guereña
Nuevo México	Pedro Bautista Pino
Yucatán	Miguel González Lastiri
Ciudad de México	José Ignacio Beye de Cisneros
Tabasco	José Eduardo de Cárdenas y Breña
Zacatecas	José Miguel Gordo y Barrios ³²
Tlaxcala	José Miguel Guridi y Alcocer
Coahuila	José Miguel Ramos Arispe
Guadalajara	José Simeón Uría
Veracruz	José Joaquín Maniau y Torquemada
Querétaro	Mariano Mendiola
Suplentes	
Guadalajara	Salvador Sanmartín, José María Couto y Máximo Maldonado
Guanajuato	Octaviano Obregón
Ciudad de México	José María Gutiérrez de Terán y Francisco Fernández Munilla
Sin no dice	Andrés Savariego

Fuente: Manuel CHUST, "Federalismo *Avant la Lettre* en las Cortes Hispánicas, 1810-1821", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ (Coord.), *El establecimiento del Federalismo en México (1821-18127)*, México, El Colegio de México, 2003, p. 82.

Pero mientras las elecciones se verificaban en territorios americanos, la Regencia hizo lo correspondiente durante el mes de agosto y parte de septiembre para la elección de diputados suplentes americanos que debieron integrarse a la apertura de Cortes. El 23 septiembre de 1810, en procesión, los futuros diputados se dirigieron a la iglesia, para posteriormente proceder al juramento a la nación y a Fernando VII, en grupos de dos, de rodillas, debían responder a las preguntas de obediencia marcadas por el protocolo y sosteniendo con la mano derecha los evangelios. Un día después, las Cortes de

³² Para conocer más del personaje y su desempeño en Cádiz, véase Martín ESCOBEDO DELGADO, *José Miguel Gordo. El drama de la transición política (1777-1832)*, México, LXI Legislatura de Zacatecas-Sexta Asamblea Plenaria COPECOL Zacatecas, Departamento de Estudios Históricos Arquidiócesis de Guadalajara, 2014.

Cádiz abren sesiones con 104 diputados de los cuales solo 29 eran americanos.³³

Una de las primeras inquietudes al interior de las mismas será el tema de soberanía pues de ello dependería la legitimidad de las Cortes. De igual forma, se hizo necesario articular los tratamientos protocolarios para los tres poderes. Seguido de estas preocupaciones apareció el fantasma que rondaría tanto las Cortes de Cádiz, como las de Madrid: la igualdad en términos de representación entre los territorios americanos y peninsulares, lo que no prosperó. Lardizábal, novohispano integrante de la Regencia, haciendo caso omiso de los reglamentos pidió que el asunto no se resolviera hasta que los diputados propietarios americanos se presentaran a las sesiones. Esta última postura terminará por ser la bandera de los diputados peninsulares para retrasar peticiones americanas: el tema de la propiedad y la suplencia del cargo.³⁴

Y es que dentro de la experiencia que representaron las Cortes, para el caso concreto de los americanos sirvió de escaparate para manifestar no sólo sus deseos de igualdad en cuanto a la representación política, sino de autonomía, los que “significaba integrar en calidad de territorios de igualdad jurídica a las antiguas colonias de un estado nacional con parámetros plurinacionales.” Esto último representaba todo un reto si se tiene presente que el sistema vigente era una monarquía. Es aquí donde Manuel Chust advierte que al interior de las Cortes emanaban planteamientos federalistas.³⁵

El problema para la igualdad de la representación de acuerdo con los diputados absolutistas radicaba en el hecho de que América era patrimonio real, con base en el derecho de conquista, por ello los territorios eran colonias y no provincias. Entonces, el tratar de darle voz y voto a los indígenas y castas se tradujo en fuertes debates que terminaron con el reconocimiento de los derechos políticos de los indígenas, no así, a las castas. La necesidad de ampliar la base de la representación permitiría aumentar el número de diputados en las Cortes, lo que sería óptimo no sólo para impulsar las propuestas americanas, sino para concretarlas.³⁶ Mientras tanto, los diputados americanos propietarios se

³³ Ivana FRASQUET, “La Construcción de la Representación”, pp.123-125. Manuel CHUST, *La cuestión nacional*, p. 47.

³⁴ Manuel CHUST, *La cuestión nacional*, pp. 50-53.

³⁵ *Ibíd.*, pp. 54-57.

³⁶ *Ibíd.*, pp. 60-65.

personaron en las Cortes entre enero y marzo de 1811, entre ellos los electos por la Nueva España.³⁷

Además del tema de la representación y la soberanía nacional hubo aspectos que por su naturaleza tocaban fuerte a los territorios americanos, lo referente a la encomienda, la cuestión esclavista y la contribución de plata labrada por parte de particulares y las iglesias para el sustento de la guerra insurgente peninsular. A la par de estos discursos, la elaboración de la Constitución empezó a dar frutos, el 25 de agosto de 1811 la comisión encargada presentó dos terceras partes del texto. En el pleno de las sesiones se discutió el tema constitucional, entendido como el acto con mayor trascendencia de la institucionalización de la soberanía y la nación. De los elementos a rescatar destaca la conformación de la nación española integrada por españoles de uno y otro lado del Atlántico, pero no todos con derechos políticos; así como la soberanía, que antes detentaba el rey, residía ahora en la nación; la división de poderes, además de la introducción de la diputación como división territorial en la que también residía la soberanía y la creación de ayuntamientos en las poblaciones con más de 1000 almas.³⁸

Sin duda, una de las mayores aportaciones de este proceso revolucionario español fue la Constitución de Cádiz, pues representó la creación de un nuevo orden jurídico e institucionalizó la nueva cultura política, en donde la soberanía nacional y el ciudadano-vecino serán la novedad y lo que tendrá gran eco en territorios americanos y por tanto en la Nueva España hasta sus primeros años de vida como nación independiente. En la Constitución de 1812, son tres puntos los que llaman la atención respecto a la representatividad. El artículo 1º que versa “La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, y entonces ¿quiénes eran los españoles? Artículo 5º, primera definición: “Todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos”, y finalmente, sobre los ciudadanos, artículo 18º “Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen

³⁷ Manuel CHUST, “Federalismo *Avant la Lettre*”, p. 82.

³⁸ Manuel CHUST CALERO, Ivana FRASQUET, “Soberanía hispana, soberanía mexicana”, pp. 20-23.

de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.”³⁹

La discusión de estos artículos siempre mostró de fondo el tema de la igualdad que a su vez se traducía en el aumento del número de representantes para los territorios americanos, lo que siempre combatieron los peninsulares. De igual manera, en estos debates afloró, en ocasiones con más nitidez que otras, la idea y posibilidad del federalismo, idea velada que será externada con mayor contundencia en las Cortes de Madrid. El problema de raíz era la percepción de representación e igualdad diferenciada que asumían los representantes de uno y otro lado del océano.

Otra de las grandes novedades del texto constitucional será el tema de que la soberanía ya no residía en el rey, sino en la nación que era de donde ésta emanaba y por tanto sólo a ésta le competía el establecer sus leyes fundamentales y sistema de gobierno, lo mismo que la diputación provincial y la creación de ayuntamientos en poblaciones con más de 1000 habitantes.⁴⁰

Estos puntos se pueden etiquetar como de profundo impacto a corto, mediano y largo plazo, al menos para el caso novohispano, las cosas no volverán a ser las mismas. La Constitución fue jurada el 19 de marzo de 1812 en la península y en la Nueva España el 30 de septiembre, en donde el virrey Francisco Xavier Venegas se mostró reticente a su aplicación porque limitaba sus atribuciones, el desencuentro del funcionario con el documento se tradujo en la supresión de la libertad de imprenta y la anulación las elecciones de noviembre de 1812 argumentando irregularidades. En cierta medida el virrey se vio favorecido por el estado de guerra que vivía el territorio novohispano, por lo que sus preceptos no pudieron aplicarse de manera efectiva. Tiempo después, con su destitución y el ascenso al cargo de José María Calleja, el tema electoral fue retomado.⁴¹

³⁹ Felipe TENA RAMÍREZ, *Las leyes fundamentales de México 1808-1979*, México, Editorial Porrúa, 1957, pp. 60-62.

⁴⁰ Para ampliar información consultar Nettie LEE BENSON, *La diputación provincial*. Manuel CHUST, “La Revolución Municipal, 1810-1823”, en la obra colectiva que constituye un referente para el caso mexicano, en Juan ORTIZ ESCAMILLA, José Antonio SERRANO ORTEGA, *Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México*, México, El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 2007. Manuel CHUST, “Federalismo *Avant la Lettre*”, p. 88.

⁴¹ *Ibíd.*, p. 99.

De acuerdo con lo establecido por la Constitución gaditana, se hacía necesario de nuevo convocar a elecciones para instalar la segunda legislatura que corrió de octubre de 1813 hasta el golpe de estado de mayo de 1814. Los diputados novohispanos que llegaron a las Cortes fueron José Miguel Quijano, Ángel Alonso Pantiga, José Martínez de la Pedrera, J. Nepomuceno Cárdena, Juan Rivas y Vertiz, Miguel García Paredes y Domingo Sánchez Resas y en calidad de suplentes fueron designados José María Couto, Francisco Fernández Munilla, José María Gutiérrez de Terán, Octaviano Obregón, Salvador Sanmartín, Antonio Joaquín Pérez, Mariano Mendiola, José Cayetano de Foncerrada, Joaquín Maniau, José Miguel Gordo y Miguel Ramos Arizpe.⁴²

Es importante mencionar que es en estas elecciones cuando se aplica por primera vez la elección indirecta en tres niveles en la Nueva España y la cual llegaría a establecerse como modelo para los procesos electorales, primero para la elección del Congreso Constituyente Mexicano de 1823 y en Michoacán de 1824 a 1835.

1.2. El camino de la insurgencia, 1810-1820

Mientras una parte de la sociedad novohispana buscaba la representatividad, igualdad y autonomía a través de las Cortes, que no era lo mismo que la independencia, el 15 de septiembre de 1810 se descubrió una nueva conspiración en el pueblo de Dolores que desembocó en una lucha armada. El movimiento fue encabezado por Miguel Hidalgo,⁴³ el cual surgía para defender la autoridad de Fernando VII. Hidalgo decía que su levantamiento luchaba en contra de los europeos sospechosos de colaboración con los invasores franceses, para defender “nuestra religión, nuestra ley, nuestra libertad, nuestras costumbres y cuanto tenemos de más sagrado y más precioso de custodiar”.⁴⁴

⁴² *Ibíd.*, pp. 82.

⁴³ Aunque existen muchos textos referentes al personaje y su actuación al interior de la insurgencia, una buena lectura es Carlos HERREJÓN PEREDO, *Hidalgo: Maestro, Párroco e insurgente*, México, Fomento Cultural Banamex-Clio, 2011. Del mismo autor *La ruta de Hidalgo*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2011. *Hidalgo: razones de la insurgencia y biografía documental*, México, Secretaría de Educación Pública, Dirección general de Publicaciones y Medios, 1987.

⁴⁴ François-Xavier GUERRA, *Modernidad e independencias*, 2000, p. 321.

Los principales dirigentes del movimiento fueron los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos.⁴⁵ El primero estuvo al frente desde el inicio del mismo en septiembre de 1810 hasta julio de 1811, posteriormente se disputó el liderazgo entre Morelos e Ignacio López Rayón, pero pronto se dejó ver la supremacía de Morelos al frente del movimiento. El “siervo de la Nación” dejó de dirigirlo hasta que se constituyó el gobierno insurgente y comenzó a operar la Constitución de Apatzingán.

Durante la etapa en que Hidalgo se encontró al frente de la insurrección, en ésta predominó el desorden en su ejército, lo cual se vio perfectamente reflejado en los desmanes ocasionados al tomar y saquear importantes pueblos, villas y ciudades del Bajío, entre las que se encontraban: San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. En estos lugares se destituyó a las autoridades reales si aún se encontraban ahí y se procedió a la reorganización del gobierno civil dando a los criollos nombramientos de regidores, administradores y en el caso de Guanajuato y Valladolid de intendente. Todos los hechos acompañados del asesinato de españoles peninsulares.⁴⁶

A menos de un año de iniciada la insurrección, Hidalgo fue hecho prisionero por el bando realista y fusilado en julio de 1811. Entonces, el movimiento armado pasó a manos de José María Morelos, quien manifestó abiertamente la búsqueda de la independencia de la Nueva España, lo que no fue del agrado de Ignacio López Rayón.

Por muchas razones que no se pretenden abordar en este trabajo, la insurgencia novohispana por largo tiempo fue analizada desde la perspectiva militar, económica o biográfica, dejando de lado otros aspectos que con la conmemoración de los bicentenarios cobraron relevancia. Así, el tema de la institucionalización del movimiento y la aplicación de teorías sobre la concepción y ejercicio del poder emergieron en las nuevas investigaciones.

⁴⁵ Referencias obligadas sobre el personaje. Ernesto LEMOINE VILLICAÑA, *Morelos: su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965. *Morelos y la revolución de 1810*, México, Gobierno del Estado de Michoacán, 1979. Ubaldo VARGAS MARTÍNEZ, *Morelos Siervo de la Nación*, México, Editorial Porrúa, 1963. Y las obras de Carlos HERREJÓN PEREDO que son muchas pero que en buena medida se conjuntan en la extraordinaria obra *Morelos*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2015.

⁴⁶ Sobre el gobierno insurgente en la Intendencia de Michoacán consúltese a Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid*, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Secretaría de Difusión Cultural, 2003, p. 110.

El tema de la soberanía y su ejercicio tan discutido en la península, en la Nueva España y demás colonias de la monarquía española tras las abdicaciones, también fue un asunto presente en la insurgencia novohispana que había surgido en 1810 a través de documentos que intentaban darle un ordenamiento al movimiento. Hira de Gortari manifiesta que los dirigentes del movimiento insurgente se preocuparon por crear una Constitución porque estaban convencidos de que la revolución armada además de mantener el control del territorio, debía cimentar los elementos que aseguraran su dominio a través de la centralización del poder y la delimitación de las fuerzas externas que tendieran a amenazar la existencia de la insurgencia, pensando que una vez derrotado el gobierno realista, el documento ayudaría a organización a la nueva nación.⁴⁷

Al respecto, es sabido que el eclesiástico Dr. Severo Maldonado presentó a Hidalgo un proyecto de Constitución, sin saber si es el mismo documento que fue confiscado a Hidalgo después de la batalla de Puente de Calderón titulado *Constitución Orgánica para el Régimen de México*.⁴⁸ Más tarde, el 19 de agosto de 1811 Ignacio López Rayón creó la Suprema Junta Nacional Americana, entendida como el órgano insurgente que gobernaría la Nueva España a nombre de Fernando VII, mientras durara su ausencia. Además, pretendía que en un futuro el rey viniera a gobernar estos territorios. Esa idea ocasionó fuertes desavenencias entre Rayón y Morelos, quien posteriormente consideró la propuesta de crear un Congreso, cuya instalación dio paso a la disolución de la Junta.⁴⁹

La Suprema Junta, en su momento, contó con la simpatía de varios criollos y españoles; trató de crear una Secretaría de Guerra para respaldar las

⁴⁷ Hira DE GORTARI RABIELA, "La vía parlamentaria y la edificación de un orden constitucional: la insurgencia 1813-1815", en María Luisa RODRÍGUEZ-SALA, Ana María CARRILLO, Verónica RAMÍREZ, Graciela ZAMUDIO (Coords.) *Independencia y Revolución. Contribuciones en torno a su conmemoración*, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, México 2010, p. 75.

⁴⁸ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "El diseño constitucional y la división de poderes en la Constitución de Apatzingán", en Moisés GUZMÁN PÉREZ, Gerardo SÁNCHEZ DÍAZ, *La Constitución de Apatzingán. Historia y Legado*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Archivo General de la Nación, 2014, p. 375.

⁴⁹ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *La Junta de Zitácuaro 1811-1813. Hacia la Institucionalización de la Insurgencia*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas, 1994, pp. 58-64.

disposiciones militares, acuñó moneda, asimismo planeó un proyecto de reformas fiscales que se dieron a conocer a través de la prensa, de la misma manera justificó el porqué de la revolución. Del mismo modo, elaboró un proyecto titulado: *Los Elementos de Nuestra Constitución* que constaba de una breve exposición de motivos, un articulado de 38 incisos y un corolario que fue enviado a Morelos el 30 de abril de 1812, quien le realizó algunas observaciones que al parecer no fueron del agrado de Rayón, por lo que al final optó por que no se publicara. Cabe resaltar que parte de los postulados de Rayón los retomó Morelos para elaborar los sentimientos de la nación.⁵⁰

Los *Elementos de nuestra Constitución* en sus artículos 5º y 6º establecieron que la soberanía dimanaba del pueblo, residía en Fernando VII y sería ejercida por el Supremo Consejo Nacional Americano.⁵¹ De una forma un tanto confusa, los artículos del 7 al 11 esbozaban la integración y prerrogativas del legislativo, lo mismo ocurría con el 17 y 18 que de forma aún más imprecisa abordaba el tema del ejecutivo depositado en el Protector Nacional.⁵² Mientras que en el artículo 21 se hacía referencia a la división de poderes como propios de la soberanía, enfatizando que ésta le era inherente (*sic*) y por tanto jamás podría comunicarlo.⁵³ El documento no definió elementos como la nación o la integración del territorio, solamente incluía veladas menciones de nacionalidad y ciudadanía, con una concepción americana sin contemplar la novohispana o mexicana.⁵⁴

José Herrera Peña dice que la Suprema Junta Nacional Americana asumió todas las facultades de la soberanía, las legislativas y judiciales, es decir ejerció la dictadura. Este órgano liderado por Ignacio López Rayón plasmó la idea de una Constitución a través de un escrito que llevaba varios títulos: *Constitución Nacional Provisional, elementos de la Constitución y 38 Puntos Constitucionales*, cuya propuesta de gobierno era una monarquía, idea que no compartió Morelos. El autor reflexiona al respecto, cómo plantear una monarquía indiana, española, absoluta o constitucional cuando no había rey, la república

⁵⁰ *Ibíd.*, pp. 64, 98-103

⁵¹ *Ibíd.*, p. 182.

⁵² Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "El diseño constitucional", p. 376.

⁵³ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *La junta de Zitácuaro*, p. 182.

⁵⁴ Ivana FRASQUET, "Orígenes del primer constitucionalismo mexicano, 1810-1824", en Antonio ANNINO, Marcela TERNAVASIO (Coords.) *EL laboratorio constitucional Iberoamericano: 1807/1808-1830*, Madrid/Frankfurt, AHILA-IBEROAMERICANA-VERVUERT, p. 124.

era más viable en esas circunstancias, al tiempo que sostiene que la propuesta de Rayón tenía una importante influencia gaditana.⁵⁵

Los insurgentes continuaron con el trabajo de la Constitución de Rayón apoyados por el padre Fray Vicente Santa María y en el mes de julio de 1813 se sacaron los ejemplares necesarios para que el documento fuera analizado por hombres sabios de la ciudad de México.⁵⁶

Dentro de los consensos de la historiografía respecto a la insurgencia, se encuentra la importancia de la redacción de *Los sentimientos de la nación* por Morelos. Que sirvieron de base para la redacción de la Constitución de Apatzingán. En el 5º sentimiento se estableció que la soberanía dimanaba inmediatamente del pueblo, el que solo quería depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial, eligiendo las provincias a sus vocales, y éstos a los miembros de los otros dos poderes, todos los ellos debían ser sujetos sabios y de probidad.⁵⁷

Para llevar a cabo las elecciones de los miembros del Congreso se emitió una convocatoria, pero por el escenario de la guerra, éstas solo pudieron realizarse en las provincias de Oaxaca y Tecpan, esta última creada por la insurgencia, en ella se pudo convocar a elecciones en tres niveles como lo había establecido la Constitución de 1812. El 13 de septiembre de 1813 los electores de la provincia de Tecpan en Chilpancingo se reunieron para elegir a su representante, el diputado electo fue el vicario general José Manuel Herrera.⁵⁸ Si bien, se desconocen los mecanismos de elección de los otros diputados, que seguramente fueron por designación, el ejemplo en particular resulta interesante para ilustrar el interés que tuvieron los insurgentes por legitimar la representación política a través de procesos electorales.

Finalmente, el documento más importante emanado de la insurgencia novohispana, la *Constitución de Apatzingán*, fue creado por el Congreso de Chilpancingo. Es de remarcar que a causa del escenario de guerra y los mismos

⁵⁵ José HERRERA PEÑA, "Dogmas jurídicos de la independencia en la Constitución de Apatzingán", en Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 97-98.

⁵⁶ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "El diseño constitucional", p. 376.

⁵⁷ Ubaldo VARGAS MARTÍNEZ, *Morelos Siervo de la Nación*, p.108.

⁵⁸ Hira DE GORTARI RABIELA, "La vía parlamentaria", pp. 79-82.

desacuerdos que existían entre los representantes algunos tendrán más participación en la elaboración y discusión del texto que otros; no obstante, se considera pertinente mencionar a los integrantes del legislativo insurgente con el objeto de retomar estos datos más adelante. Véase cuadro No. 2.

Cuadro No. 2
Diputados del Congreso de Chilpancingo

Diputado	Lugar de origen	Lugar que representa	Profesión
José Manuel Herrera Sánchez	Huamantla Tlaxcala	Tecpan	Eclesiástico
Andrés Quintana Roo	Mérida	Puebla	Abogado
José Sotero Castañeda	San Francisco Etúcuaro	Durango	Abogado
Manuel Alderete y Soria	Tlapujahua	Querétaro	Abogado
José María Ponce de León	-----	Sonora	Sustituto de asesor de intendente de Puebla
Cornelio Ortiz Zarate	Xalapa	Tlaxcala	
José Sixto Verduzco	Zamora	Michoacán	Eclesiástico
José María Liceaga	Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato	Guanajuato	Hacendado y militar
Antonio Sesma González	Orizaba	Puebla	Contador de las Cajas reales de Puebla
José Francisco Pedro de Angándar y Gacia	Silao	San Luis Potosi	Eclesiástico
Antonio José Moctezuma	-----	Coahuila	Gobernante de indios de Tlalchapa
José María Morelos y Pavón	Valladolid	Nuevo León	Eclesiástico
José María Cos	Zacatecas	Veracruz	Eclesiástico
Ignacio López Rayón	Tlalpujahu	Guadalajara	Abogado
Carlos María de Bustamante Merechilla	Antequera	México	Abogado
José María Murgía y Galardi	Antequera	Oaxaca	Corregidor e intendente de Oaxaca
Manuel Sabino Crespo	Hacienda de Teniche, Ejutla	Oaxaca	Eclesiástico

Fuente: Carlos HERREJÓN PEREDO, Autores de la Constitución, en Serafín ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 57-72.

Es evidente el predominio de los abogados y eclesiásticos en el Congreso insurgente, lo que en buena medida habla de que la Constitución de Apatzingán fue redactada entre otros por expertos en derecho tanto de gentes como canónico. Asimismo, además de los conocedores del derecho, el resto de los diputados habían estado vinculados a importantes cargos de la administración real.

La Constitución de Apatzingán⁵⁹ fue jurada el 22 de octubre de 1814, se abocó en el capítulo II al tema de la soberanía, de acuerdo al documento era una atribución de la soberanía dictar leyes y establecer la forma de gobierno acorde a los intereses de la sociedad, era imprescriptible, inenajenable e indivisible, residía originalmente en el pueblo y el ejercicio de la misma a través de la representación nacional compuesta por los diputados elegidos por los ciudadanos. El derecho del sufragio para diputados pertenecía a todos los ciudadanos sin distinción de clases, ni países siempre y cuando cubrieran los requisitos que estableciera la ley. De la misma manera, prevenía que, si las circunstancias no permitían la elección de sus diputados, era legítima la representación supletoria.⁶⁰

Es de destacar que tanto *Los Elementos de nuestra Constitución*, *Los Sentimientos de la Nación* y la *Constitución de Apatzingán* enfatizaron que la soberanía residía en el pueblo, y aun cuando la Constitución de Cádiz ya se había jurado y aplicado en territorio novohispano, la Constitución de Apatzingán no retomó la soberanía nacional y continuó con lo que había planteado la insurgencia desde un principio en los *Elementos*.

A diferencia de los textos anteriores, la Constitución de Apatzingán sí tuvo vigencia en territorio insurgente. Ésta en su artículo 44 establecía que el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo sería el *supremo congreso mexicano*,

⁵⁹ De los trabajos con motivo del bicentenario, Héctor CHÁVEZ GUTIÉRREZ (Coord.), *El primer constitucionalismo mexicano: Apatzingán a doscientos años*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Facultad de derecho y Ciencias Sociales-Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo-Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, 2014. Moisés GUZMÁN PÉREZ, *La Constitución de Apatzingán: su historia editorial*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas-Casa Natal de Morelos-Universidad Nacional Autónoma de México-Fuente de Afirmación Hispanista, 2014. Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.

⁶⁰ Felipe TENA RAMÍREZ, *Las leyes fundamentales*, p. 50.

asimismo se crearían otras dos corporaciones tituladas *supremo gobierno* y *supremo tribunal de justicia*.⁶¹ La separación de poderes atrajo a los insurgentes de la época, pues veían en ella la forma de limitar el poder de los monarcas autoritarios y absolutistas, al tiempo que podían definir los instrumentos de control en el naciente Estado.⁶²

Oscar Cruz Barney recoge de Ernesto de la Torre Villar que las fuentes nacionales de la *Constitución de Apatzingán* fueron los Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón y las reflexiones que Morelos hizo al respecto, los proyectos Constitucionales de Carlos María de Bustamante y Santa María, los *Sentimientos de la Nación* y el reglamento del Congreso de 11 de septiembre de 1813. De las fuentes foráneas, las Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795, la *Constitución de Massachusetts* de 1780, la Constitución de Cádiz y el Derecho Indiano. Respecto al ejecutivo establece que al ser depositado en un triunvirato se deja ver la influencia de las Constituciones francesas de 1795 y 1799.⁶³

Con todos esos antecedentes, Herrera Peña considera que la Constitución de Apatzingán tomó en cuenta armónicamente las experiencias angloamericana, francesa y española para integrarlas entre sí.⁶⁴

A lo largo de esta exposición se hace necesario parar y ver de manera breve pero sustantiva la influencia que la máxima gaditana tuvo sobre la insurgente novohispana. Juan Ignacio Hernández Mora señala las aportaciones que Torre Villar hizo referente a la influencia de Cádiz en la de Apatzingán, empezando por la religión católica, los atributos de la soberanía, la base de la representación, los años de mandato de los diputados, el tema de la reelección, los privilegios de los diputados, elección de los representantes, atribuciones del Congreso, sanción y promulgación de leyes, las facultades del Supremo Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia y su competencia y elementos referentes a los caudales públicos. Lo mismo que los objetivos de la nación, se declaró la soberanía popular a la manera de Rousseau y estableció mayor

⁶¹ *Idem*.

⁶² Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "El diseño constitucional", p. 379.

⁶³ Oscar CRUZ BARNEY, "El Poder Ejecutivo en la Constitución de Apatzingán", en Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 195-196.

⁶⁴ José HERRERA PEÑA, "Dogmas jurídicos", p. 88.

desarrollo de los derechos individuales siguiendo las declaraciones angloamericanas y francesas lo que llama poderosamente la atención es que Apatzingán no toma la figura de la diputación provincial ciñéndose más bien a las intendencias reguladas como administración provincial con competencias hacendísticas y eventualmente judiciales.⁶⁵

A forma de recuento, mientras la obra gaditana era desechada por el monarca español en mayo de 1814, el movimiento insurgente se encontraba en pleno apogeo de su institucionalización con un Congreso creado en septiembre de 1813, se abrió paso a la elaboración de la Constitución que fue jurada en octubre de 1814 en Apatzingán. En ella el gobierno insurgente quedó dividido para su ejercicio en tres poderes, de los cuales dos ya se encontraban en funcionamiento: el legislativo y ejecutivo, quedando por articular el judicial, lo que ocurrió en marzo de 1815.⁶⁶ A pesar de eso, el ensamble del gobierno trajo a la par el declive en el aspecto militar dentro del movimiento.

El asedio a la insurgencia obligó a los poderes constituidos a salir de la provincia de Michoacán. El Congreso, antes de partir, decretó la creación de la Junta en Uruapan el 6 de septiembre de 1815, una Junta Subalterna Gubernativa que más tarde fue conocida también con el nombre de Junta de Jaujilla, por haberse establecido en esta población. El objetivo de su creación radicaba en dejar en las provincias del centro, occidente y norte del país un organismo que resguardara los avances, que en materia de gobierno y administración habían logrado los insurgentes, ya que los integrantes de los poderes decidieron marcharse a tierras más seguras. La Junta quedó integrada por 5 personas en calidad de Vocales: Ignacio Ayala, Manuel Muñiz, José Pagola, Domingo García Rojas y Felipe Carvajal uno de los futuros diputados eclesiásticos del Congreso de Michoacán.⁶⁷

⁶⁵ Juan Ignacio HERNÁNDEZ MORA, Influencia de la Constitución de Cádiz en la Constitución de Apatzingán, en Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 301-302.

⁶⁶ Sobre el Supremo Tribunal insurgente María Teresa MARTÍNEZ PEÑALOZA, *Morelos y el Poder Judicial de la insurgencia mexicana*, ABC editores, México, 1992. Moisés GUZMÁN PÉREZ, Eva Elizabeth MARTÍNEZ CHÁVEZ, José María Sánchez Arriola. *El Juez Insurgente*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.

⁶⁷ Eugenio MEJÍA ZAVALA, *La Junta Subalterna de la Insurgencia, 1815-1820. Hacia la conformación de un gobierno representativo*, Tesis para obtener el grado de maestro en Historia,

Mientras tanto, en la huida a Tehuacán, Morelos fue aprehendido y el número de miembros del Congreso se redujo. Los poderes se disolvieron por orden de Manuel Mier y Terán. El “siervo de la Nación” fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. Con su muerte, el movimiento se vino abajo, pues comenzaron las disputas entre los que intentaban quedarse con el puesto de Morelos. Ignacio López Rayón seguía en las filas insurgentes, pero sin reconocer la Junta de Jaujilla, órgano que dio la orden de perseguirlo.⁶⁸ A principios de 1816, el virrey, como estrategia para seguir minando el movimiento insurgente, concedió indultos a todos aquellos que hubiesen abrazado el partido de la insurrección.⁶⁹ Aunado a ello, los estragos de la guerra, la escasez de alimentos, los fuertes ataques realistas y la falta de un líder capaz de controlar la lucha y mantenerla, redujeron fuertemente las filas insurgentes.

En estas condiciones aparece el respaldo del español Xavier Mina,⁷⁰ exiliado en Inglaterra desde el retorno de Fernando VII a España. Jaime Rodríguez establece que Mina creía que la lucha insurgente en América era en realidad un intento por restaurar la Constitución española. Mina a petición del padre Servando Teresa de Mier accedió a emprender una invasión a Nueva España con el objeto de restaurar el gobierno constitucional y luego difundirlo a la Península y otros espacios de la monarquía, para ello contó con el respaldo de novohispanos, sudamericanos, británicos y ciudadanos de Estados Unidos. Su expedición desembarcó en el Norte de la Nueva España a mediados de 1816.⁷¹

Ya en la Nueva España se adhirió al movimiento insurgente, con armamento, una prensa y reclutas a favor de la causa, no obstante, el apoyo económico proveniente de los ingleses y la rápida popularidad que adquirió al interior del mismo ocasionó el recelo de algunos jefes insurgentes, los cuales se

Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, julio 2007, p. 64.

⁶⁸ Mariano de Jesús TORRES, *Diccionario histórico, biográfico, geográfico, estadístico, zoológico, botánico, y mineralógico de Michoacán*, Morelia, 1912. p. 298.

⁶⁹ Álvaro OCHOA, Gerardo SÁNCHEZ, *Breve Historia de Michoacán*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 95.

⁷⁰ Ortuño ha sido un autor que ha trabajado con ahínco a Xavier Mina, sin afán de saturar, se hace referencia algunos trabajos como Manuel ORTUÑO MARTÍNEZ, “El entorno irlandés de Xavier Mina”, en *Cuadernos del Bicentenario*, No. 17, 2013; “Xavier Mina en Galveston, Camino de Nueva España”, *Trienio: Ilustración y liberalismo*, No. 55, 2010; *Expedición a Nueva España de Xavier Mina: materiales y ensayos*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2006.

⁷¹ Jaime E. RODRÍGUEZ O., *Nosotros somos*, Tomo II, p. 457.

negaron a colaborar con Mina. Debido a esto y aunado a la falta de disponibilidad e ineptitud de su ejército se produjo el declive de su empresa, por lo que el 3 de noviembre de 1817, fue hecho prisionero y fusilado el día 11 del mismo mes en el cerro del Bellaco.⁷²

Si bien con desorganización y diezmado, el movimiento seguía en pie, en la medida que los recursos lo permitían; no obstante, la desintegración de la Junta de Jaujilla el 16 de marzo de 1818 fue un duro golpe que terminaba con la institucionalización de la insurgencia iniciada con la Suprema Junta Nacional. Aun así, la lucha continuó de manera desorganizada, resistieron primero en algunos fuertes -Cóporo, Los Remedios y Jaujilla-, las constantes derrotas replegaron a los insurgentes a la sierra y ahí continuaron la guerra.⁷³

Es difícil enmarcar los sucesos de 1815 a 1820, porque por mucho tiempo predominó la idea de que la insurgencia había sido derrotada. Si bien los indultos adelgazaron los batallones rebeldes no fueron suficientes para aniquilar el movimiento y que el gobierno realista retomara el control del territorio novohispano, por lo que una derrota en manos de los rebeldes siempre fue una amenaza latente. A la par, se debía hacer frente a los estragos de la guerra traducidos en la desorganización de la Real Hacienda, la crisis que enfrentaba el aparato productivo y la campaña en favor de la causa del rey y en contra de la insurgencia y la Constitución de Cádiz.⁷⁴

1.3. Entre el olvido y el resurgimiento. Dos movimientos hacia un mismo camino, 1820-1824

La concatenación de eventos de uno y otro lado del Atlántico como el regreso de “El Deseado” Fernando VII en 1814, la derogación de las Cortes de

⁷² Eugenio MEJÍA ZAVALA, *La Junta Subalterna de la Insurgencia, 1815-1820. Hacia la conformación de un gobierno representativo*, pp. 178-192.

⁷³ Raúl ARREOLA CORTÉS, *Morelia*, 2ª edición, Morelia, Editores Morevallado, 1991, p. 129.

⁷⁴ José Antonio SERRANO ORTEGA, “Introducción”, en José Antonio SERRANO ORTEGA (Coord.), *El sexenio absolutista, los últimos años insurgentes Nueva España (1814-1820)*, México, El Colegio de Michoacán, 2014, pp. 9-12. Otro texto coordinado que recoge trabajos sobre el periodo desde las provincias: Patricia GALEANA (Coord.), *La independencia en las provincias de México*, México, Siglo XXI-Senado de la República, Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana-LXI Legislatura, 2011. Marco Antonio LANDAVAZO, *La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquico en una época de crisis. Nueva España 1808-1822*, México, Colegio de México-UMSNH- Colegio de Michoacán, 2001.

Cádiz y su obra, la muerte de Morelos en noviembre de 1815, la desintegración de los poderes insurgentes en Nueva España, la disolución de la Junta de Jaujilla y los indultos ofrecidos a los rebeldes, vislumbraban un camino hacia la recuperación de la estabilidad política y social perdida. Los acontecimientos acaecidos en 1820 en la península tendrán repercusiones importantes, entre ellas el nacimiento de México como territorio libre e independiente. El nuevo país debió enfrentar problemas de organización política, relaciones internacionales, reestructuración de la Hacienda pública y de las fuerzas armadas, conflictos con la Iglesia, la falta de recursos para solventar el nuevo aparato burocrático y la defensa del territorio, aunado al tema de luchas de poder centro-periferia entre el gobierno del país y las provincias.

Lo anterior se puede saber en parte a las aportaciones de Rodríguez, Chust Calero, Frasset y Ávila que abordan la transición del territorio novohispano de virreinato a país independiente de 1808 a 1824, y que a su vez se han nutrido de otros autores que son esenciales para entender la transición de Imperio a República federal y el desarrollo de ésta última.

Nettie Lee Benson es pionera en vincular a la diputación provincial implantada con la Constitución de Cádiz con el origen de los estados federados mexicanos en 1824. Por su parte, Timothy Anna en su estudio sobre el primer Imperio reivindica la imagen de Agustín de Iturbide como un hombre de su época que contribuyó notablemente a concretar la independencia de México sin mucho derramamiento de sangre y las condiciones bajo las cuales se hizo con y a su vez perdió el Imperio. Jaime del Arenal también da su visión sobre el periodo, pero bajo la aguda perspectiva jurídica. A la par, José Barragán se aboca a la articulación de los poderes federales en 1824 con una estupenda contextualización que parte en 1821 con la creación de la Suprema Junta Provisional Gubernativa, seguido por Michael Costeloe con su libro clásico sobre la primera República federal que muestra las tensiones existentes entre el gobierno del centro del país y los gobiernos estatales y la fragilidad con que funcionó el sistema de gobierno ante el embate de fuerzas y facciones políticas. Un texto que complementa pasajes de lo escrito por Costeloe fue redactado por Harold Sims, quien se centra en el conflicto de la expulsión de españoles, sus orígenes, alcances y consecuencias. Josefina Zoraida Vázquez con una amplia trayectoria sobre el tema, ha trabajado arduo para concretar dos obras colectivas

que a la par de lo escrito permiten tener mayores horizontes no solo desde el ámbito político, sino también, social, fiscal y militar abarcando de 1821 a 1835, materiales que se han construido desde la visión de los estados, con una buena contextualización de lo ocurrido desde el centro del país.⁷⁵

Los aportes de estos autores permiten ver lo complejo que fue para la nación mexicana institucionalizar su independencia y establecer un sistema de gobierno acorde a los intereses de los grupos en el poder. Historiográficamente el periodo ha contado con importantes aportaciones que seguramente se verán enriquecidas en algunos años por la cercana conmemoración de nuevos bicentenarios.

Por lo anterior, la independencia de México no se puede explicar sin vincularla a los sucesos acaecidos en la península, en donde Fernando VII, al regreso de su cautiverio, debió enfrentar la situación en América, la incapacidad para resolver los problemas económicos, el descontento por el restablecimiento de una administración centralizada y la restauración de la inquisición. Esta última comenzó entonces la persecución de liberales y masones. Todo esto detonó un ambiente de oposición y conspiración en contra de “El Deseado”.⁷⁶

Consecuencia de lo anterior fue el movimiento del 1º de enero de 1820 en Cabezas de San Juan provincia de Sevilla, cuando Rafael Riego se pronunció en pro de la Constitución de 1812, los ecos de su levantamiento condujeron en el mes de febrero a un movimiento juntero similar al de 1808, instalándose Juntas en La Coruña, Oviedo, Murcia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y Valladolid, entre otras. El movimiento juntero no se extendió por toda la península, porque la Constitución fue proclamada el 7 de marzo y Fernando VII decretó su disponibilidad para jurarla. El día 9 se creó la Junta Provisional Consultiva.⁷⁷

⁷⁵ Timothy ANNA, *La caída del gobierno español en la ciudad de México*, México, Nueva alianza, 1980. *El Imperio de Iturbide*, México, Editorial alianza, 1991. Jaime del ARENAL FENOCHIO, *Un modo de ser libres. Independencia y Constitución en México (1816-1822)*, México, El Colegio de México, 2002. José BARRAGÁN BARRAGÁN, *Introducción al federalismo (La formación de los poderes en 1824)*, 1978, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978. Michael COSTELOE P., *La primera República Federal de México 1824-1835*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983. Josefina Zoraida VÁZQUEZ, (Coord.), *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003. El Colegio de México-El Colegio de San Luis, 2003. Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), *Práctica del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, Colegio de México, 2012.

⁷⁶ Jaime E. RODRÍGUEZ O., *Nosotros somos*, Tomo II, p. 456.

⁷⁷ Ivana FRASQUET, “Ciudadanos: ya tenéis Cortes”, p. 145-147.

Después de seis años de absolutismo, se iniciaba el segundo periodo constitucional en la historia de España, esta vez en presencia del monarca.⁷⁸

Entre marzo y julio de 1820 Fernando VII gobernó con apego a las consultas realizadas a la Junta Provisional principalmente y al Consejo de Estado que se había reorganizado el 3 de marzo con miembros de notoria probidad. Para la integración de las Cortes, la Junta pedía ceñirse al texto Constitucional recién restaurado, mientras que el Consejo era de la opinión de convocar a unas Cortes estamentales. La Junta concentró su trabajo en determinar la representación de los territorios americanos, lo que se tradujo en el decreto del 22 de marzo que daba a dichos territorios treinta diputados suplentes, siete por el virreinato de México, dos por la Capitanía general de Guatemala, uno por la isla de Santo Domingo, dos por la de Cuba, uno por la de Puerto Rico, dos por las Filipinas, cinco por el virreinato de Lima, dos por la capitanía general de Chile; tres por el virreinato de Buenos Aires, tres por el de Santa Fe y dos por la Capitanía General de Caracas.⁷⁹

La Junta también determinó que las Cortes debían convocarse en calidad de ordinarias, para ello era necesario realizar nuevas elecciones ya que el periodo de ejercicio de los diputados era de dos años y de 1814 a 1820, en todo caso ya no eran vigentes, de igual manera, la Junta determinó que correspondía al rey emitir la convocatoria.⁸⁰

Con el desacuerdo de los americanos por el reducido número de diputados que se convocó para los territorios de ultramar, las Cortes de Madrid abrieron sesiones ordinarias el 9 de julio y cerraron el 9 de noviembre de 1820, con diputados suplentes americanos que portaban poderes extendidos por la Junta electoral de Madrid encargada de la elección de los mismos. Lo primero que harán estos representantes será demandar a las Cortes el incremento de diputados, lo que sustentarán basándose en la población y que será ignorado, pues al hacerlo efectivo los diputados peninsulares perderían el control de las Cortes y porque Fernando VII intervino para no aumentar la participación americana. Con una representación mínima, los americanos darán continuación

⁷⁸ Manuel CHUST, Ivana FRASQUET, "Soberanía hispana, soberanía mexicana", p. 183.

⁷⁹ Ivana FRASQUET, "Ciudadanos: ya tenéis Cortes", pp. 148-149.

⁸⁰ *Ibid.*, pp. 149-150.

a sus propuestas autonomistas originadas en Cádiz y que esta vez irían más allá: al planteamiento del federalismo de manera abierta.⁸¹

En las Cortes de Madrid, la desigualdad de la representación política condujo a los novohispanos a tomar parte importante en los debates en torno al tema, pero enfocándose cada vez más al territorio que representaban, dejando de lado “la cuestión americana.” Por tanto, Mariano Michelena y el eclesiástico Miguel Ramos Arizpe solicitaron la creación de dos diputaciones, la de Arizpe y la de Valladolid de Michoacán,⁸² la unión de la Intendencia de Zacatecas a la diputación de San Luis Potosí y el establecimiento de una casa de moneda en Guadalajara y la otra en Zacatecas. Ya en solitario, Ramos Arizpe propuso una subdivisión en los asuntos de Ultramar en las secretarías de Guerra y Marina y Gracia y Justicia. A lo anterior se deben agregar catorce propuestas relacionadas con las competencias de las diputaciones, impulsadas por Ramos Arizpe, Michelena, el eclesiástico José María Couto y José María Fagoaga.⁸³

A principios de 1821, los novohispanos seguían dando de qué hablar en las Cortes, esta vez solicitaron la destitución de Juan Ruiz de Apodaca y la designación de alguien afín a sus postulados autonomistas, el hombre: Juan O'Donojú.⁸⁴ Cuando el Capitán General partió a la Nueva España estaba instruido sobre el plan de establecer tres regencias gobernadas por el rey a través de príncipes españoles y ciñéndose a la Constitución, por lo que consideraba que su objetivo en territorio novohispano consistía en fortalecer el orden constitucional, pero al tocar tierras del virreinato se percató de que la situación era otra.⁸⁵

⁸¹ *Ibíd.*, pp.150-155.

⁸² La instalación de la Diputación provincial de Valladolid de Michoacán se llevó a cabo hasta el 1º de febrero de 1822, debido a los sucesos políticos que suscitaron a partir de la promulgación del Plan de Iguala. La integraron el Dr. José Díaz Ortega –maestre escuelas del Cabildo Catedral de Valladolid y gobernador de la Mitra-, Lic. José María Ortiz Izquierdo –Juez letrado-, Juan José Martínez de Lejarza –propietario y vecino de Valladolid-, Dr. Juan José Michelena –Racionero de la Catedral-, Francisco Camarillo –Capitán, propietario vecino de Pátzcuaro-, Pedro Villaseñor –Sargento Mayor-. Como suplentes fungieron Lic. Francisco de Borja Romero y Santa María –Prebendado de la Catedral- y Mariano Quevedo –propietario vecino de Valladolid-. Carlos JUÁREZ NIETO, “La diputación provincial de Valladolid de Michoacán 1822-1824”, en: *Anales del Museo Michoacano*, No. 4, tercera época, Morelia, 1992, p. 136.

⁸³ Manuel CHUST CALERO, Ivana FRASQUET, “Soberanía hispana, soberanía mexicana”, p. 185.

⁸⁴ Algunos datos sobre el personaje en Jaime E. RODRÍGUEZ O., “*Lo político en el mundo hispánico*”, México, El Colegio de Michoacán-Universidad de California-Irvine, 2015, Tomo II, pp. 323-342.

⁸⁵ Jaime E. RODRÍGUEZ O., *Nosotros somos*, Tomo II, pp. 483, 486.

Si bien, las Cortes aprobaron y decretaron el tránsito de las intendencias a diputaciones provinciales a los novohispanos, el Plan de Iturbide ponía en peligro las pretensiones autonomistas que la bancada mexicana venía trabajando y que aún no terminaba de exponer ante el pleno. El 24 de junio de 1821 se presentó una propuesta liderada por Michelena y respaldada por la delegación mexicana pero que por estrategia se extendió al resto de los territorios americanos: la división de las Cortes en tres secciones americanas que tendrían su sede en México –para la parte septentrional y Guatemala-, en Santa Fe –para Nuevo Reino de Granada y las provincias de Tierra firme- y en Lima –para Perú, Buenos Aires y Chile-. Dichas Cortes tendrían las mismas facultades que las peninsulares y para su reunión y manejo se regirían por los tiempos establecidos en la Constitución gaditana, reservándose a las Cortes generales lo relacionado a la política exterior; a su vez, el ejecutivo se ejercería por una delegación nombrada por el rey o por un miembro de la familia real. El Consejo de Estado también se dividía en tres, mientras que el poder judicial se ramificaría en lo propio, además de tocar el tema del comercio. A cambio de lo propuesto la Nueva España se comprometía a contribuir para el pago de la deuda peninsular y a los gastos de marina.⁸⁶

El sustento del plan autonomista de los novohispanos se ciñó a que su implantación terminaría con la revuelta independentista, que para esos momentos comenzaría a tomar nuevos aires con el Plan de Agustín de Iturbide y que llevaría finalmente a la firma de los Tratados de Córdoba en agosto de 1821 y a la declaración de independencia de México el 27 de septiembre del mismo año. Las Cortes de Madrid, como era de esperarse, se negaron a aceptar la propuesta novohispana al tiempo que llegaban las noticias de la declaración de independencia de México. Pero, además, a estos viejos dilemas y nuevos problemas se unieron las discusiones sobre la estancia legítima en las Cortes de Madrid de los diputados suplentes americanos, representantes de aquellos territorios que ya se habían declarado independientes, al final todo terminó con su expulsión de las Cortes en septiembre de 1821. Aun así, los representantes mexicanos asistieron hasta el final de la legislatura extraordinaria y en febrero de

⁸⁶ Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*, pp. 72-73.

1822 comenzaron a regresar a México para insertarse en el proceso de estructuración de las instituciones de la nueva nación.⁸⁷

Al cerrarse el capítulo de la representación para los novohispanos en las Cortes en 1822, toda la cultura política que se gestó a partir de 1808 y los postulados gaditanos tendrán un importante impacto y vigencia en la nueva nación mexicana, cuyo ejemplo más grande es la adopción de la Constitución hispana mientras se creaba una propia.

1820 abrió nuevos senderos en la metrópoli y en la Nueva España. La insurgencia que se daba por aniquilada, resurgió y se unió a un militar realista vallisoletano: Agustín de Iturbide. El Plan de Iguala terminó por unir dos procesos que en 1810 eran diametralmente opuestos, porque las circunstancias habían cambiado. El restablecimiento de la Constitución de Cádiz y la integración de Cortes españolas en 1820 no dieron los resultados esperados, un territorio que había sido partícipe de la institucionalización de la insurgencia peninsular y novohispana no se conformaba con una mínima representación del otro lado del océano. Los costos políticos de la primera experiencia habían sido grandes, ahora se deseaba la autonomía abiertamente, al no conseguirla, la única vía sería la independencia, las bases de ésta: el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba; el cemento de las profundas divisiones sociales y partidistas: la religión.

Iturbide era un militar realista que había caído en el desprestigio al ser acusado de corrupción y abuso de autoridad en 1816, para 1820 era un hombre desempleado y sin futuro dentro del ejército. Cuando llegaron a la Nueva España las noticias de la restauración del orden constitucional español, Iturbide se planteó el obligar al virrey Juan Ruiz de Apodaca a reconocer el nuevo régimen, pero sin tropas el asunto se hacía imposible. Al poco tiempo el virrey lo nombró comandante del distrito militar del sur, para combatir a los reductos insurgentes replegados en esa zona, que fue un asunto complicado por lo que a la par del encargo capitalizó relaciones y apoyos para articular un plan de independencia que incluía la colaboración de las tropas insurgentes al mando de Vicente Guerrero. Con el respaldo insurgente, Iturbide proclamó el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.⁸⁸

⁸⁷ *Ibíd.*, pp. 80-86, 99.

⁸⁸ Jaime E. RODRÍGUEZ O., *Nosotros somos*, Tomo II, pp. 488-493.

Antes de tocar el contenido del plan, es importante aclarar que hasta ahora no existe un consenso historiográfico sobre si el documento es totalmente de la autoría de Iturbide o intervinieron otros personajes de la época en su elaboración, lo que sí queda claro es que en su momento solicitó comentarios sobre el texto a personajes como José Zozaya Bermúdez, Juan José Espinoza de los Monteros, Matías Monteagudo, Juan Gómez de Navarrete y Manuel Gómez Pedraza.⁸⁹

El plan de Iguala declaraba la independencia de México y la implantación de una monarquía constitucional en manos de Fernando VII o un miembro de la familia real o casa reinante como sistema de gobierno, asimismo se adoptaba la religión católica, al tiempo que marcaba la creación de una junta encargada de convocar a Cortes otorgando el derecho de ciudadanía a todos los habitantes del territorio y reconociendo el fuero de las dos instituciones novohispanas más poderosas: el ejército y la Iglesia.⁹⁰

El Plan fue cobrando adeptos, lo que marcó el desmoronamiento del gobierno virreinal el cual se acentuó con la renuncia del virrey Apodaca, entonces la defensa quedó a cargo de Francisco Novella. Juan O'Donojú arribó a finales de julio de 1821 a Veracruz, ahí se enteró que buena parte del territorio novohispano se encontraba en manos de los insurgentes y de que las tropas españolas habían depuesto a las autoridades. El nuevo virrey, en aras de mantener los lazos con la metrópoli y asegurar el arraigo del sistema constitucional, pidió a la población esperar noticias de la península. O'Donojú estaba convencido de que el plan autonómico de las "regencias" había sido aprobado por las Cortes; no obstante, el escenario era adverso y no pudo esperar la correspondencia venida de España, así que debió emprender la negociación con Iturbide a finales de agosto de 1821, producto de esa acción fueron los Tratados de Córdoba, los cuales no sólo ratificaban el plan de Iguala, sino que establecían un Imperio monárquico constitucional moderado a manos de la casa de Borbón, dejando provisionalmente el poder ejecutivo en manos de una Regencia y el legislativo en las Cortes. Con todo lo anterior, la firma de la

⁸⁹ *Ibíd.*, pp. 493-497.

⁹⁰ Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*, pp. 84-87.

declaración de independencia de México era algo que llegaría con el paso de los días, para ser precisos, el 27 de septiembre de 1821.⁹¹

Una vez declarada la independencia, se hacía necesario cumplir con lo manifestado por el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. El 29 de septiembre de 1821 se reunió la Junta Provisional Gubernativa con el objeto de asumir el gobierno del imperio mexicano, mientras se convocaba al primer Congreso, asimismo se creó la Regencia, tal como lo habían hecho las Cortes hispanas de 1810. La Junta asumió las facultades que el artículo 131 de la Constitución de Cádiz había dado a las Cortes, es decir, asumía el poder legislativo, mientras que la Regencia sería la depositaria del poder ejecutivo. Aunque estas dos instituciones tenían funciones diferenciadas, Iturbide logró el mando de ambos órganos de gobierno para intervenir en la elaboración de leyes y decretos, en especial en la convocatoria del primer Congreso.⁹²

La creación de la convocatoria para la elección del primer Congreso mexicano no sería algo fácil. La Junta Gubernativa respaldó el apego a las reglas electorales que establecía la Constitución de Cádiz como la elección en tres niveles, la creación de una sola cámara con la diferencia de que se designaba un diputado por cada 50.000 almas y otorgaba derechos políticos a las castas. La Regencia también realizó su propuesta que marcaba la separación del legislativo en dos cámaras, una cámara alta conformada por eclesiásticos, militares, procuradores de los ayuntamientos y apoderados de las audiencias y una cámara baja de representantes electos uno por cada 50.000 habitantes excluidos los miembros de las corporaciones representadas en la cámara alta. Finalmente, Iturbide hizo lo propio, pedía la designación por medio de un criterio gremial o por estamentos de 120 diputados electos de manera corporativa, las categorías: eclesiásticos, labradores, mineros, artesanos maestros de tienda, mercaderes, militares, funcionarios públicos, intelectuales y profesionales, nobleza e indios.⁹³

La ley electoral que se aprobó fue mezcla de las tres propuestas, se determinó la división del Congreso en dos salas, en ella también se ampliaba la

⁹¹ Jaime E. RODRÍGUEZ O., *Nosotros somos*, Tomo II, pp. 506-508.

⁹² Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*, pp. 121-133.

⁹³ Manuel CHUST CALERO, Ivana FRASQUET, "Soberanía hispana, soberanía mexicana", pp. 192-193.

base electoral de parroquia a los ayuntamientos, pero reducía la participación a nivel provincial y nacional, se otorgaron derechos políticos a las castas y la base de la convocatoria no era la población, sino los partidos de cada intendencia. El decreto salió a la luz el 17 de noviembre de 1821, el Congreso se instaló el 24 de febrero de 1822.⁹⁴

El primer Congreso mexicano nace con un amplio bagaje legislativo, sus referentes serán las leyes y los decretos emanados de las Cortes de Cádiz y de Madrid y la Constitución de 1812, las que serán objeto de adaptación acorde a las circunstancias. Sin embargo, es esa herencia legislativa y su interpretación lo que determinará la relación que el legislativo mantendrá con Iturbide. De nuevo, el centro de los conflictos será la soberanía. Es otro momento, son otras las circunstancias y la concepción y el ejercicio del poder será el eje de las desavenencias. El Congreso aceptará y asumirá la soberanía tal como se había concedido en la Constitución gaditana; ésta residía en la nación y los diputados eran sus representantes ejerciendo los poderes que emanaban de ella dividiéndolos en legislativo, ejecutivo y judicial. Por su parte, Iturbide consideraba que la soberanía debía ser compartida entre el ejecutivo y el legislativo, siendo él regente. El asunto estaba expuesto.⁹⁵

Los temas que trató el Congreso fueron de diversa índole: la reforma hacendística, el establecimiento de un sistema fiscal liberal, la creación de la milicia nacional, la correspondiente reducción de efectivos del ejército permanente, la construcción simbólica de la nación, entre otros asuntos que comenzaron a incomodar a Iturbide quien en ocasiones no publicó los decretos emanados del legislativo. Es importante remarcar que la cuestión del incremento de la milicia nacional y reducción del ejército será la causa de la proclamación de Agustín I.⁹⁶

Paralelo a la instalación del primer Congreso mexicano, aparecieron signos de afiliaciones partidistas y la popularidad de Agustín de Iturbide se fortalecía. Entonces comenzaron a circular rumores en favor de la creación de

⁹⁴ Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*, pp. 134-135.

⁹⁵ Ivana FRASQUET, "La revolución contenida: la Constitución Imperial de México, 1822", en Brian CONNAUGHTON (Coord.), *1750-1850: La Independencia de México a la Luz de Cien Años. Problemáticas y desenlaces de una larga transición*, México, Ediciones del lirio, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, pp. 418-419.

⁹⁶ Manuel CHUST CALERO, Ivana FRASQUET, "Soberanía hispana, soberanía mexicana", p. 195.

un Imperio Mexicano en manos de éste; tal y como lo fue la manifestación masiva dirigida por un contingente del antiguo regimiento de Celaya, el 18 de mayo de 1822, que demandó a su comandante en jefe -Iturbide- que aceptara el trono del Imperio Mexicano, a esta voz se le unieron la de los ciudadanos de todas clases. El Congreso veía muy peligroso el hecho de que Iturbide fuera el jefe del ejército y de la Regencia, significaba la concentración de poder en una sola persona. Ante tal situación, la legislatura trató de poner una solución, en lugar de presentar un Proyecto de Constitución, presentó un *Proyecto Provisional para la Regencia del Imperio* el 13 de abril, en donde uno de sus artículos prohibía que los miembros de la Regencia comandaran el ejército.⁹⁷

Los clamores surtieron efecto y Agustín de Iturbide fue proclamado emperador el 18 de mayo de 1822, a partir de entonces sus posicionamientos se radicalizarían. El decreto del 30 de mayo constituyó a la larga el punto de quiebre entre los dos poderes, en él, el Congreso aprobó la formación del Consejo de Estado, una especie de cuerpo intermedio, entre el legislativo y el emperador, integrado por trece individuos que debían prestar juramento a la Cámara. El mandato también comprendía el tema del veto del emperador y confería al legislativo la atribución para nombrar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia contrastando esto último con lo marcado por la Constitución de 1812, la que otorgaba la prerrogativa al monarca.⁹⁸

En primer lugar, el emperador solicitó que el Consejo presentara juramento tanto al legislativo como al ejecutivo, una vez lograda la petición la conquista le permitía ejercer cierto poder sobre el órgano. La batalla continuó, Iturbide también quería intervenir en el nombramiento de los magistrados del Tribunal acorde a lo marcado por la Constitución gaditana, después de apelar al decreto en un par de ocasiones el Congreso se arrogó esta atribución. En el trasfondo del asunto estaba la concepción de la soberanía y un legislativo que se consideraba depositario directo de la misma. Como consecuencia de las atribuciones sobre la designación del judicial, Iturbide acusó a algunos diputados de traición mandándolos apresar, el Congreso terminó por disolverse y las

⁹⁷ Timothy ANNA, *El Imperio de Iturbide*, pp. 74-77.

⁹⁸ Ivana FRASQUET, "México entre la Monarquía y la República, 1820-1824", en Encarna GARCÍA MONERRIS, Carmen GARCÍA MONERRIS (Eds.), *Guerra, Revolución, Constitución (1808 y 2008)*, Valencia, Universitat de Valencia, 2012, pp. 162-163.

garantías individuales terminaron por suspenderse. Iturbide convocó la Junta Nacional Instituyente a la que se incorporaron algunos miembros del Congreso disuelto.⁹⁹ En este sentido, Ivana Frasset establece que las intenciones de Iturbide eran convertir a México en un Estado liberal pero moderado, fuertemente centralizado, con amplias atribuciones para el emperador, reduciendo las libertades civiles y sociales de los ciudadanos, por lo que se pretendía un ejecutivo fuerte que se reservaba buena parte de las atribuciones políticas apoyado por el ejército y parte del alto clero, mientras que el legislativo quedaría reducido a sancionar la Constitución.¹⁰⁰

Paralelo a la lucha entre el Congreso y el emperador, el escenario económico de la nueva nación no era bueno, pues la falta de recursos era cada vez más evidente lo que se agudizaba por la toma de San Juan de Ulúa por la flota española que había paralizado el comercio en Veracruz, principal puerto comercial, por lo que el gobierno debió imponer préstamos forzosos y emitir papel moneda, lo que no fue bien visto por las diputaciones provinciales.¹⁰¹

A la larga se dio la suma de una serie de circunstancias como los enfrentamientos entre el Congreso y el emperador, la decadente situación económica del imperio y se visibilizó un elemento se había perdido de vista: el poder y autonomía que habían adquirido las provincias a partir de 1812 y que ahora se denominaban diputaciones provinciales, las cuales no respaldaron el actuar del emperador y comenzaron a impulsar el federalismo.

Como ha indicado Manuel Chust, la heterogeneidad que predominaba dentro de la división territorial y administrativa gestada desde los orígenes del periodo virreinal en la Nueva España, sería corregida a finales del siglo XVIII a través de la introducción del sistema de intendencias que dieron uniformidad al concepto de provincia identificándolo con un territorio determinado. La anterior denominación sería de suma importancia porque no sólo definiría límites territoriales, sino que con el paso de los acontecimientos serviría para construir, desde una visión político administrativa, las reivindicaciones autonomistas de los

⁹⁹ Ivana FRASQUET, "México entre la Monarquía y la República", pp. 164-167.

¹⁰⁰ Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*, pp. 247-249.

¹⁰¹ Josefina Zoraida VÁZQUEZ, "El establecimiento del federalismo en México, 1812-1827", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ (Coord.), *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003, pp. 27-28.

diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz y de Madrid, a través de las diputaciones provinciales.¹⁰²

En ese escenario surgió el levantamiento de Antonio López de Santa Ana en Veracruz apoyando la adopción del sistema republicano,¹⁰³ Iturbide mandó a Juan Antonio Echávarri para su contención, pero éste se unió a las fuerzas rebeldes y entonces se proclamó el plan de Casa Mata en febrero de 1823, que exigía la reunión de un nuevo Congreso constituyente como exponente de la representación nacional, pero lo más importante, éste concedía a las provincias la capacidad de autogobernarse hasta que se estableciera un nuevo gobierno, presupuesto que asumirán casi todas las diputaciones provinciales. Poco después se disolvió la Junta Instituyente e Iturbide se vio obligado a reinstalar el Congreso y a liberar a los diputados presos y abdicó el trono el 19 de marzo.¹⁰⁴

A pesar de la renuncia de Iturbide, el sistema de gobierno seguía siendo un imperio, pero sin emperador, para poder transitar a la República federal sería necesario derogar las bases legales: el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, al tiempo que se aprobó el *Proyecto de bases para la República federativa* el 21 de mayo de 1823, pero, ¿y la Constitución de 1812? Ésta siguió vigente hasta enero de 1824 y su diseño correspondía a una monarquía constitucional. En teoría la Monarquía y República debieron convivir por un breve tiempo.¹⁰⁵

Aún existía un obstáculo por saltar, la presión de las provincias para integrar un nuevo Congreso, las diputaciones desconocían a la legislatura reinstalada porque desde su perspectiva carecía de legitimidad, mientras que ésta se consideró la titular de la soberanía y se negó a la convocatoria de un nuevo Congreso, por lo que en aras de recobrar autoridad se trabajó en la creación del “Plan de Constitución Política de la Nación Mexicana”, inspirado principalmente en el constitucionalismo francés, con un federalismo de fuertes tendencias centralistas en el que los estados no eran soberanos. El documento

¹⁰² Manuel CHUST CALERO, “Federalismo *Avant la lettre*”, pp. 77-78.

¹⁰³ Una obra que recoge algunas explicaciones sobre el tema en Hispanoamérica, José Antonio AGUILAR, Rafael ROJAS (Coord.), *El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política*, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fondo de Cultura Económica, 2002.

¹⁰⁴ Manuel CHUST CALERO, Ivana FRASQUET, “Soberanía hispana, soberanía mexicana”, pp. 208-209.

¹⁰⁵ Ivana FRASQUET, “México entre la Monarquía y la República”, pp. 68-69.

quedó de lado ante la demanda de los propios diputados por convocar un nuevo Congreso, esto ante las presiones de las provincias de Yucatán, Oaxaca, Jalisco y Zacatecas que comenzaron a declararse estados libres y a emitir convocatorias para integrar los Congresos locales.¹⁰⁶

Ante la presión, en el mes de junio se convocó a elecciones, el segundo Congreso constituyente se instaló el 7 de noviembre de 1823 y es de remarcar que algunas provincias dieron poderes limitados a sus representantes, tal como fue el caso de Yucatán, Zacatecas, Oaxaca, Guadalajara y Valladolid, por cuestiones de la investigación solo se hará un acercamiento a lo ocurrido con la última provincia. La junta electoral de Valladolid de Michoacán instruyó a sus diputados para que se pronunciaran por el sistema de gobierno popular representativo federado. La junta también manifestó que la provincia se conformaba con ser declarada estado independiente con los linderos de su demarcación y con autorización de variarlos en un futuro si fuera necesario; asimismo, la provincia no aprobaba el Plan de la Constitución Política de la nación mexicana porque lo consideraba centralista y remarcaba: “Es por tanto, voluntad de la provincia que la Constitución de la nación mexicana se asemeje en cuanto sea dable a la de los Estados Unidos o a las bases contenidas en el pacto federal del diputado Prisciliano Sánchez.”¹⁰⁷

Lo primero a destacar es la difusión de los preceptos constitutivos de los Estados Unidos, lo segundo es que para finales de 1823 aún no estaba definido el sistema de gobierno, esa decisión quedó en manos del Segundo Congreso mexicano, la cual, a pesar de la presión de las provincias fue meditada por poco más de dos meses.

El 20 de noviembre de 1823 se presentó, ante el pleno del Congreso, el proyecto del *Acta Constitutiva Federal* y su discusión inició el 3 de diciembre. El debate llevó a la división de la legislatura en tres grupos: los diputados defensores de la soberanía de los estados como única posible, de pensamiento federal radical o confederal; el segundo grupo lo integraban los federalistas moderados, quienes reclamaban la soberanía para la nación como la única existente, siguiendo la línea del liberalismo hispano de Cádiz, entre ambos se situaban los que pensaban que la soberanía se podía compartir entre los estados

¹⁰⁶ Josefina Zoraida VÁZQUEZ, “El establecimiento del federalismo”, pp. 29-30.

¹⁰⁷ José BARRAGÁN BARRAGÁN, *Introducción al federalismo*, pp. 163-164.

y la nación; finalmente se encontraba una minoría que se inclinaba por posturas centralistas. Con importantes debates se determinó establecer una República popular federal, integrada por estados libres, soberanos e independientes, así como la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. El acta fue firmada el 31 de enero de 1824.¹⁰⁸

El Acta constitutiva de la federación es el documento que establece formalmente el federalismo-confederalismo, en su artículo 3º indicó que “la soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea conveniente.”¹⁰⁹ Con ello la fragmentación de la soberanía se acentuó y perduró durante la primera República federal.

1.4. Los eclesiásticos en los órganos de representación

No obstante, lo anterior solo es el preámbulo para explicar la presencia de los eclesiásticos en órganos legislativos, entre ellos el Congreso de Michoacán, porque a pesar de que varios de los autores se abocan al análisis de las Cortes de Cádiz y de Madrid, a la par que otros también retoman la institucionalización de la insurgencia novohispana, la actividad del primer Congreso mexicano, el Congreso constituyente y el legislativo durante la primera República federal, en realidad los trabajos a lo mucho se han detenido en señalar la presencia de los eclesiásticos o retoman la participación de algunos a partir de la notoriedad de sus posicionamientos, pero no se han emprendido estudios que profundicen en el análisis de la participación de los diputados con este perfil en concreto. Si bien parte de la misma documentación tiende a hacer titánica la labor de identificar la profesión de los diputados, es un hecho que estos hombres estaban presentes,

¹⁰⁸ Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*, pp. 355, 357, 363-365.

¹⁰⁹ Felipe TENA RAMÍREZ, *Las leyes fundamentales*, p. 154. Sobre posicionamientos respecto del *Acta Constitutiva* se puede consultar la obra de Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*; Alfredo ÁVILA, *En nombre de la nación*; José BARRAGÁN BARRAGÁN y Reynaldo SORDO CEDEÑO, “El Congreso Nacional: de la autonomía de las provincias al compromiso federal” en Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ, *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003.

que contribuyeron significativamente en la labor legislativa, en la construcción de las nuevas instituciones y el nuevo andamiaje legal a nivel federal y en cada uno de los estados.

Existen numerosas investigaciones que abordan el tema de las Cortes y el trabajo legislativo al interior de las mismas desde diferentes interpretaciones y visiones, pero no se han realizado muchas que analicen el desempeño de los eclesiásticos en específico, a pesar de que su representación en estos órganos cuantitativamente era de las más importantes.¹¹⁰

Para el caso mexicano, un trabajo pionero en advertir la estrecha relación entre el clero y la política en un proceso de larga duración fue el de Francisco Morales editado en el año de 1975. De ahí Anne Staples comenzó a vincular la participación de los eclesiásticos en las nuevas instituciones de gobierno del México independiente a través de su trabajo sobre *La Iglesia en la primera República federal*, pasados varios años, a mediados de los noventa escribió un par de artículos sobre la participación política del clero. A su vez Reynaldo Sordo Cedeño, en su obra *El Congreso en la primera República centralista*, realizó un acercamiento a la composición en cuanto a las profesiones de los diputados de la quinta y sexta legislatura nacional que abarcan de 1833 a 1837, lo que fue el primer paso para presentar un artículo cuantitativo sobre la presencia de los eclesiásticos en el Congreso nacional durante la primera República federal.¹¹¹

¹¹⁰ Una de las historiadoras que advierte cuantitativamente la presencia de los eclesiásticos de las Cortes de Cádiz es Marie Laure RIEU-MILLAN, *Los Diputados Americanos en la Cortes de Cádiz*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas, 1990. Un par de artículos que se abocan a la participación de los diputados con esta profesión son Antoni SÁNCHEZ I CARCELÉN, "Eclesiásticos catalanes y las Cortes de Cádiz" en: *Anuario de Historia de la Iglesia*, Vol. 19, 2010 y Gustavo PEÑA HERNÁNDEZ, "La participación de los eclesiásticos novohispanos en la Constitución de Cádiz, 1810-1812", en Juan Carlos CASAS GARCÍA (Editor), *Iglesia, Independencia y Revolución*, México, Universidad Pontificia de México, 2010, pp. 31-46.

¹¹¹ Francisco MORALES, *Clero y política en México (1767-1834): algunas ideas sobre la autoridad, la independencia y la reforma eclesiástica*, México, Secretaria de Educación Pública, 1975. Anne STAPLES, *La Iglesia en la primera República federal mexicana (1824-1825)*, México, SEP, 1976. "Clerics as politicians: Church, State, and political power in independent Mexico", en *Mexico in the age democratic revolutions, 1750-1850*, Jaime RODRÍGUEZ, (Editor), Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 1994. "La participación política del clero: Estado, Iglesia y Poder en el México independiente", en Brian CONNAUGHTON, Andrés LIRA GONZÁLEZ (Coords.), *Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto José María Luis Mora, 1996. Reynaldo SORDO CEDEÑO, *El Congreso en la primera República centralista*, México, El Colegio de México, Instituto Autónomo de México, 1993. "Los Congresistas Eclesiásticos en la Nueva República", Brian CONNAUGHTON (Coord.), *1750-1850: La independencia de México a la luz de cien años*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Editiones del Lirio, 2010, pp. 553-579.

Para el caso de los estados entre 1821 y 1835, el trabajo que toma en cuenta la presencia de los eclesiásticos es el de David Carbajal, de ahí se pueden encontrar algunas obras de largo alcance sobre la historia de los Congresos de Sonora, San Luis Potosí y Puebla que sin ser objeto de sus autores, al ir presentado la composición de las legislaturas, permiten rastrear algunos eclesiásticos, pero sin adentrarse a su participación en los debates o propuestas legislativas. Para el caso de este último estado existe un texto de Alicia Tecuanhuey Sandoval sobre el clero y el diseño de las normas republicanas de 1824 a 1825. En este rubro también se puede enmarcar el trabajo biográfico de Ana Carolina Ibarra sobre el prebendado oaxaqueño Dr. José de San Martín diputado del congreso de Chilpancingo y del Congreso nacional de 1822 a 1824. Bajo la misma línea existen algunos escritos relativos a la obra política del eclesiástico tlaxcalteca Miguel José Guiridi y Alcocer en las Cortes de Cádiz y como miembro de la Junta Provisional Gubernativa.¹¹²

Dentro de la historiografía michoacana, no se encuentran muchas obras abocadas al periodo en las cuales se aborden los debates legislativos, y las que hay, no se enfocan directamente al trabajo de los eclesiásticos.¹¹³ Dentro de la

¹¹² David CARBAJAL LÓPEZ, *La política eclesiástica del estado de Veracruz 1824-1834*, México, INAH-Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2006, pp. 41-42. Ramón SÁNCHEZ FLORES, *Relación Histórica del Congreso del Estado de Puebla. Corporación, legislaturas y Recintos Parlamentarios, 1821-2001*, Puebla, Congreso del Estado de Puebla, 2001, pp. 69, 74. Ignacio ALMADA BAY, José Marcos MEDINA BUSTOS, *Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000*, México, Cal y Arena, 2001. Sergio Alejandro CAÑEDO GAMBOA, *Cien años de vida legislativa: el Congreso del estado de San Luis Potosí, 1824-1924*, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, Congreso del Estado, 2000. Alicia TECUANHUEY SANDOVAL, "Los miembros del clero en el diseño de las normas republicanas, Puebla, 1824-1825", en Alicia TECUANHUEY SANDOVAL (Coord.), *Clérigos, políticos y política. Las relaciones Iglesia y Estado en Puebla, siglos XIX y XX*, Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002. Ana Carolina IBARRA, *Clero y política en Oaxaca. Biografía del Dr. José de San Martín*, México, Instituto oaxaqueño de las culturas, Universidad Autónoma de México, Fondo estatal para la cultura y las artes, 1996. Antonio de TENORIO ADAME, *Guridi y Alcocer diputado de ambos hemisferios. De las Cortes de España al Congreso federal mexicano*, Cádiz, Quorum Libros 2009. Ivana FRASQUET, "José Miguel Guiridi y Alcocer en la Junta Provisional Gubernativa, 1821-1822", en Rafael GARCÍA SÁNCHEZ, Graciela NÚÑEZ BERMÚDEZ (Coords.), *Guridi y Alcocer en la esencia de Cádiz*, Tlaxcala, México, Sociedad de Geografía, Historia, Estática y Literatura de Tlaxcala, A.C., 2012.

¹¹³ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden social en Michoacán: El derecho penal en la Primera República Federal, 1824-1835*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Escuela de Historia, 1999; "Michoacán: De provincia novohispana a estado libre y soberano de la federación mexicana, 1820-1825", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ (Coordinadora), *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003. "La primera República federal en Michoacán, 1825-1835: entre la inseguridad pública y la inestabilidad política", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), *Práctica del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, Colegio de México, 2012. Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero gobierno en Michoacán. La gestión episcopal de Juan Cayetano Gómez de Portugal 1831/1850*, México,

parte biográfica de los diputados que aquí interesan cabe destacar el trabajo que se presenta sobre el Bachiller Manuel de la Torre Lloreda, en el cual se dedican un par de páginas a las preocupaciones y quehacer legislativo del eclesiástico en el Congreso constituyente local. A la par del trabajo biográfico de Roberto Heredia sobre Mariano Rivas y la biografía de Martín García de Carrasquedo que inicia en 1800 y corta en 1821 de Carlos Juárez, la cual se puede complementar con lo que Juvenal Jaramillo expone en su trabajo *Una élite eclesiástica en tiempos de crisis*.¹¹⁴

Dicho lo anterior, antes de iniciar con un breve bosquejo sobre la presencia de los eclesiásticos en los órganos de representación tanto en la península como en la Nueva España a partir de 1808, ante todo, se debe tener presente el papel de la Iglesia y el tema del patronato. Por un lado, las competencias de la institución no se circunscribieron solamente a los asuntos propios de su ministerio, el culto y la beneficencia, sino que también tenía un importante papel en la educación y en el ámbito político. Por lo que no es coincidencia encontrar eclesiásticos que se hicieron notar en estos espacios de representación por su conocimiento en derecho y los planteamientos teóricos de la soberanía, la división y organización del poder. Por otro lado, el tema del patronato, que convertía al rey en la máxima autoridad para la Iglesia americana, será fuente de problemas e interpretaciones a partir de la independencia.

Remembrando un poco, el Patronato Real fue una donación en beneficio de los reyes católicos y de sus sucesores en la Corona de Castilla. El proceso de otorgamiento inició con la bula *Intercaetera* de 1493, que dio la “plena, libre y absoluta potestad, autoridad y jurisdicción” para la evangelización de los

Legislatura LIX Cámara de diputados, 2005. Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, *Origen y desarrollo de las fuerzas armadas nacionales en Michoacán, 1820-1836*, Morelia, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, Coordinación de la Investigación Científica, Cuerpo Académico CA-233, Tecnología e Historia Militar de México, 2016.

¹¹⁴ Gerardo SÁNCHEZ DÍAZ, “Manuel de la Torre Lloreda: Entre la Ilustración novohispana y la construcción de la República”, en Moisés GUZMÁN PÉREZ (Coordinador), *Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia*, Morelia, Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006, pp. 99-122. Roberto HEREDIA CORREA, *Mariano Rivas 1797-1843. Semblanza y Antología*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas, 1999. Carlos JUÁREZ NIETO, “Martín García de Carrasquedo: un cura revolucionario en Valladolid de Michoacán (1800-1821)”, en Eduardo MIJANGOS DÍAZ (Coord.), *Movimientos Sociales en Michoacán Siglo XIX y XX*, Morelia, IIH-UMSNH, 1999. Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Una élite eclesiástica en tiempos de crisis. Los capitulares y el Cabildo Catedral de Valladolid-Morelia (1790-1833)*, México, El Colegio de Michoacán, Instituto de Antropología e Historia, 2014.

naturales en América lo que vino a complementarse con otras de su especie como la bula Universales *Ecclesiae* o de Patronato en 1508, que fue más específica al establecer los derechos del patrono para dar su consentimiento en la construcción de alguna iglesia grande, presentar personas aptas para todos los beneficios mayores o menores, religiosos, seculares y los beneficios consistoriales de un año de vacancia.¹¹⁵

La evangelización justificaba la cesión de todos esos derechos, por lo que de ella se hacían responsables todas las autoridades civiles y eclesiásticas que habitaban en las Indias y por ende en Nueva España, en un principio la labor quedó mayormente en manos del clero regular, el problema residía en que éste actuaba con gran independencia, pues dependían directamente del Papa, al rey sólo le correspondía designar el lugar donde había que adoctrinar y sus ministros fijaban los límites de las diócesis, por lo que el Concilio de Trento representó la incorporación de las doctrinas a la jerarquía eclesiástica.¹¹⁶

A partir de las donaciones y el Concilio de Trento, la situación se volvió más compleja, pues el rey se convertía en la cabeza del gobierno civil y espiritual, en todo caso, todos los caminos conducían al rey. Por ello, el Patronato se convirtió en un instrumento de suma importancia para la corona española, por medio del cual se aseguraba que la Iglesia americana funcionara como su auxiliar, por lo que se transformó al clero en un objeto de servicio social, en el cual se podía confiar para aplicar las órdenes reales. Sin embargo, la corona debía ser cauta, por lo que solía elegir a los eclesiásticos más cooperativos para los cargos más elevados. Así mismo, el clero comenzó a tomar consciencia de que el ascenso en sus carreras dependía del nivel de colaboración con las autoridades y leyes de la monarquía. Este tipo de control fue más común dentro del clero secular, ya que el nivel de injerencia de la corona sobre los regulares se limitaba a controlar la elección de misioneros que podían entrar o salir de las Indias.¹¹⁷

¹¹⁵ En la Europa cristiana, el derecho de presentar al obispo, ministros idóneos para ejercer el culto de ella. Si el fundador era el rey, el patronato se consideraba real. María del Refugio GONZÁLEZ, "Supremacía del Estado sobre las Iglesias", en *La participación política del clero mexicano*. Luis Molina Pineiro, México, UNAM-Facultad de Derecho, 1990, pp. 53-79, pp. 53-56.

¹¹⁶ *Ibíd.*, pp. 57-58.

¹¹⁷ Los últimos Borbones se oponían a la gran independencia del clero regular, pero en lugar de tratar de someterlos al control de patronato, transformaron las misiones y doctrinas en parroquias comunes administradas por seculares. Nancy FARRIS, *La Corona y el Clero en el México colonial 1579-1821*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 25-29.

El Patronato fue evolucionando a lo largo de 300 años de dominación sobre América, durante el siglo XVI, la corona española se mostró al servicio de la fe católica, garantizando la evangelización de las poblaciones conquistadas en América constituyéndose como un sistema de intervención real en asuntos de la Iglesia americana, lo que derivó en el Regio Vicariato que le permitía al rey ejercer en las indias plena potestad canónica disciplinar con la total anuencia del Papa. En el siglo XVIII el Patronato planteó el regalismo, éste posicionamiento asumía que la intervención del rey en asuntos de la Iglesia no era una intromisión, sino un derecho inherente a la corona.¹¹⁸

A inicios del siglo XIX las prerrogativas del Patronato abarcaban desde los nombramientos de eclesiásticos, la disciplina del clero, el destino de los bienes y las rentas eclesiásticas, el *pase regio*, es decir la documentación y decisiones emitidas por el Papa debían ser revisadas por la autoridad real para determinar su aplicación en los territorios americanos o la intervención en los recursos de fuerza que se empleaban cuando la justicia eclesiástica agraviaba a un súbdito. Culminados los procesos de emancipación, los nacientes gobiernos americanos trataron de adjudicarse el derecho del patronato, no sin enfrentar la resistencia del Santo Padre, las autoridades eclesiásticas y parte de los hombres en el poder, lo que derivó en largos debates sobre la naturaleza y conveniencia de que las nuevas naciones se arrogaran ese derecho.¹¹⁹

Cuando se logró la independencia mexicana se hizo necesario replantear las nuevas relaciones de la Iglesia con el nuevo gobierno. De entrada, para 1822 ésta había declarado el cese del Patronato por lo que quedaba en manos del gobierno buscar un concordato con el Santo Padre. En 1824 el Congreso nombró a Francisco Pablo Vázquez para el cometido, solo que el escenario adverso nacional marcado por la polarización política retardó el proceso; mientras que, a nivel internacional, Fernando VII presionaba a la Santa Sede para impedir un

¹¹⁸ Alberto DE LA HERA, Rosa Ma. MARTÍNEZ DE CODES, "La Iglesia en el ordenamiento jurídico de las leyes de indias" en Francisco DE ICAZA DUFOUR (Coord.), *Recopilación de las leyes de leyes de los reynos de Las Indias. Estudios Histórico-jurídicos*, México, Miguel Ángel Porrúa, 1987, pp. 112-113.

¹¹⁹ Lucrecia Raquel ENRÍQUEZ, Rodolfo AGUIRRE. El patronato de la Iglesia americana: de la Monarquía a los Estados nacionales, *Historia Crítica*, [online]. 2014, No. 52, pp. 13-14. Andrés LIRA GONZÁLEZ, "Jurisdicción eclesiástica y potestad pública en México, 1812-1860", en Juan Carlos CASAS GARCÍA, Pablo MIJANGOS Y GONZÁLEZ (Coords.), *Por una Iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía, primer arzobispo de Michoacán (1810-1868)*, México, Universidad Pontificia de México, El Colegio de Michoacán, 2014, p. 256.

acercamiento entre ésta y el gobierno mexicano. Fue hasta 1830 que Vázquez logró una victoria: el nombramiento de obispos. Más allá de lo conseguido por este eclesiástico las relaciones con el Papado serán complicadas, pues el reconocimiento de independencia tardaría en llegar todavía.¹²⁰

El caso novohispano no escapó a estos lineamientos generales y a lo anterior se debe agregar que el clero era la autoridad espiritual del Dios cristiano ante una población conquistada que heredó una tradición profundamente reverencial hacia la clase sacerdotal del pasado precolombino y que permaneció en una especie de tutelaje durante el periodo colonial.¹²¹ El clero novohispano tuvo enorme influencia sobre buena parte de la población, especialmente en los pobres que vivían en las ciudades y la población rural cuya vida giraba en torno de la Iglesia a través de los festejos religiosos y la organización social por medio de las cofradías. Las órdenes religiosas administraban la mayoría de los orfanatos, hospitales y escuelas, mientras que los Colegios y Universidades tenían un buen número de eclesiásticos en su plantilla de maestros, así como el control demográfico.¹²²

La corona era consciente de la influencia clerical y del respaldo que la Iglesia le brindaba a sus políticas frente a la sociedad; por lo mismo, la actividad del clérigo será un elemento muy importante a observar: “de la conducta que tenga el clero dependerá en mucha parte la de los pueblos”; por ello consideraba al eclesiástico “de mala vida” como promotor del desorden público. A pesar de que el monarca español era el Patrono de la Iglesia, la fiscalización y sanción a los eclesiásticos tendía a ser una complicación derivada de la inmunidad de que gozaban los miembros de la Iglesia. En este caso, el fuero garantizaba la exención de cualquier acción judicial si ésta no provenía de un juez eclesiástico y por otro lado, el canon protegía al eclesiástico de cualquier acto de violencia física, desde el arresto hasta la tortura, y de cualquier forma de castigo temporal como la prisión o la muerte.¹²³

¹²⁰ Josefina Zoraida VÁZQUEZ, “Federalismo, reconocimiento e Iglesia”, en Manuel RAMOS MEDINA (Comp.) *Historia de la Iglesia en el siglo XIX*, México, El colegio de México-El Colegio de Michoacán-Instituto de Investigaciones José María Luis Mora-UAM-Iztapalapa-Centro de Estudios de Historia de México, 1998, pp. 99-100.

¹²¹ Nancy FARRIS, *La Corona y el Clero*, p. 13.

¹²² *Ibíd.*, p. 14.

¹²³ *Ibíd.*, pp. 16-17.

Es de remarcar que el empoderamiento del clero tiende a ser una característica inherente en el periodo y en el territorio de la monarquía española, pero éste no es homogéneo, toma sus propios matices de acuerdo a cada región y circunstancias históricas concretas, lo cual no es objeto de este apartado.

Ese pilar de la sociedad novohispana, el clero secular, vivía inmerso en profundas diferencias, pues había ministros de Dios que poseían fortuna propia y vivían entre la élite cultivada en las sedes de los obispados sin ocupaciones parroquiales y los que no, eran empleados como rectores de seminarios, vicarios generales y asesores legales de obispado. Fuera de este espacio se distribuían en las parroquias en calidad de titulares, interinos o coadjutores y los estipendios de que gozaban dependían de la riqueza del lugar y del tipo de nombramiento. A su vez, existían los sacerdotes “sin destino”, quienes celebraban misa solamente, otros obtenían licencias e impartían sacramentos, confesaban y predicaban, por lo que en esta situación las capellanías eran una opción atractiva pues el estipendio era fijo bajo la obligación de celebrar misas de aniversarios y especiales para los difuntos. Finalmente, también existían eclesiásticos que vivían de las limosnas o de la caridad del cura de la localidad.¹²⁴

De entrada, estos elementos demuestran que la Iglesia novohispana no era monolítica y a estas circunstancias se debe agregar el hecho de que la insurgencia polarizó aún más al clero, pues en medio de la guerra fueron los curas párrocos, generalmente, los que abrazaron la causa, mientras que la alta jerarquía eclesiástica, en su gran mayoría, se adhirió al sistema virreinal y condenó el hecho a través de escritos y de la excomunión.¹²⁵

Una vez planteado este breve contexto, se parte de la crisis política que abren las abdicaciones y dentro de las acciones emitidas estarían acompañadas de manifestaciones religiosas al tiempo que los eclesiásticos tendrán una notoria participación. Para el caso de la península, Antonio Moliner afirma que en 1808 la religión católica era la base principal de la política, y del modo de organizar la vida civil. En Almonte, una vez leído el bando de la Junta onubense, se convocó un cabildo en la iglesia con representación de las autoridades y personajes

¹²⁴ William B. TAYLOR, *Ministros de lo sagrado*, Tomo I, México, El Colegio de Michoacán, Secretaría de Gobernación, El Colegio de México, 1999, pp. 113-114.

¹²⁵ Anne STAPLES, “Clerics as politicians”, p. 223.

distinguidos del lugar. Con el ejemplo, el autor enfatiza que la resolución del ayuntamiento fue de tipo religioso pues se determinó hacer rogativas, celebrar una misa cantada y un rosario para invocar apoyo de la Virgen del Rocío e iniciar el alistamiento de los mozos.¹²⁶

Las manifestaciones religiosas en estos procesos serán muy comunes, al grado de institucionalizarse en la Constitución de Cádiz rogaciones el día de las elecciones. Si se desciende al proceso de conformación de las juntas u órganos que se articulan para hacer frente al vacío de poder, la presencia del clero es evidente. Antonio Moliner además de mostrar que las juntas conformadas no siempre siguieron los mismos procedimientos para su integración, en los casos que las fuentes se lo permiten, detalla el número de vocales, la actividad que desempeñaban o la institución a la que pertenecían. De los datos que sí se pueden leer bajo este esquema destaca la Junta de Sevilla: 5 de sus miembros eran eclesiásticos; la Junta Suprema Gubernativa del reino de Jaén se integró por 36 vocales de los cuales 8 eran clérigos; la Junta de Granada con 18 de 41. La de Málaga tuvo 3 de 13 vocales, la de Cádiz con 3 de 18; la Junta de Almería integró 3 clérigos, la Suprema Junta de Cataluña con 68 de 218; la Suprema Junta de Mallorca 5 de 25, la Junta de Valencia con 13 de aproximadamente 50 miembros; la Junta de Alcoy tuvo tres eclesiásticos; la Junta de Zamora, presidida por el obispo, con 5 de los 15 vocales que la conformaron; la de Astorga se compuso de 28 miembros: 12 del estamento nobiliario, 12 del eclesiástico y 4 del tercer estado; la Coruña con 46, 11 eclesiásticos y la de Vigo contaba con uno solo de esta clase.¹²⁷

La introducción del sistema representativo, como medio de legitimación de las nuevas formas de gobierno, trajo como consecuencia los procesos electorales, en los cuales los curas párrocos realizaban toda una serie de actividades, pues participaban en la organización de la junta, votaban, podían ser nombrados electores, decían misa y predicaban sobre la trascendencia del acto electoral.¹²⁸

Así como la eclosión juntera dio amplio margen de participación a los eclesiásticos, ocurre algo similar con las Cortes de Cádiz. En el caso de la región

¹²⁶ Antonio MOLINER PRADA, "El Movimiento juntero en la España de 1808", p. 59.

¹²⁷ *Ibíd.*, pp. 62-68.

¹²⁸ Reynaldo SORDO CEDEÑO, "Los congresistas", pp. 556-557.

catalana los diputados eclesiásticos en las Cortes extraordinarias integraron a Jaume Creus i Martí y Josep Espiga i Gadea quienes eran miembros de cabildos catedralicios, además de Francesc Morros, Francesc Papiol, Ramon de Lladós y Fèlix Aytés. Los diputados eclesiásticos a Cortes ordinarias fueron Josep Llozer, Bonaventura Marés y Marià Ros i Coll.¹²⁹

Respecto a la participación de los americanos en Cádiz de 1810 a 1814, Marie Laure Rieu-Millan maneja que de 87 representantes 27 eran eclesiásticos, solo superados por los abogados que sumaban 28 diputados. El territorio con mayor número de clérigos era la Nueva España con 14, seguido por 6 que eligió el virreinato del Perú, 3 la Capitanía General de Guatemala, 2 el virreinato de Buenos Aires y uno por el virreinato de Nueva Granada. Estos eclesiásticos se desempeñaban como curas o como miembros de algún Cabildo catedralicio, aunque varios de ellos serían nombrados obispos en 1814. La explicación a todo lo anterior la basa en que los electores depositaron su confianza en primer lugar en eclesiásticos y en segundo en hombres que tenían formación jurídica, hombres con cultura, competencia, bien acreditados y conocidos por su honorabilidad que se habían licenciado o doctorado en derecho o teología.¹³⁰

Gustavo Peña establece que de 1811 a 1812 el territorio novohispano había elegido 17 diputados de los cuales 12 eran eclesiásticos y de los que solo da el nombre de 10: José Ignacio Beye Cisneros por el reino de México, José Simeón de Uria por Guadalajara, Antonio Joaquín Pérez por Puebla, Miguel González Lastiri por Mérida de Yucatán, José Eduardo de Cárdenas por Tabasco, José Miguel Guridi y Alcocer por Tlaxcala, José de la Garza por el Nuevo Reino de León, Juan José Guereña por Durango, Miguel Ramos Arizpe por Coahuila y Miguel Gordo de Zacatecas. El ocupar estos cargos podía conducir a una mejora en su carrera, como la obtención de una prebenda o un obispado.¹³¹

Si bien la presencia de miembros de la Iglesia novohispana fue notable en la Cortes de Cádiz, no fue la excepción, es cuestión de volver la mirada al movimiento insurgente y proceso de institucionalización. Es del dominio que sus dos líderes más importantes fueron eclesiásticos: Miguel Hidalgo y Costilla y

¹²⁹ Antoni SANCHEZ I CARCELÉN, "Eclesiásticos catalanes", pp. 119-120.

¹³⁰ Marie Laure RIEU-MILLAN, *Los Diputados Americanos*, pp. 58-60.

¹³¹ Gustavo PEÑA HERNÁNDEZ, "La participación de los eclesiásticos", pp. 32-33.

José María Morelos y Pavón. Fueron nombrados diputados del Congreso de Chilpancingo los eclesiásticos José Manuel Herrera Sánchez, José Sixto Verduco, José Francisco Pedro de Angándar y García, José María Morelos y Pavón, José María Cos y Manuel Sabino Crespo quien no se presentó a desempeñar su encargo.¹³² Como ya se ha señalado en páginas anteriores, la Junta de Jaujilla integró a Felipe Carvajal cuya formación era clerical, quien se incorporará a la tercera legislatura Michoacana de 1829 a 1830.

Partiendo de Cádiz hasta finales de la primera República Federal, Reynaldo Sordo Cedeño habla de una confusión entre los dos reinos –civil y eclesiástico-, la cual no sólo se encontraba en el nivel institucional, sino que, permeó en las conciencias de los individuos, durante todo el periodo colonial y se extendió hasta la Reforma. Por ello, para la primera República federal fue común encontrar fuertes tensiones individuales e institucionales entre los dos reinos y conflictos sin solución que vivieron los eclesiásticos.¹³³

Desde las Cortes de Cádiz se hizo visible la notoria presencia de los eclesiásticos en su interior; años después en México, a los inicios de la primera República federal, José Joaquín Fernández de Lizardi se manifestaba en contra de la amplia participación de los eclesiásticos en los congresos que parecían más bien concilios y por tanto no era de extrañarse las medidas antiliberales; como la intolerancia religiosa proclamada en el artículo 3º de la Constitución de 1824.¹³⁴

El primer Congreso constituyente nacional fue el único que discutió con cierta profundidad el tema de la representación eclesiástica en los Congresos, pues se argumentaba en su contra el poder de influencia que ejercían sobre las personas, su tendencia a preservar sus privilegios y que sus ideas no iban en el sentido de los intereses de la sociedad. El resultado del debate fueron ciertas restricciones en la ley electoral para diputados nacionales del 17 de junio de 1823, aun así, los eclesiásticos lograron una importante representación al interior del Congreso federal.¹³⁵

¹³² Carlos HERREJÓN PEREDO, "Autores de la Constitución", pp. 57-72. Otro texto, aunque menos actualizado pero que puede ayudar a completar el trabajo de Carlos Herrejón. Ana MACÍAS, "Los autores de la Constitución de Apatzingán", en *Historia Mexicana*, (80), Vol. XX, núm. 4, México, El Colegio de México, abril-junio de 1971.

¹³³ Reynaldo SORDO CEDEÑO, "Los congresistas", p. 554.

¹³⁴ *Ibíd.*, pp. 557-559.

¹³⁵ *Ibíd.*, pp. 560-561.

Por otra parte, no se puede perder de vista que, al lado de la inserción del clero en los nuevos órganos de gobierno del México independiente siguiendo las prácticas de la última década, se encontraba la declaración de una nación católica y todo lo que ello llevaba implícito. El Plan de Iguala de 1821, salvaguardaba la religión, protegía al clero y, por ende, a la Iglesia. Con la caída de Iturbide en 1823, los ataques debido a su poder y bienes se intensificaron por parte de los grupos influenciados por el liberalismo. Entonces, el gobierno nacional se dio a la tarea de poco a poco expulsar a la Iglesia de los ámbitos que consideraba como suyos. La Iglesia tenía la estructura de la cual carecía la nación mexicana, por lo que era necesario restarle poder, quitarle facultades que pasarían a su control y manejo.¹³⁶ Ese fue un proceso de largos y fuertes desencuentros que legalmente vio su fin en la Constitución de 1857.

De 1821 hasta 1824 constituyó un intensivo periodo de ensayo sobre el tipo de Estado que se debía de erigir en la nueva nación mexicana. Cuando se establece la República federal en 1824 la estructura corporativa propia de la sociedad de antiguo régimen quedó ilesa; esas corporaciones eran tanto civiles como religiosas -cabildos eclesiásticos, universidades, consulados de mercaderes, cofradías, órdenes religiosas, hospitales, montepíos, entre otros – las cuales desempeñaban innumerables funciones públicas y civiles. La salud pública, la beneficencia, la educación primaria y universitaria, además de las funciones espirituales seguían dependiendo de las instituciones corporativas tradicionales.¹³⁷

Como se ha advertido, la Iglesia tenía gran participación en el ramo de educación y beneficencia, pero también era un importante propietario de bienes raíces, tanto urbanos, como rústicos; los cuales estaban casi siempre arrendados. Aunado a ello, tenía en sus juzgados de capellanías un banco

¹³⁶Gustavo SANTILLÁN, "La secularización de las creencias. Discursos sobre la tolerancia religiosa en México 1821-1857", en Álvaro MATUTE (Coord.), *Estado, Iglesia y sociedad en México en el siglo XIX*, México, Universidad Autónoma de México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1995, pp. 177-178, 194.

¹³⁷ Ese tinte corporativista que caracterizó a la República mexicana en su origen, se transformó hacia la mitad del siglo XIX en un anticorporativismo, el cual reformó en cierta medida a la nación mexicana en la segunda mitad de ese siglo. Annick LEMPÉRIÈRE, "De la República corporativa a la nación moderna" en Antonio ANNINO, Francois Xavier GUERRA, *Inventando la nación, Iberoamérica siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 324-325.

hipotecario que prestaba a los terratenientes, tanto urbanos como rústicos al 5 y 6% de interés anual.¹³⁸

Con este tipo de acciones esta institución había logrado un ascendente aprecio en el corazón del pueblo. Al tiempo que con esas obras demostraba su caridad y poder económico.¹³⁹ Bajo este escenario, la buena disposición y los bienes de la Iglesia eran el mejor sostén de la beneficencia social, el crédito público y la prosperidad de la nación mexicana.¹⁴⁰

De acuerdo con Brian Connaughton, el gobierno contaba con el apoyo total de la Iglesia, al tiempo que esperaba que ésta se sometiera a su autoridad en lo civil a cambio de una amplia jurisdicción en materia espiritual, educativa y de beneficencia. Por ello, si la Iglesia no cooperaba para resolver los problemas que enfrentaba la nación, no se justificaba su engrandecimiento social y económico. Y es que finalmente como lo expresó en su momento Manuel Abad y Queipo, la Iglesia mexicana tenía sus privilegios especiales en la sociedad, pero estos iban a la par de los servicios que prestaba a la misma la nación.¹⁴¹

Como ya se vio, las contribuciones de la Iglesia para con la nación y con la sociedad eran varias y muy importantes, por las que a cambio recibía exenciones de impuesto a la transferencia de propiedades, de los impuestos de la propiedad personal y de los impuestos personales a cosas como el alojamiento

¹³⁸ Jean BAZANT, *Los bienes de la Iglesia (1856-1875) Aspectos sociales de la revolución liberal*, México, El Colegio de México, 1971, pp. 10-12.

¹³⁹ Brian CONNAUGHTON, *Dimensiones de la identidad patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo XIX*, México, Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa, 2001, p. 15.

¹⁴⁰ Brian CONNAUGHTON, "El clero y la fundamentación de Estado Mexicano", en Brian CONNAUGHTON, Andrés LIRA GONZÁLEZ, (Coords.), *Las fuentes eclesásticas para la historia social de México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Mora, 1996, p. 357.

¹⁴¹ Brian CONNAUGHTON, "El ocaso del proyecto de "Nación Católica". Patronato virtual, préstamos y presiones regionales, 1821-1856", en Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo, *Construcción de la legitimidad política en México*, México, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, 1999, p. 232. Brian Connaughton ha desarrollado una amplia producción historiográfica sobre el tema de la religión en el nuevo escenario político del México independiente, a manera de ejemplo se puede citar: CONNAUGHTON, Brian, "El Constitucionalismo político-religioso. La Constitución de Cádiz y sus primeras manifestaciones en el Bajío mexicano y zonas aledañas", *Relaciones*, No. 147, El Colegio de Michoacán, verano de 2016; "Escollos republicanos: Iglesia y Federalismo en la primera república mexicana", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, El Colegio de México, 2012; "El piso se mueve: religión, clero y feligreses en la nueva época política", en Brian CONNAUGHTON (Coord.), *1750-1850: La independencia de México a la luz de cien años*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ediciones del Lirio, 2010; *Dimensiones de la identidad patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo XIX*, por mencionar solo una pequeña parte de su trabajo.

y la reparación o construcción de muros, puentes y fuentes, además de que el clero era juzgado por tribunales especiales.¹⁴²

Será justo este escenario el de una institución con fuerte influencia y control sobre la sociedad, con un importante poder económico, cuyos miembros preservan privilegios como el fuero, quien se enfrenta y defiende sus prebendas ante un gobierno débil que pretende someterla y servirse de ella como en el periodo virreinal, pero que, además dentro de la estructura legislativa alberga eclesiásticos que son juez y parte en los conflictos que enfrentarán el poder civil y el eclesiástico. De acuerdo con las Constituciones locales redactadas de 1824 a 1827, ningún estado permitía que el ejecutivo fuera ejercido por un eclesiástico, a excepción de Oaxaca que no hizo mención al respecto, mientras que el Estado de México no admitía para el cargo al gobernador de la mitra.¹⁴³

La Constitución de 1824 no le permitió el acceso al legislativo federal a la alta jerarquía de la Iglesia, ni a miembros del clero regular, pero sí les permitió ser electos a los párrocos o eclesiásticos que no tenían asignada una función dentro de la Iglesia. Seis estados siguieron lo establecido por la Constitución federal, Tabasco no ponía restricción alguna al respecto y Jalisco sancionó que ninguna persona que gozara de fuero eclesiástico fuera electo. Cinco estados descalificaron a los miembros del clero regular, mientras que Querétaro no aceptaba clérigos que ejercieran jurisdicción contenciosa en el estado.¹⁴⁴

En el campo legislativo a nivel nacional, Reynaldo Sordo Cedeño advierte que para el caso del Congreso constituyente, en la comisión de Constitución se encontraban los eclesiásticos Miguel Ramos Arizpe, José de Jesús Huerta y Tomas Vargas. Así mismo los mejores discursos respecto a la soberanía de los estados fueron presentados por los eclesiásticos: Ramos Arizpe, Juan Cayetano Gómez de Portugal, fray Servando Teresa de Mier y José Luciano Becerra. Con ello este autor corrobora que los eclesiásticos no estaban en el Congreso sólo para defender los intereses de la Iglesia y ésta no era monolítica, conservadora e impermeable a nuevas ideas.¹⁴⁵

¹⁴² Robert KNOWLTON, *Los bienes del clero y la reforma mexicana, 1856-1910*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 35-36.

¹⁴³ Anne STAPLES, "La participación", en Brian Connaughton, Andrés Lira González, *Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto José María Luis Mora, 1996, p. 337.

¹⁴⁴ *Ibíd.*, pp. 337-338.

¹⁴⁵ Reynaldo SORDO CEDEÑO, "Los congresistas", pp. 564-565.

Así mismo, en los cinco Congresos constitucionales de la primera República federal, la presencia de los eclesiásticos al interior de la Cámara de diputados y la Cámara de senadores fue alta. En ellas los eclesiásticos en promedio representaron un 33.8% teniendo su mínimo en el Congreso de 1833-1834, con 20% y su máximo en el de 1829-1830 con un 50%. Para el senado, el promedio de eclesiásticos fue de 28% con un mínimo de 18% en el de 1827-1828 y un máximo del 37% en el de 1831-1832.¹⁴⁶

Sordo Cedeño advierte que, al tocar los temas vinculados a la Iglesia, los debates se volvieron acalorados, fraccionados e intolerantes y en medio de ellos estuvieron los eclesiásticos. El tema del Patronato constituyó uno de los puntos más complejos a tratar al interior del legislativo y las posiciones al respecto serían variadas. Algunos eclesiásticos veían compatibilidad entre la libertad de la Iglesia y los derechos del Estado Mexicano, la mayoría de ellos se vincularon a los posicionamientos radicales y otros más adoptaron posturas ultramontanas defendiendo los derechos y privilegios de la Iglesia.¹⁴⁷

Referente a las legislaturas locales es poco lo que se conoce sobre el nivel de participación que tuvieron los eclesiásticos durante este periodo, lo que sí se puede ir rastreando es su presencia. A modo de ejemplo en el estado de Veracruz quince eclesiásticos fueron parte del Congreso de 1824 a 1834. Para el Constituyente fueron electos: José Francisco Quintero, Dr. Francisco García Cantarines y como suplente Lic. José Miguel Sánchez Oropeza. En los Congresos estatales ordinarios estuvieron presentes, en la legislatura I (1815-1826) José Antonio Sastré y Manuel María Carvajal, en la legislatura II (1827 y 1828) Manuel María Fernández. La III Legislatura, la instalada en Jalapa, fue la que mayor número de eclesiásticos albergó, pues reunió a Juan Nepomuceno Fernández de Uloa, Pablo Tasorelo, Victoriano Sánchez, Gabriel Ferra -antiguo franciscano secularizado- y de nuevo Manuel María Fernández y en la III legislatura instalada en Coatepec estuvieron el Lic. Ramón María Terán y José Domingo Issasi. En la IV de nuevo Gabriel Ferra y en la IV del Puerto de Veracruz el Lic. Ramón María Terán.¹⁴⁸

¹⁴⁶ *Ibíd.*, p. 565.

¹⁴⁷ *Ibíd.*, p. 566.

¹⁴⁸ David CARVAJAL LÓPEZ, *La política eclesiástica*, pp. 41-42.

La legislatura Constituyente de Puebla integró ocho eclesiásticos: Dr. Francisco Pablo Vázquez, Dr. José Manuel Couto, Dr. José María Oller, Dr. Luis Mendizabal y Lic. Juan Nepomuceno Quintero en calidad de propietarios y los dos primeros eran miembros del Cabildo Catedralicio de Puebla. En calidad de suplentes, Lic. Antonio María de la Rosa, Lic. Mariano Paz y Sánchez y el Lic. Mariano Garnelo. El primer Congreso integró seis eclesiásticos, cinco propietarios y dos suplentes.¹⁴⁹

En el caso del Estado de Occidente -más tarde el estado de Sonora y Sinaloa- se registran de 1824 a 1831 nueve eclesiásticos: José María Orrantía, Antonio Fernández Rojo y Alcalde, que resultó electo en dos ocasiones, Antonio Iriarte quien también se desempeñó como diputado en dos legislaturas, Carlos Espinoza de los Monteros, José Salvador Salido y González, Juan Elías González Romo de Vivar, Juan Francisco Escalante y Moreno. Mientras que el Constituyente de Sonora 1831-1832, contó con Manuel María Encinas y Salvador Julián Moreno, de 1832 a 1835 fueron electos Manuel de Jesús Vázquez y José Santiago Domínguez de Escobosa, José Joaquín García Herreros y Juan Elías González Romo de Vivar que ya había sido diputado por el Estado de Occidente.¹⁵⁰

En el caso michoacano, fueron nombrados diputados ya fueran en calidad de propietarios o interinos José María Rayón, Juan José Pastor Morales, Manuel de la Torre Lloreda, Ignacio Ocampo, Pablo José Peguero, Ignacio Villavicencio, Juan Nepomuceno Sierra, Luciano Farías, Joaquín Ladrón de Guevara, Martín García de Carrasquedo, Felipe Carvajal, Tomás Arriaga, Luis Soria, Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Manuel Tiburcio Orozco, Lorenzo Auriolles, José María Cavadas, Manuel Leyva, Antonio de la Peña y Rafael Guedea, varios de ellos electos en más de una ocasión y de los cuales sólo uno se desempeñaba como prebendado del cabildo de Michoacán. la mayoría de ellos eran solo bachilleres y unos cuantos ostentaban el título de licenciados.

Una situación diferente presentó Zacatecas, que el 12 de agosto de 1830 decretó que los eclesiásticos ya no podían participar en la política, por lo que el

¹⁴⁹ Ramón SÁNCHEZ FLORES, *Relación Histórica del Congreso del Estado de Puebla. Corporación, legislaturas y Recintos Parlamentarios, 1821-2001*, Puebla, Congreso del Estado de Puebla, 2001, pp. 69, 74.

¹⁵⁰ Ignacio ALMADA BAY, José Marcos MEDINA BUSTOS, *Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000*, México, Cal y Arena, 2001, pp.487-495.

acceso al legislativo les fue negado, la decisión se tomó en medio de las ideas liberales que veían en este tipo de hombres remanentes del viejo sistema que complicaban la aplicación del proyecto liberal por el que atravesaba el estado, que dicho sea de paso era de los más radicales junto a Jalisco.¹⁵¹

La particularidad zacatecana dicta que de 1824 a mediados de 1830 se les permitió a los eclesiásticos ser parte del legislativo y de participar dentro de la política, pero la radicalización del pensamiento de esos años les cerró esa posibilidad en la práctica. En teoría su presencia en los órganos de gobierno comenzó a cuestionarse y si bien no fueron expelidos, al menos en los casos del Congreso general y del Congreso local el número de diputados eclesiásticos tiende a disminuir a partir de 1833. Es decir, con la crisis del federalismo, el cuestionamiento sobre la presencia y participación de los ministros de Dios en los órganos de gobierno se radicaliza.

Lo anterior, aunque sólo son ejemplos aislados, deja a la vista la presencia de eclesiásticos en los Congresos nacionales y estatales de 1824 a 1835, pero además permite preguntarse sobre su contribución en la construcción de un nuevo marco jurídico, la articulación de las nuevas instituciones y la trascendencia de su labor legislativa dentro de la construcción de los nuevos estados y el nuevo país. Por otro lado, estos casos dejan ver que las bases electorales que crearon los estados les permitieron acceder a los órganos de representación sin mayor problema, al parecer, o al menos es lo que aplica para Michoacán.

¹⁵¹ Rosalina RÍOS ZÚÑIGA, "El ejercicio del patronato y la problemática eclesiástica en Zacatecas durante la Primera República Federal (1824-1834)", *Historia Crítica*, 2014, No. 52, pp. 66-67.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 1824-1835

2.1. Las reglas del juego. Las convocatorias para los Congresos michoacanos de 1824 a 1834

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior el proyecto del *Acta Constitutiva Federal* se presentó el 20 de noviembre de 1823, su discusión inició el 3 de diciembre, finalmente fue firmada el 31 de enero de 1824. En ella se estableció una República popular federal, integrada por estados libres, soberanos e independientes, así como la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial.¹⁵² Sin embargo, el proceso de transición de las diputaciones provinciales a estados comenzó el 1º de julio de 1823 con Oaxaca y terminó en septiembre de 1824 con el estado de Chiapas, a su vez la diputación provincial de Valladolid hizo lo correspondiente el 22 de diciembre de 1823.¹⁵³

Con esta declaración y la promulgación del *Acta Constitutiva Federal*, comenzará la articulación del gobierno del estado de Michoacán, el 6 de abril se instaló el Congreso Constituyente en los interiores del Seminario Tridentino (hoy palacio de gobierno del estado de Michoacán).

Fachada e Interior del Palacio de Gobierno



Fotografías tomadas por Nely Noemí García Corona.

¹⁵² Ivana FRASQUET, *Las caras del águila*, pp. 355, 357, 363-365.

¹⁵³ Los estados surgieron de la siguiente manera: Oaxaca el 1º de julio de 1823, Yucatán el 20 de agosto, Jalisco 14 de septiembre, Zacatecas 19 de octubre, México 20 de diciembre al igual Guanajuato, Puebla el 21 de diciembre, el 22 de diciembre se formaron Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y el 23 de diciembre Querétaro. En 1824 surgieron el Estado Interno de Occidente el 10 de enero, Tamaulipas el 7 de febrero al igual que Tabasco, el 7 de mayo Nuevo León y Coahuila y Texas, el 22 de mayo Durango, Chihuahua el 6 de julio y Chiapas en septiembre de 1824. Jaime E. RODRÍGUEZ O., *Nosotros somos*, Tomo II, p. 799.

El Congreso quedó con la potestad para articular el poder ejecutivo y el poder judicial del estado hasta promulgarse la Constitución de Michoacán. El 4 de octubre de 1824 el Congreso general firmó la Constitución de la federación y el 19 de julio de 1825 el Congreso michoacano hizo lo propio. Estos documentos sentaron las bases de la organización de la federación y del estado, pero también consignaron parámetros generales para la elección del poder legislativo federal y estatal.

En 1824 el tema de las elecciones no constituía una novedad para la sociedad mexicana y michoacana, era un mecanismo de legitimación del poder que había hecho su aparición con la Constitución española de 1812 y que después de la independencia se convirtió en la única fuente legitimadora del poder, de las instituciones y de la autoridad, muy a pesar de que entre 1824 y 1835, en algunas ocasiones, el relevo del poder se diera por la vía del pronunciamiento. Por otro lado, no se puede entender del todo la vital importancia de los procesos electorales sin tener presente que además de dotar de legalidad al acceso y ejercicio del poder, las elecciones se constituyeron como espacios de negociación y -agregó- “de confrontación” política entre las diferentes facciones y grupos existentes en el periodo.¹⁵⁴

Por su parte, Antonio Annino propone que la representación impulsada por la Constitución gaditana cambió las relaciones de poder, modificaciones que se vieron reflejadas en las dinámicas de la representación electoral, por lo que el problema no era difundir los nuevos mecanismos de acceso al poder, sino controlar la fragmentación territorial, la diáspora del poder y la soberanía comunitaria para consolidar el centro del nuevo espacio político.¹⁵⁵

A partir de los anteriores referentes es necesario enfatizar que los lineamientos que establecieron la Constitución federal y estatal sobre el tema electoral fueron complementados con leyes convocatorias que debió emitir el legislativo michoacano en el que se retomó el modelo gaditano de la elección en tres niveles. Bajo éstas premisas, los eclesiásticos se visibilizaron en los

¹⁵⁴ Fausta GANTÚS, Alicia SALMERÓN, “Introducción. Prácticas electorales en el México decimonónico”, en Fausta GANTÚS (Coord.), *Las elecciones en el México del siglo XIX. Las prácticas*, México CONACYT, Instituto José María Luis Mora, Tribunal Electoral del Distrito Federal, 2016, Tomo I, pp. 15-16.

¹⁵⁵ Antonio ANNINO, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en Antonio ANNINO (Coord.), Uruguay, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 224.

procesos de elecciones en Michoacán de 1824 a 1834 como electores y en varias ocasiones fueron electos diputados. Si se parte del contenido de las leyes electorales se infiere que en las juntas primarias tenían el derecho a votar y ser votados, en este último caso tomando el elemento de vecindad, pues al desempeñarse como jueces eclesiásticos o curas de almas en el espacio de las elecciones el derecho les era negado. En las juntas secundarias o de partido podían ser electos siempre y cuando no fueran jueces eclesiásticos o curas de almas en la cabecera del partido, por tanto, si se desempeñaban con algunos de estos cargos en cualquier otra población del mismo podían ser electos, o siendo vecinos del espacio que los eligiera, como José María Rayón en la convocatoria del primer constituyente¹⁵⁶ o Manuel Leiva en el segundo constitucional, quien era de Churumuco y resultó electo por Pátzcuaro.¹⁵⁷

Los eclesiásticos en Michoacán no estaban legalmente impedidos para desempeñarse como diputados, siempre y cuando pertenecieran al clero secular y cumplieran con ser michoacanos de nacimiento o siendo vecinos del estado cinco años antes de la elección, teniendo 25 años de edad y no fueran secretarios de gobierno o miembros del Consejo.

En este punto se hace necesario preguntar ¿cuál fue el andamiaje legal que les permitió a los eclesiásticos michoacanos participar en los procesos electorales y llegar al Congreso local de 1824 a 1835?

Con la anuencia de la Constitución federal de 1824, los legislativos de cada estado pudieron crear las convocatorias para diputados federales y elegir senadores, presidente de la República y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Referente a la elección de los diputados federales, la Constitución de 1824 marcaba que las cualidades de los electores se prescribirían por los legislativos locales tomando en consideración los principios marcados en dicho documento, el cual puso como parámetros la base de la población, nombrando por cada ochenta mil almas un diputado o por fracción de cuarenta mil y las respectivas especificaciones para los casos extraordinarios, así como los aptitudes que

¹⁵⁶ *Actas y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, compilación, prólogo y notas de Xavier TAVERA ALFARO, Tomo I, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1975, p. 1

¹⁵⁷ Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en adelante: AHCEMO, Varios I, Caja 2, Exp. 8.

debían reunir los electos, mientras que el senado estaría integrado por dos senadores de cada estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas y renovados por mitad cada dos años.¹⁵⁸

En la elección del ejecutivo federal los Congresos estatales eran responsables de elegir a mayoría absoluta de votos dos individuos uno de ellos no podía ser vecino del estado que lo elegía. Algo similar ocurría con la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la que se realizaba en un mismo día por todas las legislaturas locales a mayoría absoluta de votos. Los resultados en ambos casos eran remitidos al Congreso federal quien se encargaba de contar los votos verificando que estos se hubiesen realizado con apego a la norma para determinar quiénes serían los representantes de dichos poderes.¹⁵⁹

En el caso michoacano tenemos que para la elección de la legislatura constituyente las autoridades locales se ciñeron a las leyes y decretos establecidos por la federación, por tanto, las elecciones de legislaturas ordinarias debieron realizarse con apego a la Constitución Michoacana en la que quedaron dibujadas las reglas básicas para los procesos electorales. En ella se estableció el número de diputados a integrar el Congreso local en los artículos 20 y 21, los comicios se harían con arreglo a la población por lo que se nombraría un legislador por cada veinticinco mil almas o por fracción que excediese la mitad de dicha base la que no era modificable, salvo que ella no diera el número mínimo de 15 propietarios y por cada dos titulares se elegiría un suplente. No obstante, lo anterior no tendría efecto en el primer sexenio, pues se podía aumentar hasta veintiuno el número de diputados cualquiera que fuera la población, según la consideración de las legislaturas, pero sin bajar del mínimo de 15 propietarios. La Constitución de 1825 permitió que cada legislatura fijara el número y la reglamentación de las elecciones, estableciendo en los artículos 24 y 25 los requisitos para obtener el nombramiento.¹⁶⁰

De 1824 a 1835 entraron en funciones una legislatura constituyente y siete ordinarias, de las cuales cuatro fueron electas atendiendo disposiciones federales y las otras cuatro partiendo de lo establecido en la Constitución local.

¹⁵⁸ Felipe TENA RAMÍREZ, *Las leyes fundamentales*, pp. 169, 171.

¹⁵⁹ Cfr. Felipe TENA RAMÍREZ, *Las leyes fundamentales*, pp. 179-180, 186-188.

¹⁶⁰ *Actas y Decretos*, Tomo II, pp. 476-477.

Su periodo de funciones de acuerdo con este documento era de dos años a partir de su promulgación, sólo tres legislaturas cumplieron con el bienio, la primera de agosto de 1825 a agosto de 1827, la segunda de agosto de 1827 a agosto de 1829 y la quinta de febrero de 1833 a diciembre de 1834 que debió trasladarse a Celaya en el mes de junio de 1833 por no encontrar en el estado las condiciones para realizar sus labores legislativas. La tercera legislatura que trabajó de agosto de 1829 a agosto de 1831 es un caso peculiar, que aparentemente cumplió con el bienio, pero para lograrlo fue necesario convocar a elecciones en abril de 1830 para elegir a los diputados que sustituyeran a los anteriores en sus trabajos hasta terminar con el periodo de la misma cuyo funcionamiento fue de agosto de 1830 a agosto de 1831, siendo esta última declarada nula por el quinto congreso el 29 de marzo de 1833.¹⁶¹

Entre las legislaturas que no funcionaron un bienio, se encuentra la constituyente que, por su propia denominación, su vigencia estaba supeditada a la redacción de la primera Constitución estatal. La cuarta inició sus trabajos en agosto de 1831 y se disolvió el 5 de enero de 1833 porque las condiciones políticas y sociales no permitían su operatividad. Mientras que trabajos de la sexta se circunscribieron de enero de 1835 a octubre del mismo año, con amenaza de disolución en el mes de septiembre.

Como ya se manifestó, las convocatorias de elecciones del legislativo michoacano se gestaron atendiendo a la Constitución local y a mandatos federales. En este sentido, dentro de las primeras encontramos la ley de 28 de marzo de 1825 para la primera legislatura ordinaria, la ley del 6 de abril de 1827 para el segundo Congreso, la ley de 26 de diciembre de 1828 para el tercero y la ley del 5 de enero de 1831 para el cuarto. En el segundo caso se encuentra la convocatoria para la elección de la constituyente que se apegó al decreto federal del 8 de enero de 1824 y a ley electoral del 17 de julio de 1823. La elección de la legislatura que completaría el bienio de la tercera obedeció al decreto federal del 16 de abril de 1831 apegándose a la convocatoria de 1829 pero que, al no encontrarse, se infiere pudo ser una confusión y que la ley a la que se recurrió fue la de 1828. La quinta fue electa por petición del gobierno federal siguiendo

¹⁶¹ Cfr., COROMINA, Amador, *Recopilación de Leyes, Decretos, Reglamentos y Circulares expedidos en el Estado de Michoacán*, Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, Tomo I-VII.

lo establecido por la convocatoria del 26 de diciembre de 1828 y la sexta al acatar la orden federal se apegó a la convocatoria del 24 de julio de 1828.¹⁶² Véase al respecto el Cuadro No. 3.

Cuadro No. 3

Convocatorias para la elección de las legislaturas en Michoacán, 1824-1825.

LEGISLATURA	CONVOCATORIA	VIGENCIA	Autoridades a elegir	No. de Diputados
Constituyente	Decreto federal de 8 de enero de 1824 y a la ley electoral federal de 17 de julio de 1823	8 de abril de 1824 al 6 de agosto de 1825	Diputados estatales	11 propietarios 6 suplentes
Primera	Ley electoral de 28 de marzo de 1825	6 de agosto de 1825 al 6 de agosto de 1826	Diputados estatales, terna para gobernador y Consejo de gobierno	15 propietarios 7 suplentes
Segunda	Ley electoral de 6 de abril de 1827	6 de agosto de 1827 al 6 de agosto de 1829	Diputados locales renovación de Consejo por mitad	15 propietarios 7 suplentes
Tercera primer año	Ley electoral de 26 de diciembre de 1828	6 de agosto de 1829 a marzo de 1830	Diputados locales, terna para gobernador y renovación del Consejo por mitad	15 propietarios 7 suplentes
Tercera segundo año	Elección marcada por el decreto federal del 16 de abril de 1830 atendiendo a la convocaría de 1829* (Aun no se encuentra) Se infiere que en realidad se trata	4 de agosto de 1830 al 6 de agosto de 1831	Diputados locales	15 propietarios 7 suplentes

¹⁶² COROMINA, Amador, *Recopilación de Leyes, Decretos...*, Tomo I, pp. 81-90; Tomo II, pp. 82-92; Tomo III, pp. 113-121; Tomo IV, pp. 87-98; Tomo VI, pp. 7-8, 138-139.

	de la convocatoria emitida el 26 de diciembre de 1828 y se aplicó en 1829.			
Cuarta	Ley electoral del 5 de enero de 1831	6 de agosto de 1831 a 5 de enero de 1833	Diputados locales y renovación del Consejo por mitad	17 propietarios 8 suplentes
Quinta	Por decreto federal se ordenaron elecciones y se apegó a la convocatoria electoral de 26 de diciembre de 1828.	19 de febrero de 1833 al 31 de diciembre de 1834	Diputados al Congreso General, diputados locales.	15 propietarios 7 suplentes
Sexta	Atendiendo a circulares federales de realizar elecciones se hizo uso de la convocatoria para diputados federales expedida por el Congreso michoacano el 24 de julio de 1828.	1º de enero de 1835 al 9 de octubre de 1835.	Diputados al Congreso General, diputados locales, terna para gobernador y Consejeros	17 propietarios 8 suplentes

Fuente: Cuadro de elaboración propia. Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde las independencias de la república*, México, Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876, tomo I, pp. 651-657. Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos, Reglamentos y Circulares expedidos en el Estado de Michoacán*, Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, Tomo I, pp. 81-90; Tomo II, pp. 82-92; Tomo III, pp. 113-121; Tomo IV, pp. 87-98; Tomo VI, pp. 7-8, 138-139.

Partiendo de los datos que concentra el cuadro anterior, se establece que la elaboración de leyes electorales durante la primera República en Michoacán se ubicó entre marzo de 1825 a enero de 1831, al menos para el caso de elecciones de autoridades estatales. A partir de esa fecha, las elecciones de la quinta y la sexta legislatura se ciñeron a convocatorias anteriores, en concreto las elaboradas en 1828 tanto para autoridades estatales como para diputados federales, haciendo las especificaciones necesarias en cada caso. Se debe remarcar que, a diferencia de la Constitución de Cádiz, la Constitución mexicana

de 1824 dejó el tema de la representación en manos de las legislaturas locales. En este caso, los constituyentes michoacanos no previeron escenarios adversos que pudieran trastocar los tiempos marcados por la Constitución que elaboraron y eso se refleja en el uso de las convocatorias de 1828 en 1830, 1833 y 1834.

Las convocatorias para diputados federales y estatales siempre se formaron y aplicaron por separado a excepción de lo ocurrido con la quinta y sexta asamblea, en las que se eligieron tanto locales como federales, la primera de ellas atendiendo la de 26 de diciembre para diputados locales y la segunda la de 24 de julio de 1828 que fue diseñada para designación de diputados federales. También se hace referencia a que las leyes electorales no sólo servían para la elección de legisladores, sino que, a través de ellas, se votaba para la terna de gobernador y designación de Consejeros de gobierno.

La convocatoria del 28 de marzo de 1825 incluyó elección de diputados, terna para gobernador y Consejo de gobierno, la del 6 de abril de 1827 para diputados y renovación de Consejo de gobierno por mitad, la del 26 de diciembre de 1828 designó diputados, gobernador, vicegobernador y Consejo de gobierno por mitad. La del 5 de enero de 1831 diputados y Consejo de gobierno por mitad, la convocatoria que se ordenó aplicar el 15 de enero de 1833 incluyó el nombramiento de diputados al Congreso general y particular del estado, gobernador, vicegobernador y consejeros, aunque el Congreso michoacano determinó que no se eligiera terna para gobernador, vicegobernador y miembros de Consejo porque el plan de pacificación no comprendía su renovación.¹⁶³ La última orden para la realización de elecciones en Michoacán bajo el sistema federal se dio el 11 de agosto de 1834 eligiendo diputados federales, estatales, terna de gobernador, vicegobernador y consejeros.

Todas las leyes electorales marcaron la elección indirecta en tres niveles: primarias, secundarias y de estado. Las juntas primarias se debían integrar por los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, la convocatoria para la constituyente contemplaba a los mayores de 18 años vecinos y residentes en el territorio del ayuntamiento. La junta se celebraría en las poblaciones con 500 personas, en el caso de los lugares populosos se hacía preciso dividir a la población en departamentos. El resto de las convocatorias incrementaron el

¹⁶³ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decreto*, tomo VI, p. 8.

rango de edad, estableciendo que las juntas quedaban compuestas por ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de 21 años o 18 siendo casados, la ley para la elección de la cuarta legislatura marcaba lo establecido en los artículos constitucionales 16 y 18, siendo mayor de 25 años y casado después de la reforma a dicho documento, lo que en realidad no se aplicó. La junta se convocaba en las poblaciones con 500 almas en adelante.¹⁶⁴

Sobre atribuciones que permitían votar, acorde a la convocatoria del constituyente lo podían hacer los hombres nacidos libres en el territorio tomando en cuenta lo estipulado por el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Las demás convocatorias otorgaban ese derecho a los ciudadanos nacidos en territorio del estado, los avecindados y los militares de toda clase que cumplieran con el requisito de la edad. No tenían derecho a votar o se suspendía el mismo en caso de ser sentenciado a penas aflictivas o infamantes si no se había obtenido la rehabilitación. La convocatoria para la tercera y la sexta legislatura ordinaria también negaron el ejercicio del voto por sentencia ejecutada en que fueran impuestas penas infamantes y por deuda fraudulenta. La suspensión de los derechos políticos procedía cuando existía incapacidad física o moral, quiebra fraudulenta, deuda a fondos públicos, por no tener domicilio, empleo, oficio o modo de vivir conocido por hallarse procesado criminalmente o por ser sirviente doméstico. La convocatoria para la segunda ordinaria incluyó el ser ebrio consuetudinario o jugador de profesión al igual que la de la sexta.¹⁶⁵

Los electores primarios se eligieron, en el caso del constituyente, uno de cada cien vecinos o quinientos habitantes de todo sexo y edad. La primera legislatura ordinaria se apegó al censo de población de 1822. La de la segunda determinó que en poblaciones de menos de 4000 almas se elegirían 5 individuos, las que tuvieran de 4 a 8 mil 10 y las que pasaran de ese número 20, con la condición de que supieran leer y escribir y la base era uno por cada 500 almas, la de la tercera, uno por cada quinientas almas. Las demás convocatorias se apegaron a lo expuesto en los artículos 20 y 21 de la Constitución del estado y que ya ha sido mencionado. El elector primario debía ser ciudadano en ejercicio

¹⁶⁴ Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana*, Tomo I, pp. 651-657. COROMINA, Amador, *Recopilación de Leyes, Decretos...*, Tomo I, pp. 81-90; Tomo II, pp. 82-92; Tomo III, pp. 113-121; Tomo IV, pp. 87-98; Tomo VI, pp. 7-8, 138-139.

¹⁶⁵ *Ibíd.*

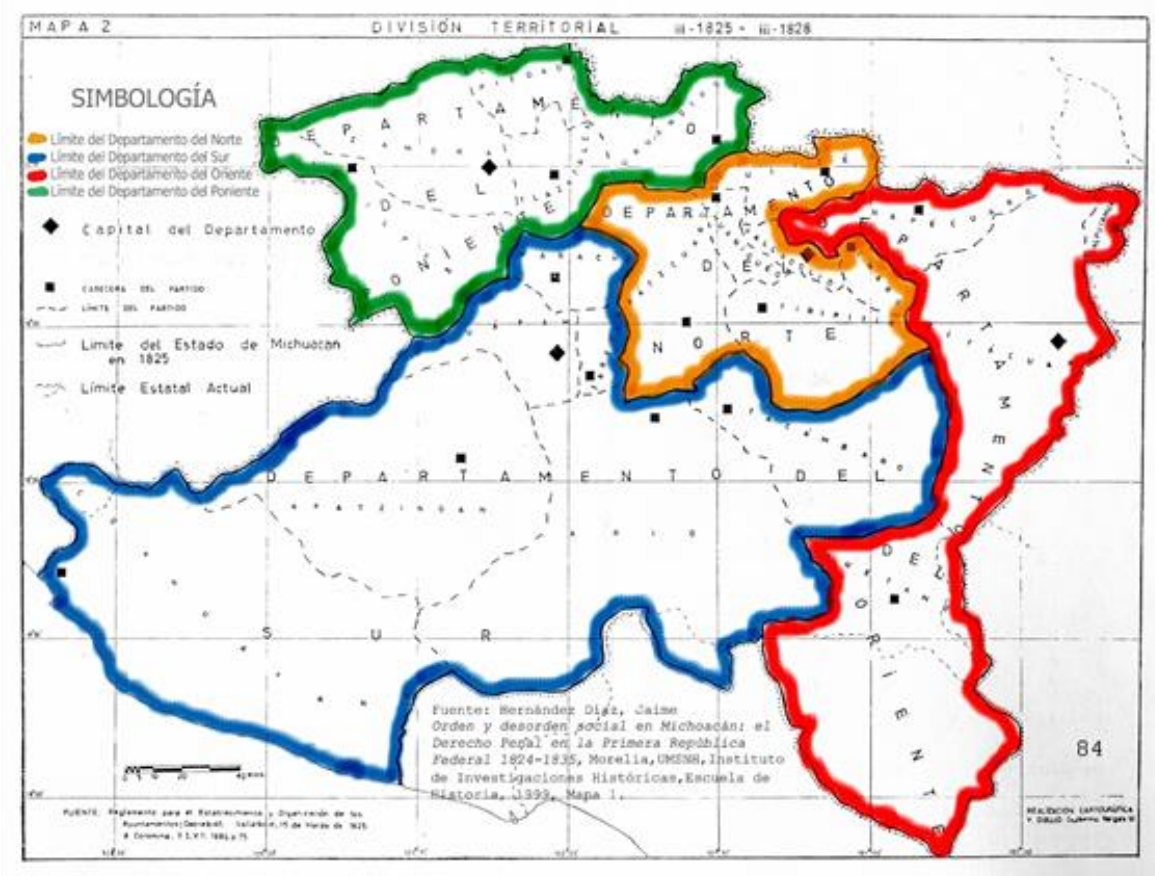
de sus derechos, mayor de 25 años o 21 siendo casado, vecino y residente en aquel distrito o municipalidad o de la junta electoral y no ejercer en el mismo distrito jurisdicción contenciosa, civil, eclesiástica y militar o cura de almas. Solo para la cuarta legislatura se especificó exclusivamente los 25 años de edad y dos de vecindad en el lugar que se celebrara la junta, mientras que los militares debían comprobar una estadía de tres meses.¹⁶⁶

Las juntas secundarias se integraban por los electores primarios congregados en las cabeceras de partido, que durante la primera y la segunda ordinaria fueron 22 partidos, durante la tercera 21 y de la cuarta a la sexta 22 partidos. Por cada 20 primarios se elegía un secundario y por cada mitad se designaría otro y el partido que por su población no reuniera 10 elegiría uno. Para ser elector secundario era necesario ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, con 5 de vecindad y residencia en el partido. Al igual que en los primarios, no podían ejercer jurisdicción contenciosa, civil, eclesiástica o ser cura de almas, la de la constituyente lo señaló para todo el partido, las convocatorias que le siguieron solo circunscribieron la norma a ser cura de almas en la cabecera del partido. De ahí en adelante la elección podía recaer en miembros de la junta o fuera de ella, del estado seglar o del secular eclesiástico.¹⁶⁷

¹⁶⁶ *Ídem.*

¹⁶⁷ *Ídem.*

MAPA 1. División territorial del Estado de Michoacán en 1825 en cuatro departamentos y 22 partidos.



Fuente: HERNÁNDEZ DÍAZ, Jaime, *Orden y Desorden Social en Michoacán: El Derecho Penal en la Primera República Federal 1824-1835*, Morelia, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Escuela de Historia, Morevallado Editores, 1999, Mapa 1.

Las juntas de estado se componían de los electores secundarios de toda la provincia o estado. (Véase Anexo No. 1). La convocatoria para el constituyente marcaba la elección de un diputado por cada 50 000 almas. La ley para la primera ordinaria estableció que por cada 25 000 almas o por fracción que excediera la mitad se elegiría uno, no pudiendo ser menos de 15 propietarios y por cada dos titulares se designaba un suplente.¹⁶⁸

Partiendo de estas premisas, los resultados en cuanto a miembros por legislatura en Michoacán de 1824 a 1835 fue el siguiente. La constituyente se integró siguiendo los márgenes que estableció el gobierno federal, quedando con 11 propietarios y 6 suplentes, las cuatro convocatorias siguientes dotaron a la

¹⁶⁸ Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana*, Tomo I, pp. 651-657. Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo I, pp. 81-90.

primera, segunda, tercera con sus dos elecciones y la quinta de 15 propietarios y 7 suplentes. La cuarta y sexta legislatura quedaron integradas por 17 propietarios y 8 suplentes, atendiendo todas medianamente, a excepción de la constituyente, a la base poblacional.

Para explicar lo anterior se parte de lo establecido en el decreto del 8 de enero de 1824 referente a las legislaturas constituyentes, las cuales quedarían integradas “por esta vez de lo menos once individuos, y a lo más de veintiuno en clase de propietarios; y en la de suplentes no serán menos de cuatro, ni más de siete”.¹⁶⁹ Aunque para 1824 el estado ya contaba con una estadística poblacional realizada en 1822 por Juan José Martínez de Lejarza,¹⁷⁰ esta no pudo ser la base de la elección debido a la disparidad de electos con respecto a la primera ordinaria que sí se apegó al censo de 1822. A pesar de que Michoacán había sido escenario de la guerra para ese año contaba con 365 080 habitantes, en la *Memoria de Gobierno de 1827*,¹⁷¹ que fue presentada en el mes de agosto de ese año, la población aumentó a 406 953, lo que no es proporcional al incremento de 4 diputados propietarios entre una y otra legislatura, por esa razón se sostiene que la constituyente no se eligió con base a la población, de haber sido así se hubiesen elegido 15 diputados propietarios y 7 suplentes. Michoacán se apegó al decreto del 8 de enero de 1824, ciñéndose al margen menor de propietarios y nombró un suplente por cada dos titulares.

Como nota adicional, los Congresos constituyentes estatales que funcionaron entre 1823 y 1827 oscilaron en un rango de 7 a 12 diputados propietarios, a excepción del Estado de México que eligió 19, el de Jalisco se integró por 16, Puebla tuvo 15 legisladores y Oaxaca 14 constituyentes en calidad de propietarios, lo que indica el predominio de Constituyentes estatales pequeños probablemente para facilitar el consenso en los debates. Para una mejor idea, véase el siguiente cuadro.

¹⁶⁹ Manuel DUBLÁN y José María LOZANO, *Legislación mexicana*, Tomo I, pp. 690-692.

¹⁷⁰ Para mayor información véase Juan José MARTÍNEZ DE LEJARZA, *Análisis estadístico de la Provincia de Michoacán en 1822*, Morelia, Fimax, 1974.

¹⁷¹ AHCEMO, Varios I, Caja 2, Exp. 10.

Cuadro No. 4

Diputados Constituyentes propietarios por estado 1823-1824.

Estado	Diputados ordinarios a elegir	Diputados propietarios
Chiapas	10	10
Chihuahua	De 11 a 21	9
Coahuila y Texas	12	10
Durango		12
Guanajuato	De 11 a 15	11
Estado de México	21	19
Jalisco	30	16
Michoacán	Hasta 21	11
Nuevo León	11	11
Oaxaca	10	14
Puebla	12	15
Querétaro	De 13 a 21	8
San Luis Potosí	12	12
Sonora y Sinaloa	11	7

Fuente: Arroyo, Israel, "Los tránsitos de la representación política en México, 1821-1857", en José Antonio Aguilar Rivera (Coord.), *Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910)*, México, Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Federal Electoral, CONACYT, 2010, pp. 86-87.

Volviendo al escenario michoacano, en 1829 se reportaba una población de 422 462 habitantes, lo que fue determinante para el aumento del número de integrantes del legislativo local, no obstante, a principios de enero de 1835 éste número era de 401 391, de acuerdo con las fuentes del gobierno se evidenciaba una disminución poblacional en la entidad de poco más de 20 000 habitantes, la que se puede atribuir al desorden social que imperó de 1830 a 1834 en Michoacán.¹⁷² Finalmente este factor sustenta el incremento de diputados propietarios y suplentes, con certeza, en la cuarta y sexta legislatura. Respecto a la quinta, ésta disminuyó y se compuso de 15 propietarios y 7 suplentes, la explicación estriba en la premura por dotar de un legislativo por las condiciones de inestabilidad política que imperaban en Michoacán, por lo que se aplicó tal cual la convocatoria del 26 de diciembre de 1828.

Lo expuesto se corrobora al ver la cantidad de población a tomarse en cuenta para la elección de cada diputado propietario. La convocatoria de julio de 1823 establecía 50 000 almas por cada diputado, las siguientes convocatorias definieron 25 000 almas por cada propietario.

¹⁷² AHCEMO, Varios IV, Caja1, Exp. 12, f. 9-9v.

La ley para el constituyente estableció que para ser electo diputado los requisitos consistían en ostentarse como un ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, nacido en la provincia o vecino con residencia de siete años del estado seglar o eclesiástico secular, de la junta o fuera de ella. La ley electoral de la constitucional marcaba el haber nacido en Michoacán o tener una vecindad de 5 años, 25 de edad y profesar la religión católica. Las convocatorias para la segunda, tercera y cuarta se debían apegar a lo reglamentado por la Constitución local, en su artículo 24, mientras que la última marcó los artículos 19, 20, 21 y 22 de la federal y 23 y 24 de la estatal.¹⁷³

Las leyes electorales también determinaron los impedimentos para desempeñarse como diputados, dentro de los que figuraban ser miembro del poder ejecutivo, del poder judicial y del cuerpo consultivo, los secretarios de estado o del despacho y ningún empleado público nombrado por el gobierno incluyendo las personas que marcaba la ley del 26 de junio de 1821, lo anterior para la elección de la constituyente. En la siguiente convocatoria quedaban impedidos los privados o suspensos de los derechos de ciudadano, el gobernador, vicegobernador, miembros del Consejo de gobierno, los prefectos, los ministros del Supremo y Superior Tribunal, los empleados de hacienda y los contemplados por el artículo 23 restricción 6ª de la Constitución Federal. Así mismo no podían tomar parte los extranjeros que no acreditaran 10 años de vecindad en el estado y bienes raíces con valor de 10 000 pesos o ejercicio de la industria con una producción de 1 000 pesos anuales, quedando exceptuados los del artículo 21 de la Constitución Federal y les fueran suficientes los del art. 59. Las demás convocatorias hicieron referencia a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución estatal a excepción de la última que marcaba el 24.¹⁷⁴

Todas las leyes electorales que se aplicaron en Michoacán de 1824 a 1834 para la elección de diputados, tanto locales como nacionales, hacían referencia al concepto de ciudadano como requisito para tener derecho a votar en cualquiera de los niveles de la elección. Jaime Hernández establece que la Constitución estatal de 1825 no hacía referencia expresa del concepto de

¹⁷³ Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana*, Tomo I, pp. 651-657. Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos...*, Tomo I, pp. 81-90; Tomo II, pp. 82-92; Tomo III, pp. 113-121; Tomo IV, pp. 87-98; Tomo VI, pp. 7-8, 138-139.

¹⁷⁴ *Ibídem*.

ciudadano, habla sólo de los michoacanos como los individuos nacidos en el territorio estatal y de los mecanismos para serlo en caso de no haber nacido en dicho espacio. Eran atribuciones de los ciudadanos desempeñar cargos de elección popular, sostener las autoridades y las leyes, la independencia, la libertad del estado y contribuir a los gastos públicos. Y permitía a los ciudadanos sufragar en las elecciones para individuos de las municipalidades, diputados, gobernador, vicegobernador y consejo de gobierno y la obtención de los empleos en la entidad. Con la reforma constitucional de 1832, el concepto de ciudadanía se dejó de considerar como un derecho para convertirse en una calidad de los michoacanos.¹⁷⁵

El que no se hiciera una mención expresa del ciudadano en la Constitución de Michoacán de 1825 es reflejo de lo complejo que resultaba definir al ciudadano en estos momentos, porque era un ente en construcción y porque éste se había apropiado de algunos elementos distintivos del vecino, pero sin ser lo mismo. Al respecto, Marta Irurozqui estima que se debe partir de la premisa de que la soberanía de la nación residía en el pueblo, éste se manifestaba como tal eligiendo a sus representantes en las urnas. Las elecciones eran entonces un mecanismo de legitimación periódica del gobierno del pueblo en el que éste último se manifestaba soberano. Por tanto, la importancia de las elecciones estriba en que por medio de ellas se valoró y consolidó la ciudadanía, a través de un largo proceso.¹⁷⁶

Por tal motivo, para este periodo la vecindad y la ciudadanía tienden a ser dos conceptos diferentes, pero estrechamente ligados, la primera tenía sus raíces en el antiguo Régimen, pero en el tránsito hacia nuevas formas de organización política fue la Constitución de Cádiz la que sirvió de puente para definir a la ciudadanía a partir de la vecindad, otorgando un contexto a la soberanía popular y al pueblo soberano y posibilitó el tránsito identitario del individuo de súbdito a ciudadano. Por el vínculo establecido entre el vecino y el ciudadano, esta última figura incorporó elementos inherentes de la vecindad

¹⁷⁵ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "Legislación electoral en Michoacán Durante la Primera República Federal 1825-1835", *Estudios Michoacanos*, Zamora, El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado de Michoacán, 1981, Vol. III, p. 47.

¹⁷⁶ Marta IRUROZQUI, *La ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, (Documento de Trabajo, 139. Serie Historia, 26). pp. 47-48.

pues en las nuevas formas de organización no bastaba con tener educación, independencia moral y en algunos casos, no en el michoacano aunque se llegó a plantear con la reforma constitucional, una renta para ser designado ciudadano, previo a eso era necesario el crédito social, es decir ser una persona conocida, honrada, creíble, lo que no sólo daba respeto así mismo, también a los otros a quien quisiera tutelar, por lo tanto, eran los notables quienes poseían más obligaciones y responsabilidades, hombres industriosos que por su calidad de propietarios tenían intereses materiales vinculados a la nación.¹⁷⁷

A la par de los elementos de ciudadanía y vecindad presentes en las convocatorias a elecciones como parte de la herencia gaditana, para el caso de Michoacán también se observa el uso indistinto, como una especie de sinónimos, entre *almas* y *habitantes*, la primera palabra era un término utilizado en los padrones eclesiásticos, y que dentro del contexto histórico tiene sentido su uso porque quien tenía el control del conteo de la población era la Iglesia, los primeros comicios fueron celebrados atendiendo lo que marcaban los padrones que facilitaron los párrocos para dicho fin y de hecho la Constitución de 1812 denominó las elecciones en primer nivel como *juntas electorales de parroquia*. Por eso no será fortuito que una vez lograda la independencia de México, se promoviera la elaboración de estadísticas, pero aun cuando el gobierno contó con sus propias fuentes de información sobre el número de habitantes, ambos términos aparecieron en las convocatorias indistintamente.

La base para la creación de las leyes electorales michoacanas era lo establecido en la Constitución de Cádiz. Israel Arroyo dice que son tres los elementos innegables heredados de la Constitución gaditana en el tema electoral: el paso del súbdito a ciudadano, el método electoral indirecto y la realización de elecciones periódicas. Sin embargo, hubo cambios y adaptaciones partiendo de la nueva realidad histórica una vez lograda la independencia, por un lado se mantuvo la suspensión de la ciudadanía cuando existía incapacidad física o moral, quiebra fraudulenta, deuda a fondos públicos, por no tener domicilio, empleo, oficio o modo de vivir conocido por hallarse procesado criminalmente o por ser sirviente doméstico, pero por el otro, se distanció de la

¹⁷⁷ *Ibíd.*, pp. 60-65.

negación del voto a las castas o a las almas con sangre de origen africano y con ello se amplió la base electoral.¹⁷⁸

Ese distanciamiento tenía que ver justo con la nueva realidad política en la que de manera paulatina comenzarán a degradarse en el discurso y en papel, aunque no con la misma rapidez en la práctica, las diferenciaciones raciales, para el caso de la ciudad de Valladolid, a principios de junio de 1820 enmarcado con la frase “1820 Año de la Constitución” desaparecen de los libros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones las categorías de Españoles, Indios y Castas, para registrarse todos los pobladores en un mismo libro a partir del sacramento recibido. A este ejemplo se pueden agregar los resultados del *Análisis estadístico de la Provincia de Michoacán de 1822*, en el cual, la población solo aparece clasificada a partir del sexo y si eran casados solteros o viudos.¹⁷⁹ El tema de la distinción racial ya no sería un elemento a considerar en las elecciones en México a partir de 1821.

Otro elemento que destaca en las convocatorias para el legislativo michoacano, se refiere a cuando la elección de un diputado recaía en un miembro de la junta provincial, ésta no podía ceñirse a los parámetros habituales de obtener la mayoría de votos, sino que remitía al artículo 202 de la Constitución del estado, perteneciente al título de las disposiciones generales, estableciendo que al ser electo un miembro de la junta, la designación solo tendría validez al reunir tres cuartas partes de los votos.¹⁸⁰

El otro componente a destacar es el uso de boletas en un par de convocatorias. La de abril de 1827 presentaba una variación en los procesos electorales primarios en Valladolid, la capital del estado, elemento que fue implementado para toda la entidad en las elecciones del 5 de enero de 1831. En 1827, el Congreso determinó que los ciudadanos de Valladolid, para ejercer su derecho a votar, debían presentar una boleta impresa, la que tendría: “Municipalidad de Valladolid, Cuartel núm..... Manzana núm..... Año 1827,

¹⁷⁸ Israel ARROYO, “Divisiones electorales y representación política: partidos y municipios, Atlixco, 1820-1835”, en Fausta Gantús (Coord.), *Elecciones en el México del siglo XIX. Las prácticas*, México, Instituto José María Luis Mora, Tribunal Electoral del Distrito Federal, Conacyt, 2016, Tomo I, pp. 121, 122.

¹⁷⁹ Cfr. Edgar ZUNO RODILES, *Las infancias en la ciudad de Valladolid de Michoacán: población y entorno social 1751-1824*, Tesis de doctorado, Sevilla, España, Universidad Pablo de Olavide, 2016. Juan José MARTÍNEZ DE LEJARZA, *Análisis estadístico*.

¹⁸⁰ *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 499.

puede votar el ciudadano fulano de tal.” Correspondía al gobernador encargarse de la impresión de las boletas y posteriormente remitirlas al Prefecto del Departamento, quien a su vez las enviaría al Ayuntamiento. Ya en poder de este cuerpo, las boletas se repartirían en los parajes públicos en determinadas horas, de lunes a viernes de la semana inmediata al día de las elecciones. Para llevar su registro se crearía una junta compuesta por el alcalde primero, el regidor decano y el síndico más antiguo, quienes pondrían media firma en cada boleta y harían una lista de las mismas donde se asentaría el nombre del individuo y el número de boleta. Dicha junta debía entregar con tiempo necesario las boletas a los dueños o administradores de haciendas y rancheros de su distrito para que las distribuyeran entre sus dependientes, regresando a la junta las sobrantes. Un día antes de las elecciones, la junta se reuniría para hacer el examen de las boletas repartidas y los números de los registros.¹⁸¹

Sin embargo, el planteamiento inicial era otro y contemplaba el uso de boletas para las elecciones primarias en todo el estado, con ello se pretendía combatir la introducción de listas clandestinas y el uso de listas impresas con el objeto de garantizar que la elección recayera en sujetos de probidad.¹⁸²

Al respecto Jaime Hernández hace referencia a que en las primeras convocatorias fueron escasas las actividades de preparación para las elecciones, pero al establecerse el sistema de boletas y la elaboración de padrones, la responsabilidad recayó en los prefectos y alcaldes. Con la ley de 1831, la sociedad oligárquica michoacana del siglo XIX dio una gran participación en el control político de la población a los propietarios, particularmente a los hacendados, que estaban autorizados para distribuir las boletas electorales entre sus trabajadores, siempre y cuando no fueran trabajadores domésticos.¹⁸³

Sin embargo, más allá de lo planteado por Jaime Hernández, se debe remarcar la preocupación por garantizar la legitimidad de los comicios, la propuesta del uso de boletas en las elecciones primarias era un mecanismo de control que pretendía dar orden y legalidad a las mismas, al tiempo que se pretendía ir coartando los vicios que comenzaban a manifestarse, como la

¹⁸¹ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo. II, p. 85.

¹⁸² Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 3, 28/II/1827, 12/III/1827, 15/III/1827 y 16/III/1827.

¹⁸³ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, “Legislación electoral”, p. 56.

manipulación de los electores para que los nombramientos recayeran en determinadas personas.

Las elecciones conferían legitimidad a la autoridad política, por lo que el temor de que los comicios estuvieran marcados por irregularidades era una constante y una realidad porque muchas veces las convocatorias no contemplaban los escenarios o elementos que pudieran poner en tela de juicio el resultado electoral. Al surgir las sospechas, se plantearon mecanismos para mantener a salvo la credibilidad de los procesos electorales a través de la elaboración de padrones, el uso de boletas enumeradas y al otorgar mayor presencia a la población en la conformación de las juntas electorales.¹⁸⁴

En el caso michoacano, el uso de boletas se descartó en la convocatoria del 26 de diciembre de 1828, y reapareció en la de 5 de enero de 1831 para todo el territorio michoacano, lo que complejizó el proceso electoral. Lo anterior obedece a los antecedentes generados por las elecciones al Congreso general en 1826 y el primer relevo del ejecutivo federal en 1828, en las que se dejó ver un enfrentamiento de facciones que se vio reflejado en las urnas y en la movilización de la sociedad. Por lo que el Congreso general se perfiló para la elaboración de una reforma electoral materializada en *Reglas para las elecciones de diputados y de Ayuntamientos del Distrito Federal y Territorios de la República*,¹⁸⁵ la que incrementó de manera substancial la cantidad de sitios para votar y estableció un sistema de empadronamiento.¹⁸⁶ A estos antecedentes se debe agregar el escenario que prevaleció en Michoacán durante la elección de la tercera legislatura, sobre la que se rumoreó la manipulación de las elecciones.¹⁸⁷

¹⁸⁴ José María GARRIDO ASPERÓ, “Soborno” “Fraude” “Cohecho”. *Los proyectos para evitar la manipulación electoral en las primeras elecciones del México independiente*, México, Instituto Mora, 2011, pp. 14-16.

¹⁸⁵ Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana*, Tomo II, pp. 270-275.

¹⁸⁶ Richard WARREN, “Las elecciones decimonónicas en México: Una revisión historiográfica,” en José Antonio Aguilar (Coord.), *Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910)*, México, Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las artes, Instituto Federal Electoral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010, pp. 37-38.

¹⁸⁷ Referente al tema del fraude electoral pueden servir como contexto Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*. Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, “El origen y protagonismo de la masonería en Michoacán, 1821-1831”, en *Tzintzun. Revista de estudios históricos*, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, enero-julio de 2015, núm. 61, pp. 49-89.

Si bien la convocatoria sólo tenía aplicación en el Distrito Federal y los territorios de Alta California, Baja California y Nuevo México, es un hecho que los diputados michoacanos vieron en este documento una guía para tener un mayor control de las elecciones y prevenir manipulaciones de las mismas, adoptando el incremento de los sitios para votar y el empadronamiento.

De entrada, la ley electoral de enero de 1831 marcó que, para ejercer el voto, los individuos requerían no estar privados de sus derechos de ciudadano conforme a los artículos 16 y 18 de la Constitución estatal. Este documento manejaba dos clases de derechos: los comunes y los particulares o derechos políticos que se perdían al admitir carta de naturaleza o residir 5 años fuera del país, sin comisión o licencia del gobierno, por recibir empleo, condecoración o pensión de gobierno extranjero sin autorización de las autoridades mexicanas. Mientras que para la designación de electores secundarios se apegaba la junta al artículo 200.¹⁸⁸

El uso de padrones fue implementado para las elecciones primarias y secundarias. Este mecanismo se utilizó para no sufragar a personas no incluidas en la lista, es decir, para no votar por ciudadanos no aptos de acuerdo a la ley. En las primeras, las listas debían estar avaladas por los prefectos, subprefectos, presidentes de los ayuntamientos y tenientes si los hubiese. Los registros debían incluir todos los nombres de los individuos que tenían derecho a votar y quienes podían ser votados como electores primarios y secundarios en orden alfabético, los que se fijaban en lugares públicos. Los elementos que concentraban estos listados eran el nombre del individuo seguido de alguna de las siguientes letras V = votar, V.P. = votar y ser votado para elector primario y V.P.S.= votar, ser votado para elector primario y secundario. De no ser contemplado en las listas, a pesar de tener el perfil para participar en las elecciones, era preciso

¹⁸⁸ La continuación del artículo 16 aludía a la pérdida de derechos ciudadanos por sentencia ejecutoria, en que se impusieran penas infamantes, por deuda fraudulenta, calificada en juicio como tal. El 18 manejaba que el ejercicio de estos derechos se perdía por ser deudor a los caudales públicos, habiendo procedido el requerimiento para el pago. Por no tener domicilio, empleo, oficio o modo de vivir conocido, por ebrio consuetudinario, o jugador de profesión, sirviente doméstico dedicado directamente al dueño. Aunado a lo anterior por no tener la edad designada por la ley y desde el año cuarenta por no saber leer y escribir. El artículo 200 establecía que los electores responsables de nombrar Diputados para el Congreso general y del Estado deberían ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de 25 años, con cinco de vecindad en el partido que los elija y no ejercer en él jurisdicción eclesiástica, militar, ni cura de almas en su cabecera. *Actas y Decretos*, Tomo II. pp. 476, 498-499.

presentarse ante las autoridades competentes para exponer su caso y recibir la boleta; y a la inversa de no poseer el perfil para el ejercicio del sufragio.¹⁸⁹

Además de lo ya mencionado, la mesa electoral de las juntas primarias requería ser presidida por un presidente miembro del Ayuntamiento, un secretario y dos escrutadores quienes además de estar en ejercicio de sus derechos políticos y comprobar una vecindad de 5 años, debían mantener una renta anual de 500 pesos en la capital del estado, de 300 pesos en poblaciones de más de dos mil almas y 200 pesos en los restantes, así como saber leer y escribir.¹⁹⁰ Dadas las características de la población de esa época, muchos quedaban exentos de ser miembros de la mesa electoral por lo que las disposiciones fueron modificadas a través del decreto del 9 de abril de ese mismo año.

Ese decreto en cinco artículos trató de ampliar los márgenes para la designación de la mesa electoral. En el primero de ellos, se señaló que, en las poblaciones con más de dos mil almas, donde no hubiere suficientes individuos con las características para desempeñarse como secretarios o escrutadores, se completarían alistando hasta veinticinco de los que más se aproximasen a la expresada cuota. El segundo hacía las especificaciones para las poblaciones de quinientas almas en adelante que tampoco tuvieran la renta que establecía la ley electoral, se completarían hasta dieciséis que disfrutaren una cuota aproximada y de ahí se haría la designación. El tercero se refería al punto de saber leer y escribir en el caso de los secretarios y escrutadores, de no contar con estas características, se nombraría un escribiente pagado por la Hacienda pública. Si el presidente no supiere escribir, el acta de elección sería firmada por una persona de su confianza. Finalmente, el decreto puntualizaba que, en caso de no poder celebrarse las elecciones secundarias en las cabeceras de partido, por falta de seguridad, se realizarían en el lugar que el gobierno designare.¹⁹¹

La presente convocatoria dispuso la división de la población en secciones partiendo de lo populoso, para que en cada sección votaran no más de

¹⁸⁹ COROMINA, Amador, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo IV, pp. 88-90.

¹⁹⁰ *Ibíd.*, pp. 91-92

¹⁹¹ *Ibíd.*, p. 105.

cuatrocientos ciudadanos, lo que a su vez involucraba la participación del ayuntamiento, cuyos miembros se dividirían para presidir cada mesa electoral.¹⁹²

Otro elemento que implementó la ley electoral de 1831 se refería a que los ciudadanos debían llevar escritos los nombres de las personas a quienes darían su sufragio, sus propuestas no podían exceder el número de electores a elegir, una vez registrado el voto era preciso firmaran la lista sobre la mesa. De no saber firmar no se podía sufragar por lista, por lo que dictarían los nombres de sus propuestos al secretario, quien sería el responsable de escribirlos al reverso de la boleta. Otra novedad, era la hora de cierre de las elecciones, generalmente esto ocurría cuando todos habían votado, esta ley electoral determinó hasta las 5 de la tarde para hacerlo.¹⁹³

Las juntas secundarias también hacían uso de las listas de todos los elegibles, las que eran expuestas a la población.¹⁹⁴ Esto es indicativo de que en las primeras experiencias electorales en Michoacán se llegaron a elegir personas no aptas por los cargos, lo que sometía a las juntas electorales a otras dinámicas no previstas a las convocatorias. A su vez el uso de estas listas llevaba implícito el conocimiento de la población en cuanto a cantidad y el estado de los derechos políticos de la ciudadanía.

Asimismo, los gastos generados por la creación de listas serían pagados por los administradores de rentas.¹⁹⁵ Esto pone de manifiesto la preocupación del Congreso por garantizar procesos electorales transparentes a pesar de que ello representara una carga para el erario público en un momento en que las finanzas estatales también eran complicadas.

En las convocatorias para la elección de las legislaturas locales no hay variaciones en los niveles de elección, pero a partir de la ley de marzo de 1827 sí se ve un aumento en las especificaciones en el conteo de votos y la declaración de los ganadores, las leyes comienzan a manejar mayor cantidad de escenarios posibles, lo que puede denotar que, efectivamente, esas circunstancias se llegaron a presentar y al ser responsabilidad de la mesa electoral darle solución, los diputados optaron por plasmar en las convocatorias

¹⁹² *Ibíd.*, pp. 92-93.

¹⁹³ *Ibíd.*, p. 93.

¹⁹⁴ *Ibíd.*, pp. 94-95.

¹⁹⁵ *Ibíd.*, p. 97.

las posibles soluciones y así evitar conflictos que derivaran en el cuestionamiento de la legitimidad del acto electoral.

A lo largo de los artículos de las leyes electorales del estado de Michoacán es común ver enunciados en ellos los principios de ciudadanía y derechos políticos enmarcados en los artículos preliminares de la Constitución local, en un inicio de forma textual para posteriormente ir sólo refiriendo a la observancia de determinados puntos manifestados en dicho documento. Este último elemento puede llevar a cuestionarse sobre la influencia que las leyes electorales tuvieron en la difusión y conocimiento del contenido de la Constitución de 1825.

2.2. La Constitución de Michoacán de 1825 y la división de poderes

Para la época, una Constitución se concebía como una ley escrita que se concretaba en manifestar la organización del poder, las facultades de los gobernantes y los derechos de los gobernados. Entendida como un acto jurídico en el que se consignaba la concepción y ejercicio del poder sobre un espacio y población determinada. Las Constituciones de los estados de la federación mexicana se elaboraron en el marco del entusiasmo que representó la adopción de ese sistema de gobierno siguiendo modelos como el planteado por el texto mexicano de 1824 o el gaditano en los que se aprecia el esfuerzo por adaptar los preceptos a la realidad que los constituyentes percibieron y con ello plasmar los límites y alcances del ejercicio del poder.¹⁹⁶

La adopción del sistema republicano constitucional inauguró el proceso de la elaboración de un nuevo derecho que intentaba atender las necesidades del nuevo ordenamiento político, con ello inició la sustitución del viejo derecho de la monarquía española de manera gradual, proceso que se prolongó durante todo el siglo XIX.¹⁹⁷

La Constitución del estado de Michoacán fue leída íntegramente el 19 de julio de 1825 y firmada posteriormente por los diputados Pedro Villaseñor, José María Jiménez, Agustín Aguiar, Manuel González, José María Rayón, Manuel

¹⁹⁶ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "El diseño constitucional en Michoacán en 1825: División de Poderes y creación del Consejo de Gobierno", en Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, Héctor PÉREZ PINTOR (Coords.), *Reflexiones jurídicas en la historia constitucional mexicana: Una perspectiva bicentennial*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Cultura, 2009, pp. 69-70.

¹⁹⁷ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, Jaime, *Orden y desorden*, p. 17.

Lloreda, José María Paulín, Manuel Menéndez, Juan José Pastor Morales y José Salgado. Isidro Huarte no firmó pues se encontraba enfermo. Al día siguiente, la máxima de la entidad fue jurada por los mismos diputados que la habían firmado.¹⁹⁸

Los constituyentes decidieron organizar los 223 artículos de la Constitución de 1825 en un apartado de *Artículos Preliminares* y nueve títulos. En los primeros 18 artículos –*Artículos Preliminares*- se estableció la soberanía del estado, la religión católica, el territorio que comprendía el estado y la división del mismo y la manifestación de quienes eran michoacanos, sus derechos civiles y políticos o “especiales” y la pérdida de los mismos.

Respecto al apartado cabe hacer mención de tres puntos. En el artículo 3º se declaraba a la entidad soberana para el arreglo de su gobierno, pero conservando el carácter de federado que se le había establecido en el Acta Constitutiva y la Constitución federal. Por su parte, en el artículo 4º establecía que el estado era independiente de los demás “Estados-Unidos de la nación Mexicana”, el cual “tendrá las relaciones que establezca la confederación general” de todos ellos.¹⁹⁹

Al respecto, cabe señalar el hecho de que se utilice el término confederación para señalar la relación que el estado de Michoacán tendría con sus homólogos, cuando el sistema de gobierno adoptado era una federación, lo que es sintomático que para la legislatura las palabras federación y confederación podían tomarse como sinónimos,

El segundo punto, es referente al artículo 5º en el que se establecía que la Religión Católica era la “única verdadera”, bajo el amparo de las leyes estatales, prohibiendo la práctica de cualquier otra. Tal como lo había hecho la Constitución de Cádiz en su artículo 12º y la Constitución de 1824 en el artículo 4º. Por tanto, la entidad adoptó la intolerancia religiosa que venían marcando sus antecesoras.

El tercer punto es relacionado al tema de los derechos civiles y políticos de los michoacanos que se establecieron en la Ley máxima. Dentro de los primeros se encontraba la libertad de hablar, escribir y hacer, pero sin agraviar el derecho del otro, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, a la

¹⁹⁸ *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 414.

¹⁹⁹ *Ibíd.*, p.474.

seguridad y la prohibición del tráfico de esclavos en la entidad. Postulados ubicados por primera vez en la *Declaración de los Derechos Hombre y del Ciudadano*. Estos derechos civiles aplicaban para los michoacanos en general, mientras que los segundos –derechos políticos–, llamados en el texto “especiales”, estaban relacionados con la emisión del voto en las elecciones para designar a las autoridades de la entidad, así como el de ser electo para desempeñar cargos públicos, lo cual tenía una directa implicación con la ciudadanía política en la que sólo entraban los varones de cierta edad y determinado prestigio dentro de su ciudad, región de origen o residencia.²⁰⁰

El primer título abordaba lo referente al Poder Legislativo compuesto por diputados electos de manera indirecta por “el pueblo”. En él se detallaban también las características que debían poseer los individuos a desempeñar el cargo, así como todas las atribuciones, derechos y obligaciones que adquirirían una vez en el desempeño.²⁰¹ El título estaba dedicado a regular la organización, la integración, las facultades y el funcionamiento del poder legislativo.²⁰²

El título segundo se refería al Poder Ejecutivo, que sería depositado en un solo individuo denominado Gobernador. En este apartado se establecía quien podía desempeñar el cargo, sus derechos, obligaciones y prerrogativas. Así mismo se estableció la figura de Vicegobernador, que desempeñaría el cargo en ausencia o incapacidad del titular del mismo y finalmente se introduce un nuevo órgano, el Consejo de Gobierno, el cual fungió como un cuerpo consultivo y de auxilio del gobernador para que éste ejecutara las leyes sin cometer errores.²⁰³ En este apartado llama la atención cómo se incapacita a los eclesiásticos y a los empleados de la federación para desempeñar el cargo.

El título tercero se abocó al Gobierno político y económico de la entidad, el cual quedaba en manos de los Prefectos, encargados de los Departamentos, Subprefectos, responsables de los Partidos y los ayuntamientos. Por tanto, en su articulado se desglosó quienes, y cuántos podían ocupar los cargos, sus facultades y atribuciones.²⁰⁴ El título era corto, constaba de tan solo 21 artículos,

²⁰⁰ *Ibíd.*, pp. 474-476.

²⁰¹ *Ibíd.*, pp. 476-483.

²⁰² Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*, p. 83.

²⁰³ *Actas y Decretos*, Tomo II, pp.483-489.

²⁰⁴ *Ibíd.*, pp. 489-490.

ello se debe a que la legislatura ya había emitido decretos relacionados con la composición y atribuciones de estas tres instancias de gobierno local.

El cuarto título contenía los artículos sobre el Poder Judicial. En él se estableció que los tribunales eran los únicos que tenían el poder de aplicar las leyes del ramo civil y penal, por tanto, establecía la división, la forma y las atribuciones de las instancias encargadas de impartir la justicia en lo general y en lo criminal en la entidad.²⁰⁵ En este apartado, encargado de regular la administración de justicia criminal, se recogieron las ideas de los principales publicistas de la época y se observa cierta influencia de la Constitución de Cádiz.²⁰⁶

El título quinto aglutinaba los artículos referentes a la Hacienda de la entidad, se integró por sólo ocho artículos, que hablaban de los encargados de la misma, sin mayores características sobre los sistemas de recaudación de impuestos. Es de considerar que lo raquítico del título se deba a que el Congreso ya había emitido en diciembre de 1824 la “Primera ley de clasificación de Rentas del Estado”, en la cual se daban las pautas para la articulación y funcionamiento de la Hacienda, lo cual se vino a complementar con el decreto de la administración y división de las mismas.²⁰⁷

El título sexto se refería a la Instrucción Pública, constituida por seis artículos, en los cuales se establecía que el método de enseñanza debía ser uniforme en toda la entidad, a partir de un plan que a futuro formaría el Congreso. Además de manifestar qué se debía enseñar en las escuelas “de primera letras”, así como el apoyo del gobierno a la instrucción en la entidad. Mientras que el título octavo contenía un artículo referente a la Milicia del Estado, que marcaba la existencia de Cuerpos de milicia para la conservación del orden interno y su reglamentación se supeditaba a lo que establecieran las leyes de la federación.²⁰⁸

En el octavo título nombrado *Disposiciones Generales*, se hacía mención de los derechos políticos de los electores y algunas atribuciones del legislativo que no se habían manifestado en el título primero de la Constitución. El título

²⁰⁵ *Ibíd.*, pp.491-497.

²⁰⁶ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*, p. 85.

²⁰⁷ *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 497.

²⁰⁸ *Ibíd.*, p.498.

noveno se denominó *De la observancia de esta Constitución, y modo de proceder para hacer variaciones en ella*. Relacionado con los reclamos por la inobservancia de la ley suprema del estado.²⁰⁹

Organizar a Michoacán a partir del mandato constitucional de 1825 no fue algo sencillo y mucho menos hacer que las instituciones funcionaran como se había previsto. Para entender el por qué es necesario recordar que articular un sistema de gobierno que funcionara de tal manera que mantuviera conforme a los actores políticos de la época era lo anhelado una vez lograda la independencia de México. Desde un inicio se optó por el establecimiento de una forma de gobierno sustentada en la separación de poderes; no obstante, ello derivó, tanto en el ámbito nacional como en Michoacán, en continuos enfrentamientos entre sus titulares al suponer la invasión de sus respectivas competencias, aunado a la sobrevivencia de antiguas instituciones como los Ayuntamientos que debieron convivir y ceñirse a los nuevos órganos de gobierno como lo poderes estatales y las autoridades federales. A lo anterior se agrega el reacomodo de las fuerzas políticas en el territorio michoacano que resquebrajó la oligarquía vallisoletana a causa de la guerra insurgente y la aplicación de la Constitución de Cádiz.²¹⁰

El reacomodo de las fuerzas políticas, el surgimiento de nuevos actores, órganos de gobierno, realidades jurídicas y la politización de la sociedad se vieron reflejados en la dinámica observada en los poderes en que se depositó la gobernabilidad de Michoacán durante la primera República Federal.

Llevar a la práctica la división de poderes planteada en la Constitución michoacana a través de nuevas instituciones, cargos y atribuciones fue un proceso largo, azaroso y que no logró consolidarse a lo largo de la primera República.

2.2.1. El poder legislativo

Como ya se ha dicho, la máxima ley estatal refirió que el poder legislativo sería depositado en un Congreso compuesto de diputados que elegiría el pueblo de manera indirecta, cuya representación equivalía a uno por cada 25 000 almas,

²⁰⁹ *Ibíd.*, pp. 498-500.

²¹⁰ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*, p. 76.

por tanto, el número se determinaba por la cantidad de población, aunque este no podía ser menor de 15 a pesar de que el número de habitantes no diera para ello, por tanto, quedaba entendido como una base mínima y una máxima de 21 al primer sexenio de promulgada la Constitución local. Partiendo de estos parámetros, por cada dos propietarios se debía elegir un suplente. Por tanto, era facultad de cada legislatura fijar el número y reglamentar las elecciones a diputados partiendo de lo expuesto en este documento, complementando con las leyes electorales que se fueron expidiendo a lo largo de la primera república federal.²¹¹

La renovación de las legislaturas era por bienio, a celebrarse el último domingo del mes de mayo, es de remarcar que esta parte no siempre tuvo aplicación, sobre todo cuando la inestabilidad política se apoderó del estado.

Para ostentar el cargo de diputado de la legislatura local era necesario ser michoacano de nacimiento o vecino de la entidad por cinco años antes de la elección y 25 años cumplidos. Lo marcado por los artículos 24 y 25, referente a las restricciones para desempeñarse como legislador, fue muy utilizado, como ya se ha enfatizado en las leyes electorales de abril de 1827, diciembre de 1828 y enero de 1831.²¹²

La reunión del Congreso se haría todos los años el 6 de agosto en el edificio destinado para ello, en la capital de la entidad, para la apertura de sesiones se atendería al reglamento interior. Dicho órgano de gobierno podía variar de residencia por causas extraordinarias siempre y cuando contara con la aprobación de dos terceras partes de los legisladores.²¹³ Lo cual ocurrió en mayo de 1833 con la quinta legislatura que se mudó a Celaya al parecer en el mes de junio de ese año.

Las acciones del Congreso serían reguladas por un reglamento interno, las sesiones ordinarias serían diarias a excepción de los festivos religiosos o fiesta nacional muy solemne. Los periodos ordinarios serían de tres meses y medio cada año, pudiendo prorrogarse hasta 30 días útiles por resolución o a petición del Congreso, lo que no se aplicaría al primero constitucional, que

²¹¹ *Actas y Decretos*, Tomo II, pp. 476-477

²¹² Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, p. 91, Tomo III, p. 120, Tomo IV p. 97, Tomo VI, p. 138.

²¹³ *Actas y decretos*, Tomo II, p. 477.

tendría tres sesiones semanales por seis meses como mínimo, con posibilidad de prorrogar por dos meses en cada uno de los años de vigencia de la legislatura. Antes de cerrar sesiones ordinarias el Congreso debía nombrar una diputación permanente, que quedaba al pendiente de los asuntos que se presentasen durante el periodo de receso. También establecía periodos de sesiones extraordinarios convocados para tratar asuntos urgentes, pero sólo debía abordarse el punto por el cual se había solicitado la reunión del Congreso, aun cuando se sesionara en tiempos de renovación, no serían suspendidas las elecciones o instalación del mismo órgano, quien continuaría deliberando sobre el punto. El tipo de sesiones serían públicas y secretas. Así mismo, era obligación del gobernador asistir a la apertura y cierre de sesiones, pronunciando un discurso alusivo a la ocasión. Al día siguiente de la apertura de sesiones se presentaría el secretario de gobierno e informaría por escrito el estado de la administración pública.²¹⁴

La Constitución de 1825 determinó que la figura de los diputados era inviolable por las opiniones que manifestaran dentro de las comisiones, gozaban de inmunidad en sus personas e intereses desde la toma de posesión y ésta se extendía un mes después de cesadas funciones, por lo que una vez vencido el periodo, de haber cometido alguna falta, serían juzgados por el Tribunal que designaba la máxima ley con arreglo al reglamento interno. De la misma manera, los legisladores no podían admitir para sí o solicitar para alguien más pensión, empleo o ascenso provisto por el gobierno.²¹⁵

Otro elemento a rescatar en este capítulo lo constituye el juramento que presentaban los diputados para tomar el cargo y el cual dice la siguiente manera:

¿Juráis a Dios haberos bien y fielmente en el encargo que os confía el Estado, mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo, observando y haciendo observar la Acta Constitutiva, Constitución Federal y la particular del Estado en todas sus partes? Sí juro. Si así lo hicieréis, Dios os lo premie, y si no os lo demande²¹⁶.

El juramento iba acompañado de un protocolo muy similar al que habían presentado el 23 de septiembre de 1810 los diputados a Cortes, con la diferencia

²¹⁴ *Ibíd.*, p. 478.

²¹⁵ *Ibíd.* pp. 478-479.

²¹⁶ *Ibíd.*, pp. 478-479.

que éste se hacía de dos en dos diputados, lo que puede explicarse por el número de representantes, el cual era mucho mayor. En el caso michoacano, el diputado electo era conducido a la sala de sesiones frente a la mesa del secretario más antiguo, en donde era puesto de rodillas con los santos evangelios en la mano derecha y recitaba la frase ya mencionada en la parte superior, posterior a ello el legislador podía incorporarse a los trabajos legislativos.²¹⁷

El capítulo segundo abordaba las atribuciones del Congreso y la diputación permanente. Por tanto, dentro de los deberes de los legisladores se encontraban el dictar leyes para la entidad en todos los ramos de la administración interior, interpretarlas y derogarlas si era necesario, intervenir en la elección del ejecutivo en las figuras de gobernador y vicegobernador, resolver dudas sobre credenciales de los diputados, nulidad de elecciones del legislativo y ejecutivo. Así como calificar las excusas que los designados dieran para no servir los encargos. Conocer en calidad de Gran Jurado los casos levantados a funcionarios, recibir juramento a los detentores del ejecutivo y legislativo local, conceder al gobernador facultades extraordinarias cuando fuere necesario con la aprobación de dos terceras partes de la legislatura.²¹⁸

Dentro de las facultades relacionadas con la designación de autoridades, el Congreso era el responsable de prescribir las leyes para las elecciones de diputados por la entidad al legislativo general, elegir senadores, votar para la elección del ejecutivo federal y ministros de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Constitución de 1824. En el ámbito local era el responsable de nombrar al Tesorero General del Estado y Ministros del Superior y Supremo Tribunal de Justicia.²¹⁹

Respecto de las finanzas del estado, el Congreso señalaría anualmente los gastos de la administración pública con base en los presupuestos emitidos por el ejecutivo, le correspondía imponer las contribuciones que fueren necesarias para cubrir dichos egresos, incluyendo lo que el estado debía entregar al gobierno federal para su sustento. Por tanto, era el responsable de

²¹⁷ Manuel CHUST, *La cuestión nacional*, p. 47. AHCEMO, Legislatura IV, V y VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 28/II/1833.

²¹⁸ *Ibíd.*, p. 479.

²¹⁹ *Ibíd.*, pp. 479-480.

aprobar las cuentas de los caudales públicos de manera anual, de la misma manera debía señalar, aumentar o disminuir sueldos de los funcionarios y empleados públicos, en el caso de los últimos abordó el tema de la jubilación o retiro temporal por causa justa, además de disponer lo conveniente a la administración, conservación y enajenación de los bienes del estado y contraer deuda para “objetos de utilidad común”. Para el Congreso constituyente fue importante dejar por escrito que era atribución del legislativo local dictar leyes para mantener la observancia de los cánones y la disciplina exterior de la Iglesia en la entidad, ciñéndose siempre a los concordatos que en este punto celebrase el Congreso general con la silla apostólica y los decretos sobre la materia.²²⁰

De acuerdo con lo establecido en el capítulo del legislativo era su responsabilidad aprobar, previo informe del gobierno, los aranceles de cualquier clase, reglamentos de tribunales, oficinas, policía, sanidad y arbitrios para obras públicas, así como las ordenanzas municipales formadas por los ayuntamientos. También era parte de su potestad crear la reglamentación para la recluta del contingente de remplazo de la milicia activa y permanente correspondiente a la entidad, disponer de lo necesario para el alistamiento e instrucción de la Milicia cívica, conceder premios personales y declarar beneméritos por servicios distinguidos al estado, promover la instrucción pública, el progreso de la ciencia, y prescribir lo necesario para mejorar la educación moral y política de la juventud, procurar la prosperidad común a través del fomento a las artes, la industria y establecimientos útiles, impulsar la apertura y mejora de caminos en la entidad, arreglar los límites del estado y dividir su territorio para mejor gobierno, formar leyes y reglamentos de colonización conforme a lo establecido por el Congreso general, finalmente ordenar un plan general que sirviera como estadística del territorio.²²¹

El legislativo local tenía como una de sus atribuciones el proteger los derechos de los michoacanos, la libertad política de la imprenta, concesión de indultos, establecer el juicio por jurados, conceder a los extranjeros carta de naturaleza en la entidad conforme a lo establecido por el Congreso general.²²²

²²⁰ *Ibíd.*, p. 480.

²²¹ *Ibíd.*, pp. 480-481.

²²² *Ibidem.*, pp. 480-481.

Respecto a la Diputación permanente, ésta no tenía tantas atribuciones como el Congreso en funciones, se conformaba por diputados electos por los miembros de la legislatura, responsable de velar la observancia de la Constitución general y local, sus leyes e informar al Congreso cualquier infracción a dichos documentos. También era la encargada de convocar a sesiones extraordinarias cuando hubiese asuntos graves que atender o bien solicitarlo a través del gobernador o con el Consejo, por tanto, debía señalar el día y hora para el evento. Por otra parte, en su calidad de Diputación permanente podía llamar a los diputados suplentes por falta de propietarios o, de faltar ambos, estaba facultada para cubrir las vacantes a través de una nueva elección. Le correspondía cuidar las elecciones, que fueran celebradas en la fecha indicada, así como recibir el acta de elección de los diputados.²²³

El último capítulo referente al Legislativo que marcaba la Constitución michoacana fue denominado de la formación y publicación de las leyes. Por tanto, al Congreso correspondía proponer proyectos de ley y decretos, facultad que compartía con el ejecutivo, el judicial y los ayuntamientos, los cuales serían discutidos y votados conforme al reglamento interior. Una vez terminado el proyecto de ley correspondía al ejecutivo hacer las observaciones pertinentes, contando para ello con diez días, de ser el caso, el Congreso tomaría en consideración lo manifestado por el ejecutivo atendiendo el reglamento interior, haciendo las modificaciones sugeridas de proceder éstas. No obstante, de pasar el tiempo estimado para observaciones, la ley o decreto serían publicados, de ser desechado el proyecto, este no se trataría en las sesiones de ese año.²²⁴

Para la publicación de leyes y decretos era preciso acatar los procedimientos, aunque de estar de acuerdo las dos terceras partes de la legislatura, éstos podían obviar incluso la potestad del gobierno para hacer observaciones. Para la derogación de leyes también se hacía necesario seguir un procedimiento. El gobierno podía asistir y hablar durante las deliberaciones por medio del orador, pero sin derecho a voto.²²⁵

De acuerdo con el propio texto constitucional su reforma iniciaría en 1830, una vez aceptadas las modificaciones, éstas deberían ser discutidas y

²²³ *Ibíd.*, p. 481.

²²⁴ *Ibíd.*, p. 482.

²²⁵ *Ibíd.*, pp. 482-483.

aprobadas por la siguiente legislatura.²²⁶ En efecto, llegado ese año iniciaron los debates para ser adicionada, por lo que correspondería a la cuarta legislatura aprobar los cambios; sin embargo, la inestabilidad que imperó en el Congreso a partir de esos años condujo al cuestionamiento de la legalidad de la cuarta legislatura encargada de aprobar las reformas, a lo que se debe de agregar la declaración de nulidad de la legislatura de 1830-1831 que hizo la sexta constitucional en el decreto de 30 de marzo de 1835, estableciendo que las reformas iniciadas con el Congreso de 1831 y la aprobación parcial de las reformas hechas por decreto de 27 de diciembre de 1832, eran opuestas a los artículos 204, 205 y de 218 a 222 de la Constitución del Estado y a la Ley del Congreso General relativa a Michoacán del 16 de abril de 1830 y reconoció como válidas las reformas constitucionales de 27 de diciembre de 1832.²²⁷

Lo anterior habla de lo difícil que resulta establecer la validación y aplicación de las reformas constitucionales. Aunque varios artículos fueron propuestos para ser modificados o en ocasiones eliminados, en realidad los cambios fueron pocos, entre los cuales se encontraban artículos vinculados a los ayuntamientos, su composición y atribuciones, lo referente a impartición de justicia, es decir del poder judicial y una parte del poder legislativo.²²⁸

La reforma constitucional tocó puntos importantes vertidos en un apartado 1º titulado “Del Congreso y de los diputados”, el cual fue dividido en cuatro capítulos, el primero denominado “Del poder legislativo” con solo tres artículos, el segundo “De la reunión, receso y renovación del Congreso”, el tercero “De los diputados”, el cuarto “De las elecciones de los diputados”.

La reforma como propuesta contenía elementos muy interesantes y controvertidos como el sufragio censitario, el fuero de los diputados y los parámetros electorales, los que a lo largo de los debates se fueron desechando. De las reformas que sí se aprobaron destaca la reunión de sesiones, las que serían dos veces por año, la primera corría del 1º de enero al 31 de marzo y las segundas del 1º de julio al 31 de agosto pudiéndose prorrogar éstas últimas hasta por veinte días, así mismo la legislatura debía sesionar como mínimo tres

²²⁶ *Ibíd.*, p. 500.

²²⁷ Felipe TENA RAMÍREZ, *Michoacán y sus Constituciones*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1968, p. 64.

²²⁸ Cfr. Felipe TENA RAMÍREZ, *Michoacán y sus Constituciones*, pp. 47-64.

días por semana pudiendo ser más días acorde a la urgencia de los asuntos, los demás días serían ocupados para el trabajo al interior de las comisiones.²²⁹ Había un cambio substancial, pues antes de la reforma, se abrían sesiones cada año el día 6 de agosto y duraban tres meses y medio, prorrogándose hasta treinta días útiles, respecto al número de sesiones, estas eran diarias.²³⁰

Otra variación dentro del legislativo fue la renovación de la legislatura por mitad cada dos años y no de toda como venía operando desde la primera constitucional. Bajo esos parámetros, la Junta electoral era la responsable de designar, la primera vez, la parte que debía quedarse.²³¹

En el capítulo *De las elecciones de los diputados* se estableció que los mismos electores debían designar tanto diputados federales como locales, estos últimos debían ser electos al día siguiente de los primeros, además determinó que las elecciones serían en tres niveles por medio de juntas primarias, secundarias y del estado. En el texto constitucional fueron incorporados los requisitos para ser electores primarios y secundarios. Respecto a los electos diputados se observa un cambio referente a la edad, la cual fue incrementada a 30 años, es decir cinco años más que lo que se había manejado antes de la reforma.²³²

En teoría una parte importante de las modificaciones planteadas fue aprobada; no obstante, llevar a la práctica la reforma fue algo sumamente complejo a causa de la crisis institucional que vivió Michoacán en 1833 y cuando existieron la condiciones para su puesta en marcha estaba en puerta variación del sistema de gobierno.

Las prerrogativas y atribuciones que fueron plasmadas en la Constitución de 1825 delinearon la potestad y por tanto el actuar de las legislaturas constitucionales michoacanas de 1825 a 1835, lo que fue complementado con el contenido del reglamento interno del Congreso.

De 1824 a 1835 hubo ocho legislaturas en funciones de las cuales una fue constituyente y la tercera cuyo bienio se integró por dos legislaturas.

²²⁹ *Ibíd.*, p. 52.

²³⁰ *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 477.

²³¹ Felipe TENA RAMÍREZ, *Michoacán y sus Constituciones*, p. 53.

²³² *Ibíd.*, pp. 54-55.

La legislatura Constituyente se instaló el 6 de abril 1824 y funcionó hasta el 6 de agosto 1825 los diputados propietarios fueron: Br. José María Rayón, Juan José Martínez de Lejarza, Lic. Isidro Huarte, Br. Juan José Pastor Morales, Lic. Antonio Macías, Juan Foncerrada y Soravilla, Pedro Villaseñor, Lic. José Ma. Jiménez, Manuel González Pimentel, José Ma. Paulín, José Trinidad Salgado y los suplentes: el Br. Manuel de la Torre Lloreda, Mariano Menéndez, Agustín Aguiar, Teniente Coronel Mariano Quevedo, Juan Gómez Puente, Manuel Chávez.²³³

La primera legislatura Constitucional funcionó del 6 de agosto de 1825 al 6 de agosto de 1827, los diputados propietarios: Manuel González, José María Navarro, Pablo José Peguero, Francisco de Aragón, Mateo Echaiz, Miguel Zincunegui, Joaquín Domínguez, Manuel Chávez, Ignacio Ocampo, Agustín Aguiar, Isidro Huarte, José María Pallares, José Antonio Pérez Gil, Antonio Chávez. De los suplentes sólo se han detectado tres: Mariano Ruiz de Chávez Carrillo, Joaquín María Cendejas y Timoteo Castrejón.²³⁴

La segunda Constitucional sesionó del 6 de agosto 1827 al 6 de agosto de 1829, los diputados propietarios nombrados fueron Antonio Pérez Gil, José Manuel Ruiz de Chávez, José Joaquín Domínguez, Br. Pablo José Peguero, Juan Gómez de la Puente, Francisco Méndez de Torres, Joaquín Tomás Madero, Francisco Camarillo, Ignacio Soria, Miguel de la Parra, Manuel Iriarte, José María Silva, Br. Vicente Villavicencio, Basilio de Velazco, Juan José Farfán. Dentro de los diputados suplentes encontramos al Br. Antonio Chávez, Br. Juan Nepomuceno Sierra, José María Martínez Verduzco, Manuel Peñaloza, Domingo Lozada, Miguel de la Mora, Francisco Romero y Soravilla.²³⁵

La tercera constitucional en su primer año funcionó del 6 de agosto de 1829 a marzo de 1830. Los diputados propietarios fueron Lic. Manuel Alvires, Br. Luciano Farías, Br. Joaquín Ladrón de Guevara, Nicolás Menocal, José María Silva (reelecto), Prebendado Martín García de Carrasquedo, Juan Gómez Puente (Reelecto), Pedro Romero, Isidro García de Carrasquedo, Onofre Pintado, Br. Felipe Carbajal, Br. Tomás Arriaga, Lic. Antonio Bribiesca, Ramón Echenique y Francisco Antonio Iturbide. Diputados suplentes Manuel García,

²³³ *Actas y Decretos*, Tomo I, pp. 1-2.

²³⁴ Cfr., AHCEMO, I Congreso Constituyentes, Actas públicas, Caja 2, Exp. 5.

²³⁵ AHCEMO, Varios Legislatura I, Caja 2, Exp.8.

José María Ruiz de Chávez, Francisco Benítez, José Antonio Méndez Cano, Br. Luis Soria, José Ortiz y Manuel Carvajal.²³⁶

La tercera en su segundo año funcionó del 4 de agosto de 1830 al 6 de agosto de 1831. Los diputados propietarios: Antonio Manzo Ceballos, Ignacio Barrera, Br. Atanasio Domínguez, Manuel Menéndez, José María Navarro, Lic. Mariano Rivas, Rafael Gómez Puente, C. Joaquín Iriarte, C. Br. Manuel Tiburcio Orozco, Lic. Domingo Maciel, C. Antonio Guerrero, Br. Lorenzo Auriolles, C. Pedro Villaseñor, C. Vicente Herrera, C. Juan Gómez Puente. Suplentes: Br. José María Cavadas, Antonio Frutos de Olmos, Fernando Román, José Antonio Méndez López, José Chávez, Manuel Alzua y Basilio López de Paramo.²³⁷

La cuarta Legislatura sesionó del 6 de agosto 1831 al 5 de enero de 1833 sus miembros diputados propietarios de esta legislatura fueron Mariano Rivas, Juan Gómez de la Puente, Isidro Huarte, José Ma. Navarro, Rafael de la Puente, Pedro Villaseñor, Ignacio Barrera, Manuel Leiva, Juan Corral, Joaquín Domínguez, Lic. Manuel Alvirez, Br. Pablo Peguero, Juan de Dios López de Lara, Manuel Menéndez, Br. Lorenzo Auriolles, Lic. José Ma. Izazaga, Juan Anciola. Diputados suplentes: Mariano Anzorena, Francisco Camarillo, Luis González Movellán, Manuel Leiva, Vicente Rincón, Mariano Castro, Agustín Aguiar y Antonio de Olmos.²³⁸

La quinta Legislatura trabajó de febrero de 1833 a enero de 1835. Los diputados propietarios Isidro García de Carrasquedo, Lic. Onofre Calvo Pintado, Nicolás Menocal, José Serrano, Lic. Francisco Silva, Lic. Rafael Puga, Miguel Zincunegui, Fernando Ríos, Agustín Tena Joaquín Cendejas, Br. Joaquín Guevara, Gregorio Ceballos, Agustín Dueñas, Francisco Santoyo, Manuel José Orozco. Diputados suplentes: Mariano Magias Lagos, Manuel Foncerrada, Vicente Rincón, Francisco Gaona, Mariano Madrigal y Manuel García.²³⁹

La Sexta legislatura funcionó del 2 enero de 1835 al 9 de octubre de 1835. Resultaron electos diputados propietarios el Lic. Juan Manuel Olmos, Lic. Manuel Alvirez, Vicente Rosa, Rafael Robles, Vicente Herrera, Mariano Suárez, Mariano Ramírez, Miguel Méndez López, Br. Antonio de la Peña, Francisco

²³⁶ AHCEMO, Varios, Legislatura II, Caja 7, Exp. 5.

²³⁷ *El Michoacano Libre. Periódico político y literario*, T. I, no. 45, 7 de julio de 1830, p. 180.

²³⁸ AHCEMO, Varios, Legislatura III, Caja 6, Exp. 3.

²³⁹ AHCEMO, Varios, Legislatura V, Caja I, Exp. 4.

Romero y Soravilla, Lic. Antonio García Rojas, José Ugarte, Ignacio Álvarez, Mariano Porto, Juan Gómez Puente, Manuel Alzua, Francisco Méndez Torres y como suplentes Lic. José María Izazaga, Br. Rafael Guedea, Nicolás Chávez, Br. Manuel Leiva, Mariano Castro, Cayetano Gómez, José Ma. Pallares y Mariano Peñaloza.²⁴⁰

2.2.2. *El poder ejecutivo*

Con respecto al ejecutivo, la Constitución de Michoacán de 1825 estipulaba en el título segundo que éste se depositaba en un solo individuo con el nombre de Gobernador del estado, a la par se elegía un vicegobernador, quien en caso de imposibilidad física o moral del primero asumía todas las facultades y prerrogativas. Para obtener el cargo constituía un requisito el ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, haber nacido en el territorio de la federación y en ese caso ser vecino del estado con una residencia de 5 años y tener 30 años cumplidos al tiempo de la primera elección. No se podían elegir para ambos cargos los eclesiásticos, ni empleados de la federación. La reelección se permitía siempre y cuando hubiese pasado un cuatrienio de haber cesado funciones y el desempeño del empleo estaba por encima de cualquier otro que tuviesen en el estado.²⁴¹

La elección del ejecutivo también era de forma indirecta como la del legislativo, pero esta tenía más filtros. La junta electoral del estado, al día siguiente de nombrar diputados, elegía la terna de la cual saldrían los representantes del ejecutivo, el presidente de la junta debía remitir el acta de elección a la diputación permanente del Congreso, quien la reservaría para la legislatura, que una vez instalada procedía al nombramiento del gobernador y vicegobernador en dos de los tres individuos propuestos por la Junta.²⁴²

El periodo de funciones comprendía un cuatrienio que debía iniciar el 6 de octubre, a la vuelta de cuatro años, los funcionarios se remplazaban a través de una elección constitucional, de no ser posible su realización, la legislatura o en su receso la Diputación permanente elegiría de entre los individuos del Consejo

²⁴⁰ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos...*, Tomo VI, pp. 138-139, Tomo VII, p. 81.

²⁴¹ *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 483.

²⁴² *Ibíd.*, pp. 483-484.

propietarios o suplentes a quien hiciera las funciones del gobernador hasta la posesión de los nuevos electos constitucionalmente. A falta del vicegobernador tomaría su lugar el decano del Consejo. Es preciso remarcar que dentro de este proceso quedaban excluidos los consejeros que fueran eclesiásticos.²⁴³

La primera elección de gobernador en Michoacán se dio el 8 de abril de 1824 y recayó en Francisco Manuel Sánchez de Tagle en calidad de interino hasta que el Congreso constituyente michoacano promulgara la Constitución y como Teniente de gobernador nombró a Antonio de Castro, el primero presentó su renuncia el 9 de julio y fue aceptada, todo lo anterior sin haber tomado posesión del cargo. Entonces, el Congreso designó al segundo como gobernador, quien fue el primer gobernador de Michoacán en funciones y estuvo al frente del ejecutivo hasta el 6 de octubre de 1825, para tomar de nuevo el cargo al haber sido electo titular del ejecutivo de acuerdo con lo establecido por la Constitución michoacana.

De 1825 a 1835 se realizaron cinco elecciones para designar a los titulares del ejecutivo acorde al cuatrienio establecido por la Constitución local. Antonio de Castro fue electo primer gobernador Constitucional para el periodo de 1825-1829, entró en funciones en octubre de 1825 y renunció por no estar de acuerdo con el decreto de expulsión de españoles a principios de noviembre de 1827 por lo que el vicegobernador, José Trinidad Salgado, asumió el interinato del ejecutivo, hasta cumplir con el cuatrienio prácticamente sin interrupción, salvo la ausencia del 2 al 18 de diciembre de 1828,²⁴⁴ en que debió responder a la acusación hecha por el diputado Joaquín Domínguez ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Para el periodo 1829-1833 fue nombrado como titular del ejecutivo José Trinidad Salgado y como vicegobernador Diego Moreno el 18 de agosto de 1829. Ambos entraron en funciones en octubre de ese mismo año; no obstante, el 6 de agosto de 1830 José Trinidad Salgado envió un escrito a la diputación permanente en que manifestaba verse precisado a retirarse violentamente de Morelia por hallarse en peligro su autoridad y su persona. Por lo que Diego Moreno en su calidad de vicegobernador debió encargarse del gobierno el 12 del mismo mes. El 19 de agosto de 1830 se declaró inconstitucional la terna para

²⁴³ *Ibíd.*, p. 484.

²⁴⁴ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero gobierno en Michoacán*, p. 205.

gobernador e insubsistente el nombramiento de consejeros propietarios y suplentes que realizó la junta electoral del 1º de junio de 1829 y se aprobó la terna hecha por la junta electoral para el ejecutivo el 5 de julio de 1830 y que recayó en Diego Moreno, José María Paulín y José Manuel Chávez, de la misma manera se aprobó la elección de consejeros. Finalmente, el Congreso le otorgó la titularidad del ejecutivo a Diego Moreno.²⁴⁵ A pesar de ello, Salgado reaparece para retomar el cargo de Gobernador del 18 de enero de 1833 al 26 de junio y del 6 de julio al 5 de octubre de ese mismo año, atendiendo al cuatrienio marcado por la Constitución local.²⁴⁶

El argumento para el no reconocimiento de la terna radicaba en la inconstitucionalidad de la elección, pues Salgado había asumido la gubernatura por su carácter de vicegobernador ante la renuncia de Antonio de Castro, por lo que era el titular del ejecutivo al tiempo de la elección, lo que no estaba permitido por la Constitución michoacana al ser reelección inmediata.

El 10 de julio de 1833 se decretó la ley electoral para gobernador constitucional, elección que debió repetirse y que nombró a Onofre Calvo Pintado como titular y como vicegobernador a José María Silva, tomando posesión del cargo el 20 de noviembre hasta el 23 de marzo de 1834, solicitando licencia y retomando el cargo del 2 de abril al 13 de junio. Por lo que en sus ausencias como venía ocurriendo se dio una constante sucesión de interinatos por parte de vicegobernador y consejeros de gobierno, dentro de esos cambios el estado se quedó sin titular del ejecutivo del 14 al 25 de julio de 1834. El periodo constitucional de Onofre Calvo Pintado no duró el cuatrienio establecido, pues el 30 de enero de 1835 la legislatura en turno tuvo a bien elegir gobernador a Mariano Anzorena y Foncerrada y como vicegobernador a Antonio Pérez Gil, el primero estuvo a cargo del 1º de marzo al 20 de junio en que entró en funciones el segundo para dejar el cargo el 10 de septiembre, fecha en que se posicionó en el gobierno Telésforo Méndez Torres, quien debió hacer frente al cambio de sistema de una república federal a una central; por lo que se puede decir que la gubernatura de Mariano Anzonera cierra el 8 de octubre de 1835, cuando el Congreso se adhiere al cambio del sistema de gobierno.²⁴⁷

²⁴⁵ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo IV, pp. 63-65

²⁴⁶ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero gobierno en Michoacán*, p. 205.

²⁴⁷ *Ibídem*.

No obstante, lo marcado por la Constitución michoacana, ninguno de los titulares cumplió con el cuatrienio, la inestabilidad política de la entidad y debilidad del propio poder se manifestó en la constante movilidad de los gobernadores interinos. Véase el cuadro de los gobernadores de Michoacán.

Cuadro No. 5

Los gobernadores de Michoacán de 1824 a 1835

No.	GOBERNADORES	PERIODO DE GOBIERNO
1	Francisco Manuel Sánchez de Tagle	Gobernador interino. De nombramiento, nunca asumió el cargo.
2	Lic. Antonio de Castro y Elorza	Gobernador interino 09/VII/1824 a 06/X/1825
3	Lic. Antonio de Castro y Elorza	Gobernador constitucional 06/X/1825 a 09/XI/1827
4	D. José Trinidad Salgado	Gobernador interino 10/XI/1827 a 19/XI/1828
5	D. Pedro Villaseñor	Gobernador interino 2-10/XII/1828
6	Dr. Juan Manuel González Ureña	Gobernador interino 11-18/XII/1828
7	D. José Trinidad Salgado	Gobernador interino 18/XII/1828 a 06/X/1829
8	D. José Trinidad Salgado	Gobernador constitucional 06/X/1829 a 24/III/1830
9	Dr. Juan Manuel González Ureña	Gobernador interino 5-12/III/1830
10	D. Diego Moreno	Gobernador interino 12/III/1830/ a 19/VIII/1830
11	Dr. Juan Manuel González Ureña	Gobernador interino 19-22/VIII/1830
12	D. Diego Moreno	Gobernador constitucional 23/VIII/1830 a 04/II/1831
13	D. José Manuel de Chávez	Gobernador interino 4-17/II/1831
14	D. José Antonio Pérez Gil	Gobernador interino 18/II/1831 a 23/III/1831
15	Dr. Juan Manuel González Ureña	Gobernador interino 15/VI/1831 a 03/X/1831
16	D. Diego Moreno	Gobernador constitucional 03/X/1831 a 15/I/1833
17	D. Mariano Amezcua	Gobernador interino 15-17/I/1833
18	D. José Trinidad Salgado	Gobernador constitucional 18/I/1833 a 28/II/1833
19	D. José Trinidad Salgado	Gobernador constitucional 01/III/1833 a 26/V/1833
20	D. Ramón Sánchez Arriola	Gobernador interino 27/VI/1833 a 05/VII/1833
21	D. José Antonio Pérez Gil	Gobernador interino 01/VI/1833 a 05/VII/1833

12	D. José Trinidad Salgado	Gobernador constitucional 06/VII/1833 a 05/X/1833
23	D. Felipe Menocal	Gobernador interino 6-20/X/1833
24	D. Joaquín Caballero de Acuña	Gobernador interino 20/X/1833 a 05/XI/1833
25	Lic. Antonio Bribiesca	Gobernador interino 6-8/XI/1833
26	D. Mariano Ruíz de Chávez Gil	Gobernador interino 8-20/XI/1833
27	Lic. Onofre Calvo Pintado	Gobernador constitucional 20/XI/1833 a 23/III/1834
28	Lic. José María Silva	Gobernador interino 24/III/1834 a 02/IV/1834
29	Lic. Onofre Calvo Pintado	Gobernador constitucional 02/IV/1834 a 13/VI/1834
30	Lic. José María Silva	Gobernador interino 13-30/VI/1834
31	D. Manuel de Echenique	Gobernador interino 1-14/VII/1834
32	Sin Gobierno	14-25/VII/1834
33	Lic. Antonio Manzo Ceballos	Gobernador interino 25/VII/1834 a 28/II/1835
34	D. Mariano Anzorena y Foncerrada	Gobernador constitucional 01/III/1835 a 08/X/1835
35	D. José Antonio Pérez Gil	Gobernador interino 20/VI/1835 a 10/IX/1835

Fuente: Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero gobierno en Michoacán*, p. 205.

De 1825 a 1835, respetando el cuatrienio establecido por la Constitución debieron darse tres elecciones para gobernador; no obstante, a lo largo de este periodo se dieron 33 cambios, si se incluyen las elecciones antes de la promulgación del texto constitucional serían 35 movimientos en los que varios tomaron el cargo en más de una ocasión como fue el caso de Antonio de Castro, José Trinidad Salgado, Juan Manuel González Ureña, Diego Moreno, José Antonio Pérez Gil, Onofre calvo Pintado y José María Silva, por tanto, los 35 cambios recayeron en 18 individuos. Es de remarcar que el Consejo de gobierno se convirtió en un abastecedor de gobernadores en el periodo al ser el órgano al que se recurría cuando el cargo quedaba vacante.

El cuadro también permite observar el nivel de profesionalización en el ejecutivo, de los 18 personajes que transitaron por el ejecutivo encontramos cinco abogados: Antonio de Castro, Antonio Bribiesca, Onofre Calvo Pintado, José María Silva y Antonio Manzo Ceballos y un médico: Juan Manuel González Ureña. Se infiere que los otros 13 debieron ser propietarios o comerciantes.

Un elemento más a rescatar reside en que varios representantes del ejecutivo fueron legisladores como fue el caso de José Trinidad Salgado, el Lic.

Antonio Bribiesca, Pedro Villaseñor, el Lic. José Antonio Pérez Gil, el Lic. Onofre Calvo Pintado y Mariano Anzorena, quien también había sido prefecto del departamento del Norte.²⁴⁸

La movilidad observada en el ejecutivo denota la inestabilidad política y social de la cual fue preso el estado desde principios de 1827 y la debilidad con que nacen las nuevas instituciones de gobierno, en donde la falta de acuerdo político resquebrajó la armonía de la administración pública y tranquilidad social en el estado.

De acuerdo con la Constitución de 1825, las prerrogativas del gobernador consistían en hacer propuestas de leyes y decretos que beneficiaran al estado, éstas debían contar con argumentos expuestos por escrito al Congreso local. Asimismo, el documento le otorgaba poder para suspender por una sola vez y hasta nueva resolución las leyes o decretos del Congreso de acuerdo con los artículos 47 y 48 constitucional.²⁴⁹

Respecto a las atribuciones, los deberes del gobernador consistían en promulgar, mandar, cumplir y ejecutar las leyes y decretos del Congreso del estado, cuidar de la conservación del orden público en lo interior y de la seguridad del estado en lo exterior con arreglo a la Constitución y a las leyes del mismo y de la federación, velar por el puntual cumplimiento de la Constitución local y federal así como de las leyes y decretos de la federación y del Congreso del estado expidiendo las órdenes correspondientes para su ejecución. También era su responsabilidad velar para que la justicia fuese administrada pronta y cumplidamente por los tribunales del estado y la ejecución de sus sentencias.

Al gobernador se le atribuyó el mando de la milicia cívica del estado, la formación de los reglamentos necesarios para el mejor gobierno y la administración pública, con previa aprobación del Congreso, era el responsable de proveer los empleos dispuestos por mandato constitucional o por ley; entre ellos se encontraba el nombramiento del Secretario de despacho de gobierno, de la misma manera debía cuidar la recaudación y decretar la inversión de las contribuciones del Estado acorde a las leyes.

²⁴⁸ Nely Noemí GARCÍA CORONA, *Relaciones clero-gobierno en Valladolid-Morelia, 1814-1835*, Morelia Tesis de Maestría, Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 2010.p. 82.

²⁴⁹ *Actas y Decretos*, Tomo II, pp.483-484.

También constituían deberes para el gobernador el dar informe al Congreso, cuando éste se lo pidiera; cuidar que las elecciones constitucionales se hicieran en el tiempo asignado; convocar al Congreso cuando lo determinara la diputación permanente y presentar cada año a este mismo órgano el presupuesto de los gastos del estado para su aprobación. El gobernador podía solicitar al Congreso prórroga de sesiones y la reunión extraordinaria del mismo, conceder indultos con arreglo a la ley y previa consulta del Consejo, conmutar la pena ordinaria en otra menor, así como la suspensión de empleados y Magistrados, la imposición de multas por no más de 500 pesos.²⁵⁰

No le estaba permitido al gobernador estar al frente de la milicia cívica personalmente sin autorización del Congreso o la diputación permanente, ni poner este cuerpo a disposición de la federación salvo en casos muy específicos, de la misma manera no podía ocupar o usufructuar la propiedad de algún particular o corporación, de ser necesario se requería la aprobación del Congreso o Consejo de gobierno y con previa indemnización al propietario, no podía arrestar a persona alguna, salvo si la seguridad y el bien común estuvieran en riesgo y de ser así no podía retenerlo más de 48 horas, pasado ese tiempo el detenido quedaría a disposición del Tribunal o Juez competente o imponer pena. Es decir, estos artículos protegían los derechos de los ciudadanos como lo eran la propiedad y la libertad frente al poder del gobierno.²⁵¹

El ejecutivo fue un poder fuertemente vigilado en cuanto a sus acciones y apego a la Constitución, por un lado, el legislativo fue investido con la figura del gran jurado y en esas circunstancias podía declarar si había o no lugar a formación de causa a acusaciones contra diputados, gobernador, vicegobernador, Consejeros, secretario de despacho, miembros del Supremo Tribunal de Justicia y Tesorero General y por la otra se creó el Consejo de gobierno.²⁵²

El gran jurado se constituyó al interior de Congreso en dos ocasiones para tratar las acusaciones contra dos gobernadores, la primera para determinar si se inculpaba a Antonio de Castro por infracciones a la Constitución del estado y a otras leyes emanadas del legislativo, la cual subsistió al cambio de legislatura en

²⁵⁰ *Ibíd.*, pp. 485-487.

²⁵¹ *Ibíd.*, pp. 487.

²⁵² *Ibíd.*, p. 479.

agosto de 1827 y ésta en septiembre dijo no proceder la acusación. La otra acusación ante este órgano interno del legislativo se hizo contra José Trinidad Salgado en 1828. Esta vez el Congreso determinó que la acusación procedía y se turnó al Supremo Tribunal de Justicia del Michoacán.

Por otra parte, en el título constitucional relacionado con el poder ejecutivo en el capítulo 5º se disponía la creación del Consejo de gobierno, un órgano compuesto por cuatro consejeros electos por el pueblo y del vicegobernador, que fungía como su presidente con voto en todas las deliberaciones y tenía bajo su tutela asuntos nodales de la administración gubernamental.²⁵³

La elección de consejeros se realizaba a través de la junta electoral el mismo día y acto continuo a la de los tres individuos para gobernador y vicegobernador, debiéndose renovar cada dos años por mitad, saliendo en la primera vez, los nombrados últimamente, ello de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución. Mientras que el 80 marcaba que el número de suplentes sería igual al de propietarios y de unos y otros sólo uno podía ser eclesiástico.²⁵⁴

Las principales atribuciones del Consejo, de acuerdo con la Constitución, consistían en asesorar al gobernador en todos los asuntos que pidiera y en los casos que lo previniera la ley, así como velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, dar parte al Congreso de las infracciones observadas, promover el establecimiento de ramos útiles en el estado, hacer propuestas conducentes para mejorar el cumplimiento de la Constitución, las leyes generales y particulares del estado, presentar al gobernador o al Congreso proyectos de ley o reformas sobre cualquier ramo de la administración pública y glosar en último resultado todas las cuentas de los caudales públicos y presentarlas al Congreso para su análisis.²⁵⁵

²⁵³ Felipe TENA RAMÍREZ, *Michoacán y sus Constituciones*, p. 27.

²⁵⁴ *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 487.

²⁵⁵ *Ibíd.*, pp. 487-488.

Cuadro No. 6
Elección del Consejo de Gobierno 1825-1834

Fecha de elección	Consejero Propietario	Consejero Suplente
1825	José Trinidad Salgado Vicegobernador y presidente del Consejo. Pedro Villaseñor Lic. Ignacio del Río José María Paulín Antonio Manso y Ceballos Secretario	Joaquín Aguiar
1827	Juan González Ureña José María Paulín	José Rudencino de Villanueva Cornelio Rojas
1829	Juan José Pastor Morales Lic. Mariano Amezcua	Lic. Clemente Valdez Lic. Domingo Maciel
1830	José María Rayón Antonio Pérez Gil	Lic. Clemente Valdez Lic. Mariano Tercero
1831	Antonio Manzo Ceballos Ignacio Izazaga	Joaquín Iriarte Manuel Farías
1833	-No se tiene el dato-	-No se tiene el Dato-
1834	Lic. Pablo Domínguez Manuel González Pimentel Lic. Telesforo Méndez Antonio Frutos Olmos	Domingo Maciel Ignacio Anciola Rafael Puente Martín Mier

Cuadro de elaboración propia. Fuente: GARCÍA CORONA, Nely Noemí, *Un esbozo histórico de la administración de Antonio de Castro, primer gobernador de Michoacán 1824-1827*, Tesis de Licenciatura, Morelia, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, 2008, pp. 100, AHCEMO, Varios Legislatura I, Caja 2, Exp.8. *El Michoacano Libre. Periódico político y literario*, T. I, no. 45, 7 de julio de 1830, p. 180, *El Michoacano Libre. Periódico político y literario*, T. II, no. 35, 30 de mayo de 1831, p. 140 COROMINA, Amador, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo III, p. 166, Tomo VI, p. 139.

Como se advirtió, determinado número de eclesiásticos podían ser electos vocales del Consejo de Gobierno, pero a diferencia de los consejeros de otras profesiones, éstos no podían ejercer el ejecutivo. Ignacio del Río, Juan José Pastor Morales, José María Rayón y Pablo Domínguez eran miembros del clero secular, Pastor Morales y Rayón fungieron como diputados constituyentes, mientras que Domínguez era un destacado eclesiástico muy cercano al Cabildo Catedralicio, todos ellos con importantes conocimientos en derecho.

Por otra parte, llama la atención el incremento de abogados dentro del órgano a partir de 1829, lo que se puede justificar si tomamos en cuenta su

función de asesoramiento al titular del ejecutivo, pero, sobre todo, el velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Finalmente, para cerrar este epígrafe, se mencionaran a los vicegobernadores que accedieron a la gubernatura: José Trinidad Salgado, Diego Moreno, José María Silva y José Antonio Pérez Gil y de los consejeros: Pedro Villaseñor y a Manuel González Ureña, quienes debieron ocupar la gubernatura por falta de titular del ejecutivo o del vicegobernador.

2.2.3. El poder judicial

Con respecto al poder judicial, Jaime Hernández apunta que la administración de justicia constituyó una de las prioridades de las autoridades michoacanas, en medio del establecimiento y consolidación de nuevas instituciones, el desorden político y los problemas cotidianos de inseguridad pública. En ella influyó poderosamente la Constitución de Cádiz, la cual había transformado la forma de concebir, distribuir y ejercer el poder y en el caso concreto de la justicia depositó su administración en manos de órganos especializados, separados de las funciones legislativas-administrativas, a lo anterior se agrega la prolija legislación que produjo Cádiz en torno a la organización de tribunales, juzgados de primera instancia y responsabilidad de funcionarios la que tuvo notable influencia en la organización judicial en Michoacán.²⁵⁶

Los desafíos derivados de la guerra insurgente, la creación de la diputación provincial de Michoacán y las reformas judiciales desprendidas de la Constitución gaditana propiciaron incertidumbre entre la población y en los encargados de impartir justicia; por ello el Congreso constituyente michoacano asumió como una de sus principales tareas poner orden en dicho rubro para combatir el desorden social y la inseguridad que prevalecía, para ello se procedió al establecimiento de una Audiencia.²⁵⁷

El Superior Tribunal de Justicia fue creado antes de ser sancionada la Constitución michoacana, por el decreto de 29 de mayo de 1824, compuesto por 6 ministros y un fiscal, que se dividirían en dos salas para atender los asuntos

²⁵⁶ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*, pp. 167-168.

²⁵⁷ *Ibíd.*, pp. 168-169.

civiles y criminales en segunda y tercera instancia respectivamente. La elección de los Ministros se realizó el 13 de junio, entre los designados se encontraban Juan Nepomuceno Gómez y Navarrete, José María Sánchez Arriola, José María Ortiz Izquierdo, José Sotero Castañeda, José Gallegos y Juan Bautista Raz y Guzmán y como fiscal Ignacio Alvarado. Los únicos que no tomaron posesión del cargo fueron Sotero Castañeda y Raz y Guzmán. La instalación del Tribunal debió aplazarse hasta octubre de 1824 ante la falta de un local para funcionar.²⁵⁸

Una vez promulgada la Constitución de 1825, el poder judicial quedó consignado en el título cuarto y compuesto por cuatro capítulos, en donde se determinaba que la aplicación de las leyes en el ramo civil y penal residía exclusivamente en los Tribunales, cuyas funciones consistían en juzgar y hacer que lo juzgado fuera ejecutado, se les negaba la facultad de interpretar la ley o suspender su ejecución, así mismo los jueces eran los responsables en caso de inobservancia de las leyes y por ello podían ser acusados por cualquier ciudadano ante el Tribunal competente.²⁵⁹

La impartición de justicia quedaba depositada en los juzgados de partido y municipio, mientras que en la capital del estado funcionarían para tal efecto los Tribunales Superior y Supremo respectivamente. Los Juzgados de partido y municipio se establecerían por designación del gobierno con la aprobación del Congreso y quedaba en manos de los alcaldes las primeras instancias de los asuntos de la Hacienda pública. Para ayudar en la impartición de Justicia se instituyó la figura del Asesor ordinario en los diferentes departamentos. Los alcaldes con jurisdicción contenciosa debían remitir la lista circunstanciada de las causas pendientes y concluidas cada tres meses de las criminales y cada cuatro de las civiles al Superior Tribunal de Justicia.²⁶⁰

El Superior Tribunal de Justicia también denominado Audiencia del Estado, de acuerdo al texto constitucional, quedó compuesto por tres Ministros y un fiscal. Para ser miembro de este órgano se requería ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 30 años, entre otros. El cargo era de carácter perpetuo y los ministros no podían ser depuestos a reserva de causa que estuviera legalmente probada y sentenciada. Este órgano era el responsable

²⁵⁸ Nely Noemí GARCÍA CORONA, *Un esbozo histórico*, pp. 104-105.

²⁵⁹ *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 491.

²⁶⁰ *Ibídem*.

de la impartición de justicia en segunda instancia, resolviendo las competencias de jurisdicción que se pudieran presentar entre los jueces inferiores, así como conocer de las causas de responsabilidad de los mismos jueces, determinar los recursos de nulidad y de las sentencias ejecutorias en primera instancia. Las demás atribuciones, prerrogativas y obligaciones y sus Ministros se establecerían por una ley.²⁶¹

Al Supremo Tribunal correspondía la impartición de justicia en tercera instancia integrado por dos secciones: una permanente y la otra extraordinaria, la primera compuesta por tres Magistrados y un fiscal encargada de conocer en tercera instancia los casos que así lo demandaran, a partir de 1835 los Ministros del Supremo Tribunal serían renovados cada seis años, pudiendo reelegirse indefinidamente. A este Tribunal competía llevar los recursos de nulidad interpuestos de las sentencias emanadas del Tribunal Superior, de los recursos de fuerza y protección de todos los Tribunales eclesiásticos, así como las competencias suscitadas entre la primera y la segunda instancia y examinar las listas de las causas pendientes y concluidas emitidas por éstas pasando copia al gobierno para su publicación. De la misma manera a este Tribunal competía el escuchar las dudas de los otros Tribunales y Jueces y consultar al Congreso por conducto del gobierno.²⁶²

Referente a la sección extraordinaria se conformaba de los ministros de la sección permanente, divididos en tres salas, cada una de un Ministro y de Conjueces, actuando el fiscal en las tres salas, denominadas de primera, segunda y tercera instancia, encargadas de las causas contra el gobernador del estado, de las causas criminales de los diputados, vicegobernador, secretario de despacho, consejeros, tesorero general; de las demandas civiles y criminales contra los Magistrados de 2ª instancia y juicios sobre responsabilidad.²⁶³

A pesar de ser una disposición Constitucional, la instalación de Supremo Tribunal de Justicia debió esperar hasta el 5 de abril de 1827, el argumento fue la falta de recursos para el pago de los Ministros y los muebles para las oficinas. José María Sánchez Arriola, Diego Manuel Solórzano, Pedro Martínez de Castro en calidad de Ministros, y Tomás Mariano Bustamante como fiscal habían sido

²⁶¹ *Ibíd.*, p. 492.

²⁶² *Ibíd.*, pp. 492-493.

²⁶³ *Ibíd.*, p. 493.

los designados desde enero de ese año. No obstante, Martínez de Castro renuncia, por lo que Bustamante asciende a Ministro y José María Ortiz Izquierdo fue nombrado fiscal.²⁶⁴

Para juzgar a los Ministros y Fiscal del Supremo Tribunal el Congreso nombraría 10 ciudadanos de 30 años, vecinos del estado y de probidad conocida. El 31 de agosto de ese mismo año se dieron a conocer los nombres de los individuos encargados de juzgar a los ministros y fiscal el Supremo Tribunal: Manuel Farías, Lic. Mariano Tercero, Cornelio Roaro, Antonio Abad Rosel, Lic. Ignacio Izazaga, Juan José Méndez del Corral, Francisco Romero Soravilla, Fernando Román, Antonio Recalde y Luis Martínez.²⁶⁵

La organización planteada por la Constitución enfrentó disputas entre el Superior y Supremo Tribunal. Se cuestionó a través de la prensa la pertinencia de ambos tribunales, acompañado de la falta de recursos para su mantenimiento, por lo que el 19 de diciembre de 1831 el legislativo depositó la impartición de justicia en los alcaldes, jueces de primera instancia y un Tribunal Superior de Justicia; no obstante, ambos Tribunales seguirían en funciones hasta la creación del nuevo Tribunal Supremo. La disposición se integró a la Constitución a través de las reformas que sufrió dicho documento en agosto de 1832, por medio de la cual ambos tribunales se fusionaron para ejercer la segunda y tercera instancia, pero a pesar de lo estipulado por la ley, en la práctica los hechos no se concretaron hasta abril de 1835.²⁶⁶

Volviendo al texto constitucional de 1825, después de establecer las instancias y sus atribuciones, el título sobre el poder judicial también determinó elementos sobre la administración de justicia en general y en lo criminal. Por lo que quedó consignado que la justicia sería administrada a nombre del Estado acorde a las leyes. En todo caso no podía haber más de tres instancias y por tanto tres sentencias definitivas, pero supeditado a las leyes, las que determinarían, de acuerdo con la naturaleza y calidad de los negocios, qué sentencia se debía ejecutar. Mientras que el recurso de nulidad sólo podía tener

²⁶⁴ Nely Noemí GARCÍA CORONA, *Un esbozo histórico*, p. 148.

²⁶⁵ *Ibíd.*, p. 150

²⁶⁶ Eva Elizabeth MARTÍNEZ CHÁVEZ, Leopoldo LÓPEZ VALENCIA, "Entre la ley y la realidad. Estructura y praxis del Poder Judicial de la Constitución de 1825", en Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, Héctor PÉREZ PINTOR (Coords.), *Reflexiones jurídicas en la historia constitucional mexicana: Una perspectiva bicentennial*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Cultura, 2009, p. 110

efecto al apegarse a los procedimientos marcados por la ley. Un mismo juez no podía emitir sentencia en dos o más instancias, todos los habitantes eran libres de promover sus derechos por sí o por una persona de su confianza sin la firma de un letrado. Por último, para la impartición de justicia se debían observar todos los artículos de la 7ª sección del artículo 5º de la Constitución Federal.²⁶⁷

En lo criminal, se estipuló que ningún habitante del estado podía ser preso sin preceder información sumaria del hecho y por el que según la ley debería ser castigado, por lo que era necesario una orden de prisión, la que debía contener los motivos, estar firmada por la autoridad competente, mientras que el reo tenía que ser notificado, ser entregado al alcaide, con la firma de la autoridad que decretó la prisión, de no cumplir con estos requisitos el arrestado no se tendría como preso, sino en calidad de detenido. También se enmarcaban los tiempos de la detención, el arresto y los procedimientos en ambos casos, así como los pasos para emitir y ejecutar sentencia.²⁶⁸

2.3. La reglamentación del legislativo michoacano

El surgimiento de los órganos legislativos vino acompañado con la expedición de normas que rigieran su funcionamiento interno, lo cual era visto como una necesidad tal como lo planteó Jeremy Bentham en su obra *Tácticas Parlamentarias*, de acuerdo con el autor su escrito estaba dirigido a todo tipo de gobierno, pues siempre existían cuerpos y consejos con el objeto de formar resoluciones, por tanto, era una necesidad el conocer el arte de deliberar.

“El reglamento interno de un congreso político es un ramo esencial de legislación.” Un tema que en la práctica tenía viejos antecedentes, pero del que en la teoría ningún escritor se había ocupado en específico y cuya importancia era tal que de ello podía depender la destrucción o conservación de estos cuerpos políticos que tenían que sortear tres peligros inminentes: la precipitación, la violencia y el fraude, además de dos enemigos: la oligarquía y la anarquía. La única defensa que poseían las asambleas políticas era su sistema interno, es decir, su reglamento, el que por medio de una serie de

²⁶⁷ *Actas y Decretos*, Tomo II, pp. 494-495.

²⁶⁸ *Ibíd.*, pp. 495-496.

ordenamientos imponía al cuerpo entero la moderación, la reflexión y la perseverancia, decía el autor.²⁶⁹

Los antecedentes de la existencia de un documento que estableciera el orden y funcionamiento interno de los cuerpos legislativos, en el caso español, inician con el reglamento interno del 4 de septiembre de 1813 para las Cortes de Cádiz. Aunque se desconoce el grado exacto de injerencia que *Tácticas parlamentarias* pudo tener en la redacción de dicho ordenamiento, es indudable que sí se tuvo presente.

Por el vínculo político entre la península con la Nueva España en esos momentos, no se pone en tela de juicio la influencia del reglamento de las Cortes de Cádiz en los emitidos posteriormente en dicho territorio, como en el Congreso mexicano de abril 1823 y la primera legislatura nacional de diciembre de 1824.

El caso que no aplica es el del *Reglamento del Congreso* redactado por Morelos, el segundo escrito más importante del eclesiástico que vio la luz el 11 de septiembre de 1813. Documento integrado por 59 artículos, en él se esbozaron las formas y procedimientos a los que debía ceñirse la asamblea insurgente y que a su vez caracterizó los tres poderes de gobierno.²⁷⁰

La influencia de las Cortes españolas fue definitiva en la organización de los cuerpos legislativos mexicanos a partir del primer Congreso constituyente de 1822. De ella se tomaron las formas de trabajo y de organización interna que contribuyeron a la formación de un espíritu de cuerpo, como lo fueron la asunción de la soberanía, el trabajo en comisiones y la elección mensual de la presidencia.²⁷¹

Al respecto, Ivana Frasset indica que las primeras sesiones del Congreso constituyente mexicano se dedicaron a construir el aparato de funcionamiento del mismo. En ellas se adoptó el Reglamento interno que había elaborado la Junta provisional gubernativa, el cual era una fusión de los tres reglamentos que habían funcionado en la monarquía hispánica durante los anteriores periodos constitucionales: el de 1810, el de 1813 y el de 1820.²⁷²

²⁶⁹ Jeremy BENTHAM, *Tácticas Parlamentarias*, Edición Facsimilar, en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/tacticas/Tacticas_Parla.pdf pp. 66-67, 73. [consultado el 21 de enero de 2017]

²⁷⁰ Carlos HERREJÓN PEREDO, *Morelos*, Tomo I, pp. 391.

²⁷¹ Luis MEDINA PEÑA, *Invención del sistema político mexicano, forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 30.

²⁷² Ivana FRASQUET, *Las caras de águila*, p. 152.

La importancia de los reglamentos²⁷³ dentro de los órganos legislativos se debe al carácter organizacional, pues éstos no podían trabajar sin tener el esquema bajo el cual debían funcionar, para mostrar en todo momento orden y propiedad a la hora de desempeñar sus labores, ya fuera al interior o exterior del recinto, pues en ambos casos eran observados por un público, una población a la cual representaban y por la que debían procurar su bienestar a través de la legalidad. Por tanto, su actuar debía obedecer a reglas, propias de órganos tan importantes dentro de la nueva concepción y ejercicio del poder.

El documento que dio orden al Congreso de Michoacán se tituló *Reglamento para el Gobierno interior de las legislaturas del Estado*, fue elaborado por la primera legislatura constituyente y fechado para su promulgación el 21 de julio de 1825. Se estructuró en 22 capítulos en los cuales se distribuyeron 220 artículos que dieron orden interno al legislativo local desde diversas aristas, empezando por el comportamiento y vestimenta de sus miembros, la organización de las sesiones y comisiones, la forma para llevar las propuestas, solicitudes y debates, así como elementos protocolares y de formación de causas de las máximas autoridades de la entidad.

Al instalarse el Congreso constituyente michoacano el 6 de abril de 1824 vio la necesidad de tener de inmediato un reglamento que orientara el funcionamiento y comportamiento de la legislatura, en lo que se redactaba un ordenamiento propio. Ese mismo día, el diputado José Trinidad Salgado, propuso la adopción del reglamento interior del Congreso de Jalisco, mientras el estado creaba el propio, en ese momento se dio lectura completa al mismo y la legislatura aceptó la propuesta.²⁷⁴ Lo que es indicativo de que se tenía a la mano y por tanto que era un documento que circuló al menos en los estados limítrofes a Jalisco tomando como referencia la constante comunicación que mantenían ambas legislaturas. A su vez, se debe resaltar la certeza que tenían los legisladores sobre la necesidad de un reglamento interno.

El que se adoptara el reglamento de Jalisco para regular el funcionamiento del legislativo michoacano, solo constituyó una guía, pues no siempre su contenido se adaptaba a las circunstancias que se le presentaban a la

²⁷³ Otro material que aborda el tema de los reglamentos es Alonso LUJAMBIO, Rafael ESTRADA MICHEL, *Tácticas parlamentarias hispanoamericanas*, México, Tirant lo Blanch, 2012.

²⁷⁴ *Actas y Decretos*, Tomo I, p. 4.

legislatura, o bien el mismo ni siquiera las contemplaba, lo que a su vez puede inferir ciertas lagunas dentro de sí, entendibles a partir de la premura con que se instaló el Congreso jalisciense. Lo anterior llevó a que en varias ocasiones se hiciera alusión al reglamento adoptado.

En este caso, el 5 de junio el diputado Lloreda solicitó se reformara el artículo 55 del reglamento adoptado.²⁷⁵ El 2 de noviembre en sesión pública, Lloreda dijo que con motivo de que en varias ocasiones se habían recibido oficios del Gobierno estando en la sesión, pedía la variación del reglamento “en esta parte no se dé cuenta con ellos al principio, sino hasta el fin de la sesión.”²⁷⁶

En sesión secreta extraordinaria del 19 de junio, se trató el asunto del Vicario capitular de la diócesis con respecto a los libros prohibidos. El tema se alargó, por lo que el diputado Salgado manifestó que se infringía el Reglamento por haber pasado las dos horas que contemplaba para estas sesiones y no consideraba que el asunto fuese de tal importancia como para que ésta se siguiera alargando. En el acta no se percibe un comentario más al respecto, la sesión continuó dos horas más de lo permitido, permaneciendo en ella de las 5 de la tarde a las 9 de la noche.²⁷⁷

El tema de sesiones secretas comenzó a ser incidente en los debates, pues al parecer el reglamento adoptado no marcaba el número de éstas en su calidad de ordinarias. En su momento, el diputado Isidro Huarte propuso a la comisión de policía que dijera cuantas sesiones ordinarias debía de haber por semana.²⁷⁸ En sesión pública del 13 de julio se puso a discusión el tema, el presidente Salgado, individuo de la comisión de policía, había suscrito fueran dos, pero que haciendo nuevas reflexiones, creía conveniente dejar en libertad al Congreso, pues muchas veces no había cosa que tratar en secreto, y muchas otras sería necesario tenerlas diariamente, lo primero llevaría a reunirse inútilmente y lo segundo llamaría la atención del público impuesto de que la legislatura solo debería de reunirse cierto número de veces, por lo que causaría novedad cualquier extraordinaria que fuera preciso citar. Por su parte, el eclesiástico José María Rayón manifestó que en todos los Congresos de la

²⁷⁵ *Actas y Decretos*, Tomo I, p. 77.

²⁷⁶ *Ibíd.*, p. 373.

²⁷⁷ *Ibíd.*, pp. 101-102.

²⁷⁸ *Ibíd.*, p. 125.

federación se había designado un número fijo de sesiones secretas, sin embargo, el hecho de que así se hiciera, cuando se citara a éstas fuera de lo señalado, efectivamente llamaría la atención del público. Mientras que el eclesiástico Juan José Pastor Morales estaba por la propuesta de Salgado, siendo convocadas cuando fueran necesarias. Así mismo, los diputados José María Jiménez y Manuel González consideraban que el punto debía reservarse para cuando se discutiera el reglamento interior del Congreso, González pedía se pasara a la comisión, para que lo tuviera presente y mientras tanto, se apegaran a lo establecido por uno de los artículos del de Jalisco, al cual se le dio lectura. Finalmente, la propuesta fue desechada y solo se pidió que lo tuviera presente la comisión de Policía.²⁷⁹

En otro punto referente al reglamento, Lloreda propuso a la comisión de policía que cuando se fuera a votar algún punto de consideración, no saliera ninguno de los diputados de la sesión, lo que fue dictaminado y quedó pendiente su discusión hasta que aumentara el número de diputados asistentes al Congreso para debatir que en la deliberación de los decretos estuvieran al menos nueve vocales y en negocios graves las dos terceras partes. En sesión pública del 17 de julio se trató el dictamen de la comisión de policía el cual se desechó y finalmente se propuso y aprobó que “al tiempo de votar cualquier punto el Congreso, se llamará a los Ciudadanos Diputados que estuvieren fuera del Salón, para que este acto se verifique con la concurrencia de todos los que hayan asistido a la Sesión”.²⁸⁰

Respecto al proceso de redacción y debate del Reglamento interno del Congreso de Michoacán, las intervenciones comenzaron el 10 de abril de 1824, cuando el eclesiástico Manuel de la Torre Lloreda propuso que la comisión de policía presentara a la brevedad posible el proyecto sobre reglamento interior del Congreso.²⁸¹ Por tanto, la responsabilidad de crear el reglamento recayó en las figuras del presidente y secretarios del Congreso, cargos que se renovaban cada mes, lo que al parecer dificultó la redacción del mismo, al grado de ser de los últimos documentos que terminó la legislatura constituyente. A tres meses de la

²⁷⁹ *Ibíd.*, pp. 146-147.

²⁸⁰ *Ibíd.*, pp. 145, 147 y 154.

²⁸¹ *Actas y Decretos*, Tomo I, p. 10.

instalación del Congreso el diputado Salgado en su calidad de presidente abrió la sesión secreta y pronunció el siguiente discurso:

Señores. El objeto de esta sesión secreta es para llamar a V.SS. la atención sobre la apatía y vergonzosa marcha que ha tenido el Congreso. Ajustamos ya tres meses de instalado, y en ellos poco se ha hecho. Para satisfacer de tal aserto, tiro la vista al Cuerpo Legislativo, y en él veo que ni el Reglamento de su Gobierno interior se ha formado [...].²⁸²

Lo anterior muestra el nulo avance en materia reglamentaria de la legislatura, con la lectura de las actas del constituyente se infiere que le costó mucho trabajo articular sus normas internas, de hecho, fue el de Jalisco el que reguló sus trabajos legislativos de principio a fin. Aunque el Congreso creó el reglamento, la falta de tiempo hizo que lo promulgara la primera legislatura constitucional.²⁸³

El reclamo de Salgado dio frutos y para mediados de agosto se leyeron los tres primeros capítulos del Reglamento interno del Congreso, después de la lectura, el diputado Lloreda manifestó la falta de algunos artículos que constaban en el cuerpo del mismo, a lo que se acordó algunos otros que se estimaran necesarios, se añadirían cuando llegara el caso de su respectivo examen.²⁸⁴

En el mes de septiembre comenzó la discusión de los capítulos presentados, por tanto, se empezó por los artículos del 1º al 39. Para octubre se revisó el título 14 y se habló de los puntos contenidos del 124 al 129, así como de las reformulaciones del 17 y 15. Para noviembre se intentó discutir el capítulo octavo sobre el establecimiento del tribunal encargado de juzgar a los diputados, pero se suspendió por no tener todavía claro el asunto.

En sesión pública del 4 de septiembre se debatió el primer artículo el cual decía “El Congreso residirá en la Capital del Estado”, lo que generó discusiones pues parecía que con el enunciado se daba por declarada a Valladolid como la capital del estado. Por tanto, se reformó a “El Congreso residirá en Valladolid, sino es, que el mismo estime conveniente trasladarse a otro de los lugares del Estado, para cuya resolución se necesitarán los votos de las dos terceras partes de los diputados.” No obstante, no hay un artículo con este contenido en el

²⁸² *Ibíd.*, p. 134.

²⁸³ Cfr. Amador COROMINA, *Recopilación de leyes y decretos*, Tomo II, pp. 3-40.

²⁸⁴ *Actas y Decretos*, Tomo I, p. 224.

reglamento. En esa misma sesión se discutió el artículo 2º que fue aprobado tal cual y versaba “El edificio del Congreso es el que antes se conocía con el nombre de la compañía; en lo sucesivo se titulará Palacio del Congreso del Estado”.²⁸⁵

En el reglamento publicado por la primera legislatura constitucional, este punto se parece al número 20 con substanciales modificaciones,

El edificio destinado para la reunión de las legislaturas, deberá tener la comodidad conveniente las salas necesarias para sus deliberaciones, las de sus comisiones, desahogo de los Diputados, Secretaría y Biblioteca, y su denominación será: *Palacio del Congreso*.²⁸⁶

En este mismo caso están los artículos 3º que decía “Las Sesiones del Congreso serán en el Salón preparado en dicho edificio.” y el 4º “En él habrá un dosel colocado en su testera sobre la derecha de su entrada, una silla debajo de él, para el Presidente del Congreso, y otra a su izquierda para en el caso de que asista el Gobernador,”²⁸⁷ que se fusionaron en el número 21.

La sala de sesiones, dispuesta de manera que colocados cómodamente en sus asientos los Diputados, puedan ser oídos entre sí, igualmente que los espectadores que concurren, tendrá su testero un dosel y cojín, con dos sillas que ocuparán solo en los días de etiqueta o felicitación, el Presidente del Congreso y el Gobernador del Estado, mientras este se halle presente, colocándose aquel a su derecha.²⁸⁸

El 9 de septiembre en sesión pública se discutió el art. 6º el cual versaba sobre la colocación de un crucifijo pequeño, la Constitución general, la particular, el reglamento, la lista de comisiones, libros de actas y demás papeles que consideren necesarios. La primera parte de la colocación de la imagen causó largas discusiones que llevaron al empate de la votación sin resolver nada y reservándose esa discusión para otro momento, todo lo demás fue aprobado.²⁸⁹ Al final el artículo fue publicado como el 23 y decía:

Encima de la mesa habrá un crucifijo pequeño, y además se pondrá: 1º un libro curiosamente encuadernado, que contendrá el acta constitutiva, la Constitución federal, y la del Estado: 2º Un ejemplar de este reglamento.

²⁸⁵ *Ibíd.*, p. 254.

²⁸⁶ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, p. 7.

²⁸⁷ *Actas y Decretos*, Tomo I, p. 254.

²⁸⁸ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, p. 7.

²⁸⁹ *Actas y Decretos*, Tomo I, pp. 262-263.

3º El Libro de actas del Congreso. 4º Una colección de todos los decretos y órdenes de la federación encuadrados separados por los ministerios de su procedencia. 5º Otra de los del Estado. 6º Dos listas que se renovarían por mes, una de las comisiones e individuos que las compongan, y otra de todos los asuntos que estén en giro en ellas. 7º Los demás documentos que el Congreso estime necesarios en aquel lugar, permaneciendo allí todos bajo la responsabilidad del archivero.²⁹⁰

Además de la documentación que debía estar presente a la hora de sesionar, obraban otros escritos en la biblioteca como apoyo a la labor legislativa como las colecciones de las Cortes de España, las del Congreso de la Unión, un *Diccionario de la lengua castellana*, las *Ordenanzas de Intendentes*, la última edición de las *Ordenanzas de minería*, las *Ordenanzas militares*, *Juzgado militar*, *Colección de las Constituciones de la República*, *Elementos de Hacienda* por Canga Argüelles, *El Análisis estadístico de Michoacán*, dos tomos de los *Decretos del Congreso de la Unión*, *Guía de Hacienda*, *Colección de los decretos del Congreso Constituyente*.²⁹¹

De vuelta al proceso de redacción del reglamento interno. El 13 de septiembre se continuó con los artículos del 7 al 16 en los que se hablaba de la colocación de las armas, de la Virgen de Guadalupe (quien fue adoptada como patrona del Congreso), los asientos de los espectadores y una banca distinguida para los diputados del Congreso general, de los demás estados y ex diputados. También se discutió sobre el lugar que debían ocupar los redactores y taquígrafos, lo referente a la renovación de oficios, los procedimientos para la comunicación de los nombramientos, la reelección de diputados secretarios y sobre la presidencia del Congreso.²⁹² Estos correspondían al reglamento publicado del artículo 24 al 32 y en los cuales también existían variaciones substanciales.²⁹³

Durante el mes de septiembre se siguieron discutiendo los puntos relacionados con la figura y atribuciones del Presidente el cual "... será respetado en el Congreso, como Juez de sus individuos, y como órgano representativo de la Soberanía del Estado.", afirmación que por supuesto no quedó en la versión

²⁹⁰ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, p. 7

²⁹¹ AHCEMO, Varios, Legislatura I, Caja 1, Exp. 3.

²⁹² *Actas y Decretos*, Tomo I, pp. 269-271.

²⁹³ Cfr. Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, pp. 7-8.

final.²⁹⁴ De la misma manera, se debatieron las funciones del Vicepresidente y Secretarios. Lo cual corresponde del artículo 33 al 45 del reglamento que entró en vigor a partir de agosto de 1825.²⁹⁵

A inicios de noviembre se presentó el capítulo octavo del reglamento interior sobre el establecimiento de un tribunal que juzgase a los diputados, pero dado el estado de las cosas no se sabía si esto debía ejercerlo el Supremo Tribunal -tercera instancia del Poder Judicial- o si entre los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán se debía de formar un tribunal de esta naturaleza.²⁹⁶ Este encabezado finalmente dio como resultado el capítulo 13 titulado *Del gran Jurado*.

Se debe tener presente que la legislatura que redactó el reglamento interno del Congreso tenía dos importantes desafíos por delante a partir de noviembre de 1824. Primero, agilizar la redacción de la Constitución que comenzó sus discusiones en diciembre de ese año y que se extendieron hasta julio de 1825, segundo, trabajar en la ley de elecciones de 1825. Por tanto, se observan dos elementos en este periodo, primero: la confusión que se generó cuando se debatieron los artículos de la Constitución estatal en el apartado del legislativo, pues en ocasiones a los diputados no les quedaba claro si las atribuciones y prerrogativas con las que pretendían dotar a ese poder se debían contemplar en dicho documento o como parte de su reglamentación interna y, segundo, el retraso de la discusión del reglamento por la carga de trabajo.

En sesión secreta del 4 de enero de 1825 se discutió sobre las horas que debían de trabajar las comisiones cuando no asistieran a sesiones. Tres días después, Pastor Morales pidió se suspendiera el art. 49 del reglamento interior en atención a haberse aumentado considerablemente las ocupaciones y la urgencia que existía en el despacho de muchos asuntos de gravedad. Por ello, solicitaba se dispensara el artículo y que los secretarios se agregaran a la comisión segunda o tercera quedando a su arbitrio su elección y asistieran cuando lo permitieran sus ocupaciones.²⁹⁷

²⁹⁴ *Actas y Decretos*, Tomo I, pp. 272, 278, 284, 290 y 293.

²⁹⁵ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, pp. 9-12.

²⁹⁶ *Actas y Decretos*, Tomo I, p. 380.

²⁹⁷ *Actas y Decretos*, Tomo II, pp. 15, 17.

Como ya se ha mencionado, la confusión solía presentarse con frecuencia durante el debate de los artículos constitucionales, pues los diputados llegaron a enfrascarse en debates relacionados a si los señalamientos, atribuciones o prerrogativas a plasmar en dicho documento, pertenecían efectivamente a éste o al reglamento interior. Por ejemplo, al decir que las sesiones serian públicas, a excepción de los casos que por reglamento fueran secretas.²⁹⁸ El 15 de marzo, al discutir el art 4º constitucional relacionado con conceder licencia temporal a los Diputados, conforme a lo que disponía el Reglamento interior, para salir fuera del lugar en que residía el Congreso. A lo que el Diputado José María Jiménez decía que el punto no se debía incluir en la Constitución sino en el reglamento interior.²⁹⁹

Finalmente, a casi un mes de cerrar sesiones, el 17 de junio de 1825, los trabajos del reglamento se intensificaron y se dio primera lectura a los artículos que presentó la Comisión encargada de formarlo.³⁰⁰ No obstante, en sesión secreta del 27 de junio de 1825 el diputado Pastor Morales habló sobre la urgencia de la discusión del Reglamento Interior, a lo que el vicepresidente del Congreso propuso “Que concluidos los puntos pendientes sobre adiciones a la Constitución, se haga exclusivamente la discusión del Reglamento con reserva de lo que sea más urgente su despacho”.³⁰¹

En la sesión pública del 7 de agosto se discutió el capítulo segundo del reglamento relacionado con la instalación del Congreso y de las atribuciones del presidente comprendiendo los artículos del 10 al 38.³⁰² El 9 de julio, en sesión pública, el diputado Pastor Morales propuso que en la discusión del reglamento interior no se siguiera el método acostumbrado, escribiéndose en las actas a detalle los artículos que se fueran aprobando porque se alargaban demasiado éstas, y siendo muy corto el tiempo del que se disponía, seguramente el escribiente no alcanzaría a copiarlas al libro. La propuesta del eclesiástico fue que se leyeran los artículos a examinarse, se dieran por aprobados todos aquellos a los que no se les hiciera observación, como había ocurrido con los

²⁹⁸ *Ibíd.*, p. 155.

²⁹⁹ *Ibíd.*, p. 190.

³⁰⁰ *Ibíd.*, p.328.

³⁰¹ *Ibíd.*, pp. 350-351.

³⁰² *Ibíd.*, p. pp.379-382.

artículos redactados de la Constitución, dadas las premuras por el cierre de la legislatura la proposición fue aprobada.³⁰³

El reglamento interno para el Congreso de Michoacán fue elaborado bajo mucha presión, al grado de quedar relegado para ser discutido en buena medida dos meses antes de cerrar el periodo de sesiones, ello debido a la premura por terminar la Constitución, que era el objetivo principal de esta legislatura. Prueba de ello, es que el 12 de julio se discutió del artículo 49 al 67, con objeciones en los artículos 50, 55, 63, y 43.³⁰⁴ El 13 de julio se debatieron los puntos relacionados con las ocupaciones de los diputados en el receso que comprendían del artículo 68 hasta el 84, siendo reformulados el 81 y 82. Y el capítulo de las sesiones comprendiendo del artículo 1º al 16 con modificación en el 3º, 4º y 7º.³⁰⁵ Entre el 17 y 18 de julio se aprobaron los capítulos de las votaciones, comisiones del Congreso, del Gran Jurado, de las Leyes y Decretos, De las elecciones de Gobernador y Vicegobernador por el Congreso.³⁰⁶

Finalmente, el reglamento fue fechado el 21 de julio de 1825, el mismo día en que el Congreso constituyente cerró sesiones. No se promulgó, pero se llevó a la práctica al entrar en funcionamiento la primera legislatura constitucional y fue el ordenamiento vigente durante la primera República Federal, el cual sufrió algunas modificaciones a lo largo de este periodo.³⁰⁷

Brevemente se esbozará el contenido del reglamento partiendo del capítulo 1º titulado *De la instalación del Congreso*, que contenía 19 artículos en los que se abordaba el tema de las tres juntas preparatorias previas a la instalación del Congreso y la presentación de los diputados a éstas, las que no se podían celebrar sin la concurrencia de la mayoría de los electos. Asimismo, en este apartado se establecía el modo de elección y responsabilidades de la diputación permanente que entraba en funciones durante los periodos de receso de la legislatura.³⁰⁸

El segundo capítulo titulado *Del lugar de las sesiones*, comprendía de los artículos 20 al 27. En ellos se hablaba de las características del espacio para las

³⁰³ *Ibíd.* p. 388.

³⁰⁴ *Ibíd.*, pp. 397-398.

³⁰⁵ *Ibíd.*, p. 399-400

³⁰⁶ *Ibíd.*, pp. 408-409

³⁰⁷ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, p. 3.

³⁰⁸ *Ibíd.*, pp. 3-6.

sesiones. Se hace necesaria la mención de que el Congreso de Michoacán sesionó del 6 de abril de 1824 al 25 de agosto de ese mismo año en el Seminario Tridentino -hoy Palacio de Gobierno- con autorización del Cabildo catedral, para ser trasladado al ex Colegio de San Francisco Xavier -hoy Palacio Clavijero- en donde continuó el trabajo legislativo durante todo el sistema federal.³⁰⁹

Fachada e interior del Ex convento jesuita actualmente conocido como Palacio Clavijero.



Fotografías tomadas por Nely Noemí García Corona

En este mismo título se señalaban que documentos debían estar presentes en las sesiones, las condiciones y mobiliario con que debía contar la sala.³¹⁰ En los capítulos cuarto y quinto fueron delineadas las atribuciones del presidente, vicepresidente y secretarios del Congreso. Correspondía al primero de ellos cuidar por el buen gobierno y policía interior del recinto. Ya en sesiones era el responsable de abrirlas y cerrarlas en las horas señaladas, conducir los debates entre los diputados, ordenar los trámites correspondientes a toda proposición, proyecto, contestación y señalar los días para la discusión de asuntos, citar a sesiones extraordinarias, firmar junto a los secretarios las leyes y decretos expedidas por el Congreso y mandar la guardia del Congreso. En caso de ausencia entraba en escena el vicepresidente, quien asumía todas las

³⁰⁹ Luis Daniel RUBIO MORALES, Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, *Luz de ayer, luz de hoy. Historia del Seminario Diocesano de Morelia*, Morelia, Parroquia del Señor de la Piedad-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Editorial Morevalladolid, 2013, p. 105.

³¹⁰ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, pp. 7-8.

atribuciones de quien cubría, de no asistir a sesión ninguno, tomaría el cargo el presidente más antiguo.³¹¹

El trabajo de los secretarios se alternaría por semanas entre uno y otro. Uno de ellos tenía por obligaciones extender las actas de sesiones públicas y secretas, dar cuenta al Congreso de todos los asuntos con acta respectiva de su aprobación, con las comunicaciones oficiales que a través de las secretarías llegaran del Congreso general, legislaturas, gobierno general y de estados, proposiciones o proyectos de ley, de los dictámenes de las comisiones en primera y segunda lectura, así como de las minutas, leyes y decretos. El otro secretario era responsable de recibir todos los documentos que se leyeren, poniendo al margen el trámite respectivo que dictase el presidente, dar a conocer los dictámenes y asuntos en discusión poniendo en ellos el resultado que podía ser aprobado, reprobado, vuelta a la comisión o nueva redacción. El secretario que no fuera responsable de dar cuenta de la discusión, era el responsable de preguntar sobre votaciones, sentado y con anuencia del presidente bajo la siguiente fórmula “Se pregunta al Honorable Congreso”.³¹²

De forma indistinta, correspondía a ambos recibir la correspondencia oficial, dictar las contestaciones, extender las minutas de leyes y decretos, rubricar con el presidente las actas públicas, secretas, leyes, decretos aprobados por el Congreso, hacer que las actas fueran asentadas en el libro correspondiente, presentar el día de renovación de oficios (Anexo No. 2) una lista que exprese el número y calidad de los expedientes que hayan pasado a las comisiones marcando los ya despachados y los que queden en poder de cada una, insertándose esa relación en el acta del día. Los secretarios del Congreso asistirían diariamente a la oficina para despachar los asuntos pendientes.³¹³

El reglamento marcaba en el capítulo 6º elementos relacionados con la asistencia y ausencia de los diputados a sesiones, así como la sanción por esto último, su recibimiento, su vestimenta, cómo se debía proceder en caso de

³¹¹ *Ibíd.*, pp. 9-11.

³¹² *Ibíd.*, pp. 11-12.

³¹³ *Ibíd.*, p. 12.

enfermedad o fallecimiento. Toda solicitud de licencia debía pasar por la comisión de peticiones y sería expuesta en sesión secreta.³¹⁴

Respecto al acomodo de los diputados en sesión, éstos no tendrían preferencias de asientos. Para presentarse al Congreso lo harían con traje decente y decoroso, en los días de ceremonia o formados en comisión usarían vestido negro o el uniforme de su clase, pudiendo llevar durante su destino bastón con borlas de seda negra.³¹⁵ Lo anterior permite especular que los diputados eclesiásticos podían presentarse con la vestimenta propia de un sacerdote.

Respecto a las sesiones, éstas se celebrarían de acuerdo a lo estipulado por la Constitución local, abriendo a las diez y concluyendo a la una, pudiendo prolongarse hasta una hora y no más a menos que el propio Congreso votase sesión permanente a pluralidad de votos. Para sesionar era necesario la asistencia de la mayoría de los legisladores y en materias de suma gravedad, no se podía deliberar con menos de las dos terceras partes de sus individuos. Cuando un enviado del gobierno, ya fuere el secretario de despacho o consejero, asistiese a las sesiones para sostener algún proyecto, proposición u observación o llamados por el Congreso tomarían asiento entre los diputados y tendrían el mismo tratamiento, retirándose al tiempo de la votación. Todo lo abordado en las sesiones tanto públicas como secretas sería consignado en actas.³¹⁶

Respecto a las comisiones, cada una de ellas estaría integrada por tres diputados siendo la primera de ellas la de policía compuesta por el presidente y los dos secretarios del Congreso. El tipo de comisiones serían permanentes y especiales, dentro de las primeras estaban Puntos constitucionales, Relaciones de federación, Gobernación, Legislación, Negocios eclesiásticos, Justicia, Hacienda, Instrucción pública, Milicia, Agricultura, Industria, Minería, Artes y Comercio, Libertad de Imprenta. Dentro de las segundas se encontraban las que se integrarían para atender una situación determinada y dentro de ellas el reglamento establecía la existencia de una nombrada *Análisis*, para hacer lo

³¹⁴ *Ibíd.*, p. 13.

³¹⁵ *Ibíd.*, pp. 13-14.

³¹⁶ *Ibíd.*, p. 15.

respectivo con la memoria de gobierno, compuesta de cuatro diputados. Las comisiones se nombraban una vez abiertas las sesiones ordinarias.³¹⁷

Las comisiones serían nombradas al día siguiente de la apertura de las sesiones ordinarias, a éstas pasarían todos los asuntos que se presentasen a deliberación, las proposiciones y proyectos para ser examinadas hasta su resolución. Todo dictamen emitido por las comisiones debía contener una exposición clara y sencilla para ilustrar sobre la materia proponiendo una resolución para ser sometida a votación. Los dictámenes pasaban por dos lecturas con intervalo de dos días, la dispensa de la segunda se determinaría de acuerdo a la importancia del asunto.³¹⁸

Las proposiciones o proyectos de ley que fueran remitidas al Congreso por el gobierno, el consejo, el supremo y superior tribunal de justicia y ayuntamientos pasarían inmediatamente a la comisión correspondiente. Las de los diputados se presentarían por escrito firmadas por el presidente y se les daría dos lecturas.³¹⁹

La fecha para la discusión de las proposiciones o proyectos era señalada por el presidente del Congreso, los diputados podían solicitar copia a la secretaría del dictamen y pedir prórroga en tiempo para el debate a fin de instruirse en la materia.³²⁰ A las discusiones podían asistir, en representación del gobierno, el secretario del despacho o los consejeros o bien a petición del Congreso podían solicitar el expediente para conocer su contenido pero quedaban impedidos para hacer proposiciones o adiciones en las sesiones.³²¹

Al tiempo de las discusiones se debía guardar el mayor respeto y decoro evitando expresiones mal sonantes y ofensivas. El acaloramiento de las discusiones llevaba a la suspensión del debate.³²²

El sistema de votación de los dictámenes se podía realizarse al ponerse de pie los que aprobasen y sentados los que reprobasen, nominalmente por la expresión de sí o no, poniéndose de pie el diputado y por escrutinio que podía hacerse en dos formas, la primera acercándose a la mesa uno a uno los

³¹⁷ *Ibíd.*, pp.17-18.

³¹⁸ *Ibíd.*, pp. 19-20.

³¹⁹ *Ibíd.*, p. 21.

³²⁰ *Ibíd.*, pp.22-24.

³²¹ *Ibíd.*, pp. 24-25.

³²² *Ibíd.*, p. 25.

diputados y manifestando la persona por quién votaba o por cédulas escritas que se pondrían en un ánfora o vaso colocado sobre la mesa. La primera forma era la regla general salvo que algún miembro de la legislatura solicitara la nominal, situación que sería puesta a consideración al Congreso. La votación sería a pluralidad de votos incluyendo personas, que, de no salir en el primer escrutinio, se repetiría entre los que hubiesen obtenido mayor número de votos, en caso de empate decidiría la suerte. Los empates en las votaciones sobre proyectos de ley y simples resoluciones se decidirían renovándose la discusión y repitiéndose la votación.³²³ Una vez aprobado un proyecto ya fuese en calidad de ley o decreto se extendería en un pliego por la secretaría en clase de minuta que sería leída en el pleno del Congreso, al no tener observaciones, la rubricaría el presidente y secretario, lo que sería transcrito en un libro, sacándose una copia para remitirla al gobierno.³²⁴

Otro elemento que contemplaba el reglamento era la integración del Gran Jurado a donde debían pasar las acusaciones sobre delitos cometidos por las figuras que marcaba la Constitución en su artículo 42, es decir los propios diputados, el gobernador, vicegobernador, consejeros de gobierno, secretario de despacho, miembros de Supremo tribunal de justicia y tesorero general de la entidad durante el desempeño del cargo.³²⁵ Por tanto, el Gran Jurado era el responsable de determinar, a partir del expediente integrado con las pruebas del delito imputado, si había o no lugar a la formación de la causa, lo cual sería puesto a consideración del Congreso de aprobarlo el presunto reo debía entregarse junto con el expediente al tribunal correspondiente.³²⁶

Es de recordar que en más de una ocasión el Gran Jurado se puso en acción para determinar la culpabilidad de dos gobernadores, Antonio de Castro que fue exonerado y José Trinidad Salgado, cuyo expediente fue a parar al Supremo Tribunal de Justicia.

El reglamento también marcaba el procedimiento para la elección del gobernador y vicegobernador. De la terna dada por la junta electoral del estado, con dos terceras partes de la legislatura como mínimo en sesión pública, por

³²³ *Ibíd.*, p. 26-27.

³²⁴ *Ibíd.*, p. 31.

³²⁵ *Ibíd.*, pp. 28-29. *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 479.

³²⁶ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes, decretos*, Tomo II, p. 30.

escrutinio secreto en cédulas a pluralidad de votos, de no resultar en la primera elección, se repetiría entre los dos con mayor número de votos y en caso de empate decidiría la suerte.³²⁷

El reglamento también contemplaba cuestiones protocolares como la toma de posesión del ejecutivo, el recibimiento de autoridades en la sala de sesiones y la asistencia del legislativo a las funciones públicas.³²⁸

En los siguientes títulos se abordaba el tema del funcionamiento y orden que debía observarse en la secretaría, así como del personal para el manejo de la misma. El reglamento interior también estableció que la comisión de policía era responsable de presentar mensualmente el presupuesto de las dietas de los diputados, los sueldos de los dependientes y gastos extraordinarios del Congreso. Respecto a los legisladores con empleo civil, militar o eclesiástico debían presentar las certificaciones manifestando las cantidades percibidas en su empleo para rebajarlas de las dietas asignadas. Para los manejos económicos se nombraría un tesorero de entre los individuos del seno del congreso.³²⁹

Respecto a la guardia del Congreso, ésta sería de tipo militar integrada por cuerpo de nacionales, pudiendo ser relevada por otros, sí así lo determinare la legislatura. La guardia presentaría tanto al Presidente del Congreso como al gobernador los honores de presentar armas y batir marcha, mientras que a las comisiones en cuerpo y al vicegobernador batir marcha y echar armas al hombro. El último capítulo abordaba el tema de las ocupaciones de los diputados en los periodos de receso y las responsabilidades de la diputación permanente.³³⁰

El reglamento interno fue un instrumento que efectivamente dotó de orden y formalidad las actividades del Congreso, su cumplimiento fue prácticamente al pie de la letra, pues en las actas se observan muchos de los protocolos aquí descritos, desde la apertura de sesiones y sus tipos, la lectura del acta, la asistencia del gobernador, la formación de comisiones ordinarias y extraordinarias, la forma de tratar las proposiciones, dictámenes, la formación de las leyes, las intervenciones de los legisladores en los debates, ello por mencionar solo algunos de los elementos.

³²⁷ *Ibíd.*, p. 31.

³²⁸ *Ibíd.*, p. 33.

³²⁹ *Ibíd.*, pp. 34-37.

³³⁰ *Ibíd.*, pp. 37-40.

Una vez delineado el andamiaje legal para el ejercicio del poder iniciando con las leyes electorales, pasando por la Constitución estatal y las atribuciones del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial; así como del ordenamiento interno de la asamblea michoacana, se hace necesario caracterizar a los eclesiásticos que fueron electos y se desempeñaron como diputados en el Congreso del estado de Michoacán de 1824 a 1835.

CAPÍTULO III

LOS ECLESIAÍSTICOS EN EL LEGISLATIVO MICHOACANO, 1824-1835

3.1. La presencia de los eclesiásticos en el Congreso, 1824-1835

Como se ha advertido en las primeras páginas de este trabajo, a partir de 1810, en el caso hispanoamericano los procesos electorales para la integración de las Cortes permitieron que los eclesiásticos pudieran votar y ser votados. Dentro del movimiento insurgente de la Nueva España, aunque con diferentes mecanismos de elección que se entienden a partir de su propio contexto histórico, los ministros de Dios también tuvieron cabida en el Congreso de Chilpancingo. Cuando México adquiere su independencia una de las primeras preocupaciones será la creación de un Congreso, de hecho, las dos legislaturas que precedieron a la adopción del federalismo contaron con la presencia de eclesiásticos. Con creación de la primera República federal ya no sólo era pertinente la existencia de un Congreso general, los estados que la integraban debieron articular sus congresos locales que a su vez albergaron a hombres con estos perfiles.

Dentro de las ocho legislaturas que se eligieron de 1824 a 1835 en el estado de Michoacán se encuentran los siguientes eclesiásticos: Juan José Pastor Morales, José María Rayón, Manuel de la Torre Llorera, Ignacio Ocampo, Pablo José Peguero, Ignacio Villavicencio, Juan Nepomuceno Sierra, Luciano Farías, Joaquín Ladrón de Guevara, Martín García de Carrasquedo, Felipe Carvajal, Tomas Arriaga, Luis Soria, Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Lorenzo Auriolés, José Ma. Cavadas, José Tiburcio Orozco o Manuel Tiburcio Orozco, Antonio de la Peña, Rafael Guedea y Manuel de Leyva. Algunos de estos eclesiásticos fueron electos en más de una ocasión, por ejemplo, Pablo José Peguero ocupó un escaño en tres ocasiones, Joaquín Ladrón de Guevara en dos, al igual que Mariano Rivas, Lorenzo Auriolés y Manuel de Leyva. De 1824 a 1835 se eligieron 177 diputados, entre abogados, militares, comerciantes, hacendados y por supuesto eclesiásticos, estos últimos entre propietarios y suplentes ocuparon 27 escaños, lo que representó el 15.25%.

Sin embargo, no todos los electos tomaron posesión del cargo o lo sirvieron el bienio correspondiente, por ejemplo, Ignacio Ocampo se vio obligado de renunciar a tres meses de haber tomado posesión del empleo por su delicado estado de salud. Por su parte, Luis Soria, que en calidad de suplente de la tercera legislatura en su primer año, nunca fue llamado para integrarse a las labores del Congreso. Manuel Tiburcio Orozco dimitió antes de presentar juramento, Manuel de Leyva también planteó su renuncia a la cuarta legislatura, la que nunca le fue aceptada, apareciendo en las actas que no se había presentado a tomar posesión del cargo y en la sexta, por ser el cuarto suplente y la corta duración de la legislatura no fue llamado para integrarse a las labores legislativas. El siguiente cuadro es una referencia sobre la integración de los eclesiásticos en el legislativo michoacano de 1824 a 1835.

Cuadro No. 7

Los diputados eclesiásticos en el Congreso de Michoacán 1824-1825.

Legislatura	Vigencia	Propietarios	Suplentes
Constituyente	8/IV/1825 al 6/VIII/1825	José María Rayón Juan José Pastor Morales	Manuel de la Torre Lloreda
Primera	6/VIII/1825 al 6/VIII/1827	Pablo Peguero Ignacio Ocampo	
Segunda	6/VIII/1827 al 6/VIII/1829	Pablo Peguero Ignacio Villavicencio	Juan Nepomuceno Sierra
Tercera primer año	6/VIII/1829 a marzo de 1830	Joaquín Ladrón de Guevara Martín García de Carrasquedo Felipe Carvajal Tomas Arriaga	Luis Soria
Tercera segundo año	4/VIII/1830 a 6/VIII/1831	Mariano Rivas Lorenzo Aurióles Manuel Tiburcio Orozco Atanasio Domínguez	José María Cavadas
Cuarta	6/VIII/1831 a 5/I/1833	Mariano Rivas Manuel de Leyva Pablo Peguero Lorenzo Aurióles	
Quinta	8/II/1833 a 31/XII/1834	Joaquín Ladrón de Guevara	
Sexta	1/I/1835 a 8/IX/1835	José Antonio de la Peña	Rafael Guedea Manuel de Leyva

Cuadro de elaboración propia. Fuente: *Actas y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1825*, Tomo I, p. 2. AHCEMO: Varios Constituyente, caja I, Exp. 4, 21/VII/1825. Varios I, Caja 2, Exp.8, f. 27-29v. Varios II, Caja 7, Exp. 5, 2/VI/1829. Varios III, Caja, 6, Exp. 3, 19/III/1831. Varios V, Caja 1, Exp. 4, 18/II/1833.

Tratando de hacer un breve análisis sobre la presencia de los eclesiásticos en las respectivas legislaturas, se parte de que la constituyente que sesionó de abril de 1824 al 5 de agosto de 1825 quedó conformada por 11 diputados propietarios y 6 suplentes. En calidad de propietarios fueron votados José Ma. Rayón, quien fue el primer electo con 32 votos de los 37 electores y Juan José Pastor Morales cuarto diputado con 19 votos de 37. Mientras que Manuel de la Torre Lloreda fue electo primer diputado suplente con 36 de 37 votos. En el caso de Lloreda por su calidad de primer diputado, suplente debió acudir a unos cuantos días de instalada la asamblea ante la anulación de la elección del Lic. José Antonio Macías.³³¹

De los 11 diputados propietarios, los dos eclesiásticos representaban el 18.18%, mientras que Lloreda representaba el 16.67% dentro de los suplentes. Pero si tomamos en cuenta que el primer suplente se incorporó de inmediato, de los 17 legisladores que integraban la legislatura, sin importar en qué calidad, los eclesiásticos representaron el 17.65%. En la práctica, de 11 diputados que debían estar en activo en la legislatura, 3 de ellos fueron eclesiásticos representando con ello el 27.27%.

A su vez, la Constitución estatal de 1825 fue firmada por 10 legisladores, entre ellos los tres eclesiásticos en este rubro representaron el 30%, además de ello se debe tener presente que fueron de los diputados más constantes de la legislatura.³³²

La primera legislatura constitucional quedó conformada por 15 propietarios, entre ellos Pablo Peguero e Ignacio Ocampo y 7 suplentes de los que se desconoce el nombre de 3 y por tanto hasta el momento no se puede determinar nada al respecto. Es de remarcar que Ocampo renunció al cargo antes del finalizar 1825. En cuanto a números, Pablo Peguero e Ignacio Ocampo representarían el 13.33%. De los 22 electos el 9.09 % eran parte del clero.

³³¹ *Actas y Decretos*, Tomo I, pp. 1-4.

³³² Los diputados que firmaron la Constitución fueron Pedro Villaseñor en su calidad de presidente, Agustín Aguiar como vicepresidente del Congreso, José María Rayón, Manuel de la Torre Lloreda, José María Paulín, Manuel Menéndez, José María Jiménez, Manuel González, José Salgado y Juan José Pastor Morales, estos dos últimos en calidad de diputados secretarios. *Actas y Decretos*, Tomo II, p. 501.

Fueron 35 electores los que eligieron a la segunda legislatura integrada por 15 diputados propietarios de los cuales dos eran eclesiásticos: Pablo Peguero -reelecto- e Ignacio Villavicencio y 7 suplentes entre ellos el Bachiller Juan Nepomuceno Sierra.

Por tanto, en esta legislatura los diputados eclesiásticos propietarios representaban el 13.33%, mientras que los suplentes el 14.29%, de los 22 electos este sector representó el 13.64%. Al igual que en la primera legislatura constituyente, en un momento determinado, Sierra se incorporó a los trabajos legislativos, conformándose un grupo de tres eclesiásticos en funciones, lo que representó el 20% dentro del mismo.

37 electores participaron en la elección de la tercera legislatura en su primera año y nombraron 15 diputados propietarios y 7 suplentes. Los eclesiásticos que adquirieron el nombramiento en calidad de propietarios fueron: Joaquín Ladrón de Guevara, el prebendado Martín García de Carrasquedo, Felipe Carvajal y Tomas Arriaga y en calidad de suplente Luis Soria.³³³

En esta legislatura se incrementó notablemente la presencia de eclesiásticos, quienes registraron un 26.66% en calidad de propietarios y 14.28% en calidad de suplentes. En total, de 22 diputados el 22.72% eran eclesiásticos, ignorándose si Luis Soria entró en funciones.

Como ya se ha señalado, se convocó a elecciones para elegir una legislatura que cubriera la parte restante del bienio, es decir, de agosto de 1830 a agosto de 1831. Los 39 electores que votaron en la junta de estado eligieron 15 propietarios de los cuales Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Manuel Tiburcio Orozco y Lorenzo Auriolos pertenecían al clero y 7 suplentes que incluían a José María Cavadas del mismo estado. En porcentaje, este Congreso quedó igual que su antecesor, los eclesiásticos propietarios representaron el 26.66% y el suplente el 14.28%, en total de 22 diputados 5 eran eclesiásticos, es decir el 22.72%.

La cuarta legislatura, cuya vigencia se circunscribió de agosto de 1831 a los primeros días de enero de 1833, quedó conformada por 17 diputados propietarios y 8 suplentes. Entre los diputados propietarios eclesiásticos se encontraban Mariano Rivas electo con 19 votos de la junta provincial, Manuel

³³³ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes*, Tomo III, p. 166.

Leyva con 21, Pablo Peguero con 26 y Lorenzo Aurioles con 19. En esta legislatura no se eligieron diputados suplentes de esta profesión.³³⁴ En este caso, de los diputados propietarios los eclesiásticos representaban el 23.53 y del total de 25 diputados, el 16%.

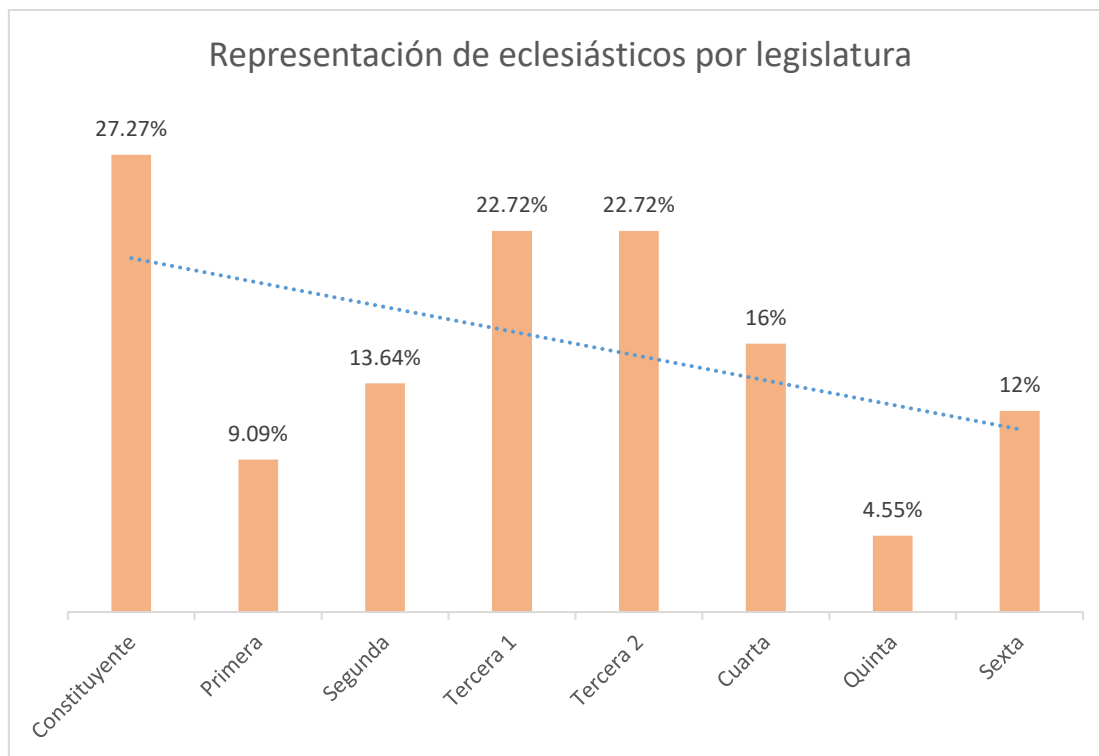
El quinto Congreso constitucional que sesionó del 8 de febrero de 1833 al 31 de diciembre de 1834, se compuso de 15 diputados propietarios y 7 suplentes. En esta legislatura hay una notable disminución de eclesiásticos al interior de la misma, pues sólo fue electo diputado como propietario en undécimo primer lugar con 24 votos de 31, el Br. Joaquín Ladrón de Guevara representando el 6.67% de eclesiásticos propietarios, mientras que ninguno de su profesión fue electo como suplente. Del total de la legislatura la elección de Ladrón de Guevara representó el 4.55%, quien ya se había desempeñado como diputado propietario en el tercer Congreso constitucional en su primera etapa.

La sexta legislatura duró en funciones menos de un año que corrió del 1º de enero de 1835 al 8 de octubre del mismo y se compuso de 17 diputados propietarios y 8 suplentes, de los primeros sólo el Br. José Antonio de la Peña era eclesiástico, quien obtuvo 31 votos de la junta provincial y en calidad de suplentes fue electo en segundo lugar el Br. Manuel Guedea por 29 votos y en cuarto lugar el Br. Manuel de Leyva con 31 respectivamente.³³⁵ Se sabe que con el paso del tiempo y las ausencias de algunos diputados propietarios, Guedea entró en funciones en el mes de marzo; sin embargo, Leyva por el número de suplente que tenía y lo breve de la legislatura no fue llamado para desempeñar el cargo. En esta legislatura, los eclesiásticos en calidad de propietarios representaron el 5.88%, los suplentes el 25% y del total de los 25 diputados el 12%. El corto periodo de vida de este Congreso se circunscribió al cambio del sistema de gobierno nacional, por lo que cerró sus sesiones para dar paso a la instalación de la Junta departamental. Lo dicho anteriormente traducido a gráficas sería lo siguiente:

³³⁴ AHCEMO, Varios, Legislatura III, Caja 6, Exp. 3. 19/III/1831.

³³⁵ Amador COROMINA, Amador, *Recopilación de leyes*, Tomo VI, 138-139.

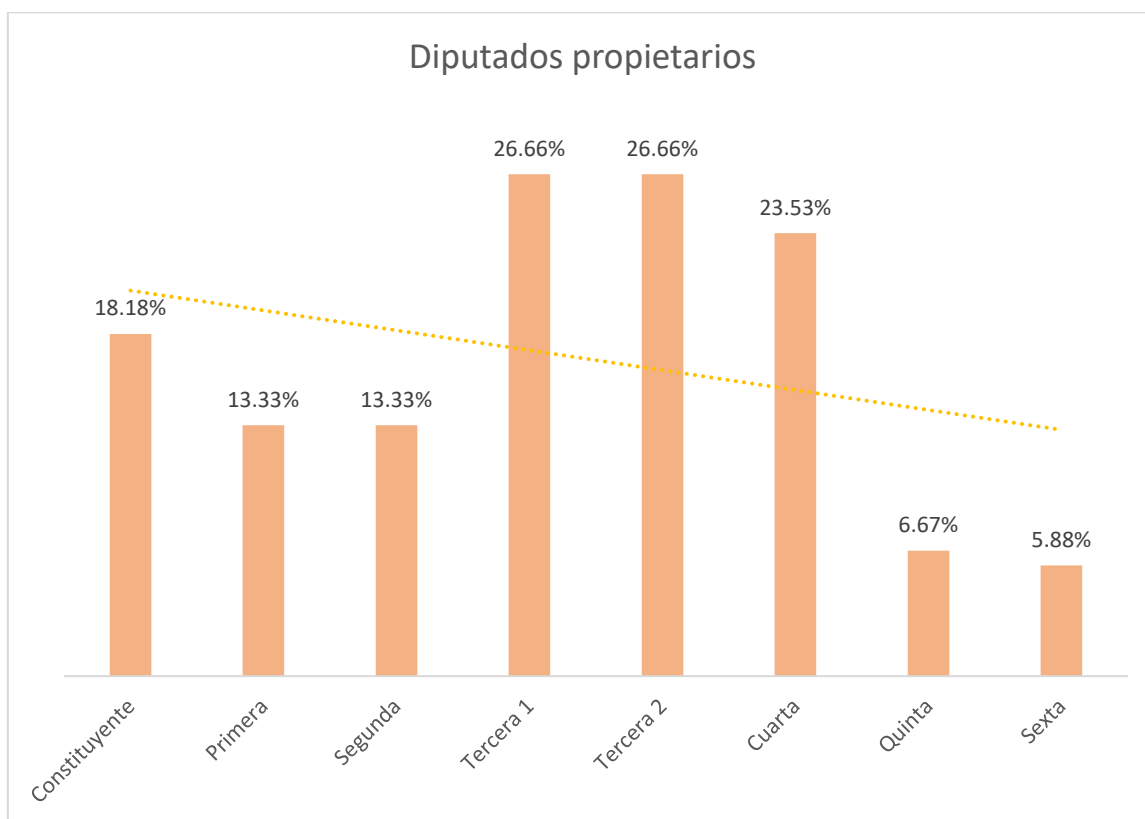
GRÁFICA No. 1



Elaboración propia. Fuente: *Actas y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1825*, Tomo I, pp. 1-2., AHCEMO, Varios Constituyente, caja I, Exp. 4, 21/VII/1825. Varios I, Caja 2, Exp.8, f. 27-29v. Varios II, Caja 7, Exp. 5, 2/VI/1829. Varios III, Caja, 6, Exp. 3, 19/III/1831. Varios V, Caja 1, Exp. 4, 18/II/1833.

Las gráficas permiten observar que solo tres legislaturas de las siete establecidas contaron con más del 20% de presencia de eclesiásticos. La constituyente fue la que tuvo mayor porcentaje con un 27.27%, seguida de la tercera en su primer y segundo año 2 con 22.72% cada una. Las legislaturas con menor presencia de eclesiásticos fueron la primera con 9.09% y la quinta con 4.55%, el resto se manejó en un rango de 10 a 20%, la cuarta con un 16%, la segunda con un 13.64% y la sexta con un 12%.

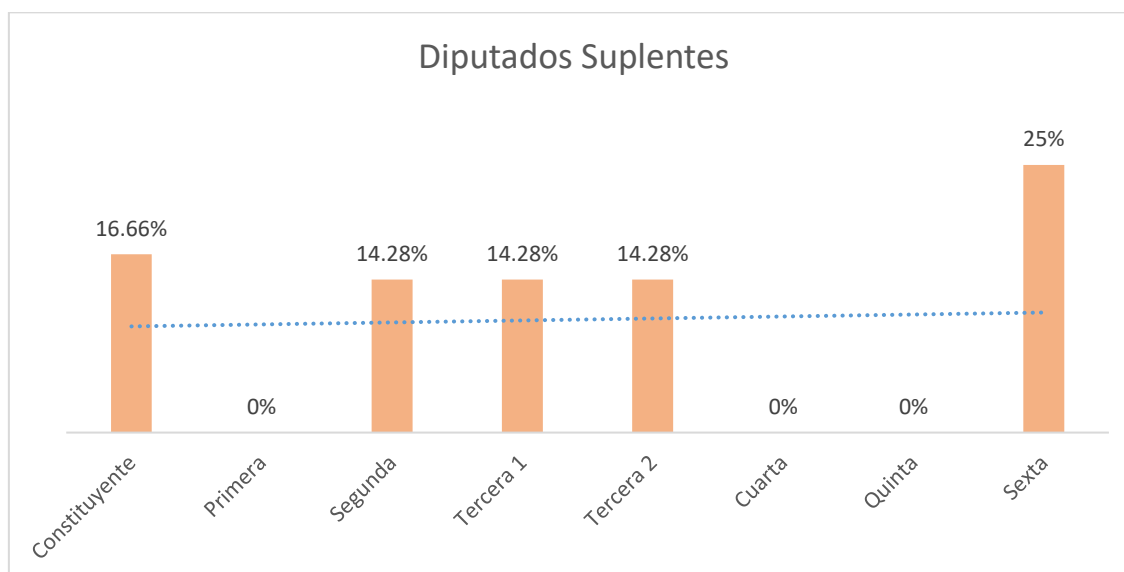
GRÁFICA No. 2



Elaboración propia. Fuente: *Actas y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1825*, Tomo I pp. 1-2., AHCEMO, Varios Constituyente, caja I, Exp. 4, 21/VII/1825. Varios I, Caja 2, Exp.8, f. 27-29v. Varios II, Caja 7, Exp. 5, 2/VI/1829. Varios III, Caja, 6, Exp. 3, 19/III/1831. Varios V, Caja 1, Exp. 4, 18/II/1833.

Respecto a la elección de eclesiásticos en calidad de diputados propietarios, la asamblea constituyente abre con un 18.18%, para descender en los porcentajes a un 13.33% en las siguientes dos legislaturas. La tercera en su primer y segundo año respectivamente y la cuarta muestran un aumento y la mayor concentración de legisladores de esta profesión representando del total de cada Congreso alrededor de la cuarta parte, para descender sus niveles en el quinto y sexto.

GRÁFICA No. 3



Elaboración propia. Fuente: *Actas y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1825*, Tomo I, pp. 1-2., AHCEMO, Varios Constituyente, caja I, Exp. 4, 21/VII/1825. Varios I, Caja 2, Exp.8, f. 27-29v. Varios II, Caja 7, Exp. 5, 2/VI/1829. Varios III, Caja, 6, Exp. 3, 19/III/1831. Varios V, Caja 1, Exp. 4, 18/II/1833.

Referente a los diputados eclesiásticos suplentes, la representación giró en torno al 15% en la mitad de las legislaturas, tres no tuvieron electos de esta profesión para dispararse en la sexta a un 25%, al ser el Congreso con más suplentes. Es decir, los diputados eclesiásticos geneneralmente fueron electos como propietarios, pero es notable el descenso de este patrón en las últimas dos legislaturas, es decir, hacia el final del federalismo los eclesiásticos ya no figuraban en los primeros lugares de elección y por lo tanto su nivel de participación y presencia disminuirá. Algo había pasado con los electores que ya no se veían representados de la misma manera por los miembros de la Iglesia.

Pero, ¿quiénes eran estos eclesiásticos y cuáles sus circunstancias? Se debe tener presente que, desde el periodo colonial, los eclesiásticos se convirtieron en figuras nodales de interacción entre la Iglesia, la sociedad y sus autoridades, por tanto, era común verlos desempeñar su profesión al tiempo que se relacionaban con funcionarios de la Corona, con los principales personajes de las localidades que atendían, o bien, instruyendo y persuadiendo a la población a través del púlpito. Aun así, no se puede partir de la idea de un clero unido ni uniforme, no durante la colonia y mucho menos después de superado el movimiento de insurgente.

Las diferencias que permeaban en el interior del clero tenían su raíz en las propias condiciones económicas de origen, vínculos sociales, el tipo de ordenación,³³⁶ grado de ilustración y el desempeño propio de la profesión. Otro elemento a considerar era que el Obispado no tenía la capacidad de absorber a todos los eclesiásticos que tomaban las órdenes y que no todos sus curatos rendían los mismos estipendios. En 1765 el Obispo de Michoacán, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle elaboró una relación del clero diocesano, la que quedó conformada por aproximadamente 600 sacerdotes, poco más de un centenar asistía en el ministerio parroquial como curas propietarios, interinos o

³³⁶ De acuerdo con el derecho canónico que aplicaba para la época, para ser ministro de Dios y parte de la Iglesia era necesario recibir una serie de órdenes entendidas como potestades que se depositaban en los eclesiásticos para administrarlas en el altar, por las que gradualmente se ascendía y se otorgaban a través de una ceremonia con el objeto de constituir al idóneo ministro de la eucaristía. Pedro Murrillo Velarde menciona que para los canonistas las órdenes eran nueve, las cinco primeras denominadas menores: primera tonsura, el ostiarado, lectorado, exorcistado, acolitado y dentro de las mayores se encontraban: subdiaconado, diaconado, presbiterado y episcopado. Mientras que los teólogos desconocían la primera tonsura y el episcopado como tales. Respecto a las órdenes mayores, en el subdiaconado se le entregaba al solicitante el cáliz y la patena vacíos o del libro de las epístolas. En el diaconado se recibía el libro de los evangelios y era el último paso a la ordenación. En el presbiterado se le daba al solicitante el cáliz con el vino y de la patena con la hostia, por lo que también se llamaban sacerdotes porque se daban a las cosas sagradas y consagraban el cuerpo de Cristo. Finalmente, el episcopado que consistía en la imposición de las manos del obispo consagrante y de los obispos asistentes sobre la cabeza del consagrado, la imposición del libro de los evangelios sobre la cerviz y las espaldas, ceremonia en la que era entregado el báculo pastoral y el anillo, esta última orden no fue tomada por ninguno de los eclesiásticos objeto de estudio. Respecto a las edades para tomar las órdenes para la primera tonsura se requerían mínimo 7 años, pudiendo ser a los 12, mientras que para el subdiaconado de acuerdo con el concilio Tridentino serían 22, diaconado 23 y presbiterado 25 años. Respecto a los conocimientos, para la primera tonsura era necesario conocer los rudimentos de la fe, saber leer y escribir, para el ostiarado, lectorado, exorcistado y acolitado se requería entender la lengua latina. Para el sacerdocio la capacidad para enseñar al pueblo las cosas necesarias para lograr la salvación de las almas y la administración de sacramentos. En teoría, entre la toma de órdenes debía haber intervalos de tiempo, las órdenes menores podían conferirse con la primera tonsura en el mismo día. Mientras que, para obtener las mayores, entre la última menor al subdiaconado debía pasar un año, lo mismo que para obtener el diaconado y el sacerdocio, el cual se marcaba de una a otra cuaresma, aunque los tiempos se podían alterar a partir de las necesidades espirituales de la Iglesia. Las órdenes debían conferirse en los tiempos y lugares establecidos acorde al derecho, la primera tonsura podía otorgarse en cualquier momento del año, día y hora, sin que fuere necesario realizarla durante el sacrificio de la misa, ni que el ordenante estuviese en ayunas, pudiendo realizarse en cualquier iglesia, oratorio o lugar honesto. Para las órdenes menores había ciertas fechas que no esclarece el texto de Murrillo, pero además apunta que podían otorgarse cualquier domingo o en día de fiesta pero por la mañana. Mientras que el subdiaconado, el diaconado y el presbiterado se conferían solo los sábados de las cuatro temporadas, el sábado santo y el sábado anterior al domingo de pasión en la Catedral, de no ser así en la iglesia más digna en lo posible. No se podían conferir dos órdenes mayores en el mismo día, ni el subdiaconado con las menores. Pedro MURILLO VELARDE, *Curso de derecho canónico hispano e indiano*, Vol. I. El colegio de Michoacán, Facultad de derecho-UNAM, 2004, pp. 327-338.

coadjutores.³³⁷ Algunos eclesiásticos obtuvieron beneficios sin cura de almas³³⁸ como los sacristanes³³⁹ mayores y los jueces eclesiásticos,³⁴⁰ o llegaron a recibir un salario, como tenientes de cura, administradores de diezmos o capellanes de algún santuario o pequeña iglesia, convento de religiosas o capilla de hacienda. Los que contaban con mayor instrucción pudieron emplearse como abogados de las reales audiencias de México o Guadalajara, no faltando el eclesiástico que vivió de su patrimonio y su hacienda o modestamente labró su predio.³⁴¹

Sin embargo, de acuerdo con el análisis planteado por Alberto Carrillo, la relación dejaba de manifiesto que fueron muchos más los clérigos sin oficio ni beneficio que voluntariamente ayudaron en el ministerio parroquial y sobrevivieron de las limosnas de los fieles, celebrando misas, confesando, predicando o instruyendo en colegios de enseñanza superior o escuelas de niños, con moderada retribución. A su vez, no era de extrañar que por un escándalo o delito hubiesen eclesiásticos procesados y presos por la justicia eclesiástica o suspensos de todo ministerio. No obstante, quedaban muchos clérigos sin ocupación alguna.³⁴²

³³⁷ Dominique Bouix define al cura coadjutor o coadjutor de párroco como “el sacerdote diputado por autoridad del ordinario, para auxiliar al párroco en el ejercicio de la cura por causas determinadas por el derecho”. No se podía nombrar un coadjutor para una parroquia por populosa que fuera esta, no obstante, cuando un párroco por enfermedad ya no estuviera en condiciones de regir debidamente la parroquia debía otorgársele un coadjutor o bien porque el titular no poseyera los conocimientos necesarios para ejercer su oficio. Obtenían el rango de coadjutores siempre y cuando fueran nombrados por un superior del párroco, y el coadjutor del obispo debía ser designado por un superior de éste. Mientras que un vicario podía desempeñar las mismas funciones que el coadjutor, la diferencia estribaba en quien le daba el nombramiento, pues no era nombrado por el superior del párroco, sino por él mismo. Dominique BOUIX, *Tratado del párroco, de los vicarios parroquiales, de los capellanes de monjas, militares y hospitales*, traducido por Isidoro Boclar, 1868, pp. 442-444.

³³⁸ Ser cura de almas exigía la residencia del eclesiástico en la parroquia pues se encargaba de la dirección de la misma, instruía a sus feligreses, administraba los sacramentos y daban el alimento espiritual a su pueblo cuando menos todos los domingos y las fiestas solemnes. *Diccionario de derecho canónico*, París, Librería de Rosa y Bouret, 1854, pp. 383, 387.

³³⁹ El sacristán se desempeñaba en la custodia y guarda de los vasos, libros y ornamentos sagrados, los que se depositaban en la sacristía. También se denominaban sacristanes a las personas que ayudaban a los curas en la administración de sacramentos, así como del cuidado y limpieza de la iglesia. *Ibíd.*, p. 1017.

³⁴⁰ Era el eclesiástico asignado para terminar las controversias a través de sentencia, otorgando a cada uno de los involucrados lo que le correspondía y el cual debía tener amplios conocimientos de derecho. *Ibíd.*, p. 700.

³⁴¹ Alberto CARRILLO CÁZARES, “El gobierno espiritual en el obispado de Michoacán, 1758-1810”, en José Antonio SERRANO ORTEGA (Coord.), *La Guerra de Independencia en el Obispado de Michoacán*, El Colegio de Michoacán- Secretaría de Cultura de Michoacán, 2010, pp. 33-34.

³⁴² *Ibíd.*, p. 34.

En 1793, buena parte de la población de eclesiásticos que había en las intendencias de Guanajuato y Michoacán se concentraban en las poblaciones de Guanajuato, Irapuato, Celeya y León atraídos por su desarrollo económico, mientras que la Tierra Caliente y la Costa de la intendencia de Valladolid tenía parroquias de difícil acceso, climas extremos y estipendios cortos.³⁴³

La falta espacios de para desempeñarse como eclesiásticos y la desigualdad de rendimientos que generaban las parroquias serán elementos que tendrán presentes un crecido número de eclesiásticos michoacanos que participaron o que simpatizaron con en el movimiento insurgente³⁴⁴ iniciado con el cura Hidalgo.

La vida del eclesiástico no era sencilla y la insurgencia la complicó, con la independencia y la articulación de nuevas instituciones y órganos de gobierno se abrieron espacios en los que los eclesiásticos podían desempeñarse sacando provecho a su preparación.

3.2. Semblanzas biográficas de los diputados eclesiásticos

El presente epígrafe tiene la intención de dar a conocer algunos datos biográficos de los eclesiásticos que fueron electos diputados al Congreso de Michoacán de 1824 a 1835, con el objeto de que sean un referente a la hora de analizar su participación en el ámbito legislativo y son presentados siguiendo la línea cronológica de la elección de las legislaturas.

José María Rayón fue el primer diputado Constituyente michoacano en ser electo, participando en las labores legislativas desde la apertura de la legislatura hasta el final de la misma. José María de la Trinidad nació en Tlalpujahua el 2 de septiembre de 1779, hijo de legítimo matrimonio celebrado entre don Andrés Mariano López Rayón de Piña y doña Ma. Josefa Rafaela

³⁴³ Daniela IBARRA LÓPEZ, Marco Antonio LANDAVAZO, *Clero, política y guerra: la independencia en la diócesis de Michoacán, 1810-1815*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010, pp. 15-16.

³⁴⁴ Para un panorama más completo sobre la insurgencia y la Iglesia en el Obispado de Michoacán consúltese el trabajo ya citado de Daniela IBARRA LÓPEZ, y Marco Antonio LANDAVAZO. Otra referencia importante es la obra coordinada por José Antonio SERRANO ORTEGA, *La Guerra de Independencia en el Obispado de Michoacán*, El Colegio de Michoacán- Secretaría de Cultura de Michoacán, 2010.

López Buenaventura López Aguado, cuarto de nueve hermanos.³⁴⁵ Estudió en el Colegio de San Ildefonso de México y en el Seminario Tridentino de Morelia, fue activo participante del movimiento insurgente. No obstante, a finales de marzo de 1818 la esposa de José María Rayón solicitó a Gabriel Armijo, en Coyuca, la real gracia del indulto, la cual le fue extendida interinamente por Armijo, en atención “a su estado de miseria, demencia y abatimiento le constituyen acreedor de toda compasión.” José María no fue aprendido en diciembre de 1817 con Ignacio Rayón y otros en virtud de su locura. Gabriel Armijo escribió al virrey Juan Ruiz de Apodaca el 9 de julio de 1818, excusándose “por el cumulo de asuntos” de mayor gravedad. El 22 de ese mismo mes, el virrey envió la cédula de indulto.³⁴⁶

Se infiere que tiempo después recobró la razón y enviudo, pues en 1821 solicitó las respectivas órdenes sacerdotales, posterior a ello sirvió en Angangueo, Taximaroa, Tlalpujahua, Pátzcuaro. En 1832 obtuvo la prebenda de Racionero, José María Rayón fue muy cercano al Obispo Cayetano Gómez de Portugal, quien en más de alguna ocasión lo dejó en calidad de gobernador de la mitra.³⁴⁷

³⁴⁵ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Ignacio Rayón Primer Secretario de Gobierno Americano*, México, INEHRM-SEGOB, 2009, pp. 9-10.

³⁴⁶ Archivo General de la Nación de México, en adelante: AGNM, Operaciones de Guerra, Vol. 80, f. 12-13.

³⁴⁷ José María comenzó su carrera literaria en 1797 en el Colegio de San Ildefonso de México, donde estudió gramática, filosofía y jurisprudencia hasta el año de 1804, mereciendo el aprecio de sus superiores, quienes le dieron en cada facultad el *supra locum*. El paso de José María por el movimiento armado se encontró marcado por las acciones que emprendió su hermano Ignacio, fue un miembro muy activo con un muy buen manejo de la zona oriental de la intendencia de Valladolid de Michoacán. Participó en la defensa de Zitácuaro y en la batalla de Tlalpujahua, anduvo por Cópore, Huetamo, Pátzcuaro y acudió con Ignacio al Congreso de Chilpancingo presentando una división bien armada y disciplinada. Posteriormente volvió a la región de Tlalpujahua donde se dedicó a fabricar municiones y armas que depositaba en Cópore. En marzo del 1821, recibió en Puebla “en los ténporas y extra todas las órdenes de mano del Ilustrísimo Señor Obispo de aquella diócesis Dr. Antonio Joaquín Pérez.” Una vez ordenado sacerdote cuidó por encargo la sacristía de Tlalpujahua de 1823 a 1824, por disposición de la Sagrada Mitra sirvió por varios meses la Ampolleta de Angangueo. Por casi cuatro años fue sacristán interino de Taximaroa, seis meses cura del mismo lugar y después en Tlalpujahua bajo los mismos términos. En 1830 presentó la relación de sus méritos para el concurso de curatos vacantes, abierto en 1820 y continuado hasta 1830, en el cual obtuvo la propiedad del curato de Pátzcuaro. En el mes de julio de 1831 figuraba en la lista de los eclesiásticos que el Cabildo Catedral consideró con los méritos suficientes para obtener una prebenda, lo que se tradujo en julio de 1832 en la obtención del beneficio de Racionero. Por 1834, Rayón tuvo de compañeros a los futuros obispos Munguía y Labastida, se graduó de licenciado y finalmente fue ungido presbítero. No tardo en ascender dentro del escalafón clerical llegando a ser gobernador del Obispado de Michoacán. Vivía entonces en la casa solariega en contra esquina del teatro Ocampo. En julio de 1837, Rayón era clavero de la Catedral de Morelia, Superintendente de los pueblos de Santa Fe y encargado del Gobierno eclesiástico del Obispado, por tanto, en ese momento autorizaba la sustitución del Rector del Colegio clerical Br. Rafael Ortiz por el presbítero Trinidad Iriarte, ya que

Juan José Pastor Morales nació en 1769, en la hacienda de Tecacho de la feligresía de Huaniqueo, hijo de Bruno Pastor Morales y doña Mariana Ruíz. Morales realizó estudios en el Colegio Seminario de Valladolid.³⁴⁸ Pastor Morales, en algún momento de su juventud, se trasladó a la ciudad de México en donde, en octubre de 1794, se le abrió proceso inquisitorial acusado de ser partidario de los franceses, el sistema republicano, simpatizar con las ideas de la libertad e independencia y atacar al Santo Padre y a la Inquisición a través de sus expresiones.³⁴⁹ No obstante el incidente, obtuvo el grado de bachiller en la Universidad y posteriormente desempeñó la cátedra de filosofía de 1795 a 1802 en el Colegio de San Juan de Letrán.³⁵⁰ Ya en Michoacán fue cura de Teremendo, Coeneo, Paracho y Huango.³⁵¹

En el año de 1805, Morales era capellán propietario del Regimiento de Comercio de México y en tal calidad se encontraba interesado en presentarse como opositor a la convocatoria de curatos vacantes del obispado de Michoacán.³⁵² En 1820, Pastor Morales de nuevo presentó su solicitud a la convocatoria a curatos vacantes, a la cual no entregó la relación de méritos, días después retiró su presentación al concurso, aun así, obtuvo por evaluación el Superlativo Supremo.³⁵³

En 1828 era cura interino y Juez eclesiástico del pueblo de Tirindaro, examinador sinodal y promotor fiscal del Obispado de Michoacán, originario de Huaniqueo, vecino del partido de Pátzcuaro, pero residente en Valladolid por su

le primero tenía que salir de la ciudad. Archivo Histórico Casa de Morelos, en adelante: AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja, 481, Exp. 5. Alejandro VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR, *Biografías de los héroes y caudillos de la Independencia*, México, Editorial del Valle de México, 1980, pp. 325-326; Carlos HERREJÓN PEREDO, *Tlalpujahuá*, México, Monografías Municipales-Gobierno del Estado de Michoacán, 1980, pp. 101-104; Archivo Histórico del Cabildo Catedral de Morelia, en adelante: AHCCM, Legajo: 4-4.2-170-30 1792-1832, f. 158-158v. Nely Noemí GARCÍA CORONA, *Relaciones clero-gobierno*, p. 102. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja, 484, Exp. 5.

³⁴⁸ Mariano de Jesús TORRES, *Diccionario histórico, biográfico, geográfico, estadístico, zoológico, botánico, y mineralógico de Michoacán*, 1912, Tomo III, p.75.

³⁴⁹ AGNM, Inquisición, Volumen 1361.

³⁵⁰ José María MIGUEL I VERGÉS, *Diccionario de Insurgentes*, 2ª edición, México, Editorial Porrúa, 1980, p. 453.

³⁵¹ Mariano de Jesús TORRES, *Diccionario histórico*, Tomo III, p.75.

³⁵² AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja, 478, Exp. 7.

³⁵³ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 3.

empleo. En 1829 fue electo vocal del Consejo de Gobierno.³⁵⁴ Falleció en la hacienda de Tecacho el 20 de marzo de 1838.³⁵⁵

Manuel de la Torre Lloreda nació en Pátzcuaro el 6 de julio de 1776, hijo de legítimo matrimonio entre Francisco Justo de la Torre y Rosa María Palacio, quedó huérfano de padre a los cuatro años de edad. Tiempo después su madre contrajo nupcias con Francisco Lloreda, de quien Manuel adoptó su segundo apellido.³⁵⁶ Estudió en el Seminario Tridentino y en el Colegio de San Nicolás, se caracterizó por ser un hábil orador y se dedicó también a las bellas letras, llegó a realizar varias traducciones del latín y realizó composiciones de su autoría.³⁵⁷

³⁵⁴ Sin embargo, el documento más ilustrativo sobre la vida de este eclesiástico lo brinda su testamento redactado el 4 de julio 1828. Como su primera solicitud, Pastor Morales pedía ser sepultado en la iglesia de la Compañía de Jesús de Valladolid, o bien, donde sus albaceas creyeran conveniente, “vestido con los Parámetros Sagrados propios de mi carácter y ministerio”. Entre las posesiones de Pastor Morales se encontraba la hacienda de Bellas Fuentes y sus anexos, situada en el partido de Pátzcuaro, así como la hacienda de Cuatro en el partido de Puruándiro, las cuales tenían gravámenes. Una mina en el partido de Huetamo nombrada De Guadalupe, así como una hacienda de beneficio de metales llamada San Juan en jurisdicción de Tacámbaro y dos baras en las minas del Carmen y Pilar en el mismo partido. Un solar en el pueblo de Huaniqueo donde estaba la casa que había sido de su abuelo materno don Antonio Rabia y otro en Coeneo junto a las casas curales. Así como una “copiosa librería” en la casa de la hacienda de Cuatro. Morales declaró servir varias capellanías las cuales estaban al corriente en cuanto a misas, así mismo, haber sido albacea de varias testamentarias incluida la de su padre don Bruno Pastor Morales. El eclesiástico dejaba a sus sobrinas, hijas del Capitán Luis Martínez y su difunta hermana Mariana Pastor Morales, doña Cecilia y doña María Concepción la cantidad de mil pesos a cada una. Así mismo doscientos pesos al Convento de San José de Gracia de la Capital de México y los mil quinientos pesos que le adeudaba Valentín de Ocampo, dueño de la mina del Carmen, en legado *causa mortis* para el reedifico de la iglesia parroquial del pueblo de Huaniqueo. Otorgaba el perdón de los adeudos que sus sirvientes tuvieran con él a la hora de su muerte. Finalmente, el eclesiástico nombró como sus albaceas testamentarias y fideicomisarios a doña María Josefa Gastón y González viuda de don Manuel Cuervo, al Rector de Colegio Clerical de Valladolid Miguel de Santos Villa y por último al Gobernador en turno don José Salgado. Nombrando heredera un universal a la primera albacea testamentaria. No obstante, este no fue el único testamento que redactó el eclesiástico, en 1836 entregó un testamento cerrado al notario Público, Lic. Vicente Rincón y cuyos albaceas testamentarios eran Lucas Alamán, Mariano Rivas y Onofre Calvo Pintado. En el documento se expresaba que con los bienes del testador se pusiera en marcha una biblioteca pública, una escuela de Matemáticas en Zacapu, una para mujeres en Bellas Fuentes, una de Agricultura, varias becas para estudiantes de medicina, que fuesen hijos nacidos en Bellas Fuentes y el Cuatro; una iglesia y un puente, así mismo, donó su biblioteca al Seminario, lo demás lo distribuyó en legados particulares. Uno de sus albaceas, Onofre Calvo Pintado, no dio cumplimiento a las disposiciones de Pastor Morales una vez fallecido, sino que usufructuó de los bienes hasta su muerte, por lo que finalmente la labor benéfica planteada por el eclesiástico no fue realizada. Archivo General de Notarías de Morelia, en adelante: AGHNM, Libro de Protocolos No. 241, 1827-1828, f. 497v. Mariano de Jesús TORRES, *Diccionario histórico*, Tomo III, p.75.

³⁵⁵ *Ibíd.*, Tomo III, p.75.

³⁵⁶ Gerardo SÁNCHEZ DÍAZ, “Manuel de la Torre Lloreda: Entre la Ilustración de la República”, en Moisés GUZMÁN PÉREZ (Coord.), *Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia*, Morelia, IIH-UMSNH, 2006, p 99.

³⁵⁷ Lloreda hizo su carrera en el Seminario Tridentino, estudiando gramática, filosofía y teología, en la primera tuvo dos oposiciones, en la segunda fue presidente y defendió dos actos, siendo

Br. Manuel de la Torre Lloreda



Fuente: Gerardo SÁNCHEZ DÍAZ, "Los vaivenes del proyecto republicano. 1824-1855", Enrique FLORESCANO, (Coord.), *Historia General de Michoacán*, Tomo III, México, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, 1989, p. 5.

uno de los tres primeros mentados; se graduó en artes y obtuvo primer lugar entre cuantos lo verificaron en aquel año. En teología fue señalado para Acto menor y sostuvo después con honor una mayor, hizo oposición a las cátedras de gramática, filosofía y teología. Obtuvo una beca de oposición en el Colegio de San Nicolás y una capellanía de cuatro mil pesos, fundada para el colegial más hábil, especialmente para el púlpito. Siendo muy joven y lego, con licencia del prelado se había ejercitado en él por más de treinta y cinco años. Se dedicó también a las bellas letras y se habían impreso varias traducciones y composiciones de su autoría. Lloreda ascendió a todas las órdenes sin sínodo, y desde 1808 disfrutaba de licencias generales. En 1807 lo nombró el Cabildo *motu proprio*, catedrático de artes de San Nicolás, cargo que no desempeñó por enfermedad. Fue ocho años cura interino de Santa Clara, aunque nombrado para el de Irapuato, volvió por permuta a aquel, pasando después al de Pátzcuaro, hasta que a su petición obtuvo la propiedad de la sacristía de Jacona. En 1817 convenció y convirtió a un protestante Presbiteriano de talento y luces que murió en el "grelío de la Iglesia romana", hecho que fue calificado como muy sobresaliente por los gobernadores de la Mitra y publicado por la gaceta de Gobierno, noticia que llegó a oídos del Papa Pío VII, quien le otorgó amplísima facultad para leer y retener libros prohibidos y otras gracias. Fue vicario inmediato de la Religiosas de Pátzcuaro, individuo de la Junta Eclesiástica de Censura y examinador Sinodal, desempañando además otras comisiones. Una vez proclamado el *Plan de Iguala*, Lloreda se adhirió al movimiento Trigarante. Es posible que se hubiese entrevistado con Agustín de Iturbide en mayo de 1821, quien probablemente lo dejó a cargo de la dirección de la imprenta, función que pudo haber dejado a mediados de 1822 para que la imprenta pasara a manos de la Diputación Provincial de Valladolid de Michoacán. En 1830 se le confirió la sacristía de San Miguel el Grande, tres años después en ese mismo espacio conoció al Presidente Antonio López de Santa Ana y pronunció un discurso septembrino. Se sabe que mantuvo una relación con una mujer llamada Silvia. AHCCM, Legajo 4-4.2-170-30 1792-1832, f. 161-161v; *Impresores y editores de la Independencia de México 1808-1821*, Diccionario Monográfico, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UMNSH, 2011, pp. 237-239.

Él consideraba que su conducta política había sido conforme con la voluntad nacional, fue diputado del Congreso Constituyente del estado y se le encargó la primera parte del proyecto de Constitución y la redacción de toda ella. Cuando las logias masónicas dominaron el estado no se adhirió a ninguna.³⁵⁸ Al igual que José María Rayón, Manuel de la Torre Lloreda fue tomado en consideración para proveer las prebendas vacantes de dicha Iglesia; sin embargo, no logró la adjudicación de ninguna en su clase.³⁵⁹ Lloreda falleció en julio de 1836 a los 60 años de edad.³⁶⁰

Pablo José Peguero originario de la Hacienda de Casa Blanca, oriundo del pueblo de Maravatío el Grande, hijo legítimo de José Felipe Peguero y de doña María Francisca López de la Fuente, nació en enero de 1781, siendo su padrino de bautismo don Vicente Ruiz vecino del Valle de Santiago. Sus abuelos paternos fueron José Peguero y Manuela Acosta del Valle de Santiago y mientras que los maternos José López de la Fuente y Rosalía García Tello, por ambos lados su familia se encontró compuesta por “buenos españoles de limpia sangre.”³⁶¹

En 1807 presentó documentos para recibir la prima clerical tonsura cuatro órdenes menores y Sacro diaconado, siendo en esos momentos colegial interino de oposición en el Real Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo.³⁶²

Como se mencionó con anterioridad, Peguero fue el eclesiástico inserto en más legislaturas durante la primera República Federal; no obstante, una vez hecho el cambio de sistema de gobierno y convertido el estado de Michoacán en Departamento del mismo nombre, Peguero fue nombrado miembro de la Junta departamental, a la que renunció al poco tiempo.³⁶³

³⁵⁸ AHCCM, Legajo 4-4.2-170-30 1792-1832, f. 161-161v

³⁵⁹ AHCCM, Legajo 4-4.2-170-30 1792-1832, f. 130-130v.

³⁶⁰ *Impresores y editores*, p. 239

³⁶¹ Para ello presentó la certificación de José María Ronda en su calidad de Vice Rector y Catedrático *ad tempus de theologia* moral en el Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, quien certificó que Pablo José Peguero había cursado dicha cátedra en seis meses y había cumplido con todas las comuniones del Colegio, la cual extendió el 27 de junio de 1807. Así mismo, Peguero presentó tres escritos de Pedro Mendoza, Roque Jacinto Gómez y José Manuel Villalobos, los cuales certificaban la limpieza de sangre y aludían a la calidad de buena familia de la cual descendía el eclesiástico, agregando el primero “que a esos buenos principios ha correspondido la sana conducta juicio y virtud del mencionado Bachiller.” AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1807, Caja 575, Exp. 70.

³⁶² AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1807, Caja 575, Exp. 70.

³⁶³ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes*, Tomo VII, pp. 81-82.

Ignacio Ocampo postuló al concurso de curatos vacantes, convocado por el Arcediano y gobernador del obispado Manuel de la Bárcena en 1820, la documentación presentada, entre ella una certificación que afirmaba que el eclesiástico tenía una buena carrera literaria y había ejercido el ministerio de manera apropiada por más de 20 años y pretendía en propiedad la sacristía de La Piedad o Puruándiro.³⁶⁴

Villavicencio Ignacio. Lo que se conoce del eclesiástico emana de la certificación que José Salgado dio al expresado eclesiástico en febrero de 1830, con motivo de la convocatoria a curatos vacantes. En ella se establecía que Villavicencio había servido en Los Reyes, Tingüindín, Periban, Uruapán y Tancítaro. En palabras del Licenciado Manuel González Ureña el eclesiástico era un hombre instruido suficientemente en la moral cristiana, persona honrada y de agradable conducta, lo que le hizo acreedor de íntimo aprecio del recomendante y del vecindario en general.³⁶⁵

Juan Nepomuceno Sierra nació en el pueblo de Chilchota el 16 de mayo de 1789. “Hijo de padres honrados y cristianos”, a los 7 años ante el deceso de su padre se fue a radicar al pueblo de Santa Clara del Cobre, a lo que “su madre supo imprimirle los sentimientos más religiosos y darle una educación correspondiente a sus principios.”³⁶⁶ Estudió en el Seminario Tridentino de

³⁶⁴ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 28.

³⁶⁵ Ignacio Villavicencio entró a servir la vicaría fija en Los Reyes, al segundo año se retiró al de Tingüindín, para reponer su salud y servir la Ampolleta de dicho curato. Se desempeñó como vicario en el pueblo de Peribán por dos años, para ser encargado de ese mismo curato por un periodo de tiempo similar, ante la ausencia de su párroco. Tiempo después, por cuestiones de salud, se trasladó al pueblo de Uruapan, entregó el curato a su párroco, por estar este ya restituído a su feligresía. En dicha certificación establecía la conducta sana, irreprochable y digna de un ministro del altar absteniéndose de todo vicio, desempeñándose con toda puntualidad los cargos anexos a su ministerio. Según Salgado, Villavicencio asistió oportunamente al socorro espiritual de los enfermos, practicando la caridad con los insolentes, fomentando la frecuencia de los sacramentos y exhortando al pueblo a la observancia de los divinos preceptos. Aclarando Salgado, que aunque no vivía en Peribán pero por la proximidad de dicha población a Los Reyes, se consideraba un testigo ocular, de lo expuesto. Finalmente, Salgado expone que Villavicencio fue trasladado al pueblo de Tancítaro, en donde sirvió su Ampolleta, sin más interrupciones que algunas enfermedades que le atacaban, por lo que en algunas ocasiones fue auxiliado por el párroco de Apatzingán. Eso era lo que Salgado había presenciado por un periodo de cuatro años. Así mismo, le fue otorgada otra certificación por el Licenciado Manuel González Ureña, quien ostentaba el mismo nombre que el médico y político González Ureña, en la que decía que el presbítero Ignacio Villavicencio había administrado por 6 años los sagrados sacramentos en el curato de Tancítaro, el cual había estado a su cargo y en sus repetidas ausencias de él, dicho eclesiástico lo había servido con la mayor exactitud, instruido suficientemente en la moral cristiana, persona honrada y agradable conducta, le hicieron acreedor de íntimo aprecio del recomendante y del vecindario en general. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 483, Exp. 2.

³⁶⁶ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 2.

Valladolid y derecho canónico en el Colegio de San Nicolás, pero truncó sus estudios por la guerra, posterior a ello respaldado por Manuel de la Torre Lloreda retomó su instrucción para solicitar las diversas órdenes y convertirse en sacerdote. Sirvió en los curatos de Coahuayutla, Cuerámbaro, Pénjamo y Churumuco.³⁶⁷

José Luciano Farías oriundo del Valle de Cotija, hijo de legítimo matrimonio compuesto por don Mariano Farías y doña Ma. Teresa Barragán y

³⁶⁷A partir de su interés por participar en el concurso de oposición de curatos vacantes de 1836, presentó su expediente, del cual se sabe que Sierra estudió gramática y filosofía en el Seminario Tridentino de Valladolid, en el cual desempeñó las primeras tres oposiciones públicas. En la segunda, aunque en fuerza de su indigencia y graves males, no pudo tener la dedicación debida, obtuvo a pesar de ello las mejores calificaciones en los exámenes de los dos primeros años, viéndose en el último, casi estrechado a desistir de la carrera. Restablecido después, continuó con sus estudios de Derecho Canónico en el Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, pero la revolución de 1810 frustró sus esperanzas alejándose de la carrera. Terminando la guerra e invitado por Manuel de la Torre Lloreda, cura interino, y de los demás señores eclesiásticos de Santa Clara, se resolvió a pasar al Colegio clerical de Valladolid con el objeto de cumplir con el curso conciliar de teología moral para pretender órdenes y en tres meses logró ponerse en aptitud de recibir desde prima tonsura hasta el sacro diaconado, ello en septiembre de 1823. Al siguiente año fue ordenado presbítero, otorgándole el Cabildo Catedral licencia para celebrar, predicar y confesar personas de ambos sexos por tres años, la cual se le amplió por cumplir en tiempo y forma con requisitos necesarios para ello. El primer curato al que fue adscrito fue el de Coahuayutla, pero no tuvo efecto por haberse negado a entregárselo el cura que lo administraba, recibiendo desaires de aquel vecindario y el ultraje que a través de su persona recibió la autoridad eclesiástica. Luego, a solicitud del Lic. Río pasó a Cuerámbaro, vicaría del curato de Pénjamo a predicar y hacer confesiones de cuaresma. El eclesiástico Narciso Robles por su edad y males le cargó todo el peso de las funciones de su deber, cuando Sierra se encontraba solo y a cargo a la Capellanía de la hacienda de Santa Efigenia. Finalmente, dicho curato fue dado en propiedad al Bachiller Rafael Huerta y desengañado de su física incapacidad de servirlo, dicho curato terminó finalmente en manos de Juan Nepomuceno Sierra. Cuando Sierra presentó sus documentos para el concurso de curatos vacantes, agregó a su expediente las certificaciones del Bachiller José Saturnino Gutiérrez, teniente de cura del partido de la Haguacana, del ciudadano José Inocencio Cedeño Teniente constitucional del Pueblo de San Antonio Urecho y su jurisdicción, así mismo de Don Manuel Farías Prefecto del Departamento del Sur y finalmente la del Lic. Miguel Menéndez, en su calidad de profesor que fue de Sierra en el Seminario Tridentino. Dichas certificaciones manifestaban el buen desempeño que el eclesiástico de había tenido como tal, los sacrificios, esfuerzos y fatigas a los que se había enfrentado con tal de cumplir con el ministerio del sacerdocio en las poblaciones en las que se había desempeñado. Asimismo, el desinterés y la buena disposición que lo caracterizó en el desempeño de las acciones de caridad y con mayor razón a las que eran obligatorias a la naturaleza de su profesión. Tal vez la certificación más reveladora sobre el carácter de servicio de Juan Nepomuceno Sierra fue la presentada por José Inocencio Cedeño. En ella se estableció que el eclesiástico se había encargado del curato por enfermedad del cura Narciso Robles, “acudiendo a confesiones cuantas veces fue solicitado a cualquier hora del día y de la noche”, sin que fueran obstáculos el peligro de los ríos, el calor, los malos caminos, siempre a pie a falta de cabalgaduras en esa región, aun cuando estuvo enfermo de las asentaderas camino doce leguas y luego cinco más para ofrecer confesión. Realizó confesiones a los feligreses de Churumuco, a los vecinos de Huachira, Huacana, San Pedro Soruyo y Playa, de las cuales no quiso recibir ningún obsequio por dichos servicios. Además de llevar una vida ejemplar, jamás se le había visto concurrir a diversiones a ninguna hora, ni que se ocupara de algo que le distrajera de sus funciones, siendo un señor recomendable por las cualidades que le caracterizaban en ser un “un verdadero Pastor del rebaño de Jesucristo”. Dicha certificación fue dada en febrero de 1831. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 2.

Amezcu. Farías estudió en el Colegio Seminario de Valladolid,³⁶⁸ cuando presentó la solicitud para ordenarse como referentes ser clérigo subdiácono domiciliario del Obispado de Michoacán, pasante en ambos derechos y practicante de ellos en Valladolid. argumentando que una serie de incidentes le habían impedido promoverse al Sacro diaconado y Sacerdocio. El aspirante optó por ordenarse título de idioma tarasco, ello al ver la necesidad que tenía la Iglesia de ministros instruidos en esa lengua, por lo que emprendió el estudio de dicho idioma desde la erección de la Cátedra en el Seminario Tridentino.³⁶⁹

Luciano Farías se desempeñó como ayudante de parroquia en el Valle de Cotija, en 1814 se encargó del curato de Jiquilpan, pero la insurgencia lo obligó a dejar la parroquia, por lo que pasó a Cotija y de ahí a Guadalajara al ser perseguido por los insurgentes. Asistió los pueblos de Tingüindín, Jaripo, Santiago, Tangamandapio, Sahuayo, Jiquilpan, Tzirosto, Patamban, así como la capellanía de la Congregación de Chavinda, el pueblo de Santiago Tangamandapio, Pajacuarán, Jacona y Tarecuato, para 1835 se desempeñaba como cura propio y juez eclesiástico de Sahuayo.³⁷⁰

³⁶⁸ En el Colegio Seminario, Luciano Farías estudió gramática latina con dos oposiciones públicas, una a mínimos y menores; la otra a medianos y mayores, ambas desempeñadas con lucimiento. Pasó después al Colegio de San Nicolás Obispo a estudiar filosofía, sustentó los sabatinos de lógica, metafísica. Posteriormente comenzó a estudiar ambos derechos y aunque concluyó con aprovechamiento los cursos prevenidos en los estatutos de la Universidad de México, la escasez de su pobreza le obligó a interrumpir la práctica después de un año, para atender las necesidades de su familia, ordenándose posteriormente como sacerdote. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 5.

³⁶⁹ Cuando Luciano Farías presentó su solicitud para ordenarse, En diciembre de 1805, Farías presentó la certificación de José Gregorio Solchaga, Juez eclesiástico del partido de Tacámbaro y catedrático del idioma Tarasco en el Real y primitivo colegio de San Nicolás Obispo, quien afirmó que Luciano Farías había sido su discípulo y en sus clases aportó con mucho juicio, aplicación y tanto aprovechamiento, que entendía y hablaba con perfección el idioma tarasco, lo que juzgo podría servirle de título para las ordenes que pretendía. En el año de 1806, Luciano Farías fue admitido en el concurso de curatos y en virtud del sínodo o calificación que mereció se le concedieron dimisorias para ordenarse de sacerdote que consiguió en el obispado de Guadalajara. Así mismo, desde esa fecha se le destinó al Valle de Cotija como ayudante de parroquia del pueblo de Tingüindín. AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, Caja 570, Exp. 53.

³⁷⁰ En el año de 1814, Farías pasó al pueblo de Jiquilpan a encargarse de aquel curato, ante el abandono del mismo por el Lic. José González Peredo y por orden del cura de Uruapan Nicolás Herrera, comisionado entonces de *solitas pacíficas*; quien acreditó la puntualidad y exactitud con que se condujo en su desempeño; a pesar, de hallarse solo y en tiempo de una asombrosa peste que acabó con la mayor parte de aquellos indígenas, a quienes Farías asistió en sus necesidades, de modo que ninguno murió sin los auxilios espirituales. Además, cumplió con el confesionario y el púlpito hasta que las circunstancias de la revolución lo obligaron a abandonar aquel curato y retirarse a Cotija de donde emigro a Guadalajara por la persecución que sufrió por parte de los insurgentes. Posteriormente administró en los pueblos de Tingüindín, Jaripo, Santiago, Tangamandapio, Sahuayo, Jiquilpan y sirvió interinamente Tzirosto de donde fue promovido después de dos años al de Patamban. Pasados dos años se retiró al pueblo de

Joaquín Ladrón de Guevara presentó la relación de méritos para el concurso de curatos vacantes en calidad de presbítero domiciliario del obispado de Michoacán y catedrático de Filosofía en el Seminario Tridentino en 1832. Entre la información que destacó en ese momento era que había nacido el 22 de agosto de 1802 en Valladolid.³⁷¹ Estudió en el Colegio Clerical, en el convento de San Agustín y Nuestra Señora de la Merced, en 1819 continuó sus estudios en el Colegio Seminario, así como en la Universidad de México. En septiembre de 1826 recibió las órdenes, desde prima tonsura hasta el sacro presbiterado. Sirvió en los curatos de Apaseo, de la Villa de San Felipe, de Tarímbaro, Huaniqueo y predicó por tres años las pláticas doctrinales en la Iglesia Catedral. Se presentó a dos concursos, obteniendo la sacristía Mayor de la Villa de San Francisco y en el segundo la de San Luis Potosí.³⁷² En enero de 1842, Ladrón de Guevara afirmaba tener 39 años y 15 de ordenado como sacerdote, en 1847, expresaba que había sido vocal de la Ilustre Junta de Instrucción Pública de Michoacán por seis años, así como diputado local en dos legislaturas.³⁷³

Jiquilpan a atender su salud quebrantada al parecer por el clima frío de Patamban; aún sin restablecerse se desempeñaba con frecuencia en el púlpito, confesionario, así como asistiendo a los enfermos con los auxilios espirituales gratuitamente. Desempeñó la capellanía de la Congregación de Chavinda y que administró en el pueblo de Santiago Tangamandapio, Pajacuarán y Jacona (antes de ser nombrado cura). Renunció al interinato de Patamban por el de Tarecuato, pero la temperatura de nuevo hizo estragos, así que después de tomar posesión debió volver a Jiquilpan, por esos días recibió la noticia y nombramiento como Diputado al Congreso del estado de Michoacán. A principios de febrero de 1830, Luciano Farías concursó por los beneficios vacantes en calidad de capellán de Morelia. Farías siempre mostró una conducta moral y política ordenada en los veintidós años de servicio que hasta ese momento había desempeñado en diferentes curatos y a pesar de los tiempos difíciles no distrajo su atención del servicio pastoral, por lo que no se encontraba queja alguna contra su persona. No obstante, de los padecimientos consiguientes al ministerio “le anticipó una vejez más estragada que caduca,” ni el aislamiento y privaciones que por tanto tiempo sufrió, ni aún la distinguida confianza que habían depositado los pueblos para que fungiera como representante en el Congreso del estado; estimaba Farías como méritos. Tal exposición sobre su persona elevó el eclesiástico para concursar por los beneficios vacantes ello a principios de febrero de 1830 en calidad de capellán de Morelia. Para octubre de 1835 Luciano Farías entregó una certificación firmada en Sahuayo, al presbítero Ramón Cipriano, quien había administrado la parroquia del Pueblo de Cojumatlán, correspondiente a su curato en calidad de Cura propio y juez eclesiástico de dicha feligresía. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 5. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 480, Exp.1.

³⁷¹ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 479, Exp.7.

³⁷² AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 479, Exp.7.

³⁷³ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 488, Exp.6. En 1814 Joaquín Ladrón de Guevara comenzó sus estudios de latinidad en el Colegio Clerical, sustentando un examen de las materias designadas por mínimos y menores siendo calificado con el grado de Superlativo Medio. Por haber cesado la cátedra fue obligado a estudiar de forma privada, hasta lograr la suficiente instrucción para ser admitido en el curso de artes que se leyó en el Convento de San Agustín al que asistió sin falta por dos años y medio del cual defendió tres actos públicos, uno de lógica, metafísica y ética en el Convento de Nuestra Señora de la Merced. En el mismo espacio educativo continuó estudiando teología escolástica por seis meses y sustentó dos actos

Por un breve tiempo Joaquín Ladrón de Guevara se desempeñó como Secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, la fecha de posesión del cargo se desconoce, solo se puede afirmar que para el 28 de enero de 1847 ya le había sido aceptada la renuncia a la misma.³⁷⁴

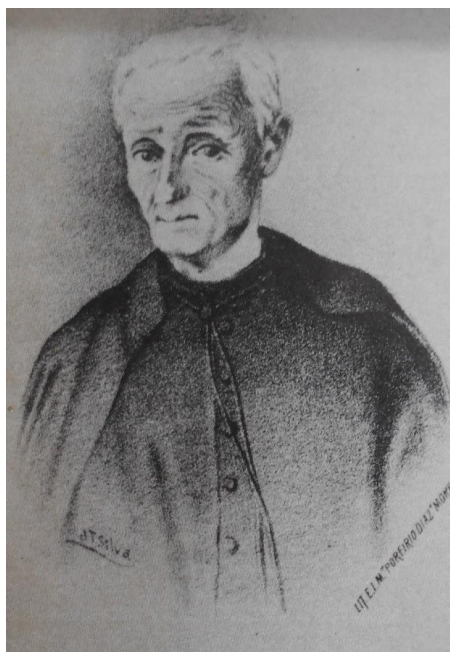
Martín García de Carrasquedo nació en Valladolid de Michoacán en 1771; sus padres fueron don Dionicio García Carrasquedo natural de Balmaseda, España y de doña María Dolores Izquierdo, originaria de Valladolid. La estrecha relación del padre de Martín García de Carrasquedo y la alta jerarquía eclesiástica, en particular con el Obispo fray Antonio de San Miguel Iglesias, fue determinante para su rápido ascenso dentro de la estructura eclesiástica una vez que se decidió por la vida sacerdotal.³⁷⁵

públicos de algunas conclusiones de moral. Luego que se restableció el Colegio Seminario entró a cursar sagrada teología en noviembre de 1819 y en el término de un mes presentó su primer examen en el que mereció el grado de Superlativo Supremo siendo premiado con una beca de creación. Así mismo, el eclesiástico fue nombrado presidente de gramáticos, cargo que desempeñó mientras duraron sus cursos. Completó los cuatro prevenidos por la Universidad de México asistiendo a las cátedras de prima, vísperas morales. En ese tiempo Guevara sustentó dos veces las primeras conclusiones sabatinas de su clase, replicó en iguales funciones, así de la propia facultad, como de matemáticas, suplió en distintas ocasiones las cátedras de gramática y en su último examen obtuvo el grado Superlativo Supremo, fue asignado para defender un Acto Mayor sobre la obra de *Locis Teologias* del ilustrísimo Caño, cubrió la cátedra de retórica el tiempo necesario y concluyó dos cursos de cánones y leyes y le fue conferida una beca de oposición de sagrada teología. En septiembre de 1826 recibió las órdenes, desde prima tonsura hasta el sacro presbiterado. Una vez ordenado sacerdote fue sacristán mayor de Apaseo por tres años, dejó de serlo cuando obtuvo la propiedad de aquel curato. Ladrón de Guevara fue cura encargado de la Villa de San Felipe en el estado de Guanajuato por espacio de tres meses, de Tarímbaro por dos meses y en Huaniqueo por cuatro meses, asimismo, obtuvo licencias para confesar. Guevara predicó por tres años las pláticas doctrinales en la Iglesia Catedral. Sirvió como cura encargado cuatro meses la parroquia de Huaniqueo, otros tantos en Tarímbaro y tres en la Villa de San Felipe, fue sacristán mayor interino de Apaseo. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 479, Exp.7.

³⁷⁴ AGNM, Justicia, Volumen 150, f. 184

³⁷⁵ Carlos JUÁREZ NIETO, "Martín García de Carrasquedo" pp. 40-41.

Prebendado Martín García de Carrasquedo



Fuente: Gerardo SÁNCHEZ DÍAZ, "Los vaivenes del proyecto republicano. 1824-1855", Enrique FLORESCANO, (Coord), *Historia General de Michoacán*, Tomo III, México, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, 1989, p. 22.

Martín García de Carrasquedo estudió en el Seminario Tridentino,³⁷⁶ obtuvo el subdiaconado en 1783 y posteriormente se ordenó como sacerdote. Con el apoyo de sus protectores: el Obispo fray Antonio de San Miguel y el Juez de Testamentos Manuel Abad y Queipo, tomó posesión de la vicaría de la Villa de San Felipe, curato a cargo de Miguel Hidalgo y Costilla y fue sacristán de Zitácuaro. Dado su carácter, en más de una ocasión Carrasquedo fue denunciado ante el Santo oficio por proposiciones heréticas, la primera de ellas fue en 1800, la cual no prosperó, dos años después de nuevo fue delatado por la lectura de libros prohibidos y la que corrió el mismo destino que la primera.³⁷⁷

En 1804 García de Carrasquedo partió a España para resolver asuntos familiares, lo cual resultó muy conveniente para alejarse de los escándalos que recién le aquejaban. Durante su viaje se encontró lleno de complicaciones, desde ser prisionero de los ingleses en las Islas Azores hasta participar en Portugal en

³⁷⁶ En dicha institución destacó por su talento y buen juicio, confirmándolo así las certificaciones que extendieron sus maestros como Tomás Pérez Gil, Juan Verde, Francisco Tercero, Manuel Ruíz de Chávez, Francisco Uraga y José Pisa. Carlos JUÁREZ NIETO, Carlos, "Martín García de Carrasquedo", p. 41

³⁷⁷ *Ibíd.*, pp. 42-44.

el levantamiento contra los franceses, cayendo prisionero de nueva cuenta. Después de toda una serie de incidentes, Carrasquedo pasó a Cataluña y de ahí a Cádiz, donde hizo su solicitud a las Cortes Generales para ser provisto de una prebenda en la catedral de Valladolid de Michoacán, la cual obtuvo en diciembre de 1810 y de la cual tomó posesión un año después en Valladolid.

Durante su estancia en Cádiz, Carrasquedo fue tomado como un buen candidato para ser incluido en la elección final de diputados americanos suplentes para la primera legislatura de las Cortes de Cádiz. El listado se componía de 165 nombres de los cuales sólo serían electos 30 en calidad de suplentes. En dicha relación, don José Martín García de Carrasquedo aparece como natural de Valladolid de Michoacán, residente en Cádiz capellán mayor de los Hospitales del Ejército de Galicia.³⁷⁸

Si bien la votación no favoreció a Carrasquedo, la experiencia de vivir momentos de enorme agitación política en la península, en la cual emergía una nueva cultura política, pudo ser un gran referente para las futuras acciones de este eclesiástico en la vida política de Michoacán.

Ya de regreso en Valladolid con su prebenda, con un par de años de relativa calma, el prebendado debió hacer frente a nuevas acusaciones sobre su simpatía con el movimiento insurgente, por lo que purgó una condena de 2 años en el presidio de Valladolid, cuatro meses en la real cárcel de la ciudad de México y un semidestierro de tres meses en la parroquia de Celaya para regresar de nuevo a su ciudad natal a principios de 1817.³⁷⁹

Para 1824, Martín García de Carrasquedo gozaba del beneficio de una ración, pero con los movimientos se dieron dentro del Cabildo catedral de 1831 a 1833 por la provisión de prebendas vacantes, el eclesiástico obtuvo una canonjía, de la cual fue destituido al igual que todos sus compañeros que habían sido promovidos dentro de dicho órgano por decreto federal; sin embargo, para 1835 la misma le fue devuelta. García de Carrasquedo falleció en 1851.³⁸⁰

Todo parece indicar que **Luis de Soria** era vecino de Pátzcuaro. Lo que sí es certero es que sirvió en el curato de Tacámbaro y de ahí pidió su traslado

³⁷⁸ Ivana FRASQUET, "La construcción de la representación", pp. 125-126.

³⁷⁹ Carlos JUÁREZ NIETO, "Martín García de Carrasquedo", p. 49.

³⁸⁰ Nely Noemí GARCÍA CORONA, *Relaciones clero-gobierno*, p. 105

al de Tuzantla en 1821.³⁸¹ Casi diez años después se postuló al concurso de curatos vacantes de 1829, obteniendo la sacristía de Tlalpujahua, pues para enero de 1832, en la ciudad de Pátzcuaro otorgó un poder al bachiller Mariano Lezo, para que se presentara en Morelia y tomara colación de la sacristía del mineral de Tlalpujahua en su representación.³⁸²

José Felipe de Jesús Carvajal era oriundo del Pueblo de Santa Clara del Cobre, residente en la Ciudad de Pátzcuaro desde la edad de cinco años, hijo de legítimo matrimonio entre don Joaquín Carvajal y doña Josefa Corral, sus padrinos de bautizo fueron José Joaquín Rueda y Doña María Guadalupe Rueda. Sus abuelos paternos: don José Carvajal y doña Petra de Arriola, mientras que los maternos don José Corral Soltero y María Candelaria viuda, a los cuales siempre se les tuvo como buenos españoles.³⁸³ Ya con un determinado nivel de madurez y deseoso de promoverse a las Sagradas Ordenes, solicitó la primera clerical tonsura, las cuatro menores órdenes y sacro subdiaconado bajo el título de Administración.³⁸⁴

³⁸¹ AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Caja 141, Exp. 48. Agradezco el dato al Dr. Moisés Guzmán Pérez.

³⁸² AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 185, Exp. 2

³⁸³ AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1807, Caja 574, Exp. 68.

³⁸⁴ A partir de la comparación de la información que se maneja el presente trabajo, se deduce que un diácono podía solicitar su ordenación a títulos de administración, patrimonio, idiomas o capellanía, véanse los casos Tomás Arriaga, José María Cavadas, Luciano Farías y Rafael Guedea. Para lograr su objetivo, Carvajal presentó certificaciones del Br. Manuel de Velasco Rector del Real Colegio de Santa Catarina Mártir de la Ciudad de Pátzcuaro, quien expresó que dicho eclesiástico fue alumno de esa institución, cursando por seis meses la cátedra de moral, haciéndose distinguir por su aplicación y aprovechamiento entre todos sus condiscípulos, así mismo fue cuidadoso observante de la constitución que prevenía confesar y comulgar cada mes y nunca dejó de cumplir con las mismas; por lo que siempre fue bien visto por sus superiores, los que apreciaron su buena conducta. Dicha certificación fue expedida en abril de 1807. En 1807, Felipe de Jesús Carvajal pudo optar a la primera clerical tonsura, las cuatro menores órdenes y sacro subdiaconado, ello al no encontrar elementos que determinaran lo contrario. Es de mencionar que para ese año Felipe era huérfano de padre; sin embargo, ello no le impidió seguir luchando para conseguir su ordenación. Para comprobar su preparación y obtener las investiduras que solicitó, Felipe Carvajal presentó la certificación del Provisor Vicario Capitular don Juan Antonio de Tapia, quien externó que dicho joven era de arreglada conducta, juicioso y aplicado al estudio, en materias morales había adquirido una más que regular instrucción (cuyas circunstancias prometían buenas esperanzas) y de consiguiente, que el solicitante contaba con los requisitos para ser admitido a las órdenes que pretendía. Asimismo, los eclesiásticos José Francisco Velázquez y Manuel Velasco brindaron testimonio de las aptitudes y buena conducta de Carvajal, aludiendo además al buen manejo que éste tenía en filosofía y teología. De la misma manera, presentaron sus certificaciones el bachiller Salvador Rivera de más de 60 años clérigo presbítero Domiciliario del obispado de Michoacán y catedrático de latinidad del mismo colegio, José Mariano Alcocer Teniente de cura de esta parroquia, José Ramón Cisneros clérigo presbítero domiciliario del obispado de Michoacán y capellán de Prima en el Convento de las religiosas dominicas de Nuestra Señora de la Salud y José Franco Velázquez cura interino y Juez eclesiástico de la ciudad de Pátzcuaro y su partido. AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, Caja 574, Exp. 68.

José Tomas Arriaga originario de la ciudad de Pátzcuaro, a los siete años se trasladó Valladolid, donde por su condición de expósito le resultó complicado su ingreso al Colegio de Infantes en 1796.³⁸⁵ En febrero de 1808, Tomas Arriaga era estudiante en el Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo de Valladolid y manifestando su vocación para servir el estado eclesiástico y tener la edad competente solicitó recibir las órdenes menores y el sagrado de Subdiaconado a título de administración. Una vez ordenado fue nombrado cura interino y juez eclesiástico de San Juan Urecho, esto hacia 1819, el que había servido por cuatro años sin queja alguna sobre su conducta política y el cumplimiento de su obligación, al menos es lo que se externaba a finales de abril de 1823.³⁸⁶

Lorenzo Auriolles nació en Tecuaniapa jurisdicción de Cutzamala y fue bautizado el 20 de septiembre de 1790. Hijo de legítimo matrimonio conformado por don José María Auriolles y doña Martina Luviano. Estudió en el Colegio de Infantes de Valladolid, posterior a ello continuó con su formación en el Colegio

³⁸⁵ El Colegio de Infantes fue una institución que surgió en Valladolid en la segunda mitad del siglo XVIII con el objetivo ayudar a los niños criollos pobres y dotarlos de ciertas herramientas enfocadas principalmente en el desarrollo de las habilidades musicales y con ello alejarlos de la vagancia o un de modo no honesto de vida. Edgar ZUNO RODILES, *El Colegio de Infantes en Morelia, 1878-1814*, Morelia, Tesis de Maestría-UMSNH, Junio de 2008, pp. 63-72.

³⁸⁶ Tomas Arriaga fue expuesto el 21 de diciembre de 1786 en casa de Don Joaquín de Arriaga y Doña Mariana Pérez Santoyo, quienes lo adoptaron. Tal evento Doña Mariana lo relató de la siguiente manera: "...a deshora de la noche expusieron en mi casa un niño que vino con papel de que estaba Bautizado y tenía el nombre de José Thomas, al cual adopte por mi hijo, educándolo y criándolo como tal en mi compañía dándole el tratamiento de hijo y él a mí de madre". Es de mencionar que el matrimonio Arriaga tenía dos hijos al momento de que Tomás fue expuesto, uno de ellos perteneció al clero secular, pero para 1796 ya había fallecido y el otro era miembro de la Orden de San Francisco. En el año de 1796, Tomas era huérfano de padre adoptivo, quedando a su entero encargo su madre, quien en ese año intentó postular al pequeño para una beca del Colegio de Infantes pues en ese momento ya era parte de la escoleta de dicha institución con destacado desempeño, a pesar de ello, la solicitud fue negada por su condición de ilegítimo. Doña Mariana Pérez Santoyo envió, en el mes de septiembre, una carta en la que exponía y defendía la limpieza y buena familia de la cual venía su hijo y de los derechos que el pequeño había adquirido una vez expuesto en su casa. Así mismo hizo llegar una certificación del Br. Ignacio Agustín de Solórzano clérigo presbítero domiciliario, la de Rafael Verduzco Teniente de cura y substituto de Juez eclesiástico de Pátzcuaro y la del Br. Vicente Villaseñor clérigo presbítero domiciliario del obispado de Michoacán de 49 años originario y vecino Pátzcuaro, quienes defendieron la causa de la madre. Finalmente, y después de pedir la intervención del Obispo Fray Antonio de San Miguel, éste le dispensó el defecto de natales, para que sin dicho embarazo pudiera ser admitido en el Colegio de Infantes, lo cual ocurrió en octubre 24 de 1796. Posterior a ello pasó al Colegio de San Nicolás Obispo donde presentó oposición pública a toda gramática, acto meritorio de lógica, actos públicos de física. En febrero 1808, al presentar su postulación a las órdenes menores y el sagrado de subdiaconado a título de administración, Arriaga, para comprobar su preparación, presentó una certificación del secretario de dicho Colegio; en la que se afirmaba que desde que Arriaga comenzó a estudiar gramática hasta el estado presente de su carrera como estudiante de cánones, "había sido distinguido con los premios que merecían los sobresalientes". AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, Caja 576, Exp. 76. Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 480, Exp. 23.

seminario, sirvió como vicario en el curato de San Luis Potosí, fue Vice-rector y catedrático del Colegio Seminario.³⁸⁷ Se desempeñó como sacristán mayor interino del curato de la Piedad durante ocho años, fue nombrado cura interino y juez eclesiástico del mismo curato, cuyo cargo desempeñó hasta el 21 de diciembre de 1830, en que tomó posesión de curato de Tlazazalca que obtuvo en concurso y poseyó en propiedad. Así mismo, había predicado en varias ocasiones en la iglesia catedral, así como en otras iglesias.³⁸⁸

Fue diputado por el estado de México en el Congreso General en el bienio de 1827 y 1829, así como representante a dos legislaturas constitucionales del estado de Michoacán. Tres veces fue presidente del Congreso local michoacano y en una de ellas en el acto solemne de cerrar sus sesiones contestó al discurso

³⁸⁷ Lorenzo Auriolles comenzó sus estudios de gramática en el Colegio de Infantes de Valladolid del cual fue alumno y tuvo tres oposiciones públicas una de mínimos y menores, medianos. Posteriormente, Auriolles pasó a estudiar la cátedra de filosofía en el Colegio Seminario, con tal aplicación que en el primer año había sustentado unas conclusiones sabatinas, replicó en otro y tuvo un acto público de lógica y metafísica que dedicó al Deán y Cabildo Sede vacante de la Iglesia Catedral de Valladolid. En el segundo año cursó filosofía, pasó a ser colegial de dicho Seminario y fue examinado de *juré* en matemáticas, física general y de gratis en lógica y metafísica. En el tercero tuvo las primeras sabatinas, un acto público de toda la filosofía y matemáticas, posterior a terminar los estudios de la primera comenzó a estudiar teología obteniendo la calificación de superlativa suprema en dos exámenes. En el año de terciarista o tercero, Auriolles defendió las primeras sabatinas de teología y al parecer la dejó inconclusa por la clausura del Seminario, por tal motivo pasó a estudiar derecho al Colegio de la Compañía. En dicho recinto, Auriolles hizo tres cursos de derecho, fue presidente de la cátedra de mínimos y menores, en la de terciarista de medianos y del Colegio de la Compañía de filosofía, además de que procuró desempeñar las funciones anexas a tal oposición. En agosto de 1814, fray Francisco de la Virgen María, Prior de los Carmelitas de Valladolid, emitió una certificación de que el Diacono Lorenzo Auriolles, los subdiáconos Francisco Sarrio, Apolinar Sánchez y los ordenantes Rafael Guedea y Francisco Terán habían tenido espirituales ejercicios en dicho convento, asistiendo puntualmente a la oración mental de mañana y tarde, a los oficios divinos y otros actos religiosos, dando un buen ejemplo con su buen porte y arreglada conducta. Después de que Auriolles se ordenó sacerdote presentó solicitud para adquirir licencia de confesar, la cual obtuvo por cuatro años para hombres y mujeres, la cual se amplió posteriormente para enclaustradas no religiosas. Tiempo después volvió a postular, obteniendo licencias generales para todo el obispado y aún para religiosos descalzos y recoletos de la filiación ordinaria, con varias facultades como de absolver, de los reservados sinodales sin bala, habilitar y revalidar matrimonios, bendecir imágenes y parámetros sagrados. Se empleó en los ministerios de predicar y confesar, en especial los tres años ocho meses que sirvió como vicario en el curato de San Luis Potosí. En esa misma región promovió el establecimiento de una escuela pública de primeras letras, dotada de los fondos de la Congregación de San Pedro de aquella ciudad. Una vez reabierto el Seminario, a pesar de que la vicaría que servía en San Luis Potosí le rendía mil doscientos pesos anuales, Auriolles continuó con sus estudios de teología y de derecho que le faltaban, siendo el primero que recibió el grado de bachiller en cánones de este. Una vez obtenido el grado, se desempeñó dentro de la misma institución como secretario, Vice-rector y catedrático de mínimos menores, medianos, mayores y retórica, en dos ocasiones impartió la cátedra de filosofía y de teología moral, todo en propiedad en un espacio de siete años. AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp.5. Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 8.

³⁸⁸ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp.5.

del señor gobernador en turno. Para febrero de 1832 era presidente de la ilustre Junta Inspectora de educación pública de Morelia.³⁸⁹

Así mismo, en julio de 1831 apareció en la lista de los eclesiásticos que el Cabildo catedral de Valladolid consideraba con méritos suficientes para acceder a una prebenda dentro de dicho órgano. Sin embargo, a pesar de la propuesta no obtuvo beneficio alguno.³⁹⁰

Mariano Rivas nació en Valladolid en 1797. Pasó su adolescencia y primeros años de juventud en San Jerónimo Purenchécuaro, pueblo de la rivera de Pátzcuaro donde inició con sus estudios. Rivas solicitó el diaconado en 1820 y en 1822 hizo la petición del presbiterado, al momento que era vicerrector del Colegio de Infantes. Se recibió de abogado en el Tribunal de Michoacán en noviembre de 1827.³⁹¹

Así mismo, Rivas se desempeñó en 1829 y 1831 como Diputado en el Congreso michoacano y se incorporó como redactor del periódico *El Michoacano Libre*. Hizo importantes contribuciones en el rubro educativo en la sociedad michoacana, a través de la Junta Inspectora de Instrucción pública, de la cual, una vez fundada fue electo su primer presidente.³⁹² En ese mismo año en que fue electo por segunda ocasión Diputado local, Mariano Rivas apareció en la lista de los eclesiásticos que el Cabildo de Morelia había tomado en consideración para proveer las prebendas vacantes de esa iglesia, presentado como notario mayor del provisorato y sacristán mayor de Salamanca.³⁹³ Sin embargo, al término de la selección no fue favorecido con ninguna prebenda.

Para 1832, Rivas se presentó a concurso de curatos vacantes en calidad de Rector interino del Sagrario de la iglesia catedral.³⁹⁴ Ese mismo año, Rivas fue designado rector de Seminario Tridentino, al ser promovido del cargo Ángel Mariano Morales, en el cual se desempeñó hasta sus últimos días. Falleció el 30 de mayo de 1843.³⁹⁵

³⁸⁹ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp.5.

³⁹⁰ AHCCM, Legajo 4-4.2-170-30 1792-1832, f. 130.

³⁹¹ En Purenchécuaro, Mariano Rivas estudió latinidad, filosofía, derecho y ciencias eclesiásticas bajo el cuidado del presbítero Dr. Joaquín Ramírez de Arellano, su tío y cura de dicho pueblo. Roberto HEREDIA CORREA, *Mariano Rivas*, p. 15.

³⁹² *Ibíd.*, pp.16-17.

³⁹³ AHCCM, Legajo 4-4.2-170-30 1792-1832, ff. 130-130v.

³⁹⁴ AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Oposiciones, Caja 485, Exp.1.

³⁹⁵ Roberto HEREDIA CORREA, *Mariano Rivas*, pp. 17-18.

Manuel Tiburcio Orozco y Álvarez natural del pueblo de Huaniqueo, hijo legítimo de Miguel Gerónimo de Orozco y Mariana de Álvarez del Castillo. Estudió gramática en Guanajuato y Artes, Teología escolástica y Moral en el Seminario Tridentino y derecho en el Primitivo Colegio de San Nicolás. Fue profesor de las Cátedras de Gramática, Filosofía y ambos derechos al parecer en el propio Colegio. Concluidos los cursos de Teórica recibió en la Universidad de México el grado menor de artes y cánones, dejó la práctica del derecho con un abogado por cuestiones económicas y tomó la ampolleta de la Iglesia de Pénjamo. A los 18 años recibió las sagradas ordenes, en 1804 recibió licencia para confesar hombres, mujeres, enclaustradas y religiosas. Fue nombrado cura interino en el Pueblo de Nahuatzen, sirvió por meses en Pungarabato, Tzirostio, fue perseguido por los insurgentes, para 1821 se sustentaba como cura coadjutor de Peribán.³⁹⁶ En otra certificación se destacaba su carrera literaria del eclesiástico, quien en 1830 llevaba 26 años de presbítero en que había fungido de vicario y cura en varias partes, en ese momento era cura interino de la Villa de San Felipe y aspiraba al curato del Valle de Santiago, Pénjamo y Piedra Gorda.³⁹⁷

Atanasio Domínguez era hijo legítimo de Vicente Domínguez y Mariana Sáenz Manzo estudió gramática latina y filosofía en el Seminario Tridentino. Cerrado el Colegio por las circunstancias en 1811 interrumpió su carrera hasta 1818 en que los gobernantes de la mitra le confirieron una beca del Colegio de San Ramón agregado al de San Juan de Letrán de México, entró en la Pontificia universidad estudiando derecho canónico y civil, por su aprovechamiento fue nombrado para sustentar el primer acto de estatuto y recibió el primer premio otorgado anualmente por el mencionado Colegio de manos de Virrey, se bachilleró en artes. Por renuncia del catedrático de Filosofía fue nombrado por el señor rector para sustituir aquella cátedra al mismo tiempo que cursaba jurisprudencia en la Universidad, por cuatro meses explicó doctrinas de matemáticas contenidas en el tercer tomo del Padre Jaquier. En 1819 recibió las órdenes y fue nombrado sacerdote en noviembre de ese año, aprobado para confesar a hombres y mujeres de todo el Obispado sin límite de tiempo con la condición de que hasta cumplir los 30 años podía confesar a las mujeres, aunque

³⁹⁶ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 482, Exp. 33.

³⁹⁷ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 28.

no tenía la edad se le otorgó para confesar enclaustradas, predicó en México varios sermones y para 1821 servía propiedad la cátedra de Ministros y Menores del Seminario Conciliar de Valladolid.³⁹⁸

José María Cavadas nació en Zamora, hijo del Capitán Francisco Xavier Cavadas y Mariana Dávalos, fue bautizado el 25 de diciembre de 1795 bajo el nombre de José María Darío Nepomuceno Nicolás siendo sus padrinos Diego José Dávalos y doña Manuela de Jaso. Estudió filosofía en el Seminario Tridentino de Guadalajara y solicitó ordenarse en Michoacán a título de patrimonio.³⁹⁹

³⁹⁸ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 28.

³⁹⁹ La solicitud de Cavadas para ordenarse a título de patrimonio estuvo marcada por la movilización de todas las influencias familiares para que el aspirante lograra el cometido. Lo anterior sucedió a partir del mes de enero de 1815, cuando el Capitán Francisco Xavier Cavadas, padre de José María, otorgó poder especial a Pedro Gómez de Enteria, Administrador de Tabacos de Zamora, para que a su nombre y en calidad de padre de José María Cavadas y Dávalos, residente en esos momentos en la ciudad de Guadalajara, se presentara ante Obispo de la diócesis de Michoacán o al tribunal correspondiente y realizara las gestiones necesarias y obtener las licencias para lograr la ordenación a título de patrimonio. Es de destacar que el poder fue expedido ante José María Dávalos Villanueva y Molinar, Alcalde Ordinario más antiguo de Zamora por su Majestad, ejerciendo funciones de Justicia Mayor con aprobación superior y procediendo por receptoría a falta de todo escribano. Dados los apellidos, es probable que dicho alcalde fuera hermano de la madre de Cavadas. Pedro Gómez de Enteria, Administrador de la Real Renta de Tabacos de Zamora y a su vez cuñado del padre de Cavadas, expuso que el joven era hijo de personas de notoria honradez y distinción del vecindario de Zamora, cuyos estudios versaban en latinidad en el Colegio clerical, en donde dio publica muestra de su aprovechamiento y arreglada conducta. Hacia un año que José María Cavadas se había trasladado por orden de su padre a uno de los colegios de Guadalajara. Una vez en aquella institución, el postulante envió una carta a su padre manifestándole su resolución a abrazar el estado eclesiástico, por lo que le encomendó que realizara los trámites necesarios con la mayor agilidad posible para tonsurarse y poder recibir las cuatro menores órdenes. José María Cavadas determinado a seguir el estado eclesiástico y ordenarse a título de patrimonio, debió demostrar que contaba con la suficiente solvencia económica para su decente manutención y vestuario; por lo que declaró por su patrimonio la donación, de su tío el Br. D. José Ildefonso Martínez de Navarrete, de una casa ubicada en la traza de la Villa de Zamora y de un potrerito conocido por el Potro Pedro Alexandre en 1806, ambas valuadas en 4600 pesos, las cuales sólo podía gozarlas durante su vida porque después de su fallecimiento recayeran en el hermano que le siguiere, en realidad la donación fue a los sobrinos en general: José María, María de Jesús, Gabriel e Isidro Cavadas, pero por el momento quien disfrutaba de dicha herencia era el primero de ellos. A pesar de los esfuerzos hechos por su tío político, el administrador de tabacos, la petición no prosperó, para esos momentos Cavadas era estudiante de filosofía en el Colegio Tridentino de Guadalajara. Tras el intento fallido intercedió Lic. Pedro José Navarro Abogado de las Reales Audiencias de estos reinos e individuo del Ilustre y Real Colegio de abogados de México, quien a nombre y como consanguíneo de José María Cavadas y Dávalos, se dio a la tarea de interrogar al cura de Ixtlán Juan Pablo Robles, quien le notificó el buen porte y aprovechamiento José María, afirmando que el aspirante contaba con la preparación para recibir las órdenes que había solicitado. Por lo que el abogado solicitó al cura Robles realizara los trámites para lograr la ordenación de Cavadas. Dentro del proceso para ordenarse, Cavadas presentó la certificación de José Domingo Cumplido catedrático de filosofía moral y Vice Rector del Seminario Conciliar de Guadalajara, quien lo calificó como filósofo moralista y como colegial de dicho seminario había manifestado “tal juicio y tan buena conducta moral desde su ingreso”, a lo que se debían agregar los conocimientos no vulgares que había reunido con fuerza de talento y constante aplicación, por lo que era considerado como uno de los colegiales que hacían honor

Aunque no se tiene noticia del año y lugar de ordenación de Cavadas, se infiere que ésta se llevó a cabo en los años posteriores a la postulación, desconociendo las parroquias o establecimientos en los que se desempeñó hasta 1831, cuando manifestaba que era cura propietario del curato de la Piedad. Cavadas, al igual que Mariano Rivas, Lorenzo Aurióles, Manuel de la Torre Lloreda y José María Rayón, se encontraba en la lista que el Cabildo catedral había considerado como candidatos para proveer las prebendas vacantes en 1831. A pesar de las virtudes de Cavadas, fue necesario esperar algunos años para que una prebenda llegara a sus manos.⁴⁰⁰

En 1841, el eclesiástico ya ostentaba el título de doctor y realizaba labores administrativas dentro de la iglesia catedral, por lo que en ese periodo se concentró en fortalecer el decadente sistema de administración decimal y de préstamos de la misma. Su buen trabajo como párroco de La Piedad aunado a la falta de capitulares en óptimas condiciones para conducir el gobierno del obispado le valió a Cavadas para que el Obispo Cayetano Gómez de Portugal le otorgara la prebenda de racionero.⁴⁰¹

La obtención del beneficio no le impidió continuar en la administración decimal con excelente desempeño, lo cual le acarreó una serie de desavenencias con el Deán Martín Gil y Garcés a quién demandó por malos manejos de dinero, lo que le valió a José María una serie de confrontaciones con el Deán y el Cabildo catedral, pero finalmente pasado el tiempo los conflictos se suavizaron.⁴⁰² El prebendado José María Cavadas falleció en Zamora en 1844.⁴⁰³

José Antonio de la Peña fue alumno del seminario de Morelia, cursó Latinidad, Retórica, Filosofía y Sagrada Teología, escolástica y Moral, tomó las sagradas ordenes en 1827. Posteriormente, el cabildo lo nombró Vice-rector del referido Colegio, fue condecorado con la cátedra primera de Sagrada Teología y obtuvo por oposición la de Filosofía. Poseía licencia para predicar y confesar

a dicho Colegio, en él que además se había granjeado la estimación de sus superiores y gozaba en ese momento del distintivo de Presidente de Academias de Filosofía del Seminario Conciliar de Guadalajara, todo ello en febrero de 1817. AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, Caja 578, Exp. 87.

⁴⁰⁰ AHCCM, Legajo 4-4.2-170-30 1792-1832, f. 130-130v.

⁴⁰¹ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero gobierno en Michoacán*, pp. 142-143.

⁴⁰² *Ibíd.*, pp. 143-144.

⁴⁰³ José BRAVO UGARTE, *Historia sucinta de Michoacán*, Morelia, Morevallado editores, 1993, p. 441.

hasta religiosas de la jurisdicción del ordinario en todo el obispado, para habilitar incestuosos, revalidar matrimonios *in foro* con *scientiae* y absolver del pecado de la herejía mixta, lo cual, hasta ese momento había ejercido según la exigencia de las circunstancias en cuanto se lo permitían sus mencionados empleos. También había predicado sermones, tres de ellos en la Catedral, la última nota que se tiene del eclesiástico era su nombramiento de sacristán mayor interino de la parroquia de Jacona.⁴⁰⁴

Rafael María de Guedea originario de Valladolid, hijo de legítimo matrimonio entre don Rafael Guedea y de doña María Gertrudis Ruiz de Chávez difunta. Sus padrinos de bautismo fueron José Solano y doña María Isabel Arias Maldonado. Estudió en el Seminario Tridentino de Valladolid, una vez concluidos sus estudios solicitó ordenarse a título de capellanía.⁴⁰⁵

José Manuel de Leyva originario del pueblo de Churumuco y vecino de la ciudad de Pátzcuaro, fue bautizado 22 de julio de 1794, hijo de legítimo matrimonio compuesto por don Juan Basilio Leyva y doña María Antonia Pérez. Leyva estudió en el Pontificio y Real Colegio Seminario del Príncipe de los Apóstoles de Señor San Pedro en la Ciudad de Valladolid de Michoacán, en cuyos archivos obraba la información que corroboraba su legitimidad y limpieza de sangre, por cuya virtud le fue admitido obtener una beca de dicho Seminario.

⁴⁰⁴ AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 482, Exp. 32

⁴⁰⁵ Rafael Guedea estudio latinidad, retórica, filosofía y la sagrada teología, siendo su maestro Thomas Vargas, Fue declarado capellán más de diez años de la capellanía de cuatro milpas que fundó el Sr. Don Francisco Guedea su abuelo y de la cual no presentó el título, pues su padre no había estado en proporción de pagar los derechos de Juzgado, pero era notorio y todos sabían que dicha capellanía se encontraba en posesión de su familia. Por lo que bajo dichas circunstancias solicitó tomar las ordenes menores y mayor de epístola. Para lo anterior, el aspirante presentó las certificaciones del R.P.F. José Ignacio Rodríguez Predicador jubilado del Convento de San Diego y los tíos de Guedea, al Br. Ignacio Guedea Cura de Pungarabato y al cura de Huango Manuel Ruiz de Chávez para corroborar su limpieza de sangre. Rafael Guedea solicitó la primera clerical tonsura hasta el Sacro diaconado a título de capellán. Para ello presentó la certificación del Dr. Tomas Vargas cura interino, Juez eclesiástico de Ucareo y Tzirtzicuaro, antes de ello, catedrático propio de latinidad, retórica, filosofía y de prima de sagrada teología en el Seminario de Valladolid, quien afirmó que Guedea había cursado todas sus cátedras y que durante su convivencia con el *pretendienteus* costumbres habían sido arregladas, frecuentando los santos sacramentos, por lo que lo consideraba un joven digno de aprecio, ello en agosto de 1804. De la misma manera Guedea presentó a su vez la certificación del Lic. Miguel Ignacio Menéndez Rico catedrático propietario de Matemáticas y filosofía del Pontificio y Real Colegio Seminario de Valladolid, en la cual aseveraba que durante su estancia en dicha institución, el aspirante había adquirido competentes luces en los ramos de aritmética y algebra, cuyo talento y aplicación prometían un buen futuro en aquel joven. En agosto de 1814, Guedea realizó ejercicios espirituales en el convento en calidad de ordenante junto con el Diacono Lorenzo Auriolos y los subdiáconos Francisco Sarrio, Apolinar Sánchez y otro ordenante de nombre Francisco Terán. AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, Caja 570, Exp. 92. Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp.8.

En diciembre de 1817, el joven Leyva presentó la documentación necesaria para ser admitido desde la prima Clerical tonsura hasta el Sacro diaconado y Diaconado a título de Capellanía, pues en ese momento el postulante consideraba que cumplía con los requisitos que demandaba el Santo Concilio de Trento, excepto el sacramento de la confirmación que no había recibido.⁴⁰⁶

Se vuelve a encontrar información sobre Manuel Leyva en 1827, cuando se presentó como miembro de la Junta provincial junto con José Antonio Ortiz, Agustín García y Juan Nepomuceno Sáenz como representantes por el partido de Pátzcuaro para elegir al Segundo Congreso constitucional de Michoacán.⁴⁰⁷

⁴⁰⁶ En diciembre de 1818, Francisco Calderón Alcalde de Barrio de Valladolid, español casado, dijo conocer a Manuel Leyva hacía como seis años, en cuyo tiempo le constaba su inclinación al estado eclesiástico, que jamás había sabido ni oído decir que asistiera a casa de mujeres públicas, de juego, ni otras semejantes de que le difamaran. Para Calderón la conducta del solicitante en lo público y lo privado era irrepreensible y cristiana, agregando por último que Leyva no tenía impedimento conocido para que no se le otorgaran las sagradas órdenes que pretendía, ni había incurrido en irregularidad alguna de derecho. Además del testimonio de Calderón, Leyva presentó el del español Basilio López de Paramo. La capellanía que pretendía servir el aspirante, fue fundada por el Cr. Don Sebastián de Ibarrola, la cual ejecutó como su albacea D. Juan Basilio Díaz de Leyva con cuatro mil pesos de principal, a cargo de decir una misa los domingos y días festivos de los cuatro primeros meses del año. Por auto de agosto de 1800, expedido por el Licenciado Manuel Abad Queipo, en calidad de Juez Testamentos capellanías y obras pías del obispado de Valladolid de Michoacán, se declaró por capellán propietario el finado a Don José Manuel Díaz de Leyva, al parecer familiar de Manuel Leyva.

AHCM, Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, Caja 580, Exp. 98.

⁴⁰⁷ AHHCEM, Varios, Legislatura I, Caja 2, Exp.8, f. 27-29v.

Cuadro No. 8

Los eclesiásticos 1824-1835 en el legislativo michoacano.

No.	Nombre	Nacimiento	Defunción	Lugar de nacimiento	Edad como Diputado	Formación y actividad política
1	Martín García de Carrasquedo	1771	1851	Valladolid	58	Seminario Tridentino Prebendado
2	Rafael Guedea	1777		Valladolid	58	Seminario Tridentino
3	Juan José Pastor Morales	1769*	1838	Hacienda de Tecacho Feligresía Huaniqueo	55	Colegio Seminario Universidad de México Catedrático del Colegio de San Juan de Letrán. Diputado y Consejero de Gobierno.
4	Manuel de la Torre Lloreda	1776	1836	Pátzcuaro	48	Colegio de San Nicolás Seminario Tridentino Catedrático de artes de San Nicolás Diputado Hábil orador
5	Felipe Carvajal	1784		Santa Clara del Cobre	45	Colegio Santa Catarina Martir Paztcuaro
6	José María Rayón	1779	1840	Tlalpujahuá	45	Seminario Tridentino Colegio de San Ildefonso Universidad de México

						Diputado Consejero de Gobierno Prebendado en 1832
7	Pablo Peguero	1781	1844	Maravatío Hacienda de Casa Blanca	44	San Nicolás Obispo Diputado Vocal de la Junta Departamental
8	Tomás Arriaga	1786		Pátzcuaro	43	Colegio de Infantes Colegio de San Nicolás Obispo
9	Lorenzo Auriolos	1790		Tecuinapa Jurisdicción de Cutzamala	40	Colegio de Infantes Seminario Tridentino de Valladolid. Diputado del Congreso del Estado de México Diputado por el Congreso de Michoacán Vicerector y catedrático del Seminario Tridentino Presidente de la Junta inspectora de educación pública.
10	Juan Nepomuceno Sierra	1789		Chilchota	38	Seminario Tridentino Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo estudio derecho.
11	Manuel Leyva	1794	1844	Churumuco	35	Seminario Tridentino
12	José María Cavadas	1795	1844	Zamora	35	Seminario Tridentino de Guadalajara Solicitó su ordenación en el Obispado de Michoacán Prebendado

13	Mariano Rivas	1797	1843	Valladolid	33	Redactor en el periódico El Michoacano Libre Junta Inspectora de Instrucción pública Vicerector del Colegio de Infantes 1832 rector de Seminario Tridentino ese mismo año
14	Joaquín Ladrón de Guevara	1802		Valladolid	27	Colegio Clerical Convento de San Agustín Convento de Nuestra Señora de la Merced Seminario Tridentino Universidad de México. Catedrático de filosofía en el Seminario Tridentino. Vocal de la Junta de Instrucción Pública de Michoacán por seis años. Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
15	Luciano Farías			Valle de Cotija		Colegio Seminario San Nicolás Obispo Universidad de México
16	José/ Manuel Tiburcio Orozco		1849			
17	Ignacio Villavicencio			Vecino de los Reyes		
18	Ignacio Ocampo					
19	Luis Soria					

20	Anastasio Domínguez					
21	José Antonio de la Peña					Prebendado.

Cuadro de elaboración propia a partir de la información de la reconstrucción biográfica.

Partiendo de la información que contiene el cuadro anterior, se observa, aun con el margen de error que pueda representar el que no se tengan los datos de todos los eclesiásticos, que la edad de elección como diputados oscilaba entre los 35 y 50 años. Dentro de este rango se encontraban Lloreda con 48 años, Rayón y Carvajal fueron electos cuando tenían 45 años, Peguero contaba 44 en la primera elección, 46 en la segunda y en la tercera tenía 50, Arriaga de 43 años de edad, Auriolles con 40 y 41 respectivamente, Sierra con 38 y Leyva con 35 y 37 en la segunda designación y Cavadas también con 35 años. De los que pasaban de los 50 años se detectan tres: Carrasquedo y Guedea con 58 años y Pastor Morales con 55, mientras que con menos de 35 años solo fueron electos Rivas con 33 y 34 al tiempo de la segunda elección y Ladrón de Guevara que tenía 27 años en la primera elección y 31 en la segunda.

Sobre el lugar de nacimiento, de los 15 que se tiene noticia solo seis habían nacido en las dos ciudades más importantes de la provincia, Carrasquedo, Guedea, Rivas y Ladrón de Guevara eran oriundos de la ciudad de Valladolid, mientras que Arriaga y Lloreda vieron la luz en la ciudad de Pátzcuaro. Cavadas nació en la villa de Zamora. Se infiere que Auriolles era originario de la provincia de México, ya que también se desempeñó como diputado en aquel estado y por tanto el único eclesiástico que no era originario de Michoacán.

Respecto a su formación, la gran mayoría había estudiado en las dos instituciones más importantes de la sede del Obispado: el Colegio de San Nicolás⁴⁰⁸ en el que solían cursar gramática, retórica, filosofía y teología y el Seminario Tridentino⁴⁰⁹ que ofertaba los mismos cursos y que después de su reapertura en 1819 instauró las cátedras de derecho civil y canónico.⁴¹⁰ Fueron

⁴⁰⁸ Para más información sobre la institución debe consultarse a Ricardo LEÓN ALANÍS, *El Colegio de San Nicolás de Valladolid: una residencia de estudiantes*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas, 2001. *Luces y sombras en el Colegio de San Nicolás: reformas, ilustración y secularización 1712-1848*, Morelia, Morevalladolid-Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita-Archivo Histórico de la UMNSH, 2014. Otra fuente de información sobre el Colegio de San Nicolás y el Seminario Tridentino es Carlos HERREJÓN PEREDO, "Colegios e intelectuales en el obispado de Michoacán, 1770-1821" en José Antonio Serrano Ortega (Coord.) *La Guerra de Independencia en el Obispado de Michoacán*, El Colegio de Michoacán- Secretaría de Cultura de Michoacán, 2010.

⁴⁰⁹ Luis Daniel RUBIO MORALES, Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, Ramón Alonso, *Luz de Ayer, Luz de Hoy*.

⁴¹⁰ Carlos HERREJÓN PEREDO, "Colegios e intelectuales en el obispado de Michoacán, 1770-1821", pp. 57, 67.

pocos los eclesiásticos que se educaron fuera de estos espacios, entre las excepciones se encuentra Carvajal que estudió en el Colegio Santa Catarina mártir en Pátzcuaro y Cavadas que se había instruido en el Seminario Tridentino de Guadalajara. Algunos eclesiásticos comenzaron sus estudios en Valladolid y después se trasladaron a la capital de virreinato para tomar cursos de derecho en la Universidad de México porque como se ha dicho, antes de 1819 esta cátedra no se ofertaba en la ciudad de Valladolid, entre ellos se encuentran: Pastor Morales, Ladrón de Guevara, Farías y Rayón quien además fue alumno en San Ildefonso.

Otro elemento que se debe señalar es la aptitud de los eclesiásticos en el desempeño de su profesión y lo que de manera parcial expresa en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 9

Lista de eclesiásticos presentados al concurso de beneficios vacantes convocado por Manuel de la Bárcena Arcediano de la Catedral y gobernador del Obispado de Michoacán en 1820.

No.	Nombre	Congreso	Evaluación
1	Juan José Pastor Morales	Constituyente	Superlativo Supremo
2	Manuel de la Torre Lloreda	Constituyente	Superlativo Supremo
3	José María Rayón	Constituyente	Superlativo Medio
4	Tomas Arriaga	3º Primer año	Superlativo Supremo
5	Luis Soria	3º Primer año	Comparativo Supremo
6	Lorenzo Auriolles	3º Segundo año y 4º	Superlativo Supremo
7	Manuel Tiburcio Orozco	3º Segundo año	Superlativo Supremo
8	Mariano Rivas	3º Segundo año y 4º	Comparativo Supremo
9	José María Cavadas	3º Segundo año	Superlativo Ínfimo
10	Manuel de Leyva	4º y 6º	Superlativo Supremo
11	Rafael Guedea	6º	Superlativo Medio

Cuadro de elaboración propia. Fuente: AHCM, Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, 1820-1821, Caja 481, Exp. 28.

El presente cuadro muestra las calificaciones de los eclesiásticos diputados que se presentaron para ser examinados en el concurso de beneficios vacantes en 1820. La información vertida permite ver que 6 de los 11 eclesiásticos que aquí interesan obtuvieron la nota más alta, es decir, Superlativo Supremo, solo 2 Superlativo Medio, 1 Superlativo Ínfimo y 2 Comparativo

Supremo, lo que permite inferir que en el ejercicio de su destino y conocimiento sobre el mismo buena parte de los eclesiásticos tenían un perfil bastante destacado. Lo que a su vez es indicativo de que al Congreso no llegaron eclesiásticos de pocos talentos.

Además del punto anterior, se pueden distinguir otras variables sobre este grupo de hombres, por ejemplo, de todos los electos, solo Carrasquedo se desempeñaba como prebendado del Cabildo Catedralicio. Rayón, Cavadas y de la Peña obtuvieron una prebenda tiempo después. Aquí cabe reflexionar por qué no hubo más miembros de la mesa capitular en el Congreso michoacano, en el caso de Puebla la legislatura constituyente contó con un notable número de eclesiásticos. La constituyente michoacana no tuvo ninguno a pesar de que Valladolid era la sede del gobierno episcopal y de que la Diputación provincial de Valladolid de Michoacán había integrado al Dr. José Díaz Ortega -maestre escuelas del Cabildo Catedral y gobernador de la Mitra-, al Dr. Juan José Michelena -Racionero- y en calidad de suplente al Lic. Francisco de Borja Romero y Santa María -Prebendado-.⁴¹¹

La Junta electoral provincial decidió dejar de lado a la alta jerarquía eclesiástica, Rayón, el primer electo era hermano de Ignacio López Rayón, Pastor Morales a pesar de radicar por mucho tiempo en la ciudad de México, era un hombre de muchas luces y con una gran solvencia económica que le permitió no depender de su estipendio como eclesiástico, mientras que Lloreda se encontraba más vinculado con la Iglesia, el magnífico orador fue electo primer suplente. Habría que explorar un par de ideas para entender la ausencia de los prebendados en el constituyente michoacano, la primera el reducido número de prebendados con que funcionaba el Cabildo catedral o bien que la Junta provincial no comulgaba del todo con los perfiles de la alta jerarquía eclesiástica y por eso no los votó, lo anterior sólo son algunas hipótesis que quedarán para explorar a futuro.

Después de cerrar su participación en el Congreso, varios eclesiásticos siguieron insertándose en instituciones públicas, Rayón y Pastor Morales también se desempeñaron como consejeros de gobierno. Rivas y Auriolos fueron miembros de la Junta inspectora de Instrucción Pública, Peguero fue nombrado

⁴¹¹ JUÁREZ NIETO, Carlos, "La diputación provincial de Valladolid de Michoacán 1822-1824", p. 136.

vocal de la Junta Departamental dentro del sistema centralista y Ladrón de Guevara fue vocal de la Junta de Instrucción pública y por breve tiempo Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Entonces, el desempeño como diputados constituyó un elemento meritorio que no sólo les sirvió a los eclesiásticos para acceder a los puestos parroquiales y al Cabildo catedralicio, sino que en algunos casos les permitió mostrar sus talentos para colaborar en las nuevas instituciones del gobierno y desarrollar una carrera política a la par de la eclesiástica.

Una vez expuesta la vida eclesiástica y pública de estos diputados, es preciso presentar su desempeño en las diferentes legislaturas a las que fueron electos, analizando sus intervenciones más notables en el proceso de creación de las nuevas leyes locales y en temas vinculados a la Iglesia, con el objeto de ver que tan comprometidas se encontraban sus intervenciones.

CAPÍTULO IV

EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE MICHOACANO, 1824-1825

4.1. El papel de los eclesiásticos: José María Rayón, Juan José Pastor Morales y Manuel de la Torre Lloreda como legisladores

Con la expedición del *Acta Constitutiva de la Federación Mexicana*⁴¹² el 31 de enero de 1824, se inició el proceso formal de composición de un nuevo sistema de gobierno. Ese año el Congreso constituyente federal debió sancionar la Constitución de la nueva nación, mientras que los estados miembros de la federación convocaron a sus respectivos Congresos para que crearan las máximas leyes de las entidades federativas. La primera Constitución mexicana vio la luz el 4 de octubre de 1824, en la que se mantuvo el sistema electoral indirecto gaditano, la elección del ejecutivo federal quedó a cargo de las legislaturas estatales, las cuales obtuvieron una amplia potestad para organizar su gobierno interno. Por su parte el gobierno general asumió la deuda pública, la defensa hacia el exterior del país y el orden interno del mismo, retuvo los ingresos de las aduanas y creó la contribución del contingente que debían pagar los estados para el sustento de los gastos de la federación.⁴¹³

María del Carmen Salinas refiere el reconocimiento que la Constitución de 1824 dio a 19 estados y la supremacía que otorgó al poder legislativo. A su vez, el documento incluía, de forma muy dispersa, los derechos de los individuos y aunque marcaba la igualdad ante la ley, ésta quedaba restringida por los fueros del ejército y la Iglesia. La Constitución tenía una fuerte influencia gaditana, adaptada a un republicanismo federal, cuyo referente era el sistema

⁴¹² En su debate se advierten tres posicionamientos, el primero identificado con el modelo centralista porque defendía la idea de una soberanía única e indivisible. La segunda confederalista que argumentaba que la soberanía era múltiple y parcial que defendía fuertes atribuciones soberanas para las provincias y la federalista que creía que la soberanía era facultad compartida entre los estados y la nación. Fausta GANTÚS, Florencia GUTIÉRREZ, Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ, María del Carmen LEÓN, *La Constitución de 1824 consolidación de un pacto Mínimo*, México, El Colegio de México, 2008, pp. 136-137.

⁴¹³ Josefina Zoraida VÁZQUEZ, "Introducción. Contexto nacional del primer federalismo mexicano", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, El Colegio de México, 2012, p. 18.

norteamericano, interpretado como *antifederalismo jeffersoniano* porque remarcaba la soberanía de los estados.⁴¹⁴

Ese año también se eligieron los titulares del legislativo y el ejecutivo federal, para este último cargo fue designado Guadalupe Victoria, su gobierno ha pasado a la historia como el más estable de toda la República Federal, el cual se ciñó al mandato constitucional y le tocó sobrellevar los enfrentamientos de grupos políticos con filiación a las logias masónicas yorkinas y escocesas. En el ámbito económico, contrajo un par de préstamos ingleses para sacar a flote las finanzas públicas; sin embargo, a partir de 1827 la bancarrota sería insuperable y la inestabilidad del sistema comenzaría a manifestarse.⁴¹⁵

El primer Congreso Constituyente michoacano se instaló en la ciudad de Valladolid, capital del estado. El órgano legislativo abrió sesiones el 6 de abril de 1824 y las cerró el 6 de agosto de 1825, fue responsable no sólo de elaborar la primera Constitución del estado, sino de articular las nuevas instituciones de gobierno y legislar sobre asuntos necesarios para lograr el funcionamiento del estado, como lo fue el tema de ayuntamientos, la organización de la Hacienda pública, la propiedad indígena y la relación entre las nuevas autoridades civiles con las del obispado de Michoacán, por mencionar algunos ejemplos.⁴¹⁶

Por otro lado, dentro del Congreso Constituyente michoacano estarán participando activamente los eclesiásticos José María Rayón, Juan José Pastor Morales y Manuel de la Torre Lloreda.

José María Rayón fue miembro de la Junta electoral provincial y previo al proceso electoral conformó, junto al Lic. José María Jiménez y Manuel Iriarte, la comisión encargada de revisar las certificaciones emitidas por el secretario y escrutadores sobre las elecciones de partido; y con ello dar cumplimiento al artículo 60 de la convocatoria a elecciones de 17 de junio de 1823.⁴¹⁷ Rayón fue

⁴¹⁴ María del Carmen SALINAS SANDOVAL, *El federalismo en el Estado de México, 1824-1835*, México, El Colegio Mexiquense, 2014, pp. 34-37. Josefina Zoraida VÁZQUEZ, "Introducción", pp. 18-19.

⁴¹⁵ María del Carmen SALINAS SANDOVAL, *El federalismo*, pp. 38, 42-43.

⁴¹⁶ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "Michoacán: de provincia", pp. 307-309.

⁴¹⁷ *Actas y decretos*, Tomo I, p. 2. El artículo 60 de la convocatoria del 17 de junio de 1823 establece lo siguiente: "En seguida se leerá este decreto y las credenciales, igualmente que las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de partido, a fin de que, examinadas por el secretario y escrutadores, informe al día siguiente, si todo está arreglado, y las certificaciones del secretario y escrutadores serán vistas por tres individuos de la junta, quienes informarán en el mismo día." Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, José María, *Legislación mexicana*, Tomo I, p. 654

el primer diputado propietario electo por la Junta provincial, reuniendo treinta y dos votos de treinta y siete, siendo el segundo de los eclesiásticos en recibir mayor cantidad. Fue el primer presidente del Congreso, oficio para el que fue electo nuevamente en el mes de febrero de 1825.⁴¹⁸ La participación de Rayón se puede circunscribir a temas relacionados con los diezmos, los ayuntamientos, minería, milicia, el debate constitucional y su actuación como primer presidente del Congreso Constituyente. De ésta última se destaca lo siguiente: nombramiento del ejecutivo local, asignación de comisiones y la reglamentación de las autoridades a la iglesia Catedral que trajo consigo una gran discusión durante buena parte de las sesiones.

Al presidir la Cámara, los primeros días desde la instalación del constituyente fueron de mucha actividad para el eclesiástico, comenzando por el oficio que solicitó que se enviara al gobierno federal notificándole la instalación de la legislatura, lo mismo que a las autoridades, corporaciones y pueblos del estado. Dos días después, en sesión pública presidió la elección de los representantes del poder ejecutivo local, noticia que anunció al pueblo, y fue recibida con aplauso. Pasados dos días, el teniente de gobernador tomaba posesión del cargo ante su persona.⁴¹⁹ Asimismo, Rayón debió realizar el nombramiento de las comisiones de acuerdo con el reglamento adoptado, él quedó integrado en la de Policía, gobierno interior del Congreso y la de peticiones.⁴²⁰

Juan José Pastor Morales fue electo cuarto diputado propietario con diecinueve votos de treinta y siete, siendo de los tres eclesiásticos el que obtuvo la menor cantidad de sufragios por parte de la Junta Provincial. Una vez en el cargo fue nombrado presidente del Congreso en dos ocasiones, la primera en agosto de 1824 y la segunda en abril de 1825, figuró como vicepresidente en marzo de este último año, asimismo, desempeñó la función de secretario en numerosas ocasiones, en calidad de más antiguo en enero y julio de 1825, secretario recién electo en diciembre de 1824 y junio de 1825. Finalmente,

⁴¹⁸ Otros oficios para los que fue electo: en septiembre de 1824 y enero de 1825 fungió como vicepresidente y en dos ocasiones fue nombrado secretario, ello en octubre de 1824 y como más antiguo en noviembre de ese mismo año *Actas y decretos*, Tomo I, pp. 3, 256, 314,376; *Actas y decretos*, Tomo II, pp. 15, 92.

⁴¹⁹ *Actas y decretos*, Tomo I, pp. 3-10.

⁴²⁰ *Ibíd.*, p. 9.

atendiendo al artículo 41 de la Constitución del estado, Pastor Morales fue nombrado presidente de la diputación permanente y de la cual también formaron parte como secretario Manuel González y los vocales José Salgado, Pedro Villaseñor y Manuel Menéndez.⁴²¹ De las intervenciones de Pastor Morales destacan la propuesta de Antonio de Castro para Gobernador, solemnizar el día de la instalación del Congreso local, la adquisición de una segunda imprenta, bienes de comunidad, ayuntamientos, temas tocantes a la impartición de justicia, asuntos eclesiásticos y el debate dentro del marco de la Constitución. Un evento importante para Pastor Morales fue el traslado del Congreso a su palacio -edificio de la extinguida Compañía de Jesús- en calidad de presidente del mismo. Debido a la importancia del acontecimiento, el eclesiástico pronunció un discurso acorde a las circunstancias aunado a otro del diputado Lloreda.⁴²²

Manuel de la Torre Lloreda fue electo primer diputado suplente con treinta y seis de treinta y siete votos. El mismo día de la elección se le otorgó el título de propietario, presentándose a tomar el cargo el 7 de abril, un día después de la instalación del Congreso constituyente. Durante el periodo legislativo se desempeñó como presidente en junio de 1824, en mayo de ese mismo año fue vicepresidente, secretario en noviembre y secretario más antiguo en diciembre de ese mismo año. Con la integración de las comisiones ordinarias del Congreso, Lloreda fue asignado para la de Relaciones de Federación, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública y Redacción de Estilo.⁴²³ Lloreda fue muy activo como legislador, sus intervenciones se encuentran relacionadas con aspectos de bienes de comunidad, pago de diezmo, el patronato eclesiástico, la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, facultades de prefectos, rogaciones públicas, atribuciones del Tribunal de Justicia y la esclavitud, por mencionar algunos.⁴²⁴

La legislatura constituyente fue muy activa, lo que marca la pauta para que los tres eclesiásticos tuvieran actuaciones notables, aunque la mayor

⁴²¹ El artículo 41 establece que: "Antes de concluir el Congreso las sesiones ordinarias, nombrará una Diputación de cinco individuos de su seno. Esta que se denominará Diputación permanente, subsistirá todo el tiempo del receso de aquél, con las atribuciones que le designa esta Constitución." *Actas y decretos*, Tomo II, p. 479.

⁴²² *Ibíd.*, p. 234

⁴²³ *Ibíd.*, p. 9

⁴²⁴ Gerardo SÁNCHEZ DÍAZ, "Manuel de la Torre Lloreda: Entre la Ilustración de la República", pp. 110-112.

visibilidad fue para Pastor Morales y Lloreda. No obstante, se percibe el conflicto en el que se encontraban los tres diputados, determinado por la naturaleza de su profesión y el empleo temporal de legisladores. Ciertamente es que no eran los únicos que pertenecían a una institución poderosa y que tenían un trato especial ante la ley, como era el caso de los militares y a su vez legisladores Juan Nepomuceno Foncerrada y Zoravilla y Mariano Quevedo. Pero la Iglesia, por circunstancias propias de la época, será asediada por las nuevas autoridades y los eclesiásticos no permanecerán inmóviles ante los debates con los cuales se convertirán en jueces y parte. Por otro lado, se observa una ligera tensión entre sus obligaciones como párrocos y su labor como legisladores. Uno de los pasajes que ayudan a detectar esta última situación se circunscribe a las licencias concedidas a estos diputados para resolver asuntos de sus curatos.

El 4 de diciembre de 1824, Pastor Morales solicitó una licencia por doce días para “arreglar en su parroquia varios asuntos que exigen su pronto remedio”.⁴²⁵ El permiso le fue otorgado, siendo el único que el legislador solicitó durante sus funciones. Por su parte, el diputado Lloreda, en un par de ocasiones, solicitó permiso para atender algunas necesidades que tenía el curato bajo su responsabilidad. Pero fue en especial, una cercana a la celebración de Semana Santa, la que refleja el doble compromiso que ellos tenían y que a fin de cuentas se vinculaba con el servicio a la población.

A mediados del mes de marzo de 1825, Lloreda se encontraba de licencia restableciendo su salud y solicitó una prórroga para ir a Pátzcuaro argumentando que su estado físico había empeorado, aunado a que la celebración de Cuaresma estaba cercana y quería cumplir con sus deberes de párroco.⁴²⁶ El dictamen de la petición estableció que se le concediera la prórroga sin goce de dietas y se le pidió que programara su regreso antes de que la Pascua terminara. A esta resolución, el eclesiástico Pastor Morales argumentó estar de acuerdo con ella, agregando que “consultado a su propio decoro, que no tiene peso alguno, la razón del señor Lloreda deducida de la obligación de asistir a sus feligreses, porque es preferente a todo el empleo de Diputado.”⁴²⁷

⁴²⁵ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo I, p. 447.

⁴²⁶ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, tomo II, p. 187

⁴²⁷ *Ibíd.*, p. 191

Pastor Morales consideraba que la actitud de su compañero podía afectarle y resultar inculpada, porque él se encontraba en el pleno del Congreso, y aquel asistía en su feligresía, a pesar de que en ella había muchos eclesiásticos “de pie fijo” que cubrían su ausencia en el curato. El diputado consideraba que los eclesiásticos en esas situaciones debían quedar en cierto modo suspendidos de sus obligaciones de párrocos, con mayor razón si el cargo se desempeñaba en calidad de interino; sin embargo, poner remedio a esa situación correspondía solamente a la Mitra.⁴²⁸ Morales reconocía lo laudable de la actitud de Lloreda, quien a pesar de la enfermedad se sentía capaz de atender sus obligaciones parroquiales en una fecha tan demandante; sin embargo, le reprochaba el que a pesar de su falta de salud cumpliera con las funciones propias de su profesión y no mostrara la misma disposición para hacerlo con las de diputado. Para Morales, Lloreda había dejado de manifiesto el deseo de permanecer toda la Cuaresma en su curato desde la primera petición, entonces Pastor Morales veía en la enfermedad sólo una excusa para cumplir con sus obligaciones parroquiales. Por ello, solicitaba que se concediera la licencia, pero sin goce de dieta.⁴²⁹

En apoyo a Lloreda, el eclesiástico Rayón argumentó que el diputado no se encontraba impedido para gozar de la licencia y su respectiva dieta, pues su estado de salud y la forzosa asistencia a su parroquia se justificaba por la notoria falta de ministros. Jiménez y Huarte consideraban que la enfermedad no impedía a Lloreda el asistir al Congreso toda vez que, sí le permitía el ejercicio parroquial y que en última instancia para su enfermedad el clima de Valladolid era más benéfico. Finalmente, el dictamen de la comisión fue aprobado.⁴³⁰ En el argumento dado por Pastor Morales queda de manifiesto que para él la obligación más demandante y con la que tenía mayor compromiso en ese momento era con su labor de diputado. Mientras que Lloreda se negaba a dejar a su feligresía sola en la fiesta más importante de la Iglesia Católica y, por tanto, en esa fecha primaba más su calidad de párroco que de legislador. Por su parte, Rayón al apoyar la postura de Lloreda, sólo ratifica las tensiones individuales a

⁴²⁸ *Idem.*

⁴²⁹ *Ibíd.*, p. 192

⁴³⁰ *Idem.*

las que se enfrentaron estos hombres por el sólo hecho de manejarse entre el poder temporal y el divino.

Otro momento en el que su profesión les podía llevar a la parcialidad, de acuerdo con la opinión de un compañero legislador, se dio con una petición de Juan de Dios Ruiz de Chávez, quien solicitaba el indulto por haber protegido el robo de los caudales de la administración de tabacos de Pátzcuaro, exponiendo los motivos que lo llevaron a hacerlo. La petición no había llegado por conducto del gobierno como correspondía, sino a través del presidente del Congreso, quien después de algunos comentarios determinó pasara a la comisión de Justicia. González hizo la observación para que se creara otra pues Morales y Rayón estaban a cargo de la citada comisión y podían verse embarazados por su carácter para dictaminar libremente en la materia. Villaseñor mencionó que la instancia de Chávez se reducía a pedir una dispensa de ley y de acuerdo con todos los publicistas era indispensable el informe de gobierno para que la comisión abriera dictamen. Por lo que se acordó que la instancia pasara al gobierno.⁴³¹

En este caso no queda claro si Juan de Dios Ruiz de Chávez era eclesiástico, pero existe la posibilidad de que tuviera un hermano que sí y aunque no lo fuera, por la intervención de González se infiere que su carácter de eclesiásticos les impedía dictaminar libremente. Entonces, el asunto de Ruiz de Chávez debió tener vínculos de alguna índole con la Iglesia; por otro lado, se destaca el cuidado que los legisladores tuvieron en buscar la imparcialidad y libertad de legislar como se ve a través de la intervención de González, lo curioso es que en temas vinculados a la Iglesia no se negó a los eclesiásticos su intervención.

Otras discusiones que permiten ver la idea que los diputados tenían de sí mismos, son las que versaron sobre la duración de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias para las siguientes legislaturas y lo referente a las dietas. Sobre el periodo de sesiones ordinarias para las siguientes legislaturas, se proponía que la primera trabajara ocho meses del año, tres veces por semana. Huarte apoyaba la propuesta argumentando el desconocimiento y pocas luces que tenía el común de los ciudadanos sobre el recién instalado

⁴³¹ *Ibíd.*, pp. 194-195.

sistema de gobierno, lo que retardaría el despacho de los asuntos y los dejaría pendientes a otra legislatura. Lloreda estuvo en contra de lo expuesto, argumentó que la mayoría de los estados habían determinado periodos de sesiones más cortas, por lo que solicitaba dejar el periodo de sesiones en seis meses.⁴³²

Villaseñor apoyó a Huarte y Pastor Morales, presidente del Congreso, a Lloreda quien finalmente argumentó que las leyes debían atender el bien general de los pueblos y el particular de los ciudadanos por lo que debía de considerarse el empleo de diputado como una carga que traía constantes atrasos a los intereses de los diputados y abandono de sus familias, por ello veía justo recortar el tiempo de sesiones. González y Villaseñor eran de la idea que solo las legislaturas de México y Jalisco podían concluir en ocho meses debido a su ilustración. Finalmente, la votación quedó empatada y el tema se reservó para otra sesión.⁴³³

El segundo caso se suscitó cuando se puso a consideración que los diputados no recibieran dieta en tiempo de receso a excepción de la diputación permanente, cuyos miembros debían gozarla todo el año. Rayón fue el primero en pronunciarse a favor de la propuesta, tomando como base el incremento de funcionarios públicos a incorporarse junto con la nueva legislatura como lo era el Consejo de gobierno y los prefectos, entre otros, por lo que el eclesiástico advertía la escasez del erario público y consideró que de nada serviría asignar una cantidad que no podría satisfacerse.⁴³⁴

Villaseñor no estaba de acuerdo con la propuesta, su argumento era que, en el receso, los diputados siempre debían permanecer en la capital y tener una completa dedicación a todas aquellas materias conducentes al mejor desempeño de su misión: “hacer un formal estudio de los códigos civil y criminal, proveerse de los autores más selectos en el derecho público, subscribirse a los periódicos y acopiar todas las luces necesarias al efecto.” Por tanto, llevar todas esas actividades junto con la subsistencia de sí mismo y sus familias sería

⁴³² *Ibíd.*, p. 245.

⁴³³ *Ibíd.*, pp. 246-247.

⁴³⁴ *Ibíd.*, p. 284.

complejo y por ello estaba en contra de la disposición, pues sin la dieta no se llenarían los deberes y el daño recaería en el estado.⁴³⁵

Lloreda era de la idea de que por lo menos debía asistírseles con la tercera parte de las dietas íntegras a aquellos que no tuvieran otra entrada, aunado al apoyo de viáticos. Además, si a los diputados se les obligaba a permanecer en la capital era preciso indemnizarles con esa parte, si se les dejaba retirar a su vecindad se precisaba el pago de viáticos. De la misma manera, el eclesiástico manifestó que un cuerpo o veterano de tropa disfrutaba el sueldo íntegro “por una vez que la Patria lo necesite” y un diputado se hallaba en igual caso y sus trabajos no eran de menor importancia. Villaseñor intervino, pues consideraba que se debía esperar a ver cómo se organizaban las entradas y salidas de la Hacienda pública para hacer una rebaja proporcional al gobernador, vicegobernador y demás empleados, pues no estimaba justo que éstos disfrutaran el sueldo íntegro y los diputados carecieran de lo más preciso para sostenerse. No obstante, al ponerse a votación quedó reprobada.⁴³⁶

Entonces se reformuló la propuesta: que las dietas de los señores diputados de la siguiente legislatura fueran las mismas que disfrutaba la actual. Lloreda calificó de escasa la retribución y aludió a los gastos ya mencionados por Villaseñor, agregando a la exposición el aumento del valor de las casas y los víveres. Por último, manifestó que los diputados no eran ni en rango, ni en trabajo inferiores a los oidores (del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán) quienes gozaban un sueldo superior para presentarse en público con todo el decoro y lujo correspondiente a su dignidad, siendo apreciados por el pueblo como correspondía. Mientras que un diputado por su cortedad en dietas no alcanzaba a sustentarse, menos podría presentarse ni tener el prestigio debido a su representación. Jiménez señaló la diferencia entre el empleo desempeñado por los oidores, razón por la que disfrutaban de un buen sueldo, así como por las responsabilidades que asumían. Los diputados desempeñaban cargas concejiles y por ello no se les daba un sueldo, sino una corta indemnización para su subsistencia y retribuirles por sus trabajos, junto a que no estaban sujetos a responsabilidad alguna.⁴³⁷ Entonces Morales apuntó que el pueblo no estaba ya

⁴³⁵ *Ibíd.*, pp. 284-285.

⁴³⁶ *Ibíd.*, p. 285.

⁴³⁷ *Ibíd.*, pp. 285-286.

en la ignorancia que se suponía, puso como ejemplo que el Congreso de México no había sacado a sus electores de entre los individuos que portaban el mayor lujo; que el pueblo distinguía a los diputados por sus virtudes patrióticas, pues eran quienes debían dar el ejemplo de moderación con el lujo y que nunca sería justo que se llenara de pensiones al pueblo para que los legisladores portaran lujo desmedido.⁴³⁸

Estos dos casos muestran, por un lado, cómo Lloreda veía que la labor del diputado era una carga que llevaba al descuido de los intereses propios y de las familias, al tiempo que este no retribuía lo suficiente a través de las dietas, las que no iban a la par de la responsabilidad y las actividades que demandaba el cargo. Mientras que Pastor Morales veía el cargo como lo que era, una carga concejil y no un empleo como quería percibirlo Lloreda. Morales veía en el nombramiento una distinción que hacía el pueblo a partir de las virtudes que observaba en los electos y por tanto la moderación en el lujo era justo eso, una virtud. Lo anterior lleva a reflexionar sobre las propias circunstancias individuales, puede ser que para Lloreda el cargo le representara pérdidas porque él vivía de lo que le generaba su parroquia la cual, es de señalar, estaba situada en la segunda ciudad más importante del estado, mientras que Pastor Morales junto con Huarte era de los hombres más acaudalados en esta legislatura.

Lo expuesto también sirve para ilustrar cómo “la distinción” fue un elemento vinculado al tema de la representación y la designación de diputados, lo que constituía una pervivencia del antiguo régimen que se había incrustado en los nuevos procedimientos de acceso al poder y que, en ocasiones, no permitía a los diputados verse como lo que eran: servidores públicos, tal como lo demuestra el posicionamiento de Pastor Morales frente al de Lloreda.

4.2. El proyecto constitucional

Los historiadores Ferrer Muñoz y Luna Carrasco dicen que desde los orígenes de la vida independiente de México se observa un fuerte apego al constitucionalismo y al régimen parlamentario como instrumentos para elevar el

⁴³⁸ *Ibíd.*, pp. 286-287.

derecho sobre el poder. La difusión del constitucionalismo liberal, sustentado en el principio de la soberanía popular y en la garantía del bienestar individual, motivó la búsqueda de autores que ayudaran en la construcción del nuevo régimen político. Lo que explica las traducciones y reediciones de clásicos europeos del pensamiento liberal, así como de comentaristas y divulgadores de sus doctrinas de 1820 a 1825 en México. El pensamiento de Constant, Montesquieu, Burlamaqui, Bentham, Rousseau, Vattel, De Pradt, Mably, Destut de Tracy, Grégoire, Filangieri, Daunou, Raynal, Droz y los españoles Francisco Suárez y Francisco de Vitoria entre otros, fue absorbido por un reducido sector ilustrado, que se esforzó por difundirlo a través de folletos o publicaciones periódicas.⁴³⁹

Es pertinente resaltar que un número importante de legisladores de los primeros Congresos mexicanos, ya fueran federales o locales, conocían el pensamiento ilustrado de la época, a través de la lectura de sus obras o por medio de comentarios o resúmenes publicados en folletos y periódicos. El retorno de la libertad de imprenta en 1820 y la proclamación de la independencia facilitaron la difusión y traducción de obras de autores tanto franceses como ingleses, aunque en ocasiones las versiones que circulaban eran muy laxas, las cuales solían llevar supresiones y alteraciones importantes.⁴⁴⁰ En el caso del Congreso constituyente michoacano, la mayoría de sus integrantes se había formado en el Colegio de San Nicolás o en el Seminario Tridentino, algunos otros realizaron sus estudios de abogacía en la ciudad de México. Por tanto, en dicha legislatura se encontraban personas instruidas, conocedoras de los postulados de Filangieri, Constant, Bentham, Foronda y Jovellanos, autores que utilizaron para fundamentar o rebatir propuestas legislativas y del texto constitucional.⁴⁴¹

De los legisladores constituyentes michoacanos de 1824 se puede aseverar que el abogado Isidro Huarte, el eclesiástico Lloreda y su homólogo Pastor Morales eran los más versados en cuanto al conocimiento de obras de dicha índole. En el caso de Huarte destaca el manejo que tenía de los mismos en los debates. Por su parte, Lloreda accedió a la lectura de libros que, en el

⁴³⁹ Manuel FERRER MUÑOZ, Juan Roberto LUNA CARRASCO, *Presencia de doctrinas constitucionales extranjeras en el primer liberalismo mexicano*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, pp. 11-12, 17.

⁴⁴⁰ *Ibíd.*, pp.16-18.

⁴⁴¹ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "Michoacán: De provincia novohispana", p. 305.

periodo virreinal, estaban prohibidos gracias a la facultad que le fue otorgada por Pío VII al convertir a un protestante al catolicismo. Mientras que Pastor Morales desde muy joven, cuando residía en la ciudad de México, fue señalado por leer libros prohibidos y ser versado en la lengua francesa.

El conocimiento y manejo de los autores de teorías políticas y el pensamiento liberal que tenían los diputados constituyentes, se refleja en los argumentos vertidos en temas como el sistema republicano, la libertad, la igualdad, la propiedad y el debate constitucional. Esta legislatura mencionó a Constant, Foronda, Jovellanos, Filangieri y Bentham, así mismo fue recurrente el uso de la frase “los publicistas” sin hacer mayor especificación, lo que deja abierta la inclusión de más autores. En teoría, la soberanía emanaba del pueblo y a través de los comicios, este otorgaba la potestad a las autoridades para gobernar. El punto es que entre la teoría y la práctica las distancias eran grandes, en principio de cuentas se desarrolló un sistema de gobierno en dos niveles: federal y estatal, ambos se arrogaron la soberanía emanada del pueblo, que a su vez se disputaba entre los poderes legislativo y ejecutivo. Por esa razón el ejercicio del poder en este periodo llevará implícito fuertes tensiones.

Respecto al proceso de redacción y debate de la Constitución de Michoacán de 1825, el 4 de noviembre de 1824 se presentó el primer proyecto compuesto por 197 artículos. Una vez leído, se ordenó sacar como mínimo siete copias para los señores diputados, señalándose el 1º de diciembre para su discusión.⁴⁴² El día indicado para el inicio del debate no hubo sesión pública ordinaria hasta el día siguiente, en que no alcanzó el tiempo para iniciarlo, por ello se acordó sistematizar el modo y términos para llevarlo a cabo. La resolución fue resultado de lo propuesto por los diputados Huarte y Jiménez, se acordó que no hubiera más de cuatro sesiones ordinarias, entrando a las 10 y saliendo según lo establecido por el reglamento. En las dos primeras horas debían discutirse únicamente los artículos constitucionales y en la última los asuntos corrientes, el proyecto se pondría a consideración por cada título en general, después por capítulos y al final los artículos en particular.⁴⁴³

⁴⁴² *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo I, p. 347.

⁴⁴³ *Ibíd.*, pp. 347, 443, 445-446.

Para la discusión del proyecto constitucional, el Congreso se dividió en comisiones especiales; este fue discutido primero en sus artículos preliminares y, posteriormente, los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Los artículos preliminares, estuvieron a cargo del eclesiástico Lloreda, afirmación que sustentó a partir de la relación de méritos presentada en 1831 para la obtención de una prebenda en la que dice lo siguiente: “se le encargó la primera parte del proyecto de la Constitución y la redacción de toda ella.”⁴⁴⁴

Con el objeto de debatir el proyecto, el 10 de enero de 1825 se crearon la segunda y tercera comisión de Constitución, la primera quedó conformada por Rayón -en calidad de presidente de la misma-, Huarte, Lloreda, Jiménez y Morales; la otra por Paulín, Salgado, Aguiar y Menéndez.⁴⁴⁵ Dichas comisiones se unieron a una primera integrada por Villaseñor, González y Jiménez siendo esta distinta a la primera de Constitución que se nombró el 10 de abril 1824.⁴⁴⁶ A principios de febrero de 1825 en sesión pública, el presidente Rayón propuso que, para continuar las discusiones del proyecto de Constitución, se preparan los artículos por las comisiones reunidas en los días que no hubiere sesión. Lloreda se opuso, diciendo que la comisión que había presentado el proyecto no consentiría variaciones y por tanto no tendría efecto la medida propuesta. Tanto Rayón como Huarte argumentaron que ésta no estaría satisfecha de su opinión, a lo que Pastor Morales, como individuo de la comisión que formó el proyecto dijo que ésta se encontraba lejos de contrariar la discusión de los artículos preparados por las comisiones, antes bien la consideraba justa y urgente:

[...] Que la comisión nunca ha estado satisfecha de sus producciones y mucho más del proyecto a cuya formación se prestaron los individuos que los suscriben por cumplir con su obligación y no porque se reconociesen capaces de desempeñar una obra tan delicada y de tanta trascendencia.⁴⁴⁷

⁴⁴⁴ AHCCM, Legajo 1792-1832, f. 161-161v.

⁴⁴⁵ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo II, p. 29.

⁴⁴⁶ Lo anterior se infiere por una intervención de Huarte en sesión secreta del 12 de marzo de 1825, en la que pedía se suspendiera la discusión de los artículos 15 y 16 de la parte legislativa por no estar prevenido para hablar de la materia “y faltar la mayoría de la comisión que los había presentado”. En la sesión pública de ese día faltaron Lloreda con licencia, Villaseñor y González por ocupación. *Ibíd.*, pp. 186, 322.

⁴⁴⁷ *Ibíd.*, pp. 98-99.

Lo primero que se debe rescatar es que Pastor Morales fue uno de los que formaron el proyecto de Constitución que se presentó el mes de noviembre, lo segundo pone de manifiesto que para los legisladores, la creación de dicho documento fue una tarea sumamente compleja, para la cual debieron hacer uso de todo documento similar que precediera a la que se estaba diseñando para el estado.

El debate del proyecto constitucional inició en febrero de 1825 y terminó en julio de ese mismo año. El resultado, como ya se ha visto en el capítulo II, fue un documento de 223 artículos que señalaban los derechos fundamentales de los michoacanos, establecía la división de poderes y su funcionamiento, la organización interna del estado, de la Hacienda pública, la educación y la defensa del territorio michoacano. En medio del debate que generó el documento, el tema de la soberanía estuvo muy presente, el primer artículo manifestó que: “El estado de Michoacán es libre, soberano e independiente en todo lo que toca a su gobierno y administración interior.” Con esta declaración, la doble soberanía quedaba consignada en la Constitución estatal, lo que venía a refirmarse con la intervención de González al abordarse el segundo artículo que remarcaba que Michoacán: “Es parte de la Nación Mexicana en el modo y términos que establece su Constitución Federal”. González creía conveniente redactar el artículo en términos que los pueblos entendiesen la soberanía del estado, no confundiéndola con la de la nación representada por el Congreso general. El artículo quedó así: “Michoacán como federado puede arreglar su gobierno conforme le sea más conveniente, conservando como federado las bases que han sentado la Acta Constitutiva y la Constitución Federal”.⁴⁴⁸

A su vez, en el debate sobre la forma de elección del legislativo, Rayón consideró que en la redacción de uno de los artículos se debía especificar que los diputados eran nombrados por los ciudadanos. González decía que los artículos debían dejar de manifiesto que los legisladores serían electos por el pueblo y no por los ciudadanos, porque en este residía la soberanía y en ese acto era en el que la ejercía inmediatamente. Rayón consideraba que, si no se hacía la indicación, se creería que cualquier individuo podía participar en la elección, aunque no estuviera en ejercicio de sus derechos de ciudadano, porque

⁴⁴⁸ *Ibíd.*, pp. 106, 474.

argumentaría pertenecer al pueblo; a lo que González contestó que eso se prevenía con la ley para electores.⁴⁴⁹ Finalmente el artículo fue aprobado haciendo uso de la palabra “pueblo”.

En primer lugar cabe señalar, la complicación que traía el uso de la palabra ciudadano por su ampliación semántica, que a partir de la nueva forma de gobierno estaba vinculada al tema de los derechos políticos reservados para las personas que cumplieran con determinados parámetros. Por otra parte, en la Constitución de 1825 los diputados no eran electos por los ciudadanos, sino por el pueblo, de ahí la identificación con la soberanía popular.

En la sesión del 12 de abril, el título a debatir era el poder ejecutivo, y se consignaba que el Supremo Poder Ejecutivo del estado se depositaba en un solo individuo con el nombre de gobernador del estado. González propuso que se quitara la palabra “supremo” o bien si se conservaba, se adhiriera también al legislativo. Huarte no consideraba necesario el suprimirse por la supremacía que le correspondía, “por parte de la soberanía que en si retiene, y por la razón de diferencia que se da en su línea entre este y los demás poderes que le son subalternos, y emanan de él, como los prefectos” no debía expresarse ni en el poder legislativo, porque este representaba más inmediatamente la soberanía. Villaseñor consideraba que así lo había puesto la Constitución Federal, y que no debía ponerse al legislativo porque éste no podía confundirse con otro; “y porque no sólo era el Supremo, sino Soberano.” Mientras que Huarte y Rayón mencionaron que, así como se decía “Supremo Tribunal de Justicia” para distinguirse del Superior y demás, así debía decirse del Supremo Poder Ejecutivo, para diferenciarse de los que le subseguían. Y efectivamente, en el artículo quedó como Supremo Poder Ejecutivo.⁴⁵⁰

La trascendencia de este debate va por dos líneas, la primera remarcando la dispersión de la soberanía que no solo era en dos niveles, sino que en parte también poseían los poderes. La segunda es que se deja como Supremo poder ejecutivo porque de él dependían otros agentes del gobierno y el texto constitucional no debía dejar duda de que dentro de este poder la máxima figura de autoridad era el gobernador.

⁴⁴⁹ *Ibíd.*, p. 141.

⁴⁵⁰ *Ibíd.*, pp. 225, 483.

El debate constitucional no estuvo exento de la teoría liberal, las propuestas de Constant salieron a relucir en la discusión de una atribución del prefecto que se pretendía incluir en la máxima ley. El asunto versaba sobre la suspensión con causa justificada a miembros de los ayuntamientos de su departamento, dando cuenta inmediatamente al gobernador con el expediente respectivo. Morales fue de la opinión que el expediente debía llegar al juez correspondiente y no solo al gobierno. Lloreda consideraba el artículo antiliberal, pues suspender a los miembros de los ayuntamientos era una competencia del mismo cuerpo, entonces Pastor Morales cambió de opinión y se adhirió a la visión de Lloreda y citó varias doctrinas de Constant acerca de las facultades de los ayuntamientos y del arbitrio que se concedía a algunos funcionarios públicos, el cual, según el autor, era contrario a la igualdad civil, confundía los poderes y atacaba la libertad individual. El diputado Huarte defendió el dictamen, porque suponía que los prefectos debían cuidar de los ayuntamientos por tener a su cargo todo el gobierno económico político de sus departamentos y por lo que no se les podía privar de suspender a los integrantes de los ayuntamientos, lo que además se había establecido en todas las constituciones. Que la atribución no podía dejarse al ayuntamiento "...porque era imposible moralmente que prescindieran del espíritu de cuerpo político...", lo que veía como la protección de sus miembros, Lloreda opinó que los cuerpos militares y los eclesiásticos juzgaban a sus individuos, Morales añadió que existía la ley de funcionarios públicos y otras que vinculaban procedimientos sobre derechos individuales a través de la justicia y las posturas vertidas daban muestra de hábitos del gobierno español.⁴⁵¹

Lo notable del asunto estriba en que pone de manifiesto una sociedad en transición del antiguo régimen corporativo y desigual frente a una nueva forma de organización que propugnaba los derechos de los individuos entre los que estaban la libertad y la igualdad ante la ley. El debate del artículo se retomó en la siguiente sesión, en ella Lloreda lo impugnó, pues él argumentaba que el ayuntamiento era de nombramiento popular y no consideraba justo ni conveniente, que el prefecto, que no lo era, tuviera facultad arbitraria de quitar individuos de dichas corporaciones. Rayón argumentó que el pueblo en uso de

⁴⁵¹ *Ibíd.*, pp. 32-33.

su soberanía había separado los poderes y le dio origen, por lo que no había inconveniente para que el prefecto procediera respecto de los regidores y ayuntamientos, no advirtiéndose otra diferencia en cuanto al principio de sus facultades dimanando todas del pueblo, sino por razón de que en un caso se hacía nombramiento más inmediato que en el otro. Lloreda estableció que *según los principios republicanos* cada ayuntamiento era un Congreso pequeño y por tanto poseía un poco de la soberanía nacional, sobre la cual el gobierno no tenía poder, con la atribución que se pretendía otorgar a los prefectos se corría el riesgo de que un individuo deshiciera lo que construía el soberano. Por tanto, correspondía exclusivamente a los ayuntamientos, corregir las faltas de sus individuos o bien separarlos de la corporación.⁴⁵²

El punto residía en que conforme se profundizaba en la organización del estado, la soberanía seguía dividiéndose, ahora también los ayuntamientos poseían “un poco de soberanía nacional” al equipararse con un Congreso pequeño, pero no sólo eso, estos órganos de gobierno se veían como un cuarto poder, después del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Una discusión similar tuvo lugar en las Cortes de Cádiz, recuérdese, en la que intervino el diputado novohispano José Miguel Guridi y Alcocer.

El diputado Huarte puso dos elementos a discusión que él veía se estaban asimilando equivocadamente, el primero consistía en que el poder ejecutivo “no tenía parte de la soberanía”, siendo inconcusamente uno de los tres ramos o poderes en que ésta se dividía y la segunda relacionada con asuntos económicos, o faltas de los regidores relativo al cuerpo, cuyos puntos pertenecían a su reglamento interior. Según Huarte, el artículo se dirigía a asuntos gubernativos cuyo conocimiento no podía disputarse al gobierno, ni que éste los manejara por medio de gentes como los prefectos.⁴⁵³ Morales se oponía y no estaba de acuerdo con Lloreda porque “el sistema no era Democrático Popular absoluto,” sino federal y si el ejecutivo carecía de facultades sobre los ayuntamientos y demás autoridades populares, resultaba nulo el poder que le otorgaba la Constitución. Pastor Morales no era de la idea de despojar por completo de la acción gubernativa a los ayuntamientos, pero que esta se sujetara a trámites para que obraran por medio de los alcaldes a través de prevenciones

⁴⁵² *Ibíd.*, p. 37.

⁴⁵³ *Ibíd.*, pp. 37-38.

o procesos judiciales; después de esta intervención el artículo se votó y aprobó, salvando su voto Pastor Morales, Lloreda y Jiménez.⁴⁵⁴

Se continuó con la discusión de otros artículos relacionados con las atribuciones de los prefectos como lo fue “cuidar particularmente que los habitantes en terrenos solitarios, sospechosos por no ofrecer utilidad alguna se reduzcan a los pueblos, haciendas o rancherías.” Para Lloreda el artículo era contrario a la libertad individual, pues el ciudadano mientras no cometiera faltas a la sociedad era libre de elegir donde vivir y no creía justo compelerlo para que habitara en un lugar determinado. Pastor Morales añadió que en ese caso “...tal vez no hubiera existido largo tiempo el actual presidente...” quien pasó mucho tiempo viviendo en el monte, así mismo dio ejemplos del beneficio de la libertad de elegir hábitat, como lo eran las meditaciones de los grandes filósofos y santos ermitaños que veneraba la Iglesia, por ello no consideraba que los prefectos estuvieran encargados, pues constituía una acción opresiva de la libertad individual. Salgado como autor de la propuesta dijo que el planteamiento se redactaba con el afán de prever vicios y delitos que se ocultaban en la soledad, pues eran raros los hombres que se apartaban de la sociedad con rectas intenciones, el artículo fue puesto a votación y también resultó empatado por lo que su debate pasó a otra sesión.⁴⁵⁵

Se retomó la discusión el 15 de enero de 1825, Morales no consideró pertinente colocarlo dentro de la Constitución pues ya existían muchas leyes y ordenanzas contra vagos, viciosos y criminales, de incluirse el artículo se deberían contemplar prevenciones sobre parajes clandestinos. Salgado continuaba a favor del artículo mientras que Huarte propuso la elaboración de una ley secundaria para los prefectos. Morales pidió que el artículo fuera reservado para cuando se tratara la indicada ley con otras intervenciones, el artículo se puso a votación y fue aprobado salvando su voto Pastor Morales y Jiménez.⁴⁵⁶

En la presente discusión también se retoman las ideas de libertad y se fundamentan los argumentos en autores como Constant y Foronda. En sesión pública del 8 de enero de 1825 los diputados se encontraban discutiendo algunas

⁴⁵⁴ *Ibíd.*, p. 38.

⁴⁵⁵ *Ibíd.*, pp. 34-35.

⁴⁵⁶ *Ibíd.*, pp. 41-42.

adiciones sobre el capítulo de ayuntamientos de la Constitución local. El artículo era denominado como 63 y en él se decía: “Estará a cargo de los Ayuntamientos todo lo perteneciente a la policía y el buen orden que debe observarse en los Teatros, designación en los valores de entradas, palcos y asientos, y la pensión que deba darse por su permiso para los fondos comunes bajo la inspección del prefecto”.⁴⁵⁷

El primer diputado en oponerse al artículo fue Jiménez estableciendo que el ayuntamiento no debía poner precio al trabajo de ningún particular, a su vez Huarte, como miembro de la comisión, defendió la propuesta en primer lugar porque así se acostumbraba y segundo para evitar que los maromeros, cómicos y demás no abusaran de la curiosidad o sencillez del pueblo vendiendo en altos precios diversiones frívolas. Lloreda fue el primero de los eclesiásticos en solicitar una modificación en el artículo, pues la redacción del mismo chocaba con el derecho de propiedad, ya que los que se dedicaban a ese ramo eran libres de poner precio a su espectáculo y que la intervención del Ayuntamiento solo debía circunscribirse a ciertos casos.⁴⁵⁸ Pastor Morales, al igual que Lloreda se opuso al artículo, concordaba en que se atacaba el derecho de propiedad al tiempo que exponía los abusos cometidos por los ayuntamientos al intervenir en las tarifas de alimentos de “primera necesidad” perjudicando a la agricultura y el comercio. Además, el eclesiástico consideraba las diversiones teatrales como efectos de lujo que debían estar libres de aranceles por parte de los ayuntamientos. Y que si antes tenían esas atribuciones dichos órganos era porque obedecía al sistema opresor, pero que las circunstancias habían cambiado. El diputado Rayón estaba a favor del artículo pues al dar poder a los ayuntamientos para asignar valores de entradas, palcos y asientos era para evitar el abuso de los actores. Pastor Morales de nuevo intervino para remarcar que, si bien la libertad individual tenía límites no por ello se debía ceñir a la voluntad de los ayuntamientos “... y sería extraer de su esfera, según la doctrina de Mr. Constant...” al dejarlos que se introduzcan en las propiedades de los individuos. El argumento fue apoyado por Lloreda, quien a su vez citó a Foronda,

⁴⁵⁷ *Ibíd.*, p. 20.

⁴⁵⁸ *Ibíd.*, p. 20-21.

el diputado Huarte también intervino a favor. El artículo se puso a votación y se aprobó, salvando su voto Morales y Jiménez.⁴⁵⁹

4.3. Privatizando lo común: el debate de los bienes comunales

El reparto de los bienes de comunidad fue un tema de largo alcance que tocaron varias legislaturas michoacanas durante la primera república federal. Si bien se puede argumentar que el reparto de las tierras estaba sustentado en la utilidad de las mismas, en crear nuevos propietarios y hacerlos industriosos para que alcanzaran la civilización, los antecedentes de esta idea obraban dentro del pensamiento español de siglo XVIII, en concreto, bajo las propuestas de Melchor Gaspar de Jovellanos y Pedro Rodríguez Campomanes que abogaban por la división de la propiedad comunal en propiedad particular. Juan Carlos Cortés Máximo refiere que las primeras medidas que se emprendieron fueron las emitidas por Cortes de Cádiz el 4 de enero de 1813, las que dispusieron el fraccionamiento de los terrenos comunales, a excepción de los ejidos. Posteriormente, los liberales mexicanos se propusieron eliminar las comunidades indígenas porque arrastraban un sistema de usufructo contrario a los postulados económicos que impulsaban y que se cimentaban en la idea de ciudadanos propietarios.⁴⁶⁰

Durante el gobierno colonial los bienes de comunidad se consignaron como propiedad de las comunidades indígenas comprendiendo terrenos y el usufructo de ellos, que solía destinarse al culto, a las escuelas de las comunidades, para contrarrestar los estragos de epidemias y desastres naturales, en la construcción de capillas y edificios públicos, todo ello libre de la intervención de los ayuntamientos españoles.⁴⁶¹

En el periodo de sesiones de la primera legislatura constituyente fue común que los ayuntamientos enviaran solicitudes para hacer uso de cantidades provenientes de estos recursos, ya fuera para el preceptor de primeras letras,

⁴⁵⁹ *Ibíd.*, pp. 20-21.

⁴⁶⁰ Juan Carlos CORTÉS MÁXIMO, *El Valle de Tarímbaro. Economía y Sociedad en el siglo XIX*, Morelia, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1999, pp. 36-37.

⁴⁶¹ Andrés LIRA, *Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México Tenochtitlán y Tlatelolco sus pueblos y barrios 1812-1819*, 2ª edición, México, El Colegio de México, 1995, p. 24.

construcción de cárceles o iglesias o para reparación de las mismas. Las constantes solicitudes para hacer uso de lo generado por bienes de comunidad llevaron al legislativo a determinar que el dinero en existencia fuera depositado en manos del gobernador, con la orden de no gastarse por motivo alguno.⁴⁶²

No obstante, la importancia del tema estriba en su implicación con otros asuntos nodales para la administración pública como lo eran los ayuntamientos, la educación y el culto religioso, en este punto el centro de la discusión era si los bienes debían repartirse entre los indios de los respectivos pueblos. El 10 de junio de 1825, la comisión de gobernación presentó un proyecto sobre la extinción de la administración de estos bienes y su repartición con igualdad entre las familias de indios de los pueblos otorgándoles pleno dominio de los terrenos y una constancia que sirviera de título en el cual se pusiera que los propietarios, herederos o sucesores no podían enajenar ni empeñar los terrenos hasta pasados diez años, ni arrendarlos por más de cinco. Por último, el gobierno debía verificar el pago de las cantidades adeudadas a cada pueblo por concepto de bienes de comunidad.⁴⁶³

En la sesión pública del 11 de julio de 1825, Pastor Morales solicitó la resolución al dictamen sobre los comunales, el presidente del Congreso argumentó lo complejo del asunto y la discusión se orientó a si dichos bienes podían o no aplicarse a los fondos municipales. Entonces, el diputado Salgado dio lectura a un discurso para aclarar la situación de los bienes, su pertenencia y repartición.

A través de las actas, se infiere que Salgado participó en la argumentación de la aplicación de los bienes de comunidad, para ello cimentó dos principios, el primero la justicia y el segundo la utilidad general del estado. Para el primero había considerado la doctrina del célebre Bentham sobre propiedades, el origen de los bienes, el de la palabra común; y para el segundo la utilidad, formando en la familia michoacana tantos propietarios cuantas porciones quedaran disponibles de las tierras de comunidad. Salgado veía en la repartición la transformación de las tierras que se convertirían de incultas e inaccesibles montes a hermosas y productivas campiñas, tan luego fueran a parar en brazos

⁴⁶² Nely Noemí GARCÍA CORONA, *Un esbozo histórico*, pp. 101-102.

⁴⁶³ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo II, pp. 310-311.

interesados y laboriosos como lo serían aquellos ciudadanos que vieran como propios unos terrenos que ayudarían a su subsistencia y la de sus descendientes, ello mejoraría y engrandecería las fincas, el erario público e impulsaría la agricultura, ramo "... justamente recomendado por los políticos del día, y en especial por el señor Jovellanos."⁴⁶⁴

Salgado consideraba que los constituyentes debían asegurar con el "cable de ley", como lo decía Bentham lo que antes no lo estaba sino con "el hilo de la casualidad". No obstante, se debía considerar que si bien, los indios fueron los primeros propietarios de dichos territorios, no se debía perder de vista que el común de cada pueblo no sólo lo formaban los indios ya por de derecho de vecindad o que traían origen de aquellos, a través de la mezcla denominadas castas, las cuales quedarían excluidas.⁴⁶⁵

Bajo el planteamiento anterior Salgado manifestó no ser correcto que solo quisiera concedérseles a cierto número de familias unos derechos que debían ser comunes a todos, con mayor razón cuando las instituciones actuales detestaban esas distinciones entre ciudadanos de una misma familia. Si la nación se componía de indios y de los que no lo eran, por preocupaciones que por sistema había infundido el gobierno opresor, el cual cooperó a la distinción, chocaba con la esencia del actual sistema.⁴⁶⁶

El legislador era de la opinión que las tierras debían repartirse entre todos los vecinos del pueblo, pero hacía una división. Por un lado, consideraba a los que tenían derecho por su conservación exclusiva en su origen cuya pertenencia era directa y por el otro, se encontraba un derecho indirecto y menos fuerte, y a ésta en su proyecto, ponía en manos de las municipalidades la utilidad del que les concedía en clase de común. Todo lo anterior sin perder de vista la utilidad general, solicitó se considerara su proyecto de ley y se desechara el que estaba en discusión. Morales manifestó las sólidas razones a favor de los naturales para que los expresados bienes en ningún caso pudieran ser aplicables a los fondos municipales. Salgado volvió a insistir que se dijese que tales bienes no eran aplicables del todo a los ayuntamientos, lo que se desechó.⁴⁶⁷ Finalmente, se

⁴⁶⁴ *Ibíd.*, pp. 392-393.

⁴⁶⁵ *Ibíd.*, p. 393.

⁴⁶⁶ *Ibíd.*, p. 394.

⁴⁶⁷ *Ibíd.*, p. 395.

acordó que los bienes de comunidad eran exclusivamente de los indios y no pertenecían a los fondos municipales, el gobierno, de acuerdo con el Consejo, dictaría las providencias necesarias para que conforme a las leyes se hiciera el repartimiento de los bienes, en dominio particular entre todos los indios de los pueblos.⁴⁶⁸

El tema del dominio y usufructo de los bienes de comunidad fue muy importante dentro del nuevo sistema de gobierno, por esa razón los gobiernos estatales buscaron mecanismos que permitieran la explotación de las tierras comunales. Las Cortes de Cádiz habían despejado hasta cierto punto parte de camino a través del decreto del 4 de enero de 1813, el que entregaba en propiedad las tierras a los antiguos indígenas. En el caso del estado de Veracruz se permitió la venta de las tierras otorgadas en propiedad en 1813, también se autorizó su arrendamiento y finalmente en diciembre de 1826 el Congreso de aquel estado emitió la ley de reparto de las tierras de comunidad. Por la fecha se infiere que el tema del reparto no era privativo de Michoacán, sino característico del nuevo orden de las cosas.⁴⁶⁹

4.4. ¿Qué hacer con la religión en la Constitución?

Los eclesiásticos fueron muy activos en el debate constitucional, cierto es que los temas en los que fueron más arrojados estaban relacionados con la Iglesia, sus preceptos y facultades. Uno de los artículos que por su propia naturaleza sería objeto de amplios debates fue el de la religión, que estaba presente desde la Constitución de Cádiz como postulado número 12 y establecía: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única y verdadera. La nación la protege con Leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.⁴⁷⁰ Precepto que

⁴⁶⁸ *Idem*.

⁴⁶⁹ Juan ORTIZ ESCAMILLA, “Ayuntamientos gaditanos en el Veracruz Central 1820-1825” en Juan ORTIZ ESCAMILLA, José Antonio SERRANO ORTEGA (Eds.), *Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México*, Zamora, México, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2009, p. 328. Luis J. GARCÍA RUÍZ, “La territorialidad de la República de Indios de Orizaba. Entre la separación de los sujetos y la preponderancia española: 1740-1828”, en *Historia Mexicana*, Vol. 64, No. 4 (256), 2015, pp. 1449-1450.

⁴⁷⁰ Felipe TENA RAMÍREZ, *Las leyes fundamentales*, p. 62.

heredaron las nuevas naciones americanas que surgirían de la descomposición del sistema colonial español.⁴⁷¹

El Plan de la Constitución política de la nación mexicana había decretado que uno de los deberes de los ciudadanos era “profesar la religión católica, apostólica y romana, como única del Estado”, el 16 de mayo de 1823.⁴⁷² Tiempo después el Acta Constitutiva de la Federación establecía en su artículo 4º: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.”⁴⁷³ Mientras que la Constitución federal de 1824 en el artículo 3º ratificaba lo ya establecido por el Acta Constitutiva. Para el caso concreto de la Constitución de 1825 del estado de Michoacán en el artículo 5º decía que: “Su religión es, y deberá ser perpetuamente, la católica, apostólica, romana, única verdadera. El Estado la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.”⁴⁷⁴

Sin embargo, para llegar a esa conclusión los legisladores michoacanos tuvieron previas discusiones sobre dicho artículo, la primera propuesta que declaraba a la religión católica como la única que se profesaría en Michoacán se discutió el 16 de febrero y fue la siguiente: “Su Religión es y será siempre la Católica, Apostólica Romana, sin tolerancia de otra alguna”. Para el eclesiástico Lloreda el artículo era muy general y planteó una segunda proposición en los siguientes términos: “La Religión de Estado, es y será perpetuamente la Católica, apostólica Romana, sin permitir jamás el ejercicio de otro culto, ni la manifestación de ideas contrarias”, la cual tampoco fue aprobada.⁴⁷⁵ A pesar de lo anterior, la del bachiller de la Torre Lloreda, para el presidente del Congreso, Rayón, era más completa, quien consideraba necesaria la ampliación para que se entendiera que también quedaba prohibido por ley la manifestación de ideas contrarias a la religión, punto que según Rayón no desarrollaba la Constitución

⁴⁷¹ Para tener mayor referente sobre el liberalismo católico español y su impacto en México véase: José María PORTILLO VALDÉS, *Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*, Madrid, España, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Brian CONNAUGHTON, “El Constitucionalismo político-religioso. La Constitución de Cádiz y sus primeras manifestaciones en el Bajío mexicano y zonas aledañas”, *Relaciones*, No. 147, El Colegio de Michoacán, verano de 2016, pp. 85-154.

⁴⁷² Felipe TENA RAMÍREZ, *Las leyes fundamentales*, p. 148.

⁴⁷³ *Ibíd.*, p.154.

⁴⁷⁴ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo II, p. 474.

⁴⁷⁵ *Ibíd.*, pp. 112-114.

Federal. Después de más argumentos el artículo de Lloreda se desechó quedando aprobado el que presentó la comisión, los dos eclesiásticos decidieron abstenerse de votar. En esta sesión no hubo intervención en el asunto del diputado Morales, pues se encontraba de licencia.⁴⁷⁶

El artículo se aprobó, pero el 27 de junio Rayón y Jiménez presentaron la siguiente adición al artículo “y conserva la inmunidad eclesiástica” la comisión encargada estuvo de acuerdo en admitirla.⁴⁷⁷ Al día siguiente se volvió a este tema y Rayón pronunció un discurso a favor de la propuesta argumentando que “la Religión, la razón y la política, demandan se conserven a la Iglesia y a sus Ministros sus inmunidades...”. El diputado Villaseñor respondió que la inmunidad eclesiástica no era un derecho divino, sino concedida por emperadores y reyes a lo largo de la historia; aún Jesucristo había estado sujeto a ser juzgado por un juez lego y a pagar impuestos y que el asunto del fuero ya se contemplaba en la Constitución federal y otras leyes vigentes que preservaban los privilegios de la Iglesia y el clero. Morales no creía necesario hacer la adición que proponía Rayón, salvo la relacionada con el asilo, pero que este se contemplara en la parte correspondiente al Poder Judicial. Posteriormente en la discusión participaron Jiménez, Aguiar y el vicepresidente del Congreso, finalmente el dictamen regresó a la comisión.⁴⁷⁸

El tema de la conservación de la inmunidad eclesiástica es importante porque permite observar cómo actúa y reacciona una sociedad que está creando parámetros para la organización y funcionamiento de un nuevo sistema político bajo el baluarte de la igualdad, pero que no puede desprenderse tan fácilmente de un sistema de privilegios.

Continuando con el debate, el 2 de julio, la comisión encargada de la revisión, en la que se encontraba Villaseñor, pedía que el artículo sobre la religión se redactara como estaba en la Constitución de Cádiz, a lo que el diputado Aguiar pidió se cambiara del mismo “será” por “deberá ser”.⁴⁷⁹

Efectivamente, el artículo 5º de la Constitución estatal es el mismo de la Constitución de Cádiz con el cambio propuesto por Aguiar. Llama la atención la

⁴⁷⁶ *Idem.*

⁴⁷⁷ *Ibíd.*, p. 348.

⁴⁷⁸ *Ibíd.*, pp. 354-356.

⁴⁷⁹ *Ibíd.*, pp. 365-366.

propuesta de adición después de varios meses sin tocarse el artículo, pues ya estaba aprobado y sin mayor discusión, ello obedece al debate que generaron algunas atribuciones de los poderes legislativo y ejecutivo relacionados con la jurisdicción eclesiástica.

En la sesión secreta del 22 de marzo se puso a discusión la atribución decimoséptima del poder legislativo que consistía en: “fijar los gastos del culto y subsistencia de sus Ministros que costeará el Estado; y arreglar la administración de las rentas destinadas a este objeto.” Villaseñor defendió la propuesta argumentando que desde el principio del mundo la potestad secular había sido la encargada de los gastos del culto y la dotación de los Ministros del Altar. Huarte, apoyando el argumento de Villaseñor, dijo que había leyes entre las cuales se encontraban varias relacionadas con la administración y pago de diezmos y terminó su fundamentación con un impreso que “manifestaba que desde Adán hasta los Apóstoles fue inherente a la potestad civil el sostenimiento del culto y sus ministros”; lo que contestaron Rayón, en primer lugar, que si el estado respetaba la potestad eclesiástica, como consecuencia del artículo sobre la religión que ya se había aprobado, éste no debería introducirse en sus facultades como se pretendía hacer con el artículo; para Morales era claro, que si el gobierno michoacano quería intervenir en la disciplina eclesiástica debía tener previa aprobación de la Santa Sede a través de un concordato.⁴⁸⁰

En la discusión participaron Villaseñor y Huarte a favor de la propuesta y en contra, defendiendo los derechos de la Iglesia, Rayón y Morales. Por votación nominal el artículo fue reprobado, a favor estuvo González, Villaseñor, Huarte y Salgado; por la negativa Morales, Rayón, Aguiar, Paulín, Menéndez y Rayón.⁴⁸¹

En esa misma sesión también se discutió la atribución decimosexta del legislativo, la cual consistía en:

Dictar las Leyes convenientes para mantener en su vigor la observancia de los Cánones, y la disciplina exterior de la Iglesia en el Estado, arreglándose a los concordatos que en este punto celebre el Congreso general con Silla Apostólica, y a los decretos que en consecuencia expidiere.⁴⁸²

⁴⁸⁰ *Ibíd.*, pp. 200-203.

⁴⁸¹ *Idem.*

⁴⁸² *Ibíd.*, p. 203.

De nuevo las discusiones se hicieron presentes: Rayón y Morales contra Villaseñor y Huarte. Del debate resalta el argumento del segundo de los eclesiásticos, quien manifestó estar en contra porque ni en la Constitución general ni en las que había de los estados se encontraba en ellas tal facultad, mientras que Huarte consideraba que ésta debía quedar plasmada en la Constitución

[...] ya para que las Legislaturas ordinarias se apoyasen en ella para dictar las reformas, que si bien son útiles en todo el orbe cristiano, seguramente en ninguna otra parte con más necesidad que en este Obispado, en razón de que los abusos de la autoridad eclesiástica han tocado ya el más alto grado [...]

Huarte era de la opinión que, constando en la Constitución, no les quedarían dudas a las legislaturas de que era parte de sus facultades. La atribución se sometió a votación y quedó aprobada por Huarte, González, Villaseñor, Aguiar y Salgado y reprobada por Jiménez, Rayón, Menéndez, Paulín y Pastor Morales.⁴⁸³

Otro punto que se relaciona con el cambio tan repentino de artículo 5º constitucional, es la discusión del 20 de junio de 1825 sobre el ejercicio de la exclusiva como atribuciones del ejecutivo. Salgado y González tomaron la propuesta de la ley orgánica del Estado de México, la cual consistía en “ejercer la exclusiva, oído el Consejo, en la provisión, aun interna, de las plazas eclesiásticas del Estado, con arreglo a la forma que se prescriba”.⁴⁸⁴

Puesto a consideración por la comisión encargada de los artículos del Poder Ejecutivo, se dijo que no era oportuno declararla entre las facultades del gobierno. La postura de Villaseñor era que el gobierno tenía derecho de intervenir, pues éste no era en facultad de Patronato, sino de disciplinar, lo cual podía afectar cuando la Potestad civil no estuviese de acuerdo con la conducta política de los electos por la autoridad eclesiástica.⁴⁸⁵

Los tres eclesiásticos argumentaron ampliamente por qué no estaban de acuerdo con la petición: en el centro de la discusión estaba el Patronato no heredable, sino negociable con la Santa Sede. Morales solicitó se llevara a

⁴⁸³ *Ibíd.*, pp. 200-205.

⁴⁸⁴ *Ibíd.*, p. 332.

⁴⁸⁵ *Ibíd.*, pp. 310, 317, 321, 332-333.

votación el dictamen, a favor se mostraron Paulín, Morales, Lloreda, Rayón, Jiménez, Aguiar y Menéndez y en contra quienes habían hecho la propuesta.⁴⁸⁶

Como se advierte, el tema central de las relaciones entre las autoridades eclesiásticas y la civiles fue el patronato desde un inicio. Reynaldo Sordo Cedeño advierte que, para el periodo de estudio, uno de los problemas inherentes de este derecho serán los diferentes posicionamientos al respecto, pues por un lado existían los partidarios *secularizantes* que estaban a favor de la separación de lo temporal y lo espiritual; por otro, los *ultramontanos*, quienes afirmaban que el patronato había cesado al ser una concesión otorgada al rey de España y finalmente, los *regalistas* que defendían el derecho del estado mexicano al patronato. Éstos a su vez, tenían sus propios preceptos, pues bien podían ver el derecho como algo implícito a la soberanía, como consecuencia de los derechos del Estado por ser fundador o dotador de iglesias, o bien, porque asumían que el Estado mexicano era heredero de las regalías que sobre el patronato tenía el rey de España. Además de esta división, existían regalistas que veían la necesidad de un Concordato con la Santa sede para arrogarse el derecho y otros que no lo consideraban necesario.⁴⁸⁷

Regresando al tema, queda claro que la adición solicitada por Rayón el 27 de junio sobre la conservación de la inmunidad eclesiástica tiene sus orígenes en los posicionamientos regalistas de Huarte, Villaseñor, González y Salgado. El eclesiástico intentaba frenar las pretensiones de intervención y sometimiento de la potestad eclesiástica a las autoridades civiles de la entidad. Finalmente, fue a propuesta de la comisión de la cual era parte el propio Villaseñor, que se solicitó el cambio de artículo, lo que pudo ser una estrategia para no retardar por más tiempo la promulgación del texto constitucional que para esos momentos se encontraba en las últimas modificaciones. A su vez el asunto sirve de referente para observar que, efectivamente, el patronato tenía varias aristas y dentro del Congreso no existía un consenso al respecto.

⁴⁸⁶ *Ibíd.*, pp. 333-335.

⁴⁸⁷ Reynaldo SORDO CEDEÑO, "El Congreso Nacional", pp. 147-148.

4.5. Legitimar festejando: poder civil *versus* cabildo eclesiástico

Las festividades fueron, tanto en el México colonial como en el independiente, un instrumento que usaron los grupos en el poder para legitimar el sistema de dominación, reforzar el orden jerarquizado de la sociedad, dar a los individuos que la componían una formación compartida que coincidiera con el proyecto de Estado, para facilitar así las tareas de dominación y confirmar con cada celebración el estatus inalterable de la sociedad. Las fiestas, por su alto contenido simbólico, fueron la representación más acabada de los poderes y el medio ideal para establecerlos. El conjunto de celebraciones de cada periodo fue diseñado para cumplir ciertos fines a favor del proyecto de gobierno. Toda jornada festiva estaba integrada por un componente eclesiástico y otro civil, porque así estaba estructurada la sociedad, los símbolos y actores de la fiesta eran todos representativos de la jerarquía política.⁴⁸⁸

El gobierno mexicano estableció dos tipos de festividades: las religiosas públicas y las cívicas. A pesar de que las primeras eran más numerosas, desde el nacimiento de la República en 1824, las autoridades civiles trataron de crear nuevas fiestas cívicas ya fueran prevenidas por decretos nacionales o que se inventaban según las urgencias políticas del momento.⁴⁸⁹

En este contexto, el legislativo michoacano no fue ajeno a las circunstancias y debió crear el protocolo legitimador. A pocos días de instalada la legislatura, Rayón convocó a sesión pública extraordinaria para que se declarase qué honores y tratamientos debía tener el Teniente de Gobernador en la celebración del Jueves Santo. La legislatura, en general, acordó que éste no asistiera mientras no se conformara la reglamentación correspondiente; entonces, se optó por crear una comisión especial que atendiera el asunto, integrada por Huarte, Lejarza y Chávez, la cual un mes después fue reformada por varias razones y donde figuraron Rayón, Lloreda y Lejarza.⁴⁹⁰

⁴⁸⁸ María José GARRIDO ASPERÓ, "Las fiestas celebradas en la ciudad de México. De capital de la Nueva España a capital del Imperio de Agustín de I. Permanencias y cambios en la legislación festiva", en: *Cuadernos del Instituto de las Investigaciones Jurídicas*, "La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente", México, 1998, pp. 186-190.

⁴⁸⁹ Annick LEMPÉRIÈRE, "De la república corporativa", p. 337.

⁴⁹⁰ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo II, pp. 11, 43.

El decreto salió a la luz el 24 de julio de 1824 y se encontraba constituido por tres títulos, con un total de 14 artículos. En él se ponía en marcha toda una maquinaria de respeto para la nueva autoridad y de educación hacia la población. El título segundo sobre las “asistencias públicas”, hacía mención del orden a observar en la participación de las autoridades a celebraciones públicas y cuando asistían a la iglesia. La jerarquización fue de la siguiente manera: primero la Diputación constituida por el presidente del Congreso y un grupo de diputados que asistiría en el primer lugar, seguida del gobernador, el consejo -de gobierno-, el Tribunal Supremo de Justicia, después la audiencia territorial - Superior Tribunal de Justicia-, el ayuntamiento, el comandante general y si éste no asistía entonces el Juez de Letras. En caso de que no acudiera la Diputación, el primer lugar, correspondería al gobernador seguido de las demás autoridades ya mencionadas. De todas las autoridades, el presidente de la Diputación, el gobernador, y su teniente -teniente de gobernador y vicegobernador- tendrían asientos elevados y con el adorno que se les ponía a los virreyes en el periodo colonial.⁴⁹¹

Después de emitido el decreto y de llegar a manos del cabildo catedral, éste contestó de enterado; sin embargo, manifestó tener una duda respecto al artículo 14 del título 3º sobre los honores, por lo que solicitó al gobernador que le dijera cuales eran estos, “pues como en esta iglesia jamás ha habido virreyes ignoramos cuáles sean los que deban hacerse; previniéndole igualmente a su excelencia que esta Santa Iglesia no tiene las correspondientes sillas, ni el adorno que previene el artículo último de este reglamento: por lo que se sirva disponer lo que se haga para cuando concurren las autoridades que en dicho reglamento se expresan.”⁴⁹²

Aunque las nuevas autoridades estatales intentaron arrogarse los honores de los vicepatronos, el gobierno eclesiástico del obispado de Michoacán insistió en remarcar que no se podía equiparar al legislativo o al titular del ejecutivo con el vicepatrono, porque no había un concordato con la Santa sede, así que el gobierno civil debería conformarse con las distinciones de autoridad suprema.

David Carbajal subraya el hecho de que el episcopado no reconoció a las autoridades civiles el ejercicio del patronato, ni de manera oficial, ni virtual, pero

⁴⁹¹ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo I, pp. 22-23.

⁴⁹² ACCM, Libro 48 de actas, 12/VIII/1824, fs. 262 y 262v.

sí concedió una especie de “Patronato Ritual” sin protestar, vinculando los honores con el patronato y llegando a reconocer con sumisión cuando se cometía un error en la materia.⁴⁹³ Ciertamente es que el Cabildo catedral vallisoletano no reconoció el patronato ni oficial, ni virtual, pero como se verá a lo largo del trabajo, el gobierno estatal sí se tomará atribuciones vinculadas con ese derecho. Mientras que el “Patronato Ritual” no aplicó en el caso de Michoacán, desde inicios de la primera república el cabildo catedralicio dejó muy claro al gobierno del estado que no le haría los honores en calidad de patrono, por tal motivo, las tensiones entre la autoridad civil y eclesiástica por la reglamentación de los honores fueron fuertes y constantes.

Retomando el debate, la contestación del gobernador no se hizo esperar y precisó que, respecto a los honores, estos se hallaban consignados en varias Reales Cédulas, los cuales referían los señores Solórzano y Francisco⁴⁹⁴, que a su vez también se encontraban en el título 15 del libro 3º de la *Recopilación de Indias* y en caso de haber alguna duda o propuesta se resolvería en su momento. Por lo que concernía a las sillas, el gobierno se encargaría de disponer lo conveniente, haciendo uso de las que sirvieron a la diputación provincial.⁴⁹⁵

Siguiendo con el debate, por el decreto del 24 de julio, el Cabildo contestó tener muy presente lo que Solórzano y Francisco y otros decían, al igual que las disposiciones de las Reales Cédulas que se encontraban en el título 15 del libro

⁴⁹³ David CARBAJAL LÓPEZ, “¿Un “Patronato ritual”? La autoridad civil en la liturgia en México durante la primera mitad del siglo XIX”, en Juan Carlos CASAS GARCÍA, Pablo MIJANGOS Y GONZÁLEZ (Coords.), *Por una Iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía, primer arzobispo de Michoacán (1810-1868)*, México, Universidad Pontificia de México, El Colegio de Michoacán, 2014, p. 35.

⁴⁹⁴ Se infiere que es la obra de Francisco DE ELIZONDO Y ÁLVAREZ titulada *Práctica universal forense de los tribunales de España y de la Indias*. El texto de Solórzano y Pereyra es muy breve al respecto, pero muy ilustrativo pues refiere que a los virreyes se les hacían todas las ceremonias y preeminencias que a los mismos Reyes porque eran de inmediata representación de la persona Real y sólo se le negarían los que estaban estrictamente prohibidas. Juan DE SOLÓRZANO Y PEREYRA, *Política indiana*, Tomo II, 1776, Madrid, p. 373.

⁴⁹⁵ AHCM, Siglo XIX, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja 193, Exp. 29. La *Recopilación de las Leyes de Indias* es muy explícita en cuanto a los honores en las asistencias públicas y a la iglesia. En ella se estipula que el virrey debía ser recibido con palio, sólo cuando tomaba posesión de sus iglesias. Los miembros de la Audiencia debían acompañar al virrey a misa los primeros tres días de pascuas y los de Corpus. Cuando concurriera a las iglesias metropolitanas y catedrales, los cabildos debían recibir al virrey hasta la puerta de la iglesia y lo mismo al salir. El ministro debía llevar la paz al virrey, además en las concurrencias a la iglesia del virrey y la Audiencia se harían en tabla con almohada, fino fillo y alfombra. En la iglesia el virrey, el presidente de la Audiencia y el cabildo tomarían asiento dentro de la capilla mayor, entre otros. *Recopilación de las leyes de los reinos de las indias*, Tomo II, Miguel Ángel Porrúa, México, 1987

3º de la *Recopilación de Indias*, en realidad la mesa capitular no creía correcto hacerle los honores ofrecidos a los virreyes en el sistema extinto, porque se les tributaban en calidad de Vice-patronos y finalmente el gobernador no se hallaba en ese caso, ello llevaba al desconocimiento por un lado y a la pregunta por el otro, de cuáles eran los que debía dispensarle por el solo hecho de ser gobernador del estado, con el objeto de evitar todo lo que pudiese alterar la paz y la buena armonía que debía reinar entre las autoridades. El cabildo concluyó manifestando al gobierno del estado que le haría los que la Iglesia Metropolitana de México practicaba cuando asistía el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación.⁴⁹⁶

Puestos de acuerdo sobre las formalidades, el primer evento al que asistió el gobierno, una vez decretado el protocolo, fue la instalación del Superior Tribunal de Justicia, cuyos tratamientos no fueron de acuerdo con lo estipulado por el decreto, según lo estimó la autoridad civil.⁴⁹⁷

Estando a las puertas de la Jura de la Constitución de 1824, el Congreso debatió en sesión secreta las faltas en los honores hechos al ejecutivo local el día de la instalación del Superior Tribunal de Justicia, por lo que se consultaba si el gobernador debía asistir, a lo que el pleno del Congreso acordó que sí. Pero, además, la discusión se inclinó hacia otro punto, que de acuerdo con lo expuesto en el decreto cuando se hablaba de los honores que se les hacían a los Virreyes, fue sin distinción alguna, y no considerándolos como patronos, sino como Potestad Suprema. El problema estribaba en que el Cabildo Catedral se negaba a hacerle los honores que se le hacían al virrey en el sistema extinto porque eso

⁴⁹⁶ AHCM, Siglo XIX, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja 193, Exp. 29.

⁴⁹⁷ El día de la instalación del Superior Tribunal el Cabildo catedralicio dispuso que “al lado del evangelio, y contigua a las gradas del Presbiterio se pusiera una tarima elevada, cubierta, con un tapete, y sobre ella la misma silla, y el mismo sitio que ha servido a los señores Obispos, es decir una mesa adornada con una cortina de terciopelo carmesí y franjas de oro con dos almohadas de lo mismo, una sobre la mesa y otra sobre la tarima, que a continuación se pusiesen otras cinco sillas de brazos para los señores Ministros de aquel tribunal, y otra del lado de la epístola como se ha acostumbrado para el señor Comandante General de la Provincia y enseguida por una, y otra parte las bancas para el ilustre ayuntamiento y demás corporaciones, escogiendo para todo lo mejor y más decente que tiene esta Santa Iglesia...” Respecto al recibimiento se le abrió la puerta principal, la cual sólo se le abría a los Obispos y para las procesiones del Corpus, a la que salieron cuatro capitulares a recibirlo, el más antiguo de ellos le dio el agua bendita, quienes a su vez iban acompañados por los capellanes de coro, el pertiguero y un acólito que llevaba el acetre, todos acompañaron al gobernador hasta su asiento. En la misa se dijo la confesión y el credo por dos capitulares y el sacristán mayor le dio la paz y se le despidió en los mismos términos que en que se le había recibido. AHCM, Siglo XIX, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja 193, Exp. 29.

implicaba el ejercicio del Patronato, ese fue el argumento de la parte eclesiástica. En esa misma discusión, la legislatura acordó que el gobernador no asistiera, siempre y cuando el Cabildo no se prestare a esta determinación, parte que fue reprobada por los diputados eclesiásticos Lloreda y Rayón, quienes se abstuvieron de votar.⁴⁹⁸

Para noviembre de ese mismo año el asunto del protocolo seguía siendo tema de importantes discusiones en el pleno del Congreso, pues este consideraba que el Cabildo se resistía a cumplir con el decreto; para contrarrestarlo, se pretendía darle la autorización al gobernador para que lo hiciera cumplir. Así mismo, se argumentó que el Cabildo había confundido los honores entre Potestad Suprema y Patrono que, de acuerdo con los legisladores, los primeros eran superiores a los segundos y que justo los que se resistía en hacer eran los que eran propios de Príncipes, Presidentes o Gobernadores, quienes ejercían la soberanía.⁴⁹⁹ En este sentido, Pastor Morales y Huarte argumentaron que el soberano Congreso general había decretado que al Presidente de la Federación se le concedieran las mismas preeminencias que habían gozado los Patronos regios. Por su parte, Rayón consideraba que el Cabildo había cumplido con el mandato al hacer los honores como Potestad Suprema. La propuesta fue aprobada absteniéndose de votar el diputado Rayón.⁵⁰⁰

A finales de noviembre de 1824, el diputado Villaseñor consideraba que el gobierno debía asegurarse de que el Cabildo catedral cumpliera con el decreto de tratamientos a las autoridades; lo cual generó una discusión importante con el diputado Lloreda que “por haberse acalorado la disputa” ésta se suspendió, para dar paso a otros asuntos; sin embargo, fue retomada más tarde en esa misma sesión. Ya en la segunda ronda de debate, Lloreda consideraba que la manifestación del Cabildo se encontraba fundamentada en la justicia y por tanto proponía que el gobierno viera como justo el argumento dado por éste, añadiendo que convenía en revocar el decreto. Villaseñor se opuso a lo expuesto por el eclesiástico, por lo que el presidente González debió intervenir y

⁴⁹⁸ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo I, pp. 338-339.

⁴⁹⁹ *Ibíd.*, pp. 337-338.

⁵⁰⁰ *Ibíd.* p. 389.

manifestar que constara en el acta que se le había impedido la palabra en dos ocasiones; así mismo, se solicitó al diputado Lloreda que abandonara el salón de sesiones.⁵⁰¹ Dos días después, en la representación que se encontraba elaborando el Cabildo para enviar al Congreso general, se ponía de manifiesto la necesidad de que éste determinara cuáles eran los honores que correspondían las autoridades estatales, que estos se especificaran vía decreto y fuera extendido a todos los estados para uniformar el asunto y evitar disturbios y cualquier tropelía que pudiera intentarse contra el Cabildo, “que justamente la recela al ver que siguen las acaloradas disputas sobre su última contestación, y que por que hubo un diputado eclesiástico que opinó estar conforme justicia no solo fue ultrajado por algunos de sus colegas sino aun fue expelido del Honorable Congreso.”⁵⁰² En este pasaje se refiere a lo ocurrido con el diputado Lloreda.

Con el paso del tiempo, la postura que debía asumir el gobernador ante la negativa del Cabildo de acatar el decreto seguía siendo tema de debate. Para esos momentos la Mesa Capitular ya había enviado al Congreso general el expediente que contenía toda la correspondencia entre ambas autoridades. Aun así, entre los legisladores existía la duda de si era correcto contestar al ejecutivo que “sin admitir otra excusa del Cabildo Eclesiástico, haga que este obedezca y cumpla el mencionado decreto”. Lloreda pedía que se suspendiera la resolución hasta que el Congreso general emitiera la suya y nuevamente surgió la desavenencia con Villaseñor, quien se opuso argumentando que “el Congreso general no era tribunal de apelación, ni tampoco Juez de los Estados”. Con esta intervención se suspendió la discusión y se puso a votación la contestación al ejecutivo, en la cual se abstuvo de votar el eclesiástico. Es de mencionar que a esta sesión no asistieron Rayón y Morales.⁵⁰³

El asunto dejó de aparecer con la frecuencia que lo hacía al interior de las actas, las cosas quedaron tensas, lo anterior se pone de manifiesto con la cercanía de la jura de la Constitución estatal. El gobernador envió a los diputados un oficio en el que hablaba del acontecimiento y todos los esfuerzos que se debían poner para que éste fuera hecho con la mayor solemnidad por todos los

⁵⁰¹ *Ibíd.* pp. 430-432.

⁵⁰² AHCM, Siglo XIX, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja 193, Exp. 29.

⁵⁰³ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo I, pp. 504-505.

poderes, así mismo dispondría de todo lo necesario “excitando al venerable Cabildo, para que por su parte coopere al mismo fin.”⁵⁰⁴

Tres elementos a rescatar son que dentro del sistema de división de poderes el Congreso se asume como el poder superior. Así mismo, el valor de las celebraciones públicas, pues eran la ocasión por excelencia para poner en escena las evoluciones de las personas y asociaciones, con una delimitación, que reflejaba la organización de la sociedad y sus autoridades.⁵⁰⁵ Finalmente, el decreto implicaba la sujeción del orden eclesiástico ante las nuevas autoridades que no sólo debía de quedar claro entre ambos poderes sino ante la población, lo que fue acompañado por la resistencia que manifestó el Cabildo.

4.6. El precio de la soberanía: Patronato y rentas decimales

En cuanto a los debates, los eclesiásticos José María Rayón, Manuel de la Torre Lloreda y Juan José Pastor Morales en ocasiones mostraron mayor inclinación por determinadas temáticas, sin que necesariamente coincidieran sus puntos de vista; sin embargo, existieron asuntos en los que usualmente mantuvieron la misma postura.

Con la declaración de independencia, muchas de las discusiones se enfocaron a determinar quiénes eran los depositarios de las competencias que habían sido del rey. El tema de la intervención del diezmo y participación del gobierno nacional y estatal derivó en una constante correspondencia, entre las autoridades civiles y eclesiásticas de la entidad, que refleja importantes tensiones por las acciones emprendidas desde el legislativo local y las reacciones que ante las mismas manifestaba el Cabildo Catedral.⁵⁰⁶

⁵⁰⁴ *Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835*, Tomo II, pp. 411-412.

⁵⁰⁵ Frédérique LANGUE, “Prácticas en espejo: estructura, estrategias y representaciones de la nobleza en la Nueva España”, en Georges BAUDOT (Coord.), *Poder y desviaciones: génesis de una sociedad mestiza en Mesoamérica*, Siglo XXI, México, 1998, pp. 159-160.

⁵⁰⁶ El cobro del diezmo fue un elemento de la época colonial cuya vigencia traspasó el proceso de independencia, acentuando importantes diferencias entre la Iglesia y el gobierno nacional y local. Se cree que el diezmo tuvo sus orígenes en las costumbres del pueblo hebreo, de carácter moral, aunque después fue impuesto a los fieles, quienes pagaban u otorgaban una décima parte del producto, se pagaba en especie afectando a todos los ingresos; posteriormente se gravó a los productos agrícolas solamente. Para el caso de la Nueva España y posteriormente México, la historia del diezmo comienza en el siglo XVI a partir de las donaciones que el Santo Padre hizo de ese producto a los reyes españoles. Arístedes MEDINA RUBIO, *La Iglesia y la producción agrícola en Puebla 1540-1795*, México, El Colegio de México, 1983, pp. 50-51.

El 7 de mayo, Huarte consideró pertinente tomar cartas en el asunto de los diezmos, pues se tenía información de que el Cabildo Catedral hacía reparticiones escandalosas de dicho rubro. Para el caso se daba informe de que al Deán Martín Gil y Garcés se le había hecho una libranza de 10 mil pesos por San Luis Potosí, con orden de pagaré vendiendo los frutos a cualquier precio. Este tipo de situaciones hacía que el legislador propusiera la figura del interventor de diezmos bajo jurisdicción del gobierno, para evitar afectaciones a la Hacienda. Por su parte el diputado Salgado sugirió que de resultar implicados el contador de diezmos u otros individuos que no fueran del clero se les debía formar causa ante el tribunal correspondiente.⁵⁰⁷

El 11 de mayo en sesión secreta se leyeron los puntos propuestos por el diputado Huarte, en primer lugar, solicitaba al Congreso que el gobierno interviniera para evitar las anticipaciones escandalosas de la gruesa decimal, segundo, que el ejecutivo formase un expediente con los adelantos que de dichos caudales habían recibido los prebendados y dependientes de Clavería, Haceduría y Contaduría de diezmos. Para la fiscalización de los recursos solicitaba el nombramiento de un contador por parte de las autoridades estatales. La propuesta pasó a la comisión de Negocios eclesiásticos y Hacienda.⁵⁰⁸ En el tema del diezmo, se cuestionó si los curas debían ser partícipes del reparto de la gruesa decimal, eximiendo con ello a los feligreses del pago de obvenciones y preguntando si a los labradores se les rebajaría una parte.⁵⁰⁹

El 7 de mayo, ningún eclesiástico intervino en la discusión de los diezmos, pero el 18 de mismo mes, Lloreda pronunció un largo discurso, en el que manifestaba la gravedad del asunto, implicaciones, consecuencias, delicadeza, dificultades y temores al tratar el tema, por lo que sugería que para salir con honor del mismo “tendría mejor éxito tratándolo por medios suaves entrando en una conciliación.” Lloreda en ese momento era parte de la comisión, por lo que Huarte, en calidad de presidente, le solicitó que la forma de pensar de la comisión se introdujera en el dictamen. No obstante, se infiere que la observación del

⁵⁰⁷ *Actas y decretos*, Tomo I, p. 35.

⁵⁰⁸ *Ibíd.*, pp. 41-42.

⁵⁰⁹ *Ibíd.*, pp. 45.

presidente del Congreso se hizo porque Lloreda hablaba por sí y no a nombre de la comisión.⁵¹⁰

El 25 de mayo se dio lectura al dictamen de la comisión, el cual no respaldaba la propuesta de Huarte y que a su vez concordaba con el posicionamiento de Pastor Morales, quien fundamentaba su argumento en la pacífica posesión en que había estado la Hacienda Pública de percibir los novenos vacantes, concluyendo promover el cobro de acuerdo a las leyes, lo cual fue del agrado de Villaseñor. Rayón habló a favor del dictamen, argumentando que el Concilio de Trento prohibía que la potestad secular se entremetiera en materia de diezmos, si el gobierno deseaba acceder a dichos recursos sería a través de la conciliación y negociando con la silla apostólica. Lloreda, como parte de la comisión y en lo individual, aprobaba el dictamen, argumentando que para hacer el cobro a la catedral era necesario que se declarase “que el Patronato de las Iglesias estaba en la Soberanía de la Nación”. Por su parte Huarte, Villaseñor y Pastor Morales decían que el punto no era el Patronato, sino unos derechos que habían percibido los Reyes de España y después la nación cuando su gobierno se hizo constitucional. La discusión siguió, en contra del dictamen hablaron Huarte, Villaseñor, González y Pastor Morales, a favor, Rayón, Lloreda y Lejarza, finalmente el dictamen fue desechado.⁵¹¹ Por otra parte, se acordó decirle al gobierno que actuara al respecto a través de los medios legales y se cobrara al Cabildo catedral las cantidades que debían entrar en cajas nacionales. En dicha decisión salvaron su voto Rayón, Lejarza, Quevedo y Menéndez, en rechazo a la resolución.⁵¹²

El debate de dicha sesión secreta había sido intenso, cuatro días después, se sabía que lo discutido había trascendido a las afueras del recinto. González proponía cesaran este tipo de sesiones y se formara un extracto de las realizadas y se publicaran, con el objeto de acabar con las interpretaciones siniestras que se habían hecho sobre el debate de la deuda decimal. González consideraba necesario “que se indague por los medios más enérgicos el origen por donde se ha divulgado la revelación del secreto, en que se ha hollado con el juramento, con el honor de los Diputados y con la dignidad del Congreso” pues esto le hacía

⁵¹⁰ *Ibíd.*, p. 54.

⁵¹¹ *Ibíd.*, pp. 63-64.

⁵¹² *Ibíd.*, p. 65.

perder el prestigio que representaba en el mismo estado y con los demás de la federación.⁵¹³ En sesión secreta del 17 de julio el diputado Jiménez solicitaba al Congreso que preguntara al Teniente Gobernador sobre el resultado del oficio del 25 de mayo, referente al cobro de la deuda decimal, a lo que salvaron sus votos Rayón Lejarza y Menéndez, Lloreda no asistió a la sesión de ese día.⁵¹⁴ Pocos días después, el 22 de julio, el gobernador contestaba al Congreso que había suspendido la orden dada sobre el cobro al Cabildo catedral por temor a que éste no tomara a bien dicha orden y ello pudiera derivar en algún desorden que el gobierno no pudiera contener por falta de tropa, así mismo consideraba conveniente esperar a que el Congreso general diera instrucciones referentes a la clasificación de rentas. Al respecto, Pastor Morales era de la opinión que no existían motivos para suspender la orden dada por el Congreso y que el gobernador debió informar al legislativo sobre sus temores, “que es la ley expresa, que la Hacienda no había de entrar despojada en juicios contenciosos. Que el gobierno estaba en derecho de recibir los adeudos sobre diezmos, y que el Cabildo no parecía negar la deuda.” Por su parte, Rayón concordaba con Morales en que el gobernador no debió suspender la orden, pero sí consideró que “siendo el asunto tan delicado debía, y era muy justo esperar las deliberaciones del Congreso General”. Lejarza, se unió a la opinión del Rayón, agregó que el asunto se encontraba sujeto a las complicaciones de la reunión de varios estados dentro del Obispado, por ello era preciso esperar indicaciones del Congreso general. Mientras que el diputado González dijo se pusiera un interventor. Salgado, en su calidad de presidente, se sorprendió cómo en el pleno del Congreso “hay quien se oponga”, y que era evidente que debía evitarse la dilapidación de recursos. Finalmente la legislatura acordó que se siguiera adelante con lo mandado, salvó su voto Menéndez y faltaron a la sesión Huarte y Lloreda.⁵¹⁵

El 17 de agosto Pastor Morales, presidiendo la legislatura, solicitó se leyera la representación del Cabildo Catedral en la que pedía la revocación del acuerdo de 25 de mayo sobre el cobro de la parte decimal y el establecimiento de un interventor. La misma fue leída en la siguiente sesión secreta. El 25 de

⁵¹³ *Ibíd.*, p. 69.

⁵¹⁴ *Ibíd.*, p. 156.

⁵¹⁵ *Ibíd.*, p. 166.

agosto el diputado Lloreda propuso conciliar opiniones respecto al tema de los diezmos aprovechando el escenario de la división de rentas que planteaba la federación.⁵¹⁶ Transcurrió un tiempo hasta que el 9 de octubre, Isidro Huarte solicitó se leyera el dictamen de la comisión de Hacienda acerca de la representación del Cabildo sobre el cobro de la parte decimal a través de un interventor, pero al dictamen le faltaban las firmas de los miembros de la comisión, por lo que su lectura quedó pendiente. En sesión pública del día 11 del mismo mes, Huarte y Rayón, en su calidad de secretarios, preguntaron si se hacía la lectura del dictamen en público, considerando que ya no necesitaba reserva “porque se había hecho bastante pública” y se mandó leer el dictamen. En la sesión pública del 13 de octubre, Lloreda solicitó se diera segunda lectura al dictamen del cobro de las rentas decimales e interventor, a lo que Pastor Morales dijo que al ser una sesión extraordinaria no se debía discutir el asunto. Lloreda repuso que ya había pasado el tiempo para su segunda lectura, además quería dar la indicación de que se sacaran copias de él para que los diputados conocieran más sobre la materia, se sacaron dos copias, una para Lloreda y otra para Morales. El 16 de octubre se dijo que el dictamen sería discutido en la primera oportunidad.⁵¹⁷

Y así fue. En la sesión pública de 18 de octubre, se puso discusión el dictamen de la comisión de Hacienda y Negocios Eclesiásticos, con motivo de la representación que había hecho el Cabildo catedralicio por la providencia que le había intimado el Gobierno sobre el Interventor que se mandaba poner en las rentas decimales y surgieron cuatro propuestas, después de una larga exposición de razones, en las que se probaba que el gobierno podía y debía intervenir las rentas decimales:

Primera, que la representación del Cabildo Eclesiástico se pase al Gobierno para que determine sobre ella lo que estime conveniente. Segunda, que para ocurrir las urgentes necesidades del Estado, y que éste pueda saber los caudales con que cuenta, averigüe con la mayor prolijidad y exactitud lo que corresponde a la gruesa decimal, y haga que inmediatamente entre a sus Cajas particulares, cuanto se haya vencido hasta el dieciséis del corriente, o meses anteriores, conforme al modo con que se reparten los diezmos; de manera que cada mes se perciba sin falta alguna, la parte que le toque, sin que obste no estar liquidado lo que han de haber los Estados de Guanajuato y San Luis, a los que se reintegrará

⁵¹⁶ *Ibíd.*, pp. 225, 229 y 237.

⁵¹⁷ *Ibíd.*, pp. 320, 322, 329 y 336.

lo que se tomare de más, o se cobrará lo que se perciba de menos, Tercera, que pidiendo a la Catedral la excepción de Bulas y reales órdenes que le sirven la regla para la distribución de los diezmos, haga se cumplan absolutamente, ínterin no se determine otra cosa por autoridad competente, dando parte al Congreso de las faltas que note, o de las dudas que se le ofrezcan en la materia. Cuarta, que, de lo determinado en los tres artículos precedentes, dé el mismo gobierno aviso al Cabildo para su inteligencia.⁵¹⁸

El primero en intervenir fue Lloreda, quien consideró pertinente no discutir el punto hasta que estuvieran todos los diputados, lo cual fue rechazado por sus compañeros. Ya en el análisis del dictamen, Pastor Morales opinó que la comisión no había plasmado la esencia del asunto que era si la legislatura estaba a favor o en contra de la propuesta del Cabildo. El objeto de tener una copia del dictamen era para consultar si procedía o no la revocación solicitada por el Cabildo y no para que se dijera si era justa la deuda. De entrada, el eclesiástico dijo que el recurso de la Iglesia, o era sobre competencia de jurisdicción o sobre punto de justicia, y ni en ninguno de los casos podía alegarse o proponerse al Congreso, una acción decisiva en la materia.⁵¹⁹ Respecto al interventor, este no se debía poner sin conocimiento de causa, sino sobre expediente y con conocimiento de causa, pues si no podría hallarse el caso de que el Cabildo contara con tres interventores y otro del Supremo poder de la Federación, cuestión que no había expuesto la comisión. Al respecto Rayón comentó que el Congreso no podía tomar providencia alguna en el cobro de las rentas decimales hasta el 16 de octubre, ya que el artículo 12 del decreto de clasificación de rentas de la federación así lo marcaba.⁵²⁰

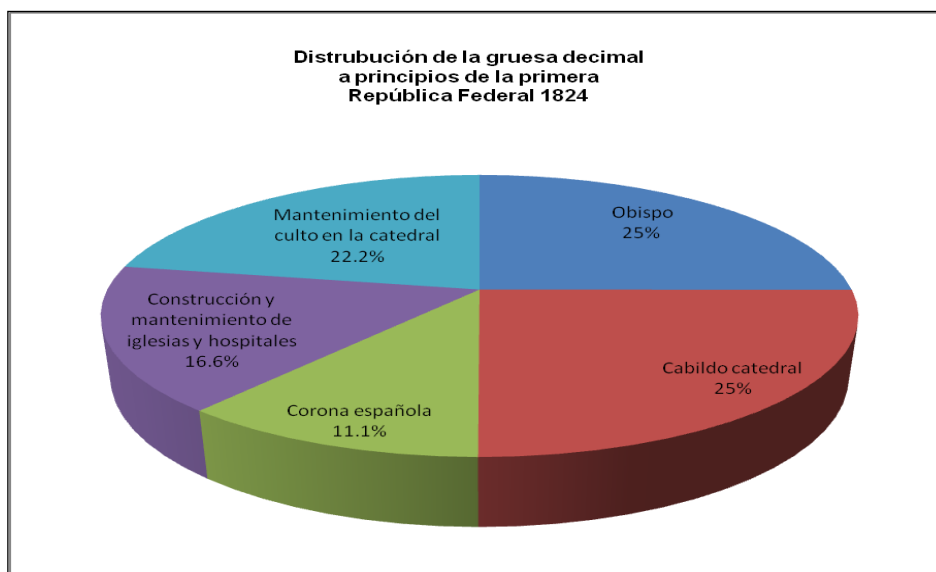
De acuerdo con el decreto, las modificaciones en cuanto al reparto de la gruesa decimal antes y después del 16 de octubre de 1824 se pueden apreciar en las gráficas no. 4 y no. 5

GRÁFICA No. 4

⁵¹⁸ *Ibíd.*, pp. 340-341.

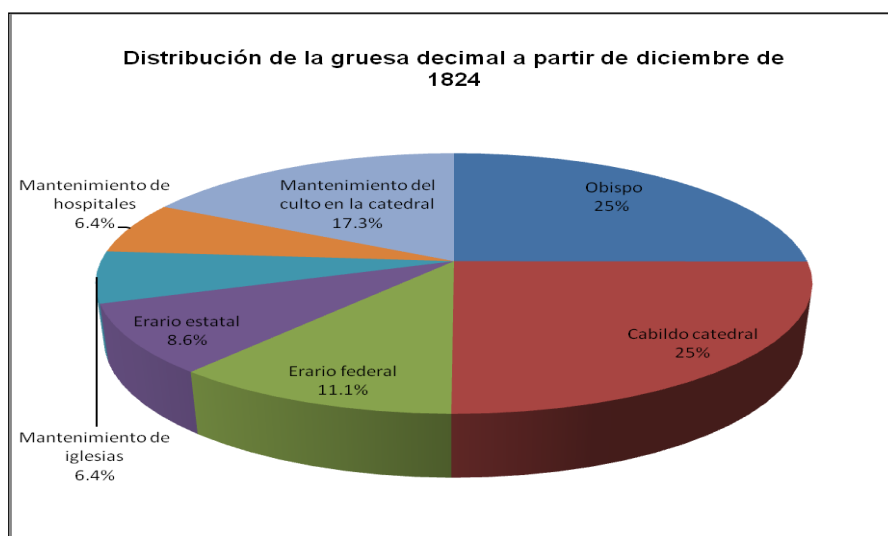
⁵¹⁹ *Ibíd.*, p. 341.

⁵²⁰ *Ibíd.*, pp. 341-341.



Fuente: VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, "Federalismo, reconocimiento e Iglesia", en Manuel RAMOS MEDINA (Comp.) *Historia de la Iglesia en el siglo XIX*, México, El colegio de México-El Colegio de Michoacán-Instituto de Investigaciones José María Luis Mora-UAM-Iztapalapa-Centro de Estudios de Historia de México, 1998, p. 103.

GRÁFICA No. 5



Fuente: *Ibíd.*

Lloreda, por su parte, habló de los diezmos, su origen, de los objetos de su inversión y su derecho natural, divino y eclesiástico argumentando que el rey no había tenido derecho a ellos como soberano, sino por concordato hecho por el Santo padre, que los diezmos fueron concedidos a la persona del rey y no transmisibles a la Nación. Por tanto, el asunto competía a la Federación y el gobierno local solo podía ponerse de acuerdo con el Cabildo para que éste le

otorgara un adelanto de lo que al estado le correspondía y aunque el Congreso pudiera hacer que se llevara a cabo la liquidación de las rentas esto no sería hasta dentro de dos años. Huarte estaba en contra de lo dicho por Lloreda, finalmente por proposición de Pastor Morales se dijo que no había lugar a la proposición del Cabildo que la respuesta pasara al ejecutivo para que este hiciera lo correspondiente.⁵²¹ En sesión pública del 20 del mismo mes, el Congreso declaró no haber lugar a la solicitud del Cabildo respecto a la revocación de imponer un interventor de diezmos y que la resolución se comunicara al gobernador, la que fue reprobada por los eclesiásticos Rayón y Lloreda, quienes se abstuvieron de votar la propuesta en general, mientras que Morales sólo reprobó la última parte.⁵²²

El segundo punto del dictamen señalaba que para dar salida a las necesidades económicas del estado se averiguara la cantidad que correspondía de la gruesa decimal para que en su momento estas entraran a las arcas del gobierno. En tercer lugar, que el gobierno pidiera a la Catedral la exención, bulas y reales órdenes que sirven de regla para la distribución de diezmos y haga que se cumplan, mientras no se determine otra cosa por la autoridad competente dando parte al Congreso de las faltas observadas o dudas respecto de la materia. La solicitud de los documentos a la Catedral suscitó una larga disputa, que concluyó con su votación y fue reprobada por mayoría por no ser del asunto.

⁵²³

El 21 de octubre, se dio lectura a la propuesta surgida de la consulta de si el estado tenía o no derecho a cobrar lo causado en las rentas decimales, antes del 16 de dicho mes, el asunto fue reservado para otro momento. En sesión secreta del 26, el diputado González propuso se escribiera al Presidente de la República para ponerlo al tanto de lo que había ocurrido con el cobro de la deuda de los diezmos: la falta de pago a la tesorería del estado por parte del Cabildo, la dilapidación que se había observado en las rentas y desentendimiento a cumplir la instrucción que el Supremo Gobierno remitió al Cabildo, para que los pagos se llevaran al método que guardaba la Santa Iglesia Metropolitana de México, con cuyo objeto se había retirado la orden del Interventor que había

⁵²¹ *Ibíd.*, p. 343.

⁵²² *Ibíd.*, p. 345.

⁵²³ *Ibíd.*, pp. 345-346.

mandado poner el año pasado y por cuyos motivos se hizo la solicitud, para que enterado de ello el Supremo Gobierno dispusiera lo que juzgara conveniente en razón de pertenecer a la Federación el crédito que resultare. Lo cual fue admitido para discusión pasando a la comisión de Negocios eclesiásticos.⁵²⁴ Poco después, el 11 de noviembre en sesión secreta, la comisión de negocios eclesiásticos leyó el dictamen de González. Por su parte, Huarte ante la actitud del Cabildo, pidió que la asamblea declarase qué debía hacer cuando la autoridad eclesiástica no quisiera obedecer una orden de dicho órgano.⁵²⁵

En el acaloramiento de las discusiones por la desobediencia del Cabildo sobre el pago de diezmos, se cruzaron otros asuntos que tocaron el punto en pleno proceso de discusión del tema. Por ejemplo, el debate del proyecto de ley sobre la sistematización de la Hacienda Pública, en los cuales se declararon como parte de las rentas estatales: el tabaco, el papel sellado, la alcabala, la contribución directa y los diezmos, entre otros. Respecto a este último rubro, el diputado Rayón se opuso si no se agregaba la expresión de que se había de reconocer por el estado, previa declaración de la silla apostólica, a lo que se opusieron Pastor Morales, Huarte y Villaseñor tocando en su argumentación diversos puntos, desde el origen de los diezmos, su derecho, la cesión de Alejandro VI a los reyes de España, y cómo estos habían dejado de ser diezmos espirituales, por lo que la silla apostólica no tenía que hacer nuevas aclaraciones al respecto. Sometido a votación salvaron su voto Rayón y Menéndez.⁵²⁶

En la sesión secreta del 13 de noviembre, se leyó el dictamen sobre dar a conocer a la federación lo ocurrido con el cobro de los diezmos al Cabildo de Valladolid, enviándole instrucciones, documentos y copias autorizadas, el cual se dejó para discutirse oportunamente. Ese día también se dio lectura de nuevo a la propuesta de Huarte sobre qué hacer cuando el Cabildo catedralicio se negara a obedecer los decretos de la asamblea, la que pasó a la comisión de legislación.⁵²⁷

El 30 de diciembre de 1824 llegó al Congreso un decreto del gobierno federal, en que pedía a los estados no hacer variaciones en los puntos

⁵²⁴ *Ibíd.*, pp. 146, 162.

⁵²⁵ *Ibíd.*, p. 391.

⁵²⁶ *Ibíd.*, pp. 394-395.

⁵²⁷ *Ibíd.*, p. 397.

concernientes a las rentas eclesiásticas.⁵²⁸ En sesión secreta de 10 de enero de 1825, Huarte solicitaba que se dijera al gobierno para que avisara a la Contaduría de Diezmos, que el ingreso de diezmos se llevara en cuentas separadas por estados: Michoacán, San Luis y Guanajuato.⁵²⁹ En la sesión pública del 8 de marzo, se leyó el dictamen a la propuesta de Huarte, la comisión dispuso que el gobierno mandara a la contaduría de diezmos llevar una cuenta escrupulosa y separadamente de los ingresos desde el 16 de octubre de 1824 ello por lo que respectaba al estado de Michoacán y en segundo lugar que se hiciera llevar a los administradores de diezmos la cuenta de lo que desde dicha fecha se recogiera.⁵³⁰

En este punto de la discusión los problemas suscitados fueron varios, primero la abrogación de los diezmos por parte de la federación dándole participación a los estados, sin un concordato con la Santa Sede, ¿qué era eso, sino el ejercicio virtual del patronato? Por otro lado, la cuestión de que las demarcaciones territoriales de los estados no coincidían con las de los obispados, lo que generó no pocos problemas tanto a las autoridades civiles como eclesiásticas. Tal como lo señala Rosalina Ríos para el caso de Zacatecas, este estado quedó bajo la jurisdicción de dos obispados: el de Guadalajara y el de Durango, razón por la cual el gobierno estatal determinó dejar en manos de la autoridad eclesiástica el cobro de los diezmos en 1831.⁵³¹

Estos fueron los últimos puntos que la legislatura trató referente a los diezmos dado que, para esos momentos, una de las prioridades legislativas era la discusión de los artículos constitucionales. El debate deja de manifiesto que las relaciones del Congreso y del gobierno con el Cabildo catedral eran tensas. Tal vez eso será tomado como experiencia para las siguientes legislaturas que asumirán los temas Iglesia-Estado con mayor cautela, desde el discurso hasta lo que se plasma en las actas. Por otra parte, queda claro que en el tema de los diezmos toda intervención conducía al ejercicio del patronato, el cual atrapaba a los eclesiásticos entre dos jurisdicciones: la civil y la eclesiástica.

⁵²⁸ *Ibíd.*, p. 505.

⁵²⁹ *Actas y decretos*, Tomo II, p. 30

⁵³⁰ *Ibíd.*, pp. 175-176.

⁵³¹ Rosalina RÍOS ZÚÑIGA, "El ejercicio del patronato", pp. 50, 61.

Los eclesiásticos Rayón, Lloreda y Pastor Morales participaron activamente en el primer Congreso constituyente michoacano, sus intervenciones giraron en torno a toda clase de asuntos a tratar; sin embargo, se aprecia que en los temas relacionados con las competencias de la potestad eclesiástica, a pesar de sus ideas ilustradas, siempre dieron sus argumentos en defensa de la institución a la que pertenecían. En las discusiones relacionadas con cuestiones eclesiásticas se advierte que generalmente existía un apoyo entre estos diputados y a su vez se pone de manifiesto un frente en su contra formado por Villaseñor y Huarte, respaldado por González y Salgado. Sobre todo, se observan constantes roces entre Lloreda y Villaseñor.

De los tres diputados eclesiásticos, Morales era el más comprometido con el encargo que le demandaba el estado, en los debates relacionados con la potestad eclesiástica asumió siempre una actitud más crítica y analítica, pero sin ir en contra de los preceptos religiosos o de orden interno de la institución. Mientras que Lloreda y Rayón mostraron una defensa más apasionada y por tanto de mayor compromiso con las autoridades eclesiásticas. Al ser un momento de tránsito hacia una nueva forma ejercer el poder civil, esto traerá resistencias, conflictos, desacuerdos e indefinición frente a las viejas prácticas e instituciones.

La legislatura constituyente había cumplido con su cometido al dotar a Michoacán de su primera Constitución, en la que quedaba plasmada el diseño institucional del estado. Al mismo tiempo la asamblea había logrado avances importantes en materia de ayuntamientos e impartición de justicia, Hacienda pública, bienes de comunidad, milicias cívicas, territorio y asuntos eclesiásticos, todo lo que le serviría de base al primer Congreso ordinario para continuar con la articulación del sistema federal en el estado.

CAPÍTULO V

LA ESTABILIDAD DEL PODER LEGISLATIVO DE MICHOACÁN. LA PRIMERA Y SEGUNDA LEGISLATURA, 1825-1829

5.1. La primera legislatura 1825-1827

5.1.1. Ignacio Ocampo y Pablo José Peguero diputados del primer Congreso, 1825-1827 y su contexto

Una vez sancionada la Constitución federal y la Constitución de Michoacán, se hacía necesario crear los soportes institucionales para que el sistema de gobierno adoptado funcionara. De 1825 a 1827 se evidenció que la articulación de los nuevos órganos de gobierno no sería cosa fácil, en buena medida por la bancarrota de la Hacienda nacional. Y aunque predominaba el consenso sobre la adopción del federalismo, éste tenía varias interpretaciones entre los hombres en el poder, lo que promovió fisuras entre la clase política que con el paso del tiempo llevaron a su polarización. Otros elementos a considerar parten de la inexperiencia de los actores, el que España y la Santa sede no reconocieran la nueva situación jurídica de México, aunado a la amenaza de una posible invasión que derivó en actos hispanofóbicos, lo que fue aderezado con las confrontaciones entre el ejército, la Iglesia y el gobierno.⁵³²

No obstante, un tema que tendrá profunda incidencia en la vida política e institucional de aquella época será la proliferación de las logias masónicas tanto en el centro del país como en los estados integrantes de la federación. En 1825 comenzaron a visibilizarse ligeras confrontaciones entre los yorkinos y los escoses. Había transcurrido poco más de un año de haberse adoptado el nuevo sistema de gobierno, la Constitución federal apenas había visto la luz y la mayoría de los estados continuaban con la redacción de sus propias Constituciones, pero era tal la desconfianza y el peligro que representaban estas agrupaciones que en 1826 se planteó su extinción.⁵³³

En el escenario estatal, Jaime Hernández refiere que, con la promulgación de la Constitución de Michoacán de 1825, se procedió a la ocupación de los

⁵³² Reynaldo SORDO CEDEÑO, "El Congreso nacional", p. 77.

⁵³³ *Ibíd.*, p. 88.

espacios de poder que marcaba el documento. El grupo criollo ocupó la gubernatura constitucional que recayó en el gobernador interino Antonio de Castro, lo mismo ocurrió con los órganos de justicia superiores y la mayoría de los espacios del Congreso. Este grupo era de tendencias liberales moderadas que pretendían construir un modelo político similar al proyecto gaditano, sin romper de tajo con el pasado colonial. Como contraparte de este grupo, se encontraba otro de tendencias radicales encabezado por el vicegobernador José Trinidad Salgado que albergaba antiguos insurgentes interesados en minar la influencia de los españoles en la vida política del estado. El historiador advierte que las instituciones republicanas no desarrollaron un rápido arraigo al interior de Michoacán a lo que se debe agregar la presencia de ritos masónicos que jugaron un papel preponderante en los momentos políticos más convulsivos que vivió el estado desde 1827 hasta 1833.⁵³⁴

La presencia de las logias masónicas en territorio michoacano se detecta a partir de 1821. En ese año se identifica en Valladolid a los “Tehistas Reformados”, presumiblemente del rito escocés, atribuyéndole su introducción a Mariano Michelena. Pero es hacia 1826 cuando proliferan estos ritos en Michoacán. A mediados de ese año se fundó la logia “Matamoros” de corte yorkino, introducción que se atribuye al militar Vicente Filisola. A dicho grupo fueron vinculados José Trinidad Salgado, vicegobernador del estado, como venerable maestro, el coronel de milicias cívicas Joaquín Caballero de Acuña y Manuel Castañeda. El objetivo de la organización consistía en influir en la provisión de empleos en el gobierno del estado, así como en las elecciones para diputados y senadores al Congreso General; no obstante, el intento fracasó debido al poco prestigio con el que contaban los agentes de la misma. A la par de la logia “Matamoros”, para ese periodo operaron la “Invencible Caltzontzin” en Zitácuaro y “Federación” en Zamora, cuya creación fue impulsada por el vicegobernador Trinidad Salgado.⁵³⁵ Por tanto es un tema a considerar porque las logias masónicas se verán vinculadas a la acusación en contra del titular del ejecutivo Antonio de Castro y a la expulsión de españoles.

Es en medio de este escenario que la primera legislatura ordinaria tendrá que adecuar su trabajo legislativo, la cual contó con la participación de dos

⁵³⁴ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*, p. 87.

⁵³⁵ Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, “El origen y protagonismo de la masonería,” pp. 56-64.

eclesiásticos Pablo José Peguero e Ignacio Ocampo; la actividad de este último fue muy escasa, tomando en cuenta que la legislatura abrió el 6 de agosto de 1825 y Ocampo tomó posesión del cargo el 20 de octubre.⁵³⁶

Dos días después Francisco de Aragón pedía que se le facilitaran al eclesiástico los avances referentes a las discusiones de la propuesta de creación de los códigos civil y criminal para que se empapara del asunto, que fue de las primeras inquietudes que se vertieron al interior de la asamblea. El 24 de septiembre Aragón había propuesto que ésta quedara conformada por tres diputados, un miembro del Superior y otro del Supremo Tribunal de Justicia en iguales términos, dos eclesiásticos elegidos por el vicario capitular del obispado y dos abogados nombrados por una reunión de todos ellos.⁵³⁷ La intención del diputado era que Ocampo tuviera conocimiento de lo que se discutía. A pesar de la propuesta de Aragón, la pregunta al interior de la junta era si el código debía ser formado por una comisión especial compuesta solo por diputados, Ocampo votó en contra que fue la decisión de la mayoría, mientras que Pablo Peguero gozaba de licencia.

El 7 de noviembre, Ignacio Ocampo fue electo secretario suplente del Congreso con 10 votos de 11. Sin embargo, el 9 de noviembre se reportó enfermo, con el paso de los días, las ausencias aumentaron, por lo que el eclesiástico solicitó informes al presidente del Congreso sobre los pasos a seguir para dimitir sus dietas, pues su enfermedad no le permitía ser útil al estado. Todo indica que su salud era delicada, porque la asamblea acordó, en esa misma sesión, enviar una comitiva para que le visitara. El día 2 de diciembre Joaquín Domínguez en su calidad de presidente del Congreso llamó al primer diputado suplente. El 13 de diciembre de 1825 la secretaría se daba por enterada sobre la separación del diputado Ocampo y del llamado de Mariano Chávez Carrillo. Con ello cierra la breve participación de este eclesiástico en el legislativo michoacano.⁵³⁸

Con la ausencia de Ocampo el único eclesiástico al interior de la asamblea fue Pablo José Peguero, quien estuvo presente desde el principio, salvo algunas

⁵³⁶ AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 5.

⁵³⁷ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Actas Secretas borradores, Caja, 1 Exp. 1, 24/IX/1825.

⁵³⁸ Cfr. AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 6, 7, 8. Exp. 7, 7/XI/1825. Exp. 8, 2/XII/1825, 13/XII/1825.

ausencias por enfermedad en el mes de octubre de 1825, hasta el final de la legislatura. Ocampo y Peguero coincidieron poco en el Congreso. Respecto a los oficios, Peguero ocupó la presidencia del Congreso en diciembre de 1825 y fungió como secretario menos y más antiguo en octubre y noviembre de 1826.

Peguero se caracterizó por su constancia y notable argumentación basada en la ley, lo que tiende a ser indicativo de amplios conocimientos en derecho. El eclesiástico participó en debates referentes al tabaco, la lidia de toros, instrucción, diezmos, el matrimonio y el celibato, anualidades eclesiásticas, ley de vagos y ladrones, uso de boletas de seguridad, contribución directa, bienes de comunidad, Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, administración de justicia, el tema de la esclava Salí y la acusación del gobernador por violar la Constitución. Algunas de sus intervenciones las sustentó con las ideas de “publicistas”, también aparecieron en sus debates Bentham y Filangieri o bien, las ordenanzas de la monarquía española de la segunda mitad del siglo XVIII y debates de las Cortes españolas.

Es nutrida y diversificada la participación de Peguero dentro de una legislatura donde eran pocos los diputados que tenían una profesión como abogados, de entre los que destacan el reelecto diputado Isidro Huarte.

En esta legislatura varias de las discusiones se fundamentaron en ideas de pensadores importantes para la época, claro, ya no tan enfocados al tema de la soberanía, sino de la economía y la propiedad principalmente. Entre estos destacan las corridas de toros, el tema del regateo en las plazas públicas y la contribución directa y en todas ellas la intervención del eclesiástico Pablo José Peguero se pone de manifiesto en algunas con más ahínco. Otros dos temas importantes que ocuparan a la legislatura y en donde habrá una importante participación de Peguero serán la ley de repartición de bienes de comunidad y la acusación al gobernador ante el Gran jurado. De los temas eclesiásticos tendrá intervención en las anualidades eclesiásticas, la promoción del matrimonio, los diezmos y el uso de la exclusiva. A pesar de su nutrida participación, no todos los temas serán abordados, por lo que serán priorizados aquellos en los que su discurso tenga mayor trascendencia legislativa.

5.1.2. Lo popular entre la costumbre y el derecho: toros y regatones

En esta legislatura participó activamente el eclesiástico Pablo José Peguero en el debate sobre las corridas de toros y los regatones. Estos temas tienen como hilo conector el que se utilizaran autores e ideas ilustradas y liberales a la hora de ser debatidos.

El tema de las corridas de toros tiene su origen en la lectura de la minuta de decreto sobre celebración de fiestas públicas el 19 de noviembre de 1825, las cuales no podían exceder de tres días en los pueblos. El diputado Manuel González consideró pertinente solicitar al gobierno para que se diera el cumplimiento de los bandos y órdenes de policía vigentes, mientras que Aragón puntualizó que el decreto hablaba en general de las fiestas políticas, pero no se precisaba si se hacía necesario tomar en consideración las diversiones que se practicaban en esa clase de funciones como lo eran las corridas de toros.⁵³⁹ El par de intervenciones dieron pie a una serie de debates al respecto. El presidente del Congreso alegó como extemporánea la observación pues el decreto estaba por aprobarse, pero por otra parte manifestaba que debía comprender alguna regulación al respecto, considerando la costumbre como de las más bárbaras de la dominación antigua, “calificada así por las naciones más cultas y la cual se podía prohibir.” González opinaba que no había lugar en el decreto para el tema de las corridas de toros, mientras que Aragón argumentaba la imposibilidad de su prohibición porque ya se habían otorgado licencias para ello y los pueblos con la gracia concedida seguramente ya habrían realizado gastos al respecto. En ese estado de la discusión, Peguero intervino “para conciliar ambos extremos” propuso que se dejara en los mismos términos el decreto, agregando la siguiente frase: “exceptuándose las fiestas públicas concedidas por el gobierno”. A esta adición se aunó la de González que versaba así: “que las fiestas que ordinariamente celebran los pueblos con motivo de las de sus Santos titulares y otras religiosas como pascuas no puedan en lo político exceder de tres días.” Ambas pasaron a la comisión junto con la de Aragón, quien recomendaba a la comisión que tomara en consideración la limitación o prohibición de las corridas de toros.⁵⁴⁰

⁵³⁹ AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 7, 19/XI/1825.

⁵⁴⁰ *Ídem*.

El 29 de diciembre de 1825 se leían las adiciones de la minuta de las fiestas públicas en donde la realización de corridas de toros quedaba bajo la facultad del gobierno, señalando que los toros para la lidia debían ser aserrados a media llave. La observación hizo que los diputados discutieran a favor y en contra por la ventajas y desventajas que traía el aserrar a los toros. González señaló que Jovellanos, quien había sido citado por la comisión, decía que estos animales eran muy buenos para la labranza y por tanto se perjudicaba ésta si los mataban. Y aun aserrados los toros causaban daño a la humanidad por los golpes que podían causar la muerte, por su parte Domínguez dijo que la comisión estaba de acuerdo con la exposición de González, pero remarcaba tener en cuenta el arraigo de dicha costumbre en los pueblos en virtud de la ignorancia, por lo que la comisión proponía su abolición de manera paulatina. A su vez, el eclesiástico Peguero cuestionaba que al extinguir la práctica se usarían otras privadas, cuya criminalidad sería mayor a la causada por las corridas de toros. González le contestó a Peguero enfatizando que si esas diversiones privadas no las había en el acto de los toros las habría antes o después y que no debían permitirse más corridas de las concedidas por el gobierno en la Jura de la Constitución.⁵⁴¹

El 31 de diciembre se volvió a tratar el tema, el que giró en torno a aserrar los toros y el matar a los toros que se lidiaban. Jovellanos salió de nueva cuenta a voz de González bajo el argumento manifestado en la sesión anterior, esta vez Huarte le contestó y dijo que respecto a la matanza de los toros lidiados Jovellanos lo había argumentado en España donde se sabía de la escasez de ganado, por lo que los bueyes y novillos, los más útiles para la labranza, eran engordados para matarlos. Respecto a la ingesta de esta carne, explicó “que por a mayor agitación o molimiento que sufría el toro corrido, acaso debía ser más benéfica la carne, porque esa carne siempre se vendía y no se habían manifestado causas de daño en quienes las consumían”, sin llegar a un consenso el dictamen volvió a la comisión.⁵⁴²

El 23 de enero de 1826 se volvió a discutir el tema, pero ahora sobre la abolición de las corridas de toros “por ser una costumbre bárbara y cuya ferocidad está en contradicción con las luces del siglo en que afortunadamente

⁵⁴¹ AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 8, 29/XII/1825.

⁵⁴² AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 31/XII/1825.

vivimos.” Manuel Chávez estaba en contra del dictamen porque de prohibirse se corría el riesgo de adoptar otras más nocivas e inmorales, pues aserrados los toros se removía el peligro de muerte a los toreros y eso también traía utilidad porque así se les perdía el miedo y se facilitaba el amansarlos para la labranza, además manifestando que los toreros que se habían adherido a la guerra insurgente mostraron un denuedo extraordinario en las acciones bélicas. Navarro por el contrario estaba a favor de la comisión y señalaba la necesidad de implementar otras diversiones como el teatro porque conducía a la ilustración. A su vez, Huarte contestó que no se podía negar que las corridas eran un abuso, pero que se debía tener presente que cuando estos eran comunes y generales merecían alguna consideración, por ello estaba en contra de la extinción absoluta, y que fueran lidiados aserrados. El diputado veía que la lidia aportaba destreza y facilidad para amansarlos y reducirlos a bueyes para la labranza, la discusión siguió con posturas a favor y en contra, y hasta cierto punto vinculadas con las destrezas a desarrollar en la guerra en las que intervinieron Domínguez y Mariano Chávez.⁵⁴³

Bajo ese estado las cosas, el eclesiástico Peguero habló, dijo estar de acuerdo con algunos de sus compañeros de que la lidia de toros era una diversión bárbara, aun así, era de la opinión que no debían prohibirse abruptamente porque era impolítico atacar de un golpe las costumbres muy inveteradas que solo se podían sustituir por otras y no por las leyes. Para fundamentar su argumento recurrió a la historia diciendo que:

Pío V fulminó efectivamente excomunión contra los legos, militares y eclesiásticos seculares, pero posteriormente fue levantada a los dos primeros por Gregorio XIII a solicitud de los Reyes de España, y después a los últimos por el Clemente VIII fundándose estos pontífices en el menor peligro que había ya a virtud de la destreza que habían adquirido los lidiadores.⁵⁴⁴

El presidente consideraba que aquí lo que se prohibía era lo público, mientras que Antonio Chávez hizo indicación de que había una propuesta al respecto que se había hecho en las Cámaras sobre este punto y si se aprobaba no sería decoroso al Estado de Valladolid. Entre el presidente del Congreso, Domínguez y González se debatió ligeramente la prohibición de la lidia,

⁵⁴³ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 23/I/1826.

⁵⁴⁴ *Ídem*.

finalmente se acordó que el decreto no comprendía las licencias que ya había otorgado el gobierno. Peguero propuso su suspendiera la publicación de la ley hasta que se verificaran las licencias concedidas, lo que fue aprobado, así como la indicación de Huarte de que se manifestara al gobierno el deseo del Congreso de que los toros a correrse fueran aserrados.⁵⁴⁵

El tema resulta interesante, en primer lugar, porque se veía la lidia como una práctica opuesta a la ilustración, en segundo por la cita de Jovellanos y el manejo que algunos legisladores tenían de él. Finalmente, la intervención de Peguero donde habla del poder de las costumbres y aunque no hace una vinculación obvia, sí deja entrever que la costumbre es una fuente del derecho, lo que denota el conocimiento que de éste tenía el diputado.

El resultado de estas discusiones fue un decreto de dos artículos, en el cual se tenía por primero la prohibición de las corridas de toros y por segundo que las fiestas políticas no debían pasar de tres días en su celebración. Nótese que ese no era el primer objeto del decreto que fue publicado con fecha de 24 de enero de 1826, no obstante, el 7 de noviembre de 1828 se suspendieron los efectos de esta ley.⁵⁴⁶ Lo que evidencia que a pesar de que varios diputados relacionaban las corridas con la falta de civilización y de poco beneficio para el pueblo, cierto es que en la práctica tenían mucha aceptación y generaban rentas para el estado.

Respecto al decreto de permitir el libre comercio a los regatones en el estado, éste tiene su origen en la solicitud que habían realizado los regatones de la ciudad de Valladolid para que se les permitiera la libertad de comercio dentro y fuera de la ciudad sin importar la hora. El 10 de diciembre de 1825 se puso a discusión el dictamen que se había formado a partir de la petición, la comisión de Gobernación propuso que el comercio de los regatones fuera declarado libre de restricciones, es decir, que no se ciñera a una hora determinada para comprar productos procedentes de otros puntos del estado. Echaiz dijo que la comisión se había apoyado en Jovellanos para emitir el dictamen, “y que si los regatones eran a su vez viciosos se debía recurrir entonces a las leyes vigentes”. La observación del diputado era producto del antecedente que había dado el Ayuntamiento de Valladolid al respecto y que queda claro cuando Domínguez

⁵⁴⁵ *Ídem*.

⁵⁴⁶ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo II, p. 47.

tomó la palabra para decir que el Ayuntamiento había manifestado que los regatones eran jugadores y holgazanes, lo que le sirvió de fundamento para señalar que era una vergüenza que el cabildo permitiera que a su vista se cometieran delitos. Por eso Echaiz manifestó que, si estos comerciantes tenían comportamientos no apropiados, se debían aplicar las leyes correspondientes. A su vez, el hecho de que el dictamen se hubiese fundamentado en los planteamientos “de los publicistas más célebres” logró convencer al diputado Manuel Chávez.⁵⁴⁷

Pero no fue el caso Huarte, quien habló en contra del dictamen pues desde su perspectiva no estaba instruido con todas las formalidades necesarias, no incluía los informes de los prefectos y del gobierno y la comisión planteaba otorgar más de lo que los regatones habían solicitado, señalando también que el Congreso no debía intervenir en los ordenamientos municipales. Huarte recomendaba tener en consideración la autoridad del Ayuntamiento, la cual era muy respetada por los publicistas, ya que muchos ponían como cuarto poder el municipal.⁵⁴⁸

El 13 de diciembre intervino Peguero para apoyar el dictamen dio lectura a la parte de la Ley agraria de Jovellanos, la cual favorecía la libertad de comercio, remarcando que si esta libertad provocaba el monopolio, la misma lo destruía. En la sesión del día 15 se trató el punto de si el decreto debía extenderse a todo el estado, o solo tendría aplicación a la ciudad de Valladolid, lo que llevó a una larga discusión, que desde la perspectiva de Peguero solo denotaba que debían hacerse algunas adiciones a la minuta. En efecto, la libertad se extendía a todas las plazas del estado y la adición que se consideró fue la definición de regatear.⁵⁴⁹

El día 17 manifestó Aragón que la noche del día anterior habían concurrido en gran número los regatones de Valladolid a su casa para darle las gracias por haber favorecido su solicitud y que le habían ofrecido doce pesos que no tomó, pero que éstos los habían dejado en su casa, por tanto, los presentaba a la asamblea para determinar qué hacía con ellos. Por indicación de Huarte y

⁵⁴⁷ AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 8, 10/XII/1825.

⁵⁴⁸ *Ídem*.

⁵⁴⁹ AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 8, 13/XII/1825, 15/XII/1825.

Domínguez se acordó entregar los doce pesos por conducto del gobierno a los suscritores de la solicitud.⁵⁵⁰

El artículo se reformuló y se presentó a discusión con las adiciones correspondientes el día 27 de diciembre, en ese mismo acto, se consideró pertinente definir la palabra regatear porque normalmente se entendía como la acción de comprar al menor precio posible de acuerdo con el legislador Pallares. A lo que Antonio Chávez dijo que en el diccionario hacía referencia a comprar por mayor para vender por menor, con lo que se determinó redactar el segundo artículo. El primero de ellos declaraba libre el comercio de regatear en todas las plazas del estado, el segundo remarcaba lo que se debía entender por esta libertad: el poder de comprar y vender dentro y fuera de poblado a cualquier hora.⁵⁵¹

Este tema permite tomar en cuenta un par de puntos, el primero referente a libertad de compra-venta que solicitaron los propios regatones de la capital del estado, petición que no sólo se aprobó, sino que el Congreso terminó extendiendo a todas las plazas del estado, pero sin tomar en consideración a los ayuntamientos, quienes eran los responsables directos en este asunto y que el único en advertirlo fue Huarte. Si bien, por una parte, el tema se vinculaba a la “libertad” de comercio respaldada por autoridades en la materia, el Ayuntamiento de Valladolid ponía la contracara de esa libertad que traería mejoras económicas, a costa de incentivar delitos como el juego, el vicio y la holgazanería.

En este punto podría cuestionarse que tanto el fundamentar un dictamen con “publicistas” garantizaba la aprobación de una propuesta, en un momento en que la práctica legislativa daba sus primeros pasos. El sustento de una ley en los teóricos de la época o el actuar bajo la idea de libertad no era garantía de éxito en la práctica en la que se hacían presentes los conflictos o las confusiones. Prueba de ello fue que el 22 de agosto de 1827 el segundo Congreso debió emitir una aclaración respecto a esta ley. En ella se estipulaba que la disposición de la libertad de regatear en nada restringía las atribuciones de las autoridades municipales. A la vuelta de dos años, el 26 de agosto de 1829 la tercera legislatura en su primer año revocó la ley de libre comercio de regatones en todas

⁵⁵⁰ AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 8, 17/XII/1825

⁵⁵¹ AHCEMO, I Congreso Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 8, 27/XII/1825

las plazas del estado y se dejaba a los ayuntamientos “en la antigua posesión” de arreglar la hora, el lugar y demás situaciones relativas al regateo.⁵⁵²

5.1.3. Del dominio a la propiedad privada. Los bienes de comunidad... una vez más

Como se ha visto, el 11 de julio de 1825 el Congreso constituyente había determinado que los bienes de comunidad pertenecían a los indígenas y que el gobierno debía tomar las providencias necesarias para llevar a cabo su repartimiento. En agosto de ese mismo año entró en funciones la primera legislatura ordinaria, el tema del reparto de bienes no se tocó hasta que el 27 de enero de 1826 el Consejo de gobierno propuso que se llevara a efecto la ley que prevenía la entrega de sus tierras a los indígenas, aun así, debió pasar tiempo para que la legislatura tuviera listo el dictamen para su discusión lo que ocurrió el 25 de noviembre de 1826 y el decreto salió a la luz el 18 de enero de 1827.

El decreto era pequeño, 9 artículos lo componían, en él se estableció que los comunales pertenecían exclusivamente a los descendientes de las primitivas familias y no a los fondos municipales; quedando en manos del ejecutivo la inspección del repartimiento individual en posesión y propiedad en partes iguales ya fuera en tierras o numerario, así como la prescripción de las reglas para tal efecto. De la misma manera, cada comunidad nombraría a pluralidad absoluta de votos una comisión compuesta de cinco individuos de dentro o fuera de su seno con total sujeción a las reglas que al efecto prescribiría el gobierno. El decreto también contempló gastos administrativos como el de comisionados, escribano y papel. Una parte muy importante del decreto fueron los criterios para ser acreedor en el reparto. Lo que se manifestó en el artículo 7º:

Cada una de las familias de las respectivas comunidades indígenas, representará una parte; teniéndose por familias para poder alegar derecho a los expresados bienes: 1º los casados con hijos o sin ellos. 2º Los viudos o viudas con hijos o sin ellos. 3º Los solteros y solteras que viviendo en la comunidad tengan 25 años cumplidos. 4º los huérfanos en estirpe que no estén comprendidos en las clases anteriores.⁵⁵³

⁵⁵² Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo III, p. 5, Tomo IV, p. 4.

⁵⁵³ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo II, p. 61.

Finalmente, el documento estipuló que, para la venta, enajenación o empeño, de los terrenos debían ocurrir tres años. El decreto en general recogió las inquietudes y preocupaciones de la legislatura. Sin embargo, llegar a ese consenso no fue tarea fácil, aun cuando ya había manifestado la legislatura anterior que los bienes eran de los indígenas, el tema condensó las primeras sesiones que se dedicaron al debate del reparto. El primero en poner el dedo en la llaga y que hizo dudar a sus compañeros fue el eclesiástico Peguero. Cuando la comisión de gobernación presentó el dictamen y se votó para su discusión, todos los diputados asistentes lo aprobaron a excepción de Peguero, pues cuestionaba si los llamados indios tenían el dominio total de dichos bienes.⁵⁵⁴ Para el eclesiástico, los indios cuando mucho podrían tener el dominio común como se deducía en el decreto de las Cortes españolas sobre este punto, en el que solo se les concedió la mitad, argumentando que si fueran suyas no habría justicia para que no se les entregara la otra mitad, infiriéndose de ello que las tierras eran nacionales y no de los indios.⁵⁵⁵

Entre las varias observaciones que hizo Peguero se encontraban que la ley citada en el dictamen no hablaba de estas tierras sino de las baldías o de realengo y que, aunque se probara la pertenencia de estas no debían repartirse, y de hacerlo, no debía realizarse solo entre estos porque “era contra derecho popular,” sin que por otra parte hubiese propiedad con los privilegios pontificios porque ya se sabía que solo debían disfrutar de estos las personas a quienes se les concedían.⁵⁵⁶

Esto fue el inicio de largas discusiones entre el orador del gobierno y el eclesiástico Peguero. El orador, Pedro Villaseñor, dijo que la impugnación era a las proposiciones en particular y no al dictamen en general, debiendo ceñirse esta discusión así. Peguero contestó que era un equívoco porque el discutirse un proyecto en general, era para saber si en su aspecto sería bueno o no, si aquella ley debía producir más bienes que males y que él había probado que el proyecto no era bueno. El presidente dijo en contra que si esto fuera cierto, resultaría superflua la discusión en particular de un dictamen, porque ya en

⁵⁵⁴ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 25/XI/1826. Hasta ahora no se ha podido determinar con certeza a qué decreto se refiere el eclesiástico Peguero.

⁵⁵⁵ *Ídem.*

⁵⁵⁶ *Ídem.*

general se observaba, según Peguero, si la ley era o no buena. Domínguez apoyó al presidente y agregó que tampoco podía impugnarse la primera proposición porque el artículo había sido aprobado por el Congreso Constituyente. Peguero de nuevo insistió en que el objeto principal de la discusión en general, era el insinuado, siendo accesorio de ella, lo de si la comisión llenó o no el objeto. El Sr. González añadió que, si solo a esto se quería ceñir la discusión en general, sería contra la práctica de todos los congresos y que en el caso de todos los artículos del dictamen emanaban del primero de ellos, que era el repartimiento de las tierras, y eso era lo que debía examinarse en general. Se votó en lo general y se empató la votación suspendiéndose la discusión por ser la hora de cerrar la sesión, quedando con la palabra Peguero.⁵⁵⁷

Una de las peticiones que Peguero hacía a la comisión encargada del dictamen sería demostrar que los bienes de comunidad pertenecían en total propiedad a los indios. El punto es que el eclesiástico cuestionaba algo que ya había discutido y aprobado el Constituyente; sin embargo, es de remarcar que la base de su argumento, el decreto que al respecto habían emitido las Cortes de Cádiz, no fue utilizado en los debates del Constituyente. Peguero traía a colación algo que había ignorado la legislatura anterior.⁵⁵⁸

La comisión con el apoyo del orador del gobierno y otros diputados mantuvieron la postura de que los bienes pertenecían exclusivamente a los indios porque desde su perspectiva ya era algo discutido con anterioridad, centrándose en que lo que correspondía al Congreso en turno era delinear los parámetros para llevar a cabo el reparto. Pero en ese camino de argumentos salieron a la luz otra serie de elementos que permiten ver la complejidad de las relaciones jurídicas que guardaban dichos bienes.

El 28 de noviembre de 1826, al seguir la discusión, Peguero se había quedado con la palabra y volvió a insistir en que el primer elemento a analizarse lo constituía si los indígenas eran o no los dueños de dichas tierras porque esto atañía al primer punto del dictamen. El orador Villaseñor dijo que el señalamiento de Peguero solo era pertinente en caso de que el proyecto se presentara de nuevo a la comisión, pero no en el estado que presentaba la discusión del

⁵⁵⁷ *Ídem.*

⁵⁵⁸ *Ídem.*

dictamen porque el asunto ya había sido considerado por el Congreso constituyente, quien había determinado que los bienes eran de los indígenas y había dado la orden de su repartimiento.⁵⁵⁹

En ese estado de la discusión Domínguez realizó la siguiente observación: “que la cuestión que se ha promovido, no era más que una logomaquia, o un juego de voces,” lo que estaba llevando a la pérdida de tiempo. Por lo que el diputado solicitó al presidente que para que éste no se perdiera inútilmente se fijase la cuestión en su verdadero punto, a lo que se adhirió Antonio Chávez. No será la única vez que se cuestione la lentitud con que se avanzaba en los debates y los desvíos que surgían en medio de la discusión.⁵⁶⁰

Entre observaciones por parte de Pérez Gil, González y el presidente del Congreso sobre si se discutía el dictamen en general o tomando en consideración las particularidades, el eclesiástico insistió en que se demostrara por parte de la comisión que las tierras eran exclusivamente de los indígenas, pues de acuerdo con la ley de las Cortes españolas solo tenían el dominio de utilidad y no el directo. Agregando esta vez, que de igual manera se infería esto de la ley recopilada, de que también se había mencionado, pues hablando esta solo de descubridores y pobladores, resulta que estas eran tierras de las que disfrutaban en propiedad los insinuados descendientes.⁵⁶¹

Se debe tener presente que el tema de la propiedad fue muy importante dentro de la ilustración y posterior a ello del liberalismo, porque se comenzaba a propugnar por un cambio del sistema de propiedad la cual estaba vinculada, amortizada y dividida en dominio directo y dominio útil. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII la corona española comienza a promover el tránsito de la propiedad señorial a la propiedad libre con el objeto de incentivar la circulación de la tierra en beneficio de la agricultura y con ello lograr el desarrollo económico.⁵⁶² En ese proceso fue el liberalismo gaditano el que realizó importantes avances para el cambio de la tenencia de la tierra, a través de la

⁵⁵⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 28/XI/1826.

⁵⁶⁰ *Ídem.*

⁵⁶¹ *Ídem.*

⁵⁶² Marta FRIERA ÁLVAREZ, *La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del antiguo régimen al liberalismo (La desamortización de Carlos IV)*, Gijón, 2007, pp. 29-35.

abolición de los señoríos, lo que produjo importantes modificaciones sobre la cantidad de propietarios y las rentas que de ello se obtenían.⁵⁶³

Ivana Frasset señala que para el caso novohispano existen numerosos escritos sobre las distintas formas de apropiación de la tierra, pero no los suficientes para explicar el tema en el proceso de transición de colonia a Estado-nación.⁵⁶⁴ En este contexto el debate relativo al repartimiento de los bienes de comunidad en Michoacán en la primera legislatura ordinaria se centra en si los indígenas eran los propietarios de la tierra o solo poseían su usufructo. En donde, desde la perspectiva de Peguero se infiere que estos terrenos tenían una dualidad en su posesión, de ser así, ¿quién era el dueño en el antiguo régimen?, acaso el rey. Con la declaración de la independencia, ¿quién se queda con el dominio directo?, los ayuntamientos o el gobierno estatal. Estas eran preguntas sin resolver, por esa razón, el eclesiástico, insistía en la necesidad de demostrar el dominio directo para transitar de la propiedad comunal a la propiedad privada.

Continuando con el debate, Domínguez contestó que el argumento que se deducía de la ley de las Cortes españolas, nada probaba y era “retorcible,” porque si las tierras no eran de los indígenas, ¿cómo se les manda devolver la mitad de ellas? Peguero le respondió que era la comisión y no su señoría quien debía probar la propiedad y que no había la “retorción” que se había dicho.⁵⁶⁵

De ahí, la discusión pasó a si los bienes eran de los indios exclusivamente o también pertenecían a los demás del pueblo que se decían “de razón.” De acuerdo con el orador, el gobierno era de la idea que éstos pertenecían a ambos. Lo que llama la atención hasta este punto, es que el Constituyente había establecido que eran exclusivos de los indígenas y el debate más fuerte se centró justo en este asunto que fue defendido y ganado por el eclesiástico Manuel de la Torre y Lloreda. Si se toma en consideración que Pedro Villaseñor fue parte de la constituyente sancionando el decreto y el titular del ejecutivo en julio de 1825 y en noviembre de 1826 era el mismo, Antonio de Castro, es indicativo que

⁵⁶³ Francisco J. HERNÁNDEZ MONTALBÁN, *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Madrid, Universitat de València, 1999, p. 20.

⁵⁶⁴ Ivana FRASQUET, “Razones para una independencia: la difícil cuestión de la propiedad en México, 1822-1823”, en *Anuario de historia regional y de las fronteras*, Vol. 12, N°. 1, 2007, p. 33.

⁵⁶⁵ *Ídem*.

ambos tenían noción de esa discusión, entonces, cabe cuestionar si el gobierno quería revertir lo establecido por el constituyente.

Después de ello Aragón y Peguero alegaron contradicción entre los dos primeros artículos que presentaba el dictamen al decir que los bienes eran de los indígenas y que también pertenecían a los de razón. En medio de esta discusión, Domínguez hizo mención de que el diputado Chávez Carrillo tenía un pleito de linderos de su hacienda en Charo, por tanto, surgió la duda en el congreso de si podía intervenir en la votación. El diputado en cuestión dijo que el pleito no era con los bienes de comunidad sino con el Duque de Terranova. Pero Chávez Gil consideraba que si el Estado tenía intervención de ellas o en el asunto Chávez Carrillo no debía votar.⁵⁶⁶

El 30 de noviembre la legislatura resolvió excusar a Chávez Carrillo de la votación del dictamen. En esa misma sesión fue tratado el asunto de la publicación del dictamen y las discusiones, Peguero defendió la propuesta argumentando que era una acción que distinguía a los gobiernos libres de los despóticos, “esto es que aquellos presentan sus resoluciones razonadas”. Finalmente, la legislatura reprobó la impresión del dictamen y al preguntarse si se insertaba en las actas se empató la votación, se reservó para la sesión siguiente.⁵⁶⁷

Peguero tuvo una activa participación en el debate de este decreto, en esa misma sesión, el eclesiástico solicitó que éste fuera libre, sin límite de intervenciones, en su exposición:

Que el que un debate sea libre, especialmente de asuntos de importancia se funda en los siguientes principios políticos que por las razones más fuertes alegadas por ambos partidos en un debate, no se pueden apreciar en su justo valor a la 1ª vez que se oyeron, que no se debe tener por malogrado el tiempo, que se emplea en una discusión de buena fe, por larga que sea, que en materia de examen jamás se ha de temer la demasía y finalmente que en Inglaterra que es maestra en esta materia, a más de ser necesarios tres distintos debates para el proyecto de ley, las cámaras lo examinaran en clase de comisión usando sus miembros la palabra cuantas veces quieran suficientemente discutido.⁵⁶⁸

⁵⁶⁶ *Ídem.*

⁵⁶⁷ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 30/XI/1826.

⁵⁶⁸ *Ídem.*

A pesar de lo bien fundamentado de la propuesta, la comisión reprobó el que la discusión fuera indefinida, pero marcó que los diputados podían hacer uso de la palabra hasta seis veces.

El 2 de diciembre de 1826, el gobierno externó -a través del orador- que no se oponía substancialmente al decreto, que la oposición era directa en virtud de que el Congreso Constituyente dijo que las tierras de comunidad eran solamente de los llamados indios y el gobierno en sus observaciones asentó que debían ser también de los llamados de razón que vivían en los pueblos. Aragón consideró que antes de entrarse a la discusión en particular de las proposiciones del dictamen sobre devolución de las tierras de comunidad se declarara si el Orador podía manifestar por un lado la opinión del gobierno y las razones que tuvo el Consejo de gobierno para consultar el repartimiento de dichas tierras como estaba autorizado. Peguero fue de los primeros en manifestarse en contra de lo anterior argumentando que los únicos conductos eran el Congreso y el gobierno, si no, era un delito contra la misma ley, “y contra la majestad del pueblo según el señor Vidaurre,” a lo que se unió González, pues el orador era Pedro Villaseñor, miembro del Consejo. González cuestionó, ¿cómo podría el orador exponer la opinión del Gobierno y al mismo tiempo la suya siendo contraria? Antonio Chávez consideraba que no había problema en que el orador manifestara las razones del Consejo pues aquel hablaba en boca del gobierno a lo que Peguero veía comprometida la intervención del orador. Para el eclesiástico el problema no residía en que el gobierno se apropiara de la opinión del Consejero o la del Orador que era lo mismo, sino a que usara de la palabra como un particular, lo que era contrario a la ley. González argumentó que el gobierno podía dar voz a varias inquietudes, pero la suya debía ser una sola. Mientras que Echaiz no veía problema en que se expusieran las razones del Consejo para la ilustración de la materia.⁵⁶⁹

El 9 de diciembre el eclesiástico Peguero presentó la más importante disertación al respecto, al abrirse la discusión sobre el primer artículo “Que se declare vigente el artículo 1º de la ley dada por el H.C. Constituyente a 12 de julio de 1825.” Peguero fue el primero en tomar la palabra, y fue de la siguiente manera:

⁵⁶⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 2/XII/1826.

Desde la primera vez que use de la palabra para combatir en general del dictamen que ahora se discute en particular me contraí únicamente a dos puntos cardinales, 1º que no se podía tratar del proyecto en general, que era el repartimiento de las tierras de comunidad a los indígenas, sin que previamente se hiciese constar que pertenecían a ellos por un dominio pleno. 2º que aun probado que fuese este requisito esencial, el repartimiento siempre resultaba injusto en los términos que lo proponía la comisión. En cuanto a la suposición del primer punto, mi juicio ha sido substancialmente el mismo que el de la comisión; pero no así respecto de la prueba, porque el decreto de las Cortes Españolas y las leyes del Código de Indias de que se vale probar el pleno dominio de los indígenas en dichas tierras, solamente concluyen según hice ver que le pertenecen por dominio útil; más de ninguna manera directa. En orden al 2º punto que es el objeto principal de la cuestión, según la opinión del Gobierno, fundándome precisamente en que los descendientes de aquellos supuestos primeros dueños a la vez no eran puros indígenas, sino mestizos cuarterones, y demás clases, de que seguía ser injusto el repartimiento en solos los primeros [...].⁵⁷⁰

De nueva cuenta el diputado Peguero insiste por un lado en que las tierras comunales tenían una dualidad en su propiedad, lo que se traducía en una dificultad para el reparto. Lo mismo ocurría si solo se contemplaba a los indígenas, dejando fuera del proceso a las castas.

El orador dijo que el gobierno coincidía con la opinión de Peguero, vinculándola a la mezcla racial que existía y que de acuerdo con el sistema ya no había diferencias de castas, aunado a la movilidad poblacional que derivaría en el hecho de que dichos bienes también pertenecerían a otros pueblos. Domínguez estaba en contra del argumento de Peguero, este último insistió que solo podía probarse que los indígenas tenían el dominio útil de las tierras más no el directo.⁵⁷¹

Por su parte, Aguiar hizo una exposición por extenso del dominio que los indígenas tenían de los bienes, en eso intervino el orador, lo que no fue bien visto por Peguero, quien lo acusó de hablar a título personal lo que no era correcto. La intervención siguió, el presidente el Congreso tomó la palabra para también defender la propiedad de los bienes por parte de los indígenas, aunque manifestó que no estaba conforme con la redacción del primer artículo pues contradecía lo establecido por el Constituyente, por lo que Aguiar propuso se respetase lo que había planteado el Constituyente. Esto último fue llevado a votación nominal y

⁵⁷⁰ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 9/XII/1826.

⁵⁷¹ *Ídem*.

fue aprobado por Pérez Gil, Aguiar, Chávez Gil, Domínguez, Chávez Antonio, Pallares y Echaiz, reprobaron Peguero, González y Aragón.⁵⁷²

El día 11 de diciembre se pretendía poner a discusión el 2º artículo del dictamen, antes de iniciar, González pido que se fijara una postura respecto al orador y sus intervenciones, en las cuales debía evitar emitir opiniones personales, pues en discusiones previas por esa actitud, la asamblea había quedado en ridículo, por ser tolerante cuando se infringía la Constitución, el orador rebatió que la propia asamblea le había dado el permiso.⁵⁷³

Aunque parece irrelevante el punto, constituye un ejemplo de las desviaciones que se presentaron durante la discusión sobre el repartimiento de los bienes de comunidad, pues en esta sesión el debate central se dejó de lado para discutir la forma en la que el orador debía intervenir en el debate.

Habían pasado varios días, y las discusiones habían sido prolongadas en las que salían a relucir elementos que tendían a distraer el curso de las deliberaciones. A los ojos de Domínguez las discusiones largas y las desviaciones del tema dejaban ver que “había un empeño particular en retardar la conclusión de este asunto ocupándose el tiempo en cosas inoportunas que solo entorpecían la discusión.” Mientras el asunto se alargaba con las intervenciones de Aguiar, González, Zincunegui y Aragón. Finalmente se puso a discusión el mencionado artículo.⁵⁷⁴

Las discrepancias sobre la repartición de bienes eran diversas, con mayor o menor grado de fundamento, pero es de destacar el consenso que despertó entre los diputados la preocupación de que los poseedores de las tierras luego del repartimiento fueran engañados y éstas les fueran arrebatadas por cantidades ínfimas por los colindantes. Este fue un tema que ciñó el debate en la sesión del 13 de diciembre, González pronunció un amplio discurso solicitando que éstas no se repartieran a los indios haciendo una larga exposición de los peligros que ello llevaría, como el de que en lo inmediato perdieran la propiedad adquirida. A todo esto, el diputado Pallares intervino para manifestar el interés

⁵⁷² *Ídem.*

⁵⁷³ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 11/XII/1826.

⁵⁷⁴ *Ídem.*

de agentes secretos por el reparto de bienes para sacar provecho de ello; a su vez, Aragón también manifestó la misma preocupación.⁵⁷⁵

Ese mismo día se retomó el debate del artículo 2º: “El gobierno dispondrá se entreguen las tierras que han estado bajo de su inspección a las comunidades que pertenezcan para que procedan a su repartimiento individual en posesión y propiedad.” Pero éste solo contemplaba las tierras, por lo que se cuestionó qué debía ocurrir con las cantidades existentes de estos bienes que se encontraban en depósito a manos del ejecutivo.⁵⁷⁶

También se retornó a la idea de si los bienes eran de los indígenas o de la comunidad, el diputado Aragón habló de cómo el repartimiento tendría afectaciones como derechos parroquiales y funciones eclesiásticas. De inmediato Peguero tomó la palabra diciendo que cuando impugnó el dictamen hizo ver que la comisión no había probado que los bienes de comunidad pertenecieran con dominio pleno a los primeros indígenas y por tanto no se les debían repartir, cuestionando de paso el destino de los derechos parroquiales y funciones eclesiásticas, además, cuestionó que, si eran dueños en dominio, por qué los bienes no se les habían repartido individualmente. Aragón también remarcó que los párrocos habían estado en posesión de dichos derechos y como prueba se encontraban los reglamentos de la ordenanza de intendentes. Domínguez sacó a colación que los derechos parroquiales y funciones eclesiásticas que se costeaban de los de comunidad constituían un abuso opinión que compartía Peguero.⁵⁷⁷

Aguiar manifestó los beneficios de repartimiento, ello crearía un gran número de propietarios, “en cuyos intereses podía ver vuestra soberanía el mejor apoyo de las públicas libertades” pues así lo confirmaba la máxima generalmente adoptada por algunos de los más celebres publicistas, los que concordaban en que el único y más eficaz medio de consolidar el sistema y asegurar la libertad era creando el mayor número posible de propietarios para interesarlos en él. En este debate también se citó *El ensayo político de la Nueva España* de Alejandro Von Humboldt para argumentar la mejora de la sociedad a través de la convivencia de la raza blanca y bronceada argumentando el reparto entre las

⁵⁷⁵AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 13/XII/1826.

⁵⁷⁶ *Ídem.*

⁵⁷⁷ *Ídem.*

indígenas y los de razón.⁵⁷⁸ Más allá de los argumentos el artículo fue aprobado tal y como lo había planteado la comisión.

El 23 de diciembre se comenzó a discutir el artículo 3º en el que se hablaba de la junta encargada por miembros de dentro o fuera de la comunidad para verificar el reparto con total sujeción a las reglas que al efecto prescribiría el gobierno. Más o menos había un consenso entre los diputados, el diputado Aragón consideraba que la comisión sólo debía quedar integrada por miembros de la población, por tanto, era de la idea de que, si ellos eran los dueños, no se les debía poner un interventor para que se realizara el repartimiento en cada una de las comunidades.⁵⁷⁹

Después de esa fecha, el debate comenzó a marchar con más agilidad, en los artículos del 4º al 7º se consignaron los procedimientos, las instancias y costos para verificar el reparto entre las familias de las comunidades indígenas que incluían a los casados con hijos o sin ellos, los viudos y viudas con o sin descendencia, los solteros de 25 años que vivieran en la comunidad y los huérfanos. Mientras que los artículos 8º y 9º estipulaban que los indígenas no podrían vender, hipotecar, empeñar o enajenar las tierras antes de cuatro años después de verificado el reparto. Por último, el Congreso se preocupó por derogar todas las leyes de la materia que se opusieran al decreto. Con estos dos últimos artículos se intentaba contener el peligro inminente de que los indígenas fueran despojados de sus tierras y que se volviera a cuestionar el dominio absoluto sobre los terrenos.⁵⁸⁰

La discusión sobre este tema fue extensa, nutrida, diversa y muy a pesar del consenso, el asunto del dominio absoluto fue un fantasma que rondó el debate de la ley de principio a fin, porque la comisión nunca demostró a Peguero tal cosa, por ello el eclesiástico insistía en el tema cada vez que veía oportunidad y más porque lo sustentaba con leyes. Esto pudo llevar a que se pensara en frenar este tipo de observaciones fuera del Congreso, por medio del último artículo del decreto al derogar todas las leyes de la materia que se opusieran a la presente ley, con ello el tema del dominio absoluto o directo sobre las tierras quedaba cerrado.

⁵⁷⁸ *Ídem.*

⁵⁷⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 23/XII/1826.

⁵⁸⁰ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo II, p. 61-62.

La ley estaba dada, pero su aplicación sería complicada, en 1828 el gobierno reconocía lo difícil que era abolir el antiguo régimen por problemas que obedecían al argumento de mezcla de familias de unos pueblos con otros, la variación de residencia, la falta de dinero por parte de algunas comunidades, aunado a la cuestión de linderos e inoperancia de las comisiones encargadas de verificar el reparto. En 1829, el gobierno decía que la ley de enero de 1827 no se había cumplido por ignorancia y los intereses particulares de los indígenas. Todo ello había generado malestar entre las autoridades civiles “hasta el grado de que el gobierno se ha visto precisado a amenazar a una comunidad con que mandaría tropa permanente para hacer que se haga el repartimiento”.⁵⁸¹

5.1.4. La causa contra el gobernador Antonio de Castro

El último de los grandes temas en que se observa una importante participación de Peguero fue la acusación al gobernador Antonio de Castro por faltas a la Constitución que presentó González frente al Congreso para que éste determinara si el asunto se turnaba al Tribunal correspondiente o no. El acontecimiento fue el primer síntoma de la desestabilidad política que comenzaba a permear en Michoacán.

El 16 de enero de 1827, el diputado Manuel González presentó una exposición en la que acusaba al gobernador de cometer infracciones a las leyes emanadas del Congreso. La exposición fue la siguiente:

[...] basada en el incumplimiento de las obligaciones 5ª y 6ª del artículo 74, atribución 5ª del 73 y 89 e infracciones cometidas al artículo 94 de la Constitución estatal; esta última en cuanto a la prefectura del sur; en el artículo 14 de igual clase por la cuestión de la esclava Salí y su hijo; 3ª fracción de la ley de prefectos de 15 de marzo de 1825 en su artículo 21; cuando el del norte fue suspendido por la audiencia del estado; 4ª por la falta de cumplimiento al artículo del decreto del 21 de diciembre de 1824 5º sobre el reglamento de la fábrica de tabacos de la federación; 5ª por igual falta respecto de los acuerdos del H.C. actual 14 de agosto y 27 de noviembre de 1826 relativo a la libertad de la esclava Salí y su hijo y 2º a recibo de tabacos de la federación; 6ª por la colocación en la administración de rentas unidas de Zamora hecha en un hermano de aquel prefecto.⁵⁸²

⁵⁸¹ Hernández Díaz, Jaime, “La primera república en Michoacán”, pp.331-332.

⁵⁸² AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, caja 1, Exp. 3, 18/I/1827.

Las obligaciones no acatadas por Antonio de Castro, según la exposición de González que se relacionaron con el artículo 74 de la Constitución michoacana consistían en “presentar cada año al Congreso, para su aprobación, el presupuesto de gastos del estado”, la otra en “dar cuenta por medio de su secretario al Congreso del estado de la administración pública en todos los ramos, informando sobre los medios con que juzga el poder adelantarse”. Del artículo 73 infringía la atribución 5ª, en la cual debía “nombrar secretario del despacho de gobierno, y separarlo a su arbitrio”. Además, incumplía el artículo 89 que establecía: “Habrá un secretario para el despacho de todos los negocios del mismo”.⁵⁸³

La segunda acusación correspondía a la infracción del artículo 94: “En cada departamento habrá para su gobierno político-económico un prefecto con entera dependencia del gobernador del estado.”⁵⁸⁴ Y con respecto a la prefectura del sur y la violación al artículo 14, “queda para siempre prohibido en el territorio del estado el comercio y tráfico de esclavos, los que en el existen actualmente se darán por libres con la indemnización correspondiente, si la exigieran los dueños”.⁵⁸⁵

La tercera acusación correspondía a la infracción de la ley de prefectos en su artículo 21 que manifestaba: “En el caso de inhabilidad temporal del prefecto hará sus veces el más próximo de los alcaldes pasados de la cabecera, mientras nombre interino el gobernador, y de la misma manera lo hará en caso de muerte o separación permanente, ínterin al gobierno nombra sucesor”.⁵⁸⁶

La cuarta acusación se basaba en el incumplimiento del artículo 5º del decreto del 21 de diciembre de 1824 que establecía: “Este formará -el administrador general de rentas del tabaco- un reglamento para el manejo de la fábrica o adoptará el que rija si lo hallare perfecto pasándolo al gobierno, en que con su informe lo remitirá al congreso para su aprobación.”⁵⁸⁷

La quinta acusación era respecto al acuerdo para la liberación de la esclava Salí, que consistía en cubrir la indemnización a su dueño para arreglar

⁵⁸³ Felipe TENA RAMÍREZ, *Michoacán y sus Constituciones*, pp. 25- 28.

⁵⁸⁴ *Ibíd.*, p. 29.

⁵⁸⁵ *Ibíd.*, p. 13.

⁵⁸⁶ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo I, 1886, p. 79.

⁵⁸⁷ *Ibíd.*, p. 56.

su libertad. Salí y su hijo eran originarios de Virginia en los Estados Unidos, la transacción se realizó el 25 de noviembre de 1826. Su dueño, el francés Carlos Tiria recibió del estado la cantidad de 600 pesos.⁵⁸⁸ A pesar de estar hecha la negociación, el problema residía en que en las arcas del estado no había el dinero suficiente para cubrir el pago, lo que retrasó la concreción del asunto y molestó, de alguna manera, al Congreso. La sexta y última falta se levantaba por la colocación en la administración de rentas unidas de Zamora al hermano del prefecto de aquel departamento.⁵⁸⁹

Una figura central del proceso iniciado en contra el gobernador Antonio de Castro será la Sección del Gran Jurado encargada de determinar si había delito o no que sancionar en los empleados del gobierno de mayor rango, pero antes de determinar si la acusación pasaba a esta instancia del Congreso, se librarán fuertes debates bajo el argumento de ilegalidad en la acusación.

Uno de los primeros detalles que se perciben en la acusación fundada contra el gobernador fue lo complejo que resultó para los diputados aplicar las propias leyes y reglas emanadas del propio legislativo. La interpretación que se le dará al artículo 140 del reglamento interior y los artículos 42 y 71 constitucionales dividirán en dos a la legislatura en este tema y dentro de este marco se debe tener presente un elemento exógeno, la presencia e influencia que las logias masónicas tuvieron al interior de la vida institucional de Michoacán en estos años y cuyas manifestaciones afloraron al tratarse este asunto.⁵⁹⁰ Las dos cabezas de esta división fueron por un lado, el acusador González y por el lado de la defensa, Domínguez y Peguero. El eclesiástico ciñó sus intervenciones al marco de la ley con destacados argumentos.

Una vez presentada la acusación, la discusión en un primer momento giró en torno a lo que decían los artículos 140 del reglamento y 40, 71 y 72 constitucionales, posteriormente se pasó al tema de si González como parte acusadora debía, permanecer dentro del gran jurado y tercero la discusión sobre la pertinencia de la acusación.

⁵⁸⁸ AHNM, Libro de protocolo de escribanos, No. 239, 25/XI/1826, f. 880v-881v.

⁵⁸⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, caja 1, Exp. 3, 18/I/1827.

⁵⁹⁰ Un par de artículos especializados sobre estado de la cuestión de la masonería: Jean Pierre BASTIAN, "Una ausencia notoria: la francmasonería en la historiografía mexicanista", en *Historia Mexicana*, No. 44, 175, enero-marzo de 1995. María Eugenia VÁZQUEZ SEMADENI, "Historiografía sobre la masonería en México. Breve historia", en *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, 2, 1, Mayo-noviembre de 1995.

El primero en defender al gobernador fue el diputado Pérez Gil, argumentando, después de leída la acusación, que el gobernador del estado, según el artículo 71 de la Constitución,⁵⁹¹ no podía ser acusado, mientras estuviera en ejercicio del cargo, salvo por faltas que constituyeran delitos de traición contra la libertad e independencia nacional o forma establecida de gobierno y por el artículo 72 que estipulaba que podía ser acusado dentro de seis meses, contados desde el día que cesara sus funciones, por cualquier otro delito cometido en el tiempo de su ejercicio.⁵⁹²

El 20 del mismo mes, Pérez Gil hacía énfasis en que, al admitir las acusaciones hacia el gobernador, éste perdería respeto, cayendo en ridículo y daría pie a que en adelante fuese acusado por motivos justos e injustos; por lo que advertía que el Congreso no debía admitir más acusaciones que aquellas que estipulaba el artículo 71.⁵⁹³

En esa misma sesión, Peguero tachó de ilegal la acusación y manifestó que el Congreso era incompetente para admitirla, para él la propuesta mayor era falsa porque no podía tener la extensión que se le quería dar al artículo 140 del reglamento, pues muy a pesar de que éste hablara en general de acusación, no podía entenderse de toda acusación indistintamente, sino sólo de la legal y esta solo podía darse cuando fuera conforme a los establecido por el artículo 71 constitucional, lo que no podía alterarse ni por el reglamento, ni por ninguna otra ley, ello siguiendo el principio de derecho: “Las leyes deben explicarse conforme al fin que se propuso el legislador, de suerte, que toda interpretación contraria a este fin debe desecharse”, “Así mismo se han de explicar conforme a la naturaleza del asunto que trata”, por lo que el eclesiástico cuestionaba tanto el fin, como la naturaleza de la cosa.⁵⁹⁴

El legislador planteó que para que la acusación fuera legal, se hacían necesarias cuatro condiciones: “que la persona que acusa no tenga por la ley prohibición para hacerlo, ya sea considerada en sí misma, ya respecto de la

⁵⁹¹ El artículo 71 establecía que “Durante el tiempo de su ejercicio no podrá ser acusado sino ante el congreso, y por los delitos de traición contra la libertad e independencia nacional o forma establecida de gobierno; por cohecho o soborno; por impedir las elecciones de gobernador y vicegobernador, consejeros, diputados; o que estos se presenten a servir sus destinos; o que ejerzan sus oficios; o por crímenes atroces”. *Ibid.*, p.24.

⁵⁹² AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, caja 1, Exp. 3, 18/I/1827.

⁵⁹³ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, caja 1, Exp. 3, 20/I/1827.

⁵⁹⁴ *Ídem.*

persona acusada, como al delito que se acusa” y que faltando cualquiera de ellas la acusación era ilegal y por tanto se debía repeler según los artículos 71 y 72 de la Constitución. El primero exponía de una manera concreta de que se le podía acusar al gobernador y el segundo de lo que no y que las faltas del gobernador correspondían a lo manifestado por el segundo. Para Peguero la acusación era ilegal “y estando prohibido hacerla ante el Honorable Congreso su soberanía es incompetente para admitirla, y nulo su procedimiento en esta parte”.⁵⁹⁵

La exposición de Peguero causó reacción en González, quien manifestó que nunca hubiera imaginado que se intentaría impedir el giro que por reglamento debía darse a la acusación, aun cuando el presidente Zuncunegui ya había manifestado que por el ordenamiento interno del Congreso procedía el trámite. Una de las observaciones que hizo el acusador fue que la simple lectura de la exposición había ocasionado críticas en el público, suscitando dudas sobre el buen o mal manejo del jefe de estado, lo que exigía a la asamblea guardar una conducta capaz de acallar lo mal dicho porque conduciría a la satanización del gobierno. También consideraba aventurado decir que la acusación era anticonstitucional y porque su contenido era calificado de muy grave, González continuó y manifestó que al hacer su exposición tuvo muy presente el art. 71 de la Constitución y que no vio lo ilegal, además consideró presentes otros artículos.⁵⁹⁶

A la hora de votar si el asunto pasaba al gran jurado, se empató y se hizo la observación por Manuel Chávez de sí González podía votar por ser la parte acusadora. Peguero conforme a su compañero dijo que no podía votar porque sería parcial, mientras que el presidente Zuncunegui decía que el reglamento no le impedía el voto. González defendió su derecho a votar y por mayoría a diferencia de un voto, se le autorizó sufragar. De nuevo se votó para ver si el asunto pasaba al gran jurado, y se empató.⁵⁹⁷

La sesión del 1º de febrero fue intensa, por un lado, se ventiló el tema de las logias masónicas y por el otro Peguero y González debatieron arduamente sus posicionamientos frente a la legalidad de la acusación. Respecto al primer

⁵⁹⁵ *Ídem.*

⁵⁹⁶ *Ídem.*

⁵⁹⁷ *Ídem.*

asunto, el diputado Domínguez hacía la siguiente exposición ante el Congreso para que la acusación fuera desechada:

En la hipótesis de que efectivamente hubiera algunas faltas en el gobierno, razones muy poderosas de política exigen que aquellas se disimulasen en obsequio del mismo estado, pues es sabido que en la capital existía una logia de yorkinos, empeñados en perseguir al gobernador, trastornar la forma de gobierno, por consiguiente cualquier choque entre los poderes no será otra cosa sino dar pábulo a sus intentonas y a proteger indirectamente sus fines...”⁵⁹⁸

El problema de fondo no era la acusación contra el gobernador Antonio de Castro por faltas a la Constitución estatal, para las cuales el funcionario siempre tuvo un argumento sólido que en buena medida llegó a invalidar buena parte de los señalamientos de González. La verdadera complicación residía en la vinculación de la causa con la masonería, pues los yorkinos liderados por el vicegobernador José Trinidad Salgado habían emprendido una persecución contra el gobernador. En un hecho curioso, resulta que dentro del mismo poder existían fuerzas opuestas que llevaron a la primera crisis del ejecutivo en Michoacán.⁵⁹⁹

González aceptó que había intentos de persecución en contra del gobernador, aunque consideraba que eso no debía ser motivo para que se dejaran de juzgar las faltas de Castro o hacerlo sólo por los delitos que marcaba el artículo 71, pues “sería constituirlo en un déspota absoluto”.⁶⁰⁰ Lo que habla de la percepción del diputado, pues el primero que debía de cumplir la ley era el propio ejecutor de la misma, es decir el gobernador, pero además se percibe el temor de un ejecutivo dominante en el ejercicio del poder por encima del legislativo, lo cual era inconcebible para esos momentos o al menos en teoría no era bien visto, pues atentaba contra los principios republicanos y liberales.

Peguero también tomó la palabra, volvió a insistir en que la acusación era ilegal porque las faltas que se imputaban no eran parte del orden establecido en el artículo 71, porque la ley lo prohibía claramente y en contra no se podía sostener ninguna interpretación, pues aun haciéndose mérito las razones de congruencia, era muy conforme a ellas según Montesquieu “que el supremo Jefe

⁵⁹⁸ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, caja 1, Exp. 3, 1/II/1827.

⁵⁹⁹ Cfr. Nely Noemí GARCÍA CORONA, Un esbozo histórico.

⁶⁰⁰ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, caja 1, Exp. 3, 1/II/1827.

del Poder ejecutivo sea inviolable, pues de lo contrario volvería tiránico el poder legislativo.”⁶⁰¹

El eclesiástico volvió a insistir en que el Congreso era incompetente respecto de la acusación, porque la ley prohibía la acusación, al terminar su exposición el presidente Zincunegui quiso suspender la discusión apelando al artículo 33 del reglamento y Peguero contradijo su argumento, según él, no se había producido desorden, ni había presentado nuevas dificultades el asunto. El presidente contestó que el asunto era grave y no veía deshonor en suspender la discusión, aunado al hecho de que varios señores, entre ellos González, no estaban preparados para la discusión. Domínguez señaló que el día del debate había sido señalado con antelación y desde su perspectiva suspender la discusión no era honorable. González respondió y recalcó que tampoco les hacía honor a los que impugnaban el trámite de oponerse a la suspensión y menos si se deseaba hallar la verdad, pues al no estar preparados varios diputados, esta se aventuraba mucho.⁶⁰²

Por otro lado, el diputado aprovechó su intervención para dejar de manifiesto porque no se habían contestado los principios y reglas de derecho que Peguero había argumentado, “porque absolutamente son ajenas de la cuestión”. El día 3 de febrero se volvió a tocar el tema, ese día González iba preparado con un discurso, en el que daba contestación a Manuel Chávez, Domínguez y Peguero de éste último externó lo siguiente: “No extrañe el citado señor Peguero que al dar esta contestación me desentienda de extenderla a las alusiones de derecho que ha tocado su señoría relativas al artículo 71 de la Constitución, fundamento único que se tiene para impugnar el dictamen, porque tal materia me parece muy ajena del punto que ahora debe ocuparnos, y que debe ser solamente el artículo 140 del reglamento interior”.⁶⁰³

González trató de demostrar que al no dar el trámite indicado a la exposición se faltaba a este artículo 140. Argumentando que el artículo 28 constitucional imponía a las legislaturas una sagrada obligación de guardar el reglamento inviolablemente, lo mismo ocurría con el 45 y solo el 54 modificaba

⁶⁰¹ *Ídem.*

⁶⁰² *Ídem.*

⁶⁰³ AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, Caja 1, Exp. 3, 3/II/1827.

estas prevenciones para los casos que ahí expresaba, también se apegó al artículo 42 parte 4ª. Y así le contestó a cada uno de los diputados.

Peguero intervino para señalar que González había infringido el art. 118 del reglamento que prohibía a los diputados nombrar por su nombre a sus compañeros al momento de impugnar una opinión. Y señaló que González solo había dicho que sus fundamentos eran ajenos a la materia y que por eso debía rechazarse su planteamiento de ilegalidad, pero no se había probado eso. Peguero volvió a sustentar su posicionamiento basándose en reglas del derecho romano argumentando lo ya manifestado en otras ocasiones. Posteriormente tomó la palabra Domínguez haciendo alusión a que lo expuesto por González no daba más razones que las ya manifestadas desde la primera sesión y que tampoco había contestado a las cuestiones de Peguero fundadas en principios y reglas del derecho y que era claro que los que estaban a favor de la acusación las querían deducir al artículo 40 del reglamento.⁶⁰⁴

El presidente Zuncunegui y el propio González defendieron la legalidad de la acusación bajo los argumentos que ya se venían manifestando en discusiones anteriores. Lo que sí dejaron claro ambos legisladores era que la legalidad de la acusación era competencia del Gran jurado y entonces la discusión dio otro giro, argumentando que “si el dictamen se pudiera oponer al artículo 71 de la Constitución equivalía tanto como a decir que el gobernador puede infringir impunemente esta y las leyes”. Cedejas consideraba responsable al gobernador de los delitos que se expresaran en el artículo 71, al tiempo que no veía que la acusación de González tuviera prospecto de criminalidad. Manuel Chávez expuso que los que estaban a favor del trámite ponían los artículos del reglamento sobre los de la Constitución.⁶⁰⁵

Peguero ya venía insistiendo con anterioridad que González y los que apoyaban el trámite de la acusación estaban cometiendo un paralogismo -razonamiento falso incorrecto- y que de ello cualquiera podría convencerse con solo ver la *Lógica del Lugdunense*.⁶⁰⁶ En segundo lugar, “se asegura que las

⁶⁰⁴ *Ídem.*

⁶⁰⁵ *Ídem.*

⁶⁰⁶ Para más nociones sobre la *Lógica Lugdunense*, el lector puede consultar: Emerich CORETH Sj, Walter M. NEIDL, Georg PFLIGERSDORFFER, *Filosofía cristiana en el pensamiento de los siglos XIX y XX*, Tomo II, Madrid, España, Encuentro Ediciones, 1994. Agradezco la referencia a la Dra. Ivana Frasset.

razones manifestadas en contra del trámite no son del caso, se dice, pero no se prueba". El eclesiástico aprovechó para señalar, sin dar nombre directamente y respetando el reglamento, que uno de los diputados había manifestado no entender del derecho y sin embargo insistía en su opinión, siendo una implicación no comprender las reglas y asegurar que no son del caso. Finalmente, la propuesta se sometió a votación, por la negativa estuvieron Pérez Gil, Domínguez, Antonio Chávez, Chávez Carrillo, Manuel Chávez y Peguero, aprobaron Chávez Gil, Echaiz, Pallares, González, Zincunegui y Cendejas, quedando empatada la resolución. Se volvió a votar y el resultado fue el mismo. Entonces Domínguez dijo que se reservara el asunto hasta que estuviera completa la legislatura, Chávez Gil no estuvo de acuerdo, Peguero sí. Se aprobó que este asunto se resolviera en la última sesión de la próxima presidencia.⁶⁰⁷

El 6 de febrero Echaiz pidió se revocara el acuerdo, así que el día 8 se discutió el asunto. Se argumentaba por Zincunegui que le parecía apropiado el acuerdo, pues acabado de integrarse Aguiar apenas le daba tiempo para empaparse el asunto. Esto era vital porque al resultar siempre empatada la votación, se dejaba en manos de éste toda la responsabilidad de asunto.⁶⁰⁸

El diputado Aguiar se presentó el día señalado, con un discurso que enumeraba todos los artículos constitucionales y del reglamento interno del Congreso que tenían relación con el asunto y solicitó se estableciera si la acusación era legal o no. Después de discutido el asunto se acordó que la acusación pasaría a una comisión que dictaminaría si era o no de obvia resolución. La comisión quedó integrada por Aragón, Aguiar y Echaiz.⁶⁰⁹

El día 20 continuó la discusión y González tomó la palabra. Estas alturas, el problema residía en que se seguían dando los mismos argumentos ya presentados, palabras más, palabras menos, lo que se requería era saber si la acusación pasaba al gran jurado o no y la decisión quedaba empatada. Solo se habían agregado a la discusión los artículos 212, 213, 215 y 216 y atribución 5ª del artículo 42. Pérez Gil también dio lectura a una exposición a favor del gobernador.⁶¹⁰

⁶⁰⁷ *Ídem.*

⁶⁰⁸ AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, Caja 1, Exp. 3, 6/III/1827.

⁶⁰⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, caja 2, Exp. 1, 17/III/1827.

⁶¹⁰ AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, caja 2, Exp. 1, 17/III/1827.

Y en efecto, cada vez escaseaban más los argumentos, todo estaba dicho, y las posturas estaban bien definidas. Domínguez continuaba pidiendo se desechara la acusación, porque ésta conducía al desprestigio del gobierno que tanto debía cuidarse y de nuevo hizo mención de la persecución de los Yorquinos en contra de Antonio de Castro.

Era sabido con evidencia que en la capital existe un club secreto en donde se ha jurado la persecución del gobernador, porque ha escusado iniciarse en sus misterios y so pretexto de que ha conferido a solo los antiguos insurgentes los destinos del estado [...]⁶¹¹

Ese día, la discusión se acaloró entre Pérez Gil y Echaiz, por lo que se suspendió la sesión. Los álgidos debates habían provocado fricciones, divisiones y comentarios que llevaron a malos entendidos entre los diputados, tal y como lo deja ver la aclaración realizada por Domínguez, quien ante la posible malversación de sus palabras al externar la persecución que sufría el gobernador de parte de los Yorkinos, el diputado expresó que en su intervención él no había insinuado que entre los miembros del Congreso había algunos que pertenecían a tal complot, aunque no era de dudarlo.⁶¹²

En este sentido, el Congreso estaba de acuerdo en que tenía las facultades para impedir el trámite por la acusación de González; el problema residía en si era legal juzgar al gobernador por sus faltas, las cuales no eran las que especificaban los artículos 71 y 72 de la Constitución.

El 27 de marzo fue sometido a votación si el asunto del gobernador pasaba a la Sección del Gran Jurado: por la afirmativa votaron Aragón, Chávez Gil, Aguiar, Cendejas, Zincunegui, González, Pallares y Echaiz; fue reprobada por Pérez Gil, Peguero, Domínguez, Castrejón, Chávez Antonio, Chávez Manuel y Chávez Carrillo, por lo que la acusación pasó al Gran Jurado.⁶¹³

Después de tanta discusión y de llegar a un acuerdo, era necesario cambiar a un miembro del órgano encargado de llevar la acusación hecha al gobernador. Entonces, el diputado González fue sustituido por Mariano Chávez Carrillo. Mas en esos momentos, la legislatura trabajaba a marchas forzadas por la instalación del Supremo Tribunal de Justicia y la preparación de la

⁶¹¹ AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, caja 1, Exp. 3, 20/II/1827.

⁶¹² AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, caja 1, Exp. 3, 22/II/1827.

⁶¹³ AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, caja 2, Exp. 1, 27/III/1827.

convocatoria para las elecciones del segundo Congreso constitucional, razones por las cuales había prolongado dos meses el periodo de sesiones ordinarias a partir del 6 de febrero. Dos días antes del cierre de las mismas, se propuso reservar el punto a la próxima legislatura, ya que al día siguiente sería la instalación del Tribunal y ya no daría tiempo, por lo que se dio paso a la votación, todos lo hicieron a favor, menos los diputados Peguero y Domínguez que pidieron constara en el acta su voto en contra.⁶¹⁴

5.1.5. La exclusiva, anualidades eclesiásticas y contaduría de diezmos

Durante los trabajos legislativos del primer Congreso, tres fueron los temas eclesiásticos que destacan, el uso de la exclusiva, la reglamentación del pago de las anualidades eclesiásticas y la creación de la contaduría de diezmos. Estos elementos tendrán una importante vinculación con la intervención del gobierno estatal en asuntos de la Iglesia.

En 1822 se realizó la junta de diocesanos en la ciudad de México, a la que asistieron representantes de todas la diócesis; en ella se llegó al acuerdo de que mientras el gobierno federal negociaba con la Santa Sede el arreglo del Patronato, la ocupación de las piezas eclesiásticas vacantes, serían efectuadas por los obispos, con base en el derecho canónico, quienes pasarían una lista al Supremo Poder Ejecutivo “para que de ellos excluya a los que por motivos políticos no le fueren aceptos, con tal de que no quede siempre número bastante para la libre elección...”. Ese es el origen de la intervención del nuevo gobierno independiente en la provisión de beneficios eclesiásticos, que retoma el gobierno nacional de la primera República Federal y que a su vez reclamaron y asumieron las autoridades de los estados.⁶¹⁵

El 8 de febrero de 1827, Aragón solicitó que se dictara una ley que declarase ser facultad del gobierno del estado ejercer la exclusiva en la provisión de las piezas eclesiásticas. Se dio lectura al dictamen el 27 de marzo, y dos días después, el 29, sin mayor discusión se aprobó el ejercicio de la exclusiva y se

⁶¹⁴ AHCEMO, Legislatura I y II, actas públicas, caja 2, Exp. 1, 4/IV/1827.

⁶¹⁵ David CARBAJAL LÓPEZ, *La política eclesiástica*, p. 53.

mandó decretar dispensándole el intervalo prevenido por el reglamento.⁶¹⁶ El Congreso local expidió el decreto el 29 de marzo de 1827, el cual decía lo siguiente: “El gobernador del Estado, oído su consejo, ejercerá la exclusiva en la provisión de todas las piezas eclesiásticas del mismo, cualquiera que sea su clase, naturaleza, denominación o duración”.⁶¹⁷ Es muy sintomático, que siendo un tema vinculado al Patronato el debate fuera nulo, puede deberse a que esta legislatura decidió tomar con cautela la legislación de este tipo de asuntos, partiendo de las experiencias suscitadas entre la constituyente y el Cabildo apenas un año atrás.

Otro asunto eclesiástico sobre el que debió debatir el primer Congreso fue la anualidad eclesiástica, impuesta por la real pragmática del 30 de agosto de 1800 a los obispos, prebendados de los Cabildos catedralicios y a quienes gozaran de una capellanía de 30 pesos en adelante y de beneficios agregados, por lo que la medida afectó tanto al alto como al bajo clero secular, porque un alto porcentaje de este clero gozaba del beneficio de una capellanía, pues para muchos era su único sustento. Con respecto al alto clero, las dignidades -Deán, Arcedeán, Chantre, Maestrescolía y Tesorero- debían pagar cada vez que pasasen de una silla a otra en la misma corporación, aunque no hubiese aumento de renta. Cuando los ascensos eran de una estalación a otra -de medio racionero a racionero, de racionero a canónigo o de canónigo a dignidad- pero dentro de un mismo Cabildo, entonces, se debía de cobrar la anualidad de toda la renta y no solamente lo correspondiente al incremento de ella. La ventaja que daba la corona ante la carga era que se podía pagar en cuatro partes en el periodo de dos años.⁶¹⁸ Respecto a las capellanías se desconoce el mecanismo de operación. La medida tuvo sus respectivas quejas por parte de la alta jerarquía eclesiástica del obispado de Michoacán. Desconociendo el comportamiento del gravamen, queda la impresión de que el impuesto persiste, pero con el cambio de sistema de gobierno su pago tiende a ser irregular, confuso y desordenado.

⁶¹⁶ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 3, 8/II/1827. Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 1, 27/III/1827, 27/III/1827.

⁶¹⁷ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo II, pp. 73.

⁶¹⁸ Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Una elite eclesiástica en tiempos de crisis*, pp. 292-293.

El 6 de agosto de 1826 se dio primera lectura al dictamen extendido por la diputación permanente en clase de comisión sobre una consulta que acompañó el gobierno hecha por el tesorero general del Estado, solicitando se dictara una providencia general para el arreglo del ramo de anualidades eclesiásticas en todos y cada uno de los casos que se pudieran presentar.⁶¹⁹

El 16 de agosto se puso a discusión el asunto, el dictamen general no presentó inconveniente ni debate sobresaliente, entonces se dispuso su análisis en lo particular. El primer artículo fue concebido en torno a que “la pensión de anualidades eclesiásticas se pagará siempre por cuartas partes con arreglo a lo que percibe el agraciado.” Peguero se opuso a la proposición diciendo que así resultaba perjudicado el estado y que para que esto no sucediese era necesario que el beneficiario por todo el tiempo que percibía el rédito este fuera igual, es decir, que siempre fuera íntegro o una parte sin variación, siempre y cuando la anualidad se cobrara con arreglo a los años del convenio únicamente. Domínguez no veía tal perjuicio porque en la tercera proposición abordaba el punto que le preocupaba a Peguero.⁶²⁰

Aragón pidió que al reglamentarse el tema de las anualidades se realizara el total arreglo de este ramo incluido el asunto de si debían pagarse éstas por los agraciados que residían en el estado, aunque recibieran el beneficio de finca situada fuera del territorio, y por los que, aunque residían fuera de él disfrutaban el beneficio impuesto en alguna finca del mismo estado, recordando que el obispado se encontraba sobre la jurisdicción de San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y una pequeña parte del Estado de México. Como el tema resultó muy complejo, Aragón consideraba que lo primero era determinar quiénes debían pagar, qué cantidad y cómo debía realizarse el pago. Chávez Gil solicitó que la comisión tuviera presente primero si se había de pagar por el agraciado solo lo que correspondiera por cuartas partes en los primeros cuatro años o en los siguientes había de satisfacer la perteneciente a un año de rédito íntegro.⁶²¹

El asunto era muy confuso y tendía a extraviarse, así que González y Domínguez consideraron pertinente suspender la discusión, lo que no fue admitido. Entonces, Peguero intervino de nuevo, insistió en que el estado

⁶¹⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 6/VIII/1826.

⁶²⁰ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 16/VIII/1826.

⁶²¹ *Ídem*.

resultaba perjudicado por lo que ya había expuesto al principio. También intervino Domínguez y se hizo necesario que la propuesta volviera a la comisión. El 24 de agosto de 1826 se dio lectura al nuevo dictamen extendido por la comisión de Hacienda unida a la de Negocios eclesiásticos.⁶²² El 30 de agosto de 1826 el debate continuó. De inmediato Peguero expuso que habiendo disentido del parecer de las comisiones ofreció fundar su voto particular, mas no había podido verificarlo a causa de no tener disponible una ley que sabía que existía sobre la materia, y manifestó oponerse al dictamen, primero porque las propuestas no eran claras.⁶²³ En segundo lugar, porque era injusto, pues imponiendo la ley el gravamen de un año de rédito, en este año o se refiere al primero en especie o se toma en general, en el primer caso resultaba un argumento más para no pagar el rédito íntegro, en el segundo, no habiendo una razón para que sea esta o el otro año, y previniendo el beneficiado sus réditos íntegros en unos años, y en otros, incompletos, era ciertamente injusto se le cobrara la anualidad con arreglo a los primeros, y no a los segundos, pues para que esto se verificara juntamente, debía atenderse a unos y otros. Para lograr este medio, su opinión era que el beneficiado pagara la mitad del rédito en el primer año del convenio, siempre que este fuese igual en todos los años, pues no siéndolo, se debía formar una suma de todos los años del convenio y dividirse en tantas partes iguales, cuantos sean los años convenidos, y pagarse la mitad de una de estas partes y que después satisficiera la mitad del rédito del primer año que lo reciba íntegro, de este modo se consigue la posible igualdad entre el Estado y el beneficiado.⁶²⁴

Huarte consideraba la propuesta de Peguero injusta porque establecía se pagara la anualidad conforme a lo convenido y que pagándose por mitad sería como media anata y con ello se seguía un orden de igualdad. Huarte tampoco veía injusticia para el estado, que antes este venía a percibir su anualidad con un retardo en el cual se podía aumentar su dinero a lo menos en una tercera parte. Peguero veía una discordancia entre que se pagara como una media anata, pero la comisión a una cuarta parte, no habiendo la igualdad que se quería sostener, en virtud de que se pretendía que ya percibiese el beneficiado los

⁶²² *Ídem.*

⁶²³ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 30/VIII/1826.

⁶²⁴ *Ídem.*

réditos íntegros, ya disminuidos, el estado en toda cuenta percibía íntegra su anualidad,

y que siendo esta una talla Real impuesta al todo de los réditos, según la naturaleza de las contribuciones debe disminuirse si se disminuyen los réditos, a más de que siendo este un gravamen, es de estricta interpretación, debiendo, aunque por principio general interpretar en favor de beneficiado [...] Schnoremberg decía que siendo dudosas las palabras de la ley, se han de interpretar contra el proferente pues este debe imputarse asimismo el no haberse explicado con mayor claridad.⁶²⁵

Peguero continuó diciendo que el estado debía percibir íntegros los réditos por el retardo de no solución, y esto significaba ser compensado con un interés, y que siendo todo interés convencional o legal, el que se pretendía, desde la perspectiva del eclesiástico no era convencional porque no había convenio y tampoco era legal puesto que no había ley que lo estableciera. Que hasta ahora no se había visto un interés tan grande, siendo cobro de rédito sobre rédito y por este principio, debía solicitar el beneficiado el mismo interés al censatario, verificándose todo lo contrario pues tenía que rebajarse el rédito en fuerza de la necesidad. Para el presidente del Congreso no era admisible la interpretación de la ley que había realizado el eclesiástico.⁶²⁶

Aragón trajo a colación que de los beneficios que se obtenían por herencia no se debía pagar anualidad, en lo que resultaba injusta la ley española y esto era un vacío que notaba en el dictamen. Con intervenciones de Huarte, Domínguez y Aragón fue suficiente para analizar las propuestas. “La pensión de anualidad eclesiástica se pagará siempre por cuartas partes con arreglo a lo que percibe el agraciado.” Y fue aprobada, se pasó a la segunda. “Al efecto presentará este en la oficina donde deba hacer su entero el correspondiente documento que acredite la composición judicial que haya tenido con el sensuuario [sic].” González observó que no se establecía la oficina en que debía presentarse el pago, Huarte contestó que dicha asignación correspondía al reglamento de la contaduría de diezmos y que ésta lo presentaría dentro de 3 días al Congreso. Aragón consideraba más apropiado que se pagara en las cajas, González no consideró la cuestión como algo reglamentario. En ese

⁶²⁵ *Ídem.*

⁶²⁶ *Ídem.*

estado las cosas, la propuesta se aprobó agregando a la redacción que “estas se pagarían en la oficia que correspondía.”⁶²⁷

El 4 de septiembre de 1826 se puso a discusión la tercera propuesta del dictamen de anualidades eclesiásticas vinculada a que en los años subyacentes pudiera el beneficiado percibir alguna parte más de lo que recibió en el primero, entonces tenía que pagar la respectiva anualidad de la parte accedente, sea cual fuere. Peguero defendiendo su posicionamiento de la sesión anterior, señalaba que la parte no decía si la anualidad se debía pagar por año o por cuartos. Huarte dijo que, por cuartas partes en cuatro años, y Peguero precisó que eso no se establecía en la propuesta. Huarte insistió en que al suprimir la palabra “convenio” quedaba clara la redacción. Entonces se dispuso a votación y fue aprobada. Peguero pidió que constara su voto en contra. Entonces se pasó a la cuarta propuesta, mencionando que la pensión de anualidad eclesiástica por lo que tocaba al estado, la pagarían solamente los beneficiados que residieran en él, aunque los capitales estuvieran fincados en otros, se votó la propuesta y fue aprobada. El día 6 de septiembre se leyó la minuta del decreto, solicitó la variación de lugar de las propuestas y se aprobó la minuta para su publicación.⁶²⁸

El tema de las anualidades eclesiásticas era complicado, el nuevo gobierno se apropió de la contribución que se había impuesto a principios del siglo, lo que también puede explicar el que resultara tan confusa su discusión, porque era un gravamen de poco arraigo que se había creado a unos años de iniciar la guerra de independencia y que con los nuevos cambios políticos se tornó desordenado en cuanto a su cobro. Tal vez esa será la razón por la que el gobierno se dará cuenta de que las anualidades no eran funcionales en ese momento, que era más lo que se especulaba que lo que podía generar a la Hacienda pública. Asimismo, Peguero resultaba comprometido con el tema porque él usufructuaba una capellanía, era un asunto en el que el eclesiástico veía comprometidos sus intereses y se percibe en el desarrollo de la discusión, dado que en la medida de sus posibilidades trata de ver por el bien del estado, pero sin perjudicar su modo de subsistencia.

Referente a los diezmos, como ya se ha venido planteando desde la legislatura anterior, el que la federación y los estados tuvieran participación de la

⁶²⁷ *Ídem.*

⁶²⁸ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 4/IX/1826, 6/IX/1826.

gruesa decimal obligó a las autoridades civiles a montar la infraestructura institucional para llevar el control y cobro de los diezmos. Los mecanismos para hacerlo no serán una novedad, pues tenían su antecedente en las reformas borbónicas. En 1776, la corona española había promovido la creación de la figura del contador de diezmos con el objeto de que el rey tuviera mayor control y vigilancia sobre estos recursos. Dicha orden fue complementada con la real cédula de abril de 1777 que ordenaba el establecimiento de una junta de diezmos en cada sede diocesana, lo que no fue acatado por la jerarquía eclesiástica. Por ello, a través de real cédula del 23 de agosto de 1786 y de la ordenanza de intendentes de ese mismo año, se reiteró el establecimiento de las juntas. En conclusión, en 1786 se ordenó nuevamente el establecimiento de estos órganos de control de diezmos en las ciudades de México, Puebla, Valladolid, Antequera, Guadalajara, Durango, Mérida, Arispe y Monterrey. Según ésta disposición, las Juntas de diezmos se integrarían por el intendente, dos jueces hacedores, nombrados uno por el Obispo y el otro por el Cabildo civil de la ciudad capital, además de uno de los principales de la Real Hacienda, es decir, el contador real.⁶²⁹

El objetivo de la creación de las Juntas era asignarles la labor de recaudar y distribuir del diezmo, con lo que se ponía de manifiesto que el rey estaba arrebatando el control de los medios de riqueza a la Iglesia. Ante tal injerencia no se hicieron esperar las representaciones argumentando el derecho exclusivo de la Iglesia de administrar los bienes decimales, el resultado fue la derogación de dicho mandato.⁶³⁰ Sin embargo, casi medio siglo después los gobiernos de los estados de la federación propusieron de nuevo la creación de órganos que vigilaran la colectación y la distribución de estos recursos ya fuera a través de Juntas de diezmos o como ocurrió en el caso de Michoacán con la creación de la Contaduría de diezmos.

El camino hacia esta determinación comenzó con la propuesta que hizo el diputado José María Navarro el 22 de octubre de 1825, para que se pidiera a

⁶²⁹ Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Una élite eclesiástica*, pp. 240-241. JARAMILLO MAGAÑA, Juvenal (Nota introductoria), *Representación que el Arzobispo y cabildo de México, el obispo de Michoacán y los Cabildos de Puebla de los Ángeles, Antequera de Oaxaca envían al Rey, para defender su derecho a la recaudación y distribución de Diezmo año de 1787*, Morelia, México, Sociedad de la Historia, 1992, pp. 9-10.

⁶³⁰ *Ibíd.*, p. 11

las Cámaras que derogaran el decreto del 18 de diciembre de 1824. La proposición pasó a su respectiva comisión, Aragón miembro de la misma, consideró que la petición debía ser más puntual y se agregara que se hacía la solicitud porque el decreto suprimía la soberanía de los estados, al tiempo que pedía que se declarara que las legislaturas no tenían impedimento para determinar lo que consideraran necesario respecto de las rentas eclesiásticas y demás puntos que no tuviesen relación con el patronato, como había sido el acuerdo. Se discutió el día 15 y fue aprobada por todos los diputados incluido Peguero en su calidad de Presidente del Congreso.⁶³¹

El decreto en cuestión establecía que:

Mientras el Congreso general en virtud de la facultad 12 del artículo 50 no dicte las leyes por la que arregle el ejercicio del Patronato, no se hará variación en los estados en puntos concernientes a rentas eclesiásticas, a no ser que ambas autoridades acuerden dicha variación pudiendo cualquiera de ellas proponer al Congreso general las reforma que estime conveniente en los demás puntos, como también ocurrir al mismo congreso general en lo relativo a rentas cuando venido entre si.⁶³²

En sesión secreta del 11 de enero de 1826 se había acordado la creación de una junta de distribución de diezmos a cargo de un contador. Es indicativo que la elaboración del reglamento para el funcionamiento de dicha junta fuera lento, pues su discusión no comenzó hasta finales de septiembre de 1826 y terminó en el mes de febrero. En buena medida porque se trató en sesiones secretas que muchas veces se suspendían por terminar el tiempo destinado para las mismas.⁶³³

El 23 de septiembre de 1826, se inició la discusión pero no sobre una junta de diezmos, sino de la contaduría de diezmos y su reglamento, los artículos fueron aceptados prácticamente sin intervenciones. Para el 19 de diciembre casi se había discutido toda la propuesta, quedaba prácticamente la última parte.⁶³⁴ Por lo tanto, ya se tenía sobre la mesa que el contador de diezmos sería un agente nombrado por el gobierno con un sueldo de 120 pesos mensuales para que glosara y liquidara las cuentas de los administradores de diezmos y de la mayordomía de fábrica. Tenía como atribuciones intervenir en los repartos para

⁶³¹ AHCEMO, Legislaturas, I, II, III y IV, Borradores de actas secretas, Caja 1, Exp. 2 y Exp. 3.

⁶³² Véase Colección de órdenes y decretos de la soberana junta provisional gubernativa, Tomo III, decreto de 2 de diciembre, pp. 137-138.

⁶³³ AHCEMO, Legislaturas, I, II, III y IV, Borradores de actas secretas, Caja 1, Exp. 3.

⁶³⁴ *Ídem*.

que estos se arreglaran a las leyes vigentes y erección del Cabildo Catedral, teniendo conocimiento de todo los ingresos y egresos pertenecientes al estado que llegaran a la clavería, todo ello con ayuda de un oficial. Al contador correspondía firmar los documentos expedidos por los hacendados para los administradores de diezmos, asimismo, firmaría las libranzas a satisfacerse en la clavería. El contador debía circular los modelos para la presentación de las cuentas a los administradores. Todo lo relacionado a los diezmos: la colectación, adeudos, existencias, cantidades, entre otros. Las cuentas se llevarían en varios libros, incluido el *del estado* en el que se asentarían las cantidades que le correspondían a Michoacán. Cada cuatro meses se daría la cantidad a favor del estado y cada tres meses se repartirían los rezagos. Los gastos generados se absorberían de la masa decimal teniéndose presente el artículo 191 de la ordenanza de intendentes. De igual forma, se debían presentar proyecciones para el año venidero, así como un cuadrante anual de ingresos y distribuciones, entre otros.

Hasta esas líneas todo había transcurrido con relativa tranquilidad, cuando se trató el tema de la sanción que traería consigo el desacato del decreto, las cosas cambiaron. Entre la propuesta debatida y lo que se publicó hay diferencias, pero estas no cambiaron el sentido de lo que se pretendía hacer. El decreto sancionó que, si el Cabildo no atendía lo establecido, el gobierno se haría cargo de todas las rentas del estado, las cuales ingresarían directamente en la tesorería general en calidad de depósito, tomando lo que correspondía al gobierno y quien posteriormente entregaría al Cabildo el sobrante; mientras que el arrendatario que estuviera en contra o entorpeciera la aplicación de la ley sería castigado con el destierro durante un año.⁶³⁵ Peguero debatió el asunto, muy seguramente a favor del Cabildo, el 19 de diciembre se había quedado con la palabra, el 27 de ese mismo mes, el eclesiástico la retomó y una vez finalizada la sesión se declaró secreto todo lo tratado. Las actas no muestran más al respecto, parecería que expresarlo todo en unas cuantas líneas hacía el asunto más reservado, más secreto.⁶³⁶

El 5 de enero de 1827, el Cabildo catedral oficiaba al Congreso no estar de acuerdo con la última parte del decreto, lo referente a la sanción de que se

⁶³⁵ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes, Decretos*, Tomo II, p.72.

⁶³⁶ AHCEMO, Legislaturas, I, II, III y IV, Borradores de actas secretas, Caja 1, Exp. 3.

hacía acreedor al no cumplir con lo estipulado por la ley. De hecho, la mesa capitular fue propositiva al respecto, pero la comisión encargada del asunto no tomó en consideración la propuesta de crear comisiones para allanar los puntos del tema, lo que generó argumentos a favor y en contra, todo ello se ventiló el 23 de enero. Dos días después la asamblea acordó contestar:

1ª Que por el gobierno se haga saber al Venerable Cabildo Eclesiástico que no habiendo lugar a su pretensión, que expone en nota de 8 del presente, se lleve a debido efecto el acuerdo de 29 de diciembre último.
2ª Que por el mismo conducto se le manifieste el desagrado con que esta Augusta Asamblea ha visto el desconocimiento de su exposición en la parte tercera que suscribe el encargado de la federación y adopta el mismo Cabildo [...].⁶³⁷

Lo que fue aprobado, sin mencionarse quién había votado y quién no. Peguero intervino manifestando que una parte de lo propuesto parecía contrario al artículo 10 del decreto del Congreso general del 4 de agosto de 1824, por lo que era dudoso si pertenecía al estado la atribución de sancionar en este aspecto. De nuevo el tema de las competencias. En un sistema federado ¿qué era atribución de la federación y qué de los gobiernos estatales? Porque a fin de cuentas eran éstos los que tenían la interacción directa con la Iglesia y los responsables de hacer que las disposiciones se cumplieran. Aunque también es de cuestionar si el eclesiástico atraía el tema de las competencias para defender a la autoridad eclesiástica, pero sin ser señalado como opuesto a la propuesta.

El 15 de febrero de 1827 el orador se presentó a la sesión secreta para consultar sobre qué hacer referente a un comunicado del comisario general, en el que éste manifestaba que la mesa capitular se oponía al acuerdo del Congreso sobre la forma de llevar el funcionamiento de la Contaduría de Diezmos. También traía otro del Ministro de Hacienda en el que el Cabildo de Valladolid decía que no podría cumplir con el pago de la deuda a la federación si se instalaba la Contaduría de diezmos. La asamblea acordó que el gobierno contestara conforme a sus facultades.⁶³⁸

En ese escenario Peguero propuso que la legislatura se pusiera de acuerdo con las de San Luis Potosí y Guanajuato en lo tocante a las

⁶³⁷ *Ídem.*

⁶³⁸ *Ibíd.*

disposiciones dictadas sobre el ramo de diezmos. El 10 de marzo, la mesa capitular envió una exposición solicitando la suspensión del decreto del Contador de diezmos y que se le escuchara a través de una comisión sobre los obstáculos que presentaba la aplicación del mismo. La asamblea no accedió a lo primero y conforme a lo segundo dijo estar siempre dispuesto a escuchar al respecto. Una intervención de Peguero indica que el Congreso recibió a un comisionado del Cabildo para conferenciar con una comisión de la asamblea, pues preguntaba si en el acto se debía dar al comisionado un asiento especial. La opinión y el malestar que manifestó la mesa capitular no influyó en la decisión de la legislatura sobre la sanción en caso de incumplimiento por parte de las autoridades del obispado.

Juvenal Jaramillo dice que la intervención del gobierno de Michoacán en asuntos de diezmos comenzó de manera muy sutil, cuando a mediados de 1824 intentó colocar un interventor de diezmos en la Catedral, lo cual no llegó a concretarse, pero fue un primer paso que derivó en la figura del contador de diezmos, una medida de bajo impacto frente a las acciones que emprendió su homólogo de Guanajuato al integrar una junta de diezmos. Aun así, la medida era sintomática de una toma de posición del Estado frente al viejo tema de su convivencia y coexistencia con el poder la Iglesia.⁶³⁹

En primer lugar, se debe remarcar de nuevo que el objetivo de esta legislatura era crear una Junta no una contaduría, cuál fue el motivo que hizo cambiar de opinión a la asamblea y suavizar la acción, eso es complicado de saber por las propias condiciones de las actas secretas, tal vez esta legislatura no quiso ser tan combativa en este tema, lo más fuerte fue el tema de la sanción.⁶⁴⁰ Jaramillo también plantea que el asunto se discutió muy secretamente para tomar por sorpresa a los prebendados michoacanos; sin embargo, éstos comenzaron a emitir opiniones y representaciones al respecto desde principios de enero de 1827. De hecho, se puede afirmar que al tener el interventor el antecedente del constituyente sobre la propuesta, el Cabildo ya estaba sobre aviso respecto a las aspiraciones del legislativo en la materia y porque Guanajuato había creado la Junta en diciembre de 1826. Por otra parte, las características de la documentación complican determinar el posicionamiento

⁶³⁹ JARAMILLO MAGAÑA, Juvenal, *Una elite eclesiástica tiempos de crisis*, pp. 473-474.

⁶⁴⁰ *Ibíd.*, p. 474.

de Peguero. El que pidiera que se mantuviera comunicación al respecto con las otras legislaturas que eran parte del obispado es indicativo de que apoyaba el dictamen y que era consciente de que el tema de la intervención de los diezmos por parte de los gobiernos locales constituía una realidad en varios estados.

Este asunto no era privativo de Michoacán, de 1824 a 1833 varios gobiernos de los estados emprendieron acciones para tener mayor control sobre parte de la renta decimal que el gobierno federal les había otorgado en 1824, para ello abolieron las hacedurías o bien parte de sus atribuciones y las sustituyeron por juntas de diezmos integradas principalmente de laicos, las cuales tenían su antecedente en la Real Ordenanza de Intendentes, pero que en esos momentos no se llevaron a la práctica. La primera junta de diezmos en instalarse fue la de Guanajuato en diciembre de 1826, seguida por la de Jalisco, quien en 1827 abolió la haceduría y creó la junta, al igual que Nuevo León, Coahuila-Texas, San Luis Potosí y Michoacán.⁶⁴¹

Como ya se mencionó el Congreso de Michoacán tenía previsto crear una Junta de Diezmos que terminó en una contaduría y en efecto emprendió medidas contra la haceduría. El 24 de agosto de 1826, el diputado Domínguez realizó una propuesta de ley en la que se manifestaba: “se excite al Gobierno del Estado para que haciendo entender al gobernador de la mitra la escandalosa inobservancia de ley, en la existencia del Tribunal de Haceduría, proceda inmediatamente a su extinción [...]”.⁶⁴² La propuesta pasó a la comisión de justicia y negocios eclesiásticos, solo que esta legislatura ya no hizo nada al respecto y dejó el expediente a la segunda constitucional.

Pablo José Peguero tuvo una gran participación en este Congreso, en el que no sólo destacó en los temas eclesiásticos. El debate sobre el reparto de bienes comunales sin duda es muy revelador porque no solo muestra el conocimiento que el eclesiástico tenía del derecho, sino la gran capacidad argumentativa que le permitía contradecir posicionamientos evitando ser acusado de parcialidad. Por otra parte, la composición de la legislatura propiciaría un ambiente óptimo para que él se perfilara hacia su mejor actuación como diputado.

⁶⁴¹ Anne STAPLES, *La Iglesia en la primera*, pp.107-113.

⁶⁴² AHCEM, Legislatura I y II, Actas públicas, Expediente 1, 22/VIII/1826.

5.2. Segunda legislatura 1827-1829

5.2.1 Pablo José Peguero, Ignacio Villavicencio y Juan Nepomuceno Sierra en el segundo Congreso de Michoacán

Desde de la implantación del federalismo a finales de 1823 hasta 1826 no se habían presentado mayores problemas a pesar de las complicaciones económicas por las que atravesaba la federación y el estado Michoacán, situación que impactaba en el proceso de institucionalización y fortalecimiento del federalismo. Llegó 1827 y con ello la agitación política y social. A nivel federal la elección del segundo Congreso, que sesionó de 1827 a 1828, estuvo marcada por irregularidades que se presentaron en los comicios realizados en Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Distrito Federal y el Estado de México, así como por la intervención de las logias masónicas.⁶⁴³

A inicios de 1827 se dio conocer la conspiración del religioso español de la Orden de San Diego, Joaquín Arenas, descubierta el 19 de enero, la que se sustentaba en un plan que tenía como objeto la conservación de la religión católica, para ello se regresaba la soberanía a Fernando VII y sus legítimos sucesores y donde fuera proclamado el plan todo volvería a ser como estaba en 1808. Los especialistas aseguran que en medio del problema se encontraban las logias masónicas, en concreto la del rito de york. La labor de los yorkinos se vio concretada cuando por presión de los estados el Congreso nacional debió emitir la primera ley de expulsión de españoles el 20 de diciembre de 1827, en este sentido, el tema español resquebrajó la paz que había predominado de 1824 a 1826.⁶⁴⁴

En 1828 el tema a nivel nacional será la sucesión presidencial, en la que, por supuesto las logias masónicas estuvieron presentes, los contendientes: Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, la mayoría de las legislaturas dieron su voto al segundo, pero los resultados no fueron vistos con agrado por una parte de la clase política y militar. Entonces, la inestabilidad política y social se vio acompañada con el derramamiento de sangre. El segundo Congreso declaró nulos los votos de Gómez Pedraza y dio la titularidad del ejecutivo a Guerrero en un acto claramente inconstitucional porque las legislaturas estatales debieron

⁶⁴³ Reynaldo SORDO CEDEÑO, "El Congreso nacional", p. 89.

⁶⁴⁴ Michael P. COSTELOE, *La primera República*, p. 137.

haber celebrado comicios de nueva cuenta. Para esos momentos la agricultura, la industria, el comercio y el crédito de la nación en el extranjero se encontraban en la ruina. Vicente Guerrero tomó posesión del cargo el 1º de abril de 1829, quedando a cargo de un país polarizado por la expulsión de españoles, en medio de la bancarrota y la presión inglesa que solicitaba el pago de los intereses generados por los préstamos concedidos. A lo anterior se debió agregar, la alteración del orden público, un régimen constitucional violentado, la muerte del último obispo mexicano y los rumores de reconquista por parte de España.⁶⁴⁵

El escenario michoacano se vio fuertemente abrumado por los acontecimientos nacionales y las propias dinámicas internas, el segundo Congreso michoacano debió hacer frente a la primera crisis institucional del estado incitada por la emisión de la ley de expulsión de españoles y la renuncia del primer gobernador el mismo día, acompañada de la provisión de los empleos vacantes. En ese contexto, la segunda legislatura comenzará a tomar precauciones sobre la tranquilidad pública a través ley, emitiendo varias disposiciones sobre los arbitrios y reglamentación de las milicias cívicas para mantener el orden interno en el estado.⁶⁴⁶

En esta segunda legislatura legislaron tres eclesiásticos, el reelecto José Pablo Peguero, Ignacio Villavicencio y Juan Nepomuceno Sierra. De los tres diputados los dos primeros eran propietarios y el tercero suplente. Los dos primeros se presentaron desde la apertura del Congreso, mientras que tercero por ser suplente debió esperar a que la asamblea lo llamara para integrarse a las labores legislativas, lo que ocurrió 17 de marzo de 1828.

Peguero ya caracterizado desde la legislatura anterior como un diputado profundamente combativo e ilustrado, continuará por esta misma línea; por su parte, Villavicencio en un inicio fue muy reservado, situación que cambió a

⁶⁴⁵ Michael P. COSTELOE, *La primera República*, pp. 167, 182, 210-216. Josefina Zoraida VÁZQUEZ, "Introducción", *Contexto nacional*, p. 24.

⁶⁴⁶ Fernando ANAYA GIL, p. 145. La milicia cívica estaba integrada por ciudadanos de la cual sólo estaban exceptuados de servicio los ordenados *in sacris*, los marineros, los que tuvieran impedimento físico para el servicio militar, funcionarios públicos y jornaleros. Las elecciones de los cargos eran realizadas por los propios cívicos a pluralidad de votos y estaban a cargo de la autoridad local. Manuel CHUST, José Antonio SERRANO ORTEGA, "Entre bayonetas y águilas. La milicia cívica en México, 1810-1835", en Brian CONNAUGHTON (Coord.), *1750-1850: La independencia de México a la luz de cien años*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ediciones del Lirio, 2010, pp. 496-499.

medida que continuaban las actividades legislativas. Mientras que Sierra habló muy poco en los debates, lo que no permite conocer sus ideas y pensamiento.

Como es de recordar, la primera legislatura ordinaria dejó a esta segunda legislatura la resolución de la acusación sobre Antonio de Castro, ante la falta de consenso por el profundo divisionismo que causó el tema y argumentando falta de tiempo y solo determinó que el asunto pasaba a la sección del Gran Jurado.

El 7 de agosto de 1827, una vez instalada la segunda legislatura, ésta nombró a los miembros de la sección, de acuerdo con el reglamento interno, el resultado fue el siguiente: 1º Juan Gómez de la Puente, 2º de Francisco Camarillo, 3º Basilio de Juan José Farfán, 5º Francisco Méndez de Torres. Se detuvo la elección porque Velasco tenía la duda si Peguero debía tener voto en esta elección. El propio eclesiástico salió en su defensa argumentando que tenía mucho más influjo el voto de los eclesiásticos en la formación de las leyes criminales y del derecho canónico, sólo les estaba prohibido votar en la aplicación de éstas al individuo y que en este caso solo era la votación de individuos que habían de sortearse para la sección. Entonces continuó la elección recayendo esta en 6º lugar en Joaquín Tomás Madero y en 7º Manuel Iriarte, quedando con la responsabilidad los tres primeros, el cuarto en calidad de secretario y los otros tres en calidad de insaculados, entonces les fue turnado el asunto del Gobernador.⁶⁴⁷

El 14 de septiembre de 1827, se dio lectura a la resolución de la Sección del Gran Jurado, en la que se decía que la causa contra el gobernador Antonio de Castro no procedía. Peguero fue el primero en intervenir y dijo que la sección no consultaba lo que debía, porque lo que se debía decir era si la acusación era legal o no, por ello se oponía al dictamen en general. Para el diputado Madero se estaba en medio de una confusión entre las operaciones de la comisión especial y las de la sección, Antonio Chávez coincidía con Peguero. El presidente del Congreso expresó que, en efecto, de un error se caía en otro y si la acusación no debía admitirse desde un principio, admitida ya por prudencia, el buen juicio aconsejaba que se le diera el trámite más decoroso y arreglado, por lo que, bajo esas condiciones, él consideraba que la sección había obrado con el tino y circunspección correspondiente, pues el usar otra fórmula llevaría a

⁶⁴⁷ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 1, 7/VIII/1827.

largas discusiones. Alegadas algunas otras razones, se pasó a la votación en general y Peguero solicitó que su voto constara en contra. Continuó el examen particular del asunto que versaba: “No ha lugar a la formación de causa al gobernador del Estado por la causa que contra este se ha intentado” y el eclesiástico pidió que se sufragara por la vía nominal quedando aprobada por Villavicencio, Pérez Gil, Peguero, Iriarte, Silva, Madero, Soria, Chávez, Gómez de la Puente, Farfán, Velazco y el presidente Camarillo.⁶⁴⁸

Es necesario hacer hincapié en que esta legislatura no quiso enfrascarse en largas discusiones por el asunto, tal como le había ocurrido a la legislatura anterior porque era polarizar a los miembros del Congreso desde un inicio, lo que podría afectar sus deliberaciones y resoluciones futuras. En ese contexto, Peguero comenzó el cuestionamiento, pero el posicionamiento del Gran Jurado no dio pie junto con sus compañeros legisladores a profundizar en el tema. Queda claro que la resolución fue planteada para darle una salida rápida y sencilla al asunto, no sólo por los señalamientos y murmuraciones que la cuestión podía levantar, sino porque en ese momento había situaciones más complejas que atender como la hispanofobia y la inestabilidad social que derivó en un problema de seguridad. El formar causa al gobernador y turnarlo al Tribunal correspondiente llevaría a la inestabilidad del ejecutivo en un momento que era vital para evitar el desorden social.

5.2.2. La estabilidad se quiebra: conflictos, expulsiones y acusaciones de traición

En el periodo colonial los españoles peninsulares eran una minoría que generalmente se encontraba en la cima de la escala social y que había desarrollado una importante confrontación por los cargos con los americanos tal como se manifestó durante la crisis política de 1808 y el golpe de Estado que terminó por deponer al virrey José de Iturrigaray en la ciudad de México. Por su parte, la insurgencia fue un escenario donde la hispanofobia tuvo fuertes manifestaciones, sobre todo cuando el ejército de Hidalgo asesinó a varios peninsulares de las ciudades de Celaya, Guanajuato, San Miguel el Grande y Valladolid. Con la independencia, la situación de los españoles cambió, más de

⁶⁴⁸ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 1, 14/IX/1827.

8000 soldados habían llegado para contener la insurrección. Estos remplazaron a muchos funcionarios, comerciantes y burócratas que salieron de México después de 1821 en medio de la búsqueda y consolidación de un nuevo sistema de gobierno. Los problemas económicos que afrontaba el país, el surgimiento de las logias masónicas escocesas y yorkinas, además de la negación de Fernando VII de reconocer la independencia de México, dejaron a los peninsulares en una situación complicada.⁶⁴⁹

Como ya se mencionó al inicio, la conspiración del padre Arenas fue utilizada para exacerbar a la población contra la comunidad peninsular. Los especialistas aseguran que en medio del problema se encontraban las logias masónicas, en concreto la del rito de york, que desde su fundación en 1825 se había dado a la tarea de purgar a la comunidad española, con el objeto de “restaurar la salud pública”. A partir de ese momento, solo sería cuestión de tiempo para que las legislaturas estatales comenzaran a emitir las leyes de expulsión de españoles. En los estados de Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz los debates sobre el tema fueron acompañados por revueltas sociales.⁶⁵⁰

En el caso concreto del estado de Michoacán, el 13 de octubre de 1827 se recibió un oficio del ayuntamiento de Santa Clara en el que solicitaba la salida de todos los españoles del estado,⁶⁵¹ quedándose solo los que acreditaran su adhesión al sistema y de los que quedasen ninguno obtuviera empleo civil, militar o eclesiástico. El 29 de octubre el Ayuntamiento de Valladolid hizo llegar su exposición sobre la expulsión de españoles. El día 31 se dio primera lectura al dictamen sobre solicitudes de expulsión de los ayuntamientos de Santa Clara, Ario y Valladolid. El 5 de noviembre el Congreso se enteró que una junta patriótica en Uruapan estaba articulando un plan de expulsión de españoles. El 7 de noviembre del Ayuntamiento de Indaparapeo solicitó a la asamblea que

⁶⁴⁹ Harold SIMS, *Descolonización en México, El conflicto entre mexicanos y españoles (1821-1831)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p.11.

⁶⁵⁰ Michael P., COSTELOE, *La primera República*, pp. 90-93. Harold SIMS, *Descolonización en México*, p. 32.

⁶⁵¹ Para el caso de Michoacán véase el trabajo de Ernesto GUILLEN CALDERÓN, *La expulsión de españoles en Michoacán, 1821-1833: debates políticos y sociales en la Construcción de México*, tesis de licenciatura, Morelia, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007.

dictara una ley análoga a las actuales circunstancias del estado para calmar la agitación de los ciudadanos y evitar los males que se veían venir.⁶⁵²

El 8 de noviembre el Congreso solicitó al orador que se presentase el día 10 para discutir el dictamen de las solicitudes de la expulsión de españoles que enviaron Ario y Santa Clara, pero ante el escenario, se acordó se tuviera el debate ese día en sesión extraordinaria, la cual abrió con el primer artículo que decía así: “Saldrán del territorio del estado todos los Españoles solteros que se hallan en él y los casados que no hicieron vida marital, exceptuándose entre unos y otros, los que tengan 60 años de edad.” Al respecto, el presidente Peguero manifestó estar conforme menos con la última parte porque podía limitarse hasta 50 años con la calidad de que tuvieran 35 años de vivir en la República o hubiesen prestado servicios a la Independencia antes de 1820, al respecto participaron Camarillo, Puente y Domínguez.⁶⁵³

Antes de proceder a votarse el artículo, Peguero volvió a tomar la palabra para hacer una serie de puntualizaciones. Dijo que él no podía proceder contra su propia convicción y así era indispensable declarar el sentido en que aprobaba el dictamen a discusión.

Sin tocar la justicia o injusticia de la medida que se consulta, su opinión ha sido que ella pertenece exclusivamente a las cámaras de la Unión, de aquí es que tomarla en consideración el Honorable Congreso es por su parte romper el vínculo de unidad, lo que ciertamente abre la puerta a un sistema político. Que esta ha sido su opinión, por lo que, si aprueba el dictamen, es precisamente en el concepto de ser el único medio que hay para evitar los graves males que a la vez amenazan al estado.⁶⁵⁴

Es importante puntualizar que Peguero reconocía un problema de competencias, pues de acuerdo con el sistema de gobierno, la emisión de una ley de esa naturaleza no era competencia del legislativo estatal, sino del legislativo federal. Asimismo, aprovechó para señalar la presión bajo la cual se encontraba no sólo él, la legislatura en general que debió aprobar la ley para evitar una revuelta social.

⁶⁵² AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 13/X/1827, 29/X/1827, 31/X/1827, 5/XI/1827, 8/XI/1827.

⁶⁵³ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 8/XI/1827.

⁶⁵⁴ *Ídem*.

El artículo primero se aprobó tomando en parte la observación que había realizado el eclesiástico. Exponía este que saldrían del territorio del estado todos los españoles solteros y casados que no tuvieran vida marital, exceptuándose de unos y otros los que tuvieran 60 años o 50 que contaran como mínimo con 35 años de residencia en la república y los que hubiesen prestado servicio a las armas de la independencia antes de 1820. Como ya se mencionó, Peguero consideraba que la legislatura no tenía las atribuciones para emitir la ley de expulsión de españoles del estado, en ese sentido, concordaba con la opinión del gobernador Antonio de Castro, quien manifestó a través del orador, que antes de decretar la ley renunciaría al cargo.⁶⁵⁵

El 8 de noviembre de 1827 no sólo se sancionó la ley de expulsión, el Congreso también debió hacer frente a la vacante del ejecutivo. Al terminar la discusión de la ley de expulsión, se trató el asunto de la renuncia del gobernador. El presidente Peguero intervino para sugerir que antes de tratar sobre la renuncia del gobernador, el Congreso debía tomar con más detenimiento el asunto, “pues los hombres de una hora a otra suelen variar de opinión y nada perdía con que se demorase la resolución de este asunto.” Camarillo contestó a Peguero que desde un inicio había quedado claro que nada lo haría cambiar de opinión al gobernador “y es de creerse que, atendida la firmeza de su carácter, nada podrá conseguirse por mucho que se persuada o desistir de su intento,” y dadas las circunstancias no se podía quedar el estado sin gobierno. Silva dijo que de no reconocer la renuncia del gobernador se podían originar otros males.⁶⁵⁶ No se puede deducir quién votó a favor o en contra en esta sesión, no hubo votación

⁶⁵⁵ *Idem*. Por negarse a decretar la ley de expulsión de españoles, Antonio de Castro ha sido desdeñado por buena parte de la historiografía michoacana a pesar de que su trayectoria política tuvo impacto dentro de varios procesos históricos importantes. Antonio de Castro fue un abogado que en 1807 obtuvo el cargo de síndico procurador del Ayuntamiento de Valladolid y en 1808 fue electo regidor. Se incorporó al movimiento insurgente y en 1815 fue nombrado Ministro del Tribunal de Justicia insurgente. Una vez lograda la independencia fue electo diputado por Michoacán al primer Congreso nacional, a fines de 1823 fue designado jefe político de la diputación provincial de Valladolid de Michoacán. El 8 de abril el Congreso constituyente de Michoacán nombró a Francisco Manuel Sánchez de Tagle gobernador interino y Antonio de Castro fue designado teniente de gobernador, el primero nunca tomó posesión del cargo y a su renuncia, la asamblea le dio el cargo Castro, quien a principios de agosto de 1825 fue electo primer gobernador constitucional de Michoacán por la primera legislatura, cargo al que renunció a poco más de dos años de tomar posesión porque se quiso decretar la ley de expulsión de españoles, a partir de 1831 se incorporó de nuevo a la vida política del estado de Michoacán, primero como ministro del Superior Tribunal de Justicia hasta el año de 1835 en que fue nombrado Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, cargo que desempeñó hasta su muerte acaecida en 1846. GARCÍA CORONA, Nely Noemí, *Un esbozo*, pp. 68-74.

⁶⁵⁶ *Idem*.

nominal. Villavicencio asistió, pero no intervino en el debate. Solo se sabe que no asistieron Pérez Gil que estaba de comisión del Supremo Gobierno del estado y Méndez Torres.

Consecuencias de la expulsión fue el tener que vaciar puestos de la administración pública, entre ellos el de Tesorero General del estado. El 13 de noviembre de 1827 el diputado Domínguez pidió que se preguntara al gobierno cuánto tiempo se concedería a los españoles empleados en la administración del estado para el finiquito de las cuentas y llevaran a cabo la entrega de las oficinas. Dos días después el mismo diputado presentó una propuesta para la ocupación de los puestos vacantes en la administración por la aplicación de la ley de expulsión.⁶⁵⁷

Los resultados de las inquietudes de Domínguez se vieron reflejados el 5 de enero de 1828, día en que se puso a discusión el dictamen de la comisión de Hacienda, sobre la posesión de empleos de Miguel Huerta y Antonio Huerta. El primero en intervenir fue Villavicencio como miembro de la comisión, afirmando que ésta no consideró conveniente tomar la propuesta del Gobierno para la posesión de la administración de la fábrica a favor de Antonio Huerta. El presidente del Congreso contestó que la comisión con prudencia había atendido los obstáculos presentados para la toma de posesión de los empleos de Tesorero General y Administrador de la Fábrica, pero que de no presentar las respectivas fianzas en todo el presente mes se deberían de tomar otras decisiones. Villavicencio manifestó que para el caso de Miguel Huerta Escalante el problema de la fianza era por la cancelación de una escritura de 6000 pesos con que afianzaron su responsabilidad en la administración de Puruándiro. Y en el caso de Antonio Huerta era probable que presentara la fianza para el cargo en el transcurso del mes. Pérez Gil era de la idea que la propuesta del presidente debía de tenerla presente la comisión para presentar un proyecto acorde a las circunstancias del momento. Entre otras intervenciones, el diputado Puente insistió en que además de lo expuesto se debía decir si el actual Tesorero General debía continuar en el cargo. Velasco consideraba que era de absoluta necesidad que continuara hasta no hacer formal entrega de la oficina, porque

⁶⁵⁷ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 13/XI/1827.

esta no se podía quedar sola por los papeles y documentos que guardaba y la custodia de los intereses que estaban bajo su responsabilidad.⁶⁵⁸

El problema era la ley de expulsión de españoles, por lo que Puente sugirió que Huerta entrara en calidad de interino para que no se pensara que se quería eludir la ley. Entonces Manuel Chávez y el presidente opinaron que volviera a la comisión, aunque Puente era de la idea de que se resolviera en el momento. Velasco consideraba que Miguel Huerta no podía entrar en calidad de interino si ya tenía el nombramiento de propiedad, pero el presidente aseveró que una cosa era el nombramiento y otra la posesión. Villavicencio remarcó que el inconveniente para que entrara a servir provisionalmente era la fianza, pero que esta podría presentarla al Consejo de gobierno que era el Jefe de la Contaduría. Entre las cosas que se vertieron estaba que si no presentaban las fianzas en el plazo establecido el Congreso tomaría otras provisiones. Se votó el asunto y se le dio el presente mes al nombrado Tesorero para arreglar lo de las fianzas para tomar posesión del cargo. Entonces, se procedió al asunto de Antonio Huerta provisto administrador de la Fábrica de cigarros a quien se le concedía el mismo tiempo que al anterior para cubrir una fianza de 4 000 pesos. En la discusión intervinieron Puente, Velasco, Pérez Gil, Camarillo y el presidente del Congreso Domínguez hasta llevar el asunto a votación lo que fue aprobado. Peguero no asistió ese día a la sesión porque se encontraba de licencia. El 18 de enero de 1828 Miguel Bellido hizo entrega de la Tesorería general del estado a Miguel Huerta Escalante.⁶⁵⁹

El caso se presenta porque fue la primera ocasión en que Villavicencio tomó la palabra para hacer una exposición argumentada, la que tuvo que sostener por ser miembro de la comisión encargada del asunto. Después de esta sesión el eclesiástico será más visible en las actas al intervenir con más frecuencia en las sesiones. Por otra parte, el debate permite ver los problemas que debió enfrentar la administración pública por la expulsión de españoles y el temor que algunos diputados sentían de ser señalados como evasores de la ley por la demora en cesar de su empleo al Tesorero del estado Miguel Bellido.

Hasta ese momento solo eran dos eclesiásticos al interior de esta legislatura, de los cuales el que más intervenía era Peguero. En el mes de

⁶⁵⁸ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 5/I/1828.

⁶⁵⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 5/I/1828, 18/I/1828.

febrero se le ofició al gobierno para mandar llamar al diputado suplente Juan Nepomuceno Sierra para que reemplazara al diputado Manuel Ruiz de Chávez. Sierra se integró a la asamblea el 17 de marzo de 1828. A partir de ese momento, los tres eclesiásticos que fueron electos estuvieron activos.⁶⁶⁰

Como colofón de este apartado se tratará el traslado de la cabeza de partido de Coahuayana a Coalcomán, cuya discusión inicia el 23 de febrero de 1828. Entre los intereses que primaban en el tema estaba la exención de pago de toda contribución. En el debate intervino Villavicencio, en torno a cuestiones geográficas, dijo que estaba informado de que Tumbiscatío y otras rancherías que había por el mismo rumbo estaban demasiado distantes de Coalcomán y que sabía de la existencia de un río caudaloso que en tiempos de aguas impedía la comunicación con Apatzingán que era su cabecera, pero que aquellas gentes tenían menos inconvenientes en pasar el río, que en hacer un viaje de más de 4 leguas para llegar a Coalcomán. El orador dijo que se había tomado en consideración lo expuesto por Villavicencio pero que por los caudales del río les era menos incómodo ir a Coalcomán. Entre otras opiniones se aprobó que los pueblos de Coalcomán, Coahuayana, Colotlán, Chamila, Zinacamilán, Maquilí, Ostula, Coire, Pomaro, Aquila, Tepalcatepec y congregaciones de Aguililla y Tumbiscatío formarían el partido de Coalcomán. Es decir, este partido se extendería por toda la zona costera de Michoacán. A su vez, Peguero intervino en la segunda parte del debate, centrada en la exención de las contribuciones, en que pedía se privilegiaran los productos y no a las personas para no promover la ociosidad. La opinión de Peguero no tuvo influjo al momento de la resolución.⁶⁶¹

En este caso, la intervención que hizo Villavicencio estuvo vinculada a los conocimientos que el eclesiástico tenía de la región por los nombramientos que había desempeñado dentro de su carrera. Por otra parte, cuando se tomó en consideración el tema de la contribución el único en participar fue Peguero, lo que deja claro que, aunque fueran eclesiásticos, en ocasiones no tenían los mismos intereses y percepciones de la realidad.

El tema del nuevo partido de Coalcomán siguió teniendo espacio en el Congreso, el 13 de mayo en plena discusión sobre aclaraciones de las rentas

⁶⁶⁰ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 17/III/1828.

⁶⁶¹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 23/II/1828.

nacionales en dicho partido, el eclesiástico Sierra intervino en el debate referente a que en atención a la gran distancia entre Coalcomán y Valladolid se le permitiera a Coalcomán hacer sus enteros cada dos meses en la administración de Apatzingán con apoyo del subprefecto y el juez de Hacienda, quienes se encargarían de su recibo, custodia y envío a la Tesorería general. Peguero veía en la acción un gravamen a la Hacienda pública al asignarse 800 pesos al administrador, poniendo de ejemplo que el de Zitácuaro recibía solo 600 pesos y que era una administración más importante, argumentando que el administrador de Coalcomán no tenía mucho trabajo porque aquel lugar estaba exceptuado del pago de alcabalas.⁶⁶²

El diputado Chávez consideraba que era un gravamen necesario para la Hacienda por la distancia entre Coalcomán y la capital y porque tenía que pagar por su cuenta los traslados y su sueldo se reduciría a nada, siendo así nadie quería servir el empleo. Peguero veía más equilibrio en darle el sueldo normal y agregarle lo de los traslados “para que no se diera el caso de la ociosidad que trae la desigualdad”, para evitar escándalos de que el administrador de Coalcomán no hiciera lo que todos los demás de su clase. Chávez insistió en que nadie quería ir a servir la administración si se bajaba el sueldo. En ese contexto de la discusión, Sierra recordó que, aunque Coalcomán estaba exento de contribuciones de otra clase, era necesario estimular en lo posible al partido, si después el gobierno consideraba variar las circunstancias, éste tenía el margen para imponer otros arbitrios más ventajosos al erario, dado que se entendía que la disposición era temporal. A su vez, Peguero mencionó que si el administrador presentaba las cuentas en Apatzingán entonces debía reportar costos menores para la hacienda. Pérez Gil, tratando de ilustrar un poco más el tema dijo que los otros administradores no solo tenían los 600 pesos de sueldo sino un porcentaje de las alcabalas y el de Coalcomán no.⁶⁶³ La discusión anterior no se plasmó en el decreto, sólo se declaró que el partido quedaba libre de toda contribución por tres años exceptuándose las que se pagaban por el tabaco y el papel sellado.⁶⁶⁴

⁶⁶² AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 13/V/1828.

⁶⁶³ *Ídem*.

⁶⁶⁴ Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo III, p. 39.

Esta legislatura debió enfrentar un sinnúmero de temas, algunos de mayor trascendencia que el del traslado de cabecera del partido de Coahuayana a Coalcomán; sin embargo, es de los pocos debates en los que participan los tres eclesiásticos, de hecho, es en el que Sierra interviene con mayor ahínco. Ya en especificaciones del debate, se percibe la notable participación de los tres eclesiásticos en el tema, Villavicencio ilustrando sobre la geografía de la zona, mientras que Peguero y Sierra se enfocaron al tema administrativo.

Otro tema que será importante para la legislatura estará vinculado al encarcelamiento del diputado Joaquín Domínguez por la publicación de un escrito. La discusión inició el 19 de mayo de 1828. A modo de contexto a partir de lo que se puede deducir por la lectura de las actas, el diputado Joaquín Domínguez fue acusado de publicar un documento con ciertas ideas, se infiere que políticas. Ante el hecho, el alcalde segundo del Ayuntamiento de Valladolid lo apresó.⁶⁶⁵

El dictamen era producto de la propuesta del eclesiástico Peguero, en él se solicitaba que “se reclame la persona del sr. Diputado Domínguez al alcalde que lo tiene preso.” El primero en intervenir será Villavicencio, quien se manifestó estar firmemente persuadido, tal como el gobierno lo estaba de que en darle cumplimiento a este acuerdo le resultaba responsabilidad con el gobierno federal por ser contrario a la ley de imprenta, lo que era exclusivo de la federación por lo que creía que no era competencia del gobierno, porque ahora había de tener el mismo éxito que la vez pasada, pues temía que se le exigiera responsabilidad con fundamento. Peguero dijo que de una dilatada e ilustrada experiencia aparecía esta incontestable verdad, que el bien de los estados y la existencia misma de los gobiernos dependía esencialmente de la estricta observancia de sus leyes y muy en particular de las constitucionales, porque ellas eran el fundamento de los poderes y de la forma de gobierno:

que de hay [sic] es que hallándose como representante del Pueblo, estrechado por los deberes que le impusiera el pacto social y los fundamentos que había expresado en este santuario, a ver en todo por el bien y la prosperidad del Estado a observar y hacer observar su Constitución.⁶⁶⁶

⁶⁶⁵ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 19/V/1828.

⁶⁶⁶ *Ídem*.

Desde la perspectiva de Peguero no se trataba de una cosa nueva, sino de que se llevase a efecto un artículo constitucional que no admitía disputa, y que era infundado el temor del ejecutivo de que se le fincara responsabilidad por su cumplimiento. Villavicencio también intervino, externó que no podía decirse que era competencia de los tribunales del estado conocer las causas pertenecientes a la federación y citó varios ejemplos. Peguero dijo que lo expresado por el eclesiástico no podía tener lugar, ni aun en el gobierno anterior, pues una Ley de Partida dice: “que se ha de seguir a la letra de la ley y no interpretarla,” y si esto no estaba permitido en ese régimen mucho menos se podía permitir en un gobierno republicano, que aquí no se estaba a la letra de la ley sino que se interpretaba por una autoridad que no tenía esa facultad que era exclusiva del legislador, que por regla general se había de estar a ella pues no existía oposición con el Acta Constitutiva y Constitución general. Que aquí no se trataba de arreglar la libertad de imprenta, sino de que se cumpliera con un artículo constitucional.⁶⁶⁷

De nueva cuenta el punto era si correspondía o no al gobierno del estado tomar cartas en el asunto o si era competencia de las autoridades federales, con el agregado de que quien había procedido era un miembro del Ayuntamiento de Valladolid, es decir, ya no era un problema de competencias entre los dos niveles de gobierno habituales: el de la federación y el estado, ahora intervenía también un Ayuntamiento.

Continuando con la exposición de los hechos, tomó la palabra Pérez Gil para decir que nadie podía negar que solo se pedía el cumplimiento de un artículo constitucional que no tenía ninguna contrariedad constitucional. Que no se trataba de que no se castigara a los diputados que incurren en abusos, que lo que se quería es que fuera sancionado el tribunal correspondiente. El presidente del Congreso dijo que era sabido que existían delitos que eran cometidos por los poderes del estado y que gozaban de la inmunidad, pero de los concernientes al gobierno federal no podía tomar conocimiento el estado. Entendía que el gobierno temiera se le fincara responsabilidad por sancionar un delito del orden federal, “que el gobernador pasado tuvo tanto temor que no quiso publicar la ley de 9 de octubre y más bien renunció”. Para Soria quedaba claro

⁶⁶⁷ *Idem.*

que no podía contradecirse la Constitución, pero que, en Guadalajara, Durango y otro estado que no recordaba había sucedido algo igual de denuncia de papeles y por ser diputados sus autores no se había procedido a formar causa y no se exigió responsabilidad. Se votó y se empató el asunto, por la afirmativa sufragaron Soria, Méndez Torres, Peguero, Pérez Gil e Iriarte, por la negativa Farfán, Chávez, Sierra Villavicencio y el presidente Velasco. En ese tenor siguió la discusión y surgió la duda si el gobierno podía hacer observaciones a los acuerdos del Congreso.⁶⁶⁸

Por otra parte, llama poderosamente la atención que el alcalde segundo del Congreso arrestara a un diputado y se negara a dejarle en libertad. En sí, la discusión se centró en la interpretación que el alcalde hacía de la ley, cuando no era su competencia y cómo el gobierno del estado no quiso intervenir en favor de del diputado argumentando el miedo de ser acusado de tomar atribuciones pertenecientes al gobierno general. Aunque esto último puede tener otra lectura, y que de alguna manera podría estar marcando la votación de los eclesiásticos.

Finalmente, Peguero con todo el buen manejo del derecho que poseía, artículo la defensa de Domínguez conforme a la ley, cosa muy característica del eclesiástico. Mientras Villavicencio tomó un accionar contrario, no se debe olvidar que en 1830 éste postuló a la convocatoria de curatos vacantes que abrió el Cabildo Catedral y presentó una certificación de Salgado en el que hablaba de sus méritos y del buen desempeño que había tenido dentro de su profesión según había escuchado. En este asunto, Peguero y Villavicencio no tenían las mismas tendencias partidistas, queda claro, por su parte Sierra no intervino en la discusión, y al votar lo hizo del lado de Villavicencio, con quien tenía más afinidad de acuerdo a las votaciones nominales.

Regresando al encarcelamiento de Domínguez, este desencadenaría eventos importantes, para empezar el 27 de octubre de 1828, el diputado leyó una exposición en la que daba cuenta de “los acontecimientos de su prisión” y por tal razón levantaba formal acusación contra el vicegobernador en ejercicio José Trinidad Salgado cómo infractor de la Constitución por haberle privado más de seis meses de las funciones del cargo de diputado. Es muy probable que el

⁶⁶⁸ *Idem.*

asunto se discutiera en sesiones secretas, porque en las actas públicas el tema no se vuelve a tocar.⁶⁶⁹

Dos días después de la primera propuesta de Domínguez, el 29 de octubre hizo otra moción para que la junta electoral provincial no propusiera en la terna para gobernador y vicegobernador a Salgado. El 15 de noviembre se puso a discusión el dictamen, el cual respaldaba la propuesta de Domínguez, que indicaba que no se podía proponer para la terna de gobernador y vicegobernador, porque al tiempo de la elección se encontraría en funciones. De inmediato, el diputado Silva se opuso diciendo que era anticonstitucional la solicitud, pues la máxima ley estatal ya establecía quienes no podían ser electos para el cargo, como lo eran los eclesiásticos y empleados de la federación, por lo que el atender la petición de Domínguez se debía variar la Constitución, cosa que no se podía hacer hasta el año de 1830.⁶⁷⁰

El 18 de noviembre, el diputado Camarillo dijo que el dictamen no solo era inútil, sino también impolítico a partir de lo establecido en el artículo 61 constitucional, el cual no permitía la reelección de gobernador y vicegobernador, sino después de un cuatrienio de haber cesado en sus funciones. Por su parte, el eclesiástico Peguero veía inútil la propuesta, finalmente el Congreso votó y desechó la petición. Ante el resultado, Domínguez solicitó se imprimiera el acta que decía que la propuesta era desechada por ser inútil la causa dada a claridad del artículo constitucional 61. Lo que no fue admitido. El asunto paró aquí, pero a la hora de las elecciones la junta electoral hizo lo que justo parte la legislatura pretendía evitar, la elección de Salgado para la gubernatura, la cual ganó y que en 1830 le sería arrebatada porque su designación infringía lo establecido en el artículo 61 constitucional.⁶⁷¹

Pero la lista de señalamientos de Domínguez hacia Salgado no terminaba, el 1º de noviembre de 1828, presentó una acusación contra el gobernador por traición, al respaldar con sus acciones el movimiento de Santana, las cuales consistían en que habiendo recibido la ley contra el rebelde Santana y sus secuaces el 21 de septiembre, no la publicó hasta el día 26 y que habiendo estallado la revolución en Zitácuaro, primero tomó providencias el Supremo

⁶⁶⁹ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 2, 27/X/1828.

⁶⁷⁰ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 2, 29/X/1828, 15/XI/1828.

⁶⁷¹ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 2, 18/XI/1828.

Gobierno de la Federación, algo similar ocurrió con la sublevación de Flores en Huetamo que no comunicó al Comandante general hasta pasado un tiempo considerable.⁶⁷²

El 2 de diciembre de 1828 se presentó el dictamen de la comisión del Gran Jurado sobre la acusación contra el gobernador Salgado por colaborar con el plan de Santana, lo que después de largas observaciones se puso a votación y fue aprobada la formación de causa contra el gobernador José Salgado. A favor del dictamen votaron Camarillo, Juan Gómez Puente, Iriarte, Martínez, Peguero, Madero, Farfán, y Domínguez y reprobaron Silva, Sierra y el presidente José Antonio Pérez Gil. Ese día faltaron por enfermedad Villavicencio, Méndez Torres y Velasco. Acto seguido, se suspendió del empleo de gobernador a Salgado y quedó al frente del ejecutivo Pedro Villaseñor. La causa del titular del ejecutivo pasó al Supremo Tribunal de Justicia del estado y éste determinó absolverlo de toda culpa, por lo que el 17 de diciembre, a propuesta de Francisco Camarillo, se solicitó la publicación del acuerdo de la sesión secreta del 10 de diciembre en que permitía a Salgado retomar de nuevo las riendas del gobierno del estado.⁶⁷³

Dentro de este bloque de asuntos es necesario tocar el tema del cambio de nombre de la capital del estado de Valladolid a Morelia porque Villavicencio participó como artífice de la propuesta. El cambio del nombre la capital del estado de Michoacán en septiembre de 1828 se afianzó por el ambiente de hispanofobia que se vivía. Carlos Herrejón Peredo advierte que Morelos gozaba de una imagen heroica entre los insurgentes desde fechas muy tempranas, la obra de Carlos María de Bustamante da fe de ello, pues en su *Cuadro Histórico de la Revolución de la Independencia* y el *Elogio Histórico del General José María Morelos y Pavón* plasmó alabanzas desmesuradas hacia el “Siervo de la Nación” con las que denotaba el profundo conocimiento que tenía de su contemporáneo y la admiración que le profesaba como militar y político.⁶⁷⁴

Pero en Michoacán no fue sino hasta mediados de 1828 que a Morelos se le reconoció como héroe y figuró en el panteón cívico del estado, cuya

⁶⁷² Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en adelante: AHPJEM, Responsabilidad de autoridades, 1828, Leg. 1, Exp. 5.

⁶⁷³ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 2, 2/XII/1828, 17/XII/1828.

⁶⁷⁴ Carlos HERREJÓN PEREDO, “La imagen heroica de Morelos”, en CHUST, Manuel, MÍNGUEZ, Víctor (Eds.), *La construcción del héroe en España y México (1789-1847)*, Valencia, Universitat de València, 2003, p. 244.

construcción había iniciado con los trabajos de la legislatura constituyente en 1824. En ese año, al interior de la asamblea se propuso la edificación de una pirámide en el portal donde había sido fusilado el eclesiástico Mariano Matamoros, quien fuera la mano derecha de Morelos en el movimiento insurgente. Mientras que para Manuel Villalongín y José María García Obeso se pedía la elevación de altares en su honor, el primero de ellos había sido un importante insurgente, mientras que el segundo fue uno de los líderes de la Conspiración de Valladolid de 1808 -de la que ya se ha hablado en el primer capítulo de este trabajo-. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de las propuestas, éstas no se concretaron por la situación económica que primaba en las arcas públicas del estado.⁶⁷⁵

En contraste, la figura de Morelos tuvo poca consideración por parte de los actores políticos influyentes vallisoletanos y michoacanos. En diciembre de 1824, Carlos María de Bustamante envió al Congreso Constituyente un ejemplar del retrato de Morelos, con el que acompañaba una petición para el órgano legislativo se compadeciera “de la desgraciada familia de este héroe”. El 9 de febrero se acordó que la stampa se pusiera “en un marco de madera fina, o de bronce sobre dorado y con buen vidrio” para que fuera colocado en la sala de comisiones. Es de señalar que la primera propuesta de cambiar el nombre de Valladolid por otro que hiciera referencia a Morelos surgió del diputado Joaquín Domínguez el 27 de septiembre de 1826, la que en su momento no tuvo mayor trascendencia, debieron pasar cerca de dos años y verse convulsionado el estado por el tema español para que la moción se concretara.⁶⁷⁶

Es bajo este contexto que el 23 de agosto de 1828 Villavicencio, Velasco, Madero y Chávez exhortaban el cambio de nombre de Valladolid por uno que hiciera honor a José María Morelos: Ciudad Morelos. La propuesta a la letra fue la siguiente:

Los primeros usurpadores del vasto imperio Mejicano, al imponer nombres españoles a las poblaciones que fundaron y conquistaban o bien llevaron el objeto de obsequiar a su tierra natal y por este medio se perpetuase la memoria de sus atrocidades canonizadas entonces con los nombres de servicios importantes hechos a Dios y al Rey, o bien el de

⁶⁷⁵ PÉREZ ESCUTIA, Ramón Alonso, “Identidad Local, Opinión Pública e imaginarios sociales en Michoacán, 1821-1854”, Tesis de doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, pp. 505-507.

⁶⁷⁶ *Ibíd.*, pp. 505-511.

establecer cierta analogía entre este continente y la península, según la situación topográfica de los países que dominaban, o últimamente el de adular a los tiranos o sus Ministros de estos principios emanaron los nombres de Valladolid, Salamanca, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Galveston, Villa Padilla, y otros muchos que sería largo referir= Fenecieron ya, señor, aquellos tiempos de apropiación y de ignominia, y a ellos sucedieron los de la gloria y engrandecimiento. No debe más ya recordar nuestra esclavitud, sino es para saber apreciar justamente lo mucho que ha costado nuestra libertad. Debemos borrar de nuestra memoria los nombres de nuestros opresores, y qué los lugares que abordaron esos monstruos de crueldad. Guiados de este principio algunas sabias legislaturas o han restituido a sus Estados y capitales los nombres que antiguamente tenían o les han impuesto otros propios para eternizar la memoria de los Héroes que sacrificaron sus vidas en las Aras de la Patria tal conducta merece ser observada por Michoacán, que no debe ceder a las demás en gratitud y reconocimiento. Y siendo esta ciudad la misma en que vio la luz primera uno de los más esclarecidos Mártires de la Patria, el Indito, el valiente, el impertérrito campeón de José María Morelos, parece fuera de toda duda que para inmortalizar su nombre y excitar la más tierna gratitud de las presentes y futuras generaciones hacia un hijo ilustre de este suelo que fue el honor y gloria de esta ciudad se acceda por vuestra Soberanía a la proposición que subscribimos= En la celebración del 16 de septiembre del presente año se cambiará el nombre de esta capital suprimiendo para siempre el de Valladolid y substituido en su lugar el de Ciudad Morelos, u otro alusivo a la memoria de este benemérito hijo de la Patria.⁶⁷⁷

Peguero dijo estar de acuerdo con la propuesta por ser igual a otra que había hecho Domínguez con la diferencia que ésta hacía la solicitud para variarse el nombre el 16 de septiembre, solicitando se agregase aquella a ésta por principio del expediente. A su vez, Gómez Puente pidió la dispensa de la segunda lectura.

El 6 de septiembre el dictamen proponía se cambiara el nombre de Valladolid por otro análogo a los méritos del héroe José María Morelos. Peguero dijo que estaba seguro de que todos los diputados apoyaban la suspensión del nombre de Valladolid y proponía se le llamara Patria de Morelos, Villavicencio no estuvo de acuerdo porque también se podía decir Patria de Iturbide y otros, por ello era de la idea que se diera un nombre que no fuera general a todos. Peguero

⁶⁷⁷ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 23/VIII/1828.

propuso Ciudad de Morelos. La comisión había propuesto Guayangareo, remembrando el nombre que el valle tenía antes de se estableciera la ciudad de Valladolid en 1545, pero al someterse a votación la opción se reprobó.⁶⁷⁸

El día 10, la comisión presentó la propuesta de cambiar el nombre de Valladolid por Morelia, Peguero no creía que el nombre llenara la expectativa, no sentía que hiciera referencia directa al Héroe Morelos. Para él, el nombre debía decir con toda claridad Morelos para que se lisonjeara el Pueblo de Michoacán de haber tenido su origen en ese suelo un héroe de los mayores en mérito. Silva como parte de la comisión dijo que ésta tuvo presente el que se combinaran los nombres y de todos sus esfuerzos no había encontrado más analogía con el objeto y teniendo ejemplos como Bolivia por Bolívar. Peguero señaló que también se podía decir Morelos citando ejemplos como Washington: “que siempre está en contra de la redacción por que no llena los objetos, pues solo está bueno para los sabios que pueden hacer combinaciones, pero no para el pueblo que carecía de Ilustración”. Aun así, se determinó el nombre de Morelia.⁶⁷⁹

Se puede afirmar que la propuesta de cambio de nombre de la capital del estado fue lo más significativo que realizó Villavicencio durante su trabajo legislativo, en buena medida se infiere que el eclesiástico tuvo una importante participación en su redacción, sobre todo si consideramos cómo inicia esta. De igual forma, la propuesta no deja lugar a dudas de que tenía sus orígenes en el conflicto español por el que atravesaba el estado.

5.2.3. ¿Asuntos eclesiásticos o económicos? La exclusiva, el Tribunal de Haceduría, las anualidades eclesiásticas y los diezmos

En este apartado se dará tratamiento a cuatro asuntos referentes a la política eclesiástica y cuyos antecedentes obraban en legislaturas anteriores tal como fue la exclusiva, el Tribunal de Haceduría, las anualidades eclesiásticas y los diezmos.

Como ya se ha visto, el decreto sobre el ejercicio de la exclusiva emitido por la primera legislatura constitucional despertó confusión ante el Cabildo

⁶⁷⁸ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 6/IX/1828.

⁶⁷⁹ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 10/IX/1828.

catedral, por lo que solicitó al Congreso local que el documento fuera más explícito. Dicho cuerpo comprendía que el decreto hablaba de los beneficios de presentación del Patronato y que por tanto el uso de la exclusiva no comprendía los interinatos de curatos, los juzgados eclesiásticos, notarías fijas, nombramiento de los curas, capellanías de monjas, de coro y a las simples conferidas a los llamados por el fundador. A lo anterior, el gobierno contestó que en virtud de no ejercer el Patronato y que no se le concedía suficientemente la protección y tasación de los asuntos eclesiásticos ya fueran benéficos u oficios, no podía admitir las restricciones que el Cabildo eclesiástico indicaba en cuanto a la intervención en la provisión de piezas eclesiásticas. Esto era así porque sería muy superfluo si solo se limitara a la presentación del Patronato, pues aun careciendo del mismo, se usaba de la exclusiva general para atender debidamente los negocios y disciplina de la Iglesia no por la vía de la jurisdicción, sino en uso de la potestad política y económica. Es decir, para el gobierno era su obligación proteger y buscar la felicidad de sus “súbditos seculares y eclesiásticos”, para ello debía cuidar que “la Iglesia se gobernara conforme a los concilios y cánones con que se administraran los sacramentos y se instruyera a los pueblos y se conserve en ellos la pura y Santa doctrina”.⁶⁸⁰ Lo anterior sólo podía conseguirse a través de una acertada elección de los distintos eclesiásticos, teniendo conocimiento y cuidado de que la provisión no se hiciera en personas indignas que en vez de edificar destruyeran. Por tanto, el gobierno creía que el derecho de exclusiva debía de entenderse sobre todos los beneficios eclesiásticos independientemente de su naturaleza, ello llevó a que el Congreso local emitiera una especificación sobre el decreto.⁶⁸¹

El 5 de septiembre de 1827, la comisión estableció que su efecto sería general, exceptuándose solamente las vicarías de nombramiento de los párrocos y capellanías simples. De la misma forma, la exclusión de un beneficio podía ser propuesto para otro, pero el individuo excluido de uno no podía proponerse para otro. El dictamen no dejó de hacer énfasis en la forma de interactuar en estos casos del Cabildo y del Gobernador. Domínguez pidió se leyese la consulta del Consejo que al efecto dirigió al Gobierno, y habiéndose verificado, el diputado consideraba que la comisión no había dictaminado sobre los principales puntos

⁶⁸⁰ AHCM, Siglo XIX, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja, 193, Exp. 50, f. 1, 1v.

⁶⁸¹ AHCM, Siglo XIX, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja, 193, Exp. 50, f. 2, 2v.

que marcaba la cuestión dejando varios huecos en la parte reglamentaria que era preciso llenar, siendo uno de ellos el modo en que se ejecutaría el citado decreto, así como los demás incidentes de dicha consulta. Se agregaron a la discusión Chávez y Camarillo. Domínguez pidió volviera el dictamen a la comisión, controvertidas algunas otras razones no se pudo votar y se solicitó se reformulara la propuesta.⁶⁸²

El 17 de septiembre de 1827 se continuó la discusión, la comisión manifestó que de conformidad con el Consejo, al no estar declarado que el estado podía ejercer el patronato y no pudiendo proveerse en propiedad las piezas eclesiásticas, sería ilusorio que en el decreto se excluyeran los interinatos de curatos, juzgados eclesiásticos y demás como opinaba el Cabildo catedralicio. La comisión proponía se exceptuaran las vicarías fijas de nombramientos de los párrocos y las capellanías simples, las primeras porque su provisión no concernía privativamente a las mitras y las segundas porque solo los fundadores tenían la potestad de determinar las cualidades que debía poseer el capellán.⁶⁸³

En seguida, se dio lectura al dictamen del Consejo por solicitud de Peguero, entonces, Villavicencio expuso que “aunque este asunto no carecía de espinas y dificultades,” la comisión había presentado su dictamen partiendo de las excepciones marcadas para que el gobierno no pudiera excluir a muchos individuos porque esto causaría un poder infinito y porque el decreto tenía por objeto “el evitar que los beneficios se provean en sujetos díscolos que siembren en los pueblos opiniones antipolíticas o contrarias al sistema de gobierno.”⁶⁸⁴

Por tanto, se dio paso a la votación del primer artículo: “que el decreto no. 30 tendrá efecto general exceptuándose solamente las vicarías de nombramiento de los párrocos, y capellanías simples, cuya provisión se hace mediante juicio contradictorio en el que acredita recurrir las cualidades que exigen los fundadores,” y se aprobó, con lo que continuó el segundo tema a debate, “la exclusiva del gobierno en la provisión de beneficios eclesiásticos podría recaer sobre tres individuos que separados o simultáneamente proponga el

⁶⁸² AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 5/IX/1828.

⁶⁸³ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 17/IX/1828.

⁶⁸⁴ *Ídem*.

prelado eclesiástico” Después de una larga discusión, se reformó el texto por la comisión y quedó aprobada en estos términos:

[...] la exclusiva del gobierno en la provisión de beneficios podrá extenderse a 3 individuos que separada o simultáneamente proponga el prelado eclesiástico. 3ª en las capellanías que se denominan de derecho devoluto no podrán proponerse tres ni aun dos individuos de una familia.⁶⁸⁵

El debate debió suspenderse por falta de tiempo para continuar. El 18 de septiembre de 1827, continuó la discusión de la siguiente propuesta sobre el ejercicio de la exclusiva “en las capellanías que se denominan de derecho devoluto, en las que no podrían proponerse tres ni dos individuos de una misma familia”. A Gómez puente le parecía que el texto se refería a reglamentar el modo en que habían de darse tales capellanías, en lo que él no tenía problema en que se hiciera, pero remarcaba que ese no era el objeto de la ley. El Señor Pérez Gil consecuente a su exposición del día anterior, fue de la opinión que el gobierno no debía ejercer la exclusiva en este punto, porque no tocaba ejercicio público alguno y, por otra parte, la autoridad eclesiástica poseía las reglas para el manejo de las capellanías. Chávez remarcó que la objeción ya aprobada solo exceptuaba de la exclusiva las vicarías de nombramiento de los párrocos y capellanías simples, cuya provisión se realizaba mediante juicio contradictorio en el que era necesario reunir las cualidades que exigían los fundadores. Domínguez consideró que la proposición debía volver a la comisión. Lo que no fue tomado en cuenta y la discusión continuó.⁶⁸⁶

Peguero apoyó a Gómez Puente y dijo que se podía reglamentar el modo de ejercer la exclusiva, mas no la forma en que el gobierno eclesiástico debía de hacer las provisiones, y si se incurriese en abusos, como efectivamente existían en esta materia ellos deberían remediarse del modo correspondiente. El decreto terminó de ser discutido en todos sus artículos, sin mayores debates ni intervenciones de eclesiásticos. La adición del decreto vio la luz el 4 de octubre de 1827.⁶⁸⁷

Es notable cómo en este tipo de temas, se hacen presentes los límites del poder temporal frente al de la Iglesia, la cual poseía su propia estructura y marco

⁶⁸⁵ *Ídem.*

⁶⁸⁶ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 18/IX/1828.

⁶⁸⁷ *Ídem.*

de legalidad, lo que los legisladores debían tener muy presente a la hora de crear el marco legal de interacción entre ambas instituciones y no pocas veces se puso de manifiesto hasta dónde podía intervenir el gobierno local en los asuntos propios de la Iglesia, bajo el argumento de no estar vigente el beneficio de Patronato. Sin embargo, la Iglesia desde el periodo colonial llegó a mostrar gran recelo respecto de su organización, funcionamiento y atribuciones, en este nuevo escenario político la Iglesia seguirá siendo asediada como lo diría David Brading, pero a la vez, beligerante como lo manifiesta Juvenal Jaramillo.⁶⁸⁸ En este nuevo orden de cosas, los legisladores locales debían poseer el conocimiento básico de la institución y ponerlo en práctica a la hora de legislar, por ello no sería fortuita sino necesaria la integración de eclesiásticos dentro del legislativo, mientras el Estado y la Iglesia se reconocieran mutuamente como partes centrales de la nación y del nuevo sistema de gobierno, pero siempre sometiendo la una al otro.

Los diputados eclesiásticos serán de gran ayuda para ilustrar sobre la organización, el funcionamiento y las competencias de la Iglesia; sin embargo, no todos se plantarán en el Congreso para respaldar las iniciativas del gobierno, ni todos defenderán las competencias de la Iglesia, en ocasiones quedarán atrapados entre los dos poderes.

Dando continuidad a lo planteado en este apartado, después de creada la contaduría de diezmos por parte el gobierno del estado de Michoacán se hacía necesaria la extinción del Tribunal de Haceduría del Obispado de Michoacán. La propuesta fue del diputado Domínguez, la que ya había sido presentada durante los trabajos de la legislatura anterior. Al entrar en funciones la segunda constitucional, el tema fue de los primeros en tomarse en consideración para su debate. Desde la perspectiva del legislador se debía solicitar al titular del ejecutivo que hiciera entender al gobernador de la Mitra que resultaba escandalosa la inobservancia de la ley en la existencia del Tribunal de Haceduría y que por tanto se procediera inmediatamente a su extinción.

⁶⁸⁸ David BRADING, *Una Iglesia asediada: El obispado de Michoacán, 1849-1810*, México, Fondo de Cultura económica, 1994. Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Hacia una iglesia beligerante: la gestión episcopal de Fray Antonio de San Miguel en Michoacán, (1784-1804): los proyectos ilustrados y las defensas canónicas*, Zamora, México, El Colegio de Michoacán, 1996.

La haceduría era un tribunal que llevaba el control sobre la declaración y el pago puntal de las rentas decimales de la diócesis. Al ser una dependencia con tareas específicas, se integraba por dos capitulares elegidos por el propio cabildo y ratificados por el Obispo a inicio de cada año. Desde el primer tercio del siglo XVIII la forma de elección de los hacedores cambió, el Cabildo daba el nombramiento de uno y el Obispo de otro, era un cargo que se turnaba tomando en consideración el orden escalafonario de las prebendas por lo que todos debían fungir como jueces hacedores en algún momento.⁶⁸⁹

Dentro de sus atribuciones se encontraba el remate del arrendamiento de los diezmos o bien eran responsables de otorgar nombramiento directo de administradores eclesiásticos de los diezmos no arrendados. La haceduría recibía del contador las cuentas del informe decimal y las representaba a la mesa capitular para que ésta y el Obispo las aprobaran. Es de resaltar que los hacedores se hacían acreedores de una participación económica porcentual sobre los diezmos que hubiese dado en arrendamiento.⁶⁹⁰

El 25 de septiembre de 1827, se procedió a discutir el dictamen de la comisión de justicia y negocios eclesiásticos relativo a la proposición de Domínguez sobre extinción del Tribunal de Haceduría. La comisión, en su parte expositiva, dejó de manifiesto que la jurisdicción contenciosa que habían ejercido los jueces hacedores era puramente civil y delegada, que estando proscriptas tales jurisdicciones por las constituciones federal y del estado, era necesario aprobarse la propuesta. Se votó en lo general y se descendió al examen de los artículos. El primero de ellos manifestaba: “Se declara extinguido el Juzgado de Haceduría de esta Santa Iglesia catedral, y revocadas todas las leyes que concedían su jurisdicción”. El diputado Gómez Puente dijo que, aunque no combatía el artículo pues estaba por la inexistencia de tales tribunales, sí quería que se señalara la parte constitucional a la que se oponían. Domínguez señaló que la Constitución federal prohibía los juzgados por comisión y de tal naturaleza y a su vez, la máxima ley del estado designaba los Tribunales que debía haber en el mismo, y entre estos se desconocía el de Haceduría. Gómez Puente insistía en la aclaración del punto, porque como los Tribunales de Haceduría

⁶⁸⁹ Oscar MAZÍN, *Archivo Capitular de Administración Dioscesana, Valladolid-Morelia Catálogo I*, Zamora, El Colegio de Michoacán- Gobierno del Estado de Michoacán, 1991. pp. 17-19.

⁶⁹⁰ *Ibíd.*, p. 19.

obraban por jurisdicción emanada del Rey, no se podía decir juzgaba la comisión en un sentido estricto.⁶⁹¹

El eclesiástico Peguero contestó que la jurisdicción de la Haceduría era delegada, y en el estado no había juzgados delegados, solo ordinarios, el de Haceduría era, en efecto, desconocido por la constitución. Suficiente discutido quedó aprobado. El artículo segundo a discutir versaba: "El conocimiento de todos los asuntos contenciosos sobre Diezmos, corresponde a los Tribunales del Estado conforme a sus atribuciones ordinarias." Para Gómez Puente, éste era superfluo, en virtud de que la resolución de todo punto contencioso correspondía a los Tribunales ordinarios. El presidente Camarillo contestó que, aunque esto era cierto, también era común que al extinguirse un tribunal se designara en cual recaerían los asuntos que le eran privativos. Peguero concordaba con Gómez Puente porque el artículo en todo caso se consideraría como reglamentario de la ley. Aun así, la legislatura aprobó el artículo. En seguida se discutió que "para el manejo de la administración de los Diezmos, queda expedita la autoridad económica y gubernativa, a los dos capitulares que con arreglo a las leyes vigentes deben nombrarse." Domínguez solicitó se agregara la siguiente expresión: "pero sin honorario alguno de la gruesa". Admitida y aprobada el 5 de octubre⁶⁹²

El nuevo sistema político pretenderá acabar con las diversas jurisdicciones de impartición de justicia en aras de defender la igualdad de los individuos frente a la ley, la cual debía emanar de los poderes republicanos. Porque en el nuevo orden de las cosas, la particularidad de los tribunales incentivaba los privilegios entre los individuos de una misma sociedad, lo que debía eliminarse.

Después de resolverse el tema del Tribunal de Haceduría, se continuó con el de las anualidades eclesiásticas que ya había tratado la primera legislatura. El 19 de febrero de 1828 inició la discusión del dictamen sobre el informe dado por la Tesorería general de que no se había cumplido con el decreto del pago de la anualidad, por lo que proponía su suspensión y que no se cobraran las anualidades eclesiásticas devengadas.

⁶⁹¹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 25/IX/1827, 5/X/1827.

⁶⁹² AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 25/IX/1827, 5/X/1827.

El diputado Soria solicitó la lectura de la documentación que tuvo presente la comisión para emitir el dictamen, posterior a ello tomó la palabra diciendo que atendidos los sólidos fundamentos en que se apoyaba, tanto el dictamen del promotor fiscal de la curia eclesiástica de este obispado, como el informe del juez del testamentos del mismo, no debía la comisión consultar se suspendiera el pago de la anualidad, pues de ese modo parecía quedar expedida la acción para el cobro de ella, a lo menos para resucitarla; por lo que él era de la opinión que esa pensión no solo se suspendiera, sino que se aboliera, al ser establecida por la arbitrariedad del Rey de España y no debía gravitar ya sobre el clero mexicano que estaba sujeto a las cargas que el gobierno imponía conforme al actual sistema, lo mismo que todo ciudadano.⁶⁹³

González intervino haciendo hincapié en que la nación tenía reconocida la deuda de vales reales y el promotor fiscal decía que la observancia se encontraba en el juzgado de testamentos respecto de la cédula del año de 1802, en que fue impuesta por especial rescripto pontificio, entrando los capitales de varias capellanías en cajas de Consolidación, calculándose su monto por lo menos en un millón de pesos y por esa razón la comisión no se decidió a consultar la abolición absoluta, sino solo a que se suspendiera. González en lo particular estaba por la inexistencia de la pensión, pero también rondaba la duda de si los futuros Congresos tuvieran a bien resucitarla por hallarse comprometido el crédito público a amortizar la deuda de vales reales que la Nación reconocía. De la misma manera se ignoraban los términos de los tratados para la vigencia de la pensión, por haber recaído en la Nación en general, y en los Estados en particular la soberanía, entonces le parecía prudente lo propuesto por la comisión.⁶⁹⁴

Peguero manifestó no estar lo suficientemente instruido en la materia, pero sí dijo que como eclesiástico no disfrutaba de los réditos de su capellanía por los motivos expuestos por el promotor fiscal eclesiástico y el juez de testamentos, apoyándose nada menos que en la ley natura; por lo que pidió se suspendiera la discusión, para que meditándose con más detenimiento según las razones vertidas no se aventurara la resolución. Se suspendió la discusión.⁶⁹⁵

⁶⁹³ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 19/II/1828.

⁶⁹⁴ *Ídem.*

⁶⁹⁵ *Ídem.*

El 29 de febrero, de nuevo se puso a discusión el asunto de las anualidades eclesiásticas. Peguero no tuvo objeción a que el impuesto se extinguiera, pero se manifestó en contra de que no se cobraran las anualidades devengadas. También manifestó que no se debía hablar con generalidad sin tomar en cuenta que existían beneficios mayores y menores y que de los mayores no se debía suspender el pago. Según su opinión, todo estaba remediado con que se dijera que se suspendía el pago de anualidades de las capellanías, sin hablar de los beneficios mayores. Gómez Puente le contestó a Peguero diciendo que la comisión no tenía idea de que hubiera piezas mayores y por otra parte, él proponía que en el decreto se estableciera “las devengadas desde el año de 1821,” porque a partir de entonces no se proveían beneficios mayores, pues aunque la comisión se inclinaba por que se aboliera absolutamente esta pensión, proponía solo se suspendiera, por si algún Congreso en lo futuro tuviere a bien volverla aplicar, porque el generar nuevas pensiones era difícil. Finalmente volvió el dictamen a la comisión.⁶⁹⁶

El 1º de marzo se presentaron las modificaciones con dispensas, se puso a discusión el que “se suspendía el decreto no. 17 del 6 de septiembre de 1826 sobre anualidades eclesiásticas y en ningún tiempo se recobraran las devengadas desde el día en que se entregaron sus rentas al estado, hasta ahora y mientras dure la suspensión.” Lo que fue aprobado.⁶⁹⁷

Este es un ejemplo de cómo en ocasiones se creaban leyes que solían complicar más las cosas, se insiste en el poco arraigo que el impuesto tenía entre los eclesiásticos, que además laceraba más al bajo clero que el alto, lo que generó que varios miembros de la Iglesia no pagaran la anualidad. Finalmente, el Congreso entendió que el ingreso por este concepto constituía más tensiones que beneficios para las arcas del estado y por tal motivo determinó eliminarlo.

Finalmente, por la naturaleza del tema es necesario cerrar este apartado con el asunto de las empresas de colonización y los diezmos. La ley de colonización en Michoacán tiene su origen en el decreto que el Congreso general expidió el 18 de agosto de 1824. A partir de ello, el Congreso local expidió el 28 de julio de 1828 una ley que cedía terrenos baldíos a empresarios, familias, personas nacionales o extranjeras para que cultivaran los terrenos. El gobierno

⁶⁹⁶ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 29/II/1828.

⁶⁹⁷ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 1/III/1828.

podía ceder por un máximo de seis años a los empresarios o colonos en usufructo la cuarta parte de los terrenos reservados al estado. Una vez otorgados los terrenos, se les permitía a los empresarios y colonos establecer cualquier tipo de industria útil y honesta, promover nuevos establecimientos y poblaciones, explorar minas, entre otros; mientras que los terrenos abandonados quedaban a beneficio del estado.

Referente a las contribuciones, el legislativo concedió importantes privilegios a los nuevos pobladores, entre ellos la exención por 10 años de toda contribución a excepción del tabaco, el papel sellado y los impuestos municipales que aprobaré el Congreso. Los tres primeros años supliría el gobierno del estado los gastos del culto religioso, posterior a ello sería responsabilidad de los habitantes de la colonia, por tercios adelantados conforme al repartimiento que harían las municipalidades señalando congruencia entre el párroco, el gobierno y las autoridades diocesanas. También se les exentaba de la contribución de sangre para el ejército y la marina. A grandes rasgos era la esencia de la ley.⁶⁹⁸

Llama la atención que en la parte de las contribuciones el decreto no dice nada respecto a los diezmos cuando el tema formó parte de los debates. El 23 de febrero de 1828 el orador del gobierno solicitó que en el tema de los beneficios que se les concedían a los colonos se dijera que estos no pagarían diezmos. Silva y Camarillo pensaban que al decir “todas las contribuciones” se incluía ésta.⁶⁹⁹

El orador argumentó que hacía la observación porque el tema de los diezmos no solo era competencia del estado sino también de las autoridades del obispado. Villavicencio solo intervino para manifestar que 10 años de exención de impuestos de toda clase le parecía demasiado porque derivaría en una pérdida económica considerable para el estado. Camarillo sí intervino directo sobre los diezmos y dijo que para evitar confusiones se debía manifestar que la extensión comprendía las contribuciones “pertenecientes al Estado y a la Iglesia”. Entonces, Gómez Puente señaló que un decreto del Congreso general establecía que no se podía variar cosa alguna en lo tocante a las rentas eclesiásticas por ser atribución de la Iglesia. Villavicencio volvió a intervenir para decir que estaba de acuerdo se le concediera la franquicia, se puede pensar al

⁶⁹⁸ Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo III, pp. 73-81.

⁶⁹⁹ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 23/II/1828.

diezmo sin la total certeza, remarcando que el privilegio no debía comprender el hierro.⁷⁰⁰

Lo curioso del asunto es que Villavicencio intervino en el debate y no sólo eso, sus comentarios estaban en medio de observaciones importantes, pero no tocó de manera abierta el diezmo y Peguero no se hizo de la palabra aun cuando había asistido y manifestó su opinión en otros artículos sobre la colonización en esa sesión. Qué les había pasado a los ministros del altar, qué estaba ocurriendo con los temas eclesiásticos que ya no se trataban en secreto como en las dos primeras legislaturas. El hecho es que existía un problema, varios diputados eran conscientes de que estaban invadiendo jurisdicción, no sólo eso, no consultaban a la parte afectada, estaban disponiendo sobre los diezmos sin tomar opinión a las autoridades del Obispado, daban por hecho que podían hacerlo. Si eso no era subyugar a las autoridades eclesiásticas, qué era entonces. Dónde estaba la representación de la Iglesia al interior del Congreso para defenderla, se encontraba en otros diputados como Gómez Puente, hasta el mismo gobernador Salgado a través del orador, no en los eclesiásticos en este caso.⁷⁰¹

El día 28 Camarillo solicitó se integrara al artículo lo dicho por lo perteneciente al estado y a la Iglesia. Sorprende de nuevo la ausencia en el debate de los eclesiásticos. Gómez Puente, solicitó se diera lectura a los decretos del Congreso General de 8 de octubre de 1823 y de 18 de agosto de 1824, porque dudaba si se podría liberar del pago de diezmo a la población, porque era competencia de la Iglesia y por otra parte se contradecía lo establecido por el Congreso General. Camarillo argumentó que la ley de la que hablaba Puente fue emitida para atender el contexto de Jalisco pero que en este caso las circunstancias eran otras. Que el congreso general había visto las franquicias que concedían otros estados, en las que se tenía por comprendidos los diezmos y no constaba que las hubieran reclamado.⁷⁰²

En la siguiente sesión del día 29, Gómez Puente y Camarillo hablaron sobre el diezmo, Peguero tomó la palabra y hábilmente se manifestó en contra de que se eximiera del pago del diezmo a los colonos. El eclesiástico comenzó diciendo que no era inconcuso que la legislatura tuviera facultades para disponer

⁷⁰⁰ *Ídem.*

⁷⁰¹ *Ídem.*

⁷⁰² AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 28/II/1828.

ni hacer variación en rentas eclesiásticas, aunado al hecho de que una vez las tierras tuvieran producción se podía cobrar diezmo o se podía eximir del pago como estímulo a los colonos.⁷⁰³

Peguro aclaró que no combatía el artículo por los términos en que estaba concebido sino por el sentido que tenía la expresión general en la que no debían tener por comprendidos los diezmos. Era necesario expresarlo, el Congreso general podría hacer variación, pero no las legislaturas de los estados, por lo que en su concepto el artículo era inadmisibles. El orador manifestó que la facultad de conceder estas franquicias residía en el Congreso, y que desde la perspectiva del gobierno nadie dudaría que la Iglesia no tenía ningún derecho, sino cuando el legislador se lo otorgara, esta podía disponer cualquier contribución cuando lo considerara conveniente.⁷⁰⁴

Antes de continuar, el párrafo anterior pone a discusión por un lado los límites del ejercicio del poder y las competencias que pertenecían a los estados y a la federación, aunque en este caso no se violentó el mandato federal, en la discusión si sale a relucir que no todos los diputados percibían con facilidad esa delgada línea entre ambas atribuciones. Por otra parte, el gobierno del estado asume que la Iglesia debe sujeción y sometimiento a la potestad del legislativo, en estas expresiones se percibe la radicalización del pensamiento tocante a temas eclesiásticos, para estos momentos, los conflictos sociales y políticos no solo habían polarizado a la sociedad, también a las instituciones.

El orador insistía que en los terrenos que se trataba de colonizar no había frutos y por consiguiente no tenía por qué deducir derechos la Iglesia. Para sustentar la exención del diezmo a los colonos, el emisario del gobierno planteó que, aunque los diezmos se daban a ésta, había sido por concesión que el Rey de España le hizo, y no por que tuviera derecho antes. Y dejaba claro el orador que su intervención no tenía implicaciones con el patronato, en cuyo tema solo tenía jurisdicción el Congreso general. Como ya fue señalado, la propuesta fue aprobada, exceptuándose de gravamen el tabaco, el papel sellado y los que en su momento establecieran las municipalidades.⁷⁰⁵

⁷⁰³ AHCEMO, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 29/II/1828.

⁷⁰⁴ *Ídem.*

⁷⁰⁵ *Ídem.*

El finiquito de la discusión muestra la evolución de la misma, la perspectiva del gobierno había cambiado con el paso de los días. Mientras que Peguero emprendió una defensa muy sutil, sin tanto apasionamiento y perfectamente fundamentada en la legalidad. También sale a relucir el tema de la doble soberanía; la de la federación y los estados, y la soberanía de Estado frente a la soberanía de la Iglesia.

A su vez, llama la atención que Villavicencio no emita opinión al respecto, lo anterior hace pensar cómo en ocasiones no era tan sencillo defender a la institución de pertenencia y cómo el silencio se puede interpretar como el quedarse atrapado entre dos jurisdicciones, porque queda claro que Peguero tenía un perfil más cultivado y una vida menos azarosa que Villavicencio. Peguero no dependía de su profesión directamente, para Villavicencio era el modo de ganarse la vida, para éste último el insertarse en esta legislatura le constituyó un mérito a presentar en el concurso de curatos vacantes y no sólo eso, sino afianzar vínculos con los hombres del poder, ello queda claro cuando presentó una carta de recomendación de puño y letra del gobernador Salgado. También se debe considerar como el legislador en general debe adaptarse a los nuevos cambios del ejercicio del poder y ceñirse a las nuevas instituciones a pesar de que éstas no le sean tan benévolas.

Las ausencias de los eclesiásticos se dejaron sentir desde el 24 de diciembre de 1828, cuando faltaron a la sesión Peguero y Villavicencio. El día 30 cerró sesiones el Congreso, a esa sesión solo se presentó Sierra tal como había ocurrido el día 24. La legislatura abrió sesiones extraordinarias el 4 de febrero de 1829, el 7 de febrero faltaron los tres eclesiásticos, el único que gozaba de licencia era Sierra, los otros dos estaban enfermos. El 25 de febrero se presentó Peguero, mientras que los otros dos se reportaron enfermos. Todo el mes de marzo y principios de abril Sierra estuvo de permiso, en ese vaivén, la asamblea cerró y abrió de nuevo sesiones extraordinarias que finalizarían a principios de agosto. Villavicencio ya no se presentó por enfermedad y Peguero se ausentó de las labores legislativas desde finales de mayo. Esto hizo que la presencia de los eclesiásticos disminuyera, más cuando Peguero se retiró, pues Sierra era muy reservado.

De los tres eclesiásticos que integraron este Congreso, la participación de Peguero fue la más notable, pero sin compararse con lo que había hecho en la

primera legislatura ordinaria. En este escenario se debe tener presente que el pensamiento liberal en algunos sectores de la sociedad tendía a ser más radical, lo que como era de esperarse también se manifestó al interior de la legislatura. Peguero de ideas moderadas debió ser más cauto a la hora de hacer y defender sus planteamientos. A su vez, se percibe que Villavicencio comulgaba más con el sector radical de la legislatura. Por tal motivo se puede asegurar, tal como ha visto a lo largo de estas páginas, que Peguero, Villavicencio y Sierra no formaron un grupo compacto para defender o impulsar propuestas ya fueran de tipo civil o eclesiásticas, de hecho, se percibe que los dos últimos tenían una mayor afinidad y respaldo mutuo que pocas veces llegaron a compartir con Peguero.

Como punto final, es necesario advertir que, a partir de ésta legislatura, la seguridad, la tranquilidad pública y el sustento de las instituciones federales en el estado serán los principales retos que deberán enfrentar el legislativo y el ejecutivo. En ese escenario de convulsión política y agitación social, la tercera legislatura en su bienio completó tendrá la mayor concentración de eclesiásticos, varios de ellos de tendencia más radical.

CAPÍTULO VI

LA INESTABILIDAD DEL PODER LEGISLATIVO EN MICHOACÁN. EL TERCER CONGRESO, UN BIENIO: DOS LEGISLATURAS, 1829-1831

6.1. La tercera legislatura en su primer año de sesiones, 1829-1830

6.1.1. Felipe Carvajal, Luciano Farías, Martín García de Carrasquedo, Joaquín Ladrón de Guevara y Tomás Arriaga en la tercera legislatura en su primer año, 1829-1830

La tercera legislatura en su primer año abrió sesiones el 6 de agosto de 1830 y su elección fue controvertida. El proceso se dio en medio del entusiasmo que había generado la llegada de Vicente Guerrero a la presidencia de la república, lo que había fortalecido la presencia de los yorkinos en Michoacán. Este grupo aprovechó la situación para ganar el control del Congreso local y mantener la gubernatura en manos de José Trinidad Salgado. En el imaginario político de la época quedó la idea de que en la elección de la legislatura se había hecho uso de artimañas electorales y es que en efecto se habían presentado algunas irregularidades en algunos partidos del estado durante las elecciones primarias, pero eso solo dio una ínfima ventaja al grupo yorkino, los otros niveles de la elección se realizaron en un ambiente de aparente tranquilidad. El resultado de los comicios fue una legislatura en la que la mayoría de sus miembros simpatizaba con la logia, lo que aseguró a Salgado en el poder ejecutivo, esto fue visto por los escoses como una virtual reelección.⁷⁰⁶

La legislatura abrió sesiones en medio de la conmoción que había suscitado la noticia de que una expedición española había partido de Cuba con el objetivo de adentrarse en territorio mexicano para reconquistarlo. El encargado de la empresa fue el Brigadier Isidro Barradas, quien desembarcó en Cabo Rojo muy cerca de Tampico el 27 de julio de 1829, tomó Pueblo Viejo y se trasladó a Tampico, dejando parte de su ejército en dicha población el que fue atacado por Santa Anna. El 9 de septiembre después de intensa jornada bélica Barradas se rindió en manos de Santa Anna y el general Terán y se retiró del país. En este proceso, la misiva originó un ambiente de cooperación y patriotismo

⁷⁰⁶ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y Desorden*, pp. 115-119.

entre las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, los estados y las élites gobernantes, quienes se prestaron a contribuir con la defensa del territorio.⁷⁰⁷

En Michoacán, tanto el gobierno civil como eclesiástico y los ciudadanos más notables congregados en Morelia se comprometieron con la causa. El día 10 de agosto se daba noticia de que las principales autoridades y ciudadanos de Morelia habían coincidido en una serie de reuniones con el fin de planear y reunir fondos para la defensa del país pues entre las preocupaciones se encontraba el avistamiento de velas por el sur que parecían dirigirse a Zacatula. En una de las reuniones se congregaron el gobernador Salgado, el presidente del Congreso Tomás Arriaga, el presidente del Consejo de gobierno, los presidentes del Superior y Supremo Tribunal de Justicia, una comisión del Ayuntamiento de Morelia, un miembro del Cabildo eclesiástico, el Comandante y comisario general, el Provisor, el tesorero del estado, el inspector de la milicia cívica y el presidente de protomedicato.⁷⁰⁸

La rendición de las tropas invasoras llegó el 20 de septiembre de 1829 y con ello Guerrero consideró afianzado su gobierno. El entusiasmo por el triunfo en la guerra sólo contuvo el divisionismo y encono que existía entre los hombres del poder, varios de ellos insertos en los ritos de york y escoces. La confrontación que se sucedió a lo largo de los meses de octubre y noviembre sobre la variación del sistema de gobierno a una república centralista cobró factura el 4 de diciembre en que el ejército de reserva de Jalapa proclamó el Plan de Jalapa con el objeto de defender el sistema federal a través del restablecimiento del orden constitucional, la renuncia del ejecutivo de sus facultades extraordinarias, la convocatoria a sesiones del Congreso general y la destitución de funcionarios

⁷⁰⁷ Michael P. COSTELOE, *La primera República*, pp. 222-226. Un texto de referencia sobre la expedición de Isidro Barradas: Jesús RUÍZ DE GORDEJUELA URQUIJO, *Barradas: El último conquistador español. La invasión a México de 1829*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2011.

⁷⁰⁸ El resultado fue una serie de aportaciones en dinero, viveres, armas y recursos humanos por un importante grupo de los asistentes a esa reunión. Algunas donaciones que interesa destacar son 100 pesos mensuales que dio el Gobernador Salgado y los diputados prebendado Martín García aportó 25 cargas de harina, 25 de garbanzo, 10 de frijol y 100 fanegas de maíz; Francisco Antonio Iturbide 25 pesos mensuales y dos hijos montados y armados a su costa; Juan Gómez Puente 30 pesos por una vez, una carabina canana y 10 pesos mensuales; José María Silva 10 pesos de pronto asegurando dar más después: Isidro García de Carrasquedo 10 pesos mensuales y Ramón Echenique 10 pesos por ahora y 5 mensuales. *El Astro Moreliano*, Morelia, Tomo I, No. 38, 10/VIII/1829, pp. 2-3.

denunciados por su conducta. En ese escenario, el movimiento fue acusado de centralista, el 16 de diciembre el presidente Vicente Guerrero era despojado del cargo por parte del Congreso general y Anastasio Bustamante fue nombrado su sucesor. La nueva administración deseaba aprovechar la reforma constitucional federal programada para 1830 para adoptar el voto censitario y contrarrestar la demagogia, fortalecer al ejecutivo y evitar los pronunciamientos, al menos ese era el plan de Lucas Alamán, el cual no logró concretar.⁷⁰⁹

La elección de Guerrero como presidente era un respaldo para buena parte de las autoridades michoacanas por lo que su caída representó un duro golpe para la estabilidad institucional del estado de Michoacán, los “hombres de bien” combatieron a través del plan de Jalapa al legislativo y ejecutivo local, quienes solo pudieron resistir en funciones hasta principios de marzo de 1830. En este marco, el tercer Congreso michoacano tendría que realizar sus funciones legislativas.

La tercera legislatura integró a los eclesiásticos Felipe Carbajal, Luciano Farías, Martín García de Carrasquedo, Joaquín Ladrón de Guevara y Tomás Arriaga, quienes ya habían presentado credenciales el día 4 de agosto en la tercera y última junta preparatoria para la instalación de la legislatura, ese mismo día, Arriaga fue designado presidente del Congreso.⁷¹⁰ Era la segunda ocasión en que una legislatura de Michoacán abría sesiones con un eclesiástico en calidad de presidente, la primera fue la Constituyente con José María Rayón.

En calidad de presidente del Congreso, el eclesiástico Arriaga promovió la elección del ejecutivo. El 8 de agosto, la comisión de poderes manifestó que no había reclamo sobre la nulidad en las elecciones de la terna de gobernador que había realizado la junta electoral, entonces, Salgado resultó electo con la anuencia de los catorce diputados que en ese momento integraban la legislatura, Diego Moreno fue el ganador de la votación para vicegobernador con 12 votos por 2 de Joaquín Caballero Acuña.⁷¹¹

A esta legislatura le tocó vivir la transición de un gobierno federalista radical al de “los hombres de bien”, no sólo a nivel federal, también a nivel local,

⁷⁰⁹ Michael P. COSTELOE, *La primera República*, pp. 227, 242-245. Josefina Zoraida VÁZQUEZ, “Introducción. Contexto nacional”, pp. 26-27.

⁷¹⁰ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 3, 4/VIII/1829.

⁷¹¹ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 3, 8/VIII/1829.

lo que explica por qué debió reestructurarse y terminó funciones en marzo de 1830. El prebendado Martín García de Carrasquedo y el bachiller Felipe Carvajal fueron dos eclesiásticos vinculados al rito de york y caracterizados como federalistas radicales,⁷¹² muy cercanos al gobernador José Trinidad Salgado, por ello no será extraño que a finales de 1830, el titular del ejecutivo solicite al Congreso les permita colaborar en temas de tranquilidad pública como se verá más adelante.

Los trabajos de esta legislatura se circunscribieron al tema de la tranquilidad pública y los recursos económicos y humanos necesarios para mantenerla. El 17 de agosto de 1829 la federación decretó los lineamientos para un préstamo que se imponía a los ciudadanos de los estados que la componían con el objeto de cubrir los gastos contra la invasión de Barradas. Con el decreto el gobierno federal pretendía recaudar 2 818 113 pesos, de los cuales Michoacán tenía que aportar 117 333 por lo que 28 del mismo mes los diputados se reunieron en sesión extraordinaria para dictar medidas de captación y cubrir en parte la cantidad solicitada, la que ascendía a 111,733 pesos, dinero que sería utilizado para combatir al enemigo español. Las comisiones encargadas de presentar el dictamen fueron Hacienda y Gobernación, para dar inicio al debate el presidente del Congreso solicitó la presencia del orador, pues el dictamen no incluía la propuesta que había presentado el gobierno, pero el funcionario no estaba disponible, entonces se determinó que el secretario de despacho llevase el expediente al gobierno para que en la siguiente sesión se tuviera una discusión con mayor acierto. El 29 de agosto se continuó con el asunto, cuestionando si el proyecto a debate era el que había presentado el gobierno o era otro, las comisiones aclararon que era lo segundo, una vez aceptado el dictamen, su análisis fue muy rápido con poco debate, entre los cambios que hubo destaca la cantidad, la cual se elevó 100 000 pesos más.⁷¹³

A grandes rasgos el decreto manifestaba la recaudación de 21 700 pesos para cubrir gastos que la federación había impuesto al estado y el resto para sus gastos extraordinarios, la que debía verificarse con base al artículo 3º del

⁷¹² Fernando GIL ANAYA, *Pronunciamientos, Asonadas, Motines y Golpes de Estado. La milicia cívica en el Partido de Valladolid-Morelia, 1825-1835*, Tesis de Licenciatura, Morelia Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014, p. 40.

⁷¹³ AHCEMO, Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 3, 17/VIII/1829 y 28/VIII/1829. Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 1, 29/VIII/1829.

capítulo 2º de la ley del Congreso general del 17 de agosto. Es decir, el empréstito se verificaría por tercias partes, una al fin de cada uno de los tres primeros meses siguientes a partir del día de la publicación de la ley en los estados.⁷¹⁴ A los prestamistas se les premiaría con un 4% anual y para su seguridad se hipotecaban las rentas de tabacos y decimal, los empleados del estado también estaban contemplados en el préstamo. Respecto a los que habían contribuido por voluntad propia, si la cantidad era menor a la señalada solo tendrían que dar el faltante, los que hubiesen excedido la cantidad de su contribución no tendrían asignación. El decreto había generado dudas en el ámbito eclesiástico por lo que fue necesario emitir otro que lo incluía en el préstamo, la legislatura acordó que por ser ciudadanos debían ceñirse a los parámetros establecidos en el mandato del 31 de agosto, para llevarlo a efecto el gobierno civil y el diocesano debían ponerse de acuerdo, esto último por indicación de Arriaga.⁷¹⁵

La imposición del préstamo había generado inquietudes al interior de la legislatura al grado de nombrar comisionados para se trasladaran a la capital del país e indagaran al respecto. El 26 de septiembre de 1829, al interior de la asamblea en sesión secreta se dio cuenta de las instrucciones que debían tener presente los emisarios en su viaje a la ciudad de México. Lo primero era procurar una entrevista reservada con el Presidente para manifestarle la opinión que se había formado en el estado respecto de la ley de 15 de septiembre como incompatible con el préstamo forzoso que estaba en proceso de colectación y demás contribuciones ordinarias. La disposición en cuestión era la creación de un fondo para atender los gastos de la guerra contra los españoles y demás situaciones que exigieran las circunstancias. El decreto no dejaba muy claro la base de la recaudación, pero sí hablaba de toda la estructura y funciones burocráticas a crear para cumplir con el decreto. El segundo de los encargos consistía en indagar la opinión que se había formado sobre dicho decreto de

⁷¹⁴ Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana o colección completa*, Tomo II, p. 148.

⁷¹⁵ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes y decretos*, Tomo IV, p. 22, 17 de septiembre

arbitrios, sobre todo, si esta ley se había dictado en el entendido que fuera excluido el préstamo forzoso del 17 de agosto.⁷¹⁶

En el contexto de incertidumbre interior y de amenaza exterior, la conservación del orden y de la tranquilidad pública va a ser un tema de preocupación. El 10 de septiembre el gobierno hizo saber a la legislatura que había recibido un comunicado de Villachuato y Angamacutiro en que se le hacía saber que el Br. Luciano Navarrete pretendía efectuar una reunión de gente sin autorización para incitarlos a que rompiesen las órdenes y comunicaciones de Guerrero, por lo que el gobierno solicitaba al Congreso que ampliara la ley sobre asonadas, sentencias, consejo de guerra y sobre los auditores. El tema era de tal importancia que ese mismo día por la tarde la comisión emitió el dictamen que aprobó el Congreso, en el que se le otorgaba al inspector de la milicia todas las facultades concedidas a los comandantes generales en los procesos de esta índole, al tiempo dio funciones de auditores de guerra a los asesores de departamento. El 19 de septiembre el secretario de despacho del gobierno expuso al Congreso que gracias a la autorización que éste le había dado al gobierno para disponer de las personas de cualquier trato o corporación para involucrarlas en el asunto de la tranquilidad pública, los trabajos de los diputados Menocal y Carvajal habían sido de mucha utilidad para prender al Br. Luciano Navarrete quien trataba de formar una asonada, pero el individuo fue preso y a disposición del juez competente en el convento de San Francisco de Morelia, manifestando a la legislatura que desde la perspectiva del gobierno el asunto no tenía las implicaciones imaginadas.⁷¹⁷

El 14 de septiembre el gobierno del estado comunicaba a la asamblea que había dispuesto de Carvajal y Menocal para tratar asuntos relacionados con la tranquilidad pública. Ese mismo día llegó a las instalaciones del Congreso un oficio de la legislatura de Jalisco en que participaba el nombramiento del comisionado en la figura del diputado Pedro Tames, lo que entre otras cosas originó debates sobre el protocolo a realizarse el día en que asistiera el emisario jalisciense. El 24 de septiembre se dio primera lectura al dictamen de las

⁷¹⁶ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 26/IX/1829. Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana o colección completa*, Tomo II, pp. 163-164.

⁷¹⁷ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 10/IX/1829 y 19/IX/1829.

comisiones unidas de policía y gobernación, las que proponían que si el comisionado por la legislatura del estado de Jalisco fuere alguno de sus miembros saldrán a recibirlo un secretario y un diputado siendo sentado a la derecha del presidente del Congreso fuera del dosel. Pero si no fuera diputado sería recibido por un homólogo de esta legislatura y se le daría asiento entre los demás diputados, el 8 de octubre se suspendía la discusión del dictamen, pues el comisionado ya no asistiría.⁷¹⁸

Es de señalar que por las condiciones de las actas no queda claro lo que ocurre, no se alcanza a dilucidar por qué Jalisco nombra un comisionado para que pase a Michoacán y mucho menos la certeza de lo que tenía que tratar con la legislatura, se infiere que pudieron ser temas relacionados con el sistema de gobierno y la seguridad pública, sin tener por ahora elementos para afirmarlo.

El objeto de la reunión era entablar diálogo sobre el tema de la tranquilidad pública, pero como se precisa en las actas, la reunión nunca se concretó; no obstante, esta iniciativa al igual que otras que serán expuestas más adelante muestran como dentro del Congreso había interés por estrechar vínculos con sus homólogas limítrofes con el objeto de defender el sistema federal y salvaguardar sus fronteras.

Entre mediados de septiembre y mediados de noviembre de 1829 el Congreso legisló sobre varios asuntos como el otorgar facultades al gobierno en cuanto a la creación de algunas plazas en la milicia cívica y castigo a los perturbadores de la paz pública, se legisló en cuanto al tema de ladrones, vagos impartición de justicia, sobre cargas impositivas a los productos extranjeros, exceptuación de pago de contribución directa a sargentos, cabos y soldados de la milicia cívica.

En medio de esa legislación y la compleja situación de inestabilidad social, el Congreso era consciente de la importancia que tenía el tema de la instrucción, las escuelas de primeras letras medianamente caminaban con el sistema lancasteriano, pero se hacía necesario implementar instituciones de educación superior. Hasta ese momento solo funcionaba el Seminario Tridentino encargado de formar sacerdotes o dar las bases a los futuros abogados por lo que los

⁷¹⁸ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 14/IX/1829, 24/IX/1829 y 8/X/1829.

diputados decidieron concretar un proyecto propuesto desde la constituyente a pesar de la situación económica del estado.

En noviembre de 1829, se estableció de una Cátedra de medicina en la capital de la entidad con una dotación de 500 pesos anuales y un apoyo de 250 para instrumentos, utensilios y gastos del establecimiento. El gobierno nombraría al catedrático a partir de su idoneidad y las recomendaciones del protomedicato, quien formaría el reglamento para regir la cátedra pasándolo al Congreso para su aprobación, así mismo el gobierno en encargaría de proporcionar un local cómodo para el establecimiento de la cátedra y de ser necesario pagaría su renta del erario público.⁷¹⁹

El 7 de noviembre de 1829, se dio lectura el dictamen de la comisión instrucción pública sobre el establecimiento de una Cátedra de Medicina en Morelia. El diputado Joaquín Ladrón de Guevara pidió se dispensaran los trámites y se dejara la discusión para ese día. Ya en el debate el diputado José María Silva dijo: que estaba de acuerdo con el dictamen, pero quería se dijese lo que tuviese por conveniente en el artículo 4º, en razón de haberse dado un decreto para que un individuo no tuviese a un tiempo dos empleos, porque siendo Consejero Juan González Ureña, quien podía encargarse de la Cátedra, era necesario investigar si había incompatibilidad. Los diputados Nicolás Menocal y Tomás Arriaga Manifestaron que la comisión no consideraba conveniente hablar del artículo 4º, que el dictamen era general, sin pensar en una persona en particular. Suficientemente discutido hubo lugar a votar y fue aprobado.

Posterior a ello, surgió el debate respecto a que el catedrático recibiría 250 pesos anuales para instrumentos, utensilios y demás gastos del establecimiento. El Presidente del Congreso preguntó qué clase de utensilios deberían ser estos. Por su parte, Menocal que dijo que la cantidad, según le instruyó a la comisión el S. González, parecía necesaria, para pagar un mozo que cuidara de la conservación y aseo del anfiteatro que debería haber, en donde se pondría una plancha de bronce para anatomizar los cadáveres y para los aromas y otras cosas que debían hacerse y haber. El diputado Arriaga

⁷¹⁹ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes y decretos*, Tomo IV, pp. 34-35.

consideraba que seguramente no era suficiente para los utensilios los 250 pesos, aun así, se creyó suficientemente discutido y fue aprobado.⁷²⁰

Otra observación se dio al punto donde se establecía que el gobierno proporcionaría un local cómodo para este establecimiento pagando su renta, si fuere necesario de la Hacienda del estado. Menocal consideraba que la comisión lo ponía como una condición de ser necesario, porque se acostumbraba y podía realizarse en el hospital y en tal caso no había que pagar renta alguna. Finalmente, se debatió que el Protomedicato debía formar el reglamento de la cátedra y lo pasaría al Congreso por conducto del Gobierno para su aprobación, Guevara intervino para solicitar que el gobierno comunicara al Protomedicato para formar el reglamento a la brevedad posible.⁷²¹

El establecimiento de la cátedra representaba un gasto importante para el gobierno michoacano en un momento donde la inestabilidad social drenaba las arcas estatales, el concretar un proyecto en un momento con esas condiciones fue un gran acierto de la legislatura, si se toma en cuenta que la propuesta surgió en 1824, la cual solo quedó como moción, pues por falta de recursos debieron pasar prácticamente cinco años para que se concretara el proyecto el cual contaba con el respaldo de un médico y político importante del periodo Manuel González Ureña.⁷²²

6.1.2. La propuesta de reforma constitucional y la crisis política de Michoacán

Cuando la legislatura abrió sesiones debió palear con dos asuntos: el primero iniciar con el proceso de propuestas de reforma a la Constitución federal y del estado y en medio de ello hacer frente a la crisis política que traería como consecuencia la elección de otra legislatura para que cubriera el bienio 1829-1831.

1830 era el año que la Constitución federal y del estado de Michoacán establecieron para realizar modificaciones, reformas o adiciones a dichos documentos. La tercera legislatura en su primer año de sesiones decidió

⁷²⁰ AHCEMO, Legislatura III, actas públicas, caja 4, Exp. 1, 7/XI/1829

⁷²¹ *Ídem.*

⁷²² Silvia FIGUEROA ZAMUDIO, *La enseñanza de la Medicina en Michoacán en el siglo XIX*. Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Archivo Histórico, 2002, p. 18.

empezar con las propuestas para la reforma de la máxima ley del estado de Michoacán siguiendo los parámetros establecidos de los artículos 217 al 222 de la Constitución, en los que se consignaba que llegado el año de 1830 cualquier modificación debía presentarse por escrito, apoyada y firmada por la tercera parte de la legislatura, la propuesta sería leída tres veces, con intervalo de 5 días y en la última sería discutida si se admitía a discusión con pluralidad de votos, lo que sería publicado. Entonces el congreso siguiente procedería a la discusión y votación de las reformas propuestas.⁷²³

El 4 de noviembre de 1829, José María Silva y Francisco Antonio Iturbe solicitaron ante el pleno de la legislatura que para realizar las propuestas de modificación se nombrara una comisión compuesta de 5 individuos del seno del Congreso. Por ser de obvia resolución el asunto se puso a discusión de inmediato, el Presidente Ladrón de Guevara estaba por la proposición de que la comisión la eligiera toda la legislatura y de que la designación se hiciera cuanto antes para avanzar en el proceso. Arriaga no veía necesidad de nombrar una comisión partiendo de lo consignado en los artículos constitucionales, él consideraba que era más pertinente realizar la propuesta de reforma en gran comisión o bien, para darle más extensión que se dividiera al Congreso en tres comisiones de cinco individuos.⁷²⁴

El 6 de noviembre continuó la discusión referente al nombramiento de la comisión compuesta de cinco individuos para proyectar las reformas necesarias a la Constitución, con una ligera discusión se aprobó y declarado que la votación fuese por cédulas y resultó electo Alvírez con 6 votos de 11, en segundo lugar, Guevara con 12, para el tercero resultó electo Arriaga con 7 votos de 11. El cuarto resultó electo Bribiesca con 8 votos de 11, en el quinto quedó nombrado Silva con 8 por 3 sufragios. El primer electo quedó con el nombramiento de presidente y el último como secretario. A la sesión faltó Martín García que gozaba de licencia y Romero que estaba enfermo.⁷²⁵

A pocos días de nombrada la comisión la legislatura cerró sesiones por lo que el 21 de noviembre se procedió a la repartición de expedientes para que los diputados trabajaran sobre los dictámenes mientras estaba de receso la

⁷²³ *Actas y Decretos*, Tomo II, p.500.

⁷²⁴ AHCEMO, Legislatura III, actas públicas, caja 4, Exp. 1, 4/XI/1829

⁷²⁵ AHCEMO, Legislatura III, actas públicas, caja 4, Exp. 1, 6/XI/1829.

asamblea. En este caso, Bribiesca recibió el de la consulta del Cabildo referente a la haceduría. Álvarez los dos reglamentos del Superior y Supremo Tribunal de Justicia, el código de procedimientos y las consultas de Supremo. Arriaga y Martín García el reglamento de milicia y proyecto de escuela normal. Arriaga, Menocal, Farías, Silva y Martín García quedaban como integrantes de la comisión especial de división de territorio y lo correspondiente al ramo. Echenique tuvo a cargo la propuesta de Guevara y Romero sobre proposición de arbitrios por parte de los ayuntamientos; Carvajal obtuvo el expediente sobre cementerios, Silva el expediente referente a la acepción de la palabra empleados y el reglamento de la secretaria de gobierno. Isidro Carrasquedo resultó encargado del reglamento interior de la Contaduría general y de la vacuna e Iturbide sobre el fundo legal. Por último, se resolvió que los diputados Romero, Echenique, Menocal se integraban a la diputación permanente. Por propuesta de Arriaga se acordó que Álvarez, Guevara, Arriaga, Bribiesca y Silva integraban la comisión de reformas a la Constitución.⁷²⁶

Por la falta de actas, no se tiene la certeza de que la comisión hubiese presentado propuesta de reforma, aunque es probable que si no lo hicieron al menos tenían un avance importante de la misma. Respecto de la modificación a la Constitución federal la legislatura no llegó a tomar cartas en el asunto.

Los legisladores comenzaban a ponerse de acuerdo sobre la forma de proceder respecto de las reformas constitucionales, cuando la inestabilidad política se apoderó del estado. El 17 de diciembre de 1829 se había reunido el Congreso en sesión secreta extraordinaria a la que asistió el orador del gobierno, quien manifestó que la tranquilidad pública estaba muy alterada y el sistema de gobierno se veía amenazado por el pronunciamiento de Jalapa promovido por el ejército de reserva, por lo que el Presidente de la República había ordenado que la milicia cívica del estado estuviera en disposición para ser mandada a la ciudad de México, razón por la cual el titular del ejecutivo estatal había alistado el primer batallón de milicianos; no obstante, el gobernador solicitaba a la asamblea michoacana la aprobación de esa y otras medidas que estaban comprendidas en un documento al cual se dio lectura, de acuerdo con lo establecido por el acta, posteriormente el escrito pasó a una comisión especial compuesta por Álvarez,

⁷²⁶ AHCEMO, Legislatura III, actas públicas, caja 4, Exp. 1, 21/XI/1829.

Pintado y Martín García de Carrasquedo y aunque la comisión trato de dar una resolución a las propuestas del gobernador, ésta determinó que era muy complicado el asunto y lo dejó para las 6 de la mañana del día siguiente.⁷²⁷

El día 18 en sesión secreta extraordinaria la comisión especial presentó el dictamen. Es de remarcar que la documentación no permite conocer las medidas que proponía el ejecutivo, por ello no se tiene claro que parte es propuesta de los comisionados y cuál es la del gobernador, lo que sí se sabe es lo que aprobó la legislatura. En síntesis, el gobierno nombraría comisionados a los estados para que todos cooperaran con la tranquilidad en general bajo un plan de defensa implementado por el gobierno articulando compromisos con los estados miembros de la federación. Para ello, se daba al gobierno federal anuencia para realizar los gastos necesarios y todo esto sería comunicado al Presidente de la República por la vía reservada. Respecto a los comisionados se les haría entender que sería de su total responsabilidad cualquier acto en que traspasare las instrucciones dadas y que el estado se reservaba el derecho de declarar nulos dichos actos y obrar en contradicción de ellos. Asimismo, quedó anulada la propuesta de que se hiciera otro plan para fraguar un acercamiento con los jefes pronunciados o con quien fuera conveniente, otorgándosele al gobierno los más amplios poderes para ello. Isidro García de Carrasquedo hizo la adición de que el gobierno podría usar para el cumplimiento de este acuerdo de las personas que le parezca de cualquiera corporación del Estado, se le dispensaron todos los trámites, se tomó en consideración y después de discutido muy largamente fue aprobado como último artículo del proyecto y se declaró ser de riguroso secreto.⁷²⁸

Al día siguiente, el 19 de diciembre 1829 en sesión secreta extraordinaria, Arriaga realizó la propuesta de ofrecer al Presidente de la República y a las cámaras de la Unión asilo en este estado en caso necesario por la vía reservada, lo que fue aprobado por unanimidad. Ese mismo día Martín García de Carrasquedo informó al Congreso de que el gobierno lo había nombrado comisionado para entablar conversaciones con los gobiernos de Guanajuato y

⁷²⁷ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 17/XII/1829.

⁷²⁸ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 18/XII/1829.

Querétaro y al mismo tiempo ofreció los servicios que la legislatura pudiera necesitar en ese asunto, por lo que se le dieron las gracias.⁷²⁹

La inestabilidad social y política iba en aumento, en la sesión secreta extraordinaria del 21 de diciembre el gobierno informaba al Congreso que el primer ayudante del batallón cívico Martín Navarrete se había pronunciado a favor del plan de Jalapa junto con Manuel Foncerrada, este último había sido contenido por el Coronel Joaquín Huarte. Ante lo complicado de la situación, el diputado eclesiástico Arriaga fungió como emisario del gobierno ante la asamblea para externar que este pretendía se le dieran facultades extraordinarias y con ello detener los efectos de la seducción en favor de los pronunciados en Jalapa. El mensaje causó una larga discusión, la legislatura concluyó que el gobierno ya tenía las facultades que solicitaba por lo dispuesto en el decreto No. 12 del 10 de septiembre del presente año, al que se le agregó la explicación que “por motor o autor en pronunciamiento de asonadas a que se refieren el decreto No. 12 de esta honorable legislatura se entiendan también los intenten seducir para esos fines, los promuevan quedando sujetos a las penas y autoridades.”⁷³⁰

En el decreto se manifestaba que sólo se podían tomar las armas contra los españoles con licencia del gobierno del estado, por lo que las reuniones que se hicieran sin ese requisito, se entenderían como asonadas prohibidas por las leyes y los incursos en ellas serían juzgados y sentenciados por un consejo de guerra ordinario celebrado por la milicia cívica, el autor o motores recibirían 8 años de presidio, los jefes 4, los oficiales 2 y los individuos que en clase de soldados se reunieran voluntariamente, serían aplicados al contingente.⁷³¹

La legislatura después de ratificarle al gobierno las facultades extraordinarias para mantener la estabilidad social cerró sesiones porque no quedaba mayoría, la diputación permanente quedó al frente, el 21 de diciembre no asistieron Bribiesca, Romero, Echenique, Silva y Menocal que usaban de licencia y Martín García e Iturbide que estaban de comisionados del gobierno. En esa sesión el Congreso pidió al gobierno mandara llamar a los diputados

⁷²⁹ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 19/XII/1829.

⁷³⁰ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 21/XII/1829.

⁷³¹ Amador COROMINA, Recopilación de leyes y decretos, Tomo IV, p. 24.

Bribiesca, Romero, Echenique, Silva y Menocal para que se presentaran a la brevedad posible en Morelia.⁷³²

El 24 de diciembre había varios asuntos importantes que atender como un escrito del Coronel Joaquín Caballero el que no se pudo tratar por no haber mayoría de diputados para abrir sesiones extraordinarias. Fue hasta el 28 de diciembre que la legislatura pudo abrir sesiones extraordinarias, ese día se creó una comisión especial compuesta por Pintado, Guevara y Menocal para que revisaran toda la correspondencia generada del 22 al 27 de ese mes, entre la que destacaban las comunicaciones del nuevo presidente de la República, las del comandante general de la plaza de Veracruz, la de los comisionados Diego Moreno y Martín García de Carrasquedo y del comandante general del estado de Michoacán Juan José Codallos. Respecto a las comunicaciones establecidas con este último personaje el diputado Alvirez propuso que regresara inmediatamente de Zinapécuaro a Morelia para que contando con su apoyo la legislatura “pueda deliberar con franqueza y tranquilidad sobre los medios de salvar al Estado de los males que le amenazan”. A la propuesta se le dispensaron todos los trámites y fue aprobada para hacerse llegar de inmediato la comunicación al comandante general.⁷³³

Al día siguiente la legislatura recibía una comunicación de Codallos en la que informaba estar dispuesto a pasar con su división al estado de Guanajuato para contener a Luis Cortázar, lo que no fue permitido por los diputados y se le pidió que no saliera de los límites del estado por ser así de mayor beneficio para las deliberaciones de la asamblea.⁷³⁴

El 4 de enero de 1830 la legislatura declaró que el estado no se adhería a pronunciamiento alguno y que reconocería al gobierno que el legislativo federal declarará legítimo, al tiempo aceptaría al gobierno de la federación que tuviera el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales, lo que hasta cierto punto era una contradicción. Al día siguiente en sesión secreta una comisión especial dio lectura a un dictamen relativo a las bases para hacer un convenio entre Guanajuato y Michoacán, documento integrado por 6 artículos, el primero

⁷³² AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 21/XII/1829.

⁷³³ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 24/XII/1829 y 27/XII/1829.

⁷³⁴ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 28/XII/1829.

establecía que ambos estados “se ligaban estrechamente” para oponerse a cualquiera que intentara contrariar el sistema federal, dicha liga admitiría a todos los estados que quisieran integrarse a ella manifestando los medios con los que colaborarían a la causa, además de impedir que cualquiera de los coligados fuera invadido; para lograr todo lo anterior se facultaba al ejecutivo local para que, ciñéndose a lo establecido dispusiera todo lo necesario para su cumplimiento. Lo anterior sería comunicado a los comisionados de Guanajuato y a todos los que según la disposición correspondiera. Por propuesta del eclesiástico Guevara se le dispensó la segunda lectura, se puso a discusión y se aprobó.⁷³⁵

En este contexto la legislatura pretendía articular el plan de coalición con sus homólogas para respaldar el federalismo radical, tal vez por eso manifestó en el decreto que se adhería a lo que propusiera la mayoría de los Congresos locales, finalmente, más allá de los partidismos políticos, esto era una federación.

El 7 de enero Codallos informó al gobierno y al legislativo que Luis Cortázar se dirigía con sus tropas hacia territorio michoacano, Codallos le manifestó a la asamblea que tenía todo listo para salir a contenerlo solo esperaba su aprobación. A su vez, el Congreso mandó llamar al orador para que diera informes sobre lo que estaba ocurriendo, quien dio parte del escrito que el gobernador había enviado al ministro de relaciones, en el que decía que Michoacán reconocía al actual gobierno de la federación depositado en el general Bustamante como vicepresidente de la república, lo que fue del agrado de la legislatura. Acto seguido, se le permitía al titular del ejecutivo salir de la ciudad rumbo a Zinapécuaro con una escolta y procediera conforme a sus atribuciones del modo más conveniente para preservar la tranquilidad y seguridad del estado.

En pocas palabras, el Congreso dejaba en manos del gobernador toda acción militar y defensa del estado, lo que permite inferir que el poder se veía rebasado por la situación, la cual debía ser expuesta al gobierno federal, pues ese mismo día se resolvió que cada uno de los estados coligados enviara un comisionado a la ciudad de México para expresar la voluntad de sus respectivas

⁷³⁵ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 4/I/1830, 5/I/1830. Amador Coromina, Colección de Leyes y decretos, Tomo IV, p. 61

legislaturas y fueran mediadores en las cuestiones que pudieran suscitarse en orden al gobierno general.⁷³⁶

En día 10 de enero Salgado pedía al Congreso se le otorgara licencia para entrevistarse con Cortázar y deliberar sobre la tranquilidad pública, lo que el gobierno aceptó. El 12 de enero se publicó el decreto en el que el gobierno michoacano reconocía como presidente de México a Anastasio Bustamante nombrado en virtud del plan de Jalapa. La llegada de este personaje al ejecutivo federal representaba un peligro para el gobernador Salgado y la facción yorkina en Michoacán. En ese escenario, la declaración del gobierno estatal fue una maniobra para mantenerse en el poder, aun así, con el paso de los días el ayuntamiento de Morelia comenzaría a atacar al ejecutivo y al legislativo.⁷³⁷

El 15 de enero el diputado Menocal proponía que el gobierno nombrara una comisión de sujetos para que a nombre de la legislatura pasaran a la ciudad de México y dieran parte al ejecutivo federal de los males que afligían al estado, después de dispensados trámites y discutida fue aprobada. Ese día faltaron a la sesión Iturbide y Arriaga que estaban de comisión, Romero y Carvajal se encontraban de licencia, Silva y Alvirez estaban enfermos, de hecho, ese día el congreso aceptó la renuncia de este último. Al día siguiente la legislatura cerraba sus terceras sesiones extraordinarias.⁷³⁸

Bajo ese escenario convulso, solo fue cuestión de tiempo para que el Ayuntamiento de Morelia comenzara a cuestionar al ejecutivo y al legislativo por su proceder. El ayuntamiento de Morelia lanzó un manifiesto el 23 de enero de 1830 en el que declaraba nulas las elecciones de abril de 1829, el cabildo no tomó en consideración el artículo 4º del plan de Jalapa que entre otras cosas llamaba a procurar el orden y la tranquilidad pública y puso en evidencia que Salgado no merecía la confianza de los michoacanos. El 2 de marzo hizo lo propio el Supremo Tribunal de Justicia y envió a la comisión permanente del Congreso un escrito en el que se manifestaba en contra de la permanencia de Salgado en el ejecutivo. Los magistrados Manuel Diego Solórzano, Tomás

⁷³⁶ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 7/I/1830.

⁷³⁷ Amador COROMINA, Colección de leyes y decretos, Tomo IV, p. 62. Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, "La primera república federal en Michoacán, 1825-1835: entre la inseguridad pública y la inestabilidad política," en: *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), El Colegio de México, México, 2012, p. 436.

⁷³⁸ AHCEMO, Legislatura I, II, III y IV, Borradores Actas secretas, Caja 1, Exp.7, 15/I/1830.

Mariano Bustamante, José María Ortiz Izquierdo y el fiscal interino Clemente Valdez usaron la jurisprudencia para demostrar que la elección de Salgado a fines de mayo de 1829 era una virtual reelección por lo que el Congreso debía declarar la nulidad de la elección. El no atender la misiva del Supremo Tribunal de Justicia le valió al Congreso ser señalado de retrasar la resolución del asunto y ganar tiempo para preparar la revuelta en apoyo a Salgado.⁷³⁹

A pesar de que los hechos demuestran que el Congreso tenía mucho que debatir, éste no reanudó sus labores legislativas. El 6 de marzo Salgado emitió un comunicado en el que decía que se retiraba del gobierno por hallarse en peligro su autoridad y su persona. Sin el respaldo de Salgado, la diputación permanente del Congreso no pudo sostenerse por mucho tiempo, el 11 de marzo ésta ya no pudo soportar la presión pues consideraba que no existía la libertad necesaria para cumplir con su labor, pues veía una fuerza en la ciudad que protegía los atentados contra los supremos poderes del estado por ello decidió no volverse a reunir para sesionar hasta no sentirse libre para ejercer sus funciones.⁷⁴⁰

Al día siguiente se emite un decreto que nombraba a Diego Moreno titular del ejecutivo. El legislativo se detiene para abrir sesiones en su segundo año con una nueva legislatura que terminaría el bienio de la tercera. Jaime Hernández Díaz establece que esa restructuración dentro del legislativo tenía como objeto que éste fuera favorable al grupo triunfante, los “hombres de bien” habían logrado acomodar en el ejecutivo a un hombre que apoyara acciones más moderadas pero era necesario un Congreso afín que respaldara propuestas y las tradujera en ley.⁷⁴¹

Esta legislatura fue de las que mayor número de eclesiásticos albergó, entre ellos al único prebendado que ocupó un curul en el Congreso durante la primera República federal: Martín García de Carrasquedo federalista radical y yorkino. Por ser un grupo numeroso, los eclesiásticos tuvieron una participación muy activa, pero al ser tan poco el tiempo de sesiones es complicado determinar la trascendencia de labor legislativa.

⁷³⁹ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, “La primera república federal en Michoacán”, pp. 346-347.

⁷⁴⁰ *Ibíd.*, p. 348.

⁷⁴¹ *Ibíd.*, pp.348-349.

6.2. La tercera legislatura en su segundo año de sesiones, 1830-1831

6.2.1. Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Lorenzo Auriolos, Manuel Tiburcio Orozco y José María Cavadas en la tercera legislatura.

Para su segundo año de sesiones, la tercera legislatura incorporó a los eclesiásticos Atanasio Domínguez, Mariano Rivas, Lorenzo Auriolos, Manuel Tiburcio Orozco y al suplente José María Cavadas. Tiburcio Orozco renunció al cargo por lo que el 26 de octubre por lo que el eclesiástico José María Cavadas tomó su lugar, mientras que Domínguez no terminó el periodo de sesiones.

A esta asamblea le tocó trabajar en medio de una aparente calma, mientras en la capital del estado y zonas aledañas la estabilidad permitía el funcionamiento de las autoridades estatales, en diversas poblaciones de los departamentos del sur y del poniente se pronunciaban a favor de Vicente Guerrero, el presidente destituido, y la defensa del federalismo, al tiempo que Salgado intentaba refugiarse en Zamora y Los Reyes de donde era originario y tenía el respaldo de las milicias de los pueblos cercanos. La rebelión federalista contra el gobierno se incrustó en los partidos de Ario, Taretan, Tacámbaro, Huetamo, Uruapan, Apatzingán y Coalcomán. En marzo de 1831, los cabecillas del movimiento suscribieron un Plan nombrado Codallos en honor a su líder principal. El documento acusaba al movimiento de Jalapa “de asestar un duro golpe al federalismo” adoptado en 1824 pues al desconocer a las legislaturas y gobernadores que no le eran favorables había invadido la soberanía de los estados. El plan tenía alcances fuera del territorio michoacano al proponer la defensa de Texas y Yucatán. A pesar de que la revuelta federalista fue respaldada por un plan, éste no logró tener suficiente eco y la condujo al fracaso.⁷⁴²

El relevo ocurrido al interior del poder legislativo y ejecutivo local polarizó a la sociedad michoacana derivando en una crisis de inestabilidad en la región sur y poniente de Michoacán, lo que produjo importantes debates al interior del Congreso orientados al mantenimiento de la paz pública y la captación de recursos para emprender el control de territorio.

⁷⁴² Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, “La primera república en Michoacán”, p. 349.

Recién iniciadas las labores de esta legislatura, 14 de agosto de 1830 el congreso del estado abrió sesión secreta extraordinaria a primera hora del día a petición del secretario del despacho del gobierno, quien a nombre de este presentó documentos en los que se daba testimonio de que en algunos puntos de los partidos de Pátzcuaro y Puruándiro se observaban síntomas y temores revolucionarios. Auriol propuso que el gobierno informara por escrito las medidas que necesitaba del legislativo para asegurar la tranquilidad pública, formándose una comisión especial para dictaminarlas. Lo que se aprobó y quedaron comisionados Villaseñor, Guevara y Maciel. Villaseñor propuso se diera autorización al ejecutivo para que hiciera uso de los recursos necesarios y evitara los motines que amenazaban la región; como medida inmediata proponía la salida de un contingente de 100 milicianos de Morelia a hacia los partidos ya mencionados, la moción del eclesiástico fue aprobada.⁷⁴³

El 17 de agosto se notificaba al Congreso que el faccioso Codallos había cruzado el pueblo de Los Reyes con dirección Zacapu con cerca de 200 hombres, mientras que en Zuzupuató había otro grupo de 300 que “llevaban grito en favor de Guerrero” y en el Rosario otros 200 facciosos, todo lo anterior como consecuencia de haberse fugado el exgobernador Salgado, lo que era bastante argumento para temer una revolución en el estado. Rivas consideraba que se debía pedir apoyo al gobierno de la federación para que los presos que aun había en la capital tuvieran un ejemplar castigo, de la misma manera, el eclesiástico proponía que el gobierno del estado, en auxilio al gobierno federal, dispusiera de 200 hombres de caballería para perseguir a los facciosos y se castigara a los criminales que habían alterado el orden, mandándose un comisionado para que informar a los senadores y diputados de lo que ocurría en Michoacán.

Ese mismo día se entablaron discusiones sobre recursos para sufragar el gasto de 200 hombres de caballería y para otros gastos, se pensaba negociar un préstamo con la cantidad indispensable para subsanar las necesidades del gobierno, todo lo anterior con el objeto de contener los males que estaban surgiendo en el departamento del poniente. Los colaboradores con dicho préstamo serían los habitantes en general, los funcionarios y empleados del gobierno.⁷⁴⁴

⁷⁴³ AHCEMO, Legislaturas I, II, III, IV, Caja 1, Exp. 7, 14/VIII/1830.

⁷⁴⁴ AHCEMO, Legislaturas I, II, III, IV, Caja 1, Exp. 7, 17/VIII/1830.

Pasaron los días y la situación continuaba siendo adversa para el gobierno en cuanto al tema de seguridad, la comunicación entre el legislativo y el ejecutivo al respecto fue intensa. Dentro de los debates llama la atención el suscitado el 12 de octubre de 1830 en que se presentó el secretario de gobierno para discutir el dictamen de la comisión de Relaciones de la Federación relativo a que se incitara al gobierno federal para que el Congreso de la unión dictara una amnistía en favor de los facciosos. Auriolles tenía una buena opinión del recurso pues veía en ella el freno a muchos facciosos que causaban enorme pérdida y destrucción a la república y para ello citó en apoyo las doctrina de Watel y otros publicistas que hablaban al respecto. Domínguez y Juan Gómez Puente estaban de acuerdo con la iniciativa, pero consideraban que a los cabecillas se les debía condenar al destierro. Por una idea similar, Rivas consideraba prudente castigar a los infelices ignorantes, pero los cabecillas debían sujetarse a las leyes y sufrir la pena imputada.⁷⁴⁵

El 29 de octubre de 1830 la comisión de Hacienda presentó una reforma para aclarar una duda en el pago del derecho de alcabala de los efectos introducidos con la nota “para el uso”. Domínguez, Navarro, Barrera y Villaseñor se manifestaron en contra pues la disposición haría que algunos ciudadanos tuvieran que pagar doble impuesto, aunado al hecho de que dicha contribución nunca se había cobrado. Cavadas y Juan Gómez Puente dijeron que al conceder el gravamen se promovería el fraude a través de la división de los efectos dedicados a la venta para evitar el impuesto y con eso se debía de tener cuidado porque acabaría con la recaudación de la renta y la falta de recursos paralizaría la administración al no poderse pagar a los empleados del gobierno y las tropas, quedando vulnerable el estado al ataque de grupos adversos del gobierno. Este par de diputados tenían claro que la seguridad y conservación de la autoridad en el estado dependía del aumento de los caudales en la Hacienda estatal. Después de aprobado el dictamen en lo general, continuó la discusión de dos propuestas, la primera consistía en la exceptuación de pago de alcabala a los efectos introducidos para el culto divino o adorno de las Iglesias previa certificación jurada de los párrocos o preladados de haber sido comprados para este objeto y con dinero propio de las mismas. La segunda también liberaba del pago de

⁷⁴⁵ AHCEMO, Legislaturas I, II, III, IV, Caja 1, Exp. 7, 12/IX/1830.

alcabala las dotaciones hechas para los objetos indicados en el artículo anterior.⁷⁴⁶

El 13 de noviembre se discutía que para hacer efectivo el reembolso por el pago de impuestos a los efectos introducidos para el culto divino o adornos de las iglesias era indispensable presentar el respectivo justificante a la contaduría. Barrera, Navarro y Maciel no estaban de acuerdo con lo propuesto, es decir, que se hiciera la devolución porque esta traería muchas reclamaciones, los diputados también consideraban que los párrocos estaban instruidos del cobro de la contribución. Ceballos, Domínguez y Cavadas sostuvieron que el derecho de las iglesias no era dudoso, pero que los administradores introducían la duda y en ese caso los párrocos no pagaban la alcabala por ignorancia, sino por no conflictuarse con los cobradores. Aun así, el artículo fue aprobado 6 contra 5 votos. El tercer artículo al respecto marcaba que lo acordado en el artículo anterior sería comunicado al Vicario Capitular para que hiciera llegar la noticia a los párrocos y prelados eclesiásticos. A esta sesión también asistieron Rivas y Domínguez, quienes no dijeron nada al respecto.⁷⁴⁷

La discusión permite apreciar la difícil situación financiera por la que atravesaba la administración del estado y la necesidad que existía de mantener e incrementar el cobro de la alcabala, así fuera aumentando la cantidad de productos gravados, pero a pesar de las dificultades, se intentaba proteger del cobro a los artículos destinados al culto divino. Que en un momento de crisis se tuviera consideración con la Iglesia permite cuestionar las relaciones entre las autoridades del Obispado y el gobierno del estado, pues al parecer había mayor compatibilidad entre ambas a partir del relevo en los poderes locales. No se debe olvidar que esta legislatura en su primer año había emitido una disposición aclaratoria que contemplaba a los eclesiásticos en el tema del préstamo forzoso.

El asunto de la falta de recursos era una constante, el 11 de noviembre de 1830 se presentó el orador del estado para discutir el tema de la alcabala, lo primero que hizo fue manifestar los inconvenientes que tenía el cobro de dicho impuesto. Sin embargo, era indispensable continuar su recaudación debido a la escasez de la Hacienda Pública a causa de la paralización de sus ramos por la revolución del Sur. El orador proponía que el cobro continuara a través de

⁷⁴⁶ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 29X/1830.

⁷⁴⁷ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 13/XI/1830.

vecinos honrados y con ello eximir de la obligación a los ayuntamientos. Para el presidente Manuel González la propuesta del gobierno era complicada de ejecutar, Rivas intervino para manifestar la gran odiosidad con que los ayuntamientos veían el recaudar la alcabala y consideraba útil que se practicara lo establecido por la ley del Congreso general. Domínguez hizo énfasis en lo común que resultaba el argumento de que era confuso el cobro del gravamen si se tomaban en consideración las leyes dispensas sobre una misma cosa, por ello el eclesiástico proponía una reducción de la legislación al respecto. Aurióles apoyó a Domínguez al pedir que se constituyera una sola ley de contribución, pero consideraba que primero era necesario investigar si convenía llevarla a efecto por las dificultades que representaba. El presidente de la asamblea no creía necesario implementar lo propuesto por Aurióles y Domínguez, pues apelaba al entendimiento que los ayuntamientos tenían de las leyes referentes al cobro de la alcabala, además de que con ello se evitaba el gravamen al erario, al no llegar a una resolución la propuesta debió regresar a la comisión.⁷⁴⁸

Por otra parte, más allá de la resolución lo que resulta muy importante es cómo algunos diputados percibían un exceso de legislación en materia de alcabalas, la cual era resultado de las necesidades de la Hacienda pública, pero que con el paso de los años la acumulación llegó a complicar su colectación.

Continuando con la exposición, el 29 de noviembre de 1830 la comisión de Hacienda presentó un dictamen sobre la imposición de un préstamo de 10 pesos diarios para auxiliar a la fuerza cívica puesta en armas en Uruapan desde el 19 de septiembre. Los comisionados propusieron facultar al gobierno acorde al decreto del 16 de agosto para que resolviera lo conveniente. Aurióles no estaba conforme con la moción, por lo que argumentó que el acuerdo citado hablaba de “motines” palabra, que en términos rigurosos se entendía cuando alguna conmoción era parte de pueblo lo que no correspondía a la realidad que vivía aquella población y por otro lado, el eclesiástico veía que el gobierno no estaba lo suficientemente facultado para disponer del pago de la milicia de Uruapan. Juan Gómez Puente manifestó que el acuerdo se había generado con el objeto de que los pueblos se pusieran a la defensiva ante la noticia de que Codallos se dirigía para ese rumbo, el diputado hacía énfasis en que el objetivo

⁷⁴⁸ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 11/XI/1830.

del Congreso radicaba en mantener la tranquilidad pública. Con estas observaciones el acuerdo se votó y fue aprobado.⁷⁴⁹

El escenario revolucionario que vivían algunas regiones del estado continuaban drenando las arcas del gobierno. El 1º de diciembre el eclesiástico Rivas manifestaba su preocupación porque no se habían obtenido recursos de un préstamo, entonces proponía que por medio del decreto del 19 de agosto el gobernador incitara a todos los ciudadanos del estado para que contribuyeran según sus facultades y cubrir los gastos para el restablecimiento de la tranquilidad pública y la defensa de sus propiedades. La propuesta de Rivas consistía en que, dependiendo del individuo, la contribución no debía bajar de 4 reales ni exceder de 15 pesos mensuales, por un periodo de cuatro meses, quedando exceptuados todos aquellos cuyo sueldo fuera de 4 reales diarios, para no gravar de más a la población proponía suspender el cobro de la contribución directa durante ese mismo periodo, lo que pasó a la Comisión de Hacienda.⁷⁵⁰

Siguiendo con el camino azaroso que debió enfrentar el Congreso por la inestabilidad y la falta de recursos, el 21 de abril de 1831 se puso a debate la derogación del decreto no. 71 del 24 de diciembre de 1830 referente al préstamo forzoso, Auriolles pedía al Congreso que diera razones para que se declarara la nulidad de la ley. El orador decía que la defensa y la seguridad de los departamentos del Sur y del Poniente se habían pagado de los fondos comunes del erario, que los ingresos de tesorería iban en aumento y se podían cubrir los adeudos con lo colectado de alcabalas y tabacos en los pueblos de Ario y Tacámbaro. El punto era que el decreto no se había verificado, entonces se creía pertinente su derogación. El presidente del Congreso pensaba que se debía mantener el decreto porque la tranquilidad no estaba garantizada y era necesario sostener una fuerza que impidiera las acciones de los facciosos, pero que dados los adeudos que tenía el gobierno no veía la necesidad de contraer uno más para pagar otros, de la misma manera que no creía que los habitantes de esa zona colaboraran con la pacificación del estado, el orador consideraba que el asunto debía dejarse para que lo resolviera el gobierno federal. El presidente del Congreso, Mariano Rivas era de la opinión que el préstamo se mantuviera para

⁷⁴⁹ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 29/XI/1830.

⁷⁵⁰ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 1/XII/1830.

el pago de tropa y con ello garantizar la seguridad pública, por moción de Juan Gómez Puente se suspendió la discusión.⁷⁵¹

Lo primero que sugiere la discusión es la falta de recursos y la constante presión sobre la población para que contribuyera con la causa por medio de préstamos forzosos, los cuales no siempre tenían la convocatoria anhelada, lo que también evidenciaba la debilidad en la recaudación fiscal.

El 27 de abril se discutió sobre facultades extraordinarias que se concedían al gobierno por el decreto no. 70 para poner en estado de defensa a los departamentos del sur y del poniente. La comisión proponía prorrogar por dos meses las facultades extraordinarias del ejecutivo y mantener sobre las armas a 250 hombres para defensa y seguridad del departamento del poniente, a Rafael Gómez Puente le parecía excesivo el tiempo de dos meses pues la tranquilidad ya se había restablecido en buena parte de esa geografía, Auriolles apoyaba el dictamen, mientras que Villaseñor no creía necesario el mantener 250 hombres por más tiempo porque el departamento del sur ya no representaba tanta inestabilidad, pero Navarro no veía asegurado el orden. La discusión se volcó hacia lo difícil que resultaba que la gente de los pueblos del departamento del sur quisiera apoyar en la pacificación de la zona porque no tenían los ánimos muy dispuestos. Auriolles insistía en que era necesario que se dieran facultades extraordinarias al ejecutivo para que este emprendiera la defensa del departamento del sur. El orador manifestó que Gordiano Guzmán iba con 300 hombres hacia Los Reyes eso hacía que toda la fuerza fuera destinada para el departamento del poniente y respecto al departamento del sur se dejaba vigente hasta el 6 de agosto el decreto no. 70 referente a potestades extraordinarias para el ejecutivo en caso de desorden social.⁷⁵²

En medio de este escenario convulso y haciendo frente a los problemas financieros la legislatura también debió legislar sobre otros asuntos que tuvieron fuerte impacto en la sociedad michoacana.

⁷⁵¹ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 3, 21/VI/1831.

⁷⁵² AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 3, 27/VI/1831.

6.2.2. Las reformas constitucionales

6.2.2.1. La Constitución de 1824

Las propuestas de reforma a la Constitución federal y estatal tuvieron que hacerse contra reloj en tan solo un año de sesiones debido a que la tercera legislatura en su primer año no pudo avanzar lo suficiente en el tema. Las propuestas de reformas a la Constitución federal tenían su base en el artículo 166 de la misma, en el que marcaba que las legislaturas de los estados podían realizar observaciones sobre determinados artículos de dicho documento y del acta constitutiva, las serían tomadas en cuenta en 1830, año de la reforma.⁷⁵³ Mientras que la Constitución local en su artículo 217 estableció que solo a partir 1830 se autorizaba la alteración, adición o reforma de su contenido, las modificaciones tenían que plantearse por escrito y debían respaldarse por lo menos de una tercera parte de la legislatura, una vez aceptada la reforma, correspondería a la siguiente legislatura discutir y votar las reformas propuestas.⁷⁵⁴

Llegado 1830, año de la reforma de la Constitución de 1824, los estados hicieron uso del poder que les confería el artículo 166 constitucional y enviaron sus propuestas para la reformulación de la máxima ley de la federación, entre las que destacan el establecimiento de la ciudadanía en la Constitución federal junto con requerimientos de propiedad o renta para la obtención del derecho. Asimismo, se pedía la modificación de requisitos para ocupar cargos públicos de elección, sobre todo para el legislativo con el fin de que la elección recayera en propietarios y ricos; también propusieron la reorganización y funcionamiento de los poderes de gobierno, como fue el caso del estado de Michoacán.⁷⁵⁵

A la par de las medidas que proponían los estados, se promovieron desde el centro del país mociones por parte del gobierno federal, a pesar que le estaba prohibida la participación en este proceso, aun así, el vicepresidente Anastasio Bustamante respaldado por la élites regionales intentó para fortalecer al gobierno

⁷⁵³ Felipe TENA RAMÍREZ, *Leyes fundamentales*, p. 193.

⁷⁵⁴ *Actas y decretos*, Tomo II, p. 500.

⁷⁵⁵ Catherine ANDREWS, "Discusiones en torno de la reforma de la Constitución federal de 1824 durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)" en *Historia Mexicana*, LVI: 1, 2006, pp. 77-79, 85-86.

federal, liberándolo de la dependencia de los estados en particular en lo fiscal y militar.⁷⁵⁶

En el caso de la legislatura michoacana, la propuesta de reforma estaba encaminada a la reorganización de los poderes, en concreto del ejecutivo con el objetivo de suprimir la vicepresidencia. El 12 de octubre de 1830, Rafael Gómez Puente, Domínguez y Rivas presentaron la iniciativa de supresión de la vicepresidencia de la República a cambio de establecerse dos cónsules que periódicamente entraran en la presidencia, la que pasó a la comisión de Puntos Constitucionales.⁷⁵⁷

El 3 de noviembre Rivas propuso el nombramiento de una comisión encargada exclusivamente de las reformas de la Constitución federal a presentarse a las Cámaras de la unión, lo que fue aprobado por la asamblea. Entonces la comisión de Policía nombró a Navarro, Rivas y Auriolés, pero Rivas en ese momento pertenecía a la de Policía lo que constituía contradecir el reglamento interno, Juan Puente habló en favor de la omisión en el caso y entonces el eclesiástico se incorporó a la comisión especial. El 5 de noviembre se puso a discusión el dictamen de la comisión de puntos constitucionales en que se pedía descartar el proyecto de reforma de la Constitución federal presentado el 12 de octubre por Rafael Puente, Domínguez y Rivas, este último de los legisladores leyó un discurso “Dos son las calidades esenciales de un buen gobierno, rectitud y fuerza: la 1ª consiste en la conformidad de sus actos, con la regla que se le ha dado; y la 2ª en que su acción sea pronta y eficaz.”⁷⁵⁸

El 10 de noviembre la comisión especial presentó para su primera lectura el dictamen sobre reformas a la Constitución federal, en cuanto al modo con que debían hacerse estas en los periodos o cuatrienios propuestos. A su vez se puso a debate la propuesta de la comisión de Puntos constitucionales relativa a desechar la iniciativa de supresión de la vicepresidencia de la república y el establecimiento de dos cónsules que por cuatrienios entrarían a la presidencia. El presidente de la asamblea consideraba pertinente que la propuesta regresara a la comisión para su reforma. Navarro y Domínguez dijeron que por esa razón

⁷⁵⁶ José Antonio SERRANO ORTEGA, “Epílogo. La república federal desde los estados. 1824-1835”, en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA, 1824-1835, México, El Colegio de México, 2012, pp. 601-602.

⁷⁵⁷ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 30/X/1830.

⁷⁵⁸ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 3/XI/1830 y 5/XI/1830.

se pedía que el proyecto principal fuera desechado, estos diputados no estaban por la modificación, pues advertían muchos males en un triunvirato porque el gobierno se reducía a un pupillage. Rivas, como autor del proyecto argumentó que, si bien se manifestaban los defectos de este, no estaba probada su inutilidad y que a la comisión en lugar de impugnar, le correspondía proponer los medios para la variación del ejecutivo con el objeto de evitar convulsiones políticas en las elecciones de presidente. El eclesiástico trajo a colación la elección de Vicente Guerrero en la que desde su perspectiva no había duda de que la facción que lo había apoyado sabía que obtendría de inmediato la presidencia.⁷⁵⁹

El Rivas insistió de nuevo en que las elecciones para presidente eran convulsas debido a las intrigas que podían tejerse valiéndose del andamiaje legal que existía para su elección, por lo que si los cónsules conducían al debilitamiento de esas prácticas estaba a favor de la propuesta de reformulación del ejecutivo federal. Auriol no estaba de acuerdo con la implantación de cónsules, aunque veía necesaria la variación del ejecutivo federal, el eclesiástico pensaba que al ser el tema de suma gravedad lo más prudente era no aventurarse porque podía afectar el destino de la nación, era un tema para irse con cautela y la premura del tiempo no dejaba espacio para dilucidar con claridad y se corría el riesgo de cometer errores en la propuesta, en todo caso creía conveniente sujetarse a las mociones que al respecto habían realizado otras legislaturas.

El día 11 continuó la discusión de la comisión de Puntos Constitucionales para desechar el proyecto de reforma del Poder ejecutivo, suprimiendo la vicepresidencia de la República y estableciendo dos cónsules que por cuatrienios sucesivos ocupasen la Silla Presidencial. La comisión reformó la propuesta pidiendo que fuera desechada la creación de cónsules para que en lo demás se pudiera iniciar la reforma. Navarro veía un problema en la implantación de esta figura, le preocupaba que por las características de la propuesta no tuviera la instrucción necesaria para intervenir con acierto en todo tipo de asuntos. Rivas defendió el dictamen pues uno de los objetivos del mismo era poner algunas trabas al ejecutivo y disminuir la inestabilidad que podría generar

⁷⁵⁹ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 10/XI/1830.

las elecciones para la Suprema Magistratura y leyó un discurso en contra de las intervenciones que atacaban la propuesta, el cual no se incluyó en el acta.

Domínguez intervino para decir que nunca se habría evitado la revolución, porque estaba ya en los intereses de los facciosos otorgar la presidencia a Guerrero, quienes habían atropellado todos los principios de justicia, bajo esas condiciones hubieran hecho lo mismo para nombrarlo cónsul. El diputado agregó que la moción tenía un inconveniente constituido por la duración de un cónsul por 8 años y después de 4 de presidente “le pone en el caso de que, siendo un hombre de luces, y al mismo tiempo aspirante, pueda alzarse con el poder y exigirse un Monarca”.⁷⁶⁰

El 11 de noviembre de 1830 de nuevo continuó la discusión referente a que se desechara del proyecto de reforma constitucional el nombramiento de dos cónsules. Para Rivas dicha figura era de mucha utilidad “porque servía de un fuerte contraste al Presidente para que no excediera de sus facultades”. Mientras que Auriolles, Domínguez y Navarro veían graves inconvenientes en una innovación tan substancial del Poder ejecutivo, desde la perspectiva de estos legisladores lo más arriesgado que podía plantearse era la creación de un Consejo del tipo que tenía el gobierno del estado para que actuara de acuerdo con el titular del ejecutivo y en otras ocasiones escuchando su dictamen. Finalmente, por mayoría del Congreso se acordó eliminar la figura de los cónsules de la propuesta de reforma al ejecutivo federal.⁷⁶¹

Otras propuestas de reforma a la Constitución federal se enfocaron en el título 8º, el cual comprendía la forma de realizar variaciones a los artículos de la misma. Las modificaciones iniciaron por el artículo 166 hasta el 171 y se agregó el 172. Las reformas de los artículos del 166 a 171 no causaron demasiado debate a excepción del 167 en el que intervinieron los diputados Cevallos y Rivas, el primero para opinar que la calificación debía ocurrir cuando se hubiesen renovado las cámaras en su totalidad por no ser conveniente que unos mismos individuos califiquen y aprueben. Mientras que el segundo manifestó que si se establecía que la Cámara de Diputados fuese por tercios cada dos años como propone este Congreso o por mitad como indican otras legislaturas siempre había de subsistir una parte, la reforma se aprobó, aun así, el artículo al igual

⁷⁶⁰ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 11/XI/1830.

⁷⁶¹ *Ídem*.

que los demás fue aprobado por mayoría o unanimidad. Sobre las reformas planteadas en general véase el cuadro No. 10

Cuadro No. 10

Propuestas de reforma al Título VIII sobre la reforma a la Constitución Federal.

Artículo de la Constitución de 1824	Propuesta de reforma por el Congreso de Michoacán en 1830
Art. 166. Las legislaturas de los Estados podrán hacer observaciones, según les parezca conveniente, sobre determinados artículos de esta constitución y del acta constitutiva; pero el Congreso general no las tomará en consideración sino precisamente el año de 1830.	Art. 166. Las legislaturas de los Estados podrán hacer observaciones según les parezca convenientes sobre determinados artículos de esta constitución y del acta constitutiva; pero el Congreso general no las tomará en consideración sino precisamente el año de 1834
Art. 167 El congreso en este año se limitará a calificar las observaciones que merezcan sujetarse a la deliberación del Congreso siguiente, y esta declaración se comunicará al Presidente, quien la publicará y circulará sin poder hacer observaciones.	Art. 167. El Congreso en este año se limitará a calificar las observaciones que merezcan sujetarse a la deliberación de las cámaras en las sesiones del año siguiente. Esta declaración será aprobada por dos tercios de los votos presentes de ambas, y se comunicará al Presidente, quien la publicará y circulará sin poder hacer observaciones
Art. 168. El Congreso siguiente, en el primer año de sus sesiones ordinarias, se ocupará de las observaciones sujetas a su deliberación, para hacer las reformas que crea convenientes; pues nunca deberá ser uno mismo el Congreso que haga la calificación prevenida en el artículo anterior, y el que decrete las reformas.	Art. 168. Los proyectos de reforma desechados por primera vez en su totalidad por la cámara revisora, volverán con las observaciones de esta a la de su origen. Si examinados en ella se calificaren en ella de convenientes por las tres cuartas parte de sus individuos presentes, pasaron 2ª vez a la cámara que los desechó y no se entenderá que está los reprueba, sino concurre para ello el voto de las tres cuartas partes de sus miembros presentes
Art. 169. Las reformas o adiciones que se propongan en los años siguientes al de 30, se tomarán en consideración por el Congreso en el segundo año de cada bienio, y si se calificaren necesarias, según lo prevenido en el artículo anterior, se publicará esta	Art. 169. El Congreso en sesiones ordinarias del año de 1835 se ocupará de las observaciones sujetas a su deliberación procediendo para aprobarlas con total arreglo para la calificación en los artículos 167 y 168.

resolución para que el Congreso siguiente se ocupe de ellas.	
Art. 170 Para reformar o adicionar esta Constitución o el acta constitutiva, se observarán además de las reglas prescritas en los artículos anteriores, todos los requisitos prevenidos para la formación de las leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al presidente en el artículo 106.	Art. 170. La reforma o adiciones que se proponga en los años siguientes al de 34 se tomaran en consideración por el Congreso cada 4 contados desde aquel exclusive, y en las sesiones ordinarias del siguiente en que el Congreso se habrá renovado en parte, se deliberara las reformas convenientes; pues nunca deberá ser uno mismo en su totalidad el Congreso que haga la calificación y las reformas
Art. 171 Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la federación y de los Estados.	Art. 171. Se deliberará sobre las reformas de la Constitución de 1824 calificadas en el año de 1830 en las sesiones ordinarias de 1831 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.
	Art. 172. El presidente no podrá hacer observaciones a las reformas constitucionales.

Cuadro de elaboración propia. Fuente: Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, p. 193. AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 11/XI/1830.

La propuesta de la legislatura respecto al título VIII de la Constitución federal tenía dos puntos centrales. En primer lugar, admitir la mejora del texto constitucional al permitir que se hicieran propuestas de reforma cada cuatro años por parte de las legislaturas estatales. En segundo lugar, negaba la posibilidad de realizar observaciones sobre la reforma al ejecutivo federal. Es decir, desde la perspectiva el Congreso michoacano el tema de la reforma de la Constitución federal solo era competencia del legislativo en sus dos niveles de gobierno.

Volviendo a la propuesta de reforma del ejecutivo federal, una vez variada la idea de los cónsules, el 18 de noviembre se dio lectura al dictamen de la comisión especial sobre la reforma de supresión de la vicepresidencia de la República y la creación de un Consejo de gobierno y de una diputación permanente en el receso del Congreso general. El 20 de noviembre se puso a discusión la creación de un Consejo de gobierno integrado por cinco individuos, para Domínguez y el presidente eran pocos por la cantidad de asuntos que se debían atender. Rivas y Aurióles como miembros de la comisión argumentaron

que el número se determinó tomando en consideración que no se quería debilitar demasiado al gobierno en los casos en que el Consejo debiera votar por individuos o por corporaciones, lo que fue suficiente para votar y aprobar la moción. El nombrado consejero debía tener 35 años, ser ciudadano mexicano por nacimiento y residente en el país, haber sido o ser secretario del despacho de gobierno en general, embajador, ministro en corte extranjera, ministro de la Suprema Corte de Justicia, gobernador de algún estado. Domínguez hizo la observación de que hubiera un eclesiástico dentro del Consejo a razón de que el gobierno atendía asuntos de dicha índole y con ello se garantizaría un individuo con amplio conocimiento sobre este tipo de asuntos, el electo debía de tener experiencia en funciones de primer orden en los obispados, el presidente del Congreso agregó que también era necesaria la integración de un coronel efectivo. Auriolles y Navarro le contestaron a Domínguez y dijeron que la comisión había omitido a los eclesiásticos porque la idea consistía en que dentro del Consejo se eligiera un presidente que ejerciera el poder ejecutivo en ausencia del titular y por tanto quería que hubiera cinco hombres de estado para escoger. El 25 de diciembre se estipuló que de los consejeros uno podía ser eclesiástico siempre y cuando tuviera la investidura de obispo, diputado, senador del Congreso general o vicario capitular o general de algún Obispado, pero quedaba impedido de ser nombrado presidente del Consejo y del nombramiento de titular del ejecutivo por el Congreso general.⁷⁶²

La restricción de los eclesiásticos para detentar el ejecutivo era una propuesta que el legislativo michoacano había plasmado ya en la Constitución de Michoacán de 1825, no es de extrañar que mantuvieran la exclusión porque es innegable que el Consejo de gobierno planteado para el ejecutivo federal tenía su antecedente en el Consejo de gobierno michoacano que funcionaba como órgano consultivo y de vigilancia de los actos del gobernador.

El 22 de noviembre continuó la discusión, los consejeros serían electos siguiendo los parámetros de título 5º, sección 2ª de la Constitución relativa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las legislaturas harían el nombramiento el día 2 de enero, el 3 de febrero las cámaras de la unión harían la elección y los nombrados tomaría posesión del cargo el 1º de abril, el Consejo

⁷⁶² AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 18/XI/1830 y 20/XI/1830.

se renovarían cada dos años. Las atribuciones de este órgano consistían en acordar con el presidente todos los negocios que marcaba la Constitución, sus obligaciones se ceñían a dar dictamen con motivos y por escrito al presidente en todos aquellos asuntos que la ley diera atribuciones y en todos aquellos que el titular del ejecutivo lo solicitara, los consejeros podían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia.⁷⁶³

La aprobación del Consejo trajo consigo la modificación de las atribuciones y restricciones del ejecutivo, el 23 de noviembre continuó la discusión de las reformas correspondientes al titular del ejecutivo y su interacción con la figura del Consejo de gobierno al marcar que el Presidente debía nombrar a los secretarios de despacho en acuerdo con el Consejo. Con la moción Villaseñor veía maniatado el poder del titular del ejecutivo, mientras que Rivas era de la opinión de que partiendo del sistema de gobierno era preciso quitarle el poder absoluto al presidente “para que no pueda disponer de la suerte de la República, sino que tenga un fuerte contraste que le impida abusar de sus facultades”, lo que fue aprobado, lo mismo ocurrió con la propuesta de que el Presidente nombrara a los comandantes de partidas y de los estados con previa consulta del Consejo.⁷⁶⁴

El temor de un ejecutivo fuerte, siempre fue una preocupación para el legislativo de Michoacán, la prueba lo constituye la existencia del Consejo de gobierno dentro de la estructura del ejecutivo michoacano. Bajo este argumento, se infiere que las asambleas se preocuparon porque los gobernadores no poseyeran poderes y atribuciones que les ayudaran a convertirse en déspotas porque establecían una analogía con la figura del rey y la monarquía absoluta. Llegada la hora de la reforma al texto constitucional federal no se dudó en proponer un órgano de gobierno que desde la perspectiva del legislativo michoacano cumplía cabalmente con su función.

Es bajo este contexto que la propuesta de reforma al ejecutivo federal tenía como objetivo maniatar el poder del Presidente de la República, lo que indica por un lado la preocupación por una parte de la legislatura respecto al tema, partiendo de los hechos vinculados al ascenso de Vicente Guerrero a la presidencia con respaldo de las logias masónicas y la polarización de la clase

⁷⁶³ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 22/XI/1830.

⁷⁶⁴ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 23/XI/1830.

política que derivó en la promulgación del plan de Jalapa y porque esa crisis política impactó fuertemente en los poderes del estado de Michoacán. A la par del debate se muestra un Rivas propositivo y defensor de este posicionamiento, del debilitamiento del ejecutivo federal partiendo de la idea de los frenos y los contrapesos.

La propuesta de creación de un Consejo de gobierno impactaba en el poder legislativo, por ello, el 24 de noviembre se puso a discusión el tema de la diputación permanente al interior de Congreso general que sustituiría al Consejo de gobierno, el que debía integrarse por los senadores más antiguos de cada estado. El diputado Domínguez no creía conveniente que ésta se integrara por senadores, sino por diputados debido a lo indirecto de su elección y porque el órgano estaba diseñado para ejercer funciones de la cámara de representantes, aun con la observación, la mayoría de los miembros de la legislatura aprobaron la moción. La diputación elegiría un presidente de entre sus miembros y tendría las mismas atribuciones que el Consejo de gobierno estipulado en la 5ª sección. El mismo día la legislatura acordó suprimir el art. 75 sobre la figura del Vicepresidente.⁷⁶⁵

Es decir, al desecharse el planteamiento de los dos cónsules y adoptarse el Consejo de gobierno como contrapeso del ejecutivo, se hacía necesario modificar la sección 5ª del Consejo de gobierno al interior del legislativo, este fue sustituido en nombre por Diputación permanente, pues en cuanto a composición y atribuciones se respetó lo establecido por la Constitución de 1824 en los artículos 113, 114, 115 y 116. Es notable como la propuesta de reforma del ejecutivo en cuanto al Consejo de gobierno y el legislativo, en lo tocante a la diputación permanente, tenían un gran referente en la estructura implantada por la Constitución de Michoacán. También se observa que la modificación en el legislativo solo fue por necesidad y muy mínima, pues no se quiso tocar el tema de que la diputación quedara integrada por diputados y no por senadores, aun cuando lo planteó el eclesiástico Domínguez y es que en efecto era lo más coherente; sin embargo, tanto la comisión especial como la asamblea en su mayoría decidieron no hacer modificaciones al respecto, pues queda claro que

⁷⁶⁵ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 24/XI/1830.

modificar el poder legislativo federal no era una iniciativa que se hubiese planteado la legislatura local.

El 25 de noviembre siguió el debate sobre las atribuciones de la diputación permanente, las que no variaban mucho de lo marcado por la Constitución para el Consejo de Gobierno. Continuaron las modificaciones por la anulación de la figura del vicepresidente en los artículos 95, 101, 103, del 104 la sección 3ª y del art. 112 sección 4ª, también se modificó el art. 96 atribución 2ª relativa a los tiempos de la elección y en caso de no cumplirse los parámetros establecidos, el Congreso elegiría un presidente interino de entre los miembros del Consejo. En caso de impedimento del titular del ejecutivo se aplicaría lo antes dicho, si la vacante acaeciera no estando el Congreso reunido el ejecutivo se depositaría en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, también sufrieron ligeras modificaciones los artículos 99, 100, 102.⁷⁶⁶

6.2.2.2. La Constitución de Michoacán de 1825

Cómo ya se ha dicho, el planteamiento más interesante de la propuesta de reforma a la Constitución Federal por parte de la legislatura michoacana lo constituye la desaparición de la figura del vicepresidente, en un principio por cónsules y después por el Consejo de gobierno, porque por un lado permitía maniatar al Presidente de la república y por otro eliminaba el peligro de manipular el escenario político para que el vicepresidente obtuviera la titularidad.

A grandes rasgos, este era el planteamiento de la legislatura para la reforma de la Constitución federal, cerrado ese proceso, correspondía a la asamblea michoacana debatir las posibles modificaciones a la Constitución estatal. Se infiere que los trabajos al respecto iniciaron a finales de 1830 porque el 4 de enero de 1831 se dividió en partes la Constitución del Estado para proponer las reformas, a cargo de los artículos preliminares y del poder judicial quedó el eclesiástico Rivas, a Juan Puente le tocó el poder legislativo y Hacienda del Estado, en Navarro recayó el poder ejecutivo y a Manuel Ceballos el gobierno político y económico, mientras que Domínguez corrió con las disposiciones generales.⁷⁶⁷

⁷⁶⁶ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 25/XI/1830.

⁷⁶⁷ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 04/I/1831.

El 13 de abril de 1831 el diputado Juan Gómez Puente propuso que las reformas a la Constitución se discutieran para determinar si éstas se admitían a debate y la propuesta pasó a la Comisión de Puntos constitucionales. El 2 de mayo comenzó la deliberación al respecto, el diputado proponente junto con Navarro y Olmos eran de la idea de que los proyectos de reforma a la Constitución se debían discutir en lo general para determinar si la propuesta era buena o no, sin descender al examen particular de no serlo. Barrera era de la opinión contraria, de discutir uno a uno los artículos que se pretendían reformar, Cavadas simpatizaba con la idea de este último pues al hacerlo en general se corría el riesgo de desechar propuestas interesantes consignadas en los artículos, para el eclesiástico el tiempo no era problema pues para ello se había aprobado su discusión con tres lecturas en intervalos de 5 días y en la última se determinaría si se abría o no debate, Navarro defendió su propuesta y lo respaldó Auriolles; Villaseñor era del mismo parecer que Barrera y Cavadas, el presidente Rivas estaba en postura neutral, al manifestar que las reformas se podían discutir en general para descender a los artículos posteriormente. La discusión pasó a otro nivel porque Juan Gómez Puente decía que se podía hacer la discusión de cada artículo hablando uno en pro y otro en contra. Finalmente, los diputados no llegaron a un acuerdo y la propuesta volvió a la comisión para ser reformada.⁷⁶⁸

El 5 de mayo se retomó el debate sobre el límite de intervenciones, Auriolles, Barrera y Rafael Puente se opusieron a que hablara un diputado en pro y otro en contra, pues consideraban que un cuerpo deliberante debía tener todos los posicionamientos claros para analizar y dar resoluciones. Villaseñor, Navarro y Juan Puente concebían que para deliberar no era necesario discutir difusamente, bastaba con ver las razones en que se apoyaba y también se podía aprobar una propuesta sin ningún debate.⁷⁶⁹

Hasta ahí la discusión para proceder a la propuesta de reforma, en la práctica se observa que las proposiciones se votaron en lo general y de inmediato a su aprobación se descendió a la deliberación artículo por artículo. Bajo las reglas ya determinadas, comenzó el debate referente a las modificaciones del título 1º relativo al poder legislativo.

⁷⁶⁸ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 13/IV/1831 y 2/V/1831.

⁷⁶⁹ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 5/V/1831.

El 9 de junio de 1831 comenzaron las deliberaciones de las modificaciones al poder legislativo elaboradas por Juan Gómez Puente, Rafael Gómez Puente, Rivas, Manzo y Román con apego al art. 219 de la Constitución. De acuerdo con los comisionados, el artículo 19 no tenía modificación pues indicaba en quien recaía el legislativo lo que fue avalado por el resto de la legislatura, de inmediato se pasó al art. 20 que marcaba la base de la elección, la cual tenía una variación, pues en lugar de elegirse un diputado por cada 25 000 almas la moción era que se hiciera por 30 000 y por cada 15 000 que excediera y el máximo de diputados a elegir era de 15 propietarios. El primero en oponerse fue Villaseñor, quien consideraba que en un cuerpo deliberante convenía el mayor número de individuos dentro de él para evitar intrigas. Rivas defendió el dictamen, argumentando que la población aumentaba y la ilustración progresaba considerablemente y que esos eran los principios a tomar en consideración para proponer la reforma del artículo, para el eclesiástico era fehaciente que bastaba con 15 diputados para atender los asuntos del legislativo, el artículo fue admitido a discusión.⁷⁷⁰

Lo primero a resaltar es que la Constitución de 1825 en el artículo 20 dejó a las legislaturas la atribución de designar el número de diputados a elegir poniendo un máximo de 21 y que en la práctica ésta osciló, como se ha visto en el capítulo II, entre 15 y 17 propietarios.

La discusión de la reforma del artículo permite ver que una parte de la legislatura no estaba dispuesta a abrir los espacios de representación, reduciendo el límite establecido por el constituyente que era de 21. Como bien lo advertía Villaseñor la población del estado había aumentado, eso apuntaba a tener un Congreso con más diputados; el argumento de Rivas referente al progreso de la instrucción deja la duda de si dentro de las preocupaciones del eclesiástico estaba que el abrir los escaños del legislativo permitiría el acceso a gente no tan notable y calificada y por otro, el incremento de legisladores volvería a las legislatura caóticas y con más espacio para la formación de más grupos en su interior. Más allá de las especulaciones, el hecho era que la comisión quería cerrar espacios en el legislativo y mantener como máximo el mínimo de lo consignado por los constituyentes, es decir 15 diputados.⁷⁷¹

⁷⁷⁰ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 9/VI/1831.

⁷⁷¹ *Ídem*.

El artículo 26 también fue propuesto para reformarse, con la especificación de que la reunión del legislativo en sesiones ordinarias sería dos veces por año, con la adición de que las primeras sesiones abrirían el 1º de enero y terminarían el 31 de marzo con un periodo de prórroga de un mes; las segundas comprenderían del 1º de julio al 31 de agosto con un aplazamiento de 20 días. Este artículo proponía el cambio de inicio de sesiones del legislativo el cual iniciaba en el mes de agosto, la fecha fue marcada por la redacción de la Constitución, el constituyente terminó en julio de 1825, lo lógico era que lo consignado en el documento tuviera funcionamiento a la brevedad.⁷⁷²

Siguió la propuesta de reforma de otros artículos relativos a los días de sesiones y apertura de las mismas, respecto a las sesiones extraordinarias además de tratarse el asunto que originaba la reunión, el Congreso también podía ocuparse de la elección de gobernador, resolver cuestiones de credenciales de los diputados, acusaciones del gran jurado, nombramientos como el del tesorero del estado o Ministros del Supremo Tribunal. Otra propuesta importante al título del legislativo era la del art. 23 que determinaba la renovación de la legislatura por bienio, en 1830 los diputados propondrían la renovación por mitad cada dos años a realizarse cada 1º de enero, la propuesta se adicionó para que la junta electoral del estado de 1831 designara a los diputados que debían continuar en 1833, además de que se podía reelegir de los restantes. Lo que aumentaba la duración del cargo pasando de dos a cuatro años.⁷⁷³

El 10 de junio continuó la discusión de las propuestas de reforma en el artículo 36 sobre la inviolabilidad de las opiniones de los diputados en el tiempo de su desempeño, siempre que no fueran contrarias a la religión del estado o la forma de gobierno representativo popular y federal. Resulta interesante la moción de que los diputados perdieran la prerrogativa de no ser imputados por emitir expresiones contrarias a la religión católica, la pregunta es en qué pensaban los diputados, acaso era una propuesta de Rivas con la que pretendía proteger a la religión católica, de ser así no solo se protegía a la religión del ataque de los legisladores sino también a la Iglesia en su estructura y funcionamiento. Otra cuestión que llama la atención es que esta propuesta era prioritaria por encima de contradecir la forma de gobierno representativo popular

⁷⁷² *Ídem.*

⁷⁷³ *Ídem.*

y federal ya que uno de los mayores problemas que enfrentaba la legislatura era el desorden social y el cuestionamiento del sistema de gobierno. La reformulación del artículo invita a preguntar sobre las inquietudes que había en la clase ilustrada del estado respecto de la separación de los asuntos del poder civil y el eclesiástico, es decir, de la secularización.⁷⁷⁴

Otra de las novedades que planteaba esta legislatura era la propuesta de un artículo adicional referente a las elecciones de los diputados, que intentaba homologar los tiempos electorales para la elección de diputados federales y locales. Villaseñor se opuso a la iniciativa pues consideraba que las elecciones estaban sujetas a muchas variaciones tomando en cuenta las circunstancias que atravesaba el estado, por lo que el legislador pensaba que este punto debía tratarse a través de leyes secundarias como lo marcaban las experiencias electorales anteriores. Rivas argumentó que la Constitución federal prescribía la forma inmutable del sistema representativo popular federal, por lo que la base principal de la elección debía ser constitucional y de consiguiente no podía estar sujeto a variaciones, por lo que solo la base reglamentaria debía descansar en leyes secundarias.⁷⁷⁵

El 11 de junio continuó la discusión en la que se aprobó que las elecciones para diputados federales y locales se realizaran en un mismo proceso electoral con diferencia de elección de un día. También se debatió sobre las cualidades para poder sufragar en las elecciones primarias. En buena medida se retomó lo establecido por las convocatorias electorales que las legislaturas anteriores habían realizado, pero con importantes complementos que demuestran la reducción de la base electoral. Por ejemplo, para ser designado elector primario se requería tener una propiedad raíz de valor de 150 pesos para arriba o una renta que le produjera por lo menos 250 pesos anuales. Lo que fue aprobado para la discusión. Para ser elector secundario además de poseer los atributos de ciudadano, era ser propietario de un inmueble con valor de 300 pesos o una renta, industria o profesión que produjera 500 pesos anuales al año, esta última parte fue retirada para hacer realizar modificaciones a partir de la diferenciación

⁷⁷⁴ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 10/VI/1831.

⁷⁷⁵ *Ídem*.

de fincas según la población. Asimismo, se proponía la supresión del artículo 200 de la Constitución tan socorrido en las convocatorias electorales.⁷⁷⁶

El 20 de junio inició la discusión del capítulo adicional al título del legislativo relativo a la celebración de los comicios. La propuesta incluía el fijar las fechas de elección, las votaciones primarias se efectuarían el penúltimo domingo del mes de agosto y fue desechada la parte que decía “en todas las poblaciones que albergaran 500 almas” porque la indicación pertenecía a lo reglamentario, al igual que la cantidad de electores a elegir a partir del número de almas en una población. Lo mismo ocurrió con el que la población fuera dividida en secciones pequeñas para que en cada una votasen 400 ciudadanos, también se habló de la composición de la mesa, lo que también fue desechado por ser reglamentario. Lo que sí se aprobó para discusión fueron las cualidades para ser escrutador o secretario de la mesa electoral, entre los requisitos figuraban tener una renta anual de 500 pesos en la capital del estado y de 300 en las poblaciones en que el número de habitantes pasara de 3 000 y 200 pesos en las restantes, además de saber leer y escribir; la última parte se reformuló por la comisión para que el artículo aplicara hasta el año de 1840, lo que fue finalmente retirado por la comisión. La moción también contempló el uso de boletas para sufragar lo que fue bien visto por la legislatura.⁷⁷⁷

La comisión propuso que las elecciones secundarias fuesen celebradas el primer domingo de septiembre en la cabeza de partido, lo que fue aprobado para su discusión, después de este artículo la comisión debió retirar los artículos del 50 al 59 y 62 relativos a elementos reglamentarios de esta fase de la elección. Continuando con la tercera fase, la propuesta residía en que el primer domingo de octubre se llevarían a cabo las elecciones para nombrar diputados propietarios, el requisito de la edad se incrementó a 30 años y el ser propietario de 4 000 pesos en bienes raíces o en una renta o industria cuya producción fuera de 600 pesos al año.⁷⁷⁸

Dos puntos a considerar es que la propuesta de reforma del legislativo pretendía integrar las bases electorales que no fueran de carácter reglamentario en la Constitución, la pregunta es, ¿qué tanto habían pensado los legisladores

⁷⁷⁶ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 11/VI/1831.

⁷⁷⁷ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 20/VI/1831.

⁷⁷⁸ *Ídem*.

en la Constitución de Cádiz y en su contexto? En esos momentos el estado era presa del desorden y la inestabilidad política, éste mismo Congreso fue resultado de ese escenario, para su elección fue necesario recurrir a la aplicación prácticamente íntegra de la convocatoria anterior. Por otra parte, es de insistir que la propuesta pretendía cerrar la base electoral al poner como requisito el ser propietario o tener un ingreso relativamente alto para el grueso de la población, lo que solo reafirma la desconfianza que se tenía en los procesos electorales por considerarlos manipulables. Es indudable que el planteamiento del voto censitario sedujo tanto a esta legislatura como a la cuarta. Pues al sujetar el sufragio al censo del pago de impuestos o la propiedad reduciría considerablemente la base electoral desde el primer nivel de la elección, aunque las propuestas no prosperaran, serán un antecedente de los mecanismos electorales que se pondrán en práctica durante la República centralista.⁷⁷⁹

Respecto del poder judicial, el 2 de julio de 1831 se tuvo la primera lectura de sus reformas, el 13 del mismo mes se cumplimentaba el requisito de la tercera lectura al plan de reformas del título para determinar si se pasaba la discusión de artículo por artículo. La comisión encargada de plan de reforma estaba integrada por Manzo, Ceballos, Maciel, Menéndez, Navarro, Rafael Gómez Puente y Rivas. El título tuvo varias reformas que partían de la modificación del artículo 120 constitucional, en el que se establecían las instancias para la impartición de justicia; los constituyentes habían designado a los juzgados de partido y al Supremo y Superior Tribunal de Justicia. La propuesta tenía cambios importantes: “habrá alcaldes, jueces de primera instancia y un Tribunal Supremo de Justicia.” A este último le correspondía hacer el nombramiento de jueces de primera instancia. Lo que fue admitido para discusión, convirtiéndose en la base de otras reformas al interior del título. Con las deliberaciones de ese día se cerró el plan de propuestas a la reforma constitucional.⁷⁸⁰

Lo más importante que se propone en este título es la creación de la figura de los jueces de primera instancia, lo que era indicativo de que se pretendía que la impartición de justicia quedara desde un inicio en personas versadas en derecho y lo segundo que desaparecía el Superior Tribunal de Justicia.

⁷⁷⁹ IRUROZQUI, Marta, *La ciudadanía*, p. 71.

⁷⁸⁰ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Expediente 1, 2/VII/1831 y 13/VII/1831.

Estas no fueron las únicas propuestas de reforma a la Constitución, también se tocaron algunos artículos vinculados a los ayuntamientos, no obstante, es notable que la mayor parte de las mociones recayeran sobre el poder legislativo. Las mociones estaban hechas, era preciso esperar a que la siguiente legislatura aprobara lo propuesto.

Queda claro que hubo más debate en las propuestas de reforma a la Constitución federal que a la local, el factor central fue el tiempo, por tanto, la participación más visible de los eclesiásticos será en la primera propuesta; no obstante, uno de los diputados con mayor presencia en ambos debates fue Rivas sin lugar a dudas.

6.2.3. Educación

Otro debate importante que desarrolló la asamblea estaba encaminado a respaldar legislativamente la instrucción en las escuelas de primeras letras a través del decreto para el establecimiento de las escuelas normales expedido el 30 junio de 1831. El dictamen había sido enviado al gobierno para que realizara las respectivas observaciones, una vez de regreso a la comisión de instrucción, durante la segunda lectura del mismo, el diputado José María Navarro solicitó se omitiera el intervalo para su debate, citando al orador para la próxima sesión.⁷⁸¹

Al día siguiente, Juan González Ureña, consejero de gobierno, se presentó en calidad de orador para la discusión, la cual comenzó con la advertencia de los diputados Ignacio Barrera y Juan Gómez Puente de “que según la letra de un artículo constitucional el Congreso tomará en consideración las observaciones que el gobierno haga a las leyes que expidiere...” para ello se votaría una por una separadamente. Por su parte el legislador Lorenzo Auriolés externó que en la parte expositiva del dictamen se daría la solución a cada una de las observaciones que había realizado el gobierno y también a las que no las presentaban, pero que la comisión pondría uno por uno los artículos que debían, en su concepto, quedar del mismo modo. Por lo que la comisión se retiró para hacer los respectivos ajustes, que se presentaron en esa misma sesión. La comisión estableció “se insiste en los artículos 4º, 5º, 9º, 19º, 25º atribución 5ª y

⁷⁸¹ AHCEMO, Legislatura III actas públicas, caja 4, Exp. 3, 18/V/1831.

6ª, 29º, 34º, 37º, 43º, 45º y 56º. Se atiende a las observaciones que el gobierno hace a los artículos 8º, 52º y 59º proponiendo las adiciones siguientes”.⁷⁸²

El contenido del documento establecía la creación de dos escuelas normales en la capital, con el objeto de formar directores de ambos sexos en el sistema lancasteriano. Bajo este esquema, los ayuntamientos fueron designados como responsables para seleccionar al hombre o mujer que debía instruirse en dichas normales. Los requisitos consistían en tener como mínimo 20 años cumplidos, una buena conducta, saber leer y escribir.⁷⁸³ Al respecto, la comisión consideró la observación del presidente del Congreso de agregar las palabras “buena conducta” para evitar los males que el Gobierno insinuaba en sus observaciones, con una aprobación de doce votos contra uno. En el artículo 9º se sustituían las palabras subdirector o subdirectora por la de ayudante, el cual quedó aprobado por trece legisladores.⁷⁸⁴

Los aspirantes contarían con un auxilio de 15 pesos mensuales durante su proceso de formación, los que procederían del fondo de instrucción pública. Si los ayuntamientos tenían personas versadas en el método lancasteriano, estos debían ser examinados para obtener el título de aprobación.⁷⁸⁵

El decreto dividía las instrucciones en dos: para las escuelas de la capital y las de resto de la entidad. En la capital, se instalaría una escuela para niñas y otra para niños. El sueldo anual del director sería de 1 700 y de la directora de 800 pesos respectivamente, los cuales serán reducidos por decreto el 28 de noviembre de 1839, a su vez los directivos tendrían un ayudante, el de hombres gozaría de un sueldo de 400 pesos anuales y la auxiliar de mujeres 200. En este sentido el gobierno quedaba autorizado por el Congreso para gastar de la Tesorería general lo necesario para el establecimiento de las dos escuelas, así como su reposición y para el arrendamiento de los edificios destinados para dicho fin.⁷⁸⁶

En estas escuelas como en las otras establecidas en el resto de la entidad se enseñaría a leer, escribir con corrección, principios de aritmética arreglados

⁷⁸² AHCEMO, Legislatura III actas públicas, caja 4, Exp. 3, 19/V/1831.

⁷⁸³ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes*, Tomo IV, pp. 107-108.

⁷⁸⁴ AHCEMO, Legislatura III actas públicas, caja 4, Exp. 3, 19/V/1831.

⁷⁸⁵ Amador COROMINA, *Recopilación de Leyes*, Tomo IV, pp. 107-108. Un texto de referencia: Dorothy TANCK DE ESTRADA, *La educación ilustrada 1786-1836*, 2ª Edición, México, El Colegio de México, 1984.

⁷⁸⁶ *Ibíd.*, p. 108.

al sistema de Bell y Lancaster, los catecismos religioso y civil, además de las máximas de la buena educación. En las dos escuelas de la capital se enseñaría también a dibujar por un maestro que podría ser el mismo director, siempre que poseyera el arte o quisiera transmitirlo por un sueldo de 400 pesos. La instrucción de este ramo se daría únicamente a los de uno y otro sexo de dentro o fuera de las escuelas que la solicitaran. Los niños pobres serían instruidos gratuitamente y los de hijos de personas acomodadas pagarían tanto por la instrucción común, como por la enseñanza del dibujo, en forma de una pensión moderada.⁷⁸⁷

Fuera de la capital debían instalarse al menos 22 escuelas de niños y 8 de niñas, estas últimas en las poblaciones del estado que el gobierno considerara pertinente de acuerdo con la junta inspectora. Las dotaciones de los directores serían menores a las percibidas por los de la capital de la entidad, para los directores serían de 400 a 800 pesos y para las mujeres de 300 a 600 pesos anuales, ello dependiendo de las circunstancias. Los gastos de instalación correrían por cuenta de los ayuntamientos, de no alcanzar se harían del fondo destinado a la instrucción pública. Los niños pobres serían enseñados gratuitamente y los hijos de las personas acomodadas pagarían la pensión señalada por el reglamento.⁷⁸⁸

Para llevar a cabo dicho proceso se crearía una Junta Inspectora de instrucción pública de la capital que se integraría por siete individuos residentes en la misma ciudad, quienes debían distinguirse “por su celo en favor de la educación.” El responsable de los nombramientos sería el gobierno, a los cuales se añadirían cuatro suplentes. La junta se renovarían parcialmente cada año y tendría el tratamiento de Ilustre, y sus miembros el de Señoría en toda comunicación de oficio. Sus atribuciones consistían en designar los pueblos donde debían establecerse las escuelas, cuidar de su conservación y progreso, presenciar los exámenes públicos de los alumnos de las dos escuelas de la capital y de los aspirantes a recibirse de directores o directoras para expedir el título de aprobación. Dicha junta podía promover la remoción de directores ante el gobierno, previo expediente comprobando ineptitud o mala conducta en el

⁷⁸⁷ *Ibíd.*, pp. 108-109.

⁷⁸⁸ *Ibíd.*, p. 109.

desempeño de su deber. La junta debía formar un reglamento para su gobierno interior y para las escuelas sujetas a inspección.⁷⁸⁹

A lo anterior, el orador manifestó que, en concepto del gobierno, la Junta inspectora era un cuerpo desconocido en la Constitución, y como un cuarto poder independiente de los que aquella establecía, con facultades que de cierta forma deprimían la autoridad del ejecutivo, a quien sólo se le daba facultad para nombrar a los individuos que la compondrían y quitándole al gobernador la inmediata influencia que el gobierno debía tener en la educación de la juventud.⁷⁹⁰

Los legisladores Mariano Rivas, Navarro y el presidente Rafael G. Puente, consideraron que el artículo no deprimía la autoridad del gobierno con el establecimiento de una Junta, la cual ni remotamente era un cuarto poder, sino un brazo del gobierno para promover la instrucción pública, como una nueva magistratura que solo tenía independencia en la parte científica, quedando subordinada en todo al gobierno, que tenía una injerencia en nombrar a los individuos que la integrarían, hacer la instalación, renovar anualmente a los que debían salir, designar los pueblos donde se establecerían las escuelas, las dotaciones de los directores, observar provisionalmente el reglamento que la misma junta formaría y muchas otras atribuciones que se podían ver en diferentes artículos. La discusión fue suspendida por ser la una y media de la tarde. Rivas pidió sesión extraordinaria de 6 a 7 para continuar con el asunto.⁷⁹¹

De regreso, Pedro Villaseñor era de la opinión que la Junta debía ser presidida por la primera autoridad del estado y las subalternas por la primera local, ya que no consideraba conveniente quitar a los prefectos, ni ayuntamientos la sobrevigilancia que tenían en el rubro de la instrucción. A su vez, el orador manifestó que el gobierno quería asistir a las sesiones de la Junta cuando le pareciera conveniente para informar asertivamente al Congreso el grado de progreso o decadencia dentro de las escuelas y así los informes nos serían solo de oídas, así mismo pedía que los prefectos y subprefectos asistieran a las Juntas de fuera para tener un mayor cuidado y vigilancia de dicho rubro.⁷⁹²

⁷⁸⁹ *Ibíd.*, pp. 110-111.

⁷⁹⁰ AHCEMO, Legislatura III actas públicas, caja 4, Exp. 3, 19/V/1831

⁷⁹¹ *Ídem.*

⁷⁹² *Ídem.*

Los diputados Rivas y Rafael Puente sostenían que la Junta debía obrar independientemente de las autoridades políticas en todo aquello vinculado a la educación de los niños, consideraban que no era necesario atar las manos a la Junta, que el gobierno, en su calidad de Jefe Supremo de la entidad, podía pedir todas las instrucciones necesarias y la Junta se las daría, además de pasar los estados mensuales y anuales de todo lo realizado. Ambos consideraban que el legislador tenía la facultad de enmendar las leyes que caían en desuso, “así muy bien puede ahora disponerse que la Junta opere con total independencia” pues el legislativo se había percatado que los ayuntamientos no tenían forma de proteger la ilustración. Después de la discusión se votó y quedó aprobada con diez votos contra tres.⁷⁹³

El 20 de mayo se continuó la discusión del artículo 29 que argumentaba el establecimiento de Juntas inspectoras de instrucción pública sujetas a la de la capital, compuestas del cura del lugar y de dos vecinos. El orador manifestó las dificultades que en concepto del gobierno tendría el que los párrocos pudieran asistir a las Juntas por la cantidad de obligaciones de acuerdo a su ministerio de cura de almas y que si no querían voluntariamente ir se corría el riesgo de que el gobierno no pudiera obligarlos. A lo anterior, los diputados Rivas y Auriolles consideraban que los párrocos tenían un interés particular en que se enseñara la doctrina y por lo mismo recibirían con gusto el encargo, además de estar obligados por las leyes a cuidar muy particular de las escuelas; de negarse los curas, el provisor, incitado por el gobierno, podía hacer que cumplieran. Además, argumentaron que era necesario darles una inmediata participación a los curas por el prestigio de que gozaban en los pueblos y por ser generalmente los más ilustrados de los mismos. Juan G. Puente sugirió un punto medio estableciendo que los eclesiásticos eran socios natos de las Juntas y podían concurrir a ellas siempre que lo desearan, José María Cavadas fue de la misma opinión, mientras que Domingo Maciel propuso que de los individuos que se nombrasen para las Juntas uno fuera eclesiástico para garantizar la presencia de personas letradas aun en poblaciones que no fueran cabeceras de partido, lo que sirvió para reformular el artículo.⁷⁹⁴

⁷⁹³ *Ídem.*

⁷⁹⁴ AHCEMO, Legislatura III actas públicas, caja 4, Exp. 3, 20/V/1831.

Finalmente se concluyó que en las poblaciones de la entidad se crearían Juntas inspectoras subalternas, sujetas a la de la capital, compuestas por el cura del lugar y de dos vecinos que nombraría el gobierno renovándose por mitad anualmente, de no haber cura en el lugar de la institución se elegirían tres vecinos o vocales.⁷⁹⁵

Acorde al decreto, las escuelas subsistirían de los gravámenes a los licores nacionales, el estanco de nieve, el derecho de desagüe, el décimo de contribución directa, coliseo y pelea de gallo, trucos y billares, anualidad de los empleados o funcionarios, pensión de los niños y fundaciones existentes para escuelas. Los administradores de rentas serían los responsables de recaudar los recursos destinados para dicho fin, quienes los remitirían a la Tesorería general del estado, el encargado debía entregar mensualmente el dinero a la Junta inspectora. Así mismo, los responsables directos del cumplimiento del decreto serían los prefectos y subprefectos. La Junta inspectora de la capital estaba obligada a dar al gobierno los informes que le fueran solicitados, de no estar dicha ley en todas sus partes, el gobierno sería el responsable de informar los motivos que lo impidieron.⁷⁹⁶

Durante la discusión del financiamiento, el orador argumentó que al gravar los licores nacionales con un 10% sobre lo que se pagaba de alcabala, se atacaba dicho ramo de la industria y de la Hacienda pública, abriéndose una puerta al contrabando, disminuyendo el consumo de las mieles, perjudicando los trapiches, opinión que fue compartida por el diputado Pedro Villaseñor. En contra de lo argumentado estuvieron Juan G. Puente, Rivas y Antonio Ceballos, considerando que el apartado protegía la Hacienda directa e indirectamente por que se extraerían los licores del estado. Que la disminución de la renta y aumento de contrabando consistía en la poca vigilancia que se tenía sobre la actividad, además, que por dicha disposición se conseguía disminuir la embriaguez, lo que reformaba las costumbres y se ilustraba a la juventud. Respecto al aporte de las carreras de caballos, el gobierno consideraba ínfima la cantidad, pues se celebraban pocas, de las cuales era fácil evadir las cargas.

⁷⁹⁵ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes*, Tomo IV, 1886, p. 111.

⁷⁹⁶ *Ibíd.*, pp. 111, 114-115.

El tema del financiamiento continuó y al parecer no se cambió lo dispuesto por los legisladores.⁷⁹⁷

El último punto que se pretende rescatar, respeto a esta ley, es el relacionado con que el tesorero general pasaría mensualmente a la junta una nota del monto de las cantidades pertenecientes al fondo de Instrucción pública y su importe lo pagaría por libramiento de la misma junta. Cavadas, Villaseñor y el orador argumentaron que la última parte del artículo era contraria a la Constitución, pues era facultad exclusiva del Gobierno la atribución, pues la Junta podría librar contra la tesorería las cantidades que entrasen en ella sin que tuviera conocimiento de su inversión el gobierno, dejando a la Junta en la plena libertad de hacer lo que quisiera al no determinar a quién debería presentar cuentas. Mientras que Barrera, Manzo, Navarro y Auriolos consideraban que no se oponía a la Constitución, el argumento fue largo, pero finalmente se acordó eliminar la parte final del artículo. Lo que lleva a pensar que efectivamente había contraposición a lo establecido en la Constitución.⁷⁹⁸

6.2.4. Juramento de Cayetano Gómez de Portugal

Uno de los grandes problemas que los gobiernos mexicanos debieron asumir con la independencia fue el no reconocimiento de la misma por la Santa Sede. Las repercusiones se sintieron con el paso del tiempo, pues los obispos fueron falleciendo y con ello no sólo quedaban acéfalos los Obispos, sino que no pudieron realizarse ordenaciones. En el caso concreto del Obispado de Michoacán,⁷⁹⁹ el tema tenía su propia dinámica. A la muerte del obispo Marcos Moraina y Zafrilla en 1809 fue nombrado como su sucesor Manuel Abad y Queipo, pero el inicio del movimiento insurgente complicó la ratificación del cargo por la Santa Sede. El posicionamiento del prelado frente a la guerra lo obligó a

⁷⁹⁷ AHCEMO, Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 3, 20/V/1831.

⁷⁹⁸ AHCEMO, Legislatura III actas públicas, caja 4, exp. 3, 19/V/1831

⁷⁹⁹ El Obispado de Michoacán se erigió el 18 de agosto de 1536, el cual dependía administrativamente de la Audiencia de México, que a su vez estaba sujeta al gobierno de la Nueva España. Los límites geográficos del obispado eran: al norte con la diócesis de Guadalajara, subordinada al gobierno de Nueva Galicia; al suroeste con el océano pacífico y al este con el Arzobispado de México. A lo largo del periodo colonial el territorio del mismo se fue reduciendo al tener que ceder parte de él al obispado de Guadalajara, Monterrey y Sonora. La primera capital del estado fue Tzintzuntzán, posteriormente fue trasladada a Pátzcuaro, finalmente fue situada en Valladolid. El gobierno del obispado estaba en manos del Obispo y del Cabildo catedralicio, en sede vacante al frente quedaba el segundo. Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Hacia una Iglesia beligerante*. pp. 144-152.

salir de Valladolid a finales de 1810. Por esta razón el historiador Moisés Guzmán establece que el Obispado estuvo en la sede vacante más larga de su historia y la cual comprendió de 1809 hasta 1831 en que fue electo Cayetano Gómez de Portugal.⁸⁰⁰

El evento fue de importancia para el Obispado, pero también para los poderes del estado por ser Morelia el lugar de residencia de ambos gobiernos. El 1º de agosto de 1831 el Congreso abrió sus sextas sesiones extraordinarias para discutir si el Obispo Gómez de Portugal tenía que presentar juramento en el Estado y los términos, el expediente fue a parar en manos de la comisión de justicia y negocios eclesiásticos, compuesta en ese momento por Cavadas, Maciel y Menéndez.⁸⁰¹

Al día siguiente la comisión presentó el dictamen para su primera lectura, Auriolles solicitó la dispensa de todos los trámites lo que fue aceptado y se puso de inmediato a discusión. El dictamen era el siguiente: “Por haber prestado el R. Obispo el juramento prevenido en el artículo 163 de la Constitución General no hay necesidad de que lo preste en el Estado”. Navarro intervino para combatir la propuesta argumentando “Que aunque el Obispo es un Príncipe en el orden espiritual, que no está sujeto a esta parte a las disposiciones del soberano; en el orden temporal es un súbdito de Estado...” Por esa razón el diputado consideraba justo que Gómez de Portugal presentara juramento a la Constitución porque el acto era adaptable a “la ley recopilada de Indias” aunado al hecho de que el prelado vivía de las contribuciones de los habitantes del estado, por lo que estaba obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes del lugar que habitaba. El diputado, de manera sutil, acusó a la comisión de “echar por tierra el sistema federal” al manifestar que era suficiente el juramento prestado a la Constitución federal, pues con la propuesta se le quitaba al estado un derecho

⁸⁰⁰ Cayetano Gómez de Portugal nació el 7 de julio de 1783 en San Pedro Piedra Gorda, Guanajuato, realizó estudios filosóficos en el Seminario de Guadalajara y teológicos en la Universidad de esa misma ciudad, graduándose como doctor en teología, fue párroco de Zapopan, miembro de la Diputación Provincial de Jalisco, en 1823 fue electo diputado para el Congreso Constituyente General por la Provincia de Guanajuato, cuyo objetivo principal era crear una Constitución, la cual firmó en 1824, también fungió como diputado de Guanajuato dentro del sistema de gobierno federal, así mismo, se desempeñó como senador por el estado de Jalisco. Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Relaciones clero-gobierno*, pp. 38-40

⁸⁰¹ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1, 1/VIII/1831.

que le correspondía en calidad de federado. Eso solo fue la discusión para descender al debate en particular del asunto.⁸⁰²

Para Villaseñor al igual que para Navarro la propuesta de la comisión despojaba al estado de su soberanía. Pero, además, el argumento del diputado estribaba en que el prelado debía prestar juramento como un ciudadano del Estado para dar cumplimiento a las disposiciones legislativas y del gobierno. El diputado Maciel añadió que ni los obispos ni los eclesiásticos eran funcionarios de la federación, sino del estado y para él, el gobierno federal tenía claro que el obispo se debía sujetar a lo dispuesto por la Constitución michoacana atendiendo al artículo 214, debido a que el juramento fue presentado ante el Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos a partir del artículo 163.

Cavadas y Rafael Puente sostuvieron el dictamen al manifestar que el artículo 214 de la Constitución local no comprendía al Obispo, solo a los miembros del Cabildo Catedral, aunado al hecho de que el estado no había influido en su nombramiento, si bien aceptaba la comisión que Cayetano Gómez de Portugal era ciudadano michoacano, el que jurara no era costumbre, además de ya haber jurado la Constitución federal y porque la estatal era una emanación de aquella, pues ni el ejercicio de la exclusiva era una prueba de que el prelado debía presentar el juramento.

En este punto de la discusión, Rivas también intervino contradiciendo lo expuesto por la comisión, en la que se encontraba Cavadas, el eclesiástico consideraba que el Obispo debía prestar juramento en el estado conforme a la ley recopilada de Indias pues no veía el acto indecoroso. Auriol también intervino en favor del dictamen de la comisión, argumentando que el prelado de Puebla no había prestado juramento en aquel estado. El dictamen se reprobó con una votación de 11 a 4.

Lo primero a señalar es que a pesar de que el sistema de gobierno que se ha implantado es una República federal, se sigue utilizando como fuente de legitimidad la antigua legislación española. El derecho que será aplicado en el naciente estado de Michoacán era resultado de un proceso de sustitución del antiguo derecho español por el derecho creado a partir de las necesidades

⁸⁰² AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1, 2/VIII/1831.

propias del territorio, el cual arrancó en 1824 y culminó en a finales del siglo XIX.⁸⁰³

Por los debates se infiere que en este tema Cavadas y Auriolles estaban a favor del dictamen, pero Rivas no. En este punto es de cuestionarse qué tanto, prima el consenso entre los eclesiásticos y más en un tema que representaba de manera muy sutil el ejercicio del Patronato. Rivas caracterizado por la historiografía michoacana como un hombre muy apegado a la alta jerarquía eclesiástica del Obispado y se podría inferir que defensor de sus prebendas, en este tema acepta de manera indirecta la supremacía del poder temporal por encima del espiritual al tiempo que respetaba la soberanía estatal. Con esto tampoco se puede decir que Cavadas o Auriolles estaban al servicio del gobierno espiritual, lo que sí queda claro es que cimentaron su argumento en la Constitución federal y eso era una buena premisa que los podía eximir de especulaciones.

En general, el debate deja ver la percepción que se tenía por una parte de la clase gobernante de la separación del poder divino y del temporal, asimismo, como el primero debía someterse al segundo; al mismo tiempo, el debate pone de manifiesto las complicaciones y perspectivas que se tenían del ejercicio de la doble soberanía que marcaba el sistema federal, en este último caso, no sólo eran conscientes del ejercicio del poder por parte de la federación y del estado, sino que lo hacían valer la práctica.

Al reprobarse el dictamen se comenzaron a discutir los lineamientos que debía tener el juramento que los obispos presentarían al gobierno del estado cuando se posesionaran de la silla episcopal, ya fuera en persona o por medio de un apoderado. El debate tuvo intervenciones de Rivas, Rafael Puente, Villaseñor y Barrera referentes a la redacción. Es de puntualizar que la llegada de Cayetano Gómez de Portugal al gobierno de Obispado de Michoacán traería consigo nuevas dinámicas de interacción con el poder civil michoacano y por otro lado reforzaba a la institución en Michoacán.

⁸⁰³ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y Desorden*, pp. 165-166.

CAPÍTULO VII

LA CUARTA LEGISLATURA DE MICHOACÁN, 1831-1833

7.1. Mariano Rivas, Pablo José Peguero, Lorenzo Aurióles y Manuel de Leyva en el cuarto Congreso

Los desencuentros de la élite política a nivel nacional seguirían cobrando factura, parte de la disputa sería mantener el federalismo o variar el sistema de gobierno, para ello una pieza clave sería el titular del ejecutivo federal. En 1832 entre los candidatos destacaban Lucas Alamán y Nicolás Bravo, también se pensó en Manuel Mier y Terán porque estaba de acuerdo con la supresión de los fueros, la reforma del ejército y la desamortización de los bienes del clero. En este escenario Santa Ana también anhelaba el cargo, por lo que aprovechó el malestar que había en contra del gabinete de Bustamante para promover el Plan de Veracruz que exigía la remoción de los ministros al ser señalados responsables del asesinato de Guerrero, de violar la libertad de imprenta y favorecer a la Iglesia y a la aristocracia. El plan se propagó lentamente, pero agregando adeptos importantes como Esteban Moctezuma, quien respaldó el movimiento con las milicias de San Luis Potosí, mientras que Santa Ana logró el apoyo de Zacatecas con la condición de que Manuel Gómez Pedraza fuera reconocido como presidente y se hiciera cargo del ejecutivo federal por el resto del periodo para el cual había sido electo.⁸⁰⁴

Al llegar el mes de diciembre de 1832 se habían producido varios encuentros bélicos entre los rebeldes y las tropas de Bustamante, en la batalla del 6 de diciembre no hubo un claro vencedor, pero sí costos elevados. El cerco al gobierno de Anastasio Bustamante, llevó al presidente a negociar la paz a través de los convenios de Zavaleta, que incluían nuevas elecciones para las legislaturas estatales que debían establecerse el 15 de febrero de 1833. Estas legislaturas debían elegir a los senadores, presidente y vicepresidente, reconociendo como titular del ejecutivo a Gómez Pedraza hasta el 1º de abril. Por último, se otorgaba amnistía a todos los implicados en los acontecimientos

⁸⁰⁴ Josefina Zoraida VÁZQUEZ, "Introducción. Contexto nacional", pp. 28-29.

suscitados a partir del 1º de septiembre, de este modo el convenio fue firmado el 23 de diciembre.⁸⁰⁵

La cuarta legislatura michoacana abrió sesiones el 6 de agosto de 1831, para entonces no había pasado un mes de la aprensión y fusilamiento del rebelde federalista Juan José Codallos, con ello volvía, hasta cierto punto, la tranquilidad a la asamblea y al gobierno del estado. Una vez pacificada la zona sur de Michoacán se procedió a dismantelar el sistema de defensa que habían articulado las autoridades michoacanas con apoyo del presidente de la república Anastasio Bustamante. Bajo ese escenario, el ayuntamiento de Morelia había solicitado a la legislatura que tratara el tema del alojamiento de las tropas. A su vez, el gobierno federal consideró pertinente mantener la presencia armada en Huetamo, ubicada al sur del estado, pues se temían levantamientos en favor del federalismo por parte de Juan Álvarez al sur del Estado de México. También se dictó una ley de amnistía, mientras que el Congreso local debió emitir algunos postulados relacionados con el juicio castrense y de las milicias cívicas.⁸⁰⁶

La endeble sublevación del 2 de enero de 1832 en el puerto de Veracruz que solicitaba la remoción del gabinete de Anastasio Bustamante, se fortaleció con el paso del tiempo, lo que puso en alerta a las autoridades estatales. En el mes de mayo, el Congreso michoacano facultaba al ejecutivo local para que pusiera sobre las armas a la milicia cívica y compañías de seguridad, en ese mismo mes el diputado Auriolos planteaba construir en la capital del estado un cuartel para uso exclusivo del ejército permanente. En julio, el Congreso autorizó al gobierno a armar dos compañías de reserva integradas por vecinos de Morelia.⁸⁰⁷

La revuelta generada por el plan de Lerma a finales de abril de 1832 tenía como objetivo poner a Manuel Gómez Pedraza al frente del ejecutivo federal y la reinstalación de las autoridades removidas por el plan de Jalapa, el movimiento era impulsado por Genaro Inclán.⁸⁰⁸ Si bien, dentro del propio estado no habían surgido levantamientos en contra del gobierno de Bustamante y se había conservado una relativa calma por alrededor de un año. En el mes de agosto de

⁸⁰⁵ Michael P. COSTELOE, *La primera república*, pp. 346-347.

⁸⁰⁶ Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, *Origen y desarrollo de las fuerzas*, pp. 127-129.

⁸⁰⁷ *Ibíd.*, pp. 130-132.

⁸⁰⁸ María del Carmen SALINAS SANDOVAL, *El primer federalismo*, p. 40.

1832, a consecuencia del Plan de Lerma, tropas rebeldes del estado de Jalisco ocuparon la ciudad de Zamora, ante tal hecho el diputado Camarillo exhortó a los poderes del estado para que reclamaran a Jalisco la violación de la soberanía estatal. Un mes después resurgió la inestabilidad en Michoacán en lugares como Tacámbaro, Sinagua, La Huacana y Huetamo. El escenario nacional vendrá a complicar el trabajo de la cuarta legislatura, pues una vez firmados los convenios de Zavaleta el 23 de diciembre de 1832, en los que se reconocía a Gómez Pedraza como titular del ejecutivo federal y la restitución de las autoridades de los estados que habían sido derrocadas por el plan de Jalapa, la Cuarta legislatura debió disolverse por no poder continuar con sus labores.⁸⁰⁹

Bajo este escenario estaría interactuando la cuarta legislatura que contó con la participación de los eclesiásticos Mariano Rivas, Pablo José Peguero, Lorenzo Auriolles y Manuel Leyva, solo que éste último no quiso desempeñar el cargo y el 8 de agosto, a dos días de la apertura de sesiones, presentó la renuncia junto con el abogado Ignacio Izazaga y Juan Ignacio Anciola.⁸¹⁰

Antes de continuar es necesario hacer una reflexión referente a Manuel de Leyva. Resulta curioso que un mismo día tres diputados dimitieran del cargo y solo le fuera aprobada la renuncia a Anciola, por ello se solicitó al diputado suplente, Manuel González Movellán, que se presentara a cubrir la vacante, pero éste se excusó argumentando tener impedimento constitucional, pues había sido electo sin cumplir el requisito de edad, es decir, no tenía 25 años al momento de ser electo. El 11 de agosto, la asamblea determinó que no estaba justificada la dimisión que hacía Leyva, mientras que la renuncia de Juan Ignacio Anciola era considerada justa y la elección de Gonzalez Movellán nula porque al tiempo de los comicios no tenía la edad establecida de 25 años. Entonces, el 17 de agosto la legislatura determinó llamar a Mariano Anzorena como primer diputado suplente para remplazar a Juan Ignacio Anciola.⁸¹¹

Pero el asunto de Leyva e Izazaga no quedaba ahí, el 9 de septiembre se discutió el dictamen a favor de la renuncia de ambos; respecto del primero, Domínguez, Juan Gómez Puente, Huarte, Peguero, Navarro y el presidente del

⁸⁰⁹ Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, *Origen y desarrollo de las fuerzas armadas*, pp. 132-133.

⁸¹⁰ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1, 8/VIII/1831.

⁸¹¹ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1, 9/VIII/1831, 11/VIII/1831, 17/VIII/1831.

Congreso estaban en contra porque desde su perspectiva no había un nuevo argumento para que hubiese variado la opinión de la asamblea, pues los males que exponía el eclesiástico no lo limitaban para desafanarse del trabajo y principalmente el intelectual, ni las testamentarias de las que se encontraba encargado tenían la preferencia “sobre la confianza que el Soberano le confiera por considerarlo muy útil al Estado en razón de sus luces y patriotismo, por otro lado era necesario ser circunspectos pues la junta electoral ejercía la soberanía electiva que recibía del pueblo, la que no podía ser desairada.” Respecto a su salud, Morelia ofrecía mejores recursos para su restablecimiento y las testamentarias que tenía a cargo las podía delegar al segundo albacea. De la misma forma, podía hacer uso de licencia en el periodo de receso para estar pendiente del asunto. Finalmente, estos diputados eran de la idea “que no debía erogársele del encargo de Diputado y sí recordarle la primera de las obligaciones como michoacano según el artículo 11 de la Constitución.” Los diputados Barrera, Alvirez y Auriolos estaban a favor del dictamen, después de terminada la discusión se votó y se aprobó.⁸¹²

Entre los argumentos que dio el eclesiástico estaban el encontrarse a cargo de su numerosa familia, incluida una hermana viuda con hijos que había sido esposa del español expulso José Grande. Agregó además que la inestabilidad social había afectado sus intereses, que también debía cumplir con las responsabilidades propias de su oficio, al tiempo que era responsable de varias testamentarias. Por último, el eclesiástico manifestó no tener estudios de política por lo que el cargo era muy ajeno a su formación, el que constituía una gran responsabilidad pues “de su buen desempeño depende la felicidad de los pueblos que lo distinguieron con su confianza”.⁸¹³

Posteriormente se pasó a la discusión de la renuncia de Izazaga y el resultado fue el mismo. Para esto, Rivas hizo una relación de los servicios prestados desde la insurgencia y como eso le había originado pérdidas en sus intereses aunado al desempeño de una comisión del gobierno general y tenía la testamentaria de su padre y hermano. Domínguez y el presidente no estaban de acuerdo con el dictamen, este último manifestó “su conclusión; que es necesario desengañarse de que los propietarios siempre se resisten a servir los empleos

⁸¹² AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1, 9/IX/1831.

⁸¹³ AHCEMO, Legislatura III, Varios, Caja 6, Exp. 11.

públicos por las incomodidades que traen consigo, pero el patriotismo los estimula a recibir con gusto semejantes cargos.” Huarte, además de destacar las luces y patriotismo de Izazaga, agregó que su estancia en el Congreso traería un ahorro de 180 pesos a la tesorería porque tenía una pensión de 3 mil pesos y en ese caso no se le abonarían dietas. Después de continuar la discusión se procedió a votar y se reprobó la decisión de la comisión 8 votos contra 6.⁸¹⁴ Hasta aquí, por las votaciones se infiere que se aceptaba la renuncia de Leyva y se le negaba a Izazaga, no queda claro en qué momento la legislatura cambia de opinión y termina negándoles la renuncia del cargo a ambos, pues el 10 de noviembre Domínguez solicitó al Congreso que Izazaga y Leyva se presentaran si excusa ni pretexto a servir su encargo en las primeras sesiones ordinarias bajo multa de 100 pesos.⁸¹⁵

Se señala el asunto en general porque llama la atención que tres diputados renuncien a pocos días de iniciadas las labores legislativas, la dimisión ocurría, pero generalmente eran uno o dos diputados como mucho. Ahora, que de los tres, a dos no se les permita renunciar al cargo y que además se les multe, eso infiere una renuencia de ambos para tomar el puesto y es que en todas las actas de la legislatura está la indicación de que “Leyva e Izazaga no se presentaron”, si a eso se le agrega la solicitud del diputado Domínguez, de manera tácita se ve que estos dos personajes estaban rehuyendo el encargo y que la legislatura lo sabía. Asimismo, los eclesiásticos se dividieron en la discusión de Leyva, Peguero no estaba de acuerdo con la renuncia, mientras que Auriolés sí y lo manifestaron abiertamente.

Por otro lado, la exposición tocó de forma indirecta la elección de un diputado en un ciudadano que no cumplía con todos los requisitos, es de cuestionarse cómo el hecho no fue tomado en consideración por la Junta electoral estatal. Estas elecciones se habían realizado con el uso de listas y boletas que marcaban los que podían votar y ser votados en las elecciones primarias y secundarias, lo que lleva a cuestionar el margen de error que tenían estos nuevos mecanismos que intentaban transparentar los comicios.

A final de cuentas Leyva nunca se presentará a tomar posesión del cargo y la legislatura nunca aceptará su renuncia, aun con el antecedente, el bachiller

⁸¹⁴ *Ídem.*

⁸¹⁵ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 2, 10/XI/1831

fue electo 4º diputado suplente para la sexta legislatura con más de 30 votos por parte de la junta electoral. En el cuarto Congreso los eclesiásticos dentro de la asamblea serán tres, quienes tenían antecedentes en el cargo, Rivas había sido reelecto de la tercera legislatura en su segundo año, al igual que Auriolles, quien además había sido diputado del Congreso del Estado de México y Peguero que se integraba al Congreso por tercera ocasión.

Como ya ha sido señalado, la relativa calma que vivió el estado por alrededor de un año le sirvió a la legislatura para realizar su trabajo en diversos ámbitos, no sólo en el tema de defensa, también trató temas de la Hacienda pública y el erario público, impartición de justicia, instrucción, cristalizó el proyecto de reforma Constitucional y emitió las leyes secundarias correspondientes para su correcta aplicación, aprobó el reglamento de las Juntas inspectoras de Instrucción, legisló respecto al tema del canónigo lectoral y el restablecimiento del Colegio de San Nicolás entre otros.

7.2. Los debates sobre la reforma a la Constitución de Michoacán de 1825

El proceso de reforma a la Constitución de Michoacán de 1825 no terminaba con lo que había hecho la tercera legislatura en su segundo año, pues a ésta solo le correspondía plantear las propuestas de reforma, ya que la discusión y votación de las mismas era responsabilidad del siguiente Congreso, es decir, de la cuarta legislatura; todo lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 222 de la Constitución estatal.

El debate de aprobación de las reformas a la Constitución de 1825 fue un tema amplio que, como ya se dilucidó en páginas anteriores, tocó el artículo 8º referente a la ciudadanía y el 18º relativo a la suspensión de la calidad de ciudadano incluidos en la parte preliminar del documento. Del título del legislativo se abordó la reunión, receso y renovación del Congreso, prerrogativas de los diputados y su elección. Del poder judicial se debatió la división, forma y atribuciones de los tribunales, también abordó lo relativo al gobierno político y económico de los ayuntamientos y algunos puntos sobre la contaduría general. Por la extensión del tema, solo se pretende remarcar la participación de los eclesiásticos en lo que concierne al poder legislativo y los artículos preliminares

8º y 18º, haciendo breves apuntes sobre el tema de los ayuntamientos y del poder judicial.

Las propuestas a las reformas de la Constitución del estado debieron pasar por un proceso reglamentario para ser presentadas, deliberadas y aprobadas. El 6 de septiembre de 1831, el diputado Rivas propuso que las modificaciones constitucionales sobre ayuntamientos pasaran a la comisión de gobernación y a la de justicia las del poder judicial. Domínguez y Rafael Gómez Puente se opusieron pues no consideraban necesario que una comisión se encargara de abrir el dictamen, primero porque las modificaciones a tratar eran muchas y porque el actual Congreso solo debía proceder a la discusión y votación de las mismas. Los diputados Peguero, Huarte, Alvirez y el presidente José M. de Anzorena consideraban que las modificaciones debían pasar a comisiones ordinarias del Congreso, pues dentro del debate no se podía omitir el requisito esencial de escuchar el dictamen de la comisión, además de que aprovecharon para señalar que la legislatura anterior no había realizado un examen prolijo, porque el grueso del trabajo había quedado en una comisión de cinco individuos. Por último, utilizaron el argumento de que todo asunto que se sometía a debate debía pasar a las comisiones del Congreso, la propuesta de Rivas fue aprobada y las modificaciones a la Constitución pasaron a comisiones ordinarias.⁸¹⁶

Librado el punto fue necesario establecer los parámetros de las deliberaciones. El 11 de octubre de 1831, el eclesiástico Peguero propuso que ningún proyecto de reforma constitucional se aprobara hasta que todos los artículos sufrieran los tres debates establecidos con intervalos de cinco días y que en las discusiones se hiciera uso de la palabra máximo nueve veces a favor y nueve en contra.⁸¹⁷ Al día siguiente se puso a discusión el asunto, Huarte no estaba de acuerdo, argumentando que la misma reforma había señalado los procedimientos de la deliberación, Peguero le contestó a su homólogo refiriendo que la Constitución facultaba al Congreso para hacer reformas al reglamento. Villaseñor y Auriolos tampoco estaban de acuerdo con la propuesta porque haría interminable la aprobación de las reformas constitucionales. Entonces, se descendió a la deliberación de los artículos particulares, con ligeras discusiones,

⁸¹⁶ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1, 6/IX/1831.

⁸¹⁷ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 2, 11/X/1831.

se acordó que se procedería a dos debates con intervalo de 5 días, el artículo 2º del dictamen proponía que en el primer debate se usara cinco veces de la palabra en pro y cinco veces en contra y en el segundo tres bajo las mismas características.⁸¹⁸

Prácticamente todos los dictámenes de las propuestas de reforma a la Constitución estatal sufrieron su primera lectura entre septiembre y octubre de 1831, se inició con el poder judicial y siguió por los artículos preliminares 8º y 18º, los ayuntamientos y los de Hacienda del estado. El último dictamen en presentarse fue el del poder legislativo, dado a conocer en dos partes la primera el 18 de noviembre y la segunda el 29 del mismo mes. Las discusiones de las reformas constitucionales iniciaron el 13 de octubre de 1831. A partir de este momento comenzó un intenso trabajo legislativo porque las mociones fueron discutidas simultáneamente a excepción de las que comprendían el título del legislativo cuya deliberación arrancó el 18 de agosto de 1832.⁸¹⁹

El proyecto de reformas a la Constitución referentes al poder judicial quedó en manos de la comisión de Justicia, el dictamen se presentó el 30 de septiembre de 1831 y su debate inició el 13 de octubre de 1831 y terminó a finales de agosto de 1832.

Cuadro No. 11
Modificación del Poder Judicial del Estado de Michoacán

Constitución de 1825	Propuesta de reforma de 1830
1ª Instancia Juzgados de partido y de municipio (alcaldes ordinarios -legos-). 2ª Instancia Superior Tribunal de Justicia. 3ª Instancia Supremo Tribunal de Justicia.	1ª Instancia Alcaldes -legos- y jueces de primera instancia -versados en derecho-. 2ª Instancia Tribunal Supremo de Justicia.

Cuadro de elaboración propia. Fuente: TENA RAMÍREZ, Felipe. *Michoacán y sus Constituciones*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1968, pp. 32, 48.

⁸¹⁸ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 2, 12/X/1831.

⁸¹⁹ AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 2, 29/IX/1831, 13/X/1831, 20/X/1831, 27/X/1831, 31/X/1831, 18/XI/1831, 19/XI/1831. AHCEMO, Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 2, 29/IX/1831. AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 18/VIII/1832.

Las modificaciones se enfocaron en la división, forma y atribuciones de las instancias. Al respecto, el documento de 1825 establecía la existencia de juzgados de partido y de municipio, y en la capital del estado Tribunales Superior y Supremo de justicia, la reforma de 1832 marcaba Alcaldes, jueces de primera instancia y un Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a los alcaldes y jueces de primera instancia dejaba en manos de una ley secundaria las características de su nombramiento, facultades, número y duración. Las disposiciones para los primeros aparecieron el 20 de noviembre de 1832.⁸²⁰

Entonces, a la par de las discusiones de los artículos sobre el poder judicial, se emitieron leyes referentes al tema de los alcaldes y jueces de primera instancia. El 20 de diciembre de 1832 se publicó un decreto que autorizaba al gobierno para que pusiera hasta cuatro jueces de primera instancia en el departamento del Poniente y uno en el partido de Puruándiro; la disposición llevaba a la desaparición del asesor del departamento. Por otro lado, la orden quitaba a los alcaldes de los ayuntamientos la potestad sobre impartición de justicia una vez que los jueces comenzaran a operar, de acuerdo con el documento, las faltas accidentales de los jueces serían suplidas por los alcaldes del lugar de su residencia, distribuyéndose el conocimiento de las causas y asesorándose con el juez más inmediato y los de Puruándiro debían acudir con el Asesor del departamento del Norte.⁸²¹

Hasta aquí el tema del alcalde es confuso, lo mismo ocurrió en las reformas. Para entender un poco más, es preciso revisar la ley adicional del 20 de noviembre de 1832, de acuerdo con ella las juntas electorales encargadas de elegir ayuntamientos quedaban facultadas para nombrar cuatro alcaldes para Morelia como capital del estado, 3 para cada cabecera de municipalidad que excediese 10.000 personas y dos para cada una de las poblaciones restantes.⁸²² Lo primero que destaca en la reforma del capítulo es que la impartición de justicia en el estado quedó en dos instancias al suprimirse el Superior Tribunal de justicia, en este sentido, cabe resaltar que la primera de ellas recaía en los alcaldes y jueces de primera instancia. Bajo esta línea queda claro que el poder

⁸²⁰ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y Desorden*, p. 355. *Actas y decretos*, tomo II, p. 491. Felipe TENA RAMÍREZ, *Michoacán y sus constituciones*, p. 48. Amador COROMINA, *Recopilación de leyes y decretos*, Tomo V, pp. 80-81

⁸²¹ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes y decretos*, Tomo V, pp. 19-21.

⁸²² Amador COROMINA, *Recopilación de leyes y decretos*, Tomo V, pp. 80.

judicial retiene la figura del alcalde dentro de la estructura de impartición de justicia, pero separándolo del ayuntamiento, su función consistía en sustituir a los jueces de primera instancia en sus faltas, pero con auxilio de determinadas figuras versadas en derecho porque estos alcaldes seguían siendo legos. Respecto de los jueces de primera instancia, estos debían tener conocimientos de jurisprudencia, lo que indica que los legisladores tenían mucho interés porque los procesos judiciales desde su inicio estuvieran en manos conocedoras de la materia, con el objeto mejorar el proceso de impartición de justicia en el estado. El origen de la reforma radicaba en la incapacidad de los alcaldes para impartir justicia por falta de conocimientos, lo que produjo quejas constantes por parte de la ciudadanía y el incremento de gavillas de bandoleros que amenazaban la tranquilidad en algunas zonas del estado todo ello a causa de no tener desde la primera instancia la cualificación para hacer expedita la impartición de justicia.⁸²³

La reforma constitucional sobre el poder judicial fue resultado de amplios debates sobre todo en el tema de los jueces de primera instancia. Villaseñor, Huarte y Peguero no concordaban con la iniciativa porque desde su perspectiva no había condiciones para su aplicación. El problema no era despojar a los alcaldes de los ayuntamientos de la investidura de jueces legos de primera instancia y sustituirlos por “jueces letrados”, sino que no existían en Michoacán suficientes hombres con conocimientos de derecho en los que pudiera recaer el nombramiento, a lo anterior se debía agregar la falta de recursos económicos. Estas circunstancias preocupaban a la parte que impugnó la propuesta porque desde su perspectiva se corría el riesgo de que la reforma quedara sólo en el papel. A su vez, los diputados Manuel Alvirez y Juan Gómez Puente veían necesaria la reforma del poder judicial en esta parte, porque como demostraba la experiencia, la justicia en manos legas era lenta por la ignorancia de los alcaldes. Otro de los puntos objeto de debate era que estos jueces de primera instancia o “jueces letrados” no podían instalarse en todas las cabeceras de partido, porque no existían recursos suficientes para pagarlos, lo que por otra parte llevaba al tema de la desigualdad que podría suscitarse entre las poblaciones. Con muchas horas de debate, la legislatura terminó aprobando la

⁸²³ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y Desorden*, pp.350-351.

reforma y dejando a los miembros de los ayuntamientos sin atribuciones en el tema de la impartición de justicia.⁸²⁴

El segundo bloque de las propuestas de reforma en ponerse a discusión fueron las relacionadas con el tema de los ayuntamientos. El 18 de octubre de 1831 se dio la primera lectura al dictamen. Partiendo de lo expuesto por la Constitución de 1825 del estado de Michoacán en su título 3º, capítulo 2º referente a los ayuntamientos, estos debían instalarse en las cabeceras de partido y en las poblaciones con más de 4.000 almas, integrándose por Alcaldes, Regidores y Síndicos; la reforma aprobada en 1832 borró a los alcaldes e instituyó la figura de un presidente. Por lo tanto, en los pueblos en los que no hubiere Ayuntamiento y se tuviere que establecer un teniente éste ya no tendría las facultades de un alcalde, ahora sólo cuidaría de la policía y el orden interior de la población. La máxima ley del estado de 1825 marcaba que para pertenecer al ayuntamiento era requisito indispensable ser ciudadano en uso de sus derechos políticos, tener 25 años o 18 siendo casado, ser vecino del distrito con residencia de un año y tener algún capital o industria de la cual poder subsistir. La reforma de 1832 aumentó la edad del aspirante casado de 18 a 21 años para pertenecer al órgano de gobierno; en relación al nivel de instrucción, los presidentes y síndicos deberían saber leer y escribir y los regidores a lo menos leer, pues el texto de 1825 marcaba que a partir de 1833 no se podían ocupar estos cargos si no se cumplía con este requisito. Respecto de su permanencia el presidente se mudaría cada año, los regidores por mitad cada año, lo mismo los síndicos, donde hubiera 2 serían removidos todos los años. Finalmente, se dejaba a una ley secundaria su composición, elección y las facultades de los presidentes y los tenientes.⁸²⁵ La ley adicional apareció el 20 de noviembre de 1832 bajo el título de *Nueva ley sobre organización de los Ayuntamientos*,⁸²⁶ la cual se había construido en parte con artículos debatidos de la reforma que no fueron aprobados por ser de tipo reglamentario.

Respecto a las reformas del poder legislativo, después de poco más de 8 meses de haberse presentado los dictámenes, el 17 de agosto de 1832, el

⁸²⁴ *Ibíd.*, pp.351-353.

⁸²⁵ *Actas y decretos*, Tomo II, p. 490. Felipe TENA RAMÍREZ, *Michoacán y sus constituciones*, pp. 47-48.

⁸²⁶ Amador Coromina, *Colección de leyes y decretos*, Tomo V, pp. 70-80.

Congreso se dispuso a debatir sobre el asunto que obraba en manos de la comisión de legislación. En ese momento, el diputado Rivas solicitó que éste volviera a la comisión pues no había quien lo sostuviera dado que Villaseñor acababa de fallecer, Huarte no se encontraba y Auriolos había dado su voto en particular.⁸²⁷

Al día siguiente se inició la discusión, el primero en intervenir fue Alvarez para manifestarse en contra de que se debatiera el artículo 37 referente a la inmunidad de los legisladores, porque desde su perspectiva primero se debía deliberar sobre la renovación del Congreso por mitad, para determinar duración del fuero. La comisión encargada no tomó en consideración la petición de Alvarez y se pasó a la discusión del artículo 36 de las reformas, el que establecía que los diputados eran inviolables por sus opiniones siempre que no fueran contrarias a la religión del estado o a la forma de gobierno. El diputado Juan Gómez Puente señaló que el objeto de la reforma consistía en evitar los abusos de imprenta pues era sabido que algunos diputados del Congreso General habían incurrido en esta falta y

[...] sus manifiestos circulaban libremente con notable perjuicio de las buenas costumbres, minando la religión con discursos contrarios a la sana moral y por el pretexto de la inviolabilidad de sus autores nada ocurría y lo mismo aplicaba para el tema del sistema de gobierno.⁸²⁸

El presidente Peguero tomó la palabra para referirse a este último porque el tema de la religión le resultaba sumamente delicado. El eclesiástico se manifestó en contra del artículo porque “aun en tiempos de partidos sería perniciosa esta prohibición” porque obligaba a los diputados a no tratar asuntos del sistema de gobierno, el diputado presidente estaba convencido de que lo idóneo sería dejar el artículo tal como yacía en la Constitución. Para Camarillo “la reforma sería un germen de persecuciones a los diputados” para deshacerse de ellos “a través de la calumnia cubierta con el celo religioso y el patriotismo”. Todo lo anterior se contextualizaba en un momento en que los partidos violentaban las leyes y las instituciones.⁸²⁹

Rafael Puente apoyó a Juan Gómez Puente argumentando que el diputado tenía su fuero y era el Congreso quien calificaría si había o no lugar a

⁸²⁷ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 17/VIII/1832.

⁸²⁸ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 18/VIII/1832.

⁸²⁹ *Ibíd.*

la formación de causa. Además de que a los diputados les estaba prohibido por la Constitución federal hablar de religión y del sistema de gobierno, por tanto, la reforma propuesta estaba en consonancia con lo que manifestaba la máxima ley nacional. El presidente del Congreso volvió a tomar la palabra para rebatir el hecho de que aunque la declaración de causa se hiciera por los diputados, ésta no era garante de imparcialidad, pues en tiempos de partidos no faltaban recursos para eludir esa seguridad y trajo el ejemplo del diputado Joaquín Domínguez en donde no se había hecho caso de la inviolabilidad de su persona, agregó además que los diputados estaban obligados a no atacar la religión por ser católicos y por la prohibición expresada en la Constitución federal.⁸³⁰ Peguero, quien desde un inicio del debate había establecido no opinar respecto de la religión, lo había hecho y lo interesante es que el primer argumento que dio para que los diputados no atacaran la ley de Dios no era lo que establecía la Constitución federal, sino el hecho de profesar la religión, es decir, aun en su calidad de legislador no ponía como primer argumento la ley terrenal sino la divina.

Regresando al debate, Navarro tampoco estaba por la reforma y en concordancia con Camarillo manifestó que ésta abría la puerta para la persecución de los diputados, pues la modificación del artículo podría servir para que “una minoría ilustrada fuese proscrita por una mayoría de hombres fanáticos”. Alvírez después de escuchar a sus compañeros opinó que se suspendiera el debate, pues los temas y el curso que estaba tomando la discusión requerían de mayor meditación para un mejor acierto en las deliberaciones. El 21 de agosto de 1832 continuaron las discusiones, Alvírez de inmediato tomó la palabra para expresar que el debate seguramente seguiría bajo los mismos argumentos externados en la sesión de día 18 y señaló que era suficiente la prohibición que hacía la Constitución federal, por tal razón propuso que en caso de que se observara algún abuso por parte de algún diputado se le llamara la atención y de ser necesario se le formara causa. Rivas intervino para decir que el artículo constitucional no daba lugar a que se atacara la religión ni el sistema de gobierno que regía y por tanto no había necesidad de la reforma. Juan Gómez Puente argumentó que no era pertinente la reforma del artículo, por

⁸³⁰ *Ídem.*

tanto, la legislatura procedió a votar en contra de la reforma del artículo 36 quedando tal cual como lo prevenía la Constitución de 1825, que a la letra decía: “Los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su comisión: y en ningún caso, o tiempo, ni por autoridad alguna, podrán ser reconvenidos por ellas”.⁸³¹

La discusión del artículo deja claro que en esos momentos de convulsión política había un importante cuestionamiento al sistema de gobierno y a la religión, no sólo por las partes ilustradas de la sociedad sino por los mismos artífices de la ley. En el caso concreto de la religión parte del debate deja ver que la tensión entre lo terrenal y lo divino no sólo la vivían los eclesiásticos al tratarse los temas religiosos, esa tensión se trasladaba al resto del cuerpo legislativo. Que la Constitución federal fuera reformada en ese sentido, es indicativo de que se quería proteger a la religión católica de los ataques de los propios legisladores lo que refiere divergencia al respecto y de que ésta era un elemento importante para la nación.

Otro elemento que atrae es la mención constante de vivir en un momento en que los “partidos” -logias masónicas- están muy presentes en la vida política del estado y cómo la experiencia les había demostrado a los artífices de la ley lo nocivo que eran para la seguridad de las instituciones y del sistema de gobierno. Por eso, la legislatura procuró cerrar la puerta a todo tipo de especulaciones y señalamientos sobre los representantes de la soberanía. Si bien los legisladores debían tener fueros y frenos, los temas de la religión y el sistema político eran dos titanes que, por su fuerza y todas las complicaciones que tenían dentro y fuera de sí, era mejor excluirlas del artículo.

El siguiente artículo en discutirse fue el 37, el que decía que los diputados no podían ser demandados civil ni criminalmente desde el día de su elección hasta un mes después de haber finalizado el ejercicio de su encargo, ciñéndose para ello a la 4ª parte del artículo 42 constitucional. Rafael Gómez Puente dijo que una de las razones para no aprobar el artículo 36 había sido el tema de la persecución y que de no brindársele cierta protección al legislador, este podía desviar la atención de sus deberes, mientras que Juan Gómez Puente consideraba que el diputado no debía gozar de una inmunidad extensa como la

⁸³¹ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 18/VIII/1832, 21/VIII/1832.

que había tenido hasta ese momento en Michoacán, pero tampoco se le debía quitar toda porque era dejarlo expuesto a la molestia “de sus acreedores”, el diputado veía en la reforma un punto medio entre los extremos. Para Domínguez no había necesidad de modificar el tema de la inmunidad de los diputados, mientras que Auriol no veía problema en ello, pues el eje central era la honradez del legislador, su buen comportamiento lo protegía de toda persecución aun cuando no tuviera inmunidad, pero sí se debía tener cuidado porque “los perversos” podían abusar de la prebenda.⁸³²

La intervención de Camarillo al respecto será muy interesante porque consideraba que la aceptación de la reforma traía consigo la necesidad de formar un código de procedimientos para los juicios en contra los diputados. A su vez, el diputado Juan Gómez Puente no veía conveniente en desechar la reforma pues se podía creer que se hacía por interés personal de los diputados cuando en otros estados y en el Congreso general no tenían ese privilegio y tampoco algunos funcionarios en Michoacán.⁸³³

El día 22 continuó el debate del artículo 37, el presidente Peguero intervino para decir que su parecer respecto de la reforma había cambiado, después de meditarlo consideraba que era necesaria para garantizar los intereses de los particulares, pues haciendo memoria un diputado había abusado de la inmunidad y porque en última instancia, la reforma solo consistía en que se pudiera demandar a un diputado en lo civil porque no había innovación en el tema de las causas criminales. El matiz que estaba tomando la discusión hizo que Domínguez externara que los debates a favor de la modificación iban encaminados a establecer la nulidad. Alvirez veía problema conforme al hecho de que los diputados se volvieran dependientes del Supremo Tribunal, señalando que la inmunidad era de la corporación y no del individuo, también se presentaba el inconveniente de que los diputados se distrajeran de su encargo. Camarillo contestó que no se daba dependencia entre los poderes solo la de un diputado al Tribunal Supremo, tampoco creía que dentro de la legislatura hubiera un numero de sujetos capaces de aprovecharse del puesto. El legislador propuso que se suprimiera la inmunidad a los diputados y que quedaran sujetos en todo a los jueces de primera instancia, Peguero estaba de acuerdo con Camarillo de

⁸³² AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 21/VIII/1832.

⁸³³ *Ídem*.

eliminar el fuero pero como no se podía quitar el artículo de la Constitución, entonces consideraba que al menos se aprobara la reforma. Peguero veía en la reforma una prevención y Camarillo una necesidad para disminuir la inmunidad tan amplia que le concedía la Constitución. La comisión proponía que se aprobara la reforma pero el pleno del Congreso determinó que no.⁸³⁴

El centro de la reforma del artículo 37 residía en que tanto la tercera legislatura en su segundo año como parte de ésta consideraban que la inmunidad que otorgaba la Constitución estatal a los diputados era muy amplia y era necesario acotarla. Al inicio de la discusión, la cuarta legislatura tenía dos opciones: delimitar la extensa inmunidad que tenían los diputados durante el ejercicio del cargo o dejarla como estaba en el texto constitucional, pero en medio de la discusión surgió la propuesta de su eliminación. En su mayoría esta legislatura no estaba por la reforma del precepto, reconocían que la inmunidad de la que gozaban era muy amplia pero la reforma los ponía de frente al judicial lo que no fue bien visto por la mayoría de la asamblea.

Un punto que no se tocó sobre la inmunidad, pero que estaba presente, era el fuero de que gozaban lo militares y los eclesiásticos. Independientemente del resultado de la deliberación, ¿qué pasaba con los diputados eclesiásticos? Éstos, en caso infringir la ley y ser acusados por delitos vinculados a su encargo, ¿por quién serían juzgados, por el Supremo Tribunal de Justicia del estado o debían ser enjuiciados al interior de su corporación? Si bien es cierto que dentro del periodo de estudio ningún diputado eclesiástico estuvo en una situación así, también es cierto que no existía el andamiaje legal para afrontar un caso con esas características porque los antecedentes de la participación de los eclesiásticos en los órganos legislativos eran un asunto reciente.

La decisión tomada respecto del artículo 37 tocaba en parte atribuciones del poder judicial y que, por tanto, estaban contempladas dentro del paquete de modificaciones del título referente al poder. El 23 de agosto la reformulación quedó de la siguiente manera: “De las causas criminales de los diputados del Congreso, Vicegobernador, Consejeros, Secretario del despacho y Tesorero General se encargará el Supremo Tribunal con arreglo al artículo 42 atribución

⁸³⁴ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 22/VIII/1832.

4ª de la Constitución y también de las demandas civiles contra el Gobernador, vicegobernador y Consejeros”.⁸³⁵

Continuando con el tema de la reforma, se debe señalar que en ocasiones los artículos no se discutían en orden, un ejemplo es la discusión del artículo 18º antes que el 8º y después se llegó a la conclusión de que debían empezar por el último para dar solución al primero. El 25 de agosto se pretendía debatir sobre las atribuciones del Congreso y de la diputación permanente cuando el diputado Alvarez pidió que se leyera la reforma sobre los artículos preliminares, en concreto el artículo 18º relativo a la suspensión del derecho ciudadanía, el cual desde su parecer era muy duro y contrario al sistema, por condicionarlo a la falta de una propiedad raíz con valor de 100 pesos o una renta anual de 150 pesos. Y en efecto, se inició el debate, Navarro contestó que el artículo se había propuesto con toda la prudencia necesaria, pues era indudable que un hombre que no tuviera el requisito, el que además era muy fácil de conseguir, no podía ser otra cosa que un vago y ocioso y por demás inútil para el noble encargo de elector, el cual era más importante que el de regidor, pues la inhabilidad de un mal elector podía causar daño a todo el estado, cuando lo hacía un regidor solo tendría trascendencia en una municipalidad. Peguero apoyó la propuesta de Navarro corroborándola con doctrinas de dos publicistas modernos, Albert Fritot y Benjamin Constant, entonces Huarte hizo varias reflexiones sobre las cualidades que pedía el artículo 8º preliminar para ser ciudadano michoacano lo que llevó a una discusión confusa.

Este fue el punto de quiebre del debate, los diputados entendieron que no se podían abordar los motivos de suspensión de la ciudadanía sin haber definido al ciudadano y sus atribuciones, entonces se dejó de lado el artículo 18º y se procedió al debate del 8º. De acuerdo con lo propuesto, la ciudadanía michoacana se podía obtener por nacimiento, por vecindad, por haber nacido en territorio de lo que fuera la América española y, siendo extranjero, por carta de ciudadanía. La primera forma de obtención de este distintivo provenía de haber nacido en el territorio michoacano; la segunda si el nacimiento se había registrado en cualquier punto de la República mexicana comprobando la vecindad en Michoacán de un año a lo menos, o que fueran dueños de alguna

⁸³⁵ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 23/VIII/1832.

propiedad raíz en el territorio, cuyo valor no bajara de 600 pesos; la tercera siendo ciudadanos los americanos, tal como lo establecía la Constitución; y por último el que obtuviera la carta de ciudadanía de manos del Congreso del estado de Michoacán.

En el debate intervino Domínguez para decir que no era correcto lo que proponía la reforma, porque muchos eran michoacanos sin ser ciudadanos, para él, el lugar de nacimiento no otorgaba el derecho. Rivas recalcó que todos los que nacían en el estado eran ciudadanos y solo se suspendía el derecho por las causas que la misma Constitución establecía, para él era preciso fijar la ciudadanía por el origen, tomando en cuenta que en ninguna parte de la Constitución del estado se encontraba la expresión y se corría el riesgo de que muchos creyeran que podían ser michoacanos legalmente y no por nacimiento. Peguero no veía una razón de peso para estar a favor de las reformas, pues no eran lo mismo los michoacanos por origen que por adopción, remarcando que no era lo mismo ser individuo de “la sociedad civil” que de la “sociedad política”. Rivas insistió en que todos los que nacían en el estado eran ciudadanos Michoacanos, solo se les suspendía el ejercicio del derecho de ciudadanía a algunos.

Para Huarte no había dificultad de que fuese de este u otro modo, porque de lo que se estaba tratando era de los “derechos políticos” y no de naturaleza, en realidad la dificultad residía en el modo con que se obtenían los derechos de ciudadanía, si por nacimiento o por adopción, ya que existían algunos individuos de origen michoacano que no podían gozar de ese derecho. Domínguez volvió a tomar la palabra para remarcar que no se podía adquirir el derecho de ciudadanía por el solo hecho de nacer en el territorio del estado. Para Alvarez estaba muy vaga la voz de ciudadano porque una cosa era tener el derecho y otra usarlo, pues para fijar un verdadero sentido era necesario inculcar en qué consistía ese derecho. Hasta aquí quedaba aprobado que eran ciudadanos michoacanos los nacidos en el territorio del Estado.

Este debate permite apreciar cómo la construcción de la ciudadanía fue un proceso complejo, habían pasado 20 años de la revolución política de Cádiz en el territorio, el país llevaba 10 de independencia, en los cuales el mecanismo de legitimación de acceso y ejercicio del poder eran las elecciones, protagonizadas por “ciudadanos con derechos políticos”. Los mismos diputados

advierten que el texto constitucional de 1825 no dejaba claro el tema de la ciudadanía, 7 años después no había un consenso sobre el tema y la división de sus atribuciones: los derechos civiles y los políticos. Los legisladores advertían el vacío existente en la Constitución, pero llenarlo no era fácil, porque estaban frente a un ente inacabado, en construcción.

Retomando el tema, la discusión volvió al segundo punto, que se dividió en dos partes, la primera referente a: “los nacidos en cualquiera punto de la República Mexicana y que lleven de vecindad en el estado un año a lo menos.” Huarte se oponía a que tuvieran derecho de ciudadanía los que se avecindaran en el estado pues inducía a la desigualdad. Aun así, el Congreso acordó que la ciudadanía también se podía obtener por vecindad.

Faltaba poner en discusión la segunda parte “o que sean dueños de alguna propiedad raíz en el territorio, cuyo valor no baje de 600 pesos contando de poseerla un año o más.” Lo anterior fue impugnado por Alvarez manifestando que era contrario al pacto social. Mientras que Peguero estaba a favor de la reforma porque la propiedad daba un interés común en favor del estado y consideraba que en este caso se podía votar y ser votado en las elecciones, pero no podían ser electos senadores o diputados. Huarte estaba en contra del eclesiástico porque los bienes no daban los conocimientos necesarios para hacer un buen uso del voto y si bien no podían ser senadores o diputados sí podían obtener otros empleos en la administración pública, Camarillo intervino para adherirse a lo expuesto por Peguero. Finalmente se votó esta segunda parte, relativa a la propiedad y la renta y fue desechada.

La atribución 3ª no se sometió a votación porque no tenía cambios respecto del postulado original, el cual decía: “los americanos naturales de alguno de los otros puntos independientes de la nación española, y los extranjeros que se casaren con michoacana, y se hicieren vecinos del estado.”⁸³⁶ Acto seguido se procedió a la discusión de la obtención de la ciudadanía por carta emitida por el Congreso del estado, siendo impugnada por Huarte y Alvarez.⁸³⁷

El 27 de septiembre continuó el debate, Peguero solicitó la aprobación de la reforma, agregando que, debido al formato breve de la Constitución, en todo

⁸³⁶ *Actas del Congreso Constituyente*, Tomo II p. 475.

⁸³⁷ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 25/IX/1832.

caso era conveniente que una ley secundaria diera más luces al tema de la ciudadanía. Huarte continuaba en contra de la modificación, le preocupaba que se abusara del recurso, el cual sólo debía otorgarse en premio por grandes servicios prestados por los extranjeros a los estados. Rivas estaba a favor de la reforma externando que el Congreso en su calidad de soberano podía admitir nuevos miembros de la sociedad y era necesario que la facultad fuera consignada en la máxima ley del estado. A consecuencia de las opiniones de los dos eclesiásticos, Domínguez puntualizó que no se discutía el tema de quién extendía la carta de ciudadanía, eso quedaba claro en el planeamiento de la propuesta. Peguero, Juan Gómez Puente y el presidente en turno del Congreso estaban por la aprobación de la reforma al tiempo que respondieron a Domínguez que nunca se había puesto en duda que correspondía al legislativo local extender las cartas de ciudadanía. Ya en solitario, Peguero solicitó que el artículo volviera a la comisión para que esto quedara claro en su redacción, lo que fue tomado en consideración.

Con el artículo 8º consensuado en su mayoría, ahora sí era pertinente adentrarse a la discusión del artículo 18º, en su atribución 3º, que como ya se ha dilucidado en páginas anteriores, se vinculaba a la suspensión de la ciudadanía por no poseer propiedad raíz con valor de 100 pesos o una renta anual de 150 pesos. Navarro, como miembro de la comisión evaluadora, expuso que ésta no había fijado opinión acerca del punto, pues esperaba primero que la discusión arrojara razones a favor y en contra para formar un juicio al respecto. Peguero intervino y trajo nuevamente a colación las doctrinas de los publicistas, quienes establecían que solo el que poseía alguna renta o industria de que subsistir era quien podía gozar del derecho de ciudadano. Rivas también intervino en favor del dictamen, lo mismo que Auriolles, Navarro tenía duda si a los jornaleros se les debían negar sus derechos políticos. Finalmente, el Congreso determinó reservar su resolución en una segunda discusión.⁸³⁸

El tema censitario, no tenía cabida en esta reforma, por tanto, el resultado de los debates de este artículo se publicaron el 24 de octubre de 1832, en ellos se declaraba ciudadanos a los nacidos en el territorio del estado, los nacidos en cualquier punto de la República mexicana a partir de un año de vecindad y se

⁸³⁸ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 27/IX1832.

tomaron algunos elementos del artículo 9º en su segunda y tercera parte que otorgaban la ciudadanía a los que a partir de 1821 se hallaban establecidos en algún lugar del estado sin haber variado de domicilio y los americanos naturales de alguno de los otros puntos independientes de la nación española y a los extranjeros que se casaren con michoacana y se hicieran vecinos del territorio.⁸³⁹

Aquí cabe hacer referencia a lo que apunta Xavier Guerra, cómo la nueva concepción de la soberanía y su ejercicio requiere de establecer ciertas distinciones entre la población, pues en primer lugar se remarca lo que es natural, de origen frente a lo externo o extranjero, para poder descender en la escala de derechos civiles y políticos que van reduciendo el número de participantes con capacidad de intervenir en el asunto de la representación política, base de la legitimidad del nuevo sistema de gobierno. Aun así, el tema de la ciudadanía política encebarraba muchas contradicciones frente a un sistema representativo, pues éste derecho al ser reducido se convertía en un privilegio, lo que solo reafirma lo complejo que fue el diseño y ejercicio de la ciudadanía en un periodo de transición del antiguo régimen hacia nuevos modelos de organización política.⁸⁴⁰

La discusión de la reforma del poder legislativo continuó el 28 de septiembre en referencia a la base de la población que se debía tener presente para elegir diputados, la cual pasaba de 25.000 a 30.000 almas. Peguero impugnó el dictamen porque el aumento de la base de la población traería una disminución en el número de diputados a elegir y esto afectaba en el despacho de los trabajos legislativos pues las comisiones se veían saturadas. Para Huarte el aumento de la base de población no representaba mayor diferencia, y de la misma forma se podían suscitar intrigas en una legislatura pequeña que en una grande. Emitidas las anteriores opiniones se descendió a la discusión en lo particular. Se elegiría un diputado por cada 30.000 almas y el número mínimo de diputados sería 15, Peguero retomó lo manifestado en la discusión general, Juan Gómez Puente no veía inconveniente en el artículo porque lo compensaba el hecho de que se elegirían 15 diputados como mínimo, asimismo el aumento de la base de la población traía un ahorro a la Hacienda pública de 3.600 pesos anuales. Domínguez le contestó a su homólogo que la escasez del erario no era

⁸³⁹ Amador COROMINA, Colección de leyes y decretos, Tomo V, p. 67.

⁸⁴⁰ Francois Xavier GUERRA, "El soberano y su reino", pp. 43-46.

razón para limitar la designación de legisladores, desde la perspectiva del legislador la propuesta tenía un sentido actual, motivo por el cual se debía contemplar que el carácter de la ley era perpetuo. Rivas opinó que lo primero que se debía tener presente era la cantidad de individuos capaces de asumir ese tipo de responsabilidades, finalmente, la propuesta de reforma fue desechada.

Ese mismo día la comisión retiró la discusión del artículo 22 relativo a que cada legislatura determinaría el número de diputados con base en un censo de la población hasta que fuera discutido el capítulo 4º adicional del título sobre elecciones. Por lo que continuó la discusión del capítulo 2 relativo a la reunión, receso y renovación del Congreso, el debate siguió el día 2 de octubre hasta suspenderse por el tema de la renovación de la legislatura por mitad.

Posterior a ello se regresó a la discusión de la reforma del artículo preliminar 8º en cualidad 4ª que la comisión había retirado y que ponderaba la posesión de una propiedad raíz o una renta anual determinada, lo que fue reprobado en segundo debate.⁸⁴¹

El 5 de octubre se habló de la renovación del Congreso por mitad. La primera parte de la propuesta otorgaba a la junta electoral el poder de designar los diputados que debían continuar siendo la primera ocasión. Peguero intervino de inmediato para impugnar el artículo por no considerarlo necesario dentro del texto constitucional “porque hasta ahora no se ha verificado que se haga renovación total del Congreso, pues los electores siempre han cuidado de que queden algunos diputados en funciones al tiempo de la elección”, le preocupaba que en el proceso quedara una mitad de hombres que no merecieran la confianza pública quedando en el cargo cuatro años. El eclesiástico era de la opinión que el artículo solo debía decir “que pueden ser reelectos indefinidamente” pues de ese modo el legislador procuraría merecer la confianza promoviendo el bien de la comunidad. En seguida el eclesiástico Rivas intervino:

Que si es bueno queden por reelección de la Junta mucho mejor será que queden de un modo estable, pues la junta puede o no hacer la elección: que siempre es de utilidad que haya en el cuerpo legislativo hombres que tengan conocimientos prácticos para la expedición de negocios, y para que haya un plan seguido de legislación: que por otra parte era innegable que cuando haya partido no podrán apoderarse de los puestos, y habrá siempre un contrapeso que equilibre las operaciones, en términos que no podrá hacerse el mal con la facilidad que se verificará si se hiciera la

⁸⁴¹ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 28/IX/1832.

renovación total: que ya vimos en el año de 28 que la facción se apoderó de las Asambleas, y se puede decir que el Estado de México se salvó por tener esa renovación por mitad.⁸⁴²

Los diputados Juan Manuel Puente, Huarte, Camarillo y Navarro apoyaron la opinión de Rivas y por tanto estaban por la utilidad de la reforma propuesta, el artículo fue votado y aprobado por doce contra dos. Más adelante, el 6 de octubre, se discutió el dictamen general del capítulo 4º adicional. El primero en tomar la palabra fue el diputado Huarte, quien consideraba que el capítulo no debía incluirse en la Constitución porque pertenecía a la parte reglamentaria de las elecciones, lo que no era propio de un documento de dicha naturaleza, pues éste solo debía contener las bases generales de la Constitución. Peguero le rebatió diciendo que en este documento debía fijarse el cómo, por quién y en dónde se debían de hacer las elecciones, porque de ello dependía su acierto, pues al dejarlo a la volubilidad de una ley secundaria era muy fácil se cometiera abuso. El presidente del Congreso intervino, dando lectura a la parte expositiva de ella para manifestar los inconvenientes que habían tenido las elecciones por la variedad con que se habían realizado y los buenos efectos que debía producir el fijar constitucionalmente las bases. Rivas añadió “que en tiempos de facción podrán con facilidad variarse los estatutos de las elecciones si fuere por una ley secundaria” pero al asentarse estos en la Constitución se garantizaba su observancia, entonces se procedió a votar y fue aprobado. De inmediato comenzó la discusión de los artículos, en particular los que establecían que la elección de diputados federales y locales sería realizada por la misma junta electoral con un día de diferencia a través de un proceso de elecciones en los tres niveles ya conocidos, hasta ahí el debate y el contenido de los postulados no se alejaban de lo que en tema de procesos electorales había vivido el estado de Michoacán desde 1824 ciñéndose en buena medida a la herencia gaditana, la variación será el tema censitario, pues de acuerdo a la propuesta, para ser elector primario era requisito indispensable tener una propiedad raíz con valor de 150 pesos y una renta anual de 200 pesos, entonces se inició la discusión. Rivas fue el primero en tomar la palabra para externar que cuando se había

⁸⁴² AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 5/X/1832.

suscitado la discusión del artículo 8º de los preliminares dudó sobre el requisito de la propiedad para gozar del derecho de ciudadanía, pero que, para el nombramiento de elector, no dudaba en ningún momento que era necesario. Rafael Gómez Puente dijo que en un principio pensaba oponerse, pero en vista de lo que decía el eclesiástico, se le habían desvanecido todas sus dudas, el artículo se sometió a votación y fue aprobado 11 contra 1. Cuando llegó el turno de las cualidades para ser elector secundario la discusión volvió en el mismo sentido pues además de tener 25 años y dos de residencia en el partido era preciso poseer una propiedad raíz con valor de 300 pesos lo menos o una renta de no menos de 500 pesos anuales. Entonces se puso a debate el artículo relativo a que para ser escrutador en las elecciones destacaban los requisitos – entre otros– de la vecindad de un año y una renta anual en la capital de 500 pesos, en poblaciones con más de 2.000 almas 300 pesos y 200 en las restantes, además de saber leer y escribir. Peguero estaba a favor, Méndez del Corral en contra porque promovía la desigualdad, pues había individuos que no cubrían la renta marcada, pero eran más dignos que otros que sí las poseían, Alvarez consideraba que el artículo era reglamentario por lo que no debía quedar consignado en la Constitución. Rivas a favor, Rafael Gómez Puente en contra coincidiendo con Méndez del Corral y a título personal pedía que se reprobara la parte que señalaba 500 pesos de renta en la capital para que quedara en 300 como en las poblaciones a partir 2.000 habitantes. Al no llegarse a un acuerdo el artículo volvió a la comisión para ser replanteado.⁸⁴³

El 9 de octubre continuó el debate sobre el capítulo adicional, se reprobó la propuesta que trataba sobre la forma de elegir a los escrutadores de las mesas electorales, para continuar con el que estipulaba que ningún ciudadano en pleno uso de sus derechos políticos podía presentarse a votar sin su respectiva boleta. La comisión quería que el postulado fuera desechado porque tendía a ser reglamentario, Peguero abrió el debate, el eclesiástico era de la idea que, aunque éste fuera reglamentario “debe quedar en la Constitución porque según Montesquieu en ella ha de fijarse el modo, y como se ha de votar”. El presidente del Congreso veía el artículo como algo esencial porque impedía los fraudes electorales asegurando la libertad en las elecciones como marcaba la

⁸⁴³ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 6/X/1832.

experiencia. Navarro como parte de la comisión remarcaba el carácter reglamentario del mismo, por lo que Peguero volvió a tomar la palabra para decir que las boletas eran el medio con que se han coartado los grandes abusos en las elecciones y para evitar su repetición debían quedar consignadas en la máxima ley de Michoacán con esa intervención cerró la discusión y el postulado quedó aprobado. Ese mismo día fueron debatidas las características para ser nombrado diputado, cuando se sometió a escrutinio que la edad fuera 30 años, se aprobó, mientras que la atribución de una propiedad de 4000 pesos como mínimo, o una renta de 600 pesos anuales, fue desechada por 10 votos contra 5 porque no había reunido el consenso de dos tercios de votación.⁸⁴⁴

El 13 de octubre fueron aprobadas un bloque de reformas de la Constitución, relativas a la apertura y clausura de sesiones, el acato del reglamento, los días de sesiones, las sesiones extraordinarias y la diputación permanente. Al término se procedió a tratar el asunto de si correspondía al Congreso conceder el derecho de ciudadanía a través de cartas. Domínguez consideraba que el Congreso local poseía la atribución para otorgar cartas de ciudadanía, contrario a él estaban los diputados Aurioles y Rivas, siendo estos los posicionamientos se suspendió este debate para pasar al capítulo adicional sobre las elecciones.

Respecto a los artículos adicionales de los comicios había algunos que aún se encontraban en la comisión, otros que ya habían sido aprobados desde el primer debate, una de las propuestas que seguía polarizando a la legislatura era el tema de la propiedad para poder ser sufragado. La discusión sobre el poseer una propiedad con valor de 150 pesos o una renta de 250 para ser elector primario continuó y en ella intervinieron el presidente del Congreso y Peguero para manifestar la conveniencia del requisito, porque de las elecciones primarias dependía radicalmente el acierto de las demás y la votación resulto diferida.⁸⁴⁵

El día 15 prosiguieron las discusiones sobre el uso de boleta para votar, cuando el ciudadano no tuviera la boleta éste debía solicitarla, al presidente le preocupaba que el postulado no tuviera el efecto esperado y que los votantes no la pidieran, “por lo que no habiendo espíritu público serán muy desairadas las

⁸⁴⁴ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 9/X/1832.

⁸⁴⁵ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 13/X/1832.

elecciones”. Peguero dijo que los ciudadanos debían pedir su boleta siendo este el modo de ir formando ese espíritu público. Finalmente, la legislatura votó por que se conservara lo propuesto por la legislatura anterior hasta la palabra boleta. Enseguida se tocó de nuevo un tema que ya había originado polémica al respecto, la propuesta decía que para ser elector primario se pedía una propiedad con valor de 150 pesos y una renta anual de 250 pesos. El diputado Camarillo estaba en contra de lo primero y a favor de lo segundo, pues una renta daba independencia y por tanto era de mayor peso que una propiedad. El presidente Juan Gómez Puente se encontraba contrariado pues lo único que le hacía dudar por la aprobación de la reforma era que al aplicarla se reduciría considerablemente el número de electores, y aunque Peguero concordaba con el presidente seguía a favor del dictamen, por lo que pidió se le permitiera leer unos extractos de algunos publicistas que hablaban del tema, esto no le fue permitido porque eso ya había sucedido en la sesión anterior, después de esto el Congreso determinó reprobado la propuesta. Una discusión similar se suscitó al respecto el 16 de octubre, pero relativo al escrutador de la mesa electoral, la propuesta imponía una renta anual a quienes tomaran el cargo en las elecciones en Morelia de 500 pesos, en lugares con una población arriba de 2000 personas 300 pesos y en las restantes, la renta sería de 200 pesos, lo que después de un largo debate también fue reprobado.⁸⁴⁶

Con esto prácticamente se cerraba el tema de la reforma al título del legislativo, el 24 de octubre el Congreso había ordenado al ejecutivo que suspendiera su decreto y el 22 de diciembre se volvió a dar lectura a la minuta del decreto, los acuerdos logrados por la legislatura vieron la luz, finalmente, el 27 de diciembre de 1832.⁸⁴⁷

El objetivo de las reformas constitucionales de 1831-1832 era robustecer a las instituciones pilares del federalismo en Michoacán, si la reforma al poder judicial tenía como objetivo agilizar la sentencia en los procesos judiciales para que la población creyera en el sistema legal del estado; la reforma del poder legislativo pretendía fortalecer al Congreso para hacer más rápidas las deliberaciones en su interior con el tema de la renovación, incuestionable por

⁸⁴⁶ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 15/X/1832.

⁸⁴⁷ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 22/XII/1832.

otros poderes, respecto de sus opiniones con respecto del fuero y trató de implementar elementos de control dentro de los procesos electorales a través del uso de boletas. Finalmente, aunque la propuesta no se aprobó, el tema de la propiedad y la renta para tener participación en los comicios refiere fuertes intenciones de restringir la base electoral para garantizar que las elecciones recayeran en hombres cualificados que representaban a un sector muy reducido de la sociedad. Las reformas al título del legislativo fueron producto de los temores que la inestabilidad institucional había fundado al interior del legislativo a partir de 1828 y que ponían en riesgo la supervivencia del sistema de gobierno en vigor.

Por otra parte, el tema de propiedad como requisito para adquirir derechos políticos, era sintomático de que el sistema de representación planteado en Cádiz comenzaba a ser cuestionado por algunos miembros de la legislatura, entre ellos los eclesiásticos Rivas, Peguero y Auriolos, quienes al apoyar las iniciativas evidenciaban su deseo de restringir de voto pasivo y activo a los michoacanos. Pero aún con las dudas que planteaba la manipulación de los procesos electorales la mayoría de los legisladores decidió continuar con la herencia gaditana.

El que la reforma fuera aprobada no sería garantía de aplicación, pues en la práctica, las pocas modificaciones no comenzaron a operar hasta 1835. La causa: la polarización e inestabilidad política que vivía Michoacán. En principio esta legislatura no terminará el bienio y deberá disolverse el 5 de enero de 1833. El quinto Congreso lo primero que hará será desconocer a la tercera legislatura en su segundo año y con ello la reforma será puesta en tela de juicio, aunque después de un exhausto análisis determinará la aplicación de algunos puntos mínimos de la reforma que aprobaría esta asamblea. Cuando entra en funciones el sexto Congreso deroga el decreto de anulación de la tercera legislatura en su segundo año y retoma las reformas que aprobó esta legislatura. Sin embargo, el cambio del sistema de gobierno hará que la vigencia de las reformas sea muy breve.

7.3. Los asuntos eclesiásticos: La canonjía lectoral, el deanato de Martín Gil y Garcés y la reapertura del Colegio de San Nicolás.

La iniciativa referente a que el canónigo lectoral diera lecciones de las Santas escrituras en el Colegio seminario, estaba vinculada a la composición y funcionamiento del Cabildo catedralicio y fue presentada el 16 de julio de 1832 por el diputado eclesiástico Rivas. El asunto fue tratado con rapidez a pesar de que el Congreso trabajaba a marchas forzadas por los debates de la aprobación de las reformas constitucionales, el 31 julio de 1832 se puso discusión el dictamen sobre el tema.⁸⁴⁸

El obispado de Michoacán fue creado en 1538 y la composición de su cabildo catedralicio contaba con cinco dignidades: el deán, el arcedaén, el chantre, el maestrescuela y el tesorero; diez canonjías que podían ser de gracia y otras de oficio, dentro de estas últimas se encontraban la doctoral, la magistral, la penitenciaria, la de sagrada escritura y la lectoral; además de seis raciones y seis medias raciones.⁸⁴⁹ La canonjía lectoral también se denominaba canonjía “teologal”, para obtener la prebenda era requisito indispensable ser doctor teólogo ya que su principal deber consistía en impartir lecciones de Sagrada Escritura y de Teología a los clérigos. Juvenal Jaramillo infiere que las lecciones se debían de dar a los eclesiásticos que, en los exámenes que debían presentar para refrendar sus licencias de confesar, predicar u oficiar misa, mostraban deficiencias en esas materias.⁸⁵⁰

Cuando se puso a discusión el tema de lecciones de las Santas Escrituras en el Colegio seminario, el primero en opinar fue Auriolles, quien manifestó que, aunque deseaba vivamente que se pusiera en práctica el proyecto de la comisión, quería que se analizara previamente si el Congreso podía disponer la observancia de un canon que estaba en desuso, por tanto generaba la duda de si estaba vigente y si podía reglamentarse porque éste solo marcaba la enseñanza de las Santas escrituras sin señalar los términos en que debía de hacerse. El eclesiástico pensaba que era menester de la autoridad civil mandar

⁸⁴⁸ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 16/VII/1832, 31/VII/1832.

⁸⁴⁹ Oscar MAZÍN GÓMEZ, *Archivo Capítular de administración diocesana Valladolid-Morelia*. Catálogo I, Zamora, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 1991, p. 13.

⁸⁵⁰ Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Una élite eclesiástica en tiempos de crisis*, p. 47.

su observancia, pero el Congreso solo podría ordenar el cumplimiento del canon en virtud de lo dispuesto por la Constitución. En parte el argumento era que el concilio de Trento declaró ser imprescindibles los cánones y de necesidad para la instrucción de los fieles como la materia más importante, Auriolles no veía prohibición en que el Congreso reviviera una disposición tan benéfica para que los pueblos salieran de su ignorancia. Alvarez dijo estar conforme con Auriolles, pues por un lado dudaba de si la autoridad temporal podía ordenar la observación de un canon y por otro se preguntaba cómo no se había puesto en práctica un canon que se había derogado. Auriolles pidió cautela en el tema porque desde su perspectiva el gobierno del estado no podía dictar leyes para mantener en vigor la observancia de los cánones y la disciplina exterior de la Iglesia sin que hubiera previos concordatos celebrados por el Congreso General con la Silla Apostólica y una legislación federal al respecto. El eclesiástico consideraba que el asunto no podía resolverse, por lo que solicitó la suspensión de la discusión, lo cual ocurrió.⁸⁵¹

Al continuar el debate el 2 de agosto de 1832, el eclesiástico Rivas señaló que el dictamen se había combatido bajo dos argumentos, el primero con base en la observancia de la Constitución y el segundo partiendo de la costumbre y la derogación del canon. En la primera línea era necesario observar la atribución 17ª del art. 42 de la Constitución, la cual contenía dos partes independientes una de otra, la primera no era objeto de concordato, pues solo disponía dictar leyes para mantener el vigor la observancia de los cánones y la disciplina interior de la Iglesia, ésta desde su perspectiva era el objetivo del dictamen, “pues el soberano supuesta la existencia de la Religión católica puede y debe mandar como obispo exterior de la Iglesia, que se observe un canon tan necesario para la conservación de la misma religión.” En cuanto a la derogación del canon por la costumbre, el eclesiástico había indagado que hacía 50 años que no se leía la Santa escritura en el Colegio seminario, siendo Díaz el que comenzó hacerlo, pero que esa atribución correspondía al lectoral, cuando Pérez Anasteres entró de Rector por sí solo se dispensó el trabajo, tal vez porque enseñaba Teología escolástica y el obispo fray Antonio de San Miguel no le reclamó la falta, porque

⁸⁵¹ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 1/VIII/1832.

el Concilio Tridentino obligaba a los obispos a vigilar que los prebendados lectorales explicaran por sí mismos la sagrada escritura.

La exposición de Rivas no disuadió a Alvirez, quien manifestó que lo expuesto no desvanecía las dudas de si la autoridad temporal podía legislar sobre la observancia de un canon, lo cual estaba de acuerdo a lo manifestado por el Concilio de Trento, que la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley eclesiástica era potestad del obispo. Por otro lado, el legislador expuso que aun cuando el estado como soberano ejercía la autoridad exterior, no por esto podía ordenar el cumplimiento, el cual pertenecía exclusivamente al obispo. Auriol mantuvo su opinión de que el Congreso no podía dar una disposición que generara roces con la disciplina de la Iglesia sin haber una ley del Congreso general que se expidiera a consecuencia de la celebración de concordatos con la silla apostólica. Además, se hacía necesario pensar si el mandar el cumplimiento del canon sería una disposición preventiva para el caso de que no cumpliera el obispo, pues en ese momento no había canónigo lectoral por lo que no se sabía si el titular del obispado cumpliría lo dispuesto cuando se nombrara un lectoral. Rivas le contestó al eclesiástico que, desde su perspectiva, el Congreso local tenía la misma autoridad para ordenar la observancia de un canon, por lo que al no haber la canonjía se podía establecer una cátedra para que se enseñaran las Sagradas Escrituras.⁸⁵²

El 7 de agosto de 1832 continuó la discusión y el presidente del Congreso, Pablo Peguero, trajo a colación la doctrina de Fagnani, de Voti y de Benedicto XIV haciendo ver que no podían derogarse los decretos del Concilio Tridentino por una costumbre contraria, por lo que citó la bula confirmada del Concilio Paulo IV, todo lo anterior para concluir que no se podía revocar el canon. En cuanto a lo dicho para combatir el dictamen acerca del artículo constitucional, era preciso entender en que consistía un concordato, definiéndolo como una transacción o tratado que celebraban los soberanos temporales y la curia romana sobre puntos de jurisdicción o privilegios que pretendían tener mutuamente el sacerdocio y el imperio fundados en la inmemorial o en la regalía. Por ello, el tema no estaba vinculado a los concordatos, sino a la observancia de un canon a partir de lo expuesto en un artículo de la Constitución y por ello el Congreso podía mandar

⁸⁵² AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 2/VIII/1832.

el cumplimiento de la norma. Alvarez acotó que no estaba interesado en que se reprobara el dictamen, pero tenía razones para creer que el Congreso no tenía competencia sobre el asunto. Se intentó votar el primer artículo: “El canónigo lectoral cumpliendo con lo dispuesto por el Concilio de Trento en el art. 1º del decreto de reforma sección 5ª explicará las Santas Escrituras.” Rivas intervino para decir que en 1800 el rey Carlos IV había mandado que los obispos y arzobispos cumplieran con las disposiciones del Concilio, quedando consignado el hecho en la ley 6ª, título 6º, libro 1º de la Recopilación de Indias.⁸⁵³

El 8 de agosto, Alvarez de nuevo intervino y entre otras opiniones manifestó que el Congreso solo podía decir al obispo que se le recordaba y encargaba que hiciera cumplir el canon de que se trataba. Entonces Peguero remarcó que la comisión no consultaba la interpretación del decreto del Concilio, sino que cumpliera la obligación que imponía. Entonces, Alvarez viró hacia algo que era nuevo dentro del debate y que ningún diputado había considerado, era el tema de que el obispado comprendía Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y parte del Estado de México. Es decir, la ley que pretendía imponer la legislatura tendría implicaciones en otros estados y ésta no les había consultado al respecto, lo que demostraba que el Congreso de Michoacán no era el soberano adecuado, dando a entender que eso era competencia del legislativo federal. Peguero no veía ningún perjuicio para los otros estados el que se mandara cumplir con la norma establecida y no era de temer reclamo alguno por parte de los gobiernos de los otros estados. En este escenario nuevamente Auriol se adhirió a la opinión de Alvarez, posicionándose en contra de sus homólogos Peguero y Rivas.⁸⁵⁴

Finalmente, se llevó a votación el artículo y fue aprobado por 8 votos contra 4, con ello continuaron las discusiones para perfilar el decreto que hiciera cumplir el canon. Éste fue publicado al día siguiente bajo las siguientes palabras: “El Canónigo Lectoral cumpliendo con la ley 6ª título 6º del libro 1º de la Recopilación de Indias, explicará las Santas Escrituras.” El decreto fue derogado en virtud de lo dispuesto por las leyes de Reforma.⁸⁵⁵

⁸⁵³ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 7/VIII/1832.

⁸⁵⁴ AHCEMO, Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 8/VIII/1832.

⁸⁵⁵ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes*, Tomo V, p. 60

El tema pone de manifiesto el limbo en el que se encontraban las relaciones entre las autoridades civil y eclesiástica, situación no resuelta por no existir una nueva negociación entre el gobierno federal y la Silla apostólica a través de un concordato. Las indefiniciones se mantenían porque estaba detrás toda una tradición de intervención, que después de la independencia, el gobierno mexicano no quería perder. A esta situación se debe agregar la diáspora de poder en las regiones y sus oligarquías con un origen en el sistema de intendencias, el cual fue madurando y se acentuó en los años 20's del siglo XIX. Al implantarse el federalismo la dispersión de la potestad quedó indefinida entre las autoridades federales y estatales en varios rubros, entre ellos la injerencia del gobierno civil en asuntos de la Iglesia en el marco de un Patronato no heredable.

Resultado de lo anterior, lo constituyó el camino que tuvo la discusión, primero si el Congreso local tenía potestad para intervenir respecto de la legislación eclesiástica, si correspondía a la federación, o si todo partía de la inexistencia de un concordato que regulara las relaciones entre la potestad civil y eclesiástica. Posteriormente, surgió la observación de si era apropiado que la asamblea legislara sobre un punto que podía tener implicaciones en los otros estados que componían el Obispado. De la misma manera se debe rescatar el posicionamiento de los eclesiásticos, para Auriolles el asunto tenía implicaciones de Concordato y ejercicio del Patronato, para Peguero y Rivas era la potestad que el gobierno civil tenía para señalar el cumplimiento de los cánones y cuyo sustento era la Constitución local. El resultado del decreto deja ver que en efecto sólo se hizo el señalamiento, la legislatura entendía que no era conveniente sobrepasar los límites de algo que estaba indefinido.

Otro de los asuntos eclesiásticos que ocupara a la legislatura será el deanato de Martín Gil y Garcés, quien era oriundo de la ciudad de Coro en el obispado de Santo Domingo y Capitanía General de Venezuela, realizó estudios en el Seminario Tridentino y en la Universidad de Santa Rosa de la ciudad de Caracas. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Santo Domingo en donde estudió ambos derechos en la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo y en la cual obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en derecho canónico. Antes de posesionarse del deanato de la mesa capitular de Valladolid figuraba como prebendado del Cabildo catedral de la Iglesia Metropolitana de

Santa Fe de Bogotá. Fue nombrado Deán del Cabildo⁸⁵⁶ de Valladolid el 15 de agosto de 1810 tomando posesión del cargo a través del prebendado Manuel de la Bárcena el 12 de febrero de 1812, posición que desempeñó hasta su muerte en 1843. El nombramiento desde un inicio despertó recelos entre los miembros del Cabildo catedralicio, porque era extranjero y había obtenido la dignidad más importante del cuerpo aun cuando no era el primero de la lista.⁸⁵⁷

Gil y Garcés estuvo en Valladolid de 1812 a 1816 cuando salió de la ciudad, en 1822 todavía se encontraba fuera de la misma.⁸⁵⁸ El asunto no paró ahí, en 1826 el prebendado solicitó permiso para salir del obispado e ir a Tehuacán, Puebla, para restablecer su salud, pero en realidad pretendía viajar a Inglaterra. La mesa capitular se opuso y trató de impedir su partida y pidieron al gobierno federal su intervención para que asegurara la restitución de una pintura que había extraído sin estar facultado para ello. El cabildo le advirtió al Deán que de abandonar el país no gozaría de los frutos de su beneficio. Las órdenes que se emitieron para detener a Gil y Garcés era recogerle el pasaporte y hacerle regresar a su diócesis, lo cual no pudo efectuarse, pues el deán logró burlar a las autoridades para llegar a Londres, después pasó a París donde residió por cuatro años. En mayo de 1832 se supo que había regresado al país y se le hizo saber que el Cabildo le había privado de la dignidad por haber salido sin licencia y por ausentarse por más de cinco años sin establecer comunicación con el Cabildo Catedral. La decisión fue remitida al vicepresidente de la República y a los gobernadores de los cuatro estados que componían la diócesis.⁸⁵⁹

El Congreso del estado del Michoacán le había prohibido la entrada al Deán porque la noticia podía alterar la tranquilidad ya que se sospechaba que durante su estancia en Europa había tenido algún trato con el gobierno español.⁸⁶⁰

En primer lugar, el 8 de agosto de 1832 la mesa capitular solicitó al Congreso la suspensión de los procedimientos del Supremo Tribunal de Justicia

⁸⁵⁶ La asignación de los capitulares correspondía al rey de España a través del Consejo de Indias, pero a pesar de ser un derecho reservado a la corona era costumbre del Cabildo presentar a las autoridades reales una lista de tres candidatos con el número de votos a favor de cada presentado. OSCAR MAZÍN GÓMEZ, *El Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 200.

⁸⁵⁷ JUVENAL JARAMILLO MAGAÑA, *Una élite eclesiástica*, pp. 62, 184, 216,

⁸⁵⁸ *Ibíd.*, p.488

⁸⁵⁹ MOISÉS GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero gobierno*, pp. 43-44.

⁸⁶⁰ AHCEMO, Legislatura IV, Varios, Caja 2, Exp. 5.

en el recurso de fuerza interpuesto por Martín Gil y Garcés mientras que la legislatura no reglamentara la forma de proceder dicha situación.⁸⁶¹ En segundo lugar, el 19 de septiembre el Congreso discutía el dictamen de la comisión de justicia sobre la representación del apoderado de Dr. Martín Gil y Garcés para revocar el acuerdo que le prohibía la entrada al estado. Aurióles, Rivas y Alvirez dijeron que, aunque sabían que el prebendado había engañado para sacar todos los documentos con los que pretendía justificarse, era preciso votar por lo que consultaba el dictamen. Alvirez opinaba que el Congreso podía prohibir la entrada al prebendado si los miembros de la asamblea estaban convencidos de que venía a perturbar la paz, mientras que Navarro, por su parte, manifestó que la verdadera política consistía en la justicia y que esta parecía dictaba que se revocase el acuerdo de prohibir la entrada a Gil y Garcés a partir de la documentación del expediente. En el debate también intervino Peguero, quien externó que en un principio pensó en no tomar cartas en el asunto, pero luego cambió de parecer, pues solo quería que constara que él estaba a favor del dictamen porque se encontraba persuadido de que el cuerpo legislativo no podía tomar medidas en contra de Gil y Garcés. Finalmente se logró un acuerdo y el Congreso determinó que cesaba “la prohibición que es acuerdo de 25 de mayo del corriente año hizo entonces al Dr. Deán Martín Gil y Garcés.”⁸⁶²

A pesar de la resolución, el tema del despojo de la dignidad del Deán continuaba, el 24 de octubre de 1832 el eclesiástico Rivas dio lectura a una larga exposición que finalizaba así:

Pido pues al Congreso declare haber lugar a la formación de causa contra el Tribunal Supremo de Justicia= 1º Por haber despojado al Cabildo eclesiástico de la jurisdicción que le competía en la causa del deán Dr. Martín Gil y Garcés por las leyes y por la costumbre inmemorial de la Iglesia de Michoacán= 2º Por haberlo hecho oficiosamente excediendo al pedimento de la parte= 3º Por haber despojado al Gobernador de la Mitra de la Jurisdicción que tiene también por las leyes y los cánones para conocer por si mismo del negocio= 4º Por haberlo compelido para que automase especialmente al Vicario general a efecto de que conociese en esa causa siendo libre, por derecho el uso de esta facultad.⁸⁶³

La legislatura aceptó la acusación de Rivas y fue turnada a la sección del Gran Jurado. El 4 de noviembre Rivas dijo que había llegado a entender que la

⁸⁶¹ AHCEMO, Legislatura IV y VII, Actas secretas, Caja 2, Exp. 2, 8/VIII/1832.

⁸⁶² AHCEMO, Legislatura IV y VII, Actas secretas, Caja 2, Exp. 2, 19/IX/1832.

⁸⁶³ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 24/X/1832.

sección del gran jurado, en su mayoría, opinaba que no se admitiera la acusación hecha contra los Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, que declararon la fuerza que el Cabildo eclesiástico había ejercido en la causa del Deán Dr. Martín Gil y Garcés, quien había sido despojado de dicho Cabildo y del gobierno de la Mitra oficiosamente de su jurisdicción, por lo que rectificó su petición.

Pido al H.C. que en uso de la atribución 5ª del artículo 42 de la Constitución disponga se haga efectiva la responsabilidad en que incurrieron el Ministro del Tribunal Supremo de Justicia. Lic. José María Sánchez Arriola y los asociados Domingo Maciel, Juan Frutos de Olmos por haber despojado al Cabildo Eclesiástico y al gobernador de la Mitra del derecho que les competía a cada cual en su caso para conocer de la causa del Deán Dr. Martín Gil y Garcés, quebrantando en esto a las leyes y los cánones a sabiendas y por parcialidad.⁸⁶⁴

El presidente del Congreso no sabía si se debía presentar el dictamen del Gran jurado o dictaminar la nueva propuesta, a lo que Peguero, Villaseñor y Navarro opinaron que ésta debía pasar al gran jurado para su dictamen, lo que aprobó el resto de la legislatura. La acusación iba contra José María Sánchez Arriola, Domingo Maciel y Juan Manuel Olmos. Al respecto el Gran Jurado determinó que no había lugar a la formación de causa al ministro y asociados del Tribunal Supremo, los implicados asistieron al recinto legislativo y Sánchez Arriola tomó la palabra para defender al Tribunal apoyándose en varias disposiciones canónicas y principalmente en el Concilio Tridentino a efecto de probar que la mesa capitular no podía ni debía conocer de la causa del Deán y solicitó que en la resolución no votara Rivas por ser el acusador, ni Alvarez por haber colaborado en la causa del Deán. Olmos y Maciel apoyaron al Tribunal, éste último sustentó su intervención con autores canonistas como Benedicto XIV y la recopilación de las leyes de indias 1ª, título 11, libro 1, para señalar que el cabildo no había actuado conforme a derecho. El presidente del Congreso condujo la discusión hacia la participación de Rivas y Alvarez, este último pidió que se le excusara pues el asunto “se había hecho odioso”. Auriolles solicitó la participación de ambos diputados por ser los más instruidos en el asunto.⁸⁶⁵

El presidente de la asamblea dijo que la competencia de jurisdicción que se había querido entablar no tenía otro objeto que deprimir al estado, porque en

⁸⁶⁴ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 4/XI/1832.

⁸⁶⁵ *Ídem*.

ello obraba la intriga y el Tribunal había actuado correctamente al no exhibir los autos porque no había tal competencia, pues ésta solo era de jurisdicción y no habiéndola en el cabildo no era “más que una sed de querer anonadar a las autoridades del estado”. A la hora de la votación solo a Rivas se le permitió hacerlo, lo que dio un resultado a favor del dictamen de 11 contra 1, ese uno era el acusador.⁸⁶⁶ En medio del conflicto entre el deán y el Cabildo catedral debió mediar el recién electo obispo Cayetano Gómez de Portugal a quien le llevó un año restituirle la dignidad al Martín Gil y Garcés.⁸⁶⁷

El último de los asuntos relacionados con la autoridad eclesiástica fue la reapertura del Colegio de San Nicolás, que había sido fundado por Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro en 1540, con el objeto de formar clérigos para la evangelización. La institución permaneció en dicha ciudad hasta 1580, año en que fue trasladado a Valladolid en donde cerró sus puertas al igual que el Seminario Tridentino en 1811 por la revolución de independencia.⁸⁶⁸

A diferencia del seminario Tridentino, el Colegio de San Nicolás no reanudó actividades en 1819, pasó la independencia y llegó a la vida republicana cerrado, por lo que el constituyente José María Jiménez propuso su reapertura el 29 de julio de 1824.⁸⁶⁹ A finales de 1827, el Cabildo Catedral apoyó la creación de una escuela lancasteriana en el espacio del Colegio; sin embargo, para 1831 la escuela desapareció junto con la compañía de Lancaster, dando paso a la creación de las escuelas normales basadas en dicho método, para este momento, el inmueble también albergaba el cuartel de la milicia.⁸⁷⁰

Por esta razón, el 21 de noviembre se puso a discusión el dictamen de la comisión de Hacienda para que se autorizara al gobierno el gasto de hasta 1.200 pesos para dividir el Colegio de San Nicolás, una parte para la milicia y otra para las juntas normales. A Huarte le parecía bien, pero advirtió que siendo el Colegio de la inspección del Congreso “porque su fundador dispuso que el rey de España

⁸⁶⁶ *Ídem.*

⁸⁶⁷ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero gobierno*, p.44.

⁸⁶⁸ Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, Alma Lorena MARTÍNEZ ALCANTAR, *Breve Historia de la Instituciones de Educación Superior en Michoacán. Desde sus orígenes hasta 1950*, Morelia, Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, Editorial Morevallado, 2006, pp. 22-24, 32.

⁸⁶⁹ *Actas y Decretos*, Tomo I, p. 178, 223.

⁸⁷⁰ AHCEM, Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 19/XI/1827, Legislatura I, II y III, Actas públicas, Caja 1, Exp. 4, 23/XI/1831. Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, Alma Lorena MARTÍNEZ ALCANTAR, *Breve Historia de la Instituciones*, p. 34.

tuviera el Patronato” era conveniente que el expediente volviera a la comisión. Es de advertir que en ese momento el patronato del Colegio estaba en manos del Cabildo Catedral de Morelia, pero el legislador puntualizaba que pertenecía al legislativo, por lo que propuso que por conducto del gobierno se solicitara a la mesa capitular los testimonios de la creación del Colegio de San Nicolás Obispo, de los documentos que apoyaban el Patronato y de los capitales para el pago de cátedras, lo cual fue aprobado por la legislatura. El 24 de ese mismo mes, el gobierno comunicó al Congreso estar enterado sobre la cantidad que se podía gastar en la división del Colegio.⁸⁷¹

Este fue el origen del debate para la reapertura del Colegio, la legislación al respecto no fue tan fluida, porque las discusiones de las reformas constitucionales mantuvieron muy ocupada a la asamblea. El 9 de mayo de 1832, la comisión de gobernación exponía ante el Congreso, que a través del gobierno se preguntara al Cabildo Catedral sobre las medidas convenientes para el restablecimiento de dicho espacio en su totalidad o en una parte.⁸⁷² El 27 de agosto, ya se encontraba el dictamen sobre el restablecimiento del Colegio de San Nicolás. Dentro de los puntos que llaman la atención se encuentra la financiación, las cátedras a ofertar y el tema del patronato de dicho espacio.

Antes de comenzar el debate del dictamen, el diputado Juan G. Puente expresó su inquietud por saber si los fondos que tenía el Colegio eran suficientes para su restablecimiento y sustento, pues se corría el riesgo de que por la oferta del Seminario y los pocos individuos que se dedicaban al estudio de las ciencias, una vez abierto no fuera concurrido. A lo que Rivas le contestó, que en su momento pensó que con los fondos del Colegio se podían procurar las cátedras de derecho en el Seminario, pero con ello se privaba al seminario de lo administrativo. Respecto a los fondos, el Superintendente establecía que había 2.000 pesos anuales cantidad que podía aumentarse, pero eso se conseguiría teniendo un individuo dedicado a hacer cobros. Auriol estaba de acuerdo con la apertura del recinto porque consideraba que el seminario ya no tenía capacidad para ofertar otras cátedras, pero era consciente de que los fondos de San Nicolás no eran suficientes, tomando en cuenta que solo contaba con sus propias rentas, por esa razón creía conveniente que se uniera al Seminario para

⁸⁷¹ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 21/XI/1832, 24/X/1832.

⁸⁷² AHCEMO, Legislatura IV, actas públicas caja 6, Exp. 2, 9/V/1832

ver si podían funcionar juntos. Otra traba que él veía era que no se encontraría un catedrático en química, por lo que tendría que traerse uno de fuera y por 400 pesos sería muy difícil encontrar uno instruido, aunado a los utensilios para llevar la parte práctica de la materia, pues la teoría sola no sería de mucha utilidad. Pablo Peguero, en calidad de presidente, consideraba que se debía restablecer el recinto y en caso de unirse al Seminario tendría que ser después de la apertura. El señor Rivas era de la idea que el Colegio saldría a flote con sus propias rentas, tal y como lo venía haciendo “antes de la revolución.”⁸⁷³

Otro punto que causó importantes debates fue el establecimiento de las cátedras. La primera que se pretendía establecer era la de Gramática latina. El diputado Auriolos consideraba que dicha materia podía substituirse por otra, ya que existían varios establecimientos que la tenían, pero Peguero expuso que no se podía variar porque esta constaba en el testamento del fundador y debía respetarse su voluntad. Rivas decía que había propuesto el restablecimiento de la cátedra de gramática latina por respeto a la voluntad del fundador pero que era de la idea de que podía substituirse por otra.⁸⁷⁴ No obstante los argumentos, se aceptó la impartición de la cátedra.

Una de las discusiones más amplias sobre el dictamen para la apertura del Colegio surgió por el artículo en que se permitía al Cabildo catedralicio hacer el nombramiento de Rector, Vicerrector, catedrático de Gramática, Lógica, Matemáticas, Física y Química. El diputado Rivas leyó un discurso al respecto en el que analizaba las disposiciones del fundador del Colegio y la situación acerca del patronato entre el Cabildo eclesiástico y la Audiencia de México, cuyo asunto había quedado pendiente por más de 240 años, por lo que creía conveniente que la cuestión fuera resuelta por el poder judicial, pero entre tanto eso sucediera, para no entorpecer la apertura del establecimiento estaba de acuerdo que el Cabildo catedral continuara con los nombramientos de los empleados.⁸⁷⁵

⁸⁷³ AHCEMO, Legislatura IV, Caja 6, Exp. 3, 27/VIII/1832.

⁸⁷⁴ AHCEMO, Legislatura IV, Caja 6, Exp. 3, 29/VIII/1832. De acuerdo con Ricardo León Alanís, dicha cátedra fue de las primeras en instalarse, ya que desde su fundación, el Colegio contó con un lector de Gramática que enseñaba la lengua latina tanto a estudiantes españoles y a no colegiales indígenas. Ricardo LEÓN ALANÍS, “La erección de cátedras en el Colegio de San Nicolás durante el siglo XVIII”. *Tzintzun. Revista de Estudios Históricos*, Morelia, Universidad Michoacana, Julio- Septiembre de 2002, No. 36. Pp. 54-55.

⁸⁷⁵ AHCEMO, Legislatura IV, V y VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 18/X/1832.

Por su parte, el diputado Peguero consideraba que la mesa capitular debería continuar con el Patronato de la institución. Mientras que Isidro Huarte trajo a colación el patronato que el monarca español había recibido en calidad de soberano, argumentando que los nombramientos que el Cabildo había hecho no eran en calidad de patrono, sino ejerciendo la facultad como encargo, por lo que consideraba que el legislativo detentaba el patronato respecto de la institución y no debía desprenderse de él, y por consiguiente los nombramientos del Colegio debía de hacerlos el gobierno. De nuevo surgía la discusión sobre a quién pertenecía el patronato una vez producida la independencia. Incluso en un tema menor como podía ser la reapertura de un Colegio. El diputado José María Navarro consideraba que el asunto era competencia del poder judicial y no del legislativo. Mientras que Peguero argumentó que el soberano no podía adjudicarse un derecho que se había vuelto contencioso y por tanto el Congreso debía poner el ejemplo del respeto a las leyes, esperando a que el asunto lo resolviera el tribunal; mientras tanto se podía restablecer el Colegio, nombrando el cabildo a los empleados, sin que eso significara que el gobierno se desprendía de ese derecho. Finalmente se sometió a votación y quedó aprobada la intervención del Cabildo en el nombramiento de los empleados, para esa ocasión.⁸⁷⁶

También llama la atención el tratar de establecer un catedrático en lengua vulgar, para enseñar las pruebas y los fundamentos de la Religión católica. Peguero consideraba muy conveniente la enseñanza de estas materias para que los jóvenes se fortificaran contra la falsa Filosofía “que desgraciadamente se va introduciendo entre nosotros”.⁸⁷⁷ Aquí cabe preguntarse si acaso el eclesiástico se refería a libertad de cultos, de ser así se infiere que Peguero a pesar de ser uno de los legisladores más instruidos de su época, su profesión le conducía a la intolerancia religiosa.

El 8 de noviembre de 1832 se restableció sobre el papel, el Nacional y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, con las plazas de rector, vicerrector, catedrático de Gramática latina, Lógica y matemáticas, de Física y Química, de Fundamentos de la religión católica, Derecho natural de gentes y político, de Derecho canónico y civil, y uno más de Economía política. Así mismo, se

⁸⁷⁶ *Ídem.*

⁸⁷⁷ AHCEMO, Legislatura IV, V y VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 26/X/1832.

destinaba el sueldo de la antigua cátedra de Teología escolástica a una academia de Derecho teórico-práctico. Se otorgaría a los catedráticos un sueldo de 400 pesos, ello mientras se aumentaran las rentas del Colegio. La cátedra de Economía política sería pagada por la Tesorería general ya que el profesor sería electo por el gobernador a partir de la terna que le presentaría el Consejo de gobierno.⁸⁷⁸ Se infiere que en el gobierno residiría el derecho de nombrar a todos los empleados del Colegio, pero en ese momento se le permitía al Cabildo eclesiástico la designación del Rector, vice-rector, catedrático de Gramática, Lógica, Matemáticas, Física, Química y Pruebas y los fundamentos de la Religión Católica. A excepción del Catedrático de Derecho y Economía política en la que el gobierno se reservaba el derecho.⁸⁷⁹

El Rector asumiría el cargo de Superintendente, sin que algún prebendado pudiera desempeñarlo, así mismo sería su tesorero y sería el responsable de rendir cuentas al Cabildo y este último daría el correspondiente informe al gobierno. La rendición de cuentas sería del Rector al Cabildo y de éste para el gobierno. Por otra parte, se nombraría un comisionado que tomase las cuentas de los individuos que, de 1810 hasta el nombramiento del Rector, hubiesen recogido caudales del Colegio, cuya rendición de cuentas tenía tres meses de plazo a partir de la publicación de dicha ley. Así mismo el gobierno nombraría otro comisionado encargado para el pronto restablecimiento del Colegio. Respecto a los estatutos del mismo, estos debían estar terminados a los seis meses de abierto el recinto educativo.⁸⁸⁰

Ramón Alonso Pérez Escutía asevera que el deseo de devolverle a la ciudad su tradición académica, condujo a los círculos gobernantes y de la sociedad a una abierta confrontación con el Cabildo Catedral, parte del cual se resistía a la apertura del Colegio con un perfil secular. A pesar de los deseos y la legislación, los vaivenes políticos retrasaron su reapertura significativamente, por lo que hasta el 12 de diciembre de 1844 el gobierno en turno no logró restablecer dicha institución.⁸⁸¹

⁸⁷⁸ Amador COROMINA, *Recopilación de leyes*, Tomo V, 1886, p. 68.

⁸⁷⁹ *Ibíd.*, p.68-69.

⁸⁸⁰ *Ibíd.*, p. 69-70.

⁸⁸¹ Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, Alma Lorena MARTÍNEZ ALCANTAR, *Breve Historia de las instituciones*, pp. 34-35.

Sin duda, la participación de los eclesiásticos es muy importante en este Congreso, no sólo en número, sino porque la legislatura abordó el tema de la reforma constitucional, en ella, los eclesiásticos dieron muestra del conocimiento que tenían de teoría política, de los mecanismos de acceso al poder, de su concepción sobre la sociedad en la que vivían, al tiempo que mostraron preocupación y trataron de fortalecer el sistema federal. Esta fue una legislatura que contó con la participación de diputados experimentados, pues al lado del Rivas, Peguero y Auriolles, se encontraba otro hombre de muchas luces, el abogado Isidro Huarte que había sido constituyente en 1825.

A su vez, es necesario recordar que en los temas relacionados con la religión o a la política eclesiástica, este grupo de diputados se mostraron defensores de las causas, como es el caso de Rivas frente al asunto del Deán Martín Gil y Garcés, o Peguero que estaba en contra de la libertad de cultos, pero que como siempre buscaba las palabras más precisas para evitar señalamientos.

CAPÍTULO VIII

HACIA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE GOBIERNO: LA QUINTA Y SEXTA LEGISLATURA MICHOACANA

8.1. Joaquín Ladrón de Guevara en el quinto Congreso de Michoacán

8.1.1. Michoacán y la defensa del sistema federal

Cuando el gobierno federal aceptó los convenios de Zavaleta⁸⁸² en diciembre de 1833, la cuarta legislatura de Michoacán estaba destinada a desaparecer, pues uno de sus postulados consistía en convocar a elecciones para integrar nuevas legislaturas y que estas quedaran instaladas a mediados de febrero de 1833. Pero al calor de los hechos, en Michoacán el gobierno de los “hombres de bien” terminó a principios de enero de 1833, pues la guarnición de Morelia se había pronunciado a favor del movimiento encabezado por Gómez Pedraza, lo que impidió al cuarto Congreso cumplir con lo estipulado por los convenios de Zavaleta. Todo lo anterior se tradujo en la disolución de la legislatura, el desconocimiento de Diego Moreno como gobernador el 15 de enero y el regreso de José Trinidad al gobierno de Michoacán, quien se encargó de convocar a elecciones para el nuevo Congreso que se integró por hombres de creencias liberales y algunos miembros de la facción yorkina.⁸⁸³

La quinta legislatura funcionó de febrero de 1833 a diciembre de 1834 y en ella solo había resultado electo el presbítero Joaquín Ladrón de Guevara. ¿Cómo entender la elección del eclesiástico cuando en las últimas tres legislaturas estos hombres habían tenido una importante presencia? La explicación reside en que desde mediados de 1832 los ataques al clero se volvieron recurrentes en la prensa nacional “señalándolo como el principal baluarte del despotismo y que debía mantenerse a los curas alejados de la política” se proponía abolir el diezmo y prohibir a los ministros de Dios el acceso

⁸⁸² Los convenios de Zavaleta fueron firmados el 23 de diciembre de 1832, su objetivo era terminar con la rebelión iniciada el 2 de diciembre de 1832. El ejército se asume como garante de la República y se reconoce como presidente a Manuel Gómez Pedraza como presidente de México hasta el 1º de abril de 1833. Los promotores fueron Antonio López de Santa Ana, Manuel Gómez Pedraza y Anastasio Bustamante. María del Carmen SALINAS SANDOVAL, *El primer federalismo*, p. 40.

⁸⁸³ Jaime DÍAZ HERNÁNDEZ, *Orden y desorden*, p. 137.

al Congreso.⁸⁸⁴ El regreso de Salgado a la gubernatura estatal y la salida de los “hombres de bien” del gobierno estatal fueron factores que cerraron las puertas a los eclesiásticos de la asamblea local. El hecho será significativo porque Ladrón de Guevara difícilmente tendría aliados dentro de la legislatura, más cuando se afronten las reformas de Valentín Gómez Farías y el papel de los eclesiásticos sea cuestionado.

De acuerdo con los convenios de Zavaleta, Gómez Pedraza quedó a cargo del ejecutivo federal hasta el 31 de marzo de 1833. Las elecciones para su sucesor ya daban un virtual ganador el 15 de marzo, en escrutinio oficial el 30 del mismo mes resultaron electos Antonio López de Santa Anna como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente, pero el virtual titular del ejecutivo advirtió el panorama adverso para sus aspiraciones, por lo que bajo pretexto de problemas de salud dejó el cargo en manos de Gómez Farías.⁸⁸⁵

Una de las ideas que afloraban en para estos momentos consistía en replegar al clero hacia su esfera original y con ello despojarlo de su influencia en el orden político y social, lo primero era acabar con el fuero y minar su fuerza e independencia, para ello se hacía preciso la incautación de sus bienes. La base para que esas ideas se concretaran residían en el Patronato, a principios de mayo de 1833 el senado envió una propuesta a la cámara de diputados de que el Patronato de la Iglesia mexicana residía radicalmente en la nación. El Congreso nacional determinó por una mayoría muy estrecha que el patronato era inherente a la nación, lo que abrió la puerta a un proceso de reformas que tenían como objetivo principal el sometimiento del clero frente al estado y el debilitamiento de su poder. Los decretos federales que modificaban la función y el gobierno de la Iglesia aparecieron entre el 17 de agosto y el 24 de diciembre de 1833, entre lo que destaca la secularización de la educación, la reducción de días festivos, incautación de propiedades del clero, la abolición del fuero eclesiástico y del pago civil del diezmo, supresión de canonjías y la orden de proveer los curatos vacantes.⁸⁸⁶

⁸⁸⁴ Michael P., COSTELOE, *La primera república*, p. 339.

⁸⁸⁵ *Ibíd.*, pp. 365-368.

⁸⁸⁶ Fernando PÉREZ MEMEN, *El Episcopado*, pp. 281-292.

Las disposiciones mantuvieron mucha tensión no solo dentro del gobierno federal, ésta se trasladó a los gobiernos estatales pues no solo debían vigilar que la norma se cumpliera, sino que tuvieron que afrontar los daños colaterales de las disposiciones. En el contexto michoacano, una de las primeras acciones que realizó la quinta legislatura estatal fue declarar nulo al tercer Congreso en su segundo año legislativo instalado en agosto de 1830 por lo que sus acciones se sometieron a revisión. A pocos meses de que las nuevas autoridades estatales asumieran funciones, el 26 de mayo de 1833 estalló una nueva sublevación de la guarnición que yacía en Morelia bajo las órdenes de Ignacio Escalada, aparentemente como reacción a las medidas de corte liberal que pretendía impulsar Valentín Gómez Farías. El plan de Escalada contemplaba aspectos del orden nacional y local, uno de sus postulados declaraba nulos todos los actos de los gobernadores Amezcua y Salgado sostenía la religión católica y los privilegios del clero y del ejército proclamando a Santa Anna como protector de la causa. Moisés Guzmán refiere que Escalada mencionó al clero y al ejército como estrategia para no verse rechazado por estas dos instituciones pues su verdadero objetivo era desacreditar a Salgado por sus tendencias liberales federalistas.⁸⁸⁷

Como consecuencia del levantamiento, Salgado fue encarcelado y la quinta legislatura de Michoacán se instaló en Celaya a mediados de junio de 1833 con el respaldo del ejecutivo federal y de la legislatura de Guanajuato. Al respecto, el 17 de junio, Guevara propuso se comunicara la acción a las diversas instituciones en el estado incluido el obispo y el Cabildo catedral. De acuerdo con las actas secretas, las principales preocupaciones de la legislatura durante su estancia en Celaya, serán la defensa del sistema federal, el sustento de las instituciones michoacanas y la captación de recursos para su manutención. El 18 de junio de 1830 en la ciudad de Celaya, se convocaba a sesión secreta extraordinaria y de inmediato se pasó a la propuesta de los diputados Santoyo, Tena, Ceballos, Dueñas y Serrano para nombrar encargado del poder ejecutivo del estado de Michoacán y las atribuciones de que gozaría mientras estuviera impedido el gobernador propietario y resultó electo el licenciado José María Sánchez Arriola y para interino Ramón Sánchez. Arreglado el asunto del

⁸⁸⁷ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*, pp. 139-141. Moisés PÉREZ GUZMÁN, *Las relaciones clero gobierno*, pp.54-58.

encargado del ejecutivo el diputado Silva propuso no se reconociera por el estado autoridad alguna en el individuo qué actualmente se decía encargado del ejecutivo. El diputado también aprovechó para solicitar 94 pesos que había facilitado para gastos del Congreso, entonces se acordó que los 600 pesos de que disponía la legislatura se repartirían entre los legisladores una vez que se hubiesen deducido los gastos de la secretaria y los hechos por Salgado. Por su parte Santoyo propuso se solicitara un préstamo al gobierno de Guanajuato de 4 000 pesos sustentado en la orden que había dado el presidente de la república. El 19 de junio Ríos propuso que con urgencia se estableciera comunicación con el prefecto del oriente para que reuniera la mayor cantidad de caudales en existencia del departamento y la pusiera en el pueblo de Maravatío para que a su vez se solicitara a Luis Cortázar una escolta que custodiara los caudales durante su traslado de Maravatío a Celaya.⁸⁸⁸

El día 20 la legislatura recibió comunicados de felicitación por su traslado a Celaya del jefe político, el ayuntamiento, el tribunal de circuito y del cura párroco de la ciudad. Ese mismo, el diputado Carrasquedo pedía que se le transcribiera al gobernador de Guanajuato la nota que se había dirigido al comisario general Cortázar en que se le pedían auxilios pecuniarios, lo que quedó como acuerdo. Ese mismo día Silva y Santoyo presentaron una propuesta para que al ejecutivo del estado se otorgaran facultades extraordinarias y negociara un préstamo que no excediera de 50 000 pesos, para obligar a los ciudadanos a prestar las armas útiles para la milicia cívica, para equipar 2 000 hombres incluidas las compañías existentes, para trasladar al tesorero del estado y empleados de la Hacienda pública fuera de Morelia, también pedían facultades para desterrar a los sospechosos de infidencia en el estado, para prohibir las reuniones o actos maliciosos en contra del sistema federal y para que las causas criminales fueran dictadas por la primera instancia por imposibilidad de los tribunales de recibirlas, la prerrogativa se ejercería por tres meses o hasta el regreso de los poderes a la capital michoacana.⁸⁸⁹

⁸⁸⁸ AHCEMO, Legislatura V, Actas secretas borradores, Caja 2, Exp. 6, 17/VI/1833, 18/VI/1833, 19/VI/1833.

⁸⁸⁹ AHCEMO, Legislatura V, Actas secretas borradores, Caja 2, Exp. 6, 20/VI/1833.

Ante la situación de la legislatura los lazos de solidaridad se manifestaron, el 25 junio el subprefecto de Pátzcuaro comunicaba al Congreso que el Ayuntamiento de aquella ciudad se ofrecía para albergar al legislativo, un escrito similar recibió del tercer batallón cívico y de los vecinos de Zinapécuaro. El problema era que el titular del legislativo aun no se presentaba y por tanto no se podían tomar decisiones. El 28 de julio se admitía la renuncia de Arriola como titular del ejecutivo por lo que se presentó el suplente Ramón Sánchez, quien debió emitir algunos acuerdos que la legislatura ya había tomado. Como dato adicional, el tema de la inestabilidad política-institucional no solo había causado estragos en la legislatura michoacana, por fechas similares su homóloga de Querétaro acababa de restablecerse, cuando el Congreso estatal se enteró, ordenó se le enviaran felicitaciones.⁸⁹⁰

Una vez el ejecutivo en funciones, entre el día 28 y el 29 por propuesta de Silva y Santoyo, el Congreso le otorgó facultades extraordinarias de toda clase a excepción de la imposición de la pena capital para mantener las instituciones federales.⁸⁹¹

El 30 de junio, la diputación de la legislatura de San Luis Potosí contestó de enterada del traslado del Congreso michoacano a Celaya y de la misma forma ofreció la ciudad de San Luis o cualquiera otra de ese estado para su asilo y cuantos recursos fueran necesarios. Ese mismo día el gobierno de Guanajuato le comunicó a la legislatura que podía librar 2 000 pesos para sus gastos por ahora y los otros 2 000 se le entregarían cuanto antes.⁸⁹²

Más tarde, reunidos doce diputados, presidiendo la diputación permanente compuesta por Zincunegui, Guevara, Tena, Ceballos y Santoyo se procedió a la renovación de oficios para abrir el segundo periodo de sesiones ordinarias. El 1º de julio conforme a la reforma de la Constitución, resultó electo presidente Tena, vicepresidente Carrasquedo, primer secretario Zincunegui, segundo secretario Santoyo y como secretario suplente fue votado Ceballos. Entre los diputados que legislaron en Celaya se encuentran: Zincunegui, Guevara, Tena, Ceballos, Santoyo, Ríos, Calvo Pintado, Carrasquedo, Dueñas,

⁸⁹⁰ AHCEMO, Legislatura V, Actas secretas borradores, Caja 2, Exp. 6, 25/VI/1833, 28/VI/1833.

⁸⁹¹ AHCEMO, Legislatura V, Actas secretas borradores, Caja 2, Exp. 6, 28/VI/1833, 29/VI/1833.

⁸⁹² AHCEMO, Legislatura V, Actas secretas borradores, Caja 2, Exp. 6, 30/VI/1833.

Serrano y Cendejas.⁸⁹³ Mientras que en Morelia el ayuntamiento nombró como encargado del gobierno a José Antonio Pérez Gil.

Ante tal escenario, el gobernador del estado de Guanajuato solicitó al Cabildo catedral que sirviera de mediador para que Escalada dejara en libertad al gobernador lo que a final de cuentas no dio resultado. En ese momento los cabildos civil y eclesiástico hicieron frente al vacío de poder, Escalada solicitó al Ayuntamiento de Morelia que convocara a una junta vecinal para obtener recursos y sostener a la guarnición, el gobierno de la ciudad se negó porque ello conllevaba infringir la Constitución del estado. El Cabildo catedral asumió otra actitud y asistió a la junta en la que Escalada le solicitó apoyo para la causa, la corporación otorgó una raquítica cantidad, a principios de julio el sublevado salió de la capital michoacana y fue derrotado en el Monte de las cruces el 14 de julio de 1833. Con la salida de Escalada de la capital michoacana, la asamblea regresó y Salgado continuó como titular del ejecutivo. Por su parte, la actitud de las autoridades eclesiásticas frente al conflicto hizo dudar de su lealtad a las autoridades federales.⁸⁹⁴

El 1º de julio se recibió una comunicación extraordinaria del juez de distrito de Michoacán notificando la fuga de Escalada con todos sus cómplices, por lo que Morelia había quedado libre, entonces la legislatura determinó comenzar sus trabajos en la capital michoacana el día 8 de ese mismo mes. El 5 de julio de 1833, ya en la ciudad de Morelia “después del atentado cometido por Don Ignacio Escalada contra el sistema representativo popular federal bajo el hipócrita velo de la religión”, lo primero que hizo la legislatura fue asistir a la Catedral al solemne Te Deum que cantó el deán en acción de gracias al todo poderoso por el feliz regreso de la legislatura al seno del estado y de ahí se pasó al palacio de sesiones al que asistieron ocho diputados: Tena, Carrasquedo, Guevara, Ceballos, Ríos, Silva, Zincunegui y Santoyo, con asistencia del Gobernador, Tribunales Supremo y Superior Tribunal de Justicia y el Ilustre Ayuntamiento.⁸⁹⁵

El 22 de julio de 1833 la legislatura del Estado de México comunicaba su acuerdo de trasladarse el legislativo y ejecutivo a la ciudad de Lerma para

⁸⁹³ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 1/VII/1833.

⁸⁹⁴ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones Clero gobierno*, pp. 54-55.

⁸⁹⁵ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 30/VI/1833, 1/VII/1833, 5/VII/1833.

protegerse de las incursiones de los enemigos, pues tenían noticia de que Escalada se aproximaba a Toluca.⁸⁹⁶

De vuelta en Morelia, el Congreso tenía dos grandes tareas, la primera, afianzar el sistema político a través de órdenes y disposiciones que castigaran a los detractores del federalismo; la segunda consistía en atender la epidemia del “Cholera morbus”. El 10 de julio de 1833, la enfermedad asolaba a la capital michoacana y partes del estado, en esos momentos la legislatura discutía el otorgamiento de facultades especiales al ejecutivo para que con consejo del protomedicato contuviera la epidemia, ya con antelación la legislatura había dado la anuencia al gobernador para que hiciera uso de los recursos comunes y combatir el evento. Una de las disposiciones que emitió al respecto el gobernador llegó a la mesa del legislativo el 19 de agosto, el titular del ejecutivo impuso multas a los facultativos en medicina que no asistieran a los enfermos. El 9 de agosto, el diputado Ceballos pedía se le otorgara licencia al legislador Dueñas para que fuera a Zinapécuaro a desempeñar la comisión del gobierno usando de sus conocimientos médicos con el objeto de evitar en lo posible los estragos del cólera. Zincunegui no estaba de acuerdo porque iba al lugar al que residía su familia y porque era posible que un practicante tuviera más conocimientos de medicina que el diputado, Carrasquedo apeló por la necesidad de que Dueñas fuese a Zinapécuaro a cumplir con la comisión sobre salud pública sin que fuera privado de sus dietas.⁸⁹⁷

El problema que representaba la epidemia condujo a que el 14 de agosto, la asamblea acordara el modo de cubrir la falta del gobernador en caso de que contrajera la enfermedad, en el mismo acto se decidió que fuera el Prefecto del norte por nombramiento del gobierno, en defecto de éste quedaría a cargo el presidente del Congreso y en su receso la diputación permanente hasta que el Congreso pudiera hacer otro nombramiento. La asamblea cerró sus trabajos por casi un mes debido a que algunos diputados habían contraído la enfermedad. El 16 de septiembre ésta se reunió para continuar con su labor legislativa pues ya se contaba con la mayoría de diputados que marcaba el reglamento interno.⁸⁹⁸

⁸⁹⁶ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 22/VII/1833,

⁸⁹⁷ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 10/VII/1833, 9/VIII/1833, 19/VIII/1833.

⁸⁹⁸ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 14/VIII/1833, 16/IX/1833.

Después de superado el problema de salud pública, la legislatura trató varios temas, pero destacan los debates y disposiciones encaminadas a la conservación del sistema federal y al tema de la religión.

El 8 de julio de 1833, después de regresar a Morelia, al interior del Congreso se dio lectura a un oficio de Puebla en el que pedía a esta legislatura su cooperación para sostener el sistema de gobierno vigente que había sido atacado por Escalada, Arista y Durán, para ello proponía que los estados se apoyaran mutuamente en la obtención de toda clase de recursos para repeler los terribles ataques al sistema. La legislatura ordenó se le contestara que ésta estaba invadida de los mismos sentimientos, por lo que la petición se había pasado a una comisión para deliberar al respecto⁸⁹⁹

Al continuar la sesión, de inmediato, el diputado Silva propuso que sin pérdida de tiempo el gobierno hiciera que en el estado se ratificara solemnemente el juramento de guardar y hacer cumplir la Constitución federal y la particular del estado por parte de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares con las solemnidades que marcaba la ley y los que se resistieran a ello serían refutados como traidores a la patria y enemigos de la “República Católica”, a esta propuesta se le unió el legislador Santoyo. Al día siguiente, se daba lectura a un proyecto de ley en el que Michoacán declaraba destructor del sistema federal adoptado por la nación al pronunciamiento de Mariano Arista, Gabriel Durán e Ignacio Escalada y en tal caso declaraba reo de alta traición a todo aquel que de palabra o por escrito realizara ataques al sistema de gobierno, tal delito causaba desafuero y sería castigado con la pena de muerte adoptando la ley de 28 de agosto del gobierno federal. Si las autoridades faltaban a la presente norma serían destituidos de su empleo y multadas de 200 a 500 pesos y de no tener para la multa la pena se pagaría con encarcelamiento. La deliberación de la propuesta seguramente llegó a oídos del tesorero del estado, quien el 12 de julio hizo llegar una exposición al Congreso en la que explicaba los motivos que lo habían obligado a quedarse en Morelia durante el tiempo que los sublevados habían permanecido en la ciudad, por lo que se acordó se emitiera un dictamen sobre la conducta del funcionario.⁹⁰⁰

⁸⁹⁹ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 8/VII/1833.

⁹⁰⁰ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 8/VII/1833, 9/VII/1833, 12/VII/1833.

El 22 de julio, se leyó y se puso a discusión el dictamen de la propuesta de Santoyo, para que no se permitiera en Michoacán la introducción de expulsos de otros estados por desafectos al sistema federal. El diputado Zincunegui pedía cautela porque no estaba seguro si el Congreso local tenía esa potestad o por ley le pertenecía al Supremo Gobierno de la Unión, lo que no significaba que estuviera en contra de la proposición. Silva y Ceballos no veían oposición, al contrario, percibían que la petición estaba en concordancia con los postulados federales. El 24 de julio se presentó la proposición de los diputados Santoyo y Puga comprendida en cinco artículos que pedían que los empleados del estado, eclesiásticos, civiles y militares que habían tomado parte directa o indirecta en la conspiración del traidor Escalada el 26 de mayo fueran declarados sin derecho alguno de los destinos que actualmente ocupaban y a consecuencia, las vacantes serían provistas en un término de 15 días, dejando en manos del gobierno la sanción del delito. A raíz de lo expresado se haría una misiva al Congreso general para que los empleados de la federación que sirvieran en el estado y hubiesen apoyado el movimiento de Escalada también fueran removidos de sus empleos. Finalmente, todos los comprometidos quedaban imposibilitados moralmente para optar por algún empleo en el estado.⁹⁰¹

Ese mismo día continuó la discusión de la propuesta de Santoyo, referente a que en Michoacán no se admitieran individuos desafectos al sistema federal o que fueran expulsos de otros estados, distrito o territorio de la federación. De nuevo, el problema en la discusión era si el Congreso local tenía entre sus atribuciones esa facultad de acuerdo con el diputado Calvo Pintado, mientras que el diputado Silva apoyaba la propuesta. El 27 de junio continuó el debate, el diputado Zincunegui estaba de acuerdo, pero trajo a colación lo ya manifestado sobre las facultades del gobierno federal y del Congreso respecto al tema. Silva tomó la palabra para sustentar que el Congreso general concedía a los estados la facultad de imponer la pena del destierro a los hijos del país, entonces, no veía problema en impedir la entrada de extraños que no eran buenos para la tranquilidad pública, Zincunegui entre otras observaciones destacó que la propuesta atacaba la libertad de opinión del ciudadano con la palabra “desafectos”, “que bien puede uno que sea de la opinión contraria, centralista,

⁹⁰¹ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 22/VII/1833, 24/VII/1833.

pero que sea un buen federalista en sus operaciones sacrificando su opinión particular en favor de la sociedad.” El presidente del Congreso volvió al meollo del asunto de si el Congreso local podía emitir una ley de esa índole sin violentar las leyes federales. Por otro lado, no veía la falta que mencionaba Zincunegui, porque por desafectos debería entenderse a los hombres que con hechos fueran en contra del sistema. Para evitar confusiones la comisión sustituyó la palabra desafectos por enemigos del sistema, lo que fue aprobado y decretado el 30 de julio.⁹⁰²

El 21 de octubre de 1833 llegó al recinto legislativo una solicitud de José Joaquín Domínguez para que la legislatura interpusiera su influencia y respeto con el Supremo Gobierno de la Unión y fuera indultado de la pena correspondiente por haberse involucrado en la revuelta de Ignacio Escalada contra las instituciones federales, la solicitud pasó a la Comisión de Justicia.⁹⁰³

La defensa del federalismo como sistema de gobierno era una constante, pero el Congreso intuía que para continuar con su lucha era preciso la colaboración con sus homólogas más cercanas por la geografía y por las relaciones añejas que existían entre ellas. El 26 de marzo de 1834 recibió un oficio del gobierno de Guanajuato en el que manifestaba su buena disposición para realizar una coalición capaz de consolidar la paz y la seguridad del sistema para lo que era necesario obrar en conjunto. Se mandó pasar la comisión que tenía los antecedentes.⁹⁰⁴

Era claro que la asonada de Escalada había calado profundamente en los miembros de la legislatura, las medidas para prevenir todo tipo de movimiento en contra del sistema y el castigo a los involucrados en su traslado a Celaya serán uno de los temas más debatibles en su seno. El 29 de marzo de 1834 de nueva cuenta se leía un dictamen de la comisión de gobernación para que no se admitieran en el estado los individuos que se hubiesen pronunciado contra las instituciones federales por la asonada de Escalada.

A la par, la legislatura confiaba en que su propuesta de coalición prosperara, el 14 de abril se recibió un documento

⁹⁰² AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 22/VII/1833, 24/VII/1833, 27/VII/1833.

⁹⁰³ AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 21/X/1833.

⁹⁰⁴ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 26/III/1834.

Mandó la diputación permanente un oficio de la legislatura de San Luis Potosí contestando a la incitación que este Honorable Congreso la dirigió para que pusiera dos comisionados en Guanajuato con las instrucciones correspondientes para que se levantara un acta de coalición, dice no poder entrar en la que inició el 13 de enero por la legislatura de Michoacán a las cámaras en virtud de haber adoptado y concluido con la propuesta por el Supremo Gobierno de Jalisco.⁹⁰⁵

De entrada, San Luis Potosí no aceptó la propuesta de Michoacán porque ya tenía una especie de alianza con Jalisco, lo que refiere la importancia que tuvieron este tipo de pactos entre las legislaturas locales pues quince días después, el 29 de abril de 1834 la asamblea recibió un oficio de la gran comisión de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz en el que comunicaba la apertura de sus conferencias en Puebla el día 15 de abril con el objetivo de articular un plan de coalición entre las tres legislaturas.⁹⁰⁶

En realidad, se desconoce el origen y el objetivo de las comisiones porque la lectura de las actas no permite tener una mejor comprensión al respecto. Razón por la cual estos apuntes pretenden señalar la situación solamente.

El 7 de mayo de 1834 tuvo primera lectura y corrió trámites la propuesta que habían presentado los diputados Silva y Tena, en la que se pedía que se repitiera a las legislaturas de los estados de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas la invitación que se les había hecho por este Congreso para articular una coalición. De la que se tiene certeza que se integró al proyecto fue Guanajuato y asimismo el 16 de mayo el Congreso michoacano realizó votación para elegir al comisionado representante en la coalición, de entre Camarillo, Orozco, Tomás Canto, Gregorio Ceballos, Luis Gutiérrez y Guevara, después de varias rondas en el último escrutinio entre esos dos últimos diputados resultó electo Guevara por 5 votos a 3.⁹⁰⁷

Otro elemento que se debe destacar como parte de la defensa del federalismo fue el rumbo que tomó el tema de las reformas a la Constitución de 1832. El 13 de diciembre de 1833, la cuarta legislatura publicó que parte de las reformas constitucionales de 1832 que había aprobado, pues al desconocer a la tercera legislatura en su segundo año que fue la promotora de las mismas, la

⁹⁰⁵ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 29/IV/1834.

⁹⁰⁶ *Ídem*.

⁹⁰⁷ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 7/V/1834, 16/V/1834.

reforma quedaba suprimida, a la legislatura le llevó poco más de nueve meses llegar a una conclusión sobre el asunto, porque no sólo era el trabajo de reformas lo que se ponía en tela de juicio, sino todo lo legislado.⁹⁰⁸

De lo reformado al poder del judicial se omitió la tercera parte el artículo 13, en general este decía que en las tres salas del Supremo Tribunal se conocerían las causas promovidas primero contra el gobernador, segundo a los diputados del Congreso, vicegobernador, Consejeros, Secretario de despacho y tesorero general y las demandas civiles contra el gobernador, vicegobernador y Consejeros y el tercero que fue suprimido incluía las causas de responsabilidad de los jueces letrados y alcaldes y el cuarto que fue aprobado versaba sobre las diferencias suscitadas sobre negociaciones o pactos celebrados por el gobierno y sus agentes.⁹⁰⁹

Respecto de los legisladores, destaca la derogación del requisito de tener 30 años al tiempo de la elección, regresando el requisito a 25 años como marcaba el texto original. Del título del legislativo quedó supreso el artículo 15, que en el documento original era el 23, hablaba de la renovación del Congreso por mitad cada dos años, al suprimirse la reforma, la renovación se haría a partir de lo establecido por la Constitución local desde 1825, es decir cada bienio renovación completa. El artículo 22 que contemplaba el uso obligatorio de boleta para sufragar en las elecciones fue suprimido. Y por último, para votar y ser votado en las elecciones primarias en el primer caso “a los militares vivos les bastará dos meses residencia” y en el segundo “a los militares vivos les bastará la residencia de tres meses” fue eliminado.⁹¹⁰

⁹⁰⁸ El 4 de noviembre de 1833 Tena y Silva propusieron el nombramiento de una comisión encargada de revisar los decretos y extender dictamen sobre aquellos en que se considerara atacada la soberanía del estado y su Constitución particular, de igual forma pasarían a esta comisión las leyes y los decretos que el gobierno general. AHCEMO, Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja7, Exp. 2, 4/XI/1833. El decreto aprobaba las modificaciones realizadas a la Constitución de Michoacán de 1825 relativas a la Contaduría general del 4 de junio, de los artículos preliminares de 24 de octubre; al capítulo, 2º, título 4º sobre el poder judicial de 31 de agosto de 1832, exceptuándose la tercera parte del artículo 13 del 27 de diciembre y la correspondiente al título 1º, capítulo 2º sobre el poder legislativo con fecha de publicación de 27 de diciembre de 1832 exceptuándose los artículos 15 y 22, la última parte del 21, la del 23 y la 2ª del 26. Es de señalar que estos apartados ya no se explican porque han sido tocados en la tercera legislatura en su segundo año y en la cuarta. Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo VI, p. 78.

⁹⁰⁹ Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo V, pp. 64-65.

⁹¹⁰ *Ibíd.*, pp. 85-86.

Es notable que buena parte de las reformas fue aprobada y lo que fue eliminado justo correspondía a todas aquellas restricciones para limitar el acceso al poder. La cuarta legislatura al declararse incapaz de continuar con su trabajo legislativo ya no pudo convocar a elecciones y enmarcarlas en las nuevas disposiciones emanadas de la reforma constitucional. Por lo que para la elección de la quinta legislatura se adoptó la convocatoria de diciembre de 1828, a pesar de que la última ley electoral que se había promulgado era la del 5 de enero de 1831, pero, ¿por qué no se tomó la de 1831?, porque ésta tenía el mismo problema que la propuesta de reforma constitucional, había sido elaborada por la tercera legislatura en su segundo año, asamblea que había declarado anticonstitucional la elección de Salgado. Si a eso se añade que una de las primeras acciones de la quinta legislatura será la derogación de la tercera legislatura en su segundo año queda claro que el autor intelectual de la anulación de dicho Congreso fue Salgado, pues él fue quien convocó a la elección del nuevo legislativo. Bajo este contexto, las reformas constitucionales fueron vistas con malos ojos a partir de su origen, por ello se hacía necesario meditar su contenido y eliminar aquellos elementos que no concordaran con la realidad política del estado.

8.1.2. El fin de una discordia: el diezmo de conciencia

El proyecto de reforma que emprendió el gobierno federal referente al clero en la segunda mitad de 1833 tenía como objetivo combatir su influencia en los asuntos civiles como la educación y bienes raíces, a la par de abolir fueros y privilegios y con ello ejercer el patronato. Las autoridades eclesiásticas se mantuvieron beligerantes y las consecuencias de esa legislación se extendieron buena parte de 1834. Por ser el momento más álgido en cuanto a debates de temas eclesiásticos, los temas a priorizar son los diezmos, provisión de curatos vacantes y fuero y religión.

Después de la rebelión de Escalada, el provisor del obispado, 2 curas, 26 clérigos sueltos, 18 frailes, 3 legos de San Juan de Dios, un diácono y un subdiácono enviaron una representación a los gobernadores de Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí en la que daban su opinión sobre el embate que sufría la Iglesia al ponerse en vigor el Patronato que había acordado el Congreso

general, no sólo porque afectaba los fueros y privilegios, sino por el ataque a puntos del dogma que afectaban la esencia de la religión y pedían no obedecer el mandato a pesar del destierro o la muerte. La reacción por parte del gobierno de Michoacán no se hizo esperar y Salgado persuadió al Obispo Cayetano Gómez de Portugal para que cortara de raíz las ideas que se propagaban entre varios miembros del clero las que iban en contra de los preceptos federales de los cuales el Obispo había sido pártcipe como legislador del Congreso Constituyente federal, por lo que proponía su expulsión. El prelado se negó argumentando no tener facultades para obligarlos a abandonar sus beneficios eclesiásticos sin tener una formación de causa para ello.⁹¹¹ Bajo este escenario de tensión entre las autoridades civiles y eclesiásticas apareció uno de los decretos más agresivos para los obispados, la supresión del pago del diezmo como obligación civil.

Cuando el Congreso federal le dio participación de la gruesa decimal a los estados a través del decreto de diciembre de 1824 nunca imaginó que el gran perdedor fuese la federación, pues los estados vieron en este recurso un buen capital que les permitía sufragar importantes gastos de su administración y por ello trataron de tener un buen control del ingreso a través de juntas y contadurías de diezmos. Aunque lo anterior implicaba complicaciones, el verdadero origen de los problemas radicaba en la extensión territorial de los obispados y los estados, los cuales como ya se ha mencionado no tenían una correspondencia por lo que la distribución resultó un tira y afloja entre los estados, la federación y los obispados.

Existen dos interpretaciones para explicar la supresión del pago civil del diezmo para dejarlo como diezmo de conciencia, por un lado, Anne Staples dice que el decreto del 27 de octubre de 1833 se emitió en vista del desorden que imperaba en la distribución de las rentas decimales, ya que varios estados para el año de 1833 no habían recibido nada de lo que les correspondía según el decreto de finales de 1824.⁹¹² Por otro otra parte, se debe tener presente la existencia de sectores dentro de la sociedad mexicana que cuestionaban el poder económico-político y las inmunidades del alto y bajo clero porque frenaban

⁹¹¹ Moisés, GUZMÁN PÉREZ, *Relaciones clero gobierno*, pp. 59-60.

⁹¹² Anne STAPLES, *La Iglesia en la primera*, p. 125.

el desarrollo del país, por lo que la propuesta fue parte de un conjunto de disposiciones para minar el poder y la presencia de este sector en la sociedad.

El tema de liberar a la población civil del pago del diezmo no era algo que emergía de manera espontánea en 1833, ésta tenía como antecedentes la propuesta que había surgido en el Estado de México en 1827 y que solo quedó en un proyecto; en marzo de 1833 de nueva cuenta se presentó una iniciativa que contemplaba la abolición del cobro del diezmo, la que se concretó en el papel y en la práctica. Tiempo después, a pocos días de que saliera a la luz la ley federal que suprimía el pago de dicha contribución, Coahuila y Texas emitieron de manera muy sutil su abolición.⁹¹³

Como se ha tratado de ilustrar, la situación del gobierno michoacano no era la más holgada en materia financiera, en ocasiones el gobierno optó por pedirle préstamos al Cabildo catedral a cuenta del adeudo de los diezmos. Ejemplo de ello lo es la representación que elaboró el Cabildo, dando a conocer al gobierno las rebajas que se debían hacer a los capitulares, padres capellanes y demás dependientes de la iglesia, para entregarle de manera íntegra todo lo que se le adeudaba al gobierno local por concepto de diezmo.⁹¹⁴ En otro oficio, el gobernador solicitaba a la mesa capitular un préstamo de 8 mil pesos y con ellos cubrir sus urgentes necesidades, ofreciendo pagar la cuarta parte mensual de lo que le correspondía por sus novenos y vacantes.⁹¹⁵ En agosto de 1832, el gobernador el estado de Michoacán solicitaba al Cabildo catedral que le entregase la mayor cantidad de la que pudiese disponer ya fuera de los diezmos o de cualquier otro ramo en que tuviera participación el estado, pues ya no contaba con los recursos para socorrer a la guarnición que se encontraba la plaza.⁹¹⁶

En ocasiones el gobierno de Michoacán no pudo obtener su parte de los diezmos ni a cuenta de préstamos, la razón: las juntas de diezmos de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato tenían en su poder las rentas decimales que le correspondían al gobierno del obispado.⁹¹⁷ La situación se volvió más compleja cuando el Cabildo catedral se quedó sin recursos para darle su parte al estado

⁹¹³ Anee Staples, *La Iglesia en la primera*, pp. 114-115.

⁹¹⁴ ACCM, Libro de actas No. 50, 30/IX/ de 1828, f. 81-81v.

⁹¹⁵ ACCM, Libro de actas No. 52, 3/VIII/ de 1833, f. 23v-24.

⁹¹⁶ ACCM, Libro de actas No. 51, 14/VIII/ de 1832, f.144.

⁹¹⁷ Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Una elite eclesiástica tiempos de crisis*. p. 475.

de Michoacán, por lo que libró una letra a favor del gobierno en contra de la junta de diezmos del estado de Guanajuato; al no hacerse efectiva la letra, las autoridades estatales acordaron con el Cabildo catedralicio enviar al diputado Rafael Gómez de la Puente a Guanajuato para que hiciera efectiva la letra y liquidara las cuentas de los diezmos, finalmente si el resultado era positivo, los dos saldrían beneficiados. Rafael Gómez de la Puente logró su cometido, por lo que obtuvo dinero líquido para el gobierno estatal y finiquitó las cuentas de adeudo que tenía el gobierno de Guanajuato con la mesa capitular, el cual ascendía a \$137 751 pesos.⁹¹⁸

Como una forma didáctica de mostrar el comportamiento del diezmo se presenta un recuento de lo que entró a la clavería de la Catedral de Valladolid-Morelia por este concepto y la participación que tuvieron todos los involucrados de 1824 a 1835. En las entradas se debe tener presente que parte de ellas no solo correspondían a los productos diezmos en el año que se indica, van incluidos los pagos atrasados que los arrendatarios no pudieron presentar por las complicaciones que la guerra insurgente había significado para tal efecto.

Cuadro No. 12
El reparto de diezmos de 1824 a 1835.

Año	Entradas al obispado de Michoacán por concepto de diezmos	Federación	Michoacán	Guanajuato	San Luis Potosí	Estado de México
1824	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1825	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1826	229 922	-----	-----	-----	4 000	-----
1827	128 727	-----	17 000	-----	-----	-----
1828	135 170	8 000	70 000	-----	-----	4 000
1829	157 598	18 909	69 942	-----	-----	2 500
1830	124 048	14 364	65 442	-----	-----	-----
1831	150 727	-----	60 289	-----	-----	6 000
1832	164 245	-----	69 097	-----	-----	-----
1833	157 884	-----	76 704	-----	-----	-----
1834	96 928	15 296	24 184	-----	-----	-----
1835	136 125	3 820	2 075	-----	-----	-----
Total	1 481 374	60 389	454 733	-----	4 000	12 500

⁹¹⁸ ACCM, Libro de actas No. 50, 20/IV/1830. 8/I/1831, f. 212. 19/II/1831, 223v-224.

Cuadro de elaboración propia. ACCM, Legajo no. 163, 1826, f. 255-266. Legajo no. 166, 1822-1827, f. 304-307. Legajo 167, 1818-1828, f. 173-184. Legajo 168, 1829, f. 25-35. Legajo 169, 1828-1830, f. 207-218. Legajo 171, 1832, f. 113-124, 371-381 y 405. Legajo 172, 1798-1836, f. 51-70, 27. Legajo 174, 1833-1834, f. 116-138. Legajo 173, 1835, f. 354-385v y 191-191v.

El cuadro refleja la situación que imperaba en la repartición de diezmos en el obispado de Michoacán con respecto de los estados que lo integraban y la federación, pero se debe tener presente que de la gruesa decimal también eran patícipes el Obispo, el Cabildo catedral, el mantenimiento del culto en la catedral y de los hospitales e iglesias.

La distribución de las rentas decimales entre el obispado y la federación estuvieron fuertemente condicionadas por la actitud que habían asumido los gobiernos de los estados que integraban la diócesis, sobre todo San Luis Potosí y Guanajuato, quienes estaban reteniendo la contribución a través de sus Juntas de diezmos. El caso de Michoacán fue diferente, dado que tanto las autoridades civiles como eclesiásticas convivían en el mismo espacio geográfico, lo que le permitía al clero tener mayor control de su parte decimal y porque Michoacán en el tema de los diezmos no fue tan combativo como Guanajuato y San Luis Potosí. La prueba más palpable fue que estos últimos instalaron juntas de Diezmos y Michoacán solo puso un contador. La gran perdedora fue la federación que a pesar de tener un porcentaje de 11.1% sobre las rentas decimales, superior éste al de los estados que gozaban de un 8.6%, si se compara lo que salió de la clavería de la Catedral para la federación y para el estado de Michoacán, ésta recibió 9 veces menos de lo que obtuvo por ese concepto el gobierno estatal.

A pesar de las necesidades, la legislación sobre diezmos en Michoacán fue poca, para el periodo de esta legislatura destaca la del 13 de abril de 1833, cuyo origen estaba en las indefiniciones que presentaba el decreto de 7 de marzo de 1827 sobre las facultades del contador de diezmos que había generado varias interpretaciones, entonces se decretó que todos los Tribunales reconocieran al contador de Diezmos de Michoacán por fiscal del ramo en lo económico y judicial, por lo que advertía a los tribunales que esta figura podía gestionar y promover cuanto fuera necesario para beneficio del estado sin necesidad de presentar un poder, aunque había ciertos casos en los que tenía que obrar por medio de apoderados. Con la supresión del diezmo como obligación civil el panorama para el obispado cambiaría. El 27 de octubre de 1833, el gobierno

federal dejó al ciudadano “en la entera libertad para obrar en esto con arreglo a lo que su conciencia le dicte”.⁹¹⁹

Mientras que el obispo de Michoacán trabajaba en un nuevo proyecto de distribución de la gruesa decimal, el Congreso estatal debió emitir un decreto que arreglara el pago de adeudos existentes, en el que se determinó que el pago se cubriría por plazos determinados según las circunstancias de los morosos, los que no podían pasar de tres meses con un abono mínimo de 1000 pesos, esto fue decretado el 24 de febrero de 1834.⁹²⁰

El nuevo proyecto de distribución de diezmos del prelado Cayetano Gómez de Portugal fue enviado al Ayuntamiento de Morelia para que lo estudiara. A su vez, tanto el gobierno del estado y el propio Cabildo catedralicio manifestaron su desacuerdo por la publicación, éste último porque no le parecía bien la nueva distribución, pero a pesar de las opiniones, el obispo decidió sacarlo a la luz pública el 8 de marzo de 1834.⁹²¹ El proyecto de la nueva distribución de rentas decimales decía en su introducción:

Correspondiendo a la autoridad episcopal de que estamos investidos, el arreglo de las rentas eclesiásticas de nuestra diócesis, de que también somos ecónomos y administradores por los sagrados cánones: teniendo ya este carácter de eclesiástica la renta decimal: y entretanto que un concilio nacional dispone lo conveniente en la materia, para la uniforme observancia en todas las diócesis de la república; mandamos que dicha renta decimal se colecte y distribuya en este obispado, en los términos siguientes [...]⁹²²

El documento se componía de 6 artículos, en los que se establecía que el diezmo sería colectado en las parroquias de la diócesis, el cual se dividiría en cuatro partes: la primera destinada al Cabildo catedral mientras un concilio nacional no ordenara otra cosa, las otras tres partes se subdividían en seis, una de ellas se destinaría a las viudas, viejos y huérfanos, otra para la fábrica

⁹¹⁹ Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo VI, pp. 15-16. El decreto estaba integrado por tres artículos, el primero especificaba el cese de la obligación civil del pago del diezmo eclesiástico en toda la república, dejando al ciudadano en libertad de obrar en esto con arreglo a lo que dictase su conciencia; el segundo decía que del contingente con que debían contribuir los estados para los gastos de la Federación, se les rebajaría una cantidad igual a la que dejen de percibir de la renta decimal; el tercero estableció que el producto de diezmo computado en el último quinquenio sería la base para el arreglo de la indemnización de que hablaba el postulado segundo de la ley. Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación mexicana*, Tomo II, p. 577.

⁹²⁰ Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo VI, p. 83.

⁹²¹ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Las relaciones clero*, pp. 66-67.

⁹²² *Ibíd.*, pp. 206-207.

espiritual de las parroquias, dos partes para su párroco, otra para el seminario conciliar, la parte restante sería para la manutención del prelado y gastos de la visita pastoral.⁹²³

El cambio de diezmo de coacción por diezmo de conciencia fue un golpe significativo para el obispado de Michoacán, de acuerdo con un cuadro de ingresos realizado en 1843, ya cerrados los cuadrantes de los años críticos de transición, la gruesa decimal disminuyó considerablemente.

Cuadro No. 13

Ingresos decimales de la Iglesia de Michoacán. 1825-1843.

Año	Monto recaudado	Año	Monto
1825	57 259	1834	66 816
1826	122 262	1835	52 484
1827	112 332	1836	30 336
1828	118 583	1837	17 232
1829	124 191	1838	1 262
1830	103 755	1839	4 490
1831	132 767	1840	924
1832	117 632	1841	2 048
1833	118 211	1842	1 300
-----	-----	1843	300

Fuente: Juvenal JARAMILLO MAGAÑA, *Una élite eclesiástica*, p.477.

En un tipo de lamento, en la *Memoria de gobierno* que se presentó en enero de 1835 se establecía que los ramos que sostenía la Hacienda pública del estado de Michoacán eran tres: tabacos, diezmos y alcabalas. Lo anterior deja claro la importancia de los diezmos para el erario público, los cuales daban “cosa de sesenta mil pesos”.⁹²⁴ Al igual que Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí se vieron altamente beneficiados por los diezmos, por lo que en este caso los grandes perdedores fueron la federación y el alto clero del obispado de Michoacán, la primera porque fue la que menos dinero recibió por concepto de diezmos en este periodo y el alto clero michoacano porque perdió el control de recaudación y distribución de los productos de este ramo de 1824 a 1834.

⁹²³ *Ídem*.

⁹²⁴ El documento que había sido elaborado por Isidro García de Carrasquedo, exdiputado, hermano del prebendado Martín García cercano la alta jerarquía del obispado. AHCEM, Varios, Caja 1, Exp. 12.

8.1.3. Provisión de curatos vacantes, fuero y religión

Otro de los temas que generó debates importantes fue el decreto del 17 de diciembre de 1833 sobre la provisión de curatos vacantes, el cual no fue bien recibido por los obispos. Algunos de ellos se negaron a ejecutarlo, por lo que las autoridades civiles vieron en esas expresiones actos de rebeldía hacia el sistema de gobierno, lo que a su vez hacía necesario se tomaran cartas en el asunto. El 20 de marzo de 1834 el diputado Santoyo dio lectura a una propuesta

Se hará iniciativa al gobierno general para que sean castigados con severidad debida los R.R. obispos y demás eclesiásticos que se han resistido al cumplimiento del soberano decreto del 17 de diciembre de 1833. La propuesta estaba fundada en la escandalosa rebeldía de los funcionarios eclesiásticos en el cumplimiento de las leyes, pues con insolenta audacia estaban minando las instituciones federales los obispos de Michoacán, Puebla y Monterrey por lo que era de absoluta necesidad tomar enérgicas providencias para reprimir la criminalísima conducta de unos hombres que solo pretendían elevar sobre las ruinas de la república el trono de la tiránica aristocracia.⁹²⁵

Menocal alabó la propuesta, pero también dijo que dadas las circunstancias y conducta observada en el vicepresidente de la república, no era conveniente que la legislatura de Michoacán fuera a la vanguardia en un asunto tan delicado. Santoyo agregó que de aceptarse la propuesta, la legislatura michoacana tendría la gloria de ir por delante en la reclamación del cumplimiento de las leyes y mucho más, con una que pretendía favorecer los derechos de la nación y sostener la forma de gobierno. Puga consideraba que la propuesta debía pasar a una comisión para que se analizara la viabilidad de su discusión. Menocal también intervino para decir que los obispos aun no eran criminales como trataba de señalárseles porque todavía no se había arreglado el problema del patronato, por lo que el diputado consideraba que no era tiempo de hacer una reclamación que pusiera en ridículo a la legislatura. En el fondo, lo que ocurría era que la legislatura estaba dividida entre aceptar o no la moción para su discusión.⁹²⁶

⁹²⁵ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 20/III/1834.

⁹²⁶ *Ídem*.

El 29 de marzo, los diputados Silva y Santoyo propusieron hacer una iniciativa a las cámaras, planteando que en las diócesis donde no se llevara a efecto la ley sobre provisión de curatos del 17 de diciembre de 1833, los párrocos perderían el carácter público y no gozarían prerrogativas, excepto el derecho de alimentos mientras estaban en ejercicio de un ministerio al tiempo que se solicitaba derogación de la parte penal de esa ley.⁹²⁷

El tema iba creciendo, 16 de abril de 1834 se dio segunda lectura a la propuesta de Santoyo en la que pedía castigo severo para los obispos que se habían resistido al cumplimiento de la ley, en la sesión del 22 la votación se empató en dos ocasiones finalmente fue admitida a discusión. El 29 de abril de 1834 llegó el decreto del Congreso general que señalaba la fecha límite para la provisión de curatos vacantes en la República y las penas que se debían aplicar en caso de resistencia por parte de las autoridades eclesiásticas.⁹²⁸

El 20 de junio de 1834 los diputados Madrigal, Silva, Santoyo, Guevara y Orozco propusieron que las leyes generales del 17 de diciembre de 1833 y 22 de abril de 1834 no tuvieran efecto en el estado, con ello, el obispo de Michoacán Cayetano Gómez de Portugal podía volver al estado. Ceballos fue el primero en intervenir, para él, el asunto no era fácil resolver, pues al desconocerse los decretos federales se desconocía la autoridad de las cámaras conduciendo al rompimiento “del pacto social”. Mientras que Silva consideraba que debido a la importancia de la propuesta, ésta debía pasar a una comisión para ser analizada y elaborar un dictamen porque las cámaras nacionales estaban en receso. Finalmente se acordó que la moción se turnara a la comisión de gobernación.⁹²⁹

Al calor de los debates sobre sancionar a los prelados de la diócesis que se reusaban a la aplicación del decreto del 17 de diciembre de 1833, el 29 de marzo de 1834 se discutía un dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales relativa a la propuesta de reforma de algunos artículos de la Constitución federal. Por su orden en el documento, el primero en tratarse fue el 3º que a la letra decía: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.” La moción consistía en

⁹²⁷ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 29/III/1834.

⁹²⁸ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 16/IV/1834, 22/IV/1834, 29/IV/1834.

⁹²⁹ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 20/VI/1834.

que fueran eliminadas las palabras “será perpetuamente”, por tanto, la propuesta a debatir era la siguiente: “la religión nacional es la católica, apostólica y romana”.

El primero en tomar la palabra fue el diputado Tena quien solicitó a la comisión que dijera los fundamentos de la reforma. Ceballos como miembro de la misma expuso que no se había hecho otra cosa que seguir la opinión manifestada y por otra parte, para que los pueblos se fueran desprendiendo de preocupaciones añejas que los mantenían en el fanatismo, pues para ser católico no era necesario que esto estuviera consignado en la Constitución “lo que no iba acorde con las luces de siglo en que se vivía.” Menocal respondió que tenía mucho respeto por la religión católica que se profesaba y que no quería que se tocara el punto porque era sumamente delicado, pues podría creerse que la legislatura pretendía descatolizar a la población y los enemigos del orden tratarían de aprovechar la situación. El diputado ponderaba el hecho de que el artículo existía después de haber sido debatido por hombres de mucha virtud y patriotismo, también resaltó lo conveniente de establecer que la religión católica sería profesada permanentemente, porque de ella dependía la felicidad de la misma nación, además de que la Religión era el único freno para que los hombres no cometieran atentados. Para el legislador Silva la perpetuidad de la religión en el texto constitucional era una necedad piadosa porque ningún legislador humano podía imponer a Dios la ley, ningún establecimiento humano podía sobreponerse a las posiciones divinas y si Dios quería trasladar su religión a otros países nada valdría el que en la Constitución dijera que debía ser perpetua en la Nación Mexicana, para él era indiferente la reforma, pero era mejor no tocarla.⁹³⁰

El debate se encuentra enmarcado en un proceso en el que la potestad civil pretende someter a su autoridad al poder eclesiástico, pero sin un andamiaje legal legítimo de respaldo desde la perspectiva de la Iglesia. La contraparte era una institución renuente y beligerante, por tal motivo sus miembros, los que se repartían entre el altar y los órganos de gobierno federales fueron señalados de impedir el progreso y de no abrirse a nuevas ideas como la libertad de cultos.

Ese mismo día en sesión extraordinaria, Silva y Menocal sostenían el mismo posicionamiento, Dueñas intervino diciendo que la propuesta era

⁹³⁰ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 29/III/1834.

inoportuna e impolítica porque las circunstancias en las que se hallaba la república el punto podría servir de apoyo a los enemigos del sistema de gobierno. Por su parte, el diputado Rincón refirió que la propuesta era anticonstitucional amparado en el artículo 171 ya que este decía que no se podían reformar los postulados que establecían la independencia, la religión, forma de gobierno, división de poderes y libertad de imprenta. El asunto no fue sometido a votación porque aún no se agotaba el debate, ese día el eclesiástico Guevara no asistió a la sesión.⁹³¹

Otros artículos para su modificación fueron el 5º donde se pedía la supresión de todo lo referente a territorios agregando que “una ley dispondrá que los territorios que hoy existen se agreguen a algunos de los estados que les son limítrofes.”⁹³² Esta propuesta si se votó y fue aprobada. La tercera moción consistía en la supresión de los artículos 10 y 11 y en su lugar quedara consignado:

Los estados cuya población no exceda de 240 000 almas nombrará un diputado por cada 80 000 o por una fracción que pase de la mitad de esta base. El estado que tuviere menor población que la mitad de dicha base, nombrará sin embargo un diputado. El estado cuya población exceda de 240 000 almas nombrará precisamente tres diputados sea cual fuere el exceso.⁹³³

El objetivo de la reforma era para que no tuviesen más representación unos estados que otros. A su vez se pedía la supresión de los artículos 14, 15 y 20. El argumento para suprimir el artículo 20 era que con eso se cerraban las puertas a los extranjeros para que no pudieran acceder a los cuerpos legislativos, pero Menocal y Tena no estaban de acuerdo porque lo primero era atender las necesidades del sistema popular representativo y si un extranjero tenía todas las cualidades y sus intereses son los de la nación no había inconveniente.⁹³⁴

Las propuestas de reforma a la Constitución continuaban el 10 de mayo de 1834, esta vez la discusión giró en torno al fuero militar y eclesiástico, respecto al primero se planteaba que los militares en campaña estarían sujetos

⁹³¹ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, Sesión extraordinaria de 29/III/1834.

⁹³² La federación quedó integrada en 1824 por 19 estado y 4 territorios: Territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México que dependían del gobierno federal al igual que el Distrito Federal. Felipe TENA RAMÍREZ, *Leyes fundamentales*, p. 168.

⁹³³ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 29/III/1834.

⁹³⁴ *Ibid.*

al fuero en toda clase de asuntos, pero fuera de ella solo en lo perteneciente a su servicio. Respecto al segundo, los eclesiásticos disfrutarían de un fuero sólo en los negocios que intrínsecamente pertenecían a su ministerio. El primero en hablar, como era de esperarse, fue Guevara para manifestar que los fueros no eran concedidos a las personas sino al oficio ejercido y aunque se reformara el artículo, sucedían abusos como había ocurrido siempre, desde su perspectiva los fueros no podían quitarse. En cuanto a la clase militar, sus superiores actuarían del mismo modo que lo hacían imponiendo castigos a su arbitrio. Lo que sí advertía el eclesiástico era que el ciudadano con fuero debía presentar garantías, por ejemplo, tener domicilio y vecindad, trayendo a colación el aforo que poseían otras figuras dentro del nuevo sistema de gobierno como el presidente de la República, los gobernadores, los diputados y otros empleados y como en virtud de él eran juzgados por tribunales especiales. Él veía que el fuero se convertía en un problema cuando era hereditario, pero este no era el caso, en general el que poseía fuero era porque ocupaba un puesto distinguido, lo que no era malo. Con respecto al fuero eclesiástico quedaba la disputa pendiente porque hasta ahora no se había podido demarcar la línea que dividía a la autoridad civil de la eclesiástica, por tal motivo pedía que el artículo volviera a la comisión.

Silva contestó que la reforma tenía por objeto nivelar a todos los ciudadanos en el uso de sus derechos porque ciertamente no podían avenirse con la libertad y luces del siglo, el hecho de que en una sola familia hubiese tres sociedades distintas con diferentes constituciones, gobernándose por autoridades diversas lo hacía complicado, por ello era necesario que todos estuvieran sujetos a los mismos jueces en todo lo que convenía a los asuntos civiles y criminales incluidos los militares y eclesiásticos, los cuales solo debían ser juzgados por sus superiores por faltas a su oficio. Además, advertía la existencia de una guerra entre la nación y los fueros, por tal motivo consideraba preciso quitar la contradicción existente en las constituciones de tres sociedades distintas y eso solo podía hacerse poniendo a todos los ciudadanos en un mismo nivel pues de otra manera se haría interminable la guerra llevando a la destrucción de la república. Ceballos añadió que no se trataba de destruir los fueros por razón de oficio, sino para simplificar la impartición de justicia. La

propuesta de modificación fue aprobada y Guevara solicitó que su voto constara en contra.⁹³⁵

Continuó la discusión de otras modificaciones entre ellas la del artículo 171 que como ya se ha dicho en páginas anteriores hablaba de los elementos que no se podían variar de la Constitución federal como lo eran la libertad, la independencia, la forma de gobierno, la libertad de imprenta, la división de poderes y la religión católica. En este caso se pedía la supresión de la palabra religión recordando lo ya dicho por un diputado, este postulado establecía qué artículos eran intocables, al quitar la religión se infería que ésta ya no era incuestionable. Guevara intervino para solicitarle a la comisión que manifestara la diferencia que encontraba entre la expresión de religión que se pretendía suprimir entre las de Independencia, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de poderes. Para el fin, contestó Ceballos que la diferencia radicaba que estos últimos no se eliminaban por convenir así a la felicidad de la nación, argumentado que las luces del siglo hacían ver que para mantener la religión católica no era necesario la existencia de que se prohibía su reforma, que el tema se trataba porque estaba en los intereses de la misma nación el que pudiera tolerarse el ejercicio de otra religión, pues el hecho a los católicos nada perjudicaba. Guevara sostuvo que a un católico no podía serle indiferente la introducción de las sectas y el que conservase o no la religión de Jesucristo, pues si la Constitución prohibía su reforma con mayor razón se debía conservar la prohibición en torno de la religión porque era el conducto de toda felicidad. Entonces, Silva externó que debía de proponerse la supresión de todo el artículo porque a nada contribuía su existencia, pues para la conservación de cualquiera de las cosas de que hablaba, si no había libertades no tenía lugar la independencia, si no existían federales tampoco federación, y si no hubiese católicos no habrá quien sostuviera la religión:

que esta no necesita de la protección de los hombres para conservarse porque el mismo Dios protestó que duraría hasta el fin de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia y si Dios quiere llevarla a otro país nada importa que los legisladores digan que jamás será otra la Religión de los Mexicanos⁹³⁶

⁹³⁵ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 10/V/1834.

⁹³⁶ *Ídem*.

Mientras que de los otros puntos tampoco se podía asegurar su estabilidad porque podría variarse según lo requirieran las circunstancias. Guevara volvió a tomar la palabra insistiendo en que a un católico no le podía ser indiferente la conservación de la Religión dijo:

siempre necesita de la protección del legislador pues de parte de los hombres esta ofrece el cumplimiento de una cosa sin faltar a ella como vemos que sucede frecuentemente aun en los contratos que en fuerza de la oferta se les da su cumplimiento y muchas veces no se cumplen, que la promesa de Dios de que se conservará la Religión católica hasta el fin de los tiempos aunque es indefectible puede ser solo entre muy pocas personas o tal vez llevándole a un rincón de la China y por la misma razón tuvo presente el señor que propone de que la puede trasladar a donde mejor le parezca, es necesario que el legislador humano en cuanto este de su parte la sostenga y la conserve.⁹³⁷

El 14 de mayo el tema del fuero volvió a ser objeto de discusión, pero ahora a consecuencia de la convocatoria de ley de elecciones para diputados federales. El artículo señalaba que para ser elector primario era necesario el ejercicio pleno de los derechos de ciudadano, tener la edad de 25 años y dos de vecindad en el lugar de la junta y no ejercer jurisdicción militar ni disfrutar del fuero eclesiástico. De inmediato intervino Guevara y dijo que no había ningún motivo para que a los eclesiásticos se les privara del derecho de votar que esto debía reducirse a los que ejercían jurisdicción y cura de almas por las consideraciones muy sabidas del influjo que podrían tener sobre los feligreses en el sistema popular, remarcando que en el sistema debía haber igualdad de derechos pues era el único acto en el que el pueblo ejercía la soberanía, que a los eclesiásticos solo por que disfrutaban fuero se les imponía una pena sin haber ningún delito. Reconocía que la sociedad se componía de clases y sería una inconsecuencia que el fuero eclesiástico fuera mérito bastante para no tener voto en las elecciones cuando a la clase militar se le ampliaba el margen siendo también aforado, asimismo a los funcionarios de alta categoría se les prohibía votar por que ocupan un puesto más elevado en la misma línea, el diputado consideraba que el artículo debía volver a la comisión para ser rediseñado. Silva también consideraba que el artículo debía reformarse porque no eran las personas sino los fueros los que debían tenerse presentes, pero no debería excluirse a los eclesiásticos pues ellos en sus fueros admitían a toda clase de

⁹³⁷ *Idem.*

ciudadanos y no era justo que se les privara del voto, así que el artículo se regresó a la comisión porque no se logró un consenso.⁹³⁸

La legislatura cerró sesiones en diciembre de 1834 para dar paso a la instalación de la sexta, en medio de los cuestionamientos al sistema gobierno federalista. En un panorama complicado se ve a Joaquín Ladrón de Guevara sólo en los debates, hasta cierto punto cauto a pesar de que no era su primera vez como legislador. Su actuar pudo ceñirse al polarizado ambiente que predominaba por el tema de los ataques legislativos a la Iglesia y porque es evidente que la legislatura a la que perteneció se encontraba integrada en su mayoría por fervientes defensores del federalismo y sus políticas liberales y anticlericales.

8.2. El Sexto Congreso de Michoacán. José Antonio de la Peña y Rafael Guedea en el proceso de variación del sistema de gobierno, 1835

El 11 de agosto de 1834 el Congreso de Michoacán expidió la convocatoria para elegir diputados al legislativo local y federal, así como la terna de gobernador y consejeros. Los resultados de la elección se dieron a conocer el 15 de octubre, el proceso electoral se realizó en medio de fuertes críticas y levantamientos en contra del sistema federal a pesar del esfuerzo que desde el centro y los estados se hacía para sostenerlo.

Michael Costeloe afirma que el legislativo federal que se instaló el 4 de enero de 1835 tenía una fuerte composición centralista, por lo que desde esa fecha hasta finales de mayo uno de sus principales objetivos fue preparar el camino para lograr la adopción de una República centralista.⁹³⁹

En enero de 1835, Antonio López de Santa Ana renunció a la presidencia de la república. De acuerdo con la Constitución de 1824 correspondía al vicepresidente Valentín Gómez Farías ascender al cargo, pero los señalamientos por las reformas de 1833 y 1834, la revolución de Cuernavaca y el nuevo orden de cosas hacían de su persona un hombre que no encajaba dentro del proyecto de variación del sistema de gobierno, por lo que el Congreso lo destituyó por la vía legal. A la par de los hechos, las legislaturas del Estado de

⁹³⁸ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 14/V/1834.

⁹³⁹ Michael P. COSTELOE, *La primera República*, p. 435.

México, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán comenzaron a presionar al Congreso general para anular las leyes reformistas, respaldando un decreto del Estado de México que anulaba las leyes del 17 de agosto, 27 de octubre, 3 y 6 de noviembre, 17 y 30 de diciembre de 1833 y 15, 16, 22, y 23 de abril de 1834. El mismo decreto estipulaba que éste era a su vez una iniciativa de ley para el Congreso federal, pero ambas cámaras se concentraron solamente en la del 3 de noviembre sobre canonjías, y la del 17 diciembre y 22 de abril sobre provisión de curatos. El resultado fue la restitución de las canonjías que se habían otorgado por decreto del 16 de mayo de 1831 y de las que fueron despojados los prebendados por la ley del 3 de noviembre de 1833. Respecto de la ley de provisión curatos, se acordó la nulidad de los decretos del 17 de diciembre y 22 de abril de 1834 y se aprobaba la propuesta del senado que dejaba en manos de los obispos, Cabildos y gobernadores de las Mitras la provisión de las sacristías mayores y parroquias vacantes conforme a la ley de 22 de mayo de 1829.⁹⁴⁰

Otro de los temas que ocupó al Congreso nacional fue el de las milicias cívicas cuerpos fuertemente ligados al federalismo y el último obstáculo para llegar al centralismo. El ejecutivo federal pidió su reformulación y el legislativo proponía su extinción, petición a la que se unió Jalisco a finales de febrero de 1835. El tema fue tratado en sesiones secretas y fue sancionado a finales de marzo. Sin embargo, el problema real residía en Zacatecas, que se manifestó en contra de toda disposición emanada del legislativo federal referente a las milicias, a pesar de ello, tanto el gobierno como las legislaturas rechazaron su posicionamiento.⁹⁴¹

Reynaldo Sordo establece que desde la formación del sexto Congreso nacional se planteó la necesidad de ampliar las facultades de los diputados para hacer reformas a la Constitución. Al entrar en funciones el legislativo en enero de 1835 la idea parecía solo reformar la máxima ley, pero la composición del mismo tenía una mayoría de individuos que veían conveniente la variación del sistema de gobierno. Para marzo de 1835, los estados defensores del federalismo eran Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y Texas, Sonora y

⁹⁴⁰ SORDO CEDEÑO, Reynaldo, *El Congreso en la primera República centralista*, México, El Colegio de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1993, pp. 142-151

⁹⁴¹ *Ibíd.*, pp. 151-158.

Sinaloa, pero el escenario tendería a ser cambiante, el mes de mayo fue determinante, pues la toma de Zacatecas y la destrucción de su milicia cívica fue un golpe importante para los bastiones federalistas, lo que facilitó la transición del sistema de gobierno. Por su parte, el pronunciamiento de Orizaba en pro del centralismo hizo de su objetivo el clamor de varios ayuntamientos en los diferentes estados. El 23 de ese mes, el Congreso general cerró sesiones con un avance importante “en las bases orgánicas por proponer”, seis días después, el 29 de mayo el Plan de Toluca proponía una forma de gobierno popular, representativa y central.⁹⁴²

A partir de junio de 1835 proliferaron los pronunciamientos y representaciones en favor del centralismo, aunque con algunos opositores en Jalapa, Oaxaca, Morelia y Toluca que seguían respaldando el federalismo. Ante las agitaciones políticas por el cambio de sistema de gobierno el Congreso federal debió abrir sesiones extraordinarias el 19 de julio de 1835 con la certeza de la variación del sistema, el problema era determinar si la legislatura podía variar el modelo de gobierno o si se debía elegir un Congreso constituyente para que lo hiciera. En el mes de agosto se determinó que el Congreso general estaba investido por la nación con amplias facultades para cambiar el sistema, en ese mismo mes surgió la propuesta legislativa que éste fuera centralista, a finales de septiembre se delinearon los elementos esenciales del nuevo modelo de organización y las *Bases de Reorganización de la Nación Mexicana* fueron aprobadas el 23 de octubre.⁹⁴³

En el escenario michoacano, la sexta legislatura abrió sesiones el 1º de enero de 1835 con la presencia del eclesiástico Antonio de la Peña, en calidad de propietario; como suplentes se encontraban Rafael Guedea y Manuel Leyva, el primero se integró a las labores legislativas en el mes de marzo, Leyva no fue requerido por la legislatura para ocupar una vacante. Esta asamblea tendrá un corto periodo de sesiones y a pesar de ser consciente de que se encontraba en medio del cuestionamiento de sistema federal con probabilidades de transitar hacia el centralismo se preocupó por continuar con la aplicación de las reformas constitucionales.

⁹⁴² *Ibíd.*, pp. 162-176. María del Carmen SALINAS SANDOVAL, *El primer federalismo*, p.41.

⁹⁴³ *Ibíd.*, pp. 174-196.

Al abrir sesiones la sexta legislatura se procedió a la elección de dos senadores, el primer nombramiento recayó en José Ramón Malo que ganó el escrutinio entre el abogado Francisco Aragón y el Obispo Ángel Mariano Morales; el segundo fue Antonio Cumplido, quien compitió con Aragón.

Acto seguido, la asamblea abordará un tema nodal para la variación del sistema y que sería objeto de intensos debates en la primera mitad del mes de agosto: “la voluntad de pueblo”. El asunto tendrá como punto de partida la expedición de credenciales de los senadores José Ramón Malo y Antonio Cumplido, el presidente del Congreso, Manuel Alvirez, cuestionó a la legislatura si estas: 1º se concederían en los términos prevenidos en el artículo 33 de la Constitución general, 2º o en ellas debían constar facultades amplísimas como había manifestado la junta electoral y como si fueran concedidas por la legislatura o 3º que solo se remitiese a los senadores dichas facultades sin expresar la legislatura que eran concedidas por ella, sino con el único fin de que aquellos señores quedasen enterados de la voluntad de la mayoría de los electores del estado y que la legitimidad de dichos poderes quedara en manos de la asamblea nacional.

Para tomar una decisión, Álvarez pidió se leyeran los artículos del acta constitutiva y de la Constitución, después de ello manifestó que si se aprobaba la 2ª propuesta del presidente se contrariaba el juramento presentado por los diputados de observar y hacer observar la Constitución federal y la del estado en todas sus partes. Éste último dijo que era dejar el asunto en un punto medio porque si la legislatura por sí misma investía a los senadores de amplios poderes, bajo este concepto podrían anularse por la cámara a razón de que era muy disputable la facultad de la legislatura para concederlos porque debido a su naturaleza se sobreponían a la Constitución federal y estatal. A pesar de que la mayoría de los electores de la junta del estado coincidían por voluntad propia otorgar poderes amplísimos, el problema radicaba en que los electores que se manifestaron por esta idea no representaban a la mayoría de los partidos del estado; más en su concepto era preferible en la presente cuestión “en la que se trata de la reforma del pacto social y de los derechos políticos” se debía tomar en cuenta que los partidos eran iguales sin atender al número de población y aunque no había ley preexistente que así lo estableciera, el diputado entendía que esto era lo más conveniente a los principios del sistema de gobierno que regía.

Después de eso dijo que para evitar el escollo propuesto y que los senadores no tuvieran las mismas facultades que las que habían sido concedidas por la junta electoral a los representantes para la cámara de diputados era mejor adoptar la última propuesta.

Ramírez estaba de acuerdo con el diputado Álvarez, y trató de ser más explícito con lo que estaba ocurriendo, lo que permite entender el centro de la discusión. Ramírez expuso que la junta electoral del estado celebrada en octubre de 1834 debía integrarse por electores secundarios de los 20 partidos en que estaba dividido el territorio michoacano, pero solo se presentaron los representantes de 12, el margen de ausentismo fue amplio, no obstante, había mayoría para realizar los comicios. Dentro del contexto de la junta, los electores de 10 partidos hicieron constar por escrito que los diputados debían estar investidos con facultades amplísimas, lo que era la mitad de la junta, no la mayoría.

Los diputados Alzua, Peña y Porto partían de la idea de que la mayoría de los electores representaban a los pueblos del estado, por lo que veían concedidas las facultades en cuestión y en última instancia, porque fue voluntad de los representantes permitir a esta legislatura que concediese amplias potestades a los senadores conforme al pacto de los pueblos, añadiendo el diputado Alzua que de otra suerte los senadores no tendrían los mismos atributos que se les habían concedido a los diputados federales.⁹⁴⁴

El presidente Alvirez insistía en las razones expuestas, vinculadas a la distinción hecha sobre el modo de atender la mayoría de sufragios para la elección de representantes y cómo debía considerarse ésta para la resolución de una cuestión vinculada a los derechos políticos de los partidos en los que importaban tanto los grandes como los pequeños. El diputado insistía en que la legislatura no representaba a la junta electoral sino al estado, que lo único que hacía en el caso en cuestión era nombrar a los individuos para senadores y no darles facultades pues estas estaban consignadas en la Constitución general que era el verdadero pacto. Alvirez daba en el clavo, en realidad la legislatura no

⁹⁴⁴ Es necesario recordar que el legislativo federal estaba conformado por la cámara de senadores y la de diputados, los primeros eran electos por las legislaturas locales y los segundos a través de elecciones indirectas en tres niveles.

podía arrogarse la potestad de la junta electoral para otorgar facultades extraordinarias a los senadores.

Como el asunto era complicado, el diputado Ugarte pidió que se suspendiera, pero se resolvió continuar por ser un tema urgente. El presidente propuso -a petición de uno de los diputados- que se fijase la cuestión de la siguiente manera: “al participarle el nombramiento a los senadores se les remitirá copia testimoniada de la discusión y de las dos actas de elecciones de la junta electoral del estado”. Lo que fue aprobado. Acto seguido, el eclesiástico Peña propuso como adición “advirtiéndose a los señores senadores electos que el actual Congreso respeta la voluntad de los pueblos”. El presidente dijo que la moción le parecía vaga y contradictoria a lo resuelto y al mismo tiempo inútil pues ya se sabía que los representantes del Pueblo debían respetar su voluntad y aun puede añadirse “que sus preocupaciones” y que, si por la proposición se pretendía manifestar el voto de la legislatura sobre el asunto, no lo consideraba prudente porque la legislatura no podía ocuparse de tan grave asunto y de tal trascendencia. Peña dijo que la propuesta no era vaga porque se refería a las facultades concedidas a los pueblos del estado y porque el objeto no era otro que el que los senadores supieran en qué consistía la opinión de la legislatura. Pero la propuesta del eclesiástico fue desechada; cerrado el asunto, Ugarte pidió se remitieran los testimonios de las actas y las credenciales por correo extraordinario.⁹⁴⁵

La discusión sobre la expedición de las credenciales de los senadores es muy interesante porque en primer lugar permite entender el tema de las facultades otorgadas a los legisladores tanto federales como locales en el mes de octubre de 1834 y cuál era la percepción de la junta electoral al otorgar poderes amplísimos a los diputados, pues éstos solo se concedían cuando se convocaba un Congreso constituyente, que no era el caso. Queda claro que en octubre de 1834 a la par del cuestionamiento sobre el sistema federal, también existían inquietudes sobre moderar a los gobiernos estatales fortaleciendo a las autoridades del centro, pero no existía la firme convicción o bien un consenso de variar el sistema de organización política del país, al menos no para el caso Michoacano. En ese contexto se puede entender el debate por dotar o no a los

⁹⁴⁵ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 1/I/1835.

senadores de poderes amplísimos para que junto con los diputados federales pudieran obrar conforme a las circunstancias que se vislumbraban, sin aseverar el centralismo, pero con la certeza de hacer reformas estructurales al sistema de gobierno vigente.

En segundo lugar, se pone de manifiesto la necesidad de homologar las facultades entre los miembros de la cámara de diputados y de senadores del legislativo federal ante las circunstancias, pero esto no podía ser. El problema radicaba en el origen de la elección, los diputados en sus dos niveles eran electos de manera indirecta por el pueblo, a través de la junta electoral del estado, ésta como representante de la voluntad de las poblaciones podía otorgar esos poderes; por su parte, los senadores eran electos por el legislativo local y éste no tenía la misma investidura de legitimidad y soberanía que poseía la junta, por tanto no podía hacerlo sin contrariar las máximas leyes del orden federal y local, lo que además no sería bien visto. En ese contexto, el eclesiástico Antonio de la Peña tenía un posicionamiento diferente junto con Alzua y Porto, ellos veían en los amplios poderes concedidos a esta legislatura la potestad para hacer lo propio con los senadores, en el fondo de la cuestión se infiere cierta preocupación en la desigualdad de las facultades concedidas a los representantes michoacanos de ambas cámaras del legislativo federal.

Algunos argumentos emitidos el primer día de sesiones servirán para entender por qué la legislatura debió emitir un decreto sobre la legitimidad de su elección el 7 de marzo de 1835. En él se decía que las restricciones utilizadas por algunas juntas electorales para su nombramiento no destruían la legitimidad de su elección y para el ejercicio del poder legislativo con arreglo a la Constitución; remarcando que la junta electoral estatal había elegido a los diputados sin restringirles los poderes y había obrado conforme a la Constitución del estado.⁹⁴⁶

Es decir, el hecho de que la junta electoral del estado que se reunió en la Morelia en octubre de 1834 se hallara compuesta por electores de 12 partidos de 20 que integraban el estado vulneraba su legitimidad. Se infiere que el decreto fue producto de la preocupación que esto generaba al interior de la legislatura, lo que no se puede precisar es el nivel de presión a partir de los señalamientos

⁹⁴⁶ Amadoor COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo VII, pp. 8 y 9.

y quienes lo estaban haciendo. Se observa, por otra parte, el divisionismo que imperaba en el estado ante la variación del sistema de gobierno, algo que será muy visible y que permeará al interior de la propia legislatura.

Ante este escenario de incertidumbre se hacía necesario encomendarse a Dios. El 12 de enero de 1835 se dio lectura a una propuesta del diputado Álvarez para que en la iglesia catedral y en todas las parroquias y conventos del estado se hicieran rogaciones públicas por tres días para celebrar en la primera una misa solemne para pedir al todopoderoso los auxilios necesarios para el mejor acierto en las deliberaciones del Congreso general y del estado. El argumento del autor era que en las actuales circunstancias se requerían de medidas sabias para la paz y la felicidad de la nación. Las rogaciones iban acorde al “orden” político y como cristianos consideraba un deber pedir auxilio para el mejor acierto en las deliberaciones de los actuales representantes. Alsua argumentó la falta de recursos, por lo que enfatizó que el gasto de las celebraciones debía correr a cargo de las autoridades eclesiásticas y Álvarez no creía que fuera un deber, sino su obligación, a su vez, Peña pidió se extendiera la celebridad de la misa a las parroquias y conventos del estado y Álvarez solicitó que la acción no fuera en tono de orden sino como una invitación haciendo ver el celo y la piedad religiosa. Palabras más, palabras menos, en esa sesión se facultó al ejecutivo “para que invitara a la alta jerarquía eclesiástica del obispado, a las parroquias y conventos del estado para hacer rogaciones públicas al Todopoderoso y que este auxiliara en las deliberaciones del Congreso general y del de este Estado” ⁹⁴⁷

De 1824 a 1835, México era un país independiente, federal y católico profundamente impregnado de fe y la socialización de los actos de la vida cotidiana entretejidos con la religión católica. En este periodo la vida pública tenía incrustados símbolos de la fe y los eclesiásticos en esa cotidianidad iban desde los menesterosos hasta los funcionarios de las instituciones federales. ⁹⁴⁸

Este es un buen ejemplo de la ritualidad que acompañaba la vida política del estado, aun con las ideas laicistas que comienzan a aflorar entre los hombres en el poder. Parte del atractivo es que fuera un abogado quien hiciera la

⁹⁴⁷ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 12/I/1835.

⁹⁴⁸ Brina CONNAUGHTON,, “Escollos republicanos: Iglesia y Federalismo en la primera república mexicana”, en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, El Colegio de México, 2012, p. 165.

propuesta y no un eclesiástico, esto pone de manifiesto que la religiosidad estaba profundamente arraigada en los hombres de aquella época, yendo en ocasiones más allá de las ideas liberales que defendían y promovían.

Una vez encomendados a Dios, en medio del cuestionamiento y el divisionismo, la legislatura debió emprender sus labores legislativas circundada por una aparente calma. Al menos los primeros cinco meses del año, en los que nombró gobernador, emitió decreto sobre aclaración de la alcabala y la reglamentación para la clasificación y reconocimiento de la deuda pública, se declaró nulo el decreto de finales de marzo de 1833 sobre las reformas constitucionales y comenzó con la restructuración del poder judicial a partir de lo expuesto en las variaciones a la máxima ley del estado.

De las primeras discusiones destaca la iniciada el 19 de enero en que se sometió a debate el dictamen sobre nulidad de las leyes generales de las reformas eclesiásticas, Álvarez pidió se suspendiera el asunto porque había otros de mayor urgencia, por propuesta de Alzua y Ramírez se sujetó a votación la moción y se reprobó por lo que la discusión continuó. Álvarez consideraba que el dictamen tenía puntos disímolos, pues una cosa era declarar nacional el plan de Cuernavaca y otra la derogación de las reformas, entonces le contestó el eclesiástico Peña como parte de la comisión aseverando que no eran propuestas diferentes porque todo había emanado del pronunciamiento de dicho plan. Álvarez recibió el apoyo de García Rojas, Ramírez y Alzua, finalmente se acordó que el dictamen debía volver a la comisión para que se hiciera una separación de las cosas. El 22 de enero continuó el debate, Alzua dijo estar por la iniciativa, pero no de todas las leyes, solo las peculiares al asunto del patronato y sin la petición para declarar nacional el Plan de Cuernavaca. A solitud del presidente Álvarez se leyeron todas las leyes en cuestión. Álvarez seguía viendo el dictamen disímolo y sedicioso, como el de la legislatura de México que trataba de secundarse. Álvarez y Alzua hicieron la observación que no todas las leyes mencionadas eran de reformas eclesiásticas, algunas las calificaban como “personales” y otras como intrusivas en el gobierno interno de los estados y por otra les parecía ridículo e insignificante declarar el plan como ley de estado. El

tema era complicado, no hubo resoluciones y el dictamen debió volver a la comisión.⁹⁴⁹

El asunto es retomado el 16 de febrero, ese día Álvarez manifestó que el dictamen debía volver a la comisión para que fuera reformado a partir de las observaciones vertidas en las discusiones previas, en las que se había dicho que sus artículos eran disímbolos y seguían igual. Puente dijo no estar a favor del artículo primero porque no era necesario hacer tal declaración, es decir, asociar la petición de reforma con el Plan de Cuernavaca. Álvarez volvió a tomar la palabra para externar que desde su concepto, el Congreso general no tenía la facultad para dar la ley de diezmos porque era invasiva a la soberanía del Estado, atacando su propiedad y porque el Congreso general no había consultado a los estados. Por otra parte, no estaba de acuerdo en que se hiciera una iniciativa para pedir la derogación de las leyes de reformas eclesiásticas, principalmente la de diezmos, porque podía tocar el tema de soberanía. Desde su perspectiva esta ley debía discutirse particularmente, por ser grave, pues ya el quinto Congreso la había tenido por ofensiva a la soberanía. Para el diputado Alzua no había ataque a la soberanía porque el Congreso tenía facultades para la expedición de la ley.⁹⁵⁰

Hasta ahí el debate que seguramente continuó pero que no se consignó en papel porque el acta esta inconclusa y sin firmar. Se infiere que la discusión subió de tono y en medio de fuertes jalones se eliminó la vinculación del plan de Cuernavaca a la propuesta.

El 18 de febrero entre la correspondencia del Congreso se dio lectura a un escrito de la asamblea de San Luis Potosí que acompañaba el decreto en el que se secundaba el del Estado de México sobre la anulación de las reformas eclesiásticas. El 23 de febrero, la asamblea michoacana continuó la discusión sobre dicho asunto que abrió de la siguiente manera:

[...] y no habiendo quien tomara la palabra se declaró suficientemente discutido, paso a tratarse en lo particular y después de una ligera discusión al irse votando por partes quedó aprobado, no obstante, todo el primero artículo que dice: El Congreso general declara que han repugnado al sentir y voluntad de la Nación las Leyes de reformas

⁹⁴⁹ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 19/II/1835, 22/II/1835.

⁹⁵⁰ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 16/II/1835.

eclesiásticas del 17 de agosto, 27 de octubre, 3 y 2 de noviembre, 17 de diciembre y las de 15, 16, 22 y 23 de abril de 1834.⁹⁵¹

Ante la usencia de más información al respecto, se infiere que aquí finalizó la discusión del asunto, el cual presentó dificultades en su resolución primero por la misma naturaleza del tema que había polarizado a la sociedad, es decir, el ataque a la institución eclesiástica y porque de acuerdo con la opinión de algunos diputados la emisión de las disposiciones había violentado el pacto federal, por tanto, retomar el asunto era revivir el encono que las mismas habían generado.

La sexta legislatura debió enfrentar situaciones desfavorables para la administración pública que habían sido heredadas por legislaturas y gobiernos pasados. Para hacer frente a la inestabilidad social y política que se había manifestado en Michoacán desde 1830 el legislativo y el gobierno local emitieron muchas disposiciones para la captación de recursos y con ello sufragar gastos de defensa, aparato burocrático y las necesidades de los funcionarios. A la vuelta de cuatro años era un asunto que estaba fuera de control, por lo que era necesario poner un orden. El 26 de enero de 1835 el Congreso emitió un decreto en el que se manifestaba que la Tesorería general no expediría, hasta nueva resolución del Congreso, ningún vale de libranza contra administradores de rentas públicas salvo los que fueran determinados por el gobierno. De la misma forma se suspendían los pagos de los vales y libranzas expedidas con anterioridad solo quedaban exceptuadas las deudas que el gobierno hubiese contraído por sí mismo con los ciudadanos.⁹⁵²

Una cosa era decir qué ocurriría con el tema de las libranzas, vales y préstamos, otra establecer los parámetros para saber a ciencia cierta cuál era el nivel de endeudamiento de la administración pública michoacana por estos conceptos para tratar de implementar los mecanismos que condujeran al finiquito de los adeudos en un futuro. El 27 de marzo se expidieron las reglas para la clasificación y reconocimiento de la deuda pública. El decreto iniciaba explicando la situación que imperaba a partir de los vales y libranzas expedidos por la Tesorería general para pago de empleados, lo que había producido un desorden en las cuentas de liquidaciones. Por ello el Congreso tenía a bien arreglar el asunto mediante una serie de procedimientos para reconocer y garantizar el

⁹⁵¹ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 18/II/1835, 23/II/1835.

⁹⁵² Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo VII, pp. 4-5.

pago a los tenedores de dichos documentos. En este mismo decreto se incluyeron los pasos a seguir para corroborar los préstamos y con ello poder acceder a su cobro en un futuro, porque era de entenderse que las arcas no pasaban sus mejores momentos y de momento no se liquidarían los adeudos. Al contrario, por el decreto se infiere que esto sería un proceso largo pues el propio Congreso decía que la Tesorería sería la encargada de otorgar una constancia individual del adeudo hasta fin de diciembre último, en dicha constancia se harían las anotaciones correspondientes cuando llegara el tiempo de prorratar algo por el crédito.⁹⁵³

Además del tema de adeudos, la reforma constitucional del estado diseñada en 1830 y aprobada en 1832 también fue objeto de debate de esta legislatura. La propuesta fue presentada por el diputado Alvirez el 20 de febrero de 1835, la cual se tradujo en el decreto del 30 de marzo de ese mismo año.⁹⁵⁴ En un acto que tiende a ser confuso, no queda claro si lo que quería hacer este Congreso era legitimar el trabajo del tercero en su segundo año legislativo o bien, no veía como una posibilidad real la variación del sistema de gobierno.

Los debates de la propuesta dieron como resultado la nulidad de los artículos 1º, 2º y la primera parte del 4º del decreto del 30 de marzo de 1833 por ser opuestos al 204, 205 y del 218 al 222 de la Constitución estatal y a la ley general del 16 de abril de 1830,⁹⁵⁵ por tanto, las reformas aprobadas por la cuarta

⁹⁵³ *Ibíd.*, pp. 10-12.

⁹⁵⁴ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 20/II/1835.

⁹⁵⁵ El artículo 204 dice a la letra: Todo ciudadano tiene facultad para reclamar las faltas que note, o decir de nulidad de las elecciones de Diputados y Consejeros, así como de las que haga la junta electoral de individuos para Gobernador y Vice-Gobernador, dentro de veinte días, contados desde su publicación; pasado el cual tiempo no se admitirá reclamo alguno. Artículo 205.- Los que se hagan sobre esto, se presentarán a la Diputación permanente, o al Congreso si se hallare reunido, para que examinándose en la primera junta preparatoria de la siguiente Legislatura los que sean sobre Diputados, y tomados los otros en consideración por el Congreso, luego que se instalarse, se resuelva a la vez lo conveniente. Artículo 218.- Cualquier proposición de reforma en algún artículo de esta Constitución deberá hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada a lo menos por la tercera parte de los diputados, que compongan la legislatura. Artículo 219.- La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de cinco días de una lectura a otra; y en la última se deliberará si ha lugar a admitirla a discusión. Artículo 220.- Para ser admitida bastará la pluralidad absoluta de votos; faltando ésta se tendrá por desechada, y no volverá a presentarse en el tiempo de la misma legislatura. Artículo 221.- Si se admitiere a discusión, se imprimirá y publicará con los fundamentos que se apoye. Artículo 222.- El Congreso siguiente procederá a la discusión y votación sobre las reformas que hubiere propuesto. *Actas y Decretos*, Tomo II, pp. 499-500. La ley del 16 de abril de 1830 daba las bases para la elección de la legislatura de Michoacán compuesta por dos artículos. 1º El ejecutivo del Estado de Michoacán de acuerdo con su consejo, procederá inmediatamente a fijar los periodos para elecciones de diputados al Congreso del mismo Estado, sirviendo en ellas la convocatoria expedida el año último de 1829, de manera que los nuevos nombrados estén aptos para abrir

legislatura en 1832 quedaron vigentes y debían insertarse sin alteración alguna en la Constitución reformada, la declaración:

no debe producir efecto retroactivo; de consiguiente son válidos todos los actos regulados por las reformas que estimó vigentes el 5º Congreso y las leyes que este expidió anulando o contrariando la del 3º se estiman únicamente como derogatorias.⁹⁵⁶

De acuerdo a lo anterior, las reformas tocantes a Ayuntamientos tendrían aplicación en las elecciones del mes de diciembre próximo y las del poder legislativo a partir de la celebración de comicios para elegir a la siguiente legislatura.

Las disposiciones del Congreso impactaban de la siguiente manera, se eliminaba el artículo 1º que declaraba nula la legislatura de 4 de agosto de 1830 y el 2º que las reformas de Constitución realizadas se considerarían como iniciadas por el 4º Congreso y los demás actos de la legislatura de 1830 serían sujetos de revisión. Y la primera parte del artículo 4º en el que se decía que se aprobaban las reformas comprendidas en los artículos 5º y 7º del Capítulo 2º y el 19 del 4º de las publicadas en 27 de diciembre de 1832. La sexta legislatura al reconocer la labor de la tercera en su segundo año abrió el camino para aplicar la reforma Constitucional de 1832 en todas sus partes, además es de destacar todo el andamiaje legal que utilizó para fundamentar la acción, lo que a su vez cuestionaba tácitamente la legalidad con la que había actuado la quinta asamblea o mejor dicho el titular del ejecutivo en aquel momento, José Trinidad Salgado autor intelectual de la nulidad de la legislatura.

Continuando con las acciones de esta legislatura, se deben enmarcar los trabajos realizados para dar cumplimiento a la reforma del poder judicial. El 3 de febrero de 1835, los diputados debatían sobre la integración del Supremo Tribunal, pero el tema de perpetuidad de los ministros era algo que no agradaba a toda la legislatura, el legislador Olmos veía en la inamovilidad una garantía para los ciudadanos. Alvarez entre sus planteamientos dijo que dejando amovibles a los ministros se exponían los tribunales con las revoluciones a la suerte que habían tenido los poderes, pues ya se había experimentado la

sus sesiones ordinarias el 6 de agosto próximo, conforme a su Constitución. 2º Los que se nombren, cesaran precisamente al concluir el término prefijado a los que comenzaron a funcionar el citado año de 1829. Manuel DUBLÁN, José María LOZANO, *Legislación Mexicana*, pp. 243

⁹⁵⁶ Amador Coromina, *Colección de leyes y decretos*, Tomo VII, pp. 47-48.

variación de gobernadores y legislaturas. Estaba por la perpetuidad porque era como un dique que se oponía a los partidos y para seguridad de que estos funcionarios obraran siempre bien con rectitud debía el Congreso poner buenos ciudadanos y reglamentar un buen código. El 28 de marzo se realizó la elección de los jueces letrados y de los miembros del nuevo Supremo Tribunal que marcaba la reforma constitucional. El tribunal quedó integrado por Antonio de Castro, exgobernador, Agustín María Gómez Eguiarte, Telesforo Mendez Torres, José María Ortiz Izquierdo, Clemente Valdez, Manuel Alvirez, primer fiscal Mariano Tercero, 2º fiscal García Rojas, 1er asociado Canto Paras, 2º asociado Bribiesca. Izquierdo fallece así que se hacía necesario cubrir su falta y resultó electo el 2º fiscal García Rojas.⁹⁵⁷

Es de remarcar que la legislatura cuestionara algo que ya estaba aprobado y sancionado por tres Congresos incluido éste, además de era imposible variar el mandato constitucional sin seguir los procedimientos establecidos, aun así, varios legisladores aprovecharon el contexto para manifestar su opinión al respecto. Otra cosa que se debe rescatar es que, a partir de las condiciones del nombramiento, este Tribunal pasará intacto a la república centralista, por lo que la renovación solo se dará a partir de la muerte o renuncia de alguno de sus miembros.

Finalmente, después de resaltar algunas acciones importantes de la sexta legislatura, es necesario dirigir la mirada al proceso de transición del sistema de gobierno en Michoacán en cuanto al debate. Para mediados de año, las especulaciones sobre la variación del sistema de gobierno y la posible adopción del centralismo hizo sus primeras manifestaciones en la capital michoacana a través de pronunciamientos fallidos. El 2 de junio hubo movilizaciones que tenían el respaldo de la guarnición militar, a pesar de que el Ayuntamiento de la ciudad buscó que se procediera en cuanto a derecho contra los responsables, finalmente se resolvió parar el asunto. A la par, los informes sobre los levantamientos en Orizaba y Toluca ambientaron el escenario en el que Moisés Guzmán enmarca la representación del Ayuntamiento de Morelia hacia las autoridades estatales y federales manifestando su deseo de variar el sistema de gobierno, lo que dicho sea de paso se realizó bajo fuertes debates al interior del

⁹⁵⁷ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 3/II/1835 y Exp. 2, 28/III/1835, 31/III/1835. Amador COROMINA, *Colección de leyes y decretos*, Tomo VII, pp. 48-49.

cuerpo. En el Congreso se argumentó que el planteamiento obedecía al hecho de que la soberanía residía en el pueblo y que éste tenía toda la libertad para revocar cualquier ley o artículo constitucional. De la misma manera condenaba las revueltas que el federalismo había dejado a lo largo de 12 años, el ataque a la religión y las constantes violaciones al pacto federal por parte de los estados. En concreto, el Ayuntamiento pedía la elaboración de una nueva Constitución y la elección de una asamblea nacional conformada de 60 a 80 individuos que debía instalarse entre el 1º de septiembre y el 1º de octubre.⁹⁵⁸

Aunque desde el mes de junio varias poblaciones se habían pronunciado en pro de la variación del sistema incluido el Ayuntamiento de la capital del estado como se ha visto, no fue hasta el mes de agosto, que la asamblea local legisló al respecto, por lo que el día 5 de ese mes se puso a discusión el dictamen sobre la variación del sistema de gobierno. Ese día, el eclesiástico Guedea dijo que ya era momento de tomar el asunto en consideración a pesar de que el número de iniciativas no fuera el suficiente, porque al ver el trámite que se le daba a las iniciativas, las demás poblaciones podrían abstenerse de manifestar su deseo, con lo que el eclesiástico daba a entender que la legislatura no le daba la importancia debida al asunto.

Rojas reclamó a Guedea que sus expresiones no sonaban bien en una sesión pública, porque daba a entender que el Congreso trataba de sofocar las expresiones del cambio de sistema cuando era todo lo contrario, pero si no las había tomado en consideración era por darle mayor legalidad al asunto y no aventurar opiniones. Peña apoyó a Guedea y dijo no estar de acuerdo con el dictamen, él era de la opinión que se hiciera una solicitud a las cámaras pidiendo la variación del sistema, en atención a la voluntad de los pueblos del estado. Alvarez por su parte decía que con las manifestaciones existentes legalmente no se demostraba la opinión de todo el estado porque todavía no había mayoría de ayuntamientos en favor de la variación del sistema. El diputado Juan Gómez Puente fue de la misma idea, al igual que García Rojas, este último propuso que al asunto se le diera un giro y que se dijera a las cámaras que aunque no podía hacer iniciativa de ley, de acuerdo con las manifestaciones de los pueblos parecía se pedía la variación de la actual forma de gobierno. En este punto, se

⁹⁵⁸ Moisés GUZMÁN PÉREZ, *Relaciones clero-gobierno*, pp. 87-89.

declaró suficientemente discutido el tema en lo general y se descendió a la discusión en particular del artículo 1º en que se ordenaba la remisión de todas las solicitudes enviadas a la legislatura local solicitando el cambio de sistema de gobierno a la cámara de diputados de la Unión añadiendo que en la asamblea obraban copias literales de las peticiones lo que fue aprobado. El 2º artículo se relacionaba con sacar copias de todas las manifestaciones existentes y de las que siguieran llegando.⁹⁵⁹

El 7 de agosto, en el contexto de la discusión, el diputado Robles propuso que se pidiera al gobierno el expediente que se había formado en las últimas elecciones realizadas para el nombramiento de diputados federales, locales y demás funcionarios en las que constaban las actas de las juntas secundarias y se agregaran al expediente de la iniciativa del cambio de gobierno, lo que fue puesto a discusión en ese mismo momento. El legislador Rojas manifestó que no veía beneficio en sacar tantas copias de los documentos. Alvirez, además de apoyar a Rojas, consideraba que no había una voluntad general en los pueblos por lo que se veía en las iniciativas, Guedea le respondió que se notaba cierto empeño en persuadir de que no había voluntad general en los pueblos.⁹⁶⁰

El 11 de agosto se leyó una exposición de la legislatura de Jalisco en que informaba haber enviado al Congreso general una petición para que éste se declara constituyente. El cambio de sistema era inminente. Jalisco, baluarte del federalismo, lo dejaba claro, esta legislatura ya había definido su postura, correspondía a la michoacana hacer lo propio.⁹⁶¹

El 12 agosto, el artículo retirado en la sesión del día 5 volvió a la mesa de debate, el cual ordenaba la remisión de las iniciativas del cambio de sistema por medio de exposición. Ahora, se presentaba reformulado y más certero, la propuesta era enviar la documentación como sustento de una iniciativa formal sobre la variación del sistema. De inmediato el diputado Ramírez votó en contra, acto consecutivo, Guedea leyó un discurso en el que se enfocó a satisfacer a algunos diputados que se habían considerado agraviados en las expresiones sobre el particular en la sesión del día 7, después pasó a dar su opinión acerca

⁹⁵⁹ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 5/VIII/1835.

⁹⁶⁰ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 7/VIII/1835.

⁹⁶¹ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 11/VIII/1835.

del centralismo y manifestó “estar demasiado aprobada” la voluntad general del estado y de toda la república al respecto. El diputado Rojas, se sintió aludido y dijo estar muy lejos de desear la federación; éste y Ramírez argumentaron que el problema radicaba en que la documentación no era suficiente, es decir el número de proclamas era poco y eso no demostraba una voluntad generalizada, pues hasta ese momento, solo 11 ayuntamientos de los 61 que existían en el estado habían remitido sus iniciativas, por lo que si se enviaba la propuesta a las cámaras de la unión bajo esas condiciones no se actuaba sobre la legalidad y por tanto se corría el riesgo de que los actos emitidos por la legislatura michoacana fueran desconocidos. Peña rebatió esta manifestación calificándola de insignificante y rectificando la opinión de Guedea.

Olmos se manifestaba neutral ante el asunto, pues su imparcialidad la había demostrado en todas épocas, pero por la argumentación vertida se adhería al sentir del diputado Rojas. Olmos añadió que para opinar de este modo solo se veía estimulado por el cumplimiento de los deberes que el empleo de diputado le imponía, por la observancia de los juramentos que tenía presentados y que todos sus compañeros estaban obligados a cumplir y porque su conciencia le aconsejaba la variación del sistema actual, pues la experiencia de 11 años de federación, les habían patentizado que la moral se había corrompido demasiado y apenas se encontraban hombres puros para la muchedumbre de empleos que gravitaban sobre la república.

Guedea estaba de acuerdo con las razones de Peña y añadió que, si para el sistema federal se necesitaban cien hombres, era más fácil encontrar diez para el central. Respecto a los juramentos, Guedea considera que éstos debían tener su fuerza en los representantes, mientras la voluntad de sus conciencias no se expresara por el sentido contrario, porque ello conduciría a faltar a los deberes si esa voluntad tácita no se atendiera. Alvirez apoyó a Rojas y Olmos sosteniendo que el sentir de los mejores publicistas y códigos de las naciones opinaban que se podía reformar en todo o en parte un sistema, pero de ninguna manera destruirlo, apoyándose en que los males futuros de una absoluta variación no los podía prevenir nadie. Alvirez argumentaba que “la voluntad” tácita no estaba manifestada, para ello se basó en la cantidad de población que se había manifestado en pro, poco más de 100 mil habitantes de los 400 mil que tenía el estado. A partir del contexto del debate éste legislador pensaba que solo

se quería arrancar a la legislatura la iniciativa que a la vez la pusiera en ridículo, dejándola al descubierto por haberse hecho una cosa que sus comitentes no le habían pedido legalmente, pues los representantes no eran sino unos apoderados del pueblo y por tanto, ningún apoderado podía exceder los límites que le demarcaba el poder.

Alvirez también le contestó a Guedea sobre el argumento de se necesitaban menos hombres para gobernar en el sistema centralista que en el federalista, y por ello debería ser más fácil encontrarlos, entonces invirtió la fórmula, si para el sistema central se necesitaban diez, para el monárquico no se necesitaba sólo uno, “¿sólo por esta hipótesis nos hemos de entregar a la voluntad de su monarca déspota?” Y concluyó al decir que estaba en contra del artículo en todas sus partes. El diputado Ramírez lo apoyó “y rolando una detenida discusión con fuertes debates” se intentó someter a votación, pero al no estar agotado el debate, este continuó. Alzua dijo que aprobaba el dictamen si se suprimían algunas expresiones de manera que se dejara al Congreso general la libertad para variar el sistema o hiciera lo que creyera conveniente. Al no llegar a un acuerdo el tema fue reservado para la sesión siguiente.

En el contexto de la discusión se debe tener presente que aun cuando los pueblos manifestaban sus opiniones respecto de la variación del sistema, por el tipo de gobierno correspondía a la legislatura fijar el posicionamiento del estado al respecto, tal como lo estaban haciendo otras legislaturas. El problema para llegar a un consenso era la división de la legislatura, ya fuera porque la variación del sistema no la había externado la mayoría de las poblaciones o por qué dentro del Congreso había diputados federalistas que no estaban dispuestos a ceder al cambio tan fácilmente.⁹⁶²

El 13 de agosto, el punto era que el asunto había dividido al Congreso entonces Guedea propuso que se mandara llamar al diputado Sosa para que ayudara en las deliberaciones, aun cuando este estaba de licencia. En medio de todo, se tomó una decisión que no queda clara porque fue resuelta en cinco líneas, finalmente se votó el artículo y fue desechado. Después se preguntó si se ponía a discusión el voto particular de Ramírez y se acordó que sí. La redacción del acta no permite entender muy bien qué ocurrió, pero sí se infiere

⁹⁶² AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 12/VIII/1835.

que el ambiente era muy tenso si se parte de lo que a continuación externó el diputado Ugarte:

En vista de esta deliberación del Sr. Ugarte pidió contase en esta acta que su señoría se separaba de la Honorable legislatura porque vaya que no se obsequiaba la voluntad general de los pueblos.⁹⁶³

El presidente lo persuadió de que tomara su asiento porque el asunto aun no había concluido y podía faltar su voto en la discusión particular. Entonces los legisladores acordaron se mandara llamar al diputado Sosa, aun cuando se encontraba de licencia, para que desempatar la votación. Cabe hacer la observación, acaso no era lo mismo que había solicitado el eclesiástico Guedea, pero que el divisionismo que predominaba al interior de la asamblea no permitió su ejecución.

En un acto de virar un poco la dinámica, Gómez Puente pidió que la redacción del artículo cambiara y que en lugar de *voluntad de los pueblos* se dijera *voluntad de estado*, lo que fue aprobado. Aun así, Alvirez, García Rojas, Olmos y Ramírez consideraban que no había mayoría por el cambio de sistema. Mientras que Guedea, Peña, Ugarte y Porto decían que sí.⁹⁶⁴

Todo indica que Sosa se encontraba de licencia en la ciudad porque de inmediato se incorporó a la discusión y solicitó se hiciera un conteo de la población que estaba en pro del cambio a partir de las certificaciones emitidas por los ayuntamientos y pueblos que no tenían este órgano de gobierno para poder fijar una propuesta. Ese mismo día, 13 de agosto en sesión extraordinaria, la comisión encargada del asunto presentó los resultados del análisis del censo. Alsua dijo que era indudable que la mayoría de los pueblos querían la variación del sistema de gobierno, hasta aquí ya no había aparente razón para la oposición que manifestaban los diputados Alvirez, García Rojas, Olmos y Ramírez.

Aun así, Alvirez dijo no estar convencido, argumentó que lo presentado por la comisión era solo un cálculo por tanto su posicionamiento seguía siendo el mismo hasta no tener datos legales. El abogado consideraba de mayor prudencia enviar a las cámaras el análisis presentado y que se dijera la escrupulosidad con que se había tratado el asunto y de esa manera no se excedía la legislatura en sus atribuciones, al tiempo que se obsequiaba la

⁹⁶³ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 13/VIII/1835.

⁹⁶⁴ *Ídem*.

voluntad de los pueblos. El eclesiástico Peña tomó la palabra y dijo que aun con las pruebas no se quería admitir que había una mayoría de habitantes en favor del cambio de gobierno, argumentado este tipo de análisis eran aceptados en tiempos de la independencia, entonces el eclesiástico cuestionó “que si 290 mil habitantes no era algo que podía tomarse por legal, entonces no sabía de qué modo podía ser esto”. Olmos protestando y reiterando la buena fe que lo guiaba dijo que se quería dar fuerza con ejemplos de revoluciones pasadas, cuando el tema era la variación del sistema, lo cual era de suma gravedad porque involucraba el futuro de toda la nación, señalando que los ayuntamientos no debían iniciar por sus habitantes porque nadie los había autorizado para ello, lo que dejaba entrever que se tomaban la atribución porque eran corporaciones.

Guedea por la vía conciliadora, dijo que siendo ya indudable que la mayoría de la población estaba por el cambio, ya no había motivo para que la legislatura estuviera dividida y menos cuando la discusión se había acalorado tanto. Consideraba que ya era tiempo de que se unieran, pues estaba convencido “que a todos los guiaban rectas intenciones”, el eclesiástico veía que ya no había obstáculo para llegar a una resolución. El diputado Ramírez propuso que se diera otro giro al asunto y que se dejara a las cámaras en la libertad para deliberar al respecto y se les hiciera saber que Michoacán había sufrido muchos males, la propuesta recibió el apoyo de Alvarez. Alsua y Ugarte seguían en su mismo posicionamiento, Peña hizo lo propio agregando que de nada les servía a los pueblos la soberanía si por ella le venía su infelicidad y “estos más bien quieren ser felices que soberanos.” García Rojas manifestó que su oposición se había fundado por el tema de la mayoría de la opinión de los pueblos, pero convencido ya de ésta no tenía problema en que se hiciera la formal propuesta de variación del sistema de gobierno, Ramírez por su parte retiró su voto en particular.⁹⁶⁵

Hasta aquí, las cosas comenzaban a tomar su cauce y la tensión al interior del Congreso disminuía. Queda claro que para varios diputados el tema de la mayoría de la voluntad del pueblo por variar el sistema era muy importante, porque de ello dependería la legitimidad del cambio. En sesión del 14 de agosto la legislatura logró el consenso y se presentó a debate el artículo

⁹⁶⁵ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, Sesión extraordinaria 13/VIII/1835.

1º El Congreso del estado hará una iniciativa al general para que con arreglo a sus facultades y teniendo presente los males que tanto este estado como los demás de la República han sufrido, y la peligrosa crisis en que hoy se hayan (sic), dicte las medidas que crea más convenientes para remediarlos, afianzar la paz, la estabilidad, el orden, la libertad y garantías sociales. En la inteligencia que la resolución que tome en el asunto, sea cual fuere y bajo lo expuesto será la de este Honorable Congreso.⁹⁶⁶

La comisión pidió se dijera “las facultades que le ha dado la nación” en lugar de “sus facultades”. Rojas dijo estar por el artículo si después “de las garantías sociales” se ponía “la forma representativa popular” porque eso era lo que querían todos los pueblos que habían manifestado su opinión. Después de discutida la propuesta, Rojas dijo que votaba en concepto de que fuera aprobada su moción, a lo que el presidente del Congreso respondió que no se podía votar condicionando. El artículo volvió a la comisión para ser reformado y se aumentaron las palabras “división de poderes” después de “representativa popular”, sometida a votación quedó aprobado por 16 diputados. El segundo artículo que presentó la comisión decía:

Para que las A. Cámaras tengan un exacto acierto y pleno conocimiento de la situación en que hoy se haya (sic) la opinión de Michoacán, se le remitirán las actas originales de los ayuntamientos que han manifestado su voluntad, el número de habitantes que tiene las municipalidades, el censo total de la población, los datos que se indican ya en los dictámenes de la mayoría de la comisión, ya en los votos particulares y ya por ultimo todos los que se crean necesarios o útiles para ilustrar esta materia.⁹⁶⁷

El presidente del congreso veía muy redundante el artículo con muchas similitudes de los que ya se habían aprobado el 5 de agosto, el postulado se sometió a votación y fue aprobado por 16 votos.

El debate demuestra que el Congreso de Michoacán no se pronunció a favor del centralismo, en medio de fuertes debates, de una asamblea dividida por el tema y de un estado muy polarizado, se determinó hacer del conocimiento al Congreso general de la situación que prevalecía en Michoacán, pidiéndole que acorde a sus facultades determinara lo conveniente para afianzar la paz, la estabilidad, la forma de representación y la división de poderes, dejando claro que la asamblea estatal acataría las decisiones que desde el centro de la

⁹⁶⁶ AHCEMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 14/VIII/1835.

⁹⁶⁷ *Ídem*

federación fueran emitidas al respecto. Lo anterior remarca la cautela con la que obró el legislativo michoacano, lo que advierte los grandes temores, las profundas divisiones y la reticencia que había al interior de la legislatura frente a este tema.

Esto último logró percibirlo el Ayuntamiento de Apatzingán, quien envió una representación al Congreso local el 12 de agosto de 1835, justo cuando éste se encontraba deliberando la variación del sistema. En ella se cuestionaba y acusaba a las autoridades estatales de contrariar y retrasar la decisión de modificar cuanto antes el sistema de gobierno.⁹⁶⁸

La decisión fue tomada y la legislatura aceptaba la variación del sistema de gobierno, hasta aquí solo quedaba esperar las resoluciones del legislativo nacional. Sin embargo, esa relativa calma estaba inmersa en mucha tensión. Ramón Alonso Pérez refiere la fuerza que para esas fechas aun tenía el federalismo en el estado pues apenas consumado el golpe militar en Morelia, las cuadrillas liberadas por Antonio Angón, Nieves Huerta, Manuel Vélez y Domingo Lozada se habían fortalecido a fines de 1834 en la zona Tacámbaro-Huetamo. Ello dio motivo para que las autoridades en pro de la variación del sistema trataran de diluir desde sus raíces el apoyo social que tenía el federalismo. Resultado de ello fue el decreto del 5 de marzo de 1835, en el que se pedía que todos los individuos que tuvieran despachos de jefes y oficiales de la milicia local, los debían presentar para su revalidación en un plazo no mayor a 30 días. Entonces, los cuerpos armados auxiliares que se habían creado a finales de 1834 fueron movilizados para contrarrestar la resistencia federalista, las cuales muchas veces actuaron con suma brutalidad como ocurrió en Ario de Rosales y Michoacán lo que les valió el señalamiento de la sociedad y las autoridades nacionales.⁹⁶⁹

Por lo anterior no es de sorprender que el 11 de septiembre de 1835 en sesión secreta extraordinaria se discutiera el dictamen de la comisión de gobernación sobre las instrucciones que una delegación debía llevar para que en nombre del gobernador se diera una entrevista con el General Joaquín Parres para que ayudara a “tratar la reconciliación de los supremos poderes del estado” con el comandante general Isidro Reyes. En la discusión participaron García,

⁹⁶⁸ Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, *Orden y desorden*, p. 145.

⁹⁶⁹ Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, *El origen y desarrollo de las fuerzas armadas*, pp. 142 y 143.

Rojas, Alvarez y Alzua en favor del dictamen y Puente en contra. Dentro de los acuerdos a los que se llegaron destaca la búsqueda de los medios más apropiados y benéficos que lograran que Joaquín Parres removiera al comandante general Isidro Reyes. Los diputados Peña y Puente pidieron que su voto constara en contra, lo que no era impedimento para la propuesta continuara.⁹⁷⁰

Dos días después, el 13 de septiembre en sesión secreta extraordinaria, los comisionados informaron a los miembros del Congreso que el general Parres estaba instruido de lo tratado en la sesión secreta, lo mismo que el Comandante general sin saberse el conducto. Lo primero que la legislatura discutió fue la vergüenza que generaba la falta al secreto de este tipo de sesiones. Respecto de la respuesta, el general Parres consideraba que el relevo no era necesario ni conveniente para que el comandante actuara en armonía con las autoridades del estado, además de manifestar que él consideraba no poseer las facultades para ordenar su cambio por lo que oficiaría al gobierno general sobre el asunto. Ante el escenario, un diputado que por acuerdo no se consignó su nombre, reformuló la petición.

La comisión nombrada para tratar en unión del ejecutivo del Estado sobre reconciliación de las autoridades del mismo con el comandante general manifestará al Sr. Parres que la legislatura insiste en la remoción de aquel en concepto de que si esta no se verifica y el Sr. Parres se separa de esta capital, la misma legislatura entiende que se hallara en la necesidad de disolverse.⁹⁷¹

De entrada, la legislatura confiaba en Parres a pesar del respaldo que le brindaba a Reyes, pero éste último era visto por la legislatura como una amenaza no sólo al orden, sino a las instituciones en transición en Michoacán. Por otra parte, sorprende la amenaza de disolución de la legislatura a un mes de haberse pronunciado el centralismo y faltado muy poco para que formalmente se adoptara este sistema, lo que es sintomático de que la transición si bien fue con pocas salvadas, sí fue muy tensa por los reductos y adeptos que el sistema federal tenía en el estado. Como se puso de manifiesto en la primera sesión de la legislatura y en el mes de agosto, “la voluntad del pueblo” no era unánime, si bien una parte importante de la clase política y las instituciones estaban en a

⁹⁷⁰ AHCEMO, Legislatura IV y VII Central, Actas secretas, Caja 2, Exp. 8, 11/IX/1835.

⁹⁷¹ AHCEMO, Legislatura IV y VII Central, Actas secretas, Caja 2, Exp. 8, 13/IX/1835.

favor, existía un grupo dispuesto a sostener el federalismo. Las comunicaciones permiten ver el temor de legislatura ante un posible pronunciamiento de parte del comandante general del estado Isidro Reyes, ni los diputados ni el encargado del gobierno estaban cómodos con el general, se sentían amenazados. A esto se debe agregar la actitud que asume Parres, quien dejaba ver que hasta cierto punto simpatizaba con Reyes, por esa razón las entrevistas y comunicaciones entre Parres y la legislatura estarán inmersas en amenazas veladas.

El último dato que se tiene al respecto proviene del acta del 15 de septiembre de 1835, en esta sesión secreta extraordinaria el comisionado diputado Olmos informó que el general Parres había sido instruido sobre el posicionamiento de la legislatura y que este a su vez hizo presente que temía que el alto gobierno tuviese como amenazante la manifestación de que la legislatura se disolvería si no era relevado el Comandante Reyes y la probabilidad de que el hecho disgustase al gobierno de la unión. Parres también dijo a los comisionados que si se insistía, él comunicaría lo ocurrido a sus superiores. La reacción de los diputados no se hizo esperar enfrascándose en una larga discusión que dio como resultado la aprobación del siguiente escrito:

Se dirá al Sr. Parres por la comisión que la legislatura que cree inútil se comunique al gobierno general el acuerdo del día 13 del actual, bajo la sincera protesta de que por ninguna manera tiene el carácter de amenazar el anuncio de que la misma legislatura podrá disolverse porque esto solo se cree ser resultado de una imperiosa necesidad, añadiendo que el Congreso está muy distante de amenazar cuando no esta en sus principios proteger ningún desorden, ni faltas a la junta, consideración que se debe al ejecutivo de la nación, que la legislatura desea que el señor Isidro Reyes sea relevado por otro jefe de la completa satisfacción del Presidente interino y con esto era suficiente para persuadirlo que no la animan ideas de desorden ni deseo de protegerlo. Que esta resolución puede comunicarla del modo que le parezca conveniente pues la legislatura no pretende lo haya por extraordinario.⁹⁷²

Las amenazas estaban dadas, los choques se hacían presentes, el temor de tornar la tensa calma en desorden era evidente. El 19 de septiembre en sesión secreta extraordinaria se abordaron los avances de las negociaciones con el general Parres, quien había dirigido al presidente interino de la Republica la petición de remoción de Isidro Reyes, al tiempo que hacía todo cuanto podía

⁹⁷² AHCEMO, Legislatura IV y VII Central, Actas secretas, Caja 2, Exp. 8, 15/IX/1835.

para lograr la reconciliación entre las autoridades del estado y la comandancia general, entre tanto Joaquín Parres permanecería en Morelia.⁹⁷³

Es complicado saber hasta dónde paró el asunto, pues el hecho quedó consignado en las actas secretas que corresponden al año de 1835, y de las que solo se conservan algunos borradores del mes de septiembre. Por otra parte, el evento a estas alturas de la transición hacia el centralismo, habla de que ésta a pesar de ser pacífica fue muy rígida. Ramón Alonso Pérez advierte que aunque se había optado por un régimen central, los grupos federalistas siguieron presentes, entrando en una etapa de profunda recomposición para emprender la lucha en contra de la promulgación y vigencia de las *Siete Leyes Constitucionales*.⁹⁷⁴

Como estocada final de un proceso que había iniciado en enero de 1835, el 8 de octubre de ese mismo año, se recibió un oficio del consejero decano en que informaba había tomado las riendas del ejecutivo estatal, pero pedía al legislativo que el cargo le fuera dado en calidad de provisional y que una vez creada la Junta departamental cesara su empleo, ese mismo día la legislatura aprobó la petición del encargado del ejecutivo. El 10 de octubre ciñéndose a lo expuesto por el decreto general del día 3 de ese mismo mes, en su artículo 2º, se procedió al nombramiento de los cinco individuos integrantes de la Junta Departamental, la que se conformó por el licenciado Manuel Alvirez, su homologo Onofre Calvo Pintado, el eclesiástico Pablo José Peguero, el abogado Ignacio Barrera y Fernando Román. Ese mismo día el sexto congreso michoacano cerró sus sesiones y el estado pasó ser el departamento de Michoacán de una República centralista.⁹⁷⁵

En el proceso de transición hacia un nuevo sistema de gobierno, la participación de los eclesiásticos se hizo presente desde el primer día de sesiones, a su vez destaca el apoyo y simpatía que Peña y Guedea tenían por el sistema centralista, pues el federalismo había propinado certeros golpes a la institución a la pertenecían, a sus privilegios, apoyando la separación Iglesia-Estado y quitándoles escaños en el Congreso a partir de 1833, desde su

⁹⁷³AHCAMO, Legislatura IV y VII Central, Actas secretas, Caja 2, Exp. 8, 19/IX/1835.

⁹⁷⁴ Ramón Alonso PÉREZ ESCUTIA, *Origen y desarrollo de las fuerzas armadas*, p. 144.

⁹⁷⁵AHCAMO, Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 3, 8/X/1835, 10/X/1835.

perspectiva, el nuevo proyecto ofrecía mayor protección al alto y bajo clero en medio de un proceso que ya había advertido de manera muy sutil la quinta legislatura: la separación de la Iglesia y el Estado que tendrá su concreción hasta la promulgación de la Constitución mexicana de 1857.

CONCLUSIONES

La cultura política que derivó de la crisis de la monarquía española en 1808, permitió el ensayo y la articulación de nuevas formas de gobierno cuya base legitimadora sería la representación política. Cuando México nace a la vida independiente hará uso de la herencia gaditana para legitimar el acceso y ejercicio del poder. En ese escenario los eclesiásticos venían cobrando una relevancia importante, entonces fue común que hombres con esta profesión fueran figuras centrales dentro de los procesos electorales sin que se les restringiera el acceso a cargos de elección, a excepción de estarles prohibido quedar al frente del ejecutivo.

En contrapartida, los eclesiásticos que fueron electos diputados al Congreso del estado de Michoacán entre 1824 y 1835 provenían de una institución diezmada por la guerra, en el caso del Obispado más de algún eclesiástico manifestó el haber abandonado sus estudios a causa del conflicto bélico. Manuel Tuburcio Orozco, quien renunció al cargo, dio fe de haber sido perseguido por los insurgentes, algunos otros manifestaban en las certificaciones las penurias que debieron pasar para llegar a ordenarse o para desempeñar su labor de curas de almas. A la par, existían eclesiásticos con una esmerada formación e importantes vínculos políticos que tenían su explicación en la fortuna y el prestigio familiar, lo que bien podía influir para obtener un buen curato, una capellanía, un patrimonio propio para vivir decorosamente o hasta una prebenda.

Por tanto, mientras que para unos eclesiásticos el cargo de diputado era una distinción que reafirmaba el prestigio familiar, para otros era un mecanismo que les daba notoriedad dentro de la sociedad y la propia Iglesia. Cuando los eclesiásticos presentaban sus méritos en los concursos para curatos vacantes, no olvidaron mencionar que “el pueblo los había distinguido con el cargo de diputado”.

Varios eclesiásticos, entre ellos Pastor Morales, Lloreda, Peguero, Rivas y Auriol demostraron un gran manejo de autores como Jovellanos, Montesquieu, Rousseau, Filangieri, Constant, Bentham y Vattel. Se sabía que el primero disfrutaba de las obras francesas ya que dominaba el idioma. Lloreda tenía permiso del Santo Padre para realizar lecturas prohibidas y Rivas era un

hombre muy dedicado al estudio. Peguero es un caso peculiar porque sabía capitalizar sus conocimientos en las lecturas que realizaba para fundamentar sus posicionamientos y lo mismo utilizaba a “los publicistas más celebres” de la época que obras de lógica y reglas de derecho en latín. Respecto a sus tendencias, el prebendado Martín García de Carrasquedo y el bachiller Felipe Carvajal eran masones del rito de york. Villavicencio era de pensamiento radical, mientras que Peguero, Rivas, Auriolles, Ladrón de Guevara, Peña y Guedea eran más moderados. Estas breves notas permiten contextualizar la diversidad que imperaba dentro de este grupo de eclesiásticos.

El que fueran miembros o dependientes de la Iglesia no significaba que sus decisiones legislativas estuvieran condicionadas por esta situación ni que solo intervinieran en temas referentes a esta institución. Ciertamente es que ningún diputado simpatizó con la libertad de cultos, varios de ellos defendieron a la Iglesia de los ataques del gobierno y estuvieron en contra de la idea de que ésta debía someterse y estar el servicio de las nuevas autoridades civiles. La mayoría de los eclesiásticos señaló la necesidad de negociar con la Santa Sede para que las nuevas autoridades pudieran tener injerencia al interior de la institución. En ocasiones, los eclesiásticos defendieron la intervención del nuevo gobierno en cuanto a vigilar el cumplimiento de los cánones, pero ninguno aceptó el ejercicio del patronato sin un previo acuerdo con la Santa sede lo cual además solo era competencia del gobierno federal, no de los gobiernos estatales. En ocasiones fue este tipo de temas el que logró aglutinar el consenso de los eclesiásticos.

En medio de los conflictos que se suscitarían entre el gobierno del estado y las autoridades del obispado se encontraba la necesidad de negociar con la Santa Sede el patronato para que éste pudiera intervenir en materia eclesiástica. El contexto internacional impidió un acercamiento del Santo Padre y de las autoridades federales que por mandato constitucional eran las únicas facultadas para conducir ese tipo de asuntos.

El problema de fondo fue que a pesar de que no se reconocía el patronato, el Congreso local llegó a legislar sobre asuntos vinculados con este, como lo fueron, los diezmos, el uso de la exclusiva, las anualidades eclesiásticas, el tribunal de haceduría, es decir, se ejerció un patronato virtual, falta que los eclesiásticos detectaron de inmediato y la señalaron como tal, algunos con más ahínco que otros. Y es que ese era otro asunto, el caso de Peguero es muy

ilustrativo porque cuando contradecía propuestas de materia eclesiástica solía fundamentar su posicionamiento en el tema de las competencias del legislativo federal o del estado, lo que le evitaba señalamientos en todos los sentidos.

Como se vio a lo largo de la investigación, la asamblea michoacana debió legislar sobre infinidad de asuntos, no solo referentes a la Iglesia. Por esa razón se remarca la importancia de los eclesiásticos, quienes tuvieron una destacada participación en la redacción de la Constitución del estado y su reforma, respaldaron la articulación institucional del federalismo en el estado, deliberaron sobre la recaudación de impuestos, defensa y tranquilidad pública, impartición de justicia, organización territorial y toda clase de asuntos que llegara al seno del Congreso.

En ese mar de temas destaca la elaboración de los artículos preliminares de la Constitución de 1825 que fue producto de la visión de la Torre Lloreda, el cuestionamiento de Peguero sobre el tipo de dominio de las tierras comunales, la propuesta del cambio de nombre de la capital del estado y qué decir de la participación de Rivas y Auriolés en la reforma constitucional. En este último punto destaca que los eclesiásticos apoyaran el voto censitario y que, como se ha visto, no fue aprobado por el grueso de la legislatura, pero el proceso del debate fue muy rico y permite observar el desencanto que padecían los eclesiásticos por el sistema de elecciones y su manipulación.

Uno de los elementos a destacar es cómo los legisladores veían condicionada su participación a partir de las propias características de las asambleas y la época. Peguero intervino en tres Congresos, en el primero fue de los más destacados, en el segundo fue más moderado y cauteloso en sus opiniones y en el tercero quien tomó el liderazgo del Congreso fue Rivas. Algo similar ocurrió con Joaquín Ladrón de Guevara cuya participación más esmerada fue en la tercera legislatura en su primer año, porque en la quinta era tal el cuestionamiento hacia el clero que se vio reflejado en la elección de un solo eclesiástico. En conclusión, había momentos en que la misma fragilidad institucional obligaba a los ministros del altar a ser más cautelosos referente a sus posicionamientos y propuestas para no ser señalados por sus compañeros diputados, por la sociedad o por la misma Iglesia.

Y es que se debe tener presente que el Congreso como institución de 1824 a 1835 no tuvo un comportamiento lineal. El constituyente sentó las bases

de la organización del estado y la primera legislatura ordinaria trató de acotar lo expuesto por la Constitución de 1825 respecto a la estructuración de las instituciones federales en el estado. A finales de 1827 la crisis política del ejecutivo complicó el escenario en Michoacán porque el orden social que prevalecía se resquebrajó y solo fue cuestión de tiempo para que las legislaturas no pudieran funcionar conforme a lo establecido por la ley máxima del estado. De 1829 a 1835, el Congreso entrará en una crisis de legitimidad aunado a la falta de condiciones para realizar el trabajo legislativo a consecuencia de los partidismos políticos que se introdujeron al interior de legislativo. El cuestionamiento del papel del clero en la sociedad y los ataques a la Iglesia dividieron a las legislaturas junto con el tema de la variación del sistema de gobierno.

Bajo este escenario los eclesiásticos diputados tuvieron una actuación muy importante en el diseño constitucional, institucional y de sustento de un sistema que, con el paso de los años, dejó de ver a estos hombres como los más aptos para ocupar escaños al interior de Congreso. Los ataques habían sido certeros, eso explica por qué hacia 1835 Peña y Guedea se pronunciaron y defendieron la variación del sistema federal hacia uno central.

Si bien la obtención del cargo de diputado era un empleo o distinción que podía ser capitalizado para continuar en la vida política o para adquirir ascensos al interior de la Iglesia, los costos eran altos. En primer lugar, porque dentro del sistema federal se perciben fuertes tensiones en los límites de atribuciones que debían predominar entre los poderes federales y los poderes estatales. Esas indefiniciones no solo tocaban la administración pública, también la política eclesiástica condicionada por el tema del ejercicio del patronato.

Para terminar, solo queda señalar que el presente trabajo invita a seguir construyendo, analizando y reflexionando sobre el periodo de 1824 a 1835 en Michoacán, por lo que no es un trabajo acotado, al contrario, cada uno de los temas que aquí se presentan deben tener su tratamiento desde una perspectiva integradora para lograr una mejor comprensión de lo acontecido en el periodo y con ello contribuir al enriquecimiento historiográfico de la región.

FUENTES DE INFORMACIÓN

ARCHIVOS

Archivo General de la Nación de México

Inquisición, Volumen 1361.

Justicia, Volumen 150.

Operaciones de Guerra, Volumen 80.

Archivo General e Histórico de Notarias

Libro de Protocolos No. 241, 1827-1828.

Archivo Histórico Casa de Morelos

Siglo XIX

Diocesano, Gobierno, Mandatos, Correspondencia, Exp. 48.

Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja 193, Exp. 29.

Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja, 193, Exp. 50

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 478, Exp. 7.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 479, Exp.7.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 480, Exp. 23.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 2.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 3.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 5.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 8.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 481, Exp. 28.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 482, Exp. 33.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 484, Exp. 5.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 485, Exp.1.

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 485, Exp. 2

Diocesano, Gobierno, Sacerdotes, Oposiciones, Caja 488, Exp.6.

Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1806, Caja 570, Exp. 53.

Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1807, Caja 574, Exp. 68.

Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1807, Caja 574, Exp. 68.

Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1807, Caja 575, Exp. 70.

Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1808, Caja 576, Exp. 76.

Diocesano, Gobierno, Seminario, Ordenes, 1817, Caja 578, Exp. 87.

Archivo Histórico del Cabildo Catedral de Morelia

Legajo 170, 1792-1832.

Legajo 163, 1826, f. 255-266.

Legajo 166, 1822-1827,f.304-307.

Legajo 167, 1818-1828, f. 173-184.

Legajo 168, 1829, f. 25-35.

Legajo 169, 1828-1830, f. 207-218.

Legajo 171, 1832, f. 113-124, 371-381 y 405.

Legajo 172,1798-1836, f. 51-70, 27.

Legajo 174, 1833-1834, f. 116-138.

Legajo 173, 1835, f. 354-385v y191-191v.

Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ramo: Actas públicas

I Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 5, 4/VIII/1825-20/VIII/1825
I Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 6, 1/IX/1825-31/X/1825
I Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 7, 3/XI/1825-30/XI/1825
I Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 8, 2/XII/1825-31/XII/1825
Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 29/XII/1825-14/X/1826.
Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 2, 14/X/1826-28/XII/1826.
Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 3, 29/XII/1826-16/III/1827.
Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 1, 17/III/1827-18/IX/1827.
Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 2, 19/IX/1827-16/I/1828.
Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 3, 17/I/1828-10/V/1828.
Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 12/V/1828-30/IX/1828.
Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 2, 1/X/1828-26/II/1829.
Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 3, 2/III/1829-28/VIII/1829.
Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 1, 29/VIII/1829-21/XI/1829.
Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 2, 23/X/1830-20/IV/1831.
Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 3, 21/IV/1831-20/VI/1831.
Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1, 21/VI/1831-19/IX/1831.
Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 2, 10/IX/1831-30/XII/1831.
Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 1, 2/I/1832-14/VII/1832.
Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 3, 16/VII/1832-8/X/1832.
Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1, 9/X/1832-14/III/1833.
Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 2, 28/VI/1833-21/XI/1833.
Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 14/III/1834-11/II/1835.
Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 2, 12/II/1835-26/Agosto/1835.
Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 3, 27/VIII/1835-10/X/1835.

Ramo: Actas Secretas

Legislatura I, II, III y IV, Borradores de actas secretas, Caja, 1 Exp. 7.
Legislaturas, I, II, III y IV, Borradores de actas secretas, Caja 1, Exp. 2.
Legislaturas, I, II, III y IV, Borradores de actas secretas, Caja 1, Exp. 3.
Legislatura V, Actas secretas borradores, Caja 2, Exp. 6.
Legislatura IV y VII Central, Actas secretas, Caja 2, Exp. 8.

Ramo Varios

Varios, Legislatura I, Caja 2, Exp. 8.
Varios, Legislatura II, Caja 7, Exp. 5.
Varios, Legislatura III, Caja 6, Exp. 3.
Varios, Legislatura III, Caja 6, Exp. 11
Varios, Legislatura IV, Caja 1, Exp. 12.
Varios, Legislatura V, Caja I, Exp. 4

Archivo Histórico de Poder Judicial del Estado de Michoacán

Responsabilidad de autoridades, 1828, Leg. 1, Exp. 5.

Periódicos

El Astro Moreliano. Periódico Político. Tomo I, No. 38.
El Michoacano Libre. Periódico político y literario, T. I, no. 45.
El Michoacano Libre. Periódico político y literario, T. II, no. 35.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Actas y decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1835, compilación, prólogo y notas de Xavier TAVERA ALFARO, Tomo I y II, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1975.

BENTHAM, Jeremy, *Tácticas Parlamentarias*, Edición Facsimilar, en: [\[http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/tacticas/Tacticas_Parla.pdf\]](http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/tacticas/Tacticas_Parla.pdf)

BOUIX, Dominique, *Tratado del párroco, de los vicarios parroquiales, de los capellanes de monjas, militares y hospitales*, traducido por Isidoro Boclar, 1868.

COROMINA, Amador, *Recopilación de Leyes, Decretos, Reglamentos y Circulares expedidos en el Estado de Michoacán*, Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, Tomo I-VII.

Diccionario de Derecho canónico, París, Librería de Rosa y Bouret, 1854.

DUBLÁN, Manuel, LOZANO, José María, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, México, Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876.

Impresores y editores de la Independencia de México 1808-1821, Diccionario Monográfico, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UMNSH, 2011.

Recopilación de las leyes de los reinos de las indias, Tomo II, Miguel Ángel Porrúa, México, 1987

SOLÓRZANO Y PEREYRA DE, Juan, *Política indiana*, Tomo II, Madrid, 1776.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- AGUILAR, José Antonio, ROJAS (Coords.), *El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política*, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- ALMADA BAY, Ignacio, MEDINA BUSTOS, José Marcos, *Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000*, México, Cal y Arena, 2001.
- ANDREWS, Catherine, "Discusiones en torno de la reforma de la Constitución federal de 1824 durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)" en *Historia Mexicana*, LVI: 1, 2006.
- ANNA, Timothy, *La caída del gobierno español en la ciudad de México*, México, Nueva alianza, 1980. *El Imperio de Iturbide*, México, Editorial alianza, 1991.
- ANNINO, Antonio, *La revolución novohispana, 1808-1821*, México, CIDE, Fondo de Cultura Económica, Fundación Cultural de la Ciudad de México, 2010.
- , "México: ¿soberanía de los pueblos o de la nación?", en Manuel SUAREZ CORTINA, Tomás PÉREZ VEJO, *Los caminos de la ciudadanía en México y España en perspectiva comparada*, Madrid, Biblioteca Nueva, PubliCAN-Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2010.
- , "Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821", en Antonio ANNINO (Coord.), Uruguay, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- , "Soberanías en lucha" en Antonio ANNINO, François Xavier GUERRA (Coords.), *Inventando la Nación. Iberoamérica. Siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- , "Pueblos, Liberalismo y nación en México", en: *Inventando la nación, Iberoamérica siglo XIX*, Antonio ANNINO, François Xavier Guerra (Coords.), México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- , "Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema", en *Ciudadanía Política y formación de naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, Sabato, Hilda (Coord.), México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- ARREOLA CORTÉS, *Morelia*, 2ª edición, Morelia, Editores Morevallado, 1991.
- ARROYO, Israel, "Divisiones electorales y representación política: partidos y municipios, Atlixco, 1820-1835", en Fausta Gantús (Coord.), *Elecciones en el México del siglo XIX. Las prácticas*, México, Instituto José María Luis Mora, Tribunal Electoral del Distrito Federal, Conacyt, 2016.

- ÁVILA, Alfredo, *En nombre de la nación: la formación del gobierno representativo en México. 1808-1824*, México, CIDE-Taurus, 2002.
- BARRAGÁN BARRAGÁN, José, *Introducción al federalismo (La formación de los poderes en 1824)*, 1978, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.
- BASTIAN, Jean Pierre, "Una ausencia notoria: la francmasonería en la historiografía mexicanista", en *Historia Mexicana*, No. 44, 175, enero-marzo de 1995.
- BAZANT, Jean, *Los bienes de la Iglesia (1856-1875) Aspectos sociales de la revolución liberal*, México, El Colegio de México, 1971.
- BRAVO UGARTE, José, *Historia sucinta de Michoacán*, Morelia, Morevallado editores, 1993.
- BENSON, Nettie Lee, *La diputación provincial y el federalismo mexicano*, México, UNAM-El Colegio de México, 1994.
- BRADING, David A., *Una Iglesia asediada: El obispado de Michoacán, 1849-1810*, México, Fondo de Cultura económica, 1994.
- BREÑA, Roberto, *Cádiz a debate: actualidad, contexto y debate*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2014.
- , *El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española*, Madrid, El Colegio de México-Marcial Pons, 2012.
- , *En el umbral de las revoluciones hispánicas: el bienio 1808-1810*, México, El Colegio de México, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010.
- , *El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824: una revisión historiográfica del liberalismo hispánico*, México, El Colegio de México, 2006.
- CAÑEDO GAMBOA, Sergio Alejandro, *Cien años de vida legislativa: el Congreso del estado de San Luis Potosí, 1824-1924*, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, Congreso del Estado, 2000.
- CARRILLO CÁZARES, Alberto, "El gobierno espiritual en el obispado de Michoacán, 1758-1810", en José Antonio SERRANO ORTEGA (Coord.), *La Guerra de Independencia en el Obispado de Michoacán*, El Colegio de Michoacán-Secretaría de Cultura de Michoacán, 2010.
- CARBAJAL LÓPEZ, David, "¿Un "Patronato ritual"? La autoridad civil en la liturgia en México durante la primera mitad del siglo XIX", en Juan Carlos CASAS GARCÍA, Pablo MIJANGOS Y GONZÁLEZ (Coords.), *Por una Iglesia libre en un*

mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía, primer arzobispo de Michoacán (1810-1868), México, Universidad Pontificia de México, El Colegio de Michoacán, 2014.

-----, *La política eclesiástica del estado de Veracruz 1824-1834*, México, INAH-Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2006.

CHÁVEZ GUTIÉRREZ, Héctor, (Coord.) *El primer constitucionalismo mexicano: Apatzingán a doscientos años*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Facultad de derecho y Ciencias Sociales-Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo-Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, 2014.

CHUST, Manuel, SERRANO ORTEGA, José Antonio, "Entre bayonetas y águilas. La milicia cívica en México, 1810-1835", en Brian CONNAUGHTON (Coord.), 1750-1850: La independencia de México a la luz de cien años, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ediciones del Lirio, 2010.

CHUST CALERO, Manuel, FRASQUET, Ivana, "Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810-1824", en Mariana TERÁN FUENTES, Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ, *Federalismo, Ciudadanía y representación en Zacatecas*, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010.

-----, "Un bienio trascendental: 1808-1810", en Manuel CHUST (Coord.), 1808 *La eclosión juntera en el mundo hispano*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas serie Estudios, 2008.

-----, "La Revolución Municipal, 1810-1823, en la obra colectiva que constituye un referente para el caso mexicano, en ORTIZ ESCAMILLA, Juan, SERRANO ORTEGA, José Antonio, *Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México*, México, El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 2007.

-----, FRASQUET, Ivana, "Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810-1824", en Manuel CHUST (Coord.), *Doceañismos, Constituciones e Independencias. La Constitución de 1812 y América*, Madrid, España, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2006.

-----, "Federalismo *Avant la Lettre* en las Cortes Hispanas, 1810-1821", en Josefina Zoraida Vázquez (Coord.), *El establecimiento del Federalismo en México (1821-18127)*, México, El Colegio de México, 2003.

-----, *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Valencia, España, Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED: UNAM 1999.

- CONNAUGHTON, Brian, "El Constitucionalismo político-religioso. La Constitución de Cádiz y sus primeras manifestaciones en el Bajío mexicano y zonas aledañas", *Relaciones*, No. 147, El Colegio de Michoacán, verano de 2016.
- , "Escollos republicanos: Iglesia y Federalismo en la primera república mexicana", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, El Colegio de México, 2012.
- , *Dimensiones de la identidad patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo XIX*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2001.
- , "El clero y la fundamentación de Estado Mexicano", en Brian CONNAUGHTON, Andrés LIRA GONZÁLEZ, (Coords.), *Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Mora, 1996.
- CORETH Sj, Emerich, NEIDL, Walter M., PFLIGERSDORFFER, Georg, *Filosofía cristiana en el pensamiento de los siglos XIX y XX*, Tomo II, Madrid, España, Encuentro Ediciones, 1994.
- CORTÉS MÁXIMO, Juan Carlos, *El Valle de Tarímbaro. Economía y Sociedad en el siglo XIX*, Morelia, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1999.
- COSTELOE P., Michael, *La primera República Federal de México 1824-1835*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
- CRUZ BARNEY, Oscar, "El Poder Ejecutivo en la Constitución de Apatzingán", en Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.
- DE LA HERA, Alberto, MARTÍNEZ DE CODES, Rosa Ma. "La Iglesia en el ordenamiento jurídico de las leyes de indias" en Francisco DE ICAZA DUFOUR (Coord.), *Recopilación de las leyes de los reynos de Las Indias. Estudios Histórico-jurídicos*, México, Miguel Ángel Porrúa, 1987.
- ENRÍQUEZ, Lucrecia Raquel, AGUIRRE, Rodolfo. *El patronato de la Iglesia americana: de la Monarquía a los Estados nacionales*, Dossier, *Historia Crítica*, No. 52, 2014.
- ESCOBEDO DELGADO, José Miguel Gordo. *El drama de la transición política (1777-1832)*, México, LXI Legislatura de Zacatecas-Sexta Asamblea Plenaria COPECOL Zacatecas, Departamento de Estudios Históricos Arquidiócesis de Guadalajara, 2014.

- FARRIS, Nancy, *La Corona y el Clero en el México colonial 1579-1821*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- FERRER MUÑOZ, Manuel y Juan Roberto LUNA CARRASCO, *Presencia de doctrinas constitucionales extranjeras en el primer liberalismo mexicano*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
- FIGUEROA ZAMUDIO, Silvia, *La enseñanza de la Medicina en Michoacán en el siglo XIX*. Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Archivo Histórico, 2002.
- FRASQUET, Ivana, "México entre la Monarquía y la República, 1820-1824", en Encarna GARCÍA MONERRIS, Carmen GARCÍA MONERRIS (Eds.), *Guerra, Revolución, Constitución (1808 y 2008)*, Valencia, Universitat de València, 2012.
- , "José Miguel Guridi y Alcocer en la Junta Provisional Gubernativa, 1821-1822", en Rafael GARCÍA SÁNCHEZ, Graciela NÚÑEZ BERMÚDEZ (Coords.), *Guridi y Alcocer en la esencia de Cádiz*, Tlaxcala, México, Sociedad de Geografía, Historia, Estática y Literatura de Tlaxcala, A.C., 2012.
- , "La revolución contenida: la Constitución Imperial de México, 1822", en Brian CONNAUGHTON (Coord.), *1750-1850: La Independencia de México a la Luz de Cien Años. Problemáticas y desenlaces de una larga transición*, México, Ediciones del lirio, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010.
- , "Orígenes del primer constitucionalismo mexicano, 1810-1824", en Antonio ANNINO, Marcela TERNAVASIO (Coords.) *EL laboratorio constitucional Iberoamericano: 1807/1808-1830*, Madrid/Frankfurt, AHILA-IBEROAMERICANA-VERVUERT.
- , *Las caras de águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana (1820-1824)*, Xalapa, México, Universidad Veracruzana – Universitat Jaume I, 2010.
- , "La construcción de la representación: los diputados suplentes americanos en las Cortes de Cádiz", en Carmen CORONA, Ivana FRASQUET, Carmen María FERNÁNDEZ NADAL (eds.), *Legitimidad, Soberanías, Representación. Independencias y Naciones en Iberoamérica*, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2009.
- , "La Construcción de la Representación: Los Diputados Suplentes Americanos en las Cortes de Cádiz", en Carmen CORONA, Ivana FRASQUET y Carmen María FERNÁNDEZ, (editoras), *Legitimidad, soberanías, representación: independencias y naciones en Iberoamérica*, Castellón de la Plana, Universidad Jaume I, 2009.

- , “‘Ciudadanos: ya tenéis Cortes.’ La convocatoria de 1820 y la representación americana”, en Jaime E. Rodríguez O., (Coord.), *Las nuevas naciones España y México 1800-1850*, Madrid, España, Fundación Mapfre-Instituto de Cultura, 2008.
- , “Razones para una independencia: la difícil cuestión de la propiedad en México, 1822-1823”, en *Anuario de historia regional y de las fronteras*, Vol. 12, Nº. 1, 2007.
- FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del antiguo régimen al liberalismo (La desamortización de Carlos IV), Asturias, Gijón, 2007.
- GANTÚS, Fausta, GUTIÉRREZ, Florencia, HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, LEÓN, María del Carmen, *La Constitución de 1824 consolidación de un pacto Mínimo*, México, El Colegio de México, 2008.
- GALEANA, Patricia, (Coord.), *La independencia en las provincias de México*, México, Siglo XXI-Senado de la República, Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana-LXI Legislatura, 2011.
- GANTÚS, Fausta, SALMERÓN, Alicia, “Introducción. Prácticas electorales en el México decimonónico”, en Fausta GANTÚS (Coord.), *Las elecciones en el México del siglo XIX. Las prácticas*, Tomo I, México CONACYT, Instituto José María Luis Mora, Tribunal Electoral del Distrito Federal, 2016.
- GARCÍA CORONA, Nely Noemí, *Relaciones clero-gobierno en Valladolid-Morelia, 1814-1835*, Tesis de Maestría, Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 2010.
- , *Un esbozo histórico de la administración de Antonio de Castro, primer gobernador constitucional de Michoacán 1824-1827*, Tesis de licenciatura, Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 2008.
- GARCÍA RUÍZ, Luis J., “La territorialidad de la República de Indios de Orizaba. Entre la separación de los sujetos y la preponderancia española: 1740-1828”, en *Historia Mexicana*, Vol. 64, No. 4 (256), 2015.
- GARRIDO ASPERÓ, María José, “Soborno” “Fraude” “Cohecho”. *Los proyectos para evitar la manipulación electoral en las primeras elecciones del México independiente*, México, Instituto Mora, 2011.
- , “Las fiestas celebradas en la ciudad de México. De capital de la Nueva España a capital del Imperio de Agustín de I. Permanencias y cambios en la legislación festiva”, en: *Cuadernos del Instituto de las Investigaciones Jurídicas*, “La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente”, México, 1998.

- GIL ANAYA, Fernando, *Pronunciamientos, Asonadas, Motines y Golpes de Estado. La milicia cívica en el Partido de Valladolid-Morelia, 1825-1835*, Tesis de Licenciatura, Morelia Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014.
- GONZÁLEZ, Ma. del Refugio, "Supremacía del Estado sobre las Iglesias", en: *La participación política del clero mexicano*. Luis Molina Pineiro, México, UNAM-Facultad de Derecho, 1990.
- GORTARI RABIELA DE, Hira, "La vía parlamentaria y la edificación de un orden constitucional: la insurgencia 1813-1815", en María Luisa RODRÍGUEZ-SALA, Ana María CARRILLO, Verónica RAMÍREZ, Graciela ZAMUDIO (Coords.) *Independencia y Revolución. Contribuciones en torno a su conmemoración*, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, México 2010.
- GUEDEA, Virginia, *La independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2001.
- , "La Nueva España", en Manuel CHUST (Coord.), *1808 La eclosión juntera en el mundo hispano*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas serie Estudios, 2008.
- , *En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupe*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 1992.
- GUERRA, François-Xavier, "Las mutaciones de la identidad en la América Hispánica", en Antonio ANNINO, François Xavier GUERRA (Coords.), *Inventado la nación, Iberoamérica siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- , "“El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina” en Hilda SÁBATO (Coord.), *Ciudadanía Política y formación de las naciones: Perspectivas históricas de América Latina*, México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de la Américas-Fondo de Cultura Económica, 1999.
- , "Identidad y soberanía: una relación compleja" en François-Xavier GUERRA (Dir.), *Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, Editorial Complutense, 1995.
- , *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, México, Editorial Mapfre, Fondo de Cultura Económica, 1992.
- GUILLEN CALDERÓN, Ernesto, *La expulsión de españoles en Michoacán, 1821-1833: debates políticos y sociales en la Construcción de México*, tesis de licenciatura, Morelia, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007.

GUZMÁN PÉREZ, Moisés, *La Constitución de Apatzingán: su historia editorial*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas-Casa Natal de Morelos-Universidad Nacional Autónoma de México-Fuente de Afirmación Hispanista, 2014.

-----, MARTÍNEZ CHÁVEZ, Eva Elizabeth, José María Sánchez Arriola. *El Juez Insurgente*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.

-----, *Ignacio Rayón Primer Secretario de Gobierno Americano*, México, INEHRM-SEGOB, 2009.

-----, *Las relaciones clero gobierno en Michoacán. La gestión episcopal de Juan Cayetano Gómez de Portugal 1831/1850*, México, Legislatura LIX Cámara de diputados, 2005.

-----, *Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid*, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Secretaría de Difusión Cultural, 2003.

-----, *La Junta de Zitácuaro 1811-1813. Hacia la Institucionalización de la Insurgencia*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas, 1994.

HEREDIA CORREA, Roberto, *Mariano Rivas 1797-1843. Semblanza y Antología*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas, 1999.

HERNÁNDEZ DÍAZ, Jaime, "El diseño constitucional y la división de poderes en la Constitución de Apatzingán", en Moisés GUZMÁN PÉREZ, Gerardo SÁNCHEZ DÍAZ, *La Constitución de Apatzingán. Historia y Legado*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Archivo General de la Nación, 2014.

-----, "La primera República federal en Michoacán, 1825-1835: entre la inseguridad pública y la inestabilidad política", en VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, SERRANO ORTEGA, José Antonio (Coords.), *Práctica del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, Colegio de México, 2012.

-----, "El diseño constitucional en Michoacán en 1825: División de Poderes y creación del Consejo de Gobierno", en Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, Héctor PÉREZ PINTOR (Coords.), *Reflexiones jurídicas en la historia constitucional mexicana: Una perspectiva bicentenaria*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Cultura, 2009

-----, "Michoacán: De provincia novohispana a estado libre y soberano de la federación mexicana, 1820-1825", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ

(Coordinadora), *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003.

-----, *Orden y desorden social en Michoacán: El derecho penal en la Primera República Federal, 1824-1835*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Escuela de Historia, 1999.

-----, "Legislación electoral en Michoacán Durante la Primera República Federal 1825-1835", *Estudios Michoacanos*, Zamora, El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado de Michoacán, 1981, Vol. III.

HERNÁNDEZ MORA, Juan Ignacio, Influencia de la Constitución de Cádiz en la Constitución de Apatzingán, en Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.

HERNÁNDEZ MONTALBÁN, Francisco J., *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Madrid, Universitat de València, 1999.

HERRERA PEÑA, José, "Dogmas jurídicos de la independencia en la Constitución de Apatzingán", en Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.

-----, *Soberanía Representación Nacional e independencia en 1808*, México, Centro de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009.

HERREJÓN PEREDO, Carlos, *Morelos*, Tomo I y II, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2015.

-----, Autores de la Constitución, en Serafín ORTIZ ORTIZ, José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.

-----, *Hidalgo: Maestro, Párroco e insurgente*, México, Fomento Cultural Banamex-Clío, 2011.

-----, "Colegios e intelectuales en el obispado de Michoacán, 1770-1821" en José Antonio Serrano Ortega (Coord.) *La Guerra de Independencia en el Obispado de Michoacán*, El Colegio de Michoacán-Secretaría de Cultura de Michoacán, 2010.

- , *La ruta de Hidalgo*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2011.
- HERREJÓN, Carlos, "La imagen heroica de Morelos", en CHUST, Manuel, MÍNGUEZ, Víctor (Eds.), *La construcción del héroe en España y México (1789-1847)*, Valencia, Universitat de València, 2003.
- , *Hidalgo: razones de la insurgencia y biografía documental*, México, Secretaria de Educación Pública, Dirección general de Publicaciones y Medios, 1987.
- , *Tlalpujahua*, México, Monografías Municipales-Gobierno del Estado de Michoacán, 1980.
- IBARRA, Ana Carolina, *Clero y política en Oaxaca. Biografía del Dr. José de San Martín*, México, Instituto oaxaqueño de las culturas, Universidad Autónoma de México, Fondo estatal para la cultura y las artes, 1996.
- IBARRA LÓPEZ, Daniela, LANDAVAZO, Marco Antonio, *Clero, política y guerra: la independencia en la diócesis de Michoacán, 1810-1815*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010.
- IRUROZQUI, Marta, *La ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, (Documento de Trabajo, 139. Serie Historia, 26).
- JARAMILLO MAGAÑA, Juvenal, *Una élite eclesiástica en tiempos de crisis. Los capitulares y el Cabildo Catedral de Valladolid-Morelia (1790-1833)*, México, El Colegio de Michoacán, Instituto de Antropología e Historia, 2014.
- , *Hacia una iglesia beligerante: la gestión episcopal de Fray Antonio de San Miguel en Michoacán, (1784-1804): los proyectos ilustrados y las defensas canónicas*, Zamora, México, El Colegio de Michoacán, 1996.
- , (Nota introductoria), *Representación que el Arzobispo y cabildo de México, el obispo de Michoacán y los Cabildos de Puebla de los Ángeles, Antequera de Oaxaca envían al Rey, para defender su derecho a la recaudación y distribución de Diezmo año de 1787*, Morelia, México, Sociedad de la Historia, 1992.
- JUÁREZ NIETO, Carlos, "Martín García de Carrasquedo: un cura revolucionario en Valladolid de Michoacán (1800-1821)", en Eduardo MIJANGOS DÍAZ (Coord.), *Movimientos Sociales en Michoacán Siglo XIX y XX*, Morelia, IIH-UMSNH, 1999.

- , "La diputación provincial de Valladolid de Michoacán 1822-1824", en: *Anales del Museo Michoacano*, No. 4, tercera época, Morelia, 1992.
- KNOWLTON, Robert, *Los bienes del clero y la reforma mexicana, 1856-1910*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
- LANDAVAZO, Marco Antonio, *La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquico en una época de crisis. Nueva España 1808-1822*, México, Colegio de México-UMSNH- Colegio de Michoacán, 2001.
- LANGUE, Frédérique, "Prácticas en espejo: estructura, estrategias y representaciones de la nobleza en la Nueva España", en Georges BAUDOT (Coord.) *Poder y desviaciones: génesis de una sociedad mestiza en Mesoamérica*, Siglo XXI, México, 1998.
- LEMOINE VILICAÑA, Ernesto, *Morelos: su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965. *Morelos y la revolución de 1810*, México, Gobierno del Estado de Michoacán, 1979.
- LEMPÉRIÈRE, Annick "De la República corporativa a la nación moderna" en Antonio ANNINO, Francois Xavier GUERRA, *Inventando la nación, Iberoamérica siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- LEÓN ALANÍS, Ricardo, *El Colegio de San Nicolás de Valladolid: una residencia de estudiantes*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas, 2001.
- , "La erección de cátedras en el Colegio de San Nicolás durante el siglo XVIII". En: Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, Morelia, Universidad Michoacana, Julio- septiembre de 2002.
- LIRA GONZÁLEZ, Andrés, "Jurisdicción eclesiástica y potestad pública en México, 1812-1860", en Juan Carlos CASAS GARCÍA, Pablo MIJANGOS Y GONZÁLEZ (Coords.), *Por una Iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía, primer arzobispo de Michoacán (1810-1868)*, México, Universidad Pontificia de México, El Colegio de Michoacán, 2014.
- , *Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México Tenochtitlán y Tlatelolco sus pueblos y barrios 1812-1819*, 2ª edición, México, El Colegio de México, 1995.
- LUJAMBIO, Alonso, ESTRADA MICHEL, Rafael, *Tácticas parlamentarias hispanoamericanas*, México, Tirant lo Blanch, 2012.
- MACÍAS, Ana, "Los autores de la Constitución de Apatzingán", en *Historia Mexicana*, (80), Vol. XX, núm. 4, México, El Colegio de México, abril-junio de 1971.

- MANIN, Bernard, *Los principios del gobierno representativo*, Madrid, Editorial Alianza, 1998.
- MARTÍNEZ CHÁVEZ, Eva Elizabeth, LÓPEZ VALENCIA, Leopoldo, “Entre la ley y la realidad. Estructura y praxis del Poder Judicial de la Constitución de 1825”, en Jaime HERNÁNDEZ DÍAZ, Héctor PÉREZ PINTOR (Coords.), *Reflexiones jurídicas en la historia constitucional mexicana: Una perspectiva bicentenaria*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Cultura, 2009.
- MARTÍNEZ PEÑALOZA, Ma. Teresa, *Morelos y el Poder Judicial de la insurgencia mexicana*, ABC editores, México, 1992.
- MARTÍNEZ DE LEJARZA, Juan José, *Análisis estadístico de la Provincia de Michoacán en 1822*, Morelia, Fimax, 1974.
- MAZÍN GÓMEZ, Oscar, *El Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996.
- , *Archivo Capítular de Administración Dioscesana, Valladolid-Morelia Catálogo I*, Zamora, El Colegio de Michoacán- Gobierno del Estado de Michoacán, 1991.
- MEDINA PEÑA, Luis, *Invencción del sistema político mexicano, forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
- MEDINA RUBIO, Arístides, *La Iglesia y la producción agrícola en Puebla 1540-1795*, México, El Colegio de México, 1983.
- MEJÍA ZAVALA, Eugenio, *La Junta Subalterna de la Insurgencia, 1815-1820. Hacia la conformación de un gobierno representativo*, Tesis para obtener el grado de maestro en Historia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia Michoacán, julio 2007.
- MIQUEL I VERGÉS, José María, *Diccionario de Insurgentes*, 2ª edición, México, Editorial Porrúa, 1980.
- MOLINER PRADA, Antonio, “El Movimiento juntero en la España de 1808”, en Manuel CHUST (Coord.), *1808 La eclosión juntera en el mundo hispano*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas serie Estudios, 2008.
- MORALES, Francisco, *Clero y política en México (1767-1834): algunas ideas sobre la autoridad, la independencia y la reforma eclesiástica*, México, Secretaria de Educación Pública, 1975.
- MURILLO VELARDE, Pedro, *Curso de derecho canónico hispano e indiano*, Vol. I. El colegio de Michoacán, Facultad de derecho-UNAM, 2004.

- OCHOA, Álvaro, SÁNCHEZ, Gerardo, *Breve Historia de Michoacán*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- ORTIZ ESCAMILLA, Juan, "Ayuntamientos gaditanos en el Veracruz Central 1820-1825" en Juan ORTIZ ESCAMILLA, José Antonio SERRANO ORTEGA (Eds.), *Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México*, Zamora, México, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2009.
- ORTIZ ORTIZ, Serafín, SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, *La Constitución de Apatzingán, edición crítica (1814-2014)*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.
- ORTUÑO MARTÍNEZ, Manuel, "El entorno irlandés de Xavier Mina", en *Cuadernos del Bicentenario*, No. 17, 2013.
- , "Xavier Mina en Galveston, Camino de Nueva España", *Trienio: Ilustración y liberalismo*, No. 55, 2010.
- , *Expedición a Nueva España de Xavier Mina: materiales y ensayos*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2006.
- PEÑA HERNÁNDEZ, Gustavo, "La participación de los eclesiásticos novohispanos en la Constitución de Cádiz, 1810-1812", en Juan Carlos CASAS GARCÍA (Editor), *Iglesia, Independencia y Revolución*, México, Universidad Pontificia de México, 2010.
- PÉREZ ESCUTIA, Ramón Alonso, *Origen y desarrollo de las fuerzas armadas nacionales en Michoacán, 1820-1836*, Morelia, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, Coordinación de la Investigación Científica, Cuerpo Académico CA-233, Tecnología e Historia Militar de México, 2016.
- , "El origen y protagonismo de la masonería en Michoacán, 1821-1831", en *Tzintzun. Revista de estudios históricos*, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, enero-julio de 2015, núm. 61.
- , "Identidad Local, Opinión Pública e imaginarios sociales en Michoacán, 1821-1854", Tesis de doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010.
- PÉREZ MEMEN, Fernando, *El Episcopado y la Independencia de México (1810-1836)*, México, Editorial Jus, 1977.
- PORTILLO VALDÉS, José María, *Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*, Madrid, España, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.

- RIEU-MILLAN, Marie, Laure, *Los Diputados Americanos en la Cortes de Cádiz*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas, 1990.
- RODRÍGUEZ O., Jaime E., *“Lo político” en el mundo hispánico*, Tomo I y II, México, El Colegio de Michoacán-Universidad de California-Irvine, 2015.
- , *Nosotros somos ahora los verdaderos españoles: la transición de la Nueva España de un reino de la Monarquía Española a la República Federal Mexicana, 1808-1824*, Tomo I y II, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, 2012.
- RUBIO MORALES, Luis Daniel, PÉREZ ESCUTIA, Ramón Alonso, *Luz de ayer, luz de hoy. Historia del Seminario Diocesano de Morelia*, Morelia, Parroquia del Señor de la Piedad-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Editorial Morevalladolid, 2013.
- RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO, Jesús, *Barradas: El último conquistador español. La invasión a México de 1829*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2011.
- SALINAS SANDOVAL, María del Carmen, *El federalismo en el Estado de México, 1824-1835*, México, El Colegio Mexiquense, 2014.
- SÁNCHEZ DÍAZ, Gerardo, “Manuel de la Torre Lloreda: Entre la Ilustración novohispana y la construcción de la República”, en Moisés GUZMÁN PÉREZ (Coordinador), *Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia*, Morelia, Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006.
- , “Los vaivenes del proyecto republicano. 1824-1855”, en *Historia General de Michoacán*, Enrique FLORESCANO, (Coord.), Tomo III, México, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, 1989.
- SÁNCHEZ FLORES, Ramón, *Relación Histórica del Congreso del Estado de Puebla. Corporación, legislaturas y Recintos Parlamentarios, 1821-2001*, Puebla, Congreso del Estado de Puebla, 2001.
- SÁNCHEZ I CARCELÉN, Antoni, “Eclesiásticos catalanes y las Cortes de Cádiz” en: *Anuario de Historia de la Iglesia*, Vol. 19, 2010.
- SANTILLÁN, Gustavo, “La secularización de las creencias. Discursos sobre la tolerancia religiosa en México 1821-1857”, en Álvaro MATUTE (Coord.), *Estado, Iglesia y sociedad en México en el siglo XIX*, México, Universidad Autónoma de México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1995.
- SERRANO ORTEGA, José Antonio, “Introducción”, en José Antonio SERRANO ORTEGA (Coord.), *El sexenio absolutista, los últimos años insurgentes Nueva España (1814-1820)*, México, El Colegio de Michoacán, 2014.

- , "Epílogo. La república federal desde los estados. 1824-1835", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA, 1824-1835, México, El Colegio de México, 2012.
- , *La Guerra de Independencia en el Obispado de Michoacán*, El Colegio de Michoacán- Secretaría de Cultura de Michoacán, 2010.
- SORDO CEDEÑO, Reynaldo, "El Congreso Nacional: de la autonomía de las provincias al compromiso federal" en Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ, *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2012.
- , "Los Congresistas Eclesiásticos en la Nueva República", Brian CONNAUGHTON (Coord.), *1750-1850: La independencia de México a la luz de cien años*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Ediciones del Lirio, 2010.
- , *El Congreso en la primera República centralista*, México, El Colegio de México, Instituto Autónomo de México, 1993.
- SIMS, Harold, *Descolonización en México, El conflicto entre mexicanos y españoles (1821-1831)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
- STAPLES, Anne, "La participación política del clero: Estado, Iglesia y Poder en el México independiente", en: *Las fuentes eclesásticas para la historia social de México*, Brian CONNAUGHTON, Andrés LIRA GONZÁLEZ (Coords.), México, Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto José María Luis Mora, 1996.
- , "Clerics as politicians: Church, State, and political power in independent Mexico", en *Mexico in the age democratic revolutions, 1750-1850*, Jaime Rodríguez, (Editor), Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 1994.
- , *La Iglesia en la primera República federal mexicana (1824-1825)*, México, SEP, 1976.
- TANCK DE ESTRADA, Dorothy, *La educación ilustrada 1786-1786*, 2ª Edición, México, El Colegio de México, 1984.
- TAYLOR, William B., *Ministros de lo sagrado*, Tomo I, México, El Colegio de Michoacán, Secretaría de Gobernación, El Colegio de México, 1999.
- TECUANHUEY SANDOVAL, Alicia, "Los miembros del clero en el diseño de las normas republicanas, Puebla, 1824-1825", en Alicia TECUANHUEY SANDOVAL (Coord.), *Clérigos, políticos y política. Las relaciones Iglesia y Estado en Puebla, siglos XIX y XX*, Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, 2002.
- TENA RAMÍREZ, Felipe, *Las leyes fundamentales 1808-1979*, México, Editorial Porrúa, 1957.

- , *Michoacán y sus Constituciones*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1968
- TENORIO ADAME, Antonio de, *Guridi y Alcocer diputado de ambos hemisferios. De las Cortes de España al Congreso federal mexicano*, Cádiz, Quorum Libros 2009.
- TORRES, Mariano de Jesús, *Diccionario histórico, biográfico, geográfico, estadístico, zoológico, botánico, y mineralógico de Michoacán*, Tomo I y II, Morelia, 1912.
- VARGAS MARTÍNEZ, Ubaldo, *Morelos Siervo de la Nación*, México, Editorial Porrúa, 1963.
- VÁZQUEZ, Josefina Zoraida (Coord.), *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003. El Colegio de México-El Colegio de San Luis, 2003.
- VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, SERRANO ORTEGA, José Antonio (Coords.), *Práctica del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, Colegio de México, 2012.
- , "Introducción. Contexto nacional del primer federalismo mexicano", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ, José Antonio SERRANO ORTEGA (Coords.), *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, El Colegio de México, 2012.
- , "El establecimiento del federalismo en México, 1812-1827", en Josefina Zoraida VÁZQUEZ (Coord.), *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003.
- VÁZQUEZ SEMADENI, María Eugenia, "Historiografía sobre la masonería en México. Breve historia", en *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, 2, 1, Mayo-noviembre de 1995.
- VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR, Alejandro, *Biografías de los héroes y caudillos de la Independencia*, México, Editorial del Valle de México, 1980.
- WARREN, Richard, "Las elecciones decimonónicas en México: Una revisión historiográfica," en José Antonio Aguilar (Coord.), *Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910)*, México, Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las artes, Instituto Federal Electoral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010.
- ZUNO RODILES, Edgar, *Las infancias en la ciudad de Valladolid de Michoacán: población y entorno social 1751-1824*, Tesis de doctorado, Sevilla, España, Universidad Pablo de Olavide, 2016.
- , *El Colegio de Infantes en Morelia, 1878-1814*, Morelia, Tesis de

Maestría-UMSNH, Junio de 2008.

ANEXOS

Anexo No.1

Electores provinciales

Legislatura	Electores
Constituyente	Los 37 electores provinciales fueron los siguientes: Ignacio Coria, Manuel Iriarte, Manuel González, Mariano de Chávez, Francisco Méndez de Torres, Miguel de la Mora, José María Díaz, Juan José Solís, Pbro. Manuel Orozco Rincón, Antonio Abad Rosel, Lic. José María Jiménez, Bachiller Mariano Calderón, Bachiller Guirbán, Francisco Romero Soravilla, Bachiller José María Vargas, Tomás Cano, Ignacio Guiza, Joaquín Madero, Francisco Almanza, José María Ruíz de Chávez, Francisco Vega, José Vicente Aguilar, Bachiller Vicente Ríos, Rudesindo Villanueva, José María Sánchez Arreola, José María Navarro, Bachiller José María Rayón, Bachiller Mariano Olvera, José Domingo Losada, Bachiller Nicolás Díaz, Bachiller Mariano Villicaña, Gregorio Pérez de la Busta, Vicente Pérez de la Busta, y Mariano Ruiz de Chávez.
Primera	No sé encontró el registro.
Segunda	Los electores que se presentaron por cada partido fueron: Antonio Abad Rosel , elector por el partido de Charo; Ramón de Echenique, José Macedo, Jerónimo Archundía y Telésforo de los Ríos por el de Zitácuaro; José María de los Heros por el de Taretan; Eulogio Rubio por el de Apatzingán; Alejandro Acebedo por el de Tacámbaro; Marcelino Tirón por el de Tlalpujahua; Antonio Telésforo Méndez de Torres, José Rafael de Robles, Alejo Martínez Padilla por el de Zamora; Ramón Ramírez por el de la Piedad; Onofre Calvo y Pintado y Francisco Hurtado por el de Tlazazalca,; José María Ruiz de Chávez, Mariano Peñaloza, y Fermín Villaseñor por el de Puruándiro; José Ramón López y Ramón Jiménez por el de Cuizeo; Mariano Ibarrola por el de Tiripetío, José Antonio Ortiz, Agustín García, Juan Nepomuceno Sáenz y Bachiller Manuel Leiva por Pátzcuaro; José María Román y Miguel García por el de Ario; Matías de la Cuesta por el de Huaniqueo; Luciano Cardona por el de Paracho; Manuel Farías por el de Uruapan; Ventura Ortiz, y Manuel Camacho por el de Zinapecuaro; Eustaquio Iniesta por el de Huetamo, Pedro Villaseñor y José Mariano Anzorena por el de la capital.
Tercera primer año	Electores de la tercera legislatura, por Valladolid: Miguel Caballero, Ignacio Caballero; partido de Pátzcuaro: Felipe Menocal, José Ma. Medina, Manuel Antúnez, Andrés Chávez; Tiripetio: Basilio Morfin; Cuitzeo: Vicente Caballero, Mariano Herrera; Zinapecuaro: Fernando Ríos, Luis Gonzaga Cornelis; Puruandiro Fco. Alcaraz, Martín Burgos; Tlazazalca: José Ma. Ramos, Mariano

	<p>Madrigal; Huaniqueo: Vicente Villaseñor; Zamora: Ramón Sánchez, Francisco Plancarte, Miguel Godínez, Agustín Silva; Jiquilpan: Juan José Orozco, José María Colindres, Ignacio Villaseñor; La Piedad: Francisco Plancarte, Pedro Ávila; Tacámbaro: Br. Juan José Rodríguez; Taretán: Ignacio Chávez; Uruapan: Marcelino Silva; Coalcomán: Bartolo Silca; Huetamo: Antonio Santa Cruz, Ramón López; Tlalpujahua: Nazario Arévalo; Paracho: Francisco Nambo; Zitácuaro: José Ma. Ruiz de Chávez, Francisco Arroyo, Marcelo Conchoso; Apatzingán José María Vargas.</p>
Tercera segundo año	<p>Electores: Por Morelia Br. Mariano Lezo, C. Cayetano Gómez, C. Vicente Sosa; Pátzcuaro: Br. Manuel Leiva, C. Francisco Molina, C. Br. José María Solórzano, C. Antonio Pérez Gil; por Tiripetio C. Br. Manuel Rivera; por Apatzingán C. Eulogio Rubio; Cuitzeo C. Basilio Paramo, C. Ramón López Parra; Paracho C. Matías Hernández; Zamora Nicolás Galván, C. Br. Jorge Martínez, Rafael Maciel, C. Br. Ignacio Orozco; Huaniqueo C. Br. Estaban Cabezas; La Piedad Br. Santiago María Rosas, C. Antonio Iramategui; Ario José María Muñoz, C. José María Juarrieta; Zinapecuaro C. Manuel Camacho, C. Juan Gaona; Tlazazalca José Cano, C. Br. José Antonio Marquez; Jiquilpan C. Mariano Codna, C. José Ma. González C. Carmen Mendoza; Puruandiro C. José Desiderio Méndez, C. Mariano Peñaloza, C. Antonio Ibarrola; Taretan Francisco Solorzano; Tlalpujahua C. Felipe Giron; Coalcomán C. Miguel Vargas; Huetamo C. Felipe García, C. Francisco Flores; Zitácuaro C. Joaquín Madero, C. Joaquín Paulín, C. José María Paulín, José María Rayón.</p>
Cuarta	<p>Pátzcuaro D. Mariano Chávez, D. José Ortiz, D. José María Flores, D. Miguel Lazcano; Zamora Dr. Manuel Galván, D. Francisco Verduzco, Br. D. Rafael Orozco, D. Luis Leñeros; Zitácuaro D. Pablo José Peguero, D. Joaquín T. Madero, D. Manuel Franco, D. Mateo Echaiz; Puruandiro D. Maximiano Madrigal, Br. Pedro Rafael Conejo, D. Juan José Farfán; Huaniqueo Teniente Coronel D. Matías de la Cuesta; Tlazazalca Br. D. José Antonio Verduzco, D. José Antonio Méndez López; La Piedad Br. D. Joaquín Codina, D. Vicente Herrera, D. Manuel Vidales; Zinapecuaro Francisco López, D. Francisco Rendon; Ario D. Manuel Caparros, D. Pablo Montes de Oca; Tacámbaro Capitan Anastacio Borbon; Uruapan Br. Francisco Xhapina, Cuitzeo Br. D. José María Alcantara D. José María Izquierdo.</p>
Quinta	<p>Morelia: Ramón Timoteo Ortiz, Joaquín Caballero de Acuña; Tiripetio: José María Calvillo; Pátzcuaro: Br. Felipe Carbajal, Ignacio Menocal; Zacapú: Juan Nepomuceno Lira y José Antonio Cortes; Puruandiro:</p>

	Joaquín Cendejas; Cuitzeo: Manuel Izquierdo; Zitácuaro: Francisco Navarrete y José María Ruiz de Chávez; Tlalpujahua: José ---- y Br. José Ma. Alas; Maravatío: José María Paulín; Zinapecuaro: Joaquín Huarte y Agustín Dueñas; Ario: Felipe Menocal; Taretan: Juan Ignacio Martínez; Tacámbaro: Marcos Ortiz; Huetamo: Manuel García, y Juan Sánchez no se presentó el otro elector argumento hallarse enfermo; Uruapan: Br. Rafael Huerta e Ignacio Bárcena que no se presentó; Apatzingán: Antonio Sierra; Coalcomán no presentó electores; Zamora: Agustín Aguiar, José María Carriedo o Carrido y Miguel Godínez; Tlazazalca: Mariano Madrigal y Francisco Hurtado; La Piedad: Manuel Burgos y Cayetano Otero; Jiquilpan: José María Oseguera y Vicente Farías; Los Reyes: José María Silva y José María del Raso.
Sexta	No se encontró el registro.

Cuadro de elaboración propia. Fuente: *Actas y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, 1824-1825*, Tomo I, pp. 1-2. AHCEMO, Varios I, Caja 2, Exp.8. AHCEMO, Varios II, Caja 7, Exp. 5, 2/VI/1829, *El Michoacano Libre*, Tomo II, 31 y 33, pp. 124 y 124. AHCEMO, Varios V, Caja I, Exp. 4, 18/II/1833.

Anexo No. 2**Renovación de oficios del Congreso del estado de Michoacán de 1824-1835****Primer Congreso Constituyente 1824-1825.**

Año	Mes	Oficios
1824	Abril	Presidente José María Rayón Secretario José Salgado Secretario Manuel González
	6 de mayo	Presidente Isidro Huarte Vicepresidente Manuel de la Torre Lloreda Secretario más antiguo Manuel González Secretario José Salgado Secretario Suplente José María Jiménez
	7 de junio	Presidente Manuel de la Torre Lloreda Vicepresidente Pedro Villaseñor Secretario más antiguo José Salgado Secretario José María Jiménez
	6 de julio	Presidente José Salgado Vicepresidente Pedro Villaseñor Secretario más antiguo José María Jiménez Secretario José María Paulín
	7 de agosto	Presidente Juan José Pastor Morales Vicepresidente Manuel González Secretario más antiguo José María Paulín Secretario Manuel Menéndez Secretario suplente José Salgado
	6 de septiembre	Presidente José María Jiménez Vicepresidente José María Rayón Secretario más antiguo Manuel Menéndez Secretario Isidro Huarte Secretario suplente -----
	7 de octubre	Presidente José María Paulín Vicepresidente Pedro Villaseñor Secretario más antiguo Isidro Huarte Secretario José María Rayón Secretario suplente -----
	6 de noviembre	Presidente Manuel González Vicepresidente Manuel Menéndez Secretario más antiguo José María Rayón Secretario Manuel de la Torre Lloreda Secretario suplente -----
	6 de diciembre	Presidente Manuel Menéndez Vicepresidente Isidro Huarte Secretario más antiguo Manuel de la Torre Lloreda Secretario Juan José Pastor Morales. Secretario suplente -----
1825	7 de enero	Presidente Pedro Villaseñor Vicepresidente José María Rayón

		Secretario más antiguo Juan José Pastos Morales Secretario Manuel González Secretario suplente -----
	7 de febrero	Presidente José María Rayón Vicepresidente José María Jiménez Secretario más antiguo Manuel González Secretario Agustín Aguiar Secretario suplente -----
	7 de marzo	Presidente José María Jiménez Vicepresidente Juan José Pastor Morales Secretario más antiguo Agustín Aguiar Secretario José Trinidad Salgado Secretario suplente -----
	Abril	Presidente Juan José Pastor Morales Vicepresidente ----- Secretario más antiguo José Trinidad Salgado Secretario José María Paulín Secretario suplente -----
	6 de mayo	Presidente Agustín Aguiar Vicepresidente José Trinidad Salgado Secretario más antiguo José María Paulín Secretario José María Jiménez Secretario suplente -----
	Junio	Presidente José María Paulín Vicepresidente ----- Secretario más antiguo José María Jiménez Secretario Juan José Pastor Morales Secretario suplente -----
	6 de julio	Presidente Pedro Villaseñor Vicepresidente Agustín Aguiar Secretario más antiguo Juan José Pastor Morales Secretario José Trinidad Salgado. Secretario suplente -----

Primer Congreso 1825-1827

Año	Mes	Oficio
1825	4 de agosto	Presidente Manuel González Vicepresidente Pablo Peguero Secretario más antiguo Pablo Peguero Secretario Francisco Aragón Secretario suplente Mateo Echaiz
	Septiembre	Presidente Isidro Huarte Vicepresidente Secretario más antiguo Francisco de Aragón Secretario José María Pallares

		Secretario suplente
	7 de octubre	Presidente Antonio Chávez Vicepresidente Joaquín Domínguez Secretario más antiguo José María Pallares Secretario Miguel Zincunegui Secretario suplente Manuel Chávez
	7 de noviembre	Presidente Joaquín Domínguez Vicepresidente Francisco Aragón Secretario más antiguo Miguel Zincunegui Secretario Mariano Chávez Secretario suplente Ignacio Ocampo
	7 de diciembre	Presidente Pablo José Peguero Vicepresidente Mateo Echaíz Secretario más antiguo Mariano Chávez Secretario José Antonio Pérez Gil Secretario suplente José María Navarro
1826	7 de enero	Presidente Francisco de Aragón Vicepresidente Manuel González Secretario más antiguo José Antonio Pérez Gil Secretario Mateo de Echaíz Secretario suplente Antonio Chávez
	Sesión extraordinaria 15 de julio	Presidente José Antonio Pérez Gil Vicepresidente ----- Secretario más antiguo José María Navarro Secretario Mariano Ruiz de Chávez Carrillo Secretario suplente
	5 de agosto	Presidente José María Navarro Vicepresidente Francisco de Aragón Secretario más antiguo Joaquín Domínguez Secretario Manuel González Secretario suplente Mario Ruiz de Chávez Carrillo
	6 de septiembre	Presidente José Antonio Pérez Gil Vicepresidente Miguel Zincunegui Secretario más antiguo Manuel González Secretario Antonio Chávez Secretario suplente José María Pallares
	7 de octubre	Presidente Mariano Ruiz de Chávez Gil Vicepresidente José María Pallares Secretario más antiguo Antonio Chávez Secretario José María Navarro Secretario suplente Pablo José Peguero
	7 de noviembre	Presidente Agustín Aguiar Vicepresidente Pablo José Peguero Secretario más antiguo José María Navarro Secretario Mariano Ruiz de Chávez Carrillo Secretario suplente Joaquín Domínguez

	7 de diciembre	Presidente Mateo Echaíz Vicepresidente Joaquín Domínguez Secretario más antiguo Mariano Ruíz de Chávez Carrillo Secretario Francisco Aragón Secretario suplente Chávez Gil
1827	9 de enero	Presidente Miguel Zuncunegui Vicepresidente Manuel Chávez Secretario más antiguo Francisco Aragón Secretario Pablo José Peguero Secretario suplente Joaquín María Cendejas
	6 de febrero	Presidente Manuel González Vicepresidente Antonio Pérez Gil Secretario más antiguo Pablo José Peguero Secretario José María Pallares Secretario suplente Joaquín Domínguez
	7 de marzo	Presidente Mariano Ruiz de Chávez Carrillo Vicepresidente Timoteo Castrejón Secretario más antiguo José María Pallares Secretario Mateo Echaíz Secretario suplente Miguel Zuncunegui
	Primeras sesiones extraordinarias 26 de mayo de 1827	Presidente Manuel Chávez Vicepresidente Pablo Peguero Secretario más antiguo José Antonio Pérez Gil Secretario Miguel Zuncunegui Secretario suplente Joaquín Domínguez
	Segundas sesiones extraordinarias 23 de julio de 1827	Presidente Francisco de Aragón Vicepresidente Antonio Pérez Gil Secretario más antiguo Miguel Zuncunegui Secretario Pablo Peguero Secretario suplente Joaquín Domínguez

Segundo Congreso 1827-1829.

Año	Mes	Oficios
1827	4 de agosto	Presidente Manuel Gómez Puente Vicepresidente Francisco Camarillo Secretario más antiguo Pablo Peguero Secretario Basilio de Velasco Secretario suplente Joaquín Domínguez
	6 de septiembre	Presidente Francisco Camarillo Vicepresidente Joaquín Tomás Madero Secretario más antiguo Basilio de Velasco Secretario Joaquín Domínguez Secretario suplente José María Silva
	6 de octubre	Presidente Antonio Pérez Gil Vicepresidente Pablo José Peguero Secretario más antiguo Joaquín Domínguez

		Secretario José María Silva Secretario suplente Manuel
	6 de noviembre	Presidente Pablo Peguero Vicepresidente Joaquín Domínguez Secretario más antiguo José María Silva Secretario Antonio Pérez Gil Secretario suplente Antonio Chávez
	Primeras sesiones extraordinarias 17 de diciembre	Presidente Joaquín Domínguez Vicepresidente Basilio de Velasco Secretario más antiguo Ignacio Soria Secretario Joaquín Tomás Madero Secretario suplente Ignacio Villavicencio
1828	17 de enero	Presidente Antonio Chávez Vicepresidente Ignacio Villavicencio Secretario más antiguo Joaquín Tomás Madero Secretario Basilio Velasco Secretario suplente Juan José Farfán
	18 de febrero	Presidente Antonio Pérez Gil Vicepresidente José María Silva Secretario más antiguo Basilio Velasco Secretario Francisco Méndez Torres Secretario suplente Manuel Iriarte
	17 de marzo	Presidente José María Silva Vicepresidente Ignacio Soria Secretario más antiguo Secretario Juan José Farfán Secretario suplente Villavicencio
	17 de abril	Presidente Ignacio Soria Vicepresidente Basilio Velasco Secretario más antiguo Juan José Farfán Secretario Manuel Iriarte Secretario suplente Juan Nepomuceno Sierra
	17 de mayo	Presidente Basilio Velasco Vicepresidente Francisco Méndez de Torres Secretario más antiguo Manuel Iriarte Secretario Ignacio Villavicencio Secretario suplente Pablo José Peguero
	Segundas sesiones extraordinarias 5 de julio	Presidente Ignacio Villavicencio Vicepresidente Manuel Iriarte Secretario más antiguo Manuel Gómez Puente Secretario Juan Nepomuceno Sierra Secretario suplente José María Silva Segundo secretario suplente Joaquín Tomás Madero
	Segundo periodo de sesiones ordinarias 6 de agosto	Presidente Antonio Chávez Vicepresidente ----- Secretario más antiguo Francisco Méndez de Torres Secretario Pablo José Peguero Secretario suplente -----

	6 de septiembre	Presidente Joaquín Tomás Madero Vicepresidente Juan Gómez Puente Secretario más antiguo Francisco Méndez de Torres Secretario Basilio de Velasco Secretario suplente Juan Nepomuceno Sierra
	6 de octubre	Presidente Francisco Méndez Torres Vicepresidente Francisco Camarillo Secretario más antiguo Basilio de Velasco Secretario Joaquín Tomás Madero Secretario suplente Pablo José Peguero
	6 de noviembre	Presidente Antonio Pérez Gil Vicepresidente Joaquín Domínguez Secretario más antiguo Joaquín Tomás Madero Secretario Juan José Farfán Secretario suplente Manuel Iriarte.
	6 de diciembre	Presidente Francisco Camarillo Vicepresidente Pablo José Peguero Secretario más antiguo Secretario Juan Gómez Puente Secretario suplente Antonio Pérez Gil
1829	Terceras sesiones extraordinarias 4 de febrero	Presidente Juan José Farfán Vicepresidente Joaquín Domínguez Secretario más antiguo Basilio Velasco Secretario José Farfán Secretario suplente Francisco Méndez Torres
	4 de marzo	Presidente Manuel Iriarte Vicepresidente Basilio Velasco Secretario más antiguo José Farfán Secretario Juan Gómez Puente Secretario suplente Manuel Peñaloza
	Cuartas sesiones extraordinarias 27 de abril	Presidente Juan Nepomuceno Sierras Vicepresidente Joaquín Domínguez Secretario más antiguo Francisco Méndez de Torres Secretario Manuel Peñaloza Secretario suplente José María Silva Secretario suplente José María Martínez Verduzco
	27 de mayo	Presidente Joaquín Domínguez Vicepresidente Joaquín Tomás Madero Secretario más antiguo José María Silva Secretario José María Martínez Verduzco Secretario suplente Juan José Farfán
	27 de junio	Presidente Manuel Iriarte Vicepresidente Basilio Velasco Secretario más antiguo José María Martínez Verduzco Secretario Juan Gómez Puente Secretario suplente Joaquín Domínguez

Tercer Congreso primer año

Año	Mes	Oficios
1829	4 de agosto	Presidente Tomas Arriaga Vicepresidente Manuel Alvirez Secretario más antiguo José María Silva Secretario Isidro García de Carrasquedo Secretario suplente Antonio Bribiezca Secretario Suplente Joaquín Ladrón de Guevara
	7 de septiembre	Presidente Onofre Calvo Pintado Vicepresidente Luciano Farías Secretario más antiguo Isidro García de Carrasquedo Secretario Ramón Echenique Secretario suplente Pedro Romero
	6 de octubre	Presidente Joaquín Ladrón de Guevara Vicepresidente Francisco Antonio Iturbide Secretario más antiguo Ramón Echenique Secretario Pedro Romero Secretario suplente Felipe Carvajal Secretario suplente Martín García
	6 de noviembre	Presidente Manuel Alvirez Vicepresidente Felipe Carvajal Secretario más antiguo Pedro Romero Secretario Antonio Bribiesca Secretario suplente Manuel García
	Diciembre	Presidente Luciano Farías Vicepresidente Secretario más antiguo Isidro García de Carrasquedo Secretario Manuel/Martín García? Presidente Manuel Alvirez Secretario Antonio Bribiesca Secretario Martí García

Tercera legislatura segundo año.

Año	Mes	Oficios
1830	Agosto	Presidente José María Navarro Secretario Juan Gómez Puente Secretario Atanasio Domínguez
	Septiembre	Presidente Lorenzo Auriolles Secretario Atanasio Domínguez Secretario Rafael Puente
	Octubre	Presidente Antonio Manzo Ceballos Secretario Rafael Puente Secretario Mariano Rivas
	6 de noviembre	Presidente Juan Gómez Puente

		Vicepresidente Joaquín Iriarte Secretario más antiguo Mariano Rivas Secretario Domingo Maciel Secretario suplente José María Cavadas
	6 de diciembre	Presidente Atanasio Domínguez Vicepresidente Mariano Rivas Secretario más antiguo Domingo Maciel Secretario Antonio Manzo Ceballos Secretario suplente José María Navarro
1831	Terceras sesiones extraordinarias 14 de febrero	Presidente Manuel Menéndez Vicepresidente Antonio Frutos de Olmos Secretario más antiguo Ignacio Barrera Secretario Joaquín Iriarte Secretario suplente Juan Gómez Puente
	Cuartas sesiones extraordinarias 15 de marzo	Presidente Antonio Manzo Ceballos Vicepresidente Pedro Villaseñor Secretario más antiguo Antonio Frutos de Olmos Secretario José María Cavadas Secretario suplente Ignacio Barrera
	Quintas sesiones extraordinarias 6 de abril	Presidente Mariano Rivas Vicepresidente José María Cavadas Secretario más antiguo Fernando Román Secretario Juan Gómez Puente Secretario suplente Antonio Guerrero
	6 de mayo	Presidente Rafael Puente Vicepresidente Pedro Villaseñor Secretario más antiguo Juan Gómez Puente Secretario Ignacio Barrera Secretario suplente Antonio Frutos de Olmos
	6 de junio	Presidente Joaquín Iriarte Vicepresidente Domingo Maciel Secretario más antiguo Ignacio Barrera Secretario José María Navarro Secretario suplente Antonio Manzo Ceballos
	6 de julio	Presidente Pedro Villaseñor Vicepresidente Antonio Guerrero Secretario más antiguo José María Navarro Secretario Mariano Rivas Secretario suplente Rafael Gómez Puente

Cuarta legislatura 1831-1833

Año	Mes	Oficios
1831	4 de agosto	Presidente Isidro Huarte Vicepresidente Pablo José Peguero Secretario más antiguo Juan Gómez Puente Secretario Lorenzo Aurióles Secretario suplente Juan Corral

	6 de septiembre	Presidente Pedro Villaseñor Vicepresidente Mariano Anzorena Secretario más antiguo Lorenzo Auriolos Secretario Mariano Rivas Secretario suplente Manuel Menéndez
	6 de octubre	Presidente Joaquín Domínguez Vicepresidente Manuel Alvirez Secretario más antiguo Mariano Rivas Secretario Juan Méndez del Corral Secretario suplente Ramón Gómez Puente
	7 de noviembre	Presidente José María Navarro Vicepresidente Juan de Dios López de Lara Secretario más antiguo Juan Méndez del Corral Secretario José María Navarro Secretario suplente Manuel Alvirez
	6 de diciembre	Presidente Lorenzo Auriolos Vicepresidente Manuel Menéndez Secretario más antiguo José María Navarro Secretario Rafael Gómez Puente Secretario suplente Isidro Huarte
1832	Primeras sesiones extraordinarias 2 de enero	Presidente Lorenzo Auriolos Vicepresidente Juan de Dios López de Lara Secretario más antiguo Ignacio Barrera Secretario Rafael Gómez Puente Secretario suplente Joaquín Domínguez
	Segundas sesiones extraordinarias 13 de marzo	Presidente Juan Gómez Puente Vicepresidente Pablo José Peguero Secretario más antiguo Mariano Anzorena Secretario Juan Méndez del Corral Secretario suplente Manuel Menéndez
	Terceras sesiones extraordinarias 11 de abril	Presidente Mariano Rivas Vicepresidente Mariano Anzorena Secretario más antiguo Manuel Alvirez Secretario Juan Méndez del Corral Secretario suplente Joaquín Domínguez
	11 de mayo	Presidente Ignacio Barrera Vicepresidente Rafael Gómez Puente Secretario más antiguo Juan Méndez del Corral Secretario Mariano Anzorena Secretario suplente Juan Gómez Puente
	22 de junio	Presidente Juan de Dios López Lara Vicepresidente Juan Méndez del Corral Secretario más antiguo Mariano Anzorena Secretario Lorenzo Auriolos Secretario suplente Mariano Rivas
	11 de julio	Presidente Mariano Anzorena Vicepresidente Ignacio Barrera Secretario más antiguo Lorenzo Auriolos Secretario Francisco Camarillo Secretario suplente Juan de Dios López de Lara

	5 de agosto	Presidente Pablo José Peguero Vicepresidente José María Navarro Secretario más antiguo Mariano Anzorena Secretario Joaquín Domínguez Secretario suplente Francisco Camarillo
	6 de septiembre	Presidente Rafael Gómez Puente Vicepresidente Lorenzo Aurioles Secretario más antiguo Joaquín Domínguez Secretario Ignacio Barrera Secretario suplente Juan de Dios López de Lara
	6 de Octubre	Presidente Juan Gómez Puente Vicepresidente Manuel Alvirez Secretario más antiguo Ignacio Barrera Secretario Juan Méndez del Corral Secretario suplente Rafael Gómez Puente
	6 de noviembre	Presidente José María Navarro Vicepresidente Rafael Gómez Puente Secretario más antiguo Juan Méndez del Corral Secretario Manuel Alvirez Secretario suplente Francisco Camarillo
	Cuartas sesiones extraordinarias 11 de diciembre	Presidente José María Navarro Vicepresidente Rafael Gómez Puente Secretario más antiguo Manuel Alvirez Secretario Francisco Camarillo Secretario suplente Mariano Rivas
	Quintas sesiones extraordinarias 22 de diciembre	Presidente Mariano Anzorena Vicepresidente Manuel Alvirez Secretario más antiguo José María Navarro Secretario Mariano Rivas Secretario suplente Joaquín Domínguez
	Sextas sesiones extraordinarias 28 de diciembre	Presidente Juan Gómez Puente Vicepresidente Juan de Dios López de Lara Secretario más antiguo Pablo José Peguero Secretario Joaquín Domínguez Secretario suplente Manuel Alvirez

Quinto Congreso 1833-1834

Año	Mes	Oficios
1833	21 de febrero	Presidente Joaquín Ladrón de Guevara Vicepresidente Gregorio Ceballos Secretario más antiguo Agustín Dueñas Secretario Isidro García de Carrasquedo Secretario suplente Francisco Santoyo
	Segundo periodo de sesiones ordinarias	Presidente Agustín Tena Vicepresidente Isidro García de Carrasquedo Secretario más antiguo Miguel Zuncunegui Secretario Francisco Santoyo

	30 de junio Celaya	Secretario suplente Gregorio Ceballos
	1º de agosto	Presidente Nicolás Menocal Vicepresidente Rafael Puga Secretario más antiguo Francisco Santoyo Secretario Francisco Silva Secretario suplente Agustín Dueñas
	16 de septiembre	Presidente Gregorio Ceballos Vicepresidente Miguel Zuncunegui Secretario más antiguo Francisco Silva Secretario Manuel José Orozco Secretario suplente Fernando Ríos
	5 de noviembre	Presidente Gregorio Ceballos Vicepresidente Rafael Puga Secretario más antiguo Manuel José Orozco Secretario Agustín Dueñas Secretario suplente
	Diciembre	Presidente Francisco Santoyo Vicepresidente Secretario más antiguo Agustín Dueñas Secretario Vicente Rincón Secretario suplente
1834	Enero	Presidente Rafael Puga Vicepresidente Secretario más antiguo Nicolás Menocal Secretario Vicente Rincón Secretario suplente Gregorio Ceballos
	Marzo	Presidente Joaquín Ladrón de Guevara Vicepresidente Secretario más antiguo Francisco Silva Secretario Rafael Puga Secretario suplente
	Terceras sesiones extraordinarias 16 de abril	Presidente Vicente Rincón Vicepresidente Francisco Silva Secretario más antiguo Francisco Santoyo Secretario Maximiano Madrigal Secretario suplente Agustín
	16 de mayo	Presidente Manuel José Orozco Vicepresidente Joaquín Ladrón de Guevara Secretario más antiguo Maximiano Madrigal Secretario Rafael Puga Secretario suplente Francisco Gaona
	16 de junio	Presidente Francisco Silva Vicepresidente Francisco Santoyo Secretario más antiguo Rafael Puga Secretario Vicente Rincón Secretario suplente Agustín Tena
	Cuartas sesiones ordinarias	Presidente ----- Vicepresidente ----- Secretario más antiguo ----

	1º de julio	Secretario ----- Secretario suplente -----
--	-------------	---

Sexto Congreso 1835

Año	Mes	Oficios
1834	31 de diciembre	Presidente Manuel Alvirez Vicepresidente Ignacio Álvarez Secretario más antiguo Francisco Méndez Torres Secretario Mariano Ramírez Secretario suplente Manuel Alzua
1835	3 de febrero	Presidente Juan Gómez Puente Vicepresidente José Antonio de la Peña Secretario más antiguo Mariano Ramírez Secretario Manuel Alzua Secretario suplente Mariano Porto
	1º de marzo	Presidente José Antonio García Rojas Vicepresidente Juan Manuel Olmos Secretario más antiguo Manuel Alzua Secretario Mariano Porto Secretario suplente José de Ugarte
	Sesiones extraordinarias 4 de abril	Presidente José Antonio García Rojas Vicepresidente Juan Manuel Olmos Secretario más antiguo Manuel Alzua Secretario Mariano Porto Secretario suplente José de Ugarte
	Sesiones extraordinarias 14 de abril	Presidente Juan Manuel Olmos Vicepresidente Juan Gómez Puente Secretario más antiguo Mariano Porto Secretario Rafael Robles Secretario suplente
	13 de mayo	Presidente Francisco Méndez Torres Vicepresidente Vicente Sosa Secretario más antiguo Rafael Robles Secretario Juan Manuel Olmos Secretario suplente Manuel Alzua
	15 de junio	Presidente Juan Gómez Puente Vicepresidente Ignacio Alvarez Secretario más antiguo Juan Manuel Olmos Secretario Manuel Alvirez Secretario suplente -----
	1º Septiembre	Presidente Ignacio Alvarez Vicepresidente Juan Manuel Olmos Secretario más antiguo Juan Gómez Puente Secretario Francisco Méndez Torres Secretario suplente Mariano Ramírez
	7 de octubre	Presidente Mariano Ramírez Vicepresidente Manuel Alvirez

		Secretario más antiguo Antonio García Rojas Secretario Francisco Romero y Zoravilla Secretario suplente Mariano Porto
--	--	---

Cuadros de elaboración propia: *Actas y Decretos*, Tomo I y II; I Constituyente, Actas públicas, Caja 2, Exp. 5, 6, 7 y 8; Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 1, Exp. 1, 2 y 3; Legislatura I y II, Actas públicas, Caja 2, Exp. 1, 2 y 3; Legislatura II, Actas públicas, Caja 3, Exp. 1, 2 y 3; Legislatura III, Actas públicas, Caja 4, Exp. 1, 2 y 3; Legislatura III y IV, Actas públicas, Caja 5, Exp. 1 y 2; Legislatura IV, Actas públicas, Caja 6, Exp. 1 y 3; Legislatura IV, V, VI, Actas públicas, Caja 7, Exp. 1 y 2; Legislatura VI, Actas públicas, Caja 8, Exp. 1, 2 y 3.